HOJAS NUEVAS

Ascanio Cavallo

LA HISTORIA OCULTA DE LA TRANSICION

Memoria de una Epoca, 1990 - 1998



grijalbo

Aunque las historias se oculten por diferentes motivos, son, tarde o temprano, ineludibles.

Tras el éxito de ventas de **La Historia Oculta del Régimen Militar**, se impuso la necesidad de investigar lo ocurrido en el período de la Transición. La mirada atenta y objetiva de su autor, junto a la rigurosidad de una investigación que contiene material recogido no sólo en Chile, sino también en lugares como La Habana, Madrid, Moscú, Bonn, Washington, Buenos Aires, etc., presentada en forma ágil y amena, aseguran al lector la posibilidad de transformarse en verdadero intérprete de una buena parte de la historia contemporánea de Chile.

LA HISTORIA OCULTA DE LA TRANSICION

C H I L E
1990-1998

C H I L E
1990-1998

LA HISTORIA OCULTA DE LA TRANSICION

Ascanio Cavallo

grijalbo
grupo grijalbo-mondadori

LA HISTORIA OCULTA DE LA TRANSICION

Inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual Nº 104.726
ISBN Nº 956-258-075-K
Primera edición: noviembre de 1998.

Diseño de portada: Magdalena Recordon y Josefina Johansen
Foto portada: Eduardo Ramírez
Diagramación y composición: Gloria Barrios
Corrección de textos: Héctor Zurita P.

Impreso por: Impresos Universitaria S.A.

Impreso en Chile/Printed in Chile.

Indice

Nota informativa

El presente texto es el producto de una investigación realizada a través de una diversidad de fuentes y publicada como serie semanal por la revista *Hoy* desde su número 1.070, del 26 de enero de 1998, hasta el número 1.104, del 21 de septiembre de 1998.

El cuerpo central del trabajo fue proporcionado por 168 entrevistas directas, la mayoría grabadas y al mismo tiempo reservadas. La última tuvo lugar el 17 de septiembre de 1998, mientras que la primera data del 12 de diciembre de 1993. También fueron incorporados materiales recogidos con anterioridad, incluso hasta 1991. Naturalmente, muchas de estas conversaciones se realizaron sin tener una noción definida sobre el formato final; por el contrario, todas las de 1998 se caracterizan por el pleno conocimiento del producto en elaboración.

Los materiales documentales de carácter reservado fueron obtenidos entre 1996 y 1998, aunque han sido citados sólo cuando existió autorización expresa de sus poseedores y se verificó la ausencia de impedimentos legales. Documentos de otra naturaleza —pública o semipública— proceden de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso Nacional, la Biblioteca del Banco Central y otros archivos privados que fueron generosamente facilitados.

Recortes de prensa y colecciones de diarios y revistas fueron proporcionados por los centros de documentación del diario *La Epoca* y de la revista *Hoy*. Para necesidades puntuales se halló la inestimable colaboración de directivos y periodistas de las empresas El Mercurio y Copesa.

Lugares centrales de las indagaciones fueron, por supuesto, algunas de las principales ciudades de Chile. Sin embargo, materiales de gran importancia fueron recogidos también en La Habana, Madrid, Moscú, Bonn, Miami, Brasilia, Ciudad de México, Oslo, Washington y Buenos Aires.

Numerosos compañeros de oficio prestaron también valioso apoyo para este trabajo. En forma sistemática participó, en calidad de ayudante, la estudiante de Periodismo de la Universidad Diego Portales Maureen Biehl, que se hizo cargo de una diversidad de tareas desde poco antes de iniciarse la publicación de la serie. Otros aportes de especial relevancia pertenecen a mi amigo Oscar Sepúlveda.

Durante la publicación de la serie de *Hoy*, y a su conclusión, recibimos diversas comunicaciones destinadas a precisar o corregir datos, agregar versiones y afinar puntos de vista. Todas ellas han sido incorporadas a la presente edición. El índice onomástico recoge la totalidad de las personas nombradas tanto en la versión original como en la corregida.

A.C.C.

1

En lo que nos estamos metiendo

Patricio Aylwin asume la Presidencia de la República el 11 de marzo de 1990, en un clima de aguda tensión entre las nuevas autoridades civiles y los mandos militares. Cada parte sabe que tiene limitaciones y que necesita medirlas con cuidado.

—¿Te das cuenta, Enrique —pregunta, bajo la encapotada mañana de Valparaíso, mientras declina el estruendo de la muchedumbre y ambos se acercan al veterano y espléndido Ford Galaxie 1963—, te das cuenta en lo que nos estamos metiendo?

Patricio Aylwin no espera respuesta, porque es también una pregunta que se hace a sí mismo.

Pero Enrique Krauss ríe, con una risa igual de franca que inquieta: el nuevo Presidente de la República y el nuevo ministro del Interior saben que recién ahora se inicia la transición en serio, la prueba en los hechos de que la autocracia ha cedido paso a la democracia.

La limusina serpentea por el borde costero lentamente, flanqueada por unos lanceros anacrónicos pero solemnes, mientras el híbrido pueblo —pueblo derechista, pueblo comunista, pueblo reaccionario y revolucionario y seguro y desconcertado— se apelotona sobre la avenida Argentina para observar esta curiosidad casi olvidada.

El auto demora 30 minutos en llegar al palacio de Cerro Castillo, donde se preparan los saludos protocolares.

A las 14.05 de este 11 de marzo de 1990, Aylwin baja del Ford Galaxie con la banda tricolor terciada, se estira tensamente la chaqueta y cruza por primera vez como Presidente el umbral de la residencia de Cerro Castillo.

En la guardia de Carabineros se oye un golpe de tacones y un silbido de sables. Hay en el aire la rigidez de los instantes esenciales. La guardia ha estado ensayando este breve momento y el oficial ha conseguido, después de 50 minutos de repeticiones agobiantes, que cumpla el extraño récord de 31 saludos por minuto, todos igualmente marciales. Por eso están casi impacientes cuando el Presidente se detiene un segundo en el umbral:

—Buenas tardes, guardia.

—¡Buenas tardes, se-ñor-pre-si-den-te!

El grito rebota en el portal y en los televisores de medio Chile suena como una aclamación. Los corazones del nuevo oficialismo se encogen: hay quienes sueltan por fin las lágrimas amarradas: después de todo, después de tantas luchas contra estos símbolos y tal vez estos mismos hombres, la marcialidad de la guardia sigue representando el peso de la República.

En el salón que sirve de recibidor, Aylwin es informado de que hay un pequeño retraso, porque el general Augusto Pinochet, primero en la nómina de quienes van a presentarle sus saludos, se ha demorado.

Los periodistas, que revolotean como si fuesen los testigos de un cumpleaños, bromean con la banda, la piocha, el saludo al general.

Aylwin recuerda entonces un episodio ocurrido 65 años antes, cuando el aguerrido Arturo Alessandri Palma, *El León de Tarapacá*, el descendiente de italianos que había incendiado a la *querida chusma* en contra de la *canalla dorada*, en la más sospechosa feminización de la historia política chilena, se vio obligado a cederle el mando a Emiliano Figueroa, en 1925. Se cuenta que Alessandri entregó a su sucesor la piocha de O'Higgins, símbolo central del poder, con una sumisión que no le era conocida. Nadie sabía que en las horas previas el político feroz había abierto el camafeo y depositado en su interior un papel con una sola palabra: "Volveré". Siete años después, en 1932, cuando en efecto regresó a la jefatura del Estado, Alessandri abrió la piocha y halló su promesa intacta.

Los periodistas, en el sumiso jolgorio del cerro viñamarino, se preguntan si el general no habrá dejado también algo adentro de la piocha, y ríen por todo lo ancho.

Aylwin mira la piocha y ríe al unísono.

Está convencido de que el general quiere volver en cuatro años más.

A pocos metros del palacio, en una casa que en el mismo cerro posee la Compañía Chilena de Tabacos —con la que el saliente ministro del Interior, Carlos Cáceres, está estrechamente relacionado—, el general Pinochet se cambia el aparatoso uniforme de gala azul por la tenida formal, esa reluciente chaqueta blanca con parches rojos y botones dorados a la que tanto brillo se ha dado en estos años.

El general ha aguantado bien la ceremonia tensa de entrega del poder, y se lo ve de buen ánimo. Claro: no era lo mismo entrar con las insignias del mando, poderoso y vigente, y salir luego sin ellas.

En medio de las atronadoras rechiflas, uno de los Mercedes Benz de la escolta tuvo que pasar a llevar a un camarógrafo australiano, ante su anglosajona insistencia en tomar imágenes, cuando de lo que se trataba era de salir rápido del nudo hostil instalado ante el Congreso.

Después de exactos 16 años y medio al mando del Estado, el general ha decidido, este día, hacer los dos papeles, con dos caras, dos uniformes, dos actitudes: amaneció de azul y ahora está de blanco.

El suyo será el primer saludo al nuevo Presidente, según se ha previsto. Pero José Sarney, el apacible Presidente brasileño que anda nervioso porque en tres días más habrá de entregar el poder a Fernando Collor de Melo, se interpone en la apretada agenda de Aylwin. Cuando llegue a la residencia, el general se sorprenderá de tener que esperar unos minutos.

Por fin, a las 14.26, Pinochet, acompañado por los cinco generales de mayor rango en el Ejército, ingresa al salón donde lo esperan el Presidente y el ministro de Defensa recién juramentado.

—Presidente —dice el general, sonriente—, le vengo a ofrecer toda mi colaboración.

—Gracias, general —dice Aylwin, parco y formal.

La conversación, estirada como un baile decimonónico, dura poco, entre otras cosas porque nadie piensa en sobreactuarse, ni en las gentilezas ni en las lealtades. Esto está recién comenzando.

Cuando el general sale, entra el almirante Jorge Martínez Busch. Ha asumido hace sólo tres días en la Comandancia en Jefe de la Armada, gracias a la obsesión del almirante José Toribio Merino, gestor del golpe del 73, de que no fuesen los políticos los que nominasen a su sucesor, como tampoco lo nominaron a él. Aunque se esperaba que su reemplazante fuese otro, Merino conversó con el general Pinochet, le ofreció alternativas y luego aceptó la sugerencia del general: Martínez Busch sería el hombre apropiado. Y esta tarde, una prudencia inaudible y británica rodea el saludo al nuevo Presidente.

El siguiente, Fernando Matthei, "bendecido" por Aylwin con la expresa petición de que continúe al mando de la Fuerza Aérea, es más sonoro: parece querer que se escuchen las seguridades de inconmovible lealtad que dará al nuevo Presidente.

A las 14.35 ingresa el alto mando de Carabineros, encabezado por el general director Rodolfo Stange, cuya germánica bonhomía parece avasallada por la euforia que esta vez viene del Ejecutivo: Aylwin lo felicita por la tranquilidad de la ceremonia, Patricio Rojas le subraya el notable comportamiento de las guardias y Enrique Krauss —integrado al grupo con premeditación— bromea como si fuese el anfitrión. También a Stange le han pedido que se quede, en mérito de la sutil navegación de brisa que llevó en los cinco últimos años del régimen militar.

Así es, esto está comenzando; pero en los escasos quince minutos en que desfila todo el nudo duro de la transición, los senderos ya se están bifurcando.

Quien mejor lo sabe es el nuevo ministro de Defensa, que ahora se siente satisfecho de los primeros y difíciles actos de subordinación.

A sus 56 años, Patricio Rojas Saavedra es uno de los escasos hombres de Estado del nuevo gabinete: en su pasado hay una temprana experiencia en el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, primero como subsecretario de Educación y luego como ministro del Interior.

En ese último cargo, Rojas templó los nervios de un carácter fuerte e impetuoso: primero debió resistir la dramática rebelión militar del "Tacnazo", cuando el general Roberto Viaux partió desde el norte hasta Santiago, se atrincheró en el regimiento Tacna y encabezó una asonada que, recogiendo todo el rencor de los militares hacia el despectivo gobierno centrista que los marginaba, derivó de un potencial golpe de Estado hacia una protesta corporativa por mejores sueldos; y luego, mientras la administración se preparaba para entregar el mando, hubo de afrontar el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, una operación propiciada por la ultraderecha, con el patrocinio de la CIA y la rabia ciega de Richard Nixon, destinada a impedir que el Presidente electo Salvador Allende fuese ratificado por el Congreso pleno.

"Esas sí que fueron tensiones", piensa Rojas, quien desde entonces no perdió nunca el interés por el mundo militar y que durante la dictadura fue uno de los pocos políticos opositores que se preciaban de mantener contactos directos con los uniformados, preparando documentos reservados con el intrigante prestigio de la *inside information* para la dirigencia del PDC.

Por eso, en los últimos días de 1989, cuando ya ha ganado las elecciones, Aylwin ha tenido a Rojas en los primeros lugares de sus opciones para Defensa. Lo ha puesto allí, además de su pasado, la sólida alianza con Andrés Zaldívar, quien ha concretado la hazaña de ganar un sillón senatorial en Santiago pese a las más adversas condiciones; Rojas ha sido el jefe de su extraordinaria campaña.

Pero Aylwin no ha estado del todo convencido.

—Es un poco acaballado este Patricio—, les confidencia a algunos de sus futuros ministros.

Ha pensado en el ingeniero Raúl Devés, quien ostenta la rarísima condición de haber sido compañero del cadete Pinochet en la Escuela Militar; pero a sus 72 años, Devés comparte la lucidez con una salud quebradiza.

Después le ha pedido el sacrificio a Sergio Molina, economista y prócer de los consensos, que podría combinar la inquebrantable lealtad a la DC con una ostensible respetabilidad entre el *ancien régime*; pero Molina declina el honor y acepta en cambio el Ministerio de Planificación. Despejados tales nombres, Rojas se ha erguido como el valiente disponible: el que pondrá el pecho ante las balas en una transición que tal vez sea muy baleada.

En cuanto tiene su nombramiento, Rojas se dedica a buscar a sus colaboradores. Es el ministro que tiene más subsecretarías: cinco. Si fuese viable, podrían expresar los matices de la Concertación. Los socialistas piensan que sería una primera oportunidad para quebrar el veto tácito que los afecta, pero pronto desechan el intento: el veto, guste o no, funciona con fuerza en la sicología de la Concertación triunfante.

Para la Subsecretaría de Guerra, Rojas propone a Carlos Huneeus, DC, sociólogo y hombre interesado en los temas militares; para la de Aviación está Mario Fernández, que con un doctorado en Alemania es el único DC que puede exhibir una especialización real en el mundo castrense; en Carabineros aguarda un turno obvio Jorge Kindermann, ex intendente de Arauco; en la de Marina se entiende la necesidad de algo más a la derecha, ligeramente oligárquico: Tomás Puig, liberal, calza como mano al guante; y en Investigaciones, es el general (R) Horacio Toro, nuevo director, quien sugiere: el brigadier (R) Jorge Pantoja, con quien ha trabajado antes.

Con todo, la discusión de los subsecretarios no se ha limitado a un problema de nombres. Las Fuerzas Armadas han insistido en que tales cargos deben ser ocupados por oficiales en servicio.

Argumentan que la naturaleza intermediaria de sus funciones lo exige así; en algún momento intentan demostrar que, si rompe con esa línea, el nuevo gobierno quebrará, aunque no exactamente la ley, una tradición muy parecida a ella. Muy pronto Rojas se convence de que este planteamiento constituye un desafío.

No anda tan lejos. Cuando el nominado Carlos Huneeus habla para la revista *Análisis*, declarándose conocedor de la mentalidad militar[1], el mayor general Jorge Ballerino, ministro secretario general de la Presidencia, transporta la enérgica protesta del gobierno saliente.

Huneeus cae del cargo antes de saborearlo; pero tiene la fortuna de tropezar en un territorio donde el nuevo gobierno no está dispuesto a dar señales de laxitud: Huneeus se irá de embajador a Alemania.

Rojas tiene sustituto: el abogado Marcos Sánchez, que ha sido su segundo en la campaña de Zaldívar y que ahora debe deshacer las maletas con que se iría como embajador a Paraguay.

El general Pinochet conoce al ministro Rojas desde antes de que éste pueda recordarlo. Cuando Rojas era una poderosa autoridad, bajo la administración Frei, el general era uno de esos militares grises a los que estos políticos solían olvidar. En los 20 años siguientes los papeles se invirtieron, pero el general siente que lleva la ventaja de la experiencia y la memoria: la ventaja de la astucia.

En los meses previos a la entrega del mando, el general hostiga al ministro *in pectore* con la idea mortificante de que su papel será irrelevante.

En febrero, el general elige Iquique —la ciudad donde fue intendente subrogante antes de que Rojas fuese ministro del Interior— para anunciar uno de sus proyectos de más largo aliento: la reestructuración del Ejército. Cuando Rojas declara que ella tendrá que ser conversada con las nuevas autoridades, Pinochet responde desde Antofagasta que los temas para conversar "los veré directamente con el Presidente", porque el ministro "es un administrativo". Nueve días después, lo reitera desde Coihaique —ese verano está movedizo.

Entonces el ministro pide respaldo. La Constitución, dice, es inequívoca en la dependencia administrativa; además, ha descubierto que en el reglamento del Ministerio de Defensa, un artículo 5° confirma esa relación.

Los futuros secretarios generales de Gobierno y de la Presidencia, Enrique Correa y Edgardo Boeninger, entran al ruedo declarando que las Fuerzas Armadas dependen del ministro de Defensa. Boeninger, democratacristiano, y Correa, socialista, han estado en la conducción estratégica de los equipos presidenciales desde la campaña electoral y en el largo proceso de traspaso del gobierno han consolidado su preeminencia[2].

La frialdad de Boeninger congenia perfectamente con el instinto del poder de Correa; comparten además unas militancias desapasionadas y antichauvinistas en sus partidos. Por eso son los primeros del equipo en hacerse cargo de la nueva noción de Estado que se ha creado en el país, una visión que integra al mismo tiempo la superioridad del gobierno por sobre los partidos y el peso institucional de la investidura.

Correa ha pensado en formar equipo con Boeninger, tal vez como su subsecretario. Pero Aylwin, que le guarda una indisimulada gratitud desde que, con la implacable decisión que lo

ha hecho temible en toda la izquierda, fuera el primer socialista en promoverlo para la Presidencia[7], quiere que esté en el gabinete. No le deja espacio para dudar.

Así es que cuando precisamente el ministro de Defensa saliente, el vicealmirante Patricio Carvajal, replica que las Fuerzas Armadas sólo tienen una dependencia "administrativa" de su ministerio, Rojas se indigna. Correa y Boeninger sonríen: con eso es suficiente, dicen. ¿O alguien quiere que las Fuerzas Armadas reconozcan un estatuto distinto del administrativo? ¿Se atreverán a decir que quieren también un estatuto político?

La palabra sedición se mueve como un látigo en el clima de los últimos días del régimen militar. Con el tono gélido y ligeramente despectivo del desafío institucional, Boeninger declara que la discusión se da por cerrada. El ministro de Defensa está en la línea del mando. Punto.

En el tórrido intermedio del verano, Rojas se ha dejado llevar por la polémica, aunque tal vez nada le gustaría menos que reconocerlo. Una cosa es segura: no le teme. El ministro es fuerte, áspero, temerario. En la infatuación de su coraje hay una rudeza que a los militares les molesta, pero que secretamente respetarían, si no se tratase de un político. En el terreno minado donde otros se moverían como un cauteloso cardenal, Rojas parece una división de panzers en marcha forzada.

Conoce también sus límites. Los cerebros de la Concertación los han fijado con una claridad que Rojas sobreinterpreta: fuera de estos límites está el vacío; dentro, todo marcha. La vida, que es menos formal, demostrará que no es así, que el poder real no está donde uno quiere, sino donde en realidad está.

Pero por ahora, estas claridades serán la brújula del ministro que se mueve en el páramo. Su enunciado tiene en cada punto una traducción particular para la hipersensitiva cartera de Defensa:

1) El período presidencial es de excepción y durará sólo cuatro años, plazo único y no permanente. Este plazo significa que deberá trabajar con velocidad para producir la normalización institucional, y que la reconciliación, tema central de esta gestión, deberá avanzar con una combinación de prudencia y prisa.

2) El Congreso está desequilibrado de sus mayorías electorales por la presencia de nueve designados sobre 38 elegidos. Cuatro de ellos proceden de las Fuerzas Armadas, dos más han sido nombrados por el general Pinochet y en los otros tres la opinión del gobierno militar ha pesado como una aplanadora. Los esfuerzos por modificar la legislación heredada estarán restringidos por un doble realismo: la necesidad de negociar y la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos en que la oposición y las Fuerzas Armadas no den señales de ceder. No hay que perder tiempo.

3) El Consejo de Seguridad Nacional incorpora, entre sus ocho miembros, a los cuatro comandantes en jefe. Al estar dotado de la capacidad de "representación" ante la autoridad civil, este organismo traducirá el equilibrio precario —el virtual empate— con los poderes armados. Será indispensable asegurar los votos civiles y tener siempre a lo menos un voto favorable entre los militares.

4) Los comandantes en jefe son inamovibles por ocho años más. Perdida la facultad presidencial de remover a los jefes militares, y ante el hecho de que los actuales podrán seguir en sus cargos más allá del período presidencial, es preciso asegurar desde el comienzo la preeminencia constitucional del Jefe de Estado en todos los otros terrenos.

5) La ley orgánica de las Fuerzas Armadas ha sido dictada a última hora del régimen militar, con el desacuerdo de la Concertación en varios puntos, y después de una negociación que sólo pudo morigerar algunos de los aspectos más duros del proyecto original. El resultado central es que el Presidente no podrá llamar a retiro a los oficiales, sino atenerse a lo que los comandantes en jefe propongan; pero la misma ley lo faculta para que disponga. Esta ambigüedad tendrá que ser resuelta en los hechos y va a constituir la principal definición cuando se produzcan los procesos de retiros, promociones y designaciones de cada año. Será un frente duro[8].

Después del saludo al Presidente, el general Pinochet se dirige hacia la Escuela de Caballería de Quillota, donde se han reunido el gabinete saliente, los generales y los altos funcionarios que acaban de cesar.

En el comedor de verano, las mesas dispuestas para el tardío almuerzo de despedida están ya repletas; un aire de celebración y alivio lo inunda todo. Algunos se han puesto, con indisimulado orgullo, la medalla acuñada en los últimos días del régimen: "Misión Cumplida".

Mientras debutan los primeros chistes sobre la ceremonia del Congreso, en el escenario actúan un oficial de la Escuela, que acompaña con guitarra una aterciopelada voz de baladista, y los inquebrantables Huasos Quincheros, con su famoso *El patito chiquitito*: ellos le dedican al general la ranchera que enfervoriza a sus partidarios: *El rey*. En las mesas se improvisa el coro:

—...¡pero sigue siendo el rey!

El rancho alegre declina hacia un tono nostálgico cuando la tarde avanza.

En lo hondo, las preocupaciones siguen latentes. Los militares también saben que esto recién comienza y están conscientes de las limitaciones con que tendrán que actuar. Algunas se han aclarado en las últimas horas, cuando ya es demasiado tarde. De un modo simétrico al gobierno, también las han definido con precisión:

1) Las negociaciones en torno a los senadores designados y al Consejo de Seguridad Nacional han creado un equilibrio demasiado precario. Aunque el gobierno no podrá imponer plenamente su voluntad, las Fuerzas Armadas hallarán dificultades para expresarse en estas instancias, especialmente si se presentan cuadros de tensión política. Los bordes del concepto de deliberación podrían volverse muy tenues.

2) La ambigüedad en la relación del mando, y en particular del comandante en jefe, con el poder político. El general ha insistido en que no se relacionará con el ministro, pero la ley no es nítida. La fuente de conflicto puede derivar de la disputa administrativa al problema de principios.

3) El flanco frágil ofrecido por los problemas de violaciones a los derechos humanos. El cambio generacional, la falta de difusión, el tiempo y la ley de amnistía han creado un espeso velo para la mayoría de los oficiales: sólo hay ansiosas sospechas y oscuros temores. Un pozo sin fondo se puede abrir ante todos.

4) Los defectos de una ley orgánica dictada a toda prisa y con evidentes vacíos en las atribuciones del mando militar. Aunque el Ejecutivo ha sido limitado en su injerencia sobre el funcionamiento de las instituciones armadas, la autonomía plena no ha podido ser consumada. El gobierno retendrá importantes facultades en materia de enajenaciones, adquisiciones, bajas, retiros, destinaciones y nombramientos. La ambigüedad de la ley creará un territorio de lucha.

5) La calidad de objetivo político del comandante en jefe, con el previsible esfuerzo por sacarlo, más allá de la inamovilidad constitucional. Este será el epicentro de todas las tensiones, y la última línea de retroceso del Ejército.

Poco antes de las 11 de la mañana del 12 de marzo, Marcos Sánchez sale de la Catedral de Santiago junto con la multitud de funcionarios, invitados y diplomáticos que ha asistido a la primera misa de acción de gracias por el nuevo gobierno.

El día anterior, con su sobrecarga de emociones y encuentros, ha durado más de la cuenta. Todos están tocados por la imprecisable ruina del cansancio. Pero el nuevo subsecretario de Guerra se siente animoso: la brisa del fin del verano se le confunde con el instante histórico y con la personal sensación de libertad. Camina por Ahumada, se detiene, toma un café, baja a la estación del Metro, sube a sus nuevas oficinas del edificio Diego Portales. Todo es nuevo, intrigante, raro. Apenas llega tiene un llamado del ministro:

—Marcos, ¿dónde estabas? —le dice, y sin esperar respuesta—: acaba de irse Pinochet, quería conocerte. Sería bueno que lo llamaras para ponerte de acuerdo con él.

Sánchez se comunica de inmediato —las cosas están adquiriendo ritmo— con la ayudantía del general. Al comandante que lo atiende le pide que le fije una audiencia para el día y hora que quiera; pero no hoy, porque le ha sido encargada la misión de despedir en el aeropuerto al Presidente paraguayo, el general Andrés Rodríguez.

Mientras cumple su tarea en Pudahuel, recibe una llamada del mismo comandante, que quiere saber a qué hora estará libre, porque el general Pinochet lo espera para tomar té. Confundido, Sánchez responde que no sabe, que una ceremonia oficial no depende de él.

Pero la oficina de relaciones públicas del Ejército, nerviosa ante tanta incontrolable actividad, ha puesto en la pauta de prensa la visita del nuevo subsecretario de Guerra. Y he aquí que el hombre no llega. Al día siguiente se publica en algún diario la ausencia: ¿descortesía o desplante?

Irritado, Sánchez llama al comandante y lo increpa.

—Pero es que como mi general da audiencias para una semana —dice el militar, afligido—, yo pensé que lo mejor sería...

—Oiga —replica Sánchez—, ¿usted no se ha dado cuenta de que ya no es el Jefe del Estado? Debería tener la agenda más aliviada. Le pido que explique inmediatamente lo que ha pasado y fije una nueva audiencia.

Pero el general ha entendido las dificultades del momento. No quiere tener prejuicios. Para qué vamos a hacer una audiencia, cosa tan formal: almorcemos; así aprovecha de conocer a los generales de la guarnición de Santiago.

Por supuesto, general.

En la tarde del 11 de marzo, cuando apenas han transcurrido unas horas desde la transferencia del poder, el nuevo ministro de Justicia, Francisco Cumplido, ya tiene los dos primeros paquetes jurídicos del gobierno, destinados a resolver parte del problema de los presos políticos.

Es la primera prioridad que el Presidente le ha fijado y ahora al ministro le parece que los días pasan con exasperante lentitud: el Parlamento no se ha organizado, no hay siquiera oficina de partes, esta gente parece creer que dispone de todo el tiempo del mundo. Cumplido es un hombre apacible y sereno, pero esta vez tiene entre manos un lío que retumba sordamente.

Diez días después, el 21 de marzo, recién se abre la recepción del Congreso. Los funcionarios de Justicia están a primera hora en Valparaíso, para cerciorarse de que los suyos sean los primeros proyectos ingresados.

En Santiago, el director de Investigaciones, general (R) Horacio Toro, toma desayuno en el diario *La Epoca*. Está preocupado por el efecto de los proyectos de Cumplido entre las organizaciones subversivas, que siguen activas y se sienten menos amenazadas.

Mientras conversa, dos hombres suben las escalas de un edificio situado en calle Luis Thayer Ojeda, cerca de Providencia, y pulsan el timbre de una oficina.

En cuanto abre, el sargento de la FACh Francisco Arias y la secretaria reciben la orden de arrojarse al suelo. Desde un escritorio situado a la derecha se para el general (R) Enrique Ruiz, ex jefe de inteligencia de la FACh. Ve, bajo la filtrada luz matinal, el resplandor del revólver. Los cinco balazos se descargan sobre su tórax mientras grita:

—¡Mi general, nos vienen a matar!

—¡Dispárale al otro! —chilla el pistolero, con el cañón humeante.

En la oficina de la izquierda, confundido por los gritos y los estampidos, el general (R) Gustavo Leigh, el ex jefe de la FACh cesado hace doce años por sus discrepancias con Pinochet, se incorpora desde su sillón giratorio. Apenas da un paso cuando el sujeto que abre la puerta le dispara. La bala lo golpea en el pecho y lo hace caer en el sillón, con los brazos levantados.

El hombre avanza gatillando, como lo hacen los profesionales. Los otros tiros laceran los brazos; uno, que se desvía, raspa ferozmente el ojo derecho. Los hombres corren, pistolas en mano, escalas abajo. Uno baja al Metro, otro toma una micro. No es difícil esfumarse en una gran ciudad.

En los desnudos pasillos del edificio, decenas de consultas de dentistas se sacuden de estupor. Uno de ellos corre a la oficina baleada y proporciona los primeros auxilios a los heridos.

El general Leigh es llevado al Hospital Militar. El general Ruiz es víctima de su anonimato: como no lo conocen, lo llevan al Hospital del Salvador, para luego retornar al Militar. El bravo atentado se lo atribuye el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Mientras el director de Investigaciones vuela hacia el lugar del suceso, el ministro de Justicia se siente notificado: todo será muchas veces peor de lo que pensaba. En las grises noches de Santiago tal vez piensa que la fracción de la transición que le ha tocado será de las más duras. Pero está dispuesto a sobrellevarla. Nada de lo que ocurra en adelante se entenderá sin su obsesión.

El subsecretario de Guerra pasa unos difíciles primeros días cuando las cosas comienzan a precipitarse. Advertido por el ministro Rojas, que ha tenido experiencia en el cargo, Marcos Sánchez ya sabe que la subsecretaría puede ser una de dos cosas: la posición clave desde la cual se maneja el poder práctico (incluido el presupuesto) o la oficina de partes que recibe y aprueba sin preguntar. Sánchez no duda.

Además, todavía tiene confianza; sus relaciones con Pinochet parecen estar en óptimo nivel tras el almuerzo. Pero días después recibe un oficio del general, que solicita sin gentilezas los textos de los proyectos de Cumplido. Sánchez se apresura —es un viernes— a enviar un oficio disuasivo: el ministro le responderá pronto.

Esa tarde, reunido con Rojas, memoriza la decisión oficial: la petición del general es improcedente, el Ejecutivo no tiene por qué explicar sus iniciativas, si esto se acepta se creará un precedente peligroso.

El lunes, Sánchez llega a primera hora para redactar la respuesta. Su secretaria se ha retrasado; debe dictarle al personal militar. Está en eso cuando Pinochet lo llama.

—Bueno, don Marcos, a qué hora me va a mandar los proyectos.

—General, se le va a mandar pronto un oficio.

—No, pero qué oficio, si lo que yo necesito es tener luego estos proyectos.

—General, le reitero: se le va a mandar un oficio.

—¡Pero esto no es posible! —se indigna el general—. ¡El Ejército necesita los proyectos! ¿O me los van a esconder para que no opine? Señor subsecretario, ¡esto no es posible!

El subsecretario se mantiene firme. —La facultad presidencial, general, no pasa por lo que usted solicita. Pero se le informará por oficio. El general corta. Sánchez concluye el documento, que gentilmente desestima la petición del general. Rojas lo firma. En el Ejército ya se sabe quién lo escribió y se intuye quién lo inspiró.

Ya se empieza a saber en lo que nos estamos metiendo.

Notas

1. Cantus, María Eugenia: *"Conozca a los militares"*. Revista Análisis, N° 316, 29 de enero de 1990.

2. Detalles sobre el proceso de nominación de ministros de Aylwin pueden hallarse en: Otano, Rafael: *Crónica de la transición*. Editorial Planeta, Santiago, 1995.

3. Cavallo, Ascanio: *Los hombres de la transición*. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1992.

4. Esta enumeración fue contrastada y verificada entre diversos altos funcionarios del gobierno de Aylwin. No obstante, el propio Rojas hizo una sintética descripción en una ponencia internacional. Rojas, Patricio: *La transición en Chile 1990-1994*. Seminario internacional sobre relaciones civiles-militares. Managua, 25 al 27 de abril de 1994.

2

La escaramuza de la Comisión Rettig

¿Cómo saber la verdad y hacer justicia sobre las violencias inferidas en el pasado? Aylwin cavila en torno a esta interrogante, pero sabe que no puede eludirla. Cuando tiene la respuesta, debe pasar por encima de la fuerte oposición militar.

Graves son las noches del Presidente cuando el otoño del 90 se descuelga sobre Santiago. Ha dado los primeros pasos simbólicos: eliminó la estrofa del Himno Nacional que hacía la apología de los soldados, divisó las primeras refriegas por las críticas oficiales al régimen anterior, ha buscado sentar la primacía moral del nuevo Ejecutivo ante su pasado inmediato. Con una mezcla de sorna y admiración, sus propios funcionarios, recordando los eslogans de campaña, lo llaman "el justo y bueno". Su ministro Francisco Cumplido trabaja arduamente para cerrar el capítulo de los presos políticos.

Pero le falta el otro paso, el esencial, el que todo el país espera: ¿cómo vamos a saber la verdad y hacer justicia sobre las violencias inferidas desde el Estado en estas dos décadas?

Aylwin cavila, aunque no duda: ¿qué sentido tendría su gobierno si esa pregunta queda sin contestar?

Todo el verano lo ha estado rondando. A veces quisiera darle una formulación académica, tal vez histórica, fría, testimonial: lo que pasó, pasó.

Sabe que no puede.

Las largas conversaciones de ese verano, con el gabinete, con su hermano Andrés (ahora diputado, abogado de perseguidos desde la primera hora del régimen militar), con decenas de amigos y adversarios, y un largo y centralísimo diálogo con Pamela Pereira (abogada y familiar de detenido desaparecido) cristalizan en marzo.

Un documento puede considerarse seminal en el proceso. Lo ha redactado el abogado José Zalaquett, primer jefe jurídico del Comité Pro Paz, exiliado ilustre de los primeros luchadores por los derechos humanos y ex presidente de Amnistía Internacional. Fue un memorando sometido a la comisión de derechos humanos del programa presidencial, en diciembre de 1989, votado por ella y adoptado por una mayoría de 10 a 2[1]. En lo medular, anticipa que, a pesar de lo que el programa diga, será inviable derogar la ley de amnistía de 1978[2] y que se requerirá una política global sobre derechos humanos. El título III enuncia esa política: *Opción general de preferir el conocimiento de la verdad por sobre la aplicación de sanciones penales.* La propuesta concreta consiste en constituir una comisión que investigue lo ocurrido en el pasado.

Aylwin observa la similitud con los casos de Argentina y Uruguay. Durante la asunción del mando, ha podido tocar esas experiencias con los presidentes de ambos países.

Con su proverbial pragmatismo, Carlos Saúl Menem, pensando en la penosa experiencia de su antecesor Raúl Alfonsín, que creó una comisión a cargo del escritor Ernesto Sábato, lanzó unos resonantes juicios públicos contra las dictaduras pasadas y luego tuvo que dictar una ley de "punto final", aconseja:

—Cualquier cosa que haga, no pida más de lo que puede cumplir, porque después los militares se le van a subir a la cabeza.

Luis Alberto Lacalle ha tenido en mente las dificultades uruguayas:

—Lo que haga, hágalo pronto.

Los operadores políticos de Aylwin, Enrique Correa y Edgardo Boeninger, ministros secretarios generales de Gobierno y de la Presidencia, miran con reticencia el entusiasmo del jefe por una comisión especial. Les parece que creará más dificultades, que es un riesgo muy grande, que la cosa se puede desbordar.

Pero, aplicados como son, convocan a Zalaquett a La Moneda. A Correa lo seduce una frase que el abogado ya ha empleado en la Concertación:

—Si se pretende obtener tanto la verdad como la justicia, se puede terminar sin ninguna de las dos.

Zalaquett tiene tipologías perfectamente definidas. Están llenas de matices y subdivisiones, pero hay tres que dominan:

a) El modelo de los adversarios desarmados, originado a partir de los juicios de Nurenberg y Tokio y seguido en diversas latitudes por las fuerzas vencedoras, desde Suharto hasta Fidel Castro, desde el sandinismo hasta... la Junta Militar chilena: un espacio donde el excesivo imperio de la fuerza pone en riesgo a la propia justicia;

b) El modelo de adversarios desmoralizados, como en la Grecia de 1967 y en la Argentina de 1983[3], donde la copa de la pirámide está moralmente quebrada, pero en las bases persiste el espíritu de cuerpo;

c) El modelo de Fuerzas Armadas cohesionadas que, aun frente a la derrota política, pueden racionalizar su papel de servicio a la nación y defender su preeminencia e intangibilidad en nombre de esos valores, como en Uruguay, Guatemala y, más que en ningún otro lugar de América, el Chile de los 90[4].

Correa y Boeninger aprecian la nitidez del esquema. Lo que no divisan es cómo conferir legitimidad a una simple comisión. Con autorización del Presidente, aprovechan las reuniones explicativas sobre los proyectos de ley que enviarán al Parlamento debutante para anunciar a los dirigentes de los partidos que entre ellos irá uno para crear la comisión. De inmediato notan el mohín de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI), los partidos de derecha. Hay que desistir de la idea.

En paralelo, Aylwin sigue su tarea personal y discreta. Se reúne con Zalaquett —a quien no conoce; le intriga— y le plantea, casi como ejercicio intelectual, sus dudas prácticas.

¿Cuáles deben ser las facultades de la comisión? Investigar: lo que procura es la verdad; después, puede denunciar hechos a los tribunales ordinarios, pero no puede sentenciar por sí misma.

¿Y los límites? Los casos de muertes; otras formas de violencia serían de muy difícil indagatoria. Las dos peores han sido el exilio y la tortura. En el primer caso, los años de ostracismo son ya irreparables; lo que se puede hacer es ayudar a quienes regresan a reinsertarse. Con la segunda hay más complejidad: se podría tratar de unos 20 mil casos, muchos de ellos ocurridos hace muchos años, la mayoría sin pruebas clínicas y la indemnización podría actuar como elemento corruptor.

—Y no terminaríamos nunca —confidencia el Presidente, convencido, a los que están en el secreto.

¿Y las categorías? La doctrina "restrictiva" de los derechos humanos sostiene que sólo el Estado viola en propiedad los derechos individuales, puesto que los demás son delitos comunes.

La doctrina "amplia" estima que también los particulares violan derechos humanos cuando actúan en cuadros de violencia política contra personas que no pueden defenderse o con una planificada superioridad de medios. En el caso de Chile, parece razonable adoptar esta última posición, dado que la razón de Estado que ha amparado la violencia de los agentes oficiales ha sido la subversión.

Pero lo más importante es que la comisión debe tener solvencia pública, con figuras diversas. Si la derecha no tiene presencia, no servirá de mucho.

Aylwin llama a Jaime Castillo Velasco, el "maestro" doctrinario de la DC, y lo inscribe como el primero para la comisión en ciernes. Luego anota al propio Zalaquett.

Más tarde convoca a Ricardo Martin, senador designado, ex ministro de la Corte Suprema y amigo personal; Martin presidió, a mediados de los 80, una comisión de derechos humanos organizada por el régimen militar para analizar los casos de exilio, y esta circunstancia favorece la petición de Aylwin: Martin no querrá que su tarea de esos años sea ahora devaluada. Una vez que el razonamiento jurídico de Aylwin lo convence, acepta.

Cuando se acerca el fin de marzo, el Presidente invita a La Moneda a José Luis Cea, hombre independiente y figura eminente del derecho constitucional, y le plantea las dudas jurídicas que aún conserva. Cea recuerda un término de resonancias técnicas: potestad reglamentaria autónoma'. La Constitución del 80 se ha tomado la molestia de enumerar todo cuanto sería materia de ley; lo que no esté incluido es facultad presidencial. Todo lo que el Presidente necesita es evitar que se lo acuse de invadir terrenos legislativos o judiciales. Lo primero es relativamente fácil: basta con declarar que no requiere autorización de ley porque no se trata de una comisión especial. Lo segundo precisa resguardos mayores: la comisión debe carecer de atribuciones jurisdiccionales, imperio y capacidad de emitir sentencias. No podrá ni parecerse a un tribunal.

Aylwin siente que el camino se abre tras la maleza. En los días siguientes, avanza, casi solitariamente, a toda velocidad. Los apuntes se acumulan en una gruesa carpeta que guarda en su escritorio de la recámara de La Moneda, un pequeño cuarto que reserva para su trabajo más personal.

A comienzos de abril, inicia la parte más difícil de su operación: persuadir a otros hombres de derecha.

Como acostumbra a hacer cuando está concentrado en algo, toma el teléfono y marca el número de la casa de Francisco Bulnes Sanfuentes, prohombre de Renovación Nacional, sobreviviente de la derecha clásica y antiguo compañero del Senado en la lucha contra la Unidad Popular. Le propone pasar a verlo a su casa; es una deferencia que un hombre de Estado como Bulnes jamás declinaría.

La nocturna conversación es larga y dolorosa. Bulnes siente la inmensa presión. Aylwin está dispuesto a maximizarla: desea que el ex senador sea el presidente de la comisión. Bulnes percibe simultáneamente la peligrosidad de la propuesta y la voluntad que el Presidente está empeñando. Se siente obligado a pedirle unas horas para meditar.

Para entonces, los militares ya han recibido suficientes indicios de lo que se propone el Presidente. Los asesores del general Pinochet deben suspender las vacaciones iniciadas después de la entrega del mando; las reuniones se suceden. No hacen falta muchas para alcanzar las primeras conclusiones. El gobierno está tratando de crear una instancia para-judicial en la que pueda imponer su punto de vista. Aunque carezca de facultades jurisdiccionales, la comisión enjuiciará a las Fuerzas Armadas y su resultado será peor que una sentencia, porque tendrá alcances políticos incalculables. El fantasma de la venganza ha comenzado a tomar cuerpo.

El abogado Sergio Rillón propone crear una "contracomisión", una entidad paralela que discuta la imparcialidad de la otra. La idea es desechada: no tendría credibilidad.

Poco a poco el Comité Asesor define sus cursos de acción:

a) Evitar que la comisión parezca representativa, es decir, que la integre gente que apoyó al gobierno militar;

b) Empeñarse a fondo ante las autoridades para representarle el peligro de la iniciativa;

c) Denunciar los fines y las definiciones de la comisión, insistiendo en su carácter para-judicial, lo que, en el óptimo, puede llegar a su descalificación por la Contraloría o el Tribunal Constitucional; y

d) Impugnar su validez política, incluso con el Consejo de Seguridad Nacional, si ello es posible.

Los persuasivos mensajes se hacen llegar primero a Bulnes y luego al abogado Ricardo Rivadeneira, ex presidente de RN, que también ha sido invitado por el Presidente.

Algo parecido ocurre con Guillermo Pumpin, jurista de prestigio, con una relación privilegiada ante Jaime Guzmán, el líder de la UDI, que se considera discípulo suyo. En el fin de semana del 7 de abril, Aylwin lo ubica en su casa de playa y le plantea su propuesta.

Los tres hombres tienen ya suficientes dudas acerca de la idea y no son gente que necesite consejos. Pero saber que el Ejército se opondrá es un dato relevante.

Tal vez por eso sus negativas ante Aylwin tienen una leve ambigüedad. Aylwin llega a creer que Pumpin ha aceptado, pero unos días después le plantea repentinas dudas sobre la constitucionalidad de la comisión. Cuando el profesor Cea le cuenta a Bulnes que el Presidente lo ha invitado, el cacique derechista le aconseja que acepte. Rivadeneira, a su turno, declina proponiendo un nombre alternativo: el historiador Gonzalo Vial, ex ministro de Educación del régimen militar y duro crítico de las violaciones a los derechos humanos. A fines de los 70, Vial enfrentó al general Manuel Contreras, jefe de la DINA, y su desafío terminó por costarle el puesto en un ambiente de violentas fricciones dentro del régimen[6]. Desde entonces ha mantenido una feroz independencia de los alcances morales de ese gobierno.

Los militares del Comité Asesor se congratulan de sus primeros éxitos con la comisión. Están trabajando bien, se dicen.

Pero el mayor general Jorge Ballerino sabe que las últimas palabras no se han dicho. ¿Cómo tener seguridad, habiendo tantos dispuestos a congraciarse con el poder? ¿Cómo evitar que los resentimientos con el régimen militar empujen a algunos a desquitarse ahora? ¿Cómo impedir la tibieza donde no hay verticalidad?

El primer traspié de la estrategia persuasiva se produce con el senador Martin. Ballerino habla personalmente con él dos o tres veces, para subrayarle la inconveniencia de que forme parte de la comisión, pero el veterano jurista rebate, con firme independencia, que si aceptó integrar una instancia oficial en los 80, no puede negarse ahora. Añade una variante que desarma al general:

—Seré la roca donde se estrellarán los enemigos del gobierno militar, de las Fuerzas Armadas y del Ejército.

El fracaso final se confirma con la aceptación de Gonzalo Vial. En verdad, el historiador ha puesto una severa condición: conocer y discutir el decreto que creará la comisión. La minuta que envía al Presidente contiene varias observaciones, de entre las cuales la más importante es eliminar la taxativa afirmación de que sólo se abarcará en el análisis el período 1973-1990; esto tendrá validez para los casos de muertes, pero no para la comprensión global del fenómeno de la violencia política[7].

Para la presidencia de la comisión, Zalaquett ha sugerido que el Presidente escoja el nombre: se debe evitar una polémica demasiado temprana en el seno de la comisión. Aylwin lo tiene: el abogado Raúl Rettig, que a los 81 años, con su perfil aguileño y su figura encorvada, continúa siendo la imagen del repúblico por excelencia. En 1952, Rettig, entonces senador radical, desafió a duelo a su colega socialista Salvador Allende. Tras las tres palmadas del árbitro, Allende sintió silbar la bala de Rettig y fue abatido por una brusca fatiga. "Mire qué sacrilegio, después de eso, nunca más me han faltado el respeto", recuerda Rettig. Durante su gobierno, Allende lo nombró embajador en Brasil. Como un eminente opositor al régimen militar, llegó a presidir el Colegio de Abogados a mediados de los 80; su vicepresidente, "muy colaborador", fue Patricio Aylwin.

Zalaquett tiene nuevas proposiciones: incorporar a dos mujeres. El Presidente convoca a Laura Novoa, una abogada que trabaja en el prestigioso estudio de Julio Philippi, uno de los más connotados de la derecha, y a la asistente social Mónica Jiménez, cercana a la Iglesia y a la DC. Ambas aceptan de inmediato.

Y una última: que el secretario ejecutivo, quien deberá llevar el peso del trabajo, sea un hombre joven. El Presidente ha pensado en un antiguo abogado de la DC, pero Zalaquett tiene una idea que sabe que lo seducirá: Jorge Correa, amigo de su hija mayor y esposo de la historiadora Sol Serrano, que ha trabajado en su equipo redactor de discursos.

En una última reunión con Zalaquett y el ministro Cumplido, Aylwin pasa revista a sus borradores. Ese fin de semana se los lleva para trabajar a solas en el palacio de Cerro Castillo. El lunes 23 vuelve con los textos finales.

A primera hora del martes 24 de abril, el ministro Rojas recibe en su despacho al vicecomandante en jefe del Ejército, el teniente general Jorge Lúcar; su intención ha sido citar al general Pinochet, pero, dado el clima que se vive, ha de conformarse con el número dos. Más tarde lo visitan en su despacho los comandantes en jefe de la Armada y la FACh, y el general director de Carabineros.

Lo que les anuncia es que el Presidente creará este día una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; el texto del decreto explica los fines. El ministro quiere asegurarles a las Fuerzas Armadas que ésta no es una iniciativa en su contra, sino una necesidad para la reconciliación del país. Habla con convicción.

Paradójicamente, el ministro Rojas ha sido un constante partidario de la comisión dentro del gabinete. Ha seguido de cerca la experiencia argentina, y está persuadido de que, con todas sus durezas, la investigación servirá también para desmitificar las fantásticas cifras de víctimas que se suele imaginar en estos procesos.

Pero los militares se muestran escépticos. Sólo el jefe de la FACh, el general Matthei, expresa su esperanza de que la iniciativa conduzca a la pacificación. El general Lúcar dice que es el general Pinochet quien ha de manifestar la opinión del Ejército.

Esa mañana, Lúcar debe informar al general Pinochet a la hacienda costera de Bucalemu, donde pasa sus vacaciones. La sorpresa es radical. Pinochet cancela su feriado, convoca a una reunión del alto mando y ordena que se pida una audiencia para ese mismo día con el Presidente.

Pero en La Moneda, el equipo político ya ha previsto esa reacción. Si el general se presenta a plantear sus reparos antes de que la comisión se instaure, se puede crear un problema institucional; peor aún, existe la posibilidad de que el general exija una dilación y lleve el asunto hacia un terreno que le resulte favorable.

No hay que recibirlo este día. La agenda del Presidente siempre está copada, ¿podrá el general enojarse mucho si se le da audiencia con el ministro de Defensa para el día siguiente? ¿Qué asonada se puede fundar en que en vez de ser recibido el martes, fue invitado para el miércoles?

Eso hace el gabinete presidencial: el ministro Rojas puede recibirlo el miércoles 25. El general Pinochet declina la oferta e insiste en que quiere reunirse con el Presidente. Sólo al quinto llamado hay una respuesta positiva: pero tendría que ser la próxima semana.

Al anochecer del martes, la Comisión se constituye formalmente en La Moneda. El decreto 355 del Ministerio del Interior es enviado de inmediato a la Contraloría para su toma de razón.

El miércoles 25 la Comisión sesiona por primera vez en lo que fuera el dormitorio de *El León* Arturo Alessandri Palma, la actual oficina de Rettig. Algunos de sus miembros apenas se conocen y todavía tienen muy poca idea de cómo cumplirán con su tarea en los escasos seis meses fijados por el decreto. La sesión, casi social, concluye con el acuerdo de redactar un reglamento para funcionar.

Las reacciones no esperan. Los partidos de gobierno y organizaciones sociales respaldan los propósitos de la Comisión; la oposición expresa sus aprensiones. Un grupo de figuras vinculadas al régimen militar inicia la campaña de rechazo con una declaración pública[1].

Pero en ese momento, los esfuerzos militares se concentran en producir una descalificación más profunda. El general Pinochet intenta gestionar una convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional para forzar a La Moneda a retroceder en su iniciativa. No halla terreno propicio.

Y se da definitiva cuenta de la futilidad del intento el 2 de mayo, cuando se reúne en Valparaíso con el almirante Martínez Busch, en una sesión de cuatro horas. El almirante es hijo del general de Ejército Héctor Martínez Amaro, un hombre al que Pinochet ha admirado y que, a su juicio, por "su carácter, dureza y rectitud, hizo época en el Ejército"[9]; hay entre ambos una cierta comunidad de valores y opiniones. Pero Martínez Busch, recién asumido, no cree conveniente ofrecer una resistencia frontal a la primera gran operación del Presidente. Lo más que se puede intentar es que la Comisión exista, pero no funcione bien.

La lectura del Comité Asesor es una sola: la Armada está poniendo distancia, rindiendo tributo a su vieja y orgullosa autonomía. De sus hombres, no son muchos los que aparecen envueltos en violaciones a los derechos humanos. En la FACh y en Carabineros, las cosas son peores: Matthei asumió el mando aéreo en 1978, cuando ya había pasado lo más duro de la represión, y Stange está a cargo de la policía apenas desde 1985.

El Ejército estará solo en esta difícil escaramuza.

Mientras llegan a esta conclusión, sus estrategas definen un nuevo enfoque. Ya que será imposible detener la Comisión, la institución mantendrá sus reparos y se apegará estrictamente a la legalidad, sin contrariar en la forma la autoridad presidencial.

Este tratamiento queda establecido en la más extraña de las reuniones del período, que se origina cuando la periodista María Eugenia Oyarzún le pregunta al ministro Enrique Correa si él y Boeninger estarían dispuestos a cenar en su casa con el general Ballerino. Correa acepta, pero pide la autorización del Presidente.

La cena tiene lugar en los últimos días de abril y se desarrolla en medio de una solapada tensión que sólo expresan las esposas de Ballerino y Correa, enfrascadas en un sordo intercambio entre valores tradicionales y liberales.

A la hora del café, los anfitriones han previsto que los dos ministros y el general se encierren en una pequeña sala para discutir los temas de fondo. Allí Ballerino subraya que el Ejército tendrá una sola actitud ante la Comisión, porque no puede permitir que algunos de los suyos se sientan abandonados. El peligro, dice persuasivamente, es que en la institución se produzcan actitudes descontroladas.

—No queremos un Aldo Rico —agrega, en ominosa alusión al coronel argentino que mantuvo en jaque a la frágil democracia[10].

—Bueno —replica Correa—, nosotros creemos que de haber un Aldo Rico en Chile, no sería tan... tan no gubernamental, digamos.

Los tres ríen. Pero la risa no aligera el aire espeso de la sala.

Correa dice que las cosas se podrían solucionar con rapidez si las Fuerzas Armadas entregasen información sobre los muertos y los desaparecidos. El mayor general lo entiende. Pero esa información verdaderamente no existe: no hay archivos institucionales sobre estos asuntos y no cree que tampoco los haya entre los antiguos jefes de los servicios de seguridad.

Enseguida retoma el problema de la Comisión: lo peor que podría ocurrir, dice, es que identifique responsables. Si se refiere a una "verdad innominada", sus efectos podrían ser mucho más controlables. Correa y Boeninger asienten: les parece que éste es el mensaje central de la reunión.

Cuando concluye, los ministros se confirman en sus apreciaciones. El Ejército no ayudará a la Comisión, pero tampoco la impugnará más allá del límite jurídico. La "verdad innominada" será la frontera.

No hay más que decir.

El 13 de mayo, el general Pinochet llega por primera a vez a La Moneda desde que dejó el poder. En la acordonada vereda de la entrada principal se agolpan centenares de personas que lo abuchean y gritan:

—¡Dele duro, Presidente!

El general entra irritado a la reunión con el Presidente. Trae un sobre, que la gente del gabinete presidencial contempla con obsesiva atención. En las horas previas, el equipo político le ha insistido a Aylwin que no debe permitir que el general le deje ningún documento: si existe un reclamo por escrito, razona, se puede estar ante un desafío institucional formal, lo que desaparece si la representación es sólo verbal. El Presidente ha asentido, pero no se lo ha visto muy convencido.

—Señor Presidente —dice el general—, vengo a hablarle como ex Presidente y comandante en jefe.

—Momentito —detiene Aylwin—. Primero como ex, después como comandante. No mezcle, por favor, general.

—Vine por lo de esa Comisión que usted creó. Quería hablarle antes, pero no me dieron audiencia.

—Le dieron. Con el ministro, general.

—No, pero es que no se trata de eso. Mire, la autoridad la tiene usted. Yo soy un subordinado y respeto sus atribuciones. Pero yo me entiendo con usted. No estoy conforme con ese ministro que dice que tiene autoridad jerárquica sobre el comandante en jefe. El es un administrativo.

—Está equivocado —dice Aylwin, mientras se pone los anteojos y toma la Constitución. Lee el artículo 90—. ¿No ve? Esta Constitución la elaboró usted.

El general se siente desarmado y molesto ante la argumentación jurídica[11]. No insiste. Pero vuelve sobre la Comisión, quejándose de que el gobierno desestimara una propuesta de Renovación Nacional que contaba con su apoyo. En cambio, ahora se ha optado por una cosa que es como cuando en una familia se muere el padre y los hijos se reparten la herencia...

—...pero 20 años después aparece un nieto reclamando por una lapicera y deja la tendalada.

—Pero primero, general, habría que saber cómo se repartieron las cosas y determinar las causas de la muerte del padre...

Pinochet quiere subrayar que no se pueden remover las cosas del pasado, porque ya no se puede saber qué interés tiene cada quien. Ah, y además el lenguaje que usa el gobierno, con eso de la "dictadura"...

—Usted mismo me ha tratado de dictador...

—General, yo he hablado de dictadura en el período del 73 al 81, y desde allí al 89 hablo de gobierno autoritario.

—Pero en mi gobierno había tres poderes, y yo fui elegido.

—Generaaaaal...

Tras algo más de media hora, Pinochet entrega por fin al Presidente su minuta sobre la Comisión. Ha sido preparada por el Comité Asesor y aprobado casi sin modificaciones en la reunión de los generales.

En el gabinete presidencial lo ven salir con el sobre vacío, y el aire de un desastre se apodera de la atmósfera.

—No es para tanto —dice el Presidente, más tranquilo que antes. Esa calma contagiosa aquieta los corazones de los altos funcionarios.

La lucha más dura se libra abajo, en los subterráneos, donde el jefe de gabinete, Carlos Bascuñán, se enfrenta al jefe de la escolta del general, el coronel Jaime Lepe, que ha hecho ingresar la caravana de Mercedes Benz del general al estacionamiento reservado de La Moneda.

—Para entrar aquí —dice Bascuñán—, usted tiene que pedir autorización.

—Pero es que ustedes no han dado garantías de seguridad —dice el coronel—. Había contramanifestantes en la puerta.

—Todas las medidas de seguridad estaban tomadas. Cuerpos especiales a tres y cuatro cuadras, guardia de 400 carabineros, tiradores...

—Sí, pero no eran suficientes.

—Señor, lo que usted opine es cosa suya. Los dueños de casa somos nosotros. Y la próxima vez que quiera entrar aquí tendrá que pedir autorización.

—¡Usted no sabe tratar a sus invitados!

—Es usted quien veja al comandante en jefe. Cuando se respeta a una persona, se la hace entrar y salir por la puerta grande. El es nuestro invitado. Y téngalo claro: ni usted ni su gente lo son. Lo voy a hacer filmar, para que vea.

—¡No lo puede hacer!

Por primera vez los periodistas reciben generoso acceso a los oscuros estacionamientos subterráneos. El coronel no consigue detenerlos.

El día siguiente —4 de mayo— se realiza en La Moneda un almuerzo al que han sido invitados los comandantes en jefe. Los asesores de Pinochet deciden que no debe asistir: no sólo están los magros resultados de la reunión del día previo, sino que además se han producido esas sospechosas manifestaciones.

Para subrayar el disgusto institucional, hay que bajar el rango de la representación. Irá el mayor general Hugo Salas Wenzel, actual jefe del Estado Mayor y anterior jefe de la CNI.

El general Salas Wenzel llega con un maletín. Mientras se encaminan al comedor detrás suyo, un ministro advierte el curioso detalle y se alarma con una exageración que refleja el clima que se vive en el Ejecutivo:

—Eso —le dice a otro ministro— es un aparato de grabación o es algo peor. Si este hombre se para al baño, hay que desalojar el comedor.

Pero Salas Wenzel no habla durante el almuerzo; el postre se le cae sobre el uniforme, y limpiarlo concentra su última atención.

Quien sí interviene es el almirante Martínez Busch, para expresar las aprensiones de su institución ante los alcances de la Comisión. También el general Stange y el general Matthei, que se muestran entusiastas ante la idea de avanzar en la creación de un clima de paz. El gobierno evalúa la reunión como un éxito.

Pero le queda todavía el paso final: la aprobación jurídica del decreto. En La Moneda y en la propia Comisión se observa con cierta inquietud que la Contraloría demora un par de semanas. Finalmente envía la toma de razón y el gobierno se apresura a publicar el decreto en el *Diario Oficial*[5].

Ahora hay que cruzar los dedos para que los parlamentarios de derecha no intenten acudir al Tribunal Constitucional; pero los sondeos son concluyentes: no hay ninguna iniciativa de ese tipo.

En las primeras semanas de mayo, mientras la Comisión envía oficios a las Fuerzas Armadas para solicitar las nóminas de sus víctimas, nuevas señales de la posición del Ejército se hacen llegar a la opinión pública. El senador Jaime Guzmán describe un clima de "malestar" y el designado general (R) Santiago Sinclair aprecia una "animosidad evidente" contra su institución.

Procurando atemperar la tensa situación, el ministro Rojas llama al general Pinochet y le propone una reunión para conversar de estos temas. Pinochet lo invita al Club Militar de Lo Curro: su propio terreno. El ministro acepta, porque la tarea de la hora es mitigar los problemas.

Pero del largo diálogo no emerge ninguna concordancia; ni siquiera sobre el papel que cumple cada uno de ellos mismos.

En la Comisión no pasa inadvertido el ambiente de hostilidad. Pero los comisionados ya han decidido que, entre ellos, el estadista será Raúl Rettig. A él corresponderá preocuparse del efecto institucional de su trabajo. Rettig lo acepta sin chistar. Quienes lo conocen dicen que el tribuno infinito apenas se encorvará un poco más ante lo arduo del deber.

A mediados de mayo, Rettig toma la decisión de entrevistarse con los jefes de las Fuerzas Armadas para subrayar la vocación de ecuanimidad de la Comisión. No tiene problemas con la FACh y Carabineros.

En la Armada, el almirante Martínez Busch explica las dificultades de su agenda, pero pide encarecidamente que la reunión se realice con su auditor general, Mario Duvauchelle. Con el Ejército, sin embargo, Rettig sabe que otro gallo cantará.

Recurre entonces a una amistad deportiva, del club de la Universidad de Chile. El abogado Ambrosio Rodríguez, que fue procurador general del régimen militar, organiza una cena secreta con el mayor general Ballerino en su casa.

Allí oye Rettig el detalle de las objeciones militares; pero, más que eso, explica que necesita un momento para reunirse públicamente con el Ejército. Ballerino, complicado, divisa una sola salida: que Rettig asista a las oficinas del Comité Asesor y se encuentre con él mismo. Rettig, que está dispuesto a deponer todo orgullo, acepta.

A Ballerino le cuesta armar la operación. El general Pinochet intuye cierta legitimación de la Comisión en este encuentro; desea que sea severo, que parezca, no una cortesía, sino una afirmación de autoridad. Y exige que sea acompañado de una declaración institucional, la primera ante la opinión pública que fije la actitud del Ejército.

Ballerino no puede más que estar de acuerdo: habiendo fallado los cuatro cursos de acción elegidos, sólo cabe dejar constancia pública.

El 25 de mayo, Ballerino recibe a Rettig —más encorvado, parece— en Bandera 52.

El mayor general trata de ser áspero, pero la gentileza del viejo jurista lo incomoda. Le lee con lentitud la declaración que emitirá más tarde. Ella incluye, por primera vez, lo que se ha estado rumoreando: que el Ejército objeta la parcialidad de al menos dos de los comisionados, Jaime Castillo y José Zalaquett, ambos forzados al exilio durante el régimen militar.

Cuando termina de escuchar, Rettig se acomoda en el sillón y dice que la objeción personalizada contra algunos comisionados rebaja el nivel del debate.

—Cómo no, don Raúl —dice Ballerino, mientras le alcanza el texto y un lápiz—. ¿Quiere corregir usted mismo la frase?

—No —dice el jurista, riendo; tiene, como un relámpago, la sensación de que podría verse envuelto en un tremendo lío: cohonestar de su puño y letra la declaración militar—, nada de eso. Si usted me pasa ese lápiz, yo me voy a quedar con él, porque soy muy distraído...

Mientras Rettig regresa a su oficina, ya convencido de que la Comisión ha superado su último escollo, Ballerino prepara un veloz informe para el general Pinochet. Sus hombres del Comité Asesor corrigen la declaración y esperan instrucciones.

El coronel Carlos Molina Johnson es encargado de leer ante la prensa la nueva versión, que detalla las aprensiones presentadas a Rettig[11].

En el gobierno se desata una tormenta.

El Presidente ordena que el general Pinochet sea citado a La Moneda.

Notas

1. Esta votación planteó el primer debate interno entre una "ética de la responsabilidad" y una "ética de la convicción". Contradictor principal de Zalaquett fue el abogado Hernán Montealegre, también vinculado en el pasado a la defensa de los perseguidos a través del Comité Pro Paz.

2. El decreto ley 2191, del 19 de abril de 1978, amnistió todos los delitos penales de ribetes políticos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta su fecha de promulgación, excluyendo sólo el proceso 192-78, por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.

3. En Grecia, los militares fueron desprestigiados por su derrota, a manos turcas, en la isla de Chipre. En Argentina, la caída del régimen militar fue precipitada por la invasión a las islas Malvinas, recuperadas por Gran Bretaña tras dos meses de acciones armadas.

4. Zalaquett, José: *Derechos humanos y limitaciones políticas en las transiciones democráticas del Cono Sur.* Revista *Estudios*, Nº 33, Cieplan, diciembre de 1991. Este artículo, actualizado desde otro publicado en 1989, detalla los casos de Argentina y Uruguay y aporta principios del trabajo de la comisión chilena.

5. El mismo profesor Cea estudió detenidamente este concepto en una obra que el Presidente consultó después de esta conversación. Cea Egaña, José Luis: *Tratado de la Constitución de 1980*. Editorial Jurídica, Santiago, 1989.

6. Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; y Sepúlveda, Oscar: *La historia oculta del régimen militar*. Editorial Grijalbo, Santiago, 1997.

7. Los textos de los borradores del decreto pueden hallarse en: Arthur, Blanca: *Verdad y Reconciliación: Un camino pedregoso*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 29 de abril de 1990.

8. La declaración fue suscrita por Germán Becker, Arturo Fontaine Aldunate, Sergio Gutiérrez, Rosa Markmann de González Videla, Guillermo Medina, Julio Philippi, José Luis Rosasco, Enrique Urrutia Manzano, Rafael Valdivieso y Juan de Dios Vial Larraín.

9. Pinochet, Augusto: *Camino recorrido*, Tomo I. Edición del autor. Santiago, 1990.

10. El teniente coronel Aldo Rico encabezó las dos primeras sublevaciones militares —con los llamados "carapintadas"— contra el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987 y 1988.

11. Soto, María Irene: *El encuentro*. Revista *Hoy*, Nº 668, 7 al 13 de mayo de 1990.

12. *Diario Oficial*, 10 de mayo de 1990.

13. *Ejército expuso aprensiones ante la Comisión Verdad*. Diario *La Nación*, 26 de mayo de 1990.

3

La línea de retaguardia

Un organismo soporta la pesada responsabilidad de cautelar la retirada del Ejército del poder político: el Comité Asesor, encabezado por el mayor general Jorge Ballerino. Todas las operaciones de los primeros meses tienen su sello.

En el fondo de la ancha entrada del número 52 de calle Bandera, donde moran varias dependencias de la Cancillería, hay un extraño cubículo de vidrios oscuros. El hombre que permanece en él, siempre atento, no aguarda algún turno absurdo en una ciega sala de espera: es un guardia. Tampoco los tabiques que recubren los dos muros del rincón son exactamente lo que parecen: uno es una puerta que sólo se abre desde dentro, y que da acceso a dos pesados ascensores.

En el quinto piso, a la izquierda, desatento al surrealismo de su recepción, el mayor general Jorge Ballerino espera con impaciencia lo que le depara esta tarde tensa del 28 de mayo de 1990.

El comandante en jefe ha sido citado a La Moneda, como culminación de la airada reacción del gobierno ante el encuentro del general Ballerino con Raúl Rettig y, sobre todo, la declaración emitida a nombre del Ejército.

Ballerino intuye que en la agenda de los reproches estará el organismo que dirige, oficialmente denominado Comité Asesor Político-Estratégico del Comandante en Jefe del Ejército[1]. Después de todo, es el Comité el que ha realizado las operaciones contra la constitución de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Por mucho que esas maniobras no hayan resultado, el gobierno ha sido tocado por la primera expresión de malestar institucional, presentada con el rostro del Comité.

La treintena de oficiales que trabaja junto a Ballerino sabe que no cuenta con las simpatías del gobierno. Ya se los advirtió, a las 8.30 de la mañana del 12 de marzo, el propio mayor general Ballerino, cierto que con palabras gentiles y un tanto elusivas, pero que todos los presentes, personal de elite a fin de cuentas, supieron interpretar de una sola manera.

Después de eso, mientras los soldados subían muebles y los electricistas instalaban los teléfonos, el mayor general se fue de vacaciones a Tahiti y a Viña del Mar; el Comité quedó con la instrucción de terminar de organizarse, producir sus primeros análisis y estar alerta.

Ballerino lo ha dicho: serán la línea de retaguardia. Mientras el Ejército se retira hacia sus cuarteles, este grupo tendrá la misión de proteger las espaldas. ¿Serán, como todas las retaguardias, los sacrificados, los que reciben los últimos disparos mientras se firma el armisticio?

Lo que ni el mayor general ni sus hombres prevén todavía es que en ese mismo Ejército se irán incubando también anticuerpos contra el Comité. Serán cruciales en un tiempo más.

A las 16 horas de ese día, el general Pinochet llega con su caravana de Mercedes Benz a La Moneda y se desata una silbatina del público agolpado en frente. El general baja molesto, e increpa al guardia de Carabineros, acusándolo de no quitar la cadena del acceso para que su auto pudiera ingresar al patio. El carabinero, perplejo, apenas se defiende.

(Cuando el alto mando de Carabineros ordena investigar el episodio, halla una favorable sorpresa. En vista de los incidentes previos, la guardia ha pedido permiso al gabinete presidencial para grabar en video la llegada del general. Las cintas muestran que la cadena fue bajada. Pero como esas grabaciones son secretas, los jefes policiales consiguen la de un canal y la filtran hacia la prensa: su responsabilidad está librada, el general ha montado una escena[2]).

En ese clima, el general se dirige al despacho presidencial. Aylwin lo espera serio, casi rígido, sin asomo de la sonrisa cordial que lo caracteriza. Está molesto de veras, entre otras cosas porque la confirmación de que el general vendría no se recibió en La Moneda sino hasta el mediodía.

El general tampoco llega relajado; la idea de ser citado lo irrita ya suficiente, pero además están esas manifestaciones, tan oportunas, tan sospechosas.

Hay algo peor: a la reunión asiste el ministro de Defensa. El Presidente le está confiriendo la importancia que él le ha pedido que no tenga en las relaciones entre ambos. Es un momento duro.

Y, por si no bastara, Aylwin despliega un rosario de exigencias, formuladas con un tono imperativo que el general no le ha conocido hasta ese instante.

La primera se vincula con su enojo por la declaración que ha emitido el Comité Asesor: el abogado Rettig ha tenido la gentileza de reunirse con el mayor general Ballerino, dice, y luego este Comité se ha permitido emitir un comunicado en el que hace parecer que el representante de una comisión presidencial es amonestado por un oficial. Además, este Comité se ha estado reuniendo con personas de figuración política, sobrepasando los límites que la ley fija a las instituciones armadas.

—Lo que usted tiene ahí es un gabinete en las sombras. Esta es una situación que no puedo aceptar, general.

—Pero si lo tengo hace dos años.

—Así será, pero es irregular. No me obligue a pedírselo por oficio.

—Mándeme un oficio. Pero, señor Presidente, estas cosas no ayudan a que todos nos entendamos. Vea cómo me trata la prensa, sobre todo la que es cercana al gobierno.

—General, estamos hablando del Comité Asesor. Además de todo lo que ya le he dicho, este organismo ocupa un edificio que yo necesito.

—Así que no sólo me quiere quitar el Comité, sino también el edificio.

—Esas son dependencias del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y usted sabe que en La Moneda el espacio no es suficiente.

—Pero esto —el general sonríe— es como el chiste del sofá de don Otto...

El Presidente ríe, pero no está para chistes. Así que pasa al segundo punto: la Central Nacional de Informaciones (CNI), última policía política del régimen militar, ha sido formalmente disuelta, pero existen fundadas presunciones de que algunos de sus agentes siguen operando. Hace sólo 48 horas que funcionarios de Carabineros detuvieron, en el centro de Santiago, a dos agentes que parecían seguir a la esposa del general director de la policía, Liliana Toro de Stange, mientras se dirigía a una peluquería; los agentes dijeron pertenecer a la Dirección de Inteligencia del Ejército, pero el gobierno entiende que fueron hombres de la CNI. El Presidente quiere saber en detalle cómo se ha estado cumpliendo la disolución de la CNI.

Y tercero: el gobierno requiere que el Ejército ponga a su disposición los archivos que hayan estado en poder de la CNI y que puedan ser útiles para prevenir y combatir el terrorismo.

—Mire, Presidente —dice el general—: yo no tengo esos archivos. No existen, porque en estas cosas se trabaja de otra forma. La CNI fue fundamental para combatir al terrorismo. Ahora

usted tiene a los terroristas actuando contra su gobierno, y usted se ha dado cuenta de que necesita algo para combatirlos. Pero eso que está creando con los carabineros no le va a servir. Debería usar lo que tenemos nosotros. Cámbiele el nombre, pero úselo. Le va a servir.

—De ninguna manera —replica Aylwin, irritado—. No estoy dispuesto ni a sostener ni a crear ninguna CNI.

La reunión culmina con un giro abrupto: Aylwin dice que quiere invitar a los generales del Ejército a cenar en La Moneda.

—¿A los 52? —se sorprende Pinochet.

—Sí, a los 52. A todos.

El general se va dubitativo.

Pero esa tarde, la situación vuelve a crisparse luego de que el gobierno emite un comunicado donde informa sobre los tres puntos planteados al general; en el Ejército lo consideran un gesto agresivo e innecesario.

Esa noche, el general declara hoscamente que "no tengo ningún archivo de la CNI". Sobre el Comité Asesor no dice nada. Sabe que es el centro del fuego.

Sin embargo, en el gobierno no es unánime la alegría. Se ha dejado constancia de la preeminencia del poder civil, dicen unos; pero será una constancia sin resultados prácticos, matizan otros.

El debate prolonga la divergencia que ha habido en el gabinete en el momento de fijar la agenda para la citación al general. Para entenderla, hay que retroceder unos días.

Cuando el Comité Asesor emite su declaración sobre la Comisión Rettig, quien manifiesta su radical disconformidad es el ministro de Defensa, Patricio Rojas. Sus argumentos son poderosos: si se permite que el Ejército mantenga una unidad dedicada a la intervención en política, se dará legitimidad a lo que la tradición jurídica designaba como sedición. El general Pinochet ha diseñado esta estructura como una forma de mantener su injerencia dentro del sistema político, ya no subterránea, sino abierta y pública. Ahí están las crónicas que hablan de "gabinete en la sombra", "estado mayor del co-gobierno", "poder paralelo" y cosas semejantes. Peor que peor, el mayor general que dirige el Comité lo ha descrito, con inaceptable lógica de guerra, como una "línea de retaguardia".

El golpe de gracia lo proporciona el ministro con una de las cosas que más le han molestado en estas escasas semanas: la cena de Ballerino con los ministros Correa y Boeninger. De acuerdo con lo que ellos informaron, dice, el Ejército se mantendría distante de la Comisión Rettig; lo que ha hecho ahora contraría esa palabra.

A Boeninger, que ya ha hecho un estilo de la severidad institucional, le parece que no es así, que no hay contradicción más que en las apariencias. Lo que el episodio demuestra es que en estos asuntos difíciles habrá corcoveos, sacudones, incomodidades; pero sólo eso: corcoveos.

Además, en su opinión, no serán sólo de derecha, sino también de izquierda. Y añade un corolario que no por seco es menos estremecedor: las FF.AA. no volverán a ser lo que eran, pero ¿estamos seguros de que querríamos que fuesen como antes, si después de todo aquéllas terminaron dando un golpe de Estado?

Correa coincide. Ya antes de asumir, dice, se sabía que el partido militar no serían todas las Fuerzas Armadas, sino el Ejército. A éste le cabría la tarea de defender al régimen de Pinochet. El gobierno ya ha visto este fenómeno.

Por ejemplo, con la disolución de la CNI. Los funcionarios de Pinochet habían promovido un acuerdo entre las ramas de las Fuerzas Armadas para absorber a los 2.016 hombres de planta del aparato de seguridad, distribuyéndolos en sus planillas. Pero a última hora, ni la Armada ni la FACh ni Carabineros han aceptado incorporar a esa gente[3]. Todos debieron ser integrados en el Ejército, y hasta ha habido un debate porque las otras ramas no querían devolver los suplementos presupuestarios previstos para esto.

Dado este cuadro, argumenta Correa, es irrealista pensar que el Ejército no tendrá expresiones políticas; lo razonable es tratar de contenerlas, darles un cauce conocido.

El ministro no llega a decirlo, pero en su fuero interno piensa que el Comité Asesor es este canal, y que en lugar de ser su enemigo, hay que tenerlo como amigo. No del todo fiable, pero amigo. Ya han creado una relación durante el proceso de entrega del mando. Es un error impugnarlo.

El Presidente oye los argumentos de unos y otros. No tiene una decisión tajante o, mejor dicho, sabe que ambos razonamientos le sirven. Puede optar, según convenga, entre el integérrimo doctrinarismo de Rojas o el pragmatismo eficientista de Boeninger y Correa. Lo hará así en lo sucesivo. Pero ahora, en el caso de la Comisión que ha creado personalmente y con tanto esfuerzo, se inclina por la posición de Rojas.

Hay que citar a Pinochet y marcarle los límites de su ente político. Hay que frenar al Comité Asesor. La institucionalidad democrática no puede ser desafiada por un grupo de oficiales que se saben poderosos y se sienten inteligentes.

No, señor.

El Comité Asesor es, en rigor, una versión simplificada del estratégico Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabezaba el mismo Ballerino en el último gabinete de Pinochet. Sólo se redujo parte del personal civil y las tres divisiones (ejecutiva, económica y social) se transformaron en tres departamentos (también llamados "campos de acción"): Interno y Externo, Económico y de Defensa Nacional. El subsecretario fue reemplazado por un subjefe operativo y la unidad legislativa se convirtió en asesoría jurídica.

Hasta los hombres son los mismos: el coronel (J) Juan Romero, segundo en la estructura jurídica del Ejército, en la asesoría, con la misma ayuda externa que antes prestaba el ex auditor general Fernando Lyon; el coronel Carlos Molina Johnson en la Defensa Nacional, aunque poco más tarde será promovido a la subjefatura operativa; el coronel Julio Véjar, en el Departamento Económico; y el coronel Cristián Labbé en el Departamento Interno y Externo.

De ellos, sólo el coronel Labbé conoce su destino. Hasta el 11 de marzo, fue ministro secretario general de Gobierno y estuvo en la línea "dura" del traspaso del mando: desde los ásperos encontrones con los ministros de Aylwin, sabe que su carrera militar está terminada y ya prepara su expediente de baja voluntaria para el segundo semestre del 90. Pero también sabe que no abandonará la lucha: ha estado tanto tiempo con el general Pinochet —en los comienzos del régimen fue el jefe de su escolta—, que se siente parte viva y activa de "la obra" de casi 17 años.

Reforzando la noción de continuidad, el Comité ocupa las oficinas donde se radicaba el aparato operativo del Ministerio. El mayor general Ballerino tenía reservado el mismo despacho que ocupa ahora, sólo que nunca lo usó; a menudo lo prestó para las operaciones secretas del Ministerio del Interior.

Desde allí se dirigen, a partir del primer día del cambio de mando, las complejas maniobras en el nuevo panorama político.

Por ejemplo, el 10 de abril de 1990, en pleno fragor de la lucha subterránea contra la Comisión Rettig, es el Comité el que recomienda al general Pinochet asistir al almuerzo al que el Congreso invita a los comandantes en jefe.

El consejo tiene cierto impacto, porque los anfitriones, calculando que el general pasa sus vacaciones en Bucalemu, esperan contar con mandos inferiores; pero cuando se confirma que asiste el general Pinochet, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, y el de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo, se las arreglan para convertir la ocasión en un ejercicio de cortesías de Estado.

La reunión gana notoriedad por dos hechos: primero, porque el diputado Rodolfo Seguel (DC), ex dirigente cuprífero y cara visible de las feroces protestas de los 80, se abre paso entre un tumulto para estrechar la mano del general; y luego, porque la prensa difunde hasta el menú

del almuerzo. Esa noche aparecen en Santiago los primeros irritados "papelógrafos" de la Brigada Chacón del Partido Comunista: "¿Qué mierda es la tarte Sainte Honore?".

Al mes siguiente, para el 21 de mayo, cuando Aylwin debe leer su primer mensaje a la nación, el Comité desaconseja la asistencia del general Pinochet al Congreso: se ha enterado —"por canales no gubernamentales"— de que el Presidente hará una dura crítica al régimen pasado.

Como es preciso evitar gestos demasiado hostiles —por ejemplo, que el general se pare y se vaya en medio del discurso—, lo mejor es que asista el vicecomandante en jefe. Y que aguante.

La decisión no resulta demasiado favorable. El almirante Martínez Busch y el general Matthei se sienten afectados: si el que asiste es el número dos del Ejército, entonces la primera antigüedad —el lugar preeminente— le corresponde a uno de ellos. La protesta también llega al Comité Asesor.

El 29 de mayo —al día siguiente de la citación de Aylwin—, Pinochet asiste inesperadamente a un almuerzo que el gobierno ofrece al Presidente de China, Yang Shangkun, en visita oficial. Otra vez lo reciben manifestantes hostiles; el general repite, más brevemente, la protesta contra la guardia.

El verdadero incidente, sin embargo, está reservado para la distribución de los puestos en las mesas. El general exige que se le dé el trato de ex Jefe de Estado, lo que lo pone en los primeros lugares del protocolo (muy por encima del ministro de Defensa, claro). Los hombres del gobierno se desconciertan y, atrapados por la prisa, le confieren ese privilegio.

El protocolo establece que en estos actos, el Presidente ofrece un brindis por el visitante, y éste lo devuelve; ninguno de los dos brinda con nadie más. Pero Yang Shangkun quiebra la norma y levanta su copa primero hacia Aylwin y luego hacia Pinochet: algo en el dirigente comunista se inclina inefablemente al general.

A la salida, el ministro Correa aparta al embajador chino y le anuncia que será convocado a La Moneda para una breve, brevísima conversación.

En el Comité Asesor hay aires de triunfo. La lucha por defender el status de ex Jefe de Estado del general Pinochet ha sido ganada en el primer episodio.

No ocurrirá así en los siguientes. En diciembre de ese año, cuando el Presidente George Bush realice su paso de un día por Santiago, el Comité insistirá en que el general ocupe su puesto como ex Jefe de Estado en la línea de recepción en el aeropuerto. En Protocolo, esta vez, los harán optar:

—En ese caso, tiene que ir de civil, porque no puede haber dos militares en la fila.

Pese a la insistencia del Comité, el general preferirá el uniforme: ahí está su identidad. Irá como comandante en jefe.

El 31 de mayo, Aylwin visita Punta Arenas, con motivo de unos temporales que cuatro días antes arrasaron la ciudad. Se ha demorado en reaccionar, pero ahora, al concluir el almuerzo con las autoridades de la región tiene una idea intempestiva.

—Hemos estado —dice— con todos los sectores de la comunidad, menos con las Fuerzas Armadas. Este gobierno no quiere tratos discriminatorios.

Mañana, a primera hora, desearía reunirse con los oficiales de la Región Militar Austral, la única organizada como tal en el país y la de mayor importancia operativa. Los representantes de la Armada, la FACh y Carabineros se cuadran: "A la orden, señor Presidente".

Pero el mayor general de Ejército Alejandro González Samohod, comandante de la Región, se siente sorprendido.

—Señor Presidente, habría que consultar esto con Santiago...

—General —dice Aylwin, y le palmotea el hombro, sonriente—, usted es el de mayor antigüedad aquí, así es que vea cómo lo hace. Pero es responsabilidad suya que los hombres estén listos. Digamos, a las 8...

El mayor general asiente, perturbado.

Esa tarde hay tortuosas conversaciones entre los mandos de la Región y el jefe de gabinete de la Presidencia, Carlos Bascuñán, para acordar la forma en que llegarán los oficiales al Teatro Municipal de Punta Arenas, el modo en que se distribuirán, quiénes recibirán al Presidente, quiénes se ubicarán en el estrado, quién interpretará el Himno Nacional.

El mayor general González Samohod consulta al mando en Santiago. Recibe la instrucción de cumplir la exigencia del Presidente. Pero simultáneamente se despacha al Comité Asesor la orden de estudiar la situación.

En la mañana del 1° de junio, el Presidente Aylwin describe, ante 400 oficiales, su proyecto político e institucional, en los términos más crudos posibles. Ni un solo ruido se produce en el teatro durante todo el discurso.

Unos días después, un oficio preparado por el Comité Asesor hace presente al Ministerio de Defensa que el Presidente puede, naturalmente, reunirse con cualquier unidad de la institución, pero que es conveniente formalizar estas iniciativas a través de los canales regulares, para evitar eventos ingratos o contrarios a los reglamentos.

Pero Aylwin no necesita repetir el gesto. Ya ha producido exactamente lo que buscaba: establecer que su preeminencia constitucional se extiende hasta el seno de los cuarteles.

En los tumultuosos días que siguen, el Comité Asesor debe multiplicarse para hacer frente a la avalancha de temas: el acuerdo marco sobre derechos humanos que se negocia en el Congreso, el trámite de las leyes Cumplido, la deuda del Ejército con la Corfo, la inquietante evolución del proceso por el homicidio de Orlando Letelier, las propiedades no regularizadas en el Ministerio de Bienes Nacionales...

A ese torrente se agrega, el 3 de junio, otro más sombrío: el hallazgo, en sitios que pertenecieron al Ejército en Pisagua, de una fosa común que lentamente va arrojando restos humanos, todos de ejecutados cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares.

La reacción unánime de horror —es la primera vez que se suman figuras señeras de la derecha— influye en la apreciación que el Comité Asesor entrega al general Pinochet.

Este convoca a un consejo de generales en la Escuela de Telecomunicaciones de Peñalolén, el 12 de junio. Una comisión de entre ellos redacta una declaración que se leerá al otro día en la Academia de Guerra, para establecer que el Ejército considera los hechos de fines de 1973 como parte de una "acción de guerra" y llamar a no profundizar las heridas derivadas de esas circunstancias, no provocadas por los soldados pero enfrentadas con sentido patriótico por ellos.

—Por eso exigimos respeto para nuestra institución y para todos aquellos que han desempeñado en nuestras filas las duras tareas de la guerra y que hoy entregan sus mejores esfuerzos por la paz y el progreso de la nación—, dice, con voz severa, el coronel Ricardo Izurieta[1].

El clima de enervamiento interno que la declaración refleja es mal percibido en los ambientes de la Concertación y el gobierno.

El ministro Rojas inicia una ronda de conversaciones con los comandantes en jefe para pedirles colaboración ante las situaciones que se están presentando; si disponen de información sobre víctimas, sería positivo que la entregaran al gobierno, que la manejará con extrema cautela. Cuando se reúne con Pinochet, agrega que una explicación sobre los hechos de Pisagua contribuiría a disipar las tensiones. Pero no la hay, ministro: eran tiempos de guerra, ¿sabe lo que es la guerra?

Horas antes del acto militar, el director de Investigaciones, general (R) Horacio Toro, declara en Televisión Nacional que el honor militar exigiría que el comandante en jefe del Ejército renunciara después de los hallazgos de Pisagua.

Toro no es una figura cómoda para el Ejército. Tras su retiro, en 1978, por abiertas discrepancias con el mando, se fue inclinando hacia la oposición, en lo que algunos oficiales consideran una "traición"; ésta termina de consumarse, a su juicio, cuando Toro acepta dirigir la policía civil. A los tres meses, la tensión entre su nueva institución y los servicios de inteligencia militares es ya bien conocida en el ambiente castrense.

Pero su afirmación sobre el honor militar desencadena una verdadera batahola. Primero, los generales (ahora como Consejo Militar) emiten una nueva declaración, rechazando tajantemente sus palabras. Luego, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro acuerda su expulsión de sus registros. Toro ofrece su renuncia al ministro del Interior, pero el gobierno no está para dar señales de debilidad: se le rechaza. Pasan otras cosas, menos visibles: se prohíbe el ingreso de Toro a todas las unidades militares y se le notifica —a él, un hombre de Caballería— que no podrá continuar cabalgando en terrenos de los regimientos. El último paso es una querella por ofensas presentada ante la justicia militar[5].

En ese clima se realiza en La Moneda, el 18 de junio, la cena a la que el Presidente ha invitado, a través de Pinochet, a los generales del Ejército. Asisten los 35 que están en Santiago. Se trata de una iniciativa de distensión con todas las Fuerzas Armadas: en los días siguientes irán a cenar los almirantes y los generales de la FACh y Carabineros.

(De todas, la más dura es la reunión con la Armada, donde el almirante Martínez Busch hace gala de una intensa expresividad para decir que su institución siente "impotencia" ante los ataques en su contra, y que se contiene para no quebrantar la ley.)

La velada con el Ejército, a la que asisten el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el subsecretario de Guerra, es la más inquietante. Pinochet introduce al Presidente con cada uno de los invitados. Pero no es noche de galantería: la mayoría se esfuerza en poner su más serio semblante cuando el Jefe de Estado estrecha sus manos, como si se tratara de una secreta competencia en la que nadie puede dudar de qué lado está la lealtad más sentida.

Durante la cena se habla de temas rigurosamente profesionales; algunos generales plantean su preocupación ante las compras de terrenos limítrofes por ciudadanos extranjeros y la falta de una definición del Estado sobre esto. La reunión termina secamente.

Dadas las circunstancias que se viven al iniciarse el segundo semestre de 1990, el Comité Asesor se ve en la paradójica situación de cautelar el puente con el Ejecutivo, pese a las objeciones de éste en su contra.

El 8 de julio, en *El Magallanes* de Punta Arenas —edición dominical de *La Prensa Austral*— aparece una entrevista a un oficial de Ejército denominado N.N., en la que expresa críticas abiertas al gobierno y describe la sensación de "hostigamiento" que circula en las filas. El texto es acompañado por una foto en la que el supuesto entrevistado aparece de espaldas, hablando con el director del periódico[6]. El Ministerio de Defensa reacciona con alarma y a primera hora del lunes pide explicaciones al Ejército.

A los pocos días, las versiones no identificadas que sostienen que el entrevistado no sería un militar inquietan al gobierno.

El ministro Correa pide al propietario del diario que aclare la situación. Entonces el periódico confirma que se trata de un oficial activo, hecho que el ministro Rojas consolida después de reunirse con el jefe de la Región Militar Austral, el mayor general González Samohod.

Una semana después, el general Pinochet ordena que el jefe del Estado Mayor, el mayor general Hugo Salas Wenzel, se traslade a Punta Arenas. El enviado se reúne durante horas con González Samohod, pero sólo en la noche consigue que éste reconozca un hecho insólito: que conoció la entrevista de antemano, que la corrigió y que la aprobó.

El 20 de julio, un comunicado añade que, considerando inconveniente el texto, González Samohod sugirió que no se publicara, pero que el diario tomó la decisión. La identidad del oficial no es revelada y el Ejército dice, privadamente, que no es posible obtenerla, dado que parece

probable que la foto esté trucada y que quien aparece de espaldas sea el mismo director, Pablo Cruz Nocetti, que figura de frente[7].

Junto al comunicado se cursa la baja de González Samohod, el primer general caído en las refriegas de la transición. Para notificarlo, el general Pinochet lo recibe sin darle tiempo a chistar:

—Por la boca muere el pez, señor.

En los escasos minutos que le concede, le recuerda que al enviarlo a Punta Arenas le advirtió que tuviera cuidado con hablar más de la cuenta, que su entusiasmo por la figuración pública ya era conocido y que hubo antes otros incidentes.

El Comité Asesor es el encargado de transmitir al gobierno la idea de que esta medida confirma la aseveración de Pinochet de que él es la mejor garantía para la estabilidad del proceso; también transmite el desagrado institucional por las declaraciones del ministro de Defensa, quien ha dicho que "en nuestras instituciones armadas los carapintadas o los Aldo Rico no tienen cabida, ni eco ni destino", en indirecta alusión a las propias sugerencias del Comité.

En el gobierno queda la convicción de que el N.N. ha sido el mismo general González Samohod, quien habría estado interviniendo a través de la prensa local desde algún tiempo antes. Aunque el mayor general lo niega, los funcionarios de La Moneda se confirmarán en su hipótesis poco más de un año después, cuando González Samohod, ahora residente en Copiapó, anuncie su ingreso a la política activa como militante de la UDI[8].

El general Pinochet demora la entrega del informe sobre el Comité Asesor algo más allá de lo que el Ejecutivo espera. Hay en ese retraso una cierta respuesta al juego de desplantes que el gobierno ha practicado también con él; pero todo se mueve en los bordes de los reglamentos y las cortesías, el lugar donde aloja la exasperación.

Cuando finalmente lo envía, se atiene a la formalidad de la petición. Detalla sus atribuciones para crear organismos de este tipo, transcribe la orden de comando con que lo ha hecho y detalla el reglamento del Comité.

En cuanto al fondo, la explicación es la misma que ya ha adelantado ante el Presidente: el Comité es un organismo de asesoría directa al comandante en jefe, que se justifica por su papel en el Consejo de Seguridad Nacional y, especialmente, por la condición de garantes de la institucionalidad que el artículo 90 de la Constitución confiere a las Fuerzas Armadas.

Al ministro le parece un informe inaceptable.

Todos los comandantes en jefe, dice, participan en el Consejo de Seguridad, y todos son garantes de la institucionalidad. Pero las funciones de asesoría directa que en las otras ramas de las Fuerzas Armadas cumplen tres o cuatro personas han sido llevadas aquí al desproporcionado volumen de una treintena de oficiales, con otra treintena de consultores externos, oficinas, instalaciones y recursos desmedidos. Y todo pagado por el Fisco.

Además, la orden de comando le entrega misiones de una extensión inédita, como la de informar de todo el acontecer nacional, internacional, económico y social.

En los hechos, concluye, el Comité Asesor es un organismo político que ni la Constitución ni la ley orgánica ni el DFL 1 ni los reglamentos permiten.

El ministro Rojas sabe, sin embargo, que no sacará nada con ordenar al comandante en jefe que modifique su orden de comando.

Entonces, con autorización presidencial, manda un oficio reservado a la Contraloría, consultando si la orden de comando se ajusta a derecho.

La Contraloría responde en unas pocas semanas. El ministro tiene razón, especialmente cuando hace notar que la facultad de recopilar información está fuera de la legalidad. Rojas recibe la noticia y la saborea con su gabinete.

Pero decide con frialdad: no se le dará a conocer al Ejército hasta que la oportunidad sea más propicia.

En el intertanto, el Comité Asesor continúa actuando con su diseño original. A comienzos de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD José Antonio Viera-Gallo, le plantea a su cuñado y diputado de la UDI Andrés Chadwick la necesidad de que los parlamentarios de gobierno tengan algún vínculo con el Ejército. La situación del país está muy tensa, y el abismo no ayuda en nada. Chadwick ofrece entablar el contacto.

El mayor general Ballerino llega con los coroneles Juan Romero y Carlos Molina, más otros dos oficiales, a la casa de Viera-Gallo en la noche del 6 de agosto. Junto al anfitrión hay cuatro diputados democratacristianos, uno radical y tres socialistas.

Con circunloquios, suavemente, como pisando sobre terreno minado, los dos grupos abordan el problema más candente: el de los hallazgos de cadáveres en fosas comunes.

Ballerino dice que se está haciendo un peligroso uso publicitario de estos desgraciados hechos y que la situación del Ejército se hace cada día más complicada, porque carece de herramientas constitucionales para defenderse. Por eso ha tenido que sacar algunas declaraciones que, aunque puedan parecer duras, representan la mejor voluntad de la institución de explicar su punto de vista.

Los diputados responden que una cosa son las publicaciones y otra el tenebroso hallazgo de cadáveres ocultados. Si el Ejército se allanase a colaborar para ubicar a las víctimas y darles digna sepultura, muchas tensiones disminuirían. Y con los desaparecidos...

Pero no, interrumpe Ballerino, repitiendo lo que ha dicho al gobierno: la institución no tiene información. ¿Pueden creer que, si la tuviera, hubiese dejado que las cosas llegasen al punto en que están hoy?

La reunión concluye antes de la medianoche, con sentimientos encontrados: ambos grupos han constatado vivamente el recelo y hasta el miedo que se tienen; pero también han sentido, con cierto alivio, que se reconocen una recíproca validez y que, pese a la distancia, forman parte de una misma sociedad.

La sed de reconocimiento está comenzando a ser saciada. Ella será uno de los ejes sicológicos de la transición.

Poco después el ministro de Defensa hace llegar al general Pinochet el dictamen —calificado como "reservado"— de la Contraloría que objeta las tareas del Comité Asesor.

En Bandera 52, los hombres reconocen la derrota.

El ministro ha tenido éxito cuando menos lo esperaban, cuando creían haberlo silenciado con el documento de respuesta.

Ahora, el comandante en jefe tendrá que modificar la orden de comando y quitar de las facultades la de recopilar información.

Pero la Contraloría no ha objetado al Comité como tal.

Todo puede seguir igual. Y en cuanto a la información, ¿es necesario decir lo que uno está haciendo?

Notas

1. Ejército de Chile: Reglamento ROR-301/CJE.
2. Diario *La Epoca*, 29 de mayo 1990.
3. El total se dividía en 760 uniformados y 1.256 civiles, más un número indeterminado de civiles contratados a través de gastos reservados. Ver: Soto, María Irene: *Los servicios secretos chilenos*. Revista *Hoy*, Nº 718, del 22 al 28 de abril de 1991.
4. *Ejército fijó su posición sobre búsqueda de la verdad*. Diario *La Epoca*, 14 de junio de 1990.
5. El general (R) Toro fue finalmente sobreseído en 1992.
6. Cruz, Pablo: *"En 1973 hubo una revolución, de la que salimos triunfadores, y en las revoluciones siempre hay víctimas"*. Periódico *El Magallanes*, 8 de julio de 1990.
7. *De cómo se llegó a la renuncia del general González*. Revista *Hoy*, Nº 679, 23 al 29 de julio de 1990.
8. Diario *La Epoca*, 4 de agosto de 1991.

4

El lento latido del rencor

Al ministro de Justicia Francisco Cumplido se le encargan las dos tareas prioritarias del nuevo gobierno: sacar de las cárceles a los presos políticos y lograr un equilibrio en las leyes penales. Contra sus propósitos emerge la sombría evidencia del pasado...

El ministro Francisco Cumplido está decidido a que sus dos primeras tareas sean las que inauguren el nuevo gobierno. Las han definido con el Presidente, partiendo de un principio abrumador: por la cartera de Justicia pasará uno de los ejes de la reconciliación. Las leyes, los tribunales, las cárceles, deben ser el reflejo material del espíritu de paz social que Patricio Aylwin concibe como su misión histórica.

Se trata de una tarea enorme, pero el Presidente y su ministro le han puesto límites: sacar a los presos políticos, para terminar con la percepción de arbitrariedad; y castigar los delitos más graves contra los derechos humanos, para poner fin a la sensación de impunidad.

Y ahora, en marzo de 1990, va a empezar con las dos primeras iniciativas.

Una es un conjunto de 45 decretos de indulto para concluir procesos por "delitos de conciencia" —asociación ilícita, violación del receso político, reingreso ilegal al país—, que parte el 12 de marzo a la Contraloría para la toma de razón. Sobre 397 casos de presos políticos, la suma representa una proporción modesta, pero el ministro espera que simbolice la voluntad oficial de liberar a todos los que fueron puestos entre rejas durante el régimen militar. No pueden ser más, porque en el resto de los casos los procesos no están terminados.

La otra es un paquete de leyes que llegará al Parlamento antes de que comience a funcionar su oficina de partes: al gobierno le interesa dejar constancia de que ésta es su primera preocupación. Las leyes abarcan tres grandes aspectos: eliminación de la pena de muerte, modificación de la ley antiterrorista con referencia a los derechos humanos, y modificaciones de los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Justicia Militar y de las leyes de seguridad del Estado y de control de armas.

En conjunto buscan restablecer los principios del debido proceso, fuertemente desequilibrados por una legislación dictada *ad hoc*.

El ministro ha elaborado una carta que muestra cómo las penas por delitos terroristas fueron aumentadas cada vez que en los 17 años anteriores se produjo algún nuevo atentado. Por esa vía, cree, podrá resolver los más de 300 casos que seguirán pendientes después de los indultos, tanto por la calificación de los delitos como porque los procesos continúan abiertos, bajo el moroso curso de la justicia ordinaria o militar. Teniendo las leyes, se podrá pedir a las cortes que aceleren los trámites.

En seis meses, calcula, estarán listas. En un año no habrá más presos políticos.

Las medidas han ocupado los desvelos de Cumplido desde que, en los primeros días de enero, el Presidente lo llamara para ofrecerle el último cargo vacante del gabinete. Después de la caída del candidato más obvio, el socialdemócrata Eugenio Velasco, precipitada por los debates en el seno de la comisión de derechos humanos de la campaña presidencial, Aylwin se ha convencido de que necesita a un hombre de su misma escuela, a un creyente del derecho cuyo compromiso moral no sea incompatible con cierto pragmatismo político.

Cumplido ha trabajado afanosamente durante el verano caliente: no hubo vacaciones para él ni para las dos abogadas que lo acompañan en el ministerio: Martita Wörner, militante del PPD, subsecretaria, y Gisela von Mühlenbrock, democratacristiana, jefa de gabinete.

A Martita Wörner la ha reclutado el propio Aylwin: ella lo impresionó con una exposición sobre derechos humanos que hizo, en representación del Arzobispado de Concepción, durante la campaña presidencial. Luego de escucharla, el candidato de la Concertación sacó una pequeña libreta negra —la "libretita del corazón"— y apuntó su nombre.

Su siguiente encuentro ocurrió el 18 de enero, cuando el Presidente electo la invitó a participar en la reunión con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Fue después de eso que Cumplido la llamó para proponerle integrar el gabinete.

Igual que el ministro, la nueva subsecretaria hipotecó las vacaciones. El mes de descanso previsto en Frutillar se redujo a una semana. Y durante esos días, no paró de trabajar en los nuevos proyectos de leyes.

En el cálido febrero, a orillas del lago Llanquihue, se sorprende de su inesperada posición:

—Fíjate que con los militares legislaba toda una comisión —le dice a su amiga María Angélica Fuentealba—. Y ahora vamos a legislar nosotras dos...

Entre tanto, en las grises noches de Santiago, a veces el ministro se pregunta si todo esto será posible, si la tarea que le han encomendado no desbordará el esfuerzo humano. Como pocos, él puede divisar en la enrevesada arquitectura jurídica del pasado reciente los circunspectos matices del odio, el lento latido del rencor debajo de la norma, la venganza subsumida en la letra. Su misión es desactivar este aparato.

Con los indultos está severamente limitado. La Concertación se ha comprometido a indultar a todos los presos políticos que no hayan cometido asesinatos, lesiones gravísimas, secuestros y rapto. El secuestro crea el primer escollo: muchos de los presos, combatientes de una subversión siempre artesanal, secuestraron a choferes de taxis para sus actos de "propaganda armada". Tras largas noches, el ministro halla un boquete: cuando el programa de la Concertación habla de secuestro y rapto, se refiere a menores. No resiste gran análisis, pero al menos alivia la contradicción.

El alivio dura menos que un respiro. A la entrada del otoño, una veintena de presos políticos inicia una huelga de hambre para exigir la liberación inmediata de todos. A la semana la cifra sube a una cincuentena, y comienza a suscitar apoyo internacional.

El 21 de marzo, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Andrés Aylwin, empieza a discutir el primero de los proyectos, sobre abolición de la pena de muerte, bajo las sombras del atentado criminal a los generales (R) Leigh y Ruiz y la huelga de los presos políticos.

El aire de un humanismo moderno, alentado por el deseo de no repetir más los dolores sociales de las últimas décadas, auspicia el proyecto. Pero la realidad se muestra más dura que las abstracciones.

Para el proyecto de reformas penales, Cumplido recibe el refuerzo del ministro Edgardo Boeninger. La primera negociación, en La Moneda, se realiza con tres de los más notorios juristas de RN, Ricardo Rivadeneira, Carlos Reymond y Miguel Otero.

En el Ministerio de Defensa, el subsecretario Marcos Sánchez preside el comité de análisis de las reformas a la ley antiterrorista y de seguridad del Estado, y a los códigos de Procedimiento Penal y de Justicia Militar, con los auditores generales de las Fuerzas Armadas. Esta puede ser

la peor parte: el gobierno cree que tendrá objeciones generalizadas. Pero el general (J) Enrique Montero, auditor de la FACh y ex ministro del Interior, sienta en la primera reunión el tono de los debates cuando declara que opinará de materias estrictamente técnicas, porque los aspectos políticos sólo atañen al Presidente. El subsecretario siente que la cancha se estrecha para todos, pero en particular para el hombre a cuya intransigencia teme más, el auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva.

A poco andar, los reparos de las Fuerzas Armadas revelan que hay apreciaciones compartidas, más allá de los énfasis personales. El gobierno no encuentra dificultad para modificar la estructura de la Corte Marcial, confiriendo inamovilidad por tres años a los representantes militares y estableciendo un plazo máximo de 120 días para dar conocimiento del sumario, con el fin de evitar la eternización del secreto.

En la ley de control de armas, donde el ministro Cumplido ha sido asesorado por abogados que trabajaron en la Vicaría de la Solidaridad, con el firme propósito de retornar a las penalidades que existían hasta el 11 de septiembre de 1973, las opiniones castrenses resuenan con fuerza técnica y el gobierno se inclina a acoger algunas de ellas como aportes.

Por ejemplo, frente a la norma que quiere prohibir a los uniformados el uso de armas largas en patrullajes y rondas, los militares reclaman que de ese modo se los obligaría a enfrentarse a grupos irregulares en condiciones desmedradas. Todos saben que las armas largas circulan con profusión en el mercado clandestino. El Ejecutivo acepta el razonamiento.

Los verdaderos problemas comienzan con la pretensión oficialista de sacar de los tribunales militares todos los procesos donde estén involucrados civiles. Las variantes empiezan a presentarse en forma abrumadora.

¿Qué pasa si en el atentado a un cuartel actúa un civil en connivencia con un militar? ¿Y si un soldado encabeza un acto de sedición y llama a la insurrección con cómplices civiles? ¿Y si un civil roba un depósito de municiones? El Presidente dirime en varios de esos casos:

—Conforme. Tienen razón.

La justicia militar no podrá volver a ser lo que era en la democracia previa al 73.

El punto que ocupa más semanas de infructuosos intercambios es el llamado "problema del centinela". Aquí es donde las diferencias de mentalidad se muestran más insalvables. ¿Quién debe juzgar a quien atenta contra un centinela, el guardia que cautela una unidad militar, un domicilio o incluso un monumento?

Para el gobierno, no hay duda: la justicia criminal común. Para los militares esto resulta inconcebible: les parece que un atentado de ese tipo no termina en la agresión física, sino que implica un ataque a la integridad moral de las Fuerzas Armadas, puesto que tales hombres están en esos puestos para actuar por presencia y son, por tanto, blancos fáciles.

El debate llegará hasta una reunión especial de Aylwin con los comandantes en jefe para discutir las reformas. Allí el Presidente sostendrá, como su ministro, su personal oposición a la tesis castrense y el proyecto será despachado sin ella. Pero cuando se discuta en el Senado, el ministro tendrá que transar y aceptar la pena militar en el ataque al centinela. Si no, no tendrá ley.

La llegada de abril coincide con el primer roce serio entre el nuevo gobierno y el Poder Judicial. Los magistrados exigen al Ejecutivo reforzar las medidas de seguridad en los tribunales, tras un acto por la libertad de los presos políticos, que culmina con 39 detenidos en la sede misma del Poder Judicial.

Pero lo que en verdad ha irritado a los ministros de la Corte Suprema es la amarga crítica que Aylwin —hijo de un ex ministro de la Corte— les formulara en su presencia, en Pucón, en la inauguración del año judicial, donde ha hablado de "crisis" en la justicia. Los ministros han respondido a través de una declaración aprobada por ocho votos contra seis[1], y mediante la suspensión de un encuentro al que el gobernante los había invitado para el 3 de abril, a la hora del té.

A la reacción por el juicio de Aylwin se suma la desconfianza sobre sus planes para modernizar el Poder Judicial, incluyendo la creación de un Consejo Nacional de la Justicia.

Los magistrados resistirán y objetarán la idea hasta que la hagan naufragar. Y eso, a pesar de que el proyecto intenta dotar a la magistratura de independencia económica, administrativa y de fijación de políticas.

—Qué farra se dan los jueces —dice a su gente, irritada, la subsecretaria Wörner—. Rechazar lo que siempre han querido...

Pero la "farra" es sólo una parte del problema. En el Ministerio de Justicia saben que la confrontación del Presidente con los magistrados puede provocar un segundo efecto: que las cortes mantengan sus criterios en la aplicación de la amnistía, la lenta tramitación de los procesos, la situación de los presos políticos.

Pronto lo confirmarán.

El centro de las modificaciones a la ley antiterrorista es la rebaja de las penas; el ministro Cumplido calcula que con ello conseguirá liberar a la casi totalidad de los presos políticos. En mayo, RN, el principal partido de la oposición, inicia las negociaciones sobre estas reformas entregando al gobierno un "proyecto de reconciliación nacional".

El texto cuenta con el apoyo secreto del Ejército; sus auditores han participado incluso en la redacción final.

Algunas insinuaciones son deslizadas al Ejecutivo para que considere ese factor. Y a partir de ese proyecto, RN plantea un conjunto de indicaciones para modificar el texto del gobierno.

Pero se trata de cambios de fondo, y en cosa de días los escollos se vuelven insalvables. El presidente de RN, el senador Sergio Onofre Jarpa, y los diputados de la UDI anuncian su rechazo terminante a la rebaja de penas para los presos políticos. Sus juicios se unen, en algún punto, con las anónimas versiones castrenses que aparecen en la prensa: "Quieren vaciar las cárceles de terroristas para llenarlas de militares".

El gobierno advierte estas coincidencias y decide tomar la ofensiva. Hay que evitar que se consolide un frente civil-militar de oposición. Para ello destina a cinco ministros —Krauss, Boeninger, Correa, Cumplido y Rojas— para incrementar la presión sobre los parlamentarios.

En medio de esa lucha sorda surge una iniciativa destinada a dar conformidad a ambos bandos: los presos políticos no serán canjeados por militares.

La sede de la idea es la Comisión de Constitución de la Cámara y se la bautiza como "acuerdo marco". En lo medular, propone rebajar penalidades, mediante normas transitorias, tanto a los acusados de acciones terroristas como a quienes se imputen violaciones a los derechos humanos. Es un raro camino por en medio de los proyectos oficialista y de RN. Sus motores son los diputados Gutenberg Martínez (DC), Alberto Espina (RN), Andrés Chadwick (UDI), Jorge Schaulsohn (PPD) y Jorge Molina (PS-PPD). El acuerdo sorprende al gobierno.

El diputado Andrés Aylwin, que preside la Comisión donde se origina, observa su avance con recelo: le parece que es una artimaña de la derecha para producir una suerte de segunda amnistía. Un día confirma sus sospechas cuando descubre sobre un escritorio de la Cámara un papel que alguien ha olvidado: es el acuerdo marco descrito descarnadamente como una forma de amnistía. Nunca sabrá a quién pertenece.

El diputado se siente solo. En las noches comenta con su esposa, Mónica Chiorrini, sobre el peso de su responsabilidad. Ella lo apoya: "como muchos otros", le dice. Pero ella no está en el Parlamento, ni tampoco esos muchos otros.

Se había imaginado que otros hombres destacados en la lucha por los derechos humanos llegarían al Congreso; se había imaginado como parte de una "bancada moral", donde estarían esos valientes abogados de la Vicaría de la Solidaridad, como Alejandro González, Roberto Garretón, Luis Toro, Héctor Salazar. Sabe que ellos están ayudando en otras partes —la misma Vicaría, la Comisión Rettig—, pero no tienen acceso al proceso legislativo. Aquí, en el Congreso, donde hay que hacer las leyes, Andrés Aylwin se siente solo. Y eso lo empuja.

Los primeros comentarios los formula a su sobrina Mariana, quien se los transmite a su padre, el Presidente. Luego el diputado solicita una audiencia con su hermano, que lo recibe en el palacio de Cerro Castillo, en la tarde del 20 de mayo.

El mandatario también está preocupado y para la reunión escoge la salita del torreón, donde le gusta reflexionar y afinar sus discursos. El diputado, que apenas ha conocido las dependencias del palacio, se explaya:

—Patricio, este acuerdo sería una transacción corruptora. Tú sabes que apoyo sin condiciones la libertad de los presos políticos. Pero aquí se pretende que a cambio de esa libertad se consagre la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Yo entiendo que hay una ley de amnistía que no se puede derogar. Pero otra cosa sería que la impunidad fuese obra de una legalidad sancionada por la democracia.

Si se comete tal error, añade, su hermano no podrá gobernar con tranquilidad. El Presidente lo escucha con atención, entre conmovido y perplejo. El diputado se retira con la sensación de que ha marcado un rumbo en un océano de dudas.

Por fuera de esas intimidades, el acuerdo marco marcha con ritmo propio. Durante una reunión en casa del ministro Boeninger, los parlamentarios de RN lo afinan. Su principal jurista, Ricardo Rivadeneira, redacta allí mismo el núcleo: rebaja de penas para un lado, sobreseimiento de los procesos por violaciones a los derechos humanos para el otro. La excepción serían los delitos con resultado de muerte o lesiones graves, lo que todavía permite castigar los crímenes atroces o los atentados más despiadados.

Tras ese encuentro, el acuerdo da un salto. En la noche del 30 de mayo los diputados se aprestan para firmarlo. Todos dudan; nadie está seguro de sus efectos. Por eso Espina busca primero la aprobación de Jarpa; Chadwick hace lo propio con Jaime Guzmán.

Ninguno percibe que, en el ambiente que se incuba en el país, éste habrá de ser uno de los compromisos más breves que registre la transición. Al día siguiente, el PS anuncia su rechazo a lo que llama una "amnistía velada". Las conversaciones se rompen.

Los políticos de todos los bandos se confunden y confunden al país en la polémica acerca de si el acuerdo está desahuciado o sigue vigente. Para el diputado Espina, la voluntad continúa en pie; sólo hay dificultades para su traducción jurídica.

El diputado Aylwin se deja ver como uno de los escollos; sus pares se lo hacen sentir: el vacío y los abruptos silencios comienzan a rodearlo.

El 3 de junio, informaciones proporcionadas por el obispo Javier Prado conducen al hallazgo[2], en un terreno situado a unos tres kilómetros de Pisagua, cercano al cementerio y perteneciente hasta hace poco al Ejército, de una fosa común con los restos de cinco personas. El tribunal local ordena ampliar las excavaciones. Es el segundo hecho de este tipo[3].

Al día siguiente, el Presidente convoca a una reunión en La Moneda a los ministros políticos y a los líderes parlamentarios de la Concertación.

El debate sobre el proyecto que se estudia en el Parlamento es áspero, pero toma ribetes violentos cuando el Presidente se va de la sala. En ese instante, el diputado Schaulsohn acusa a Andrés Aylwin de poner arsénico al gobierno de su propio hermano con su oposición al acuerdo marco. Aylwin no responde, pero constata con amargura la soledad de su situación. Al anochecer los dirigentes dejan el palacio con semblante sombrío.

Simultáneamente, en el Ejército se dividen las opiniones sobre el acuerdo.

Mientras el Comité Asesor se muestra partidario, el auditor Torres Silva expresa con fuerza sus aprensiones. Interesado en clarificar la situación, el general Pinochet invita a los parlamentarios de RN.

Cuando le explican los efectos favorables que el acuerdo tendría para los militares acusados por violaciones de derechos humanos, se interesa en saber cómo funcionaría con los subversivos.

—¿Quiénes saldrían, por ejemplo?

—Todos —dice el diputado Espina.

—¿Los del atentado, los que mataron a mis escoltas?[4]
—Sí, también ellos.
—¡Eso es inadmisible! —clama Torres Silva, que ha llevado el sumario por ese caso.
—No —dice Pinochet, y deja unos segundos de suspenso—. Está bien. Si sirve de algo, está bien.

El 15 de junio, el debate prosigue en la Comisión de Constitución. Aunque se llega a un nuevo acuerdo sobre rebaja de penas a los presos políticos y extinción de las investigaciones en casos menores de violaciones a los derechos humanos, los parlamentarios de la Concertación están crecientemente inquietos: sienten que cada vez más la decisión final se liga al Presidente Aylwin, que ha mostrado escaso entusiasmo.

Cumplido, que asiste a la extraña evolución de las negociaciones en Valparaíso, se siente también desconcertado. Llama al Presidente y le informa sobre la inminencia del acuerdo, a pesar de sus gestiones.

—Pancho —dice el Presidente—, acéptelo, pero sólo si hay unanimidad.

El 6 emerge un documento que se parece mucho a eso. Lo firman los diputados de RN Alberto Espina, Federico Mekis y Teodoro Ribera, los de la UDI Andrés Chadwick y Víctor Pérez, los del PS-PPD Víctor Manuel Rebolledo, Jorge Molina y Jorge Schaulsohn y los del PDC Hernán Rojo, Hernán Bosselin y Gutenberg Martínez.

Para asombro de todos, también firma el presidente de la Comisión, Andrés Aylwin. Cuando Cumplido le exige explicaciones por este viraje, el diputado argumenta que no quiere continuar en la posición de quien obstaculiza los acuerdos; más tarde agregará que sólo firmó porque estaba seguro de que el acuerdo fracasaría en el gobierno.

Esa noche, Cumplido regresa molesto a Santiago. Siente perdida la batalla. Tal como ha quedado, el acuerdo marco no lo ayudará: mientras las violaciones a los derechos humanos permanecerán impunes, unos 130 presos políticos seguirán encarcelados, dada la excepción que se aplicará a los delitos con causa de muerte.

La razón es técnica: en el derecho penal chileno, los delitos cometidos por particulares tienen sanciones más altas que los ejecutados por funcionarios públicos. El acuerdo marco ofrece rebajar todas las penas en dos grados. Para los presos por subversión, esto significará pasar de presidio perpetuo a prisión por algunos años. Pero para los agentes del Estado, que tienen penas por lo general inferiores a cinco años, significará la libertad automática o, en el caso más drástico, 61 días de condena.

Entre tanto, la conmoción por los hallazgos de Pisagua crece de hora en hora. La cifra de cuerpos se eleva a 16. La salinidad del mar y del desierto los ha conservado en una escalofriante integridad: los esqueletos mantienen parte de sus ropas, las amarras, las vendas y, sobre todo, las expresiones de dolor. Las perforaciones dan feroz testimonio de sus tragedias.

A medida que las identificaciones avanzan, se sabe que se trata de ejecutados al margen de todo proceso[5].

Las fotografías que publica la prensa esparcen el horror. El senador de RN Sergio Diez, ex embajador del gobierno militar ante la ONU, declara que nadie pensó en la magnitud de estos atropellos y que los hechos de Pisagua carecen de justificación. Dos miembros de la Comisión Rettig, Gonzalo Vial y Laura Novoa, viajan al norte para constatar las duras revelaciones.

El 8 de junio, en una nueva reunión con ministros y parlamentarios, el Presidente expone su oposición al acuerdo marco. Le parece prematuro. Pero reitera que si los partidos de la Concertación están de acuerdo, lo aceptará. Clodomiro Almeyda, que representa al PS, pide 48 horas para que su partido resuelva.

Ese fin de semana, los socialistas invitan a Andrés Aylwin para conocer su postura. El diputado nota que los sentimientos del partido están divididos. Enfatiza en las razones de su rechazo.

El lunes 11, el PS comunica al Presidente su opinión adversa. Esa tarde, en una última sesión, la Concertación y el gobierno declaran suspendido el acuerdo.

En ese lapso el país entra en una vorágine. Al promediar el año, del suelo de muchos lugares de Chile brotan cadáveres ilegalmente enterrados.

Los uniformados se inquietan: les parece que los hallazgos no pueden ser fortuitos, que tras ellos hay un plan destinado a pulverizar la imagen del gobierno militar. Así se lo plantea el mayor general Ballerino al ministro Correa. Pero éste responde que el gobierno no tiene evidencia sobre plan alguno: mucha de la información está llegando a través de la Iglesia Católica.

En junio, el ministro del Interior preside el funeral oficial de los 14 cadáveres identificados en Pisagua.

Pero al mes siguiente, la Iglesia de Valdivia revela la inhumación ilegal de 18 campesinos fusilados en Futrono y Chihuío. En Calama aparece una fosa clandestina con restos de cadáveres dinamitados. En el Cementerio de Copiapó, cuatro de trece cuerpos extraídos de una fosa anónima, varios de ellos quemados, son identificados como fusilados de 1973. Más operaciones de búsqueda se desarrollan en las riberas del Mapocho y en tres lugares de Concepción. En agosto se añaden tres cuerpos maniatados en el cerro Mutrún, tres en el cementerio La Playa de Constitución, seis en Calama y otros seis, dinamitados, en un pique de Tocopilla.

La situación más dramática se presenta poco después, cuando el juez Germán Hermosilla, que investiga la ejecución de campesinos de San Bernardo en Paine y Cuesta de Chada recibe la información de que algunos cuerpos podrían estar enterrados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, un misterioso sector donde sólo hay cruces marcadas "N.N.".

Las primeras excavaciones generan una nueva conmoción: en numerosas tumbas, los cuerpos han sido apilados unos sobre otros. Las largas investigaciones vendrán a culminar recién un año más tarde, en septiembre de 1991, con un total de 125 cadáveres.

El balance lo da a conocer el ministro Krauss en La Moneda, el 4 de agosto, en un informe titulado *Nadie debe temer a la verdad:* durante el régimen militar hubo mil fusilados y unos 800 desaparecidos, y las fosas clandestinas pueden sumar unas 300.

Los amargos datos no hacen más que renovar en los grupos de derechos humanos el deseo de seguir adelante con las investigaciones. Todavía parece posible hallar para cada desaparecido un cuerpo, para cada muerto un responsable y para cada culpable una sanción.

Cumplido divisa lo insalvable de las contradicciones. Durante la negociación de reformas a la Constitución, en 1989, él y Viera-Gallo han insistido en dar rango constitucional a los tratados internacionales a través del artículo 5°. Así se podrían aplicar, por ejemplo, las normas sobre la guerra de la Convención de Ginebra. Pero los familiares de las víctimas no aceptan que se diga que en el país hubo una guerra; el hallazgo de Pisagua confirma esa resistencia. Al otro lado, los militares insisten en hablar de la "guerra interna" de 1973; pero tampoco aceptan que se intente aplicar las normas internacionales sobre la guerra. La Corte Suprema rechaza la interpretación amplia del artículo 5° de la Constitución, se resiste a aceptar el imperio de los tratados internacionales por sobre la ley interna y respalda la tesis militar. Poco más tarde, cuando deba suscribir el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de San José, el gobierno aceptará interponer una reserva: el imperio de la Corte del Pacto sólo será válida para hechos posteriores al 11 de marzo de 1990.

Desahuciado el acuerdo marco, las leyes Cumplido siguen una ardua tramitación durante todo el segundo semestre de 1990. En agosto las despacha la Cámara. Dos de ellas —antiterrorista y derechos de las personas— son aprobadas en el Senado en noviembre.

Sin embargo, el ministro pierde la tercera —eliminación total de la pena de muerte—, por

un voto: 19 contra 18. La pena capital se mantiene para 37 delitos incluidos en el Código Militar, la ley de seguridad interior, el Código Penal y la ley antiterrorista.

La estrecha derrota indigna al ministro. Tras unos esfuerzos extenuantes de persuasión, había logrado quebrar a la oposición consiguiendo los votos de algunos senadores designados y de RN. Hasta la noche del 6 de noviembre, estaba seguro de que ganaría por un voto. Pero he aquí que ese voto se ha invertido.

El ministro lo identifica: es el senador Ricardo Martin, de quien creía tener un compromiso favorable. Y Martin ha votado por la negativa. El ministro no se contiene y formula unas agrias declaraciones contra quienes no cumplen con la palabra empeñada[6].

Pese a todo, debe seguir. El cuadro optimista que se había trazado a comienzos del gobierno se ha ensombrecido al acercarse el fin de 1990. Las leyes sobrepasan los seis meses de tramitación, los criterios de los tribunales apenas han cambiado, el grueso de los presos políticos continúa tras las rejas, las protestas de los grupos de derechos humanos se extienden, la agitación se traduce en tomas de penales y una nueva huelga de hambre parece inminente[7].

Cuando se acerca la revisión del último de sus proyectos en el Senado, el ministro decide adoptar una doble estrategia.

Lo primero es apaciguar a los presos políticos. La tarea queda en manos de tres subsecretarios: Martita Wörner, Belisario Velasco y Ricardo Solari. Wörner y Velasco inician reuniones con los familiares de los presos para explicar el marco jurídico en que debe moverse el gobierno. Anteponen, cada vez que pueden, su autoridad moral: ella fue durante muchos años una defensora de los derechos humanos en el Arzobispado de Concepción; él ayudó a salir del país a decenas de militantes en peligro.

Muy pronto los encuentros con los familiares se muestran insuficientes y la subsecretaria propone ampliarlos con los propios presos, en los presidios. Enfrenta siempre un clima hostil. Varias veces permanece en la vetusta Cárcel Pública hasta la madrugada.

Repite, con incansable elocuencia: el gobierno ha demostrado que quiere liberar a los presos políticos, cumplir con su programa y dejar atrás las arbitrariedades. Pero debe proceder dentro de las reglas que aceptó para restaurar la democracia.

Pero ¿por qué no puede ordenar la liberación de todos? Porque el estado de derecho supone la separación de poderes. Podría indultar. Y lo hizo en cuanto pudo. Pero para ello requiere de sentencia ejecutoriada.

¿Y por qué no apura esas sentencias? Primero, porque ello depende de los tribunales. Podría intentarlo, pero vendría el segundo problema: las sentencias saldrían con arreglo a las leyes vigentes, que perjudican a los presos. Lo que desea es sacar pronto las nuevas leyes.

Los presos no creen nada. Algunos tienen la explicación ideológica: el Estado opresor no ha cambiado en nada. Pero otros, al menos, dudan. En ese boquete se alojan las esperanzas del gobierno.

La segunda parte de la estrategia del ministro consiste en acorralar a la derecha.

Sabe que su capacidad de persuasión se ha agotado y que la última de sus leyes, la rebaja de penas de la ley de control de armas, tendrá una férrea oposición en el Senado. Le queda un solo cartucho: la opinión pública.

Por eso, en la primera sesión donde su proyecto se discute, Cumplido describe con enervante lentitud tres casos de encarcelados con declaraciones obtenidas bajo tortura. Las imágenes de los tormentos se esparcen por el hemiciclo como largos escalofríos.

Pero Cumplido siente que esos razonamientos no bastan. Entonces agrega una amenaza: durante el debate particular, estará preparado para detallar, caso por caso, con informes clínicos, todos los vejámenes.

En la oposición cunde la alarma. El ministro Cumplido está llevando las cosas demasiado lejos. Se propone una explotación sensacionalista de hechos que se saben indefendibles. Es una maniobra, pero peligrosa. Hay que pararlo.

La fórmula es ofrecida al Presidente Aylwin por su propio autor, el senador Jarpa. Su partido estaría dispuesto a aprobar una reforma al artículo 9° de la Constitución, para entregarle en forma transitoria la facultad de indultar a todos los presos políticos.

La propuesta es inesperada para el gobierno y tiene el aspecto de un presente griego. Sus conclusiones son concordantes: la oposición quiere sacarse de encima la responsabilidad de liberar a los presos; si alguno vuelve a cometer actos de violencia, podrá culpar al gobierno; y si esos actos son de extrema gravedad, las Fuerzas Armadas también lo harán responsable.

En el gabinete se dividen las opiniones. Algunos ministros se muestran enérgicamente contrarios: hay que denunciar a la derecha, asediarla moralmente.

Pero Cumplido saca sus propias cuentas. Con la aprobación de todas sus leyes, incluida la última, no logrará la liberación de todos los presos. Peor aún, en su propio equipo discrepan las evaluaciones. Algunos dicen que quedarían unos 30. Pero otros, que serían más de 100.

Con el indulto no quedaría ninguno. El peor de los riesgos es que alguno reincida; pero si se cree en que se trata de presos de conciencia, se puede tomar ese riesgo[8]. Con esa convicción llega a la conversación decisiva con el Presidente.

—Usted es el que va a asumir la responsabilidad política —dice—. Yo no soy más que su colaborador. Pero déjeme agregar algo: los dos estamos políticamente terminales: Presidente usted, ministro yo.

—Tiene razón —dice Aylwin—. Veámoslo caso por caso.

El gobierno acepta la propuesta de Jarpa. La facultad extraordinaria del indulto se aprueba en el Senado en febrero de 1991. Sólo la rechaza en forma abierta, y con singular tenacidad, el senador Jaime Guzmán. En la sesión del Congreso Pleno, el 23 de marzo, Guzmán empeña sus 15 minutos en hablar contra el indulto. Interpreta en plenitud la posición del Ejército, que se opone firmemente a la idea.

(Esa posición persistirá. Meses después, el sucesor del senador Guzmán, Miguel Otero, enfrentará las ácidas críticas militares en una reunión con los generales Augusto Pinochet y Jorge Ballerino.

—Ustedes —le reprochará Ballerino— han dejado que salgan impunes todos los que cometieron delitos de sangre, sin obtener nada a cambio.

—No, general —dirá Otero—, no va a ser así. ¿Usted cree que el Presidente va a engañar a un senador de la República? En ese caso, yo haría cuestión de mi cargo.)

Pero la reforma se aprueba.

El Ejecutivo inicia la presión para apurar procesos y despacha los indultos. No logra cumplir su promesa de liberar a los presos antes de un año, y hasta soporta una nueva huelga de hambre de 22 días en junio de 1991. Pero cuando concluya sus cuatro años alcanzará la postergada meta: no estará en la cárcel ninguno de los presos políticos que tenía al momento de asumir.

Notas

1. Aprobaron los ministros Enrique Correa, Marcos Aburto, Enrique Zurita, Lionel Béraud, Emilio Ulloa, Osvaldo Faúndez y Hernán Alvarez. Votaron en contra Hernán Cereceda, Servando Jordán, Roberto Dávila, Arnaldo Toro y Marco Aurelio Perales. Luis Maldonado, presidente de la Corte Suprema, fue inhabilitado por sus pares. Rafael Retamal y Sergio Mery no asistieron.

2. El obispo Prado fue titular de la diócesis de Iquique en la primera mitad de los 80, cuando el gobierno militar relegó a numerosas personas a Pisagua. En esa época ya era *vox populi* entre los prisioneros que en las cercanías del cementerio había numerosas inhumaciones irregulares.

3. El primero se produce en mayo, cuando unos obreros que trabajan en un camino en Colina hallan osamentas humanas, que a los pocos días serán identificadas como pertenecientes a Eduardo Canteros y Vicente Atencio, dirigentes comunistas y detenidos desaparecidos desde 1976.

4. El 7 de septiembre de 1986, un atentado montado contra Pinochet por el FPMR en el Cajón del Maipo culminó con cinco miembros de la escolta presidencial muertos, más numerosos heridos. Detalles sobre sus autores en: Verdugo, Patricia; y Hertz, Carmen: *Operación Siglo XX*. Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1990.

5. Ninguno de los cuerpos había sido entregado a sus familiares, pese a que en la mayoría de los casos se había informado de su ejecución. Sin embargo, en a lo menos seis casos las familias habían sido engañadas y las víctimas figuraban hasta 1990 como detenidos-desaparecidos.

6. Ver Capítulo 9.

7. Un análisis jurídico de las leyes Cumplido puede hallarse en: Americas Watch: *Human rights and the "Politics of Agreements". Chile under President Aylwin's first year*. Human Rights Watch, Washington-New York, 1991.

8. El único indultado reincidente fue José Miguel Sánchez Jiménez, detenido en la madrugada del 27 de marzo de 1991 con dos fusiles, tras un asalto a una tienda de abarrotes en La Granja. Ver: *Detenido con armas militante del FRMR que había salido indultado hace un mes*. Diario *La Epoca*, 28 de marzo de 1991.

5

Septiembre bravo

El "mes del Ejército" debuta en 1990 con todas las efemérides que dividen al país. La primera confrontación de la jefatura del Ejército con el Poder Ejecutivo tiene lugar en ese mes y se inicia a propósito de un general que no habla ni mueve los labios.

El 1° de septiembre de 1990 aparecen en dos diarios nacionales[1] sendos avisos de página completa con imágenes heroicas y un texto inflamado: "Gracias por la democracia... Lo sabrán nuestros hijos también". Ese día debuta en radio un *jingle* que rinde tributo a los valores militares.

Es la partida del "mes del Ejército", un concepto que el Comité Asesor ha inventado sobre la base de dos fechas simbólicas: el 20 de agosto, natalicio de Bernardo O'Higgins, y el 20 de septiembre, fin de las Fiestas Patrias. Se trata, simultáneamente, de enaltecer la imagen de las Fuerzas Armadas y la obra del régimen militar, y de presentar al Ejército en una actitud de concordia nacional. El Comité Asesor ha llegado a la convicción de que el teatro central son los medios de comunicación, o el frente "comunicacional", como lo designan, con esa manía de adjetivar extensamente los sustantivos. Es la batalla de las connotaciones: la semiología ha entrado a la estrategia.

Pero además todo esto debe hacerse en el mes que parte el alma de los chilenos: aquel en que se recuerdan la asunción de los presidentes en la democracia interrumpida, el golpe militar de 1973, la Independencia de la República y las glorias del Ejército. La primavera siempre tuvo un raro tono de sangre en la historia nacional.

El Comité Asesor diseña tan largamente sus operaciones, que en los tensos meses previos las hace resistir a todas las desventuras. Soporta, hasta donde puede, el anuncio oficial de que habrá un funeral de honor para sacar a Salvador Allende de su improvisada tumba de Viña del Mar[2] y trasladarlo a un imponente mausoleo de Santiago. Tras saber que ni la familia ni el Partido Socialista ni el gobierno quieren que se le rinda los honores militares que corresponderían a su investidura, hay un respiro de alivio. Sólo el senador institucional Santiago Sinclair y el general (R) Alejandro Medina Lois emergen para decir, uno, que se plantea "un cuadro grotescamente desequilibrado de la realidad", y el otro, que "la actitud de Aylwin es hipócrita"[3].

A mediados de agosto, el Comité Asesor recibe la información de que el gobierno se propone recordar el natalicio de O'Higgins subrayando su gesto de abdicar al poder. El general Pinochet no debe asistir.

El 20, en Chillán Viejo, Aylwin hace su discurso tal como se ha previsto. Tres días más tarde, en el aniversario de su asunción como comandante en jefe, Pinochet realiza una ancha referencia

a la historia, afirmando que "sería poco inteligente" reeditar las experiencias de los grandes hombres de la nación.

Mensaje contra mensaje.

En los últimos días de agosto, el ministro de Defensa Patricio Rojas recibe de los militares una propuesta para culminar el "mes del Ejército" con un cóctel ofrecido por el comandante en jefe. El ágape final de Fiestas Patrias era tradicionalmente ofrecido por el Presidente, pero esta vez el gobierno se ha demorado y el Comité Asesor ha visto una nueva oportunidad para lograr un golpe de efecto.

El ministro acepta la propuesta con una sola salvedad: que el cóctel no se haga en el Club Militar de Lo Curro, la fastuosa mansión presidencial que Pinochet se hizo construir pero nunca pudo ocupar debido a la alharaca publicitaria y que fue convertida en club de oficiales. Pero el general no está dispuesto a ceder: Lo Curro es el Club Militar y allí se hará.

Irritado, el ministro concede una entrevista en la que reitera que el gobierno estimaría positivo que Pinochet abandonara el mando, sugiere una "racionalización" del presupuesto de las Fuerzas Armadas, objeta la tenencia de la mansión de Lo Curro en manos del Ejército y vuelve a sus críticas al Comité Asesor[4].

El lunes 3, los generales de Santiago son convocados a una reunión en el edificio de las Fuerzas Armadas donde se analizan, durante tres horas y con inflamados ribetes de ira, las declaraciones de Rojas.

Al concluir, el teniente general Jorge Lúcar invita al subsecretario Marcos Sánchez y, en presencia del mayor general Ballerino, le transmite las opiniones de los generales, ahorrándose los epítetos y los tonos negros. Sánchez soporta con firmeza el momento, pero comprende que las cosas se están poniendo duras.

Sin embargo, el objetivo central del Comité Asesor continúa protegido con la cita privada. No hay escándalo, no hay polémica.

El 4 de septiembre se realiza el funeral oficial de Salvador Allende, uno de los momentos más temidos. Lo encabeza el Presidente Aylwin y se rodea de la formalidad del Estado, salvo los honores militares.

Los corazones socialistas están divididos sobre esta ausencia que mantiene vivo el rencor de 1973. "Esperamos 17 años para hacer los funerales", dice el presidente del PS, Jorge Arrate. "Esperaremos 17 más y 17 más y tantos cuantos sean necesarios para que las Fuerzas Armadas le rindan honores"[5]. Han puesto por sobre todo el deseo de que el homenaje oficial al Presidente muerto no sea empañado por incidente alguno: el ansia de la legitimidad late bajo esas concesiones[6].

El funeral es un acto de nostalgia desgarrador. La viuda de Allende, Hortensia Bussi, deposita claveles en las ventanas de La Moneda donde antes estuvo la puerta de Morandé 80, la misma por donde salieron, desarmados y manos en la nuca, los últimos defensores del palacio en 1973. El homenaje ante la puerta ciega, ¿no sugiere la última rendición ante el pasado clausurado?

Los militares no lo notan —muchos oficiales están ofuscados por los homenajes contra el hombre al que culpan de las violencias de los 70—, pero conducir los restos de Allende hasta el mausoleo imponente del Cementerio General significa también dar morada al cadáver insepulto más insigne de los últimos 20 años, el fantasma que ha rondado, desde el día de su muerte, por entre las filas de las Fuerzas Armadas.

El funeral transcurre en calma. El "mes del Ejército" puede seguir. ¿Cómo se podría pensar que el propio general Pinochet lo va a hundir, cómo se podría creer que esos ya peligrosos almuerzos del Rotary Club en el Club de la Unión, donde tanto le avivan la cueca, serán otra vez el manantial de los problemas?

Si lo piensa dos veces, Ballerino desespera. Desespera todo Bandera 52.

Pero es así. Los eufóricos hombres del Rotary, que se sienten almorzando en intimidad con la historia, exigen que el general hable.

Y el general, aclamado, es un general aclamado: un hombre que no se teme a sí mismo. Piensa en esos ataques personales previos —lo quieren denigrar—, piensa en los ataques contra la institución —quieren doblegar al Ejército invicto—, piensa en los ataques estructurales contra la profesión —quieren quebrar la moral interna—, piensa en los modelos y en lo que le parece ser el origen de todo. Y se deja caer:

—Y lo que más me preocupa, señores, es que hay discípulos del general alemán Baudissin, el traidor más grande que ha tenido Alemania. Este general fue quien destruyó al Ejército alemán y este Ejército invicto que en el primer tiempo de la guerra de adelantos técnicos, hoy, después de los consejos del general traidor, tenemos un Ejército de marihuaneros, o sea, drogadictos, melenudos, homosexuales y sindicalistas...

A pesar de que el mayor general Ballerino ha insistido ante Relaciones Públicas del Ejército que en el almuerzo del Rotary no debe admitirse a periodistas, la reunión es filmada, grabada y transcrita. ¿Quién iba a pensar?

A la salida, los reporteros interrogan a Pinochet sobre la casa de Lo Curro; el ministro Rojas ha reiterado que debe ser devuelta al gobierno.

—Que nos vayan a sacar —responde Pinochet, todavía embalado en el clima del almuerzo.

Cuando regresa al edificio de Zenteno, ya intuye lo que viene:

—Parece que dejé la crema —le comenta al secretario general del Ejército. Los oficiales se reúnen a ver el video del almuerzo.

—Sí, mi general. La dejó.

Pese a los dramáticos esfuerzos del Comité Asesor por frenar la difusión de las palabras del general, el escándalo estalla esa misma tarde. Al día siguiente, en Bonn, el jefe del estado mayor de la Bundeswehr escribe ferozmente que "el roble no se mueve cuando un cerdo se refriega en él"[7], un portavoz de Bonn califica de "obscenas" las expresiones de Pinochet y el Ministerio de Relaciones Exteriores cita al embajador Carlos Huneeus para presentar su protesta[8].

El Comité Asesor redacta un comunicado que precisa el aprecio chileno hacia el Ejército alemán y prepara una carta privada de Pinochet para el inspector general Henning von Ondarza en la que descarta toda "intencionalidad de ofensa". En la noche, mientras lanza el primer tomo de *Camino recorrido*, sus memorias, el general dice a la prensa que no pretendió agraviar.

Pero el clima está muy cargado en este septiembre. En Valparaíso, los jefes de bancada de la Concertación piden una sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar lo dicho por Pinochet.

A partir de este momento, el peligro de una acusación constitucional crispa los nervios militares. Para presentarla, bastan 10 diputados; para que prospere, necesita la aprobación de la Cámara y del Senado. No hay duda de que en el Senado fracasará. Pero mientras se discuta, el impugnado deberá suspender el ejercicio de su cargo. Es un golpe que el Ejército no tolerará.

El fin de semana que se interpone obliga a todos los actores a un frenético intercambio de mensajes.

El lunes 10, los generales con mando de tropas son convocados para una reunión en Zenteno, donde se explican los peligrosos alcances del "asedio político" contra el comandante en jefe; si la acusación se materializa, los señores generales recibirán instrucciones de inmediato. Simultáneamente, el mayor general Ballerino se reúne con dirigentes de Renovación Nacional y la UDI: la oposición debe frenar el alarmante paso del oficialismo.

El martes 11 —aniversario del golpe y feriado nacional—, Pinochet recibe en su casa el apoyo irrestricto de sus generales por boca del jefe de la guarnición de Santiago, el brigadier

general Carlos Parera, y asiste luego a la misa que en la Escuela Militar oficia el capellán Florencio Infante.

En el Cementerio General, los familiares de los detenidos desaparecidos se enfrentan a una policía igualmente enardecida: hay dos civiles heridos a bala, nueve carabineros lesionados, 20 detenidos[9]. El Presidente encuentra apropiada la ocasión para visitar la Antártica, acompañado por el ministro de Defensa y el general Fernando Matthei, jefe de la FACh.

Pero en este elusivo día, en secreto, el gobierno, la Concertación y RN trabajan a todo vapor.

El Comité Asesor ya tiene un respiro: el gobierno ha conseguido que la Concertación deseche la acusación constitucional. Puesto en esto, debe lograr un segundo paso: que no exista un acuerdo de la Cámara para reprochar al general; los militares rememoran el acuerdo similar que en 1973 dio legitimidad a la sublevación contra Allende, con el error histórico de la izquierda de no dejar constancia de su desaprobación.

Ese martes surge la solución: dos acuerdos, uno de la Concertación y otro de la oposición. Andrés Allamand, recién asumido como presidente de RN, y Francisco Javier Cuadra redactan hasta la medianoche el proyecto que al día siguiente presentará el partido. Alberto Espina consigue un raro pacto con el jefe de la bancada de la DC: la Concertación aprobará su proyecto en virtud de su mayoría en la Cámara; pero RN también aprobará el suyo, gracias a que los DC se retirarán de la sala. Habrá dos acuerdos: en cierto modo, se anularán entre sí para la historia.

El miércoles 12, el debate en el Parlamento demora inútiles tres horas. La Concertación reprende al general; RN pide que "todas las autoridades" se pongan a la altura de sus investiduras. La emergencia militar cesa.

Unos días después, el ministro Correa dará por superado el incidente, rebajando su cuantía a la de una improvisación "después de un almuerzo muy... alegre". Cuando lo vuelva a encontrar, Pinochet se quejará con sorna:

—Oiga, me dejó como curado, cómo se le ocurre...

En medio del "asedio", el lunes 10 de septiembre, Pinochet decide enfrentar las versiones oficiales acerca del Club Militar de Lo Curro, mediante una carta privada a Aylwin en la que, en cuatro puntos, le ofrece la devolución de la mansión si ella va a ser destinada a su fin original, el de casa de los presidentes. En el cuarto punto dice que, de no ser así, "no escapa a la consideración del Ejército que se trataría de una situación agraviante".

Sin embargo, se trata de una reacción más preventiva que defensiva. El Ejército ya sabe que el Ejecutivo ha descartado la conversión de la casa en el recinto simbólico que algunos han propuesto: ni "casa de la dictadura", ni "museo de la tortura", ni "albergue de las víctimas".

El ministro de Bienes Nacionales, el socialista Luis Alvarado, ha dado estas garantías a los militares después de inspeccionar las refacciones hechas a la casa. El ministro ha quedado impresionado con las expresiones de los oficiales que le han hecho un *tour*:

—Estamos encariñados, es un Club tan bonito.

Y en su informe privado al Presidente ha hecho ver que transformarlo costaría unos tres millones de dólares, cifra que se sumaría a los ya onerosos 14 millones de dólares invertidos en la construcción.

Pero los desafíos públicos del general han sido tan irritantes, que en el gobierno se considera esencial frenarlos.

La casa ha sido transferida al Ejército mediante un precipitado decreto supremo, a fines del gobierno militar; otro decreto, que derogue el anterior, será suficiente. El 14 de septiembre, el ministro Alvarado recibe la instrucción del propio Presidente:

—Lucho, derogue. Lo Curro vuelve a manos del Ejecutivo.

Simultáneamente, Correa anuncia que la Presidencia decidirá sobre el destino del inmueble "sin presión ni prisa". El mismo día, Viera-Gallo declara inadmisible la propuesta del diputado DC Hosain Sabag de traspasar la casa a la Fundación de Ayuda a la Comunidad que preside la esposa del Presidente, Leonor Oyarzún. Dos pasos adelante, uno atrás.

La Parada Militar del 19 de septiembre es objeto de tempranas negociaciones entre el equipo político del gobierno y el Comité Asesor. Ambos temen a las manifestaciones y se dicen dispuestos a evitarlas. El silencio, opinan ministros y generales, sería el mejor de los ambientes.

Pero el 15, durante el desfile preparatorio, el ministro de Defensa es recibido con una violenta rechifla de los asistentes. El gobierno enciende las luces de alerta. ¿Qué se está preparando?

El responsable de la Parada es el brigadier general Parera, jefe de la Guarnición de Santiago, ex jefe del departamento exterior de la DINA, paracaidista y comando, duro de profesión.

El gobierno conoce su currículo, pero además tiene sospechas de su presente: es el general que no ha asistido nunca a las reuniones de los jueves del Consejo de Seguridad Interior, aparentemente en rechazo a la presencia del general (R) Horacio Toro. Algunos funcionarios han prestado especial atención al bravo discurso del brigadier general ante su comandante en jefe en la pasada mañana del 11.

Como es el responsable de las invitaciones a las tribunas, el ministro Rojas lo cita a su oficina en la mañana del 17. Parera se permite un inquietante retraso, aunque con la excusa de que también ha sido llamado por la Comandancia en Jefe.

Cuando el subsecretario Marcos Sánchez manifiesta que los actos de la Parada son responsabilidad de Parera, el Ejército emite una declaración en la que se extraña de que se vea intencionalidad política, puesto que las entradas son entregadas a las familias de los oficiales de la guarnición. Sánchez contempla esa noche en su casa, en la televisión, la inesperada declaración en su contra.

El clima se carga de pólvora. El 18, a la salida del Te Deum en la Catedral el Presidente y los ministros son abucheados por eficaces grupos apostados en la Plaza de Armas. El ministro PS-PPD Ricardo Lagos denuncia a un cadete que desde la formación parece insultarlo. El oficialismo aprecia que hasta el Himno Nacional es interpretado con cierto desafinamiento por la banda militar.

En la mañana del 19, el gobierno ya conoce sus riesgos. Su director de Organizaciones Civiles, Enzo Pistacchio, ha recibido apenas 800 de las 5.000 entradas para las tribunas.

Por eso no hay mucha extrañeza, aunque sí una irritación incontenible, cuando las pifias reciben el ingreso del Presidente y del ministro de Defensa a la elipse del Parque O'Higgins. Hasta la señora del Presidente, Leonor Oyarzún, se lleva su rechifla individual[10].

Instalados en el medio de un estrado hostil, pero forzados a preservar la dignidad del Estado, los hombres del gobierno soportan a pie firme la denigración de su primera Parada: Rojas ya piensa en la cabeza del brigadier general Parera.

Entonces viene el momento en que el jefe de las fuerzas debe pedir permiso al Presidente para iniciar la Parada.

Parera llega en tenida de desfile, enhiesto sobre el jeep, hasta el frente de la tribuna oficial. Se baja y avanza. Se cuadra. No se sabe a quién mira. Aylwin queda con la impresión de que no es a él. Más tarde, en los corrillos militares se comentará que el hombre no despegó la vista de su general Pinochet.

En cualquier caso, no abre la boca. No mueve los labios. No pide permiso.

Se vuelve e inicia la Parada. Su destino queda sellado.

En las tribunas los músculos se tensan.

Cuando el acto concluye, el general Pinochet se despide de todas las autoridades y se dispone a salir. Sorpresivamente lo detiene el director de Protocolo, Carlos Klammer:

—General, usted sale después del Presidente, el ministro de Defensa y el presidente del Senado.

—No me venga a enseñar usted de protocolo —replica Pinochet, sorprendido y molesto.

—El director de Protocolo soy yo —dice Klammer, con impasible temeridad.

Esa tarde, Pinochet extrema los gestos. En plena Alameda, frente al edificio de las Fuerzas Armadas y frente a la Llama de la Libertad, contempla desde un estrado el paso de las tropas que regresan del desfile. Las aclamaciones lo circundan.

Al frente, en La Moneda, los ministros divisan el acto como una última provocación. El Presidente toma té con el gabinete y sus esposas, una costumbre que se repetirá en los años siguientes para esta misma fecha.

Hay una decisión pendiente: en la noche se realiza el cóctel del día del Ejército en Lo Curro. Aunque ya comprometió su asistencia, ¿debe ir el Presidente después de lo que ha pasado? Las voces ministeriales se alzan como un coro: no, por ningún motivo.

Esa noche Pinochet debe saludar, como representante del Presidente, al estoico ministro de Defensa, que ya se sabe el hombre menos querido de la fiesta.

En la mañana del 20, Aylwin recibe a Pinochet en La Moneda, cumpliendo con la citación extendida tras las declaraciones sobre el Ejército alemán. El Presidente suma a los reproches por la ofensa a un país amigo las desagradables manifestaciones ocurridas en la Parada. El país no aprecia que el Ejército haya regresado a sus funciones institucionales; más bien ve que continúa actuando en política, fuera de sus atribuciones. Esta no es una opinión personal, sino una idea compartida por muchos sectores, cuya inquietud traduce el deseo nacional de normalización democrática. Así como van las cosas, dice, no se contribuye a la reconciliación.

El general tiene su propio juicio. Lo de la Parada no fue en ningún caso deliberado y en lo del Ejército alemán ya ha presentado sus excusas. En cambio, el Ejército se siente agredido por el uso publicitario de diversos incidentes: el caso de La Cutufa, un episodio de estafa a los propios oficiales que la institución está investigando; las acusaciones contra el mayor general Salas Wenzel, que como ex jefe de la CNI aparece vendiendo los terrenos del antiguo centro de detención de Villa Grimaldi a una sociedad integrada, entre otros, por su esposa y su hermana; la agitación del caso Letelier, tras la detención en EE.UU. del dirigente cubano y anticastrista Dionisio Suárez; y muchas cosas menores, como el episodio del cadete que habría insultado a Lagos, que "entre paréntesis, don Patricio, es nieto de un general que es muy amigo suyo, don Ervaldo Rodríguez".

La cita no es completamente ingrata, pero no produce lo que ansiosamente buscan los militares: un "pacto" que estabilice la posición del comandante en jefe en un año que ya ha sido muy duro[11].

El Presidente tampoco quiere extremar las cosas. En los días siguientes ha de iniciar una gira por Ecuador y Estados Unidos, que culminará con un discurso (el primero de un Jefe de Estado chileno desde Allende) ante la asamblea general de las Naciones Unidas y la suscripción de un compromiso mundial en defensa de la infancia.

Los últimos ecos de septiembre se oyen hasta dos meses después. El 10 de octubre, mientras Aylwin viaja a Caracas para la asunción del mando de Carlos Andrés Pérez, Pinochet inicia sigilosamente, por la carretera a Mendoza, su primer viaje al extranjero desde la frustrada gira a Filipinas, diez años atrás. En Mendoza, el general conversa con parroquianos de un bar, baila con una artista y hasta es aclamado por unos argentinos ofuscados con sus gobiernos. Pero su destino final es Buenos Aires, donde se reúne con el jefe del Ejército argentino, da una conferencia de prensa y pasea por las calles porteñas.

El viaje es crucial: constituye la primera prueba de que es aceptado en el mundo, de que ya no vive en el ostracismo interior ni en esa forma de vergüenza en casa que tanto le enrostró su antigua oposición.

Al regresar, el 15, visita nuevamente a Aylwin, esta vez en su casa. La reunión es notablemente cordial, pero el tono no estimula al general.

Lo que espera es que el Presidente promueva un acuerdo general —otra vez el "pacto"— que vaya desde la casa de Lo Curro hasta las reformas a la Constitución, pasando por el presupuesto militar, la tramitación de decretos, la discusión de reformas a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y, en especial, la solución final a los casos de derechos humanos.

Pero Aylwin da un raro giro al entusiasmo de Pinochet cuando responde que estos temas deben ser estudiados con el ministro de Defensa.

Al día siguiente, cuando visita a Rojas en su oficina, el general parte molestándose porque en la entrada haya periodistas, cuando se suponía que el encuentro era reservado. El ministro se está pasando de rosca, quiere que lo legitimen a toda costa.

En el intertanto, el caso de La Cutufa se extiende como una peste por las filas. El capitán Gastón Ramos, organizador del sistema, revela nombres y más nombres. Pinochet ordena entonces que el inspector general, mayor general Patricio Gualda, inicie una investigación. Gualda, apesadumbrado, se inhabilita:

—Yo también puse cheques.

La orden pasa al mayor general Luis Patricio Serre, que la dirige de modo fulminante. En la indagatoria caen los mayores generales Gualda y Salas Wenzel y los brigadieres generales Gustavo Abarzúa, director de Inteligencia, y Patricio Varela, comandante de la Sexta División. Tras ellos se precipitan las carreras de 16 brigadieres y oficiales: en pocos días Pinochet ve disolverse parte de sus mejores cuadros de inteligencia, nudo en torno al cual fue armada la financiera.

La situación se vuelve más dramática porque ya estaba preparado el cuadro de ascensos de los oficiales superiores. Cuando cite a los nuevos generales, el comandante en jefe los interrogará secamente antes de confirmarlos en el nuevo rango:

—¿Tiene cheques en La Cutufa, señor?

—No, mi general.

—Adelante.

El 26, cuando vuelve a ver al Presidente, le explica lo doloroso que ha sido para la institución realizar esta depuración. Aylwin lo felicita parcamente.

El general viene a entregarle la nómina de ascensos que examinará la Junta Calificadora en cuatro días más, y que ha debido ser trabajosamente rearmada después de la catástrofe de La Cutufa. Ellas incluyen el retiro de tres mayores generales y tres brigadieres generales[12] y el ascenso a mayores generales de seis brigadieres generales[13]. Aylwin declara que estudiará las propuestas con el ministro de Defensa.

Los mandos militares se sienten relativamente tranquilos; por diversos canales han recibido indicios de que el gobierno no pondrá problemas en este delicado proceso. El ministro Correa se ha reunido con Pinochet y Ballerino unas semanas antes y ha dado seguridades de que así será.

Pero el Presidente está molesto y tiene interpretaciones contrarias. Lo que Correa hizo, y él mismo reiteró luego ante Pinochet, fue recomendar que la nómina del alto mando se conversara con el gobierno.

En vez de eso, el general se ha saltado al ministro de Defensa y ahora quiere interpretar las facultades de su ley de Fuerzas Armadas como excluyentes respecto del Ejecutivo: quiere que simplemente se despachen los decretos supremos.

Por si no bastara, la lista de ascensos trae ciertos detalles que el general sabía enervantes: por ejemplo, el ascenso a brigadier general del brigadier Luis Cortés Villa, agregado militar en Argentina y uno de los oficiales más polémicos en la última fase del régimen militar; el ascenso a mayor general del brigadier general Ramón Castro Ivanovic, ex secretario general del Ejército y firmante de la compra de terrenos en El Melocotón a nombre de Pinochet, operación que fue impugnada en los años 80 por un grupo de juristas integrado por el mismo Aylwin; y, lo peor de todo, el ascenso a mayor general del brigadier general Carlos Parera, el hombrazo de la Parada.

La situación de Cortés se vuelve ambigua: el embajador en Argentina, Carlos Figueroa, que da plena confianza a Aylwin, lo considera un buen profesional y un hombre de criterio amplio. Las objeciones sobre Cortés se suspenden.

El 29, Aylwin comunica a Pinochet el veto sobre los brigadieres generales Parera y Castro.

El 30 culmina la Junta Calificadora del Ejército. La nómina del nuevo alto mando se conoce esa misma tarde en la prensa: es un golpe publicitario.

Desde La Moneda se filtra el contragolpe: dos generales están vetados.

Al día siguiente, el brigadier general Parera se presenta por primera vez en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, quebrando su asordinado rechazo al general (R) Toro. En el Consejo se espesa el aire: ya todos conocen la situación.

Esa misma noche, el desafiante brigadier general vuelve a aparecer en público, ahora en la inauguración de la FISA, a donde asiste el Presidente. Va vestido con un toque adicional: todas las condecoraciones de su carrera. El gabinete presidencial se apresura a informar a Aylwin sobre la presencia del vetado[14]. Es un duro de verdad. Si no fuese tan duro, tal vez hasta sería peligroso.

Lo que sigue es un agónico esfuerzo del Ejército por salir del entuerto, mientras el Presidente aprueba sin objeciones los nuevos mandos de la Armada, la FACh y Carabineros. El teniente general Lúcar lo expresa con dolor ante el subsecretario Sánchez, durante una reunión a la que también asiste el director de Operaciones, Rodrigo Sánchez Casillas:

—Lo que ha pasado es muy grave. Ya toda la gente estaba informada...

El 5 de noviembre, entrevistado por Patricia Politzer en TVN, Aylwin declara, ácidamente, que Pinochet no se ha acostumbrado a su papel de subordinado después de 17 años de mandar "como amo absoluto del país".

El general se enfurece, pero el Comité Asesor aconseja prudencia: todavía falta resolver el problema del alto mando. Quien responde es el último gabinete del general, que, encabezado por Carlos Cáceres, se reúne en casa de Hernán Felipe Errázuriz para redactar una agria condena de las palabras del Presidente.

Pero Aylwin, tentado a enojarse, lee bajo el agua: la subsidiariedad de la respuesta significa que está imponiendo su autoridad. ¿Hay dudas? Días más tarde, de visita en Arica, e informado de que Pinochet recorre Iquique en compañía de Parera, se confirma:

—Yo decidí no ascender a este caballero.

Entretanto, los asesores del comandante en jefe trasnochan tratando de hallar salida a la *impasse*. Con el consejo de sus abogados, el mayor general Ballerino opina que lo mejor sería puntualizar que el Presidente debe ejercer su facultad dentro de la ley orgánica, es decir, que puede aprobar los ascensos de los oficiales más antiguos que Parera y Castro, pero no los de los posteriores: con ello, razona, se deja en pie la autoridad del Presidente y se permite al comandante en jefe replantear la nómina de ascensos.

Pero la que predomina es la opinión del auditor general, Fernando Torres Silva, quien estima que se debe apelar a la Contraloría para que ésta objete el envío parcial de los decretos supremos y exija que se siga la prelación de antigüedades[15].

El 9 de noviembre esa estrategia es derrotada: la Contraloría cursa los decretos supremos.

En los días siguientes el propio Pinochet se envuelve en la postrera defensa de sus hombres ante el gobierno:

—Mire, en el Ejército hay una cosa que se llama Reglamento de Formaciones, Paradas y Desfiles, que detalla todo lo que hay que hacer en estos casos. Parera hizo todo eso: rindió los honores, de cara a las autoridades.

—Pero no pidió permiso.

—Pero si se bajó del vehículo, saludó con la mano en la visera, que es nuestro símbolo de obediencia, y se dirigió a la tribuna. ¡Hizo todo, qué tanta importancia le dan a esto!

—No abrió la boca, general. Vimos los videos. No pidió permiso.

—¡Bueno, pero puchas....!

Sobre Castro tiene menos dudas.

—No, eso es una injusticia. Este hombre compró El Melocotón por orden mía, y ya he demostrado que no había nada ilegal. No puedo permitir que lo culpen de algo que le mandé a hacer yo.

Los extenuantes tira y afloja culminan el 21 de noviembre, cuando se oficializa un acuerdo entre el ministro Rojas y el vicecomandante Lúcar: Parera se irá como agregado militar a Sudáfrica; su salida permitirá que antigüedades menores —Garín, Quaas— asciendan sin problemas; estará un año fuera, y pasará a retiro. Castro no tiene el problema de antigüedades menores que lo superen: es el último de la lista; no podrá ascender este año; pero podrá seguir como agregado militar en Washington.

Pasando y pasando.

Notas

1. *El Mercurio* y *La Tercera*.

2. El Presidente muerto fue sepultado en Santa Inés, bajo escolta militar, con la sola presencia de su viuda y una de sus hijas, el 12 de septiembre de 1973.

3. Gruneleld, Mariana: *General (R) Alejandro Medina Lois: "La actitud de Aylwin es hipócrita"*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.012, 30 de agosto de 1990. Estas declaraciones motivan una querella por injurias del gobierno, de la que se desiste el 18 de septiembre, luego de que Medina ha sido encargado reo, en nombre del respeto de Aylwin hacia su padre, el general Ernesto Medina Parker, de quien fue "amigo y abogado".

4. Correa, Raquel: *Y el poder civil*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 2 de septiembre de 1990.

5. Dávila, Lucy: *Los cautelosos preparativos del funeral de Allende*. Revista *Hoy*, N° 685, 3 al 9 de septiembre de 1990.

6. Quien expresa con más dureza su repudio —por lo que considera una sucesión de transgresiones contra su identidad política histórica— es, desde España, un ex asesor de Allende. Soto, María Irene: *Joan Garcés: "Se ha humillado innecesariamente a los restos de Salvador Allende"*. Revista *Hoy*, N° 686, 10 al 16 de septiembre de 1990.

7. El general Wolf Graf von Baudissin, ex combatiente de la Wehrmacht y posterior opositor a Hitler, ha sido admirado en Alemania por su desarrollo, en la postguerra, del concepto del soldado como "ciudadano con uniforme", con derecho a participación, militancia y sindicalización. Al momento en que Pinochet lo menciona tiene 83 años.

8. Las explicaciones de por qué Pinochet se refirió a Alemania son variadas. A juicio de esta investigación, las dos principales se refieren a la difusión de las ideas de Baudissin (ya aplicadas en Argentina) entre estudiosos de defensa de la Concertación, y a una reunión sostenida en julio por el embajador Wiegand Pabsch con generales de Ejército en retiro, donde el diplomático habló de las reformas necesarias en las Fuerzas Armadas.

9. Más tarde, el Ministerio del Interior reclamará ante el alto mando policial por el uso excesivo de fuerza en estos actos.

10. Entre los militares circulará luego la opinión de que esto fue lo más indebido del incidente.

11. La tesis del "pacto" es anunciada por fuentes militares a través de diversos medios en el curso de septiembre, aunque para el gobierno no existió nunca. Ver, por ejemplo: *Fuerzas Armadas: Ecos de una batalla*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.016, 26 de septiembre de 1990.

12. Patricio Gualda Tiffaine, Hugo Salas Wenzel y Eduardo Iturriaga Neumann, y Gustavo Abarzúa Rivadeneira, Osvaldo Palacios y Patricio Varela. El influjo de La Cutufa en estos retiros se hace sentir pesadamente; el 12 de noviembre, Iturriaga solicitará al comandante en jefe y al ministro de Defensa que se aceleren las investigaciones sobre La Cutufa, para que se aclare que algunos, como él —y Palacios—, no se retiran por esa razón.

13. Miguel Espinoza Guzmán, Héctor Darrigrandi Márquez, Carlos Parera Silva, Guillermo Garín Aguirre, Richard Quaas Bornscheuer y Ramón Castro Ivanovic.

14. Soto, María Irene: *La tensa noche del miércoles 31*. Revista *Hoy*, N° 694, 5 al 11 de noviembre de 1990.

15. El enfrentamiento entre el equipo del Comité Asesor y el auditor general, que se arrastra desde antiguo, pasa aquí por una fase crítica. Al general (J) Torres Silva le es imputada una seguidilla de errores tácticos que incluyen un esfuerzo por rebajar la determinación del Ejército de sancionar los ilícitos de La Cutufa. Ver: *Los tropiezos del auditor*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.023, 19 de noviembre de 1990.

6

La reforma, el acuerdo y Saddam

El equipo económico de Aylwin parte con la desconfianza de los empresarios y con una fuerte inestabilidad heredada. Pero, después de lograr acuerdos de alcance nacional, se consolida gracias a un hecho remoto: la invasión de Kuwait por Irak.

Alejandro Foxley y Carlos Ominami asumen los ministerios de Hacienda y Economía sabiendo que no tienen la confianza del empresariado. Se los han insinuado una y otra vez, y en algún caso la hostilidad ha traspasado los límites de la cortesía. Los han llamado "las madrastras del modelo": lo han adoptado, pero no lo quieren.

Hay algo peor, que se cuidan de no revelar: en los centros financieros internacionales tampoco se confía en la conducción económica que pueda dar un gobierno de centroizquierda. Han visto el recelo durante la campaña, cuando acompañaron al candidato Patricio Aylwin en una gira por Europa, con la misión de dar garantías sobre la continuidad de las políticas económicas y persuadir a gobiernos e inversionistas de que la democracia daría más estabilidad.

Foxley y Ominami apenas se conocían antes de esa gira. Como el líder de los economistas DC, Foxley había manejado prácticamente a solas la línea de su partido en materias económicas. Durante años fustigó una a una todas las medidas del gobierno militar y de pronto, advirtiendo que la oposición podía ser gobierno, publicó con su grupo de Cieplan, sin consultar a nadie, una inserción titulada *Hay un consenso económico en Chile*. El golpe de línea no fue contestado en su partido, lo que confirmó un extraño liderazgo de implícitos.

Y desde entonces se venía entendiendo con Sergio Bitar, a quien identificaba como la cabeza de los economistas socialistas. Pero de pronto Bitar fue desplazado por Ominami, antiguo militante del MIR, miembro del GAP de Allende, hijo de un oficial de la FACh y economista graduado en La Sorbonne, fuera de los clásicos circuitos norteamericanos. Ominami había regresado a Chile en los 80, tras kafkianas dificultades con el permiso oficial, y trabajaba en los centros de estudio tradicionales de la izquierda.

En un comienzo, las relaciones entre los nominados ministros de Hacienda y Economía no fueron fluidas. De hecho, no llegaron ni siquiera al acuerdo más obvio sobre los equilibrios políticos dentro de los ministerios. Cuando Foxley solicitó al socialista Jorge Marshall como subsecretario, descubrió que Ominami lo tenía como su asistente, y no quería desprenderse de él. Para no prolongar el desencuentro, los dos fueron a pedir autorización a Aylwin para nombrar equipos unipartidarios en sus ministerios, con el pretexto de la coherencia de los equipos económicos. En los cuatro años del gobierno, serán los únicos ministerios donde habrá homogeneidad de militancia[1].

Pero ahora, en marzo de 1990, la magnitud de los problemas los obliga a apoyarse mutuamente: la inflación anualizada amenaza con acercarse al 30%, la abultada emisión de los años 88 y 89 ha sobrecalentado la economía, el presupuesto está muy recortado y en algunas reparticiones ha sido gastado en los meses previos a la asunción del gobierno, las rebajas tributarias del 89 podrían crear un déficit fiscal de unos 300 millones de dólares, las arcas públicas serán presionadas por el cercano vencimiento de la reprogramación de la deuda externa, se teme un aumento explosivo de las demandas sociales y el desempleo amenaza con una tendencia al alza. Y más encima está ese asunto de las privatizaciones de la última etapa del régimen, que la Concertación ha denunciado con escándalo.

Durante el verano, los equipos económicos del nuevo gobierno han definido dos grandes acciones: una reforma tributaria que financie el presupuesto y nuevos programas sociales, y un estricto ajuste que reduzca la inflación y deje a la economía en mejor pie para crecer en el segundo año[2].

El estudio de la reforma tributaria ha sido encomendado a un equipo encabezado por Manuel Marfán, que conoce en detalle reformas anteriores. Foxley se reserva el programa de ajuste para su cerrado grupo de asesores: José Pablo Arellano, Pablo Piñera, Jorge Rodríguez Grossi, Eduardo Aninat.

Cuando el paquete tributario está listo, el ministro de Hacienda se lo presenta al Presidente. Hay una sorpresa: un aumento del IVA de 16% a 18%.

—Pero esto —dice Aylwin— no lo dijimos en la campaña. Me parece muy delicado. A mí siempre se me ha dicho que los impuestos directos son los positivos, porque redistribuyen, y los indirectos son negativos porque afectan a los sectores más pobres.

Los asesores despliegan una batería de argumentos para convencer al Presidente. El principal es de magnitud: el IVA aporta casi la mitad de la recaudación tributaria. El impuesto más directo, el que grava la renta, no llega a significar ni un quinto de ese total.

Aylwin cavila. Quisiera confiar plenamente en Foxley y en su gente, pero...

Su gobierno no puede equivocarse; como el fin de un largo ciclo de desencuentro, su fracaso inferiría un daño mortal al futuro democrático Y esta gente, tan joven, tan impetuosa... Por lo demás, Foxley, ministro *in pectore* de la DC desde hace años, no ha sido especialmente cercano a Aylwin. Ni siquiera lo apoyó en la contienda interna: estuvo durante años con Gabriel Valdés, y al final se fue con Eduardo Frei.

Como ya ha hecho varias veces, Aylwin consulta a Edgardo Boeninger, en cuyos conocimientos de economía puede confiar. El ministro secretario general de la Presidencia respalda la propuesta del ministro de Hacienda.

Luz verde para el alza de impuestos.

Pero el empresariado se opone férreamente, con un argumento doctrinario: el Estado no es un buen asignador de recursos. Entregarle más dinero será ineficaz, desalentará la inversión y amenazará los equilibrios. Esos 600 millones de dólares serían mejor invertidos por el sector privado.

Quien encabeza la resistencia es la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), presidida por Fernando Agüero. El vocero de los industriales ha llegado a decir, un día antes de las elecciones, que la modificación de la estructura tributaria reduciría en dos puntos la tasa de crecimiento.

Foxley sabe que cuenta, si no con un aliado, al menos con un dirigente comprensivo: Manuel Feliú, presidente por tres años seguidos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Feliú ha venido anticipándose al cambio político desde hace años y es un activo promotor de las políticas de concertación. Su amistad con Alfredo Molina Bellido, el presidente de la patronal española CEOE, le ha permitido seguir de cerca la construcción de los pactos económicos, políticos y sociales que culminaron en La Moncloa poco más de una década atrás.

Feliú no cree que la reforma tributaria sea positiva, pero cuando la Sofofa le exige más dureza ante el nuevo gobierno, contesta con tono de *realpolitik:*

—Nosotros perdimos las elecciones. Ahora viene la democracia, y democracia significa que uno tiene que pagar la entrada.

Sus estudios le han mostrado que la reforma tendrá un impacto que el empresariado podrá absorber. Y le parece que el mal de los nuevos tributos es menor si se lo compara con la perspectiva de que el gobierno consiga aplacar las demandas sociales y siga adelante con el modelo. Las amenazas del ministro Foxley lo ayudan también en su estrategia de persuasión:

—Dile a tus amigos que si no aprueban esto, recorreré el país de Arica a Punta Arenas denunciándolos. Estaré todos los días en la televisión, y te puedo asegurar que esa pelea la van a perder.

Raramente, Feliú cree en la llamada "deuda social"; cree que hay sectores postergados y una desigualdad peligrosa para la economía. Y sabe que poderosas figuras de su gremio no comulgan con tal cosa: para ellos, la "deuda social" no es más que una figura retórica, un invento de los políticos socializantes. Ahí está, otra vez, la Sofofa, pero dentro de ella, un pequeño núcleo particularmente severo en este punto: Eugenio Heiremans, Hernán Briones, Ernesto Ayala.

En el curso de los debates del empresariado, Feliú halla sus mejores aliados en Renovación Nacional. El juvenil jefe de su exitosa campaña electoral, que ha dejado al partido con la primacía de la oposición, Andrés Allamand, lidera un grupo renovador integrado por el senador Sebastián Piñera y los diputados Evelyn Matthei y Alberto Espina, con la implícita complacencia del presidente del partido, Sergio Onofre Jarpa.

El grupo, joven, educado, buenmozo, alegre, es la estrella en el debut parlamentario. Se lo designa como La Patrulla Juvenil, y todos quieren el toque mágico de su cercanía: la Concertación los mima, el gobierno los mide, el empresariado los admira con recelo, la gente los saluda en las calles.

Y La Patrulla Juvenil opina que la reforma tributaria es necesaria. Unos, porque creen que un mayor sacrificio del empresariado en aras de la justicia social legitimará al sistema (Sebastián Piñera), otros porque temen un estallido de demandas exacerbadas (Evelyn Matthei), unos terceros porque quieren disputar a la Concertación el centro político (Andrés Allamand), y los últimos por vocación negociadora (Alberto Espina). Las razones son complementarias y encajan maravillosamente con el propósito de hacer de RN la "llave de la transición", el partido que con sus negociaciones puede dar gobernabilidad a un período signado por la desconfianza.

Como la reforma es objeto de ley, Feliú deja la negociación en manos de RN. Sebastián Piñera y Evelyn Matthei se hacen cargo de entrar con el ministro Foxley en el análisis detallado de cada rubro.

Pero las estrellas de RN no quieren que el gobierno se lleve todo el mérito. La resistencia del empresariado no lo aconseja. Además, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que recibe el proyecto, está presidida por Pablo Longueira (UDI), que se declara contrario desde el primer momento.

Los hombres de RN logran un punto a su favor con la incorporación del IVA: para el empresariado, es la señal de que no se busca castigar a la producción ni a la riqueza, sino promover un esfuerzo social colectivo. Entonces, Piñera intenta condicionar la aprobación de RN a que el gobierno especifique dónde, cómo y en qué partidas se va a gastar el dinero extra.

La propuesta produce un largo *impasse*. El ministro no quiere atarse las manos, ni menos aparecer cediendo ante la oposición. Cuando las negociaciones amenazan estancarse, en La Moneda se encuentra la fórmula: Foxley expone el plan de gastos, pero sólo por "instrucciones del Presidente".

Para entonces, los interlocutores de ambas partes se encuentran tan objetados dentro de sus propios bandos, que hallan una solución conveniente para ambos: la mayoría de las nuevas medidas regirá sólo hasta 1993, cuando se realizará una revisión de sus resultados. Tres años de apreturas, piensan unos. Tres años de holguras, los otros.

Cuando el acuerdo se anuncia, el jefe de la bancada de diputados de la DC, Claudio Huepe, declara que los parlamentarios de la Concertación lo desconocen. El ministro de Hacienda admite el error y se toma el tiempo para explicar, en cada bancada oficialista, el proyecto. Sus disculpas son recibidas con una mezcla de hostilidad y paciencia: ¿será que la democracia está debutando, o que estos ministros tendrán que debutar en la democracia?

La reforma se aprueba, finalmente, en junio de 1990[3] y consiste en aumentar el impuesto a la renta de las empresas de 10% a 15%, retornando a la base de utilidades devengadas, y no las repartidas[4]; la obligación de someterse al régimen de renta efectiva, y no presunta, para las empresas agrícolas, mineras y de transportes que facturen sobre ciertos montos; el aumento de los impuestos a los ingresos, apuntado especialmente contra los profesionales; y el paso del IVA del 16% al 18%[5].

Mientras los negociadores de RN debaten el problema tributario, Feliú plantea dentro de la CPC una segunda iniciativa: un acuerdo con los trabajadores, para evitar la emergencia de presiones laborales, afianzar la legitimidad del modelo y contribuir al pago de la "deuda social". Se la ha propuesto el ministro del Trabajo, René Cortázar, diciendo que sería un instrumento indispensable para la paz social. A Feliú no le ha costado nada aceptarla.

Otra vez encuentra la resistencia de la Sofofa y, en especial, del "grupo papelero". Pero la propuesta se fortalece porque en la Concertación Foxley ha extendido la idea de que, visto el estado en que halló la economía, necesita al menos dos semestres de disciplina fiscal y social.

Hay otro punto de apoyo, igualmente decisivo. Feliú tiene buenas relaciones con el presidente y el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Manuel Bustos (DC) y Arturo Martínez (PS). En el pasado, hasta tuvo la audacia de pedir su libertad cuando el general los tenía relegados. Ha ganado credibilidad ante ellos, y él mismo les tiene confianza.

Cuando los empresarios le reprochan que dé legitimidad a una central multisindical que ya no integra a más del 10% de la fuerza laboral, el líder de la CPC tiene las respuestas a mano: por primera vez, al empresariado le conviene tener un interlocutor centralizado, que avale un acuerdo global sobre la política económica; y si la representatividad de la CUT es baja sobre el total del país, es inequívoca su autoridad allí donde está presente.

En el gobierno, Foxley y Cortázar disponen de otra ventaja única. Ambos han sido asesores de Bustos y Martínez, tienen una relación amistosa y, tal como han hecho en Cieplan con el "cambio de línea" de la DC, llevan años convenciéndolos de que es necesario crear gobernabilidad. Ahora, con las cifras de la crisis, pueden persuadirlos de que las reivindicaciones deberán contenerse una vez más, por algún tiempo más.

Con este favorable cuadro de relaciones, el gobierno ofrece su mesa para que la CPC y la CUT discutan un acuerdo marco. Feliú y José Antonio Guzmán representan al empresariado, y Bustos y Martínez a los trabajadores; garantes, los ministros Foxley y Cortázar.

El acuerdo demora unas semanas. Bustos y Martínez, que se sienten presionados por la izquierda, ven con creciente inquietud la renuencia de los empresarios a aumentar el salario mínimo, que se ha convertido en la principal demanda de la multisindical.

Pese a ello, el acuerdo marco se completa con una velocidad fulminante. La última discusión es ganada por el empresariado: el gobierno no debe ser parte, porque en caso de conflicto se inclinará hacia los trabajadores. El texto bipartito es firmado el 27 de abril de 1990 por la CPC y la CUT, con los ministros como testigos de fe.

El acuerdo eleva el sueldo mínimo a 26.000 pesos. La CUT logra una reivindicación concreta. Al otro lado, y pese a la fiera lucha que han librado en este punto, los dirigentes de la CPC se sienten más satisfechos: no les interesan tanto las reformas concretas como la declaración de principios. Por una oferta salarial modesta, han logrado ligar las demandas sociales al crecimiento de la economía. Han logrado legitimar el modelo y dar a los empresarios el respiro que necesitaban en el año más peligroso[6].

Así, en menos de cinco meses el gobierno tiene consolidados los dos pilares de su estrategia: la reforma tributaria le permitirá lanzar programas sociales y el acuerdo laboral le dará tranquilidad para llevar el ajuste. Por añadidura, tiene satisfecha a la oposición mayoritaria: RN, que cree recuperar el protagonismo que la UDI le arrebató en los acuerdos sobre mesas del Parlamento, lanza su eslogan de la "democracia de los acuerdos", con el que se identifica el sector de Andrés Allamand. El gobierno asiente, complacido. Aunque el empresariado se queja de que hay un sobreajuste, Foxley se siente con base política y alienta al Banco Central para mantener altas las tasas de interés y contraer la cantidad de dinero.

Pero le quedan algunos problemas. Todos peliagudos.

Uno: el de la deuda subordinada, lo que los bancos intervenidos en 1983 le deben al Banco Central, que se eleva a más de 4.000 millones de dólares, que profundiza cada año los déficit del instituto emisor y que obliga al Fisco a suplementar recursos.

Puesto que entre los bancos con deuda subordinada están algunos de los principales, en el gobierno hay poco interés en apurarlos. Sólo el economista socialista Juan Eduardo Herrera recuerda cada cierto tiempo la promesa electoral de solucionar el lío, como un eco solitario en un templo de silencio.

Hasta que el ministro Foxley, tras enfrentarse a gritos con la directiva de la Asociación de Bancos y con su presidente, Adolfo Rojas, formula una amenaza que, a pesar de ser inconsulta, se convertirá en política oficial del gobierno durante los cuatro años de Aylwin:

—Mientras no se resuelva esto, no habrá ley de modernización de la banca. Olvídense de nuevas inversiones y más flexibilidad.

Los bancos realizan un intenso *lobby* entre los parlamentarios, envían mensajes, se suman al clamor de los exportadores por la dureza del ajuste. Pero Foxley parece ya obsesionado, y no cede ni siquiera a las insinuaciones de algunos miembros del directorio del Banco Central, que le proponen llegar a un acuerdo. En ese directorio halla a un aliado de hierro: Roberto Zahler.

—Roberto —le dice—, quiero avisarte que me voy a poner en la línea más dura.

—Bien. Yo también. Ya he dicho aquí que no voy a firmar nada que comprometa el patrimonio del Banco.

Otro: las privatizaciones del último período del régimen militar. Antes de asumir el nuevo gobierno ya se ha establecido que no habrá re-estatizaciones de empresas, al menos como principio general. Pero queda por saber cómo afrontar los casos donde se han denunciado operaciones ambiguas o viciosas.

El primer traspaso masivo de empresas al sector privado se produjo a mediados de los 70. Pero de esto hay poco que decir, porque gran parte de ese proceso consistió en devolver unidades estatizadas exageradamente por la UP. Un segundo proceso, a partir de 1985, no fue masivo en número pero sí en la magnitud de las unidades: 32 de las empresas más grandes.

Pero en cuanto llega el nuevo ministro vicepresidente de la Corporación de Fomento (Corfo), el socialdemócrata René Abeliuk, advierte un problema mayor: en todas las privatizaciones, por discutibles que resultaran, se vendieron paquetes accionarios a los trabajadores. Cualquier intento de atacarlas pondrá en juego el derecho constitucional de propiedad y crearía un conflicto con los trabajadores.

Abeliuk es tanto o más ortodoxo que sus colegas de Hacienda y Economía en la defensa de la gobernabilidad. Está dispuesto a arreglar todos los problemas que ha hallado, pero sólo hasta donde pueda. Paradójicamente, es el primero en desatar una crisis militar-financiera, cuando declara por TV, en mayo, que el Ejército debe a la Corfo 510 millones de pesos.

Esa noche, el vicecomandante en jefe del Ejército, el teniente general Jorge Lúcar, llama al anterior ministro de Corfo, el brigadier general Guillermo Letelier, y le pregunta por la presunta deuda.

—No —dice Letelier—, que yo sepa, no se debe nada.

Lo que Letelier y Lúcar ignoran es que en los registros de la Corfo hay una carta, firmada por el general Jorge Zincke, que da cuenta formal de la deuda. Nada irregular. Sólo desorden. Pero del mayúsculo.

Un par de horas después, el subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, recibe un llamado del vicecomandante, pidiendo una audiencia urgente para la mañana siguiente. En el despacho de Sánchez, Lúcar se muestra indignado:

—Lo que dice el ministro Abeliuk no es cierto. Pero, aunque lo fuera, entre instituciones honorables las cuentas no se cobran por la televisión.

Al gobierno le parece un reclamo razonable. Abeliuk recibe la instrucción de reunirse con Lúcar. Cuando lo hace, el 30 de mayo, va preparado: con el documento donde se establece el monto de 510 millones.

Y tiene, además, buena disposición para resolverlo. En la larga negociación que sigue, el Ejército terminará logrando que parte de la deuda le sea condonada. Otra parte, cercana al 50%, la pagará con el traspaso de propiedades al Fisco: en Río Blanco, en Pirihueico, en Lipangue, en Santa María de Manquehue...

Las propiedades militares son otro de los problemas quemantes en el balance fiscal. Tanto, que Abeliuk y su gerente, Ernesto Tironi, paralizan en cuanto asumen las resoluciones enviadas a Contraloría. La inmensa mayoría atañe a traspasos entre Corfo, el Fisco y el Ejército.

Por virtud de dos leyes dictadas en febrero del 90, las Fuerzas Armadas han conferido a sus comandantes en jefe y luego a sus jefes de servicios la facultad de enajenar propiedades fiscales, venderlas, transferirlas o liquidarlas. Si intenta derogar estas leyes, el nuevo gobierno se ganará un inmediato problema y probablemente fracasará en el Parlamento. Lo que puede hacer es tratar de administrarlas.

Pero cuando llega a ocupar su despacho, el flamante ministro de Bienes Nacionales, el socialista Luis Alvarado, se encuentra con una pesadilla administrativa. Hay transferencias, traspasos y enajenaciones pendientes en un número cercano al centenar. Los decretos sin despachar se amontonan en las oficinas y sólo unos pocos funcionarios recuerdan ya sus orígenes.

¿Hay una explicación? No, no la hay. El Ministerio de Bienes Nacionales estuvo siempre bajo la administración de Carabineros. La policía casi no tiene situaciones pendientes. Las de la Armada y la FACh son escasas. Las del Ejército se cuentan por decenas, y muchas se han originado en la fase crepuscular del régimen. Los fiscalizadores que llegan al Ministerio no pueden evitar la sospecha de que el Ejército se apuró a garantizarse, en la hora nona, tanto la protección de los bienes fiscales que ocupaba de facto como un volumen de propiedades que le permitiera tener liquidez en caso de que el gobierno le impusiera restricciones muy fuertes de caja.

El ministro prepara una minuta para el Presidente, en la que explica que la modificación de la ley es indispensable para el Estado, pero inviable en este momento político. Y propone que, en su lugar, se pacte con las Fuerzas Armadas un procedimiento permanente para que se conozcan con antelación las enajenaciones y las destinaciones de bienes. (Alvarado dará inicio a ese proceso en febrero de 1991, con una reunión con Rojas, Pinochet y otros seis generales. Pinochet delegará en el general Hernán Abad la tarea de arreglar los problemas pendientes con Alvarado.)

Pero en el primer semestre de gestión, el asunto pendiente de las privatizaciones sospechosas comienza a arder. El ministro Abeliuk, su gerente, Ernesto Tironi, y su fiscal, Guido Macchiavello, no pueden sustraerse a las sospechas de que hubo traspasos, si no fraudulentos, abiertamente perjudiciales para el Fisco[7].

Abeliuk encarga un análisis pormenorizado a los abogados Manuel Valenzuela y Gustavo Horvitz. De sus conclusiones elige cinco casos ejemplares.

Uno de ellos, que se filtra repetidamente a la prensa, es el de la Sociedad Agrícola y Ganadera Monasterio, que ha obtenido créditos de la Corfo con garantías que parecen discutibles. La gracia del caso es que Monasterio está encabezada por Julio Ponce Lerou, entonces esposo de Verónica Pinochet Hiriart, factótum de Soquimich y "yernísimo" según la jerga empleada por la Concertación.

Otro, el más importante en magnitud, es el de CAP, la mitológica Compañía de Aceros del Pacífico. Aquí, según la Contraloría, el Estado se ha desprendido de acciones cuyo valor bursátil era de a lo menos 39 centavos de dólar, al precio vil de 25 centavos de dólar. La Corfo ha terminado entregando por 105 millones de dólares un patrimonio que costaba más de 811 millones de dólares, segun valor libro. El proceso ha sido una excepción respecto de las otras empresas: en lugar de vender, Corfo ha retirado capital, con lo que los socios minoritarios han pasado a ser dueños de todo. Y además, tras eso CAP se ha convertido en una de las más rentables empresas privadas[8].

Y a tales datos se añade el agravante de que quienes las conducen, como privados, son los que contribuyeron, como agentes estatales, a su privatización, en forma inmediata o con pocos años de distancia, lo que revelaría, en el supuesto más inocente, el uso de información privilegiada. Es lo que se argumenta en el tercero de los casos, el de la eléctrica Pilmaiquén.

Pero en todos choca con la misma piedra: técnicamente, hay disposiciones legales que los amparan. Que tales disposiciones fuesen dictadas en condiciones muy particulares puede configurar un problema ético, pero de ningún modo jurídico.

Cuando los antecedentes de otras dos empresas completan la quina, el gobierno toma una decisión: entregar los expedientes al Consejo de Defensa del Estado y al Parlamento. De ese modo evita crear un clima de persecución contra la empresa privada y proyecta la imagen de acatar una voluntad democrática sobre el problema.

Diez meses después, el ministro Ominami presenta los antecedentes ante la Cámara de Diputados, donde se establece que en el último paquete de privatizaciones del régimen militar el Estado sufrió una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares. Antes, entrega un borrador de su discurso a las bancadas de la Concertación. Recibe, con alguna sorpresa, varias advertencias, incluso de su partido:

—Modéralo, suavízalo. Va a quedar la escoba.

Ominami adjunta a su discurso testimonial un paquete de archivadores con los documentos del caso[9]. Discurso y paquete duermen desde ese día el sueño de los justos.

Abeliuk, apaciguado por este desenlace que lo libera, negocia con Ponce Lerou la solución de sus deudas, elimina de su agenda todos los problemas de las privatizaciones y hasta inicia un programa de renegociaciones y condonaciones que beneficiará a muchos militares y civiles, incluyendo al general (R) Manuel Contreras, quien para su precario fundo sureño debió acudir alguna vez a la financiera informal que había llegado a constituir la Corfo.

Endesa, la mayor generadora eléctrica, no figura en el paquete de ejemplos, pero se convierte en uno de los problemas más infernales para el ministro. Su venta ha sido más que discutible: el Fisco ha recaudado cerca de 800 millones de dólares, y el valor actual de sus activos supera los 5.000 millones. Pero el lío mayor no es ese, sino el hecho de que parte de las acciones se ha entregado a los miembros de las Fuerzas Armadas, contra sus indemnizaciones por retiro[10]. Y ahora resulta que muchas de ellas están entrampadas en la laberíntica máquina del Estado, en Tesorería, en el Instituto de Normalización Previsional, en las cajas de la Defensa.

El almirante Martínez Busch, siempre escéptico, llama a Abeliuk:

—Ministro, quiero saber si la Corfo tiene algo contra la Armada de Chile. Porque es muy raro que no se quiera entregar los títulos de las acciones de Endesa a sus legítimos compradores...

—Almirante, no es así. No se puede entregar los títulos porque la documentación no está en Corfo. Si usted reúne las fotocopias de los convenios, tal vez podamos hacer algo...

Luego es el Ejército el que plantea sus objeciones. El ministro encarga a su gerente de Finanzas, Uri Wainer, que se dedique *full time* a resolver el problema. Wainer opera ágilmente: en cosa de semanas tiene los sistemas para hacerlo. Las Fuerzas Armadas se tranquilizan.

Al terminar julio de 1990, Foxley se siente seguro con su programa. Pero el 2 de agosto, las divisiones blindadas de Saddam Hussein rompen la frontera con el emirato de Kuwait, penetran en su territorio y capturan los extensos campos petroleros. Kuwait ha estado bajo amenaza de Irak desde dos años antes, cuando rebasó la cuota de exportación fijada por la OPEP.

Y ahora, los jeques kuwaitíes huyen a llenar los hoteles alemanes con sus prolíficos harems, a la espera de que Occidente sancione la agresión.

Los mercados bursátiles caen en todo el mundo, invadidos por el terror de una guerra de escala global, mientras los jeques consumen sus poderosos petrodólares en Europa. En septiembre, el petróleo alcanza su cotización más alta en nueve años, saltando hasta 40 dólares por barril. Los informes de las consultoras internacionales son más terroríficos: el barril pasará los 100 dólares en cosa de semanas.

En el gobierno chileno cunde la desazón. En pleno año de ajuste, el terremoto petrolero podría echar abajo todas las previsiones. Las señales ya son inquietantes: las tasas de interés siguen por las nubes, el dólar permanece atado en claro perjuicio a los exportadores, la inflación continúa con perspectivas alcistas, el desempleo ha comenzado a aumentar.

Peor: el Presidente está dudando.

Cierta mañana, Aylwin convoca al ministro Foxley a una reunión en su casa. Foxley se prepara. Pero cuando llega a la calle Arturo Medina, se encuentra con una multitud de próceres de la economía concertacionista: Carlos Massad, Sergio Molina, Edgardo Boeninger, Juan Villarzú y otra decena de nombres. Es un examen.

Foxley expone con vehemencia sus argumentos. Ha oído que en *El Mercurio* se anuncia su reemplazo por Sergio Molina. Alguien, por ahí, ha saludado a Molina con un expresivo "bienvenido, ministro de Hacienda". Esa mañana, Foxley salva su cabeza. Pero los rumores acerca de la conducción de la economía proliferan. A veces, las menos, lo enfrentan al gobierno. En otras, a su partido. Y en otras, las más, al ministro de Economía.

Así es que cuando Kuwait es aplastado por Hussein, Foxley está en su momento de mayor debilidad. Y otra cosa: está fuera del país, en reuniones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos que hacen de cabeza en la negociación de la deuda externa, frente a los cuales logra ciertos éxitos con la reprogramación. También está fuera el Presidente, en gira por Ecuador y Estados Unidos, donde se reúne con el Presidente George Bush. Aylwin anda tenso en esos días. Hablando ante la Americas Society, sufre una abrupta alza de presión y debe suspender su intervención por el sangramiento de narices. Foxley, en tanto, firma ante Bush el primer acuerdo con EE.UU. para un tratado futuro de libre comercio. Allí recibe los inquietantes cálculos de Santiago: el IPC se elevará, ese mes, a 5%, el más alto en seis años.

Presidente y ministro se reúnen en México, invitados por el mandatario Carlos Salinas de Gortari, quien vive sus momentos estelares.

En Santiago, los ministerios hierven de propuestas ansiosas. Una de ellas la expone en público Ominami: echar mano del Fondo de Estabilización del Cobre. Otra, con amplio apoyo en la DC, La Moneda y el propio Ministerio de Hacienda, llega a México en un fax: sacar los subproductos del petróleo del IPC.

Esa noche, Foxley cena con el ministro de Hacienda mexicano, Pedro Aspe. Decide mostrarle el fax. El mexicano es taxativo:

—Ni loco. No hagas tal. Aquí se hizo una vez, para la crisis de la deuda. El resultado es que nadie creyó nunca más en el IPC. Ni en el ministro, mano.

Foxley se siente abrumado.

El 4 de octubre, Aylwin y Foxley regresan a Santiago. El ministro Krauss lo recibe en Pudahuel con una de sus clásicas salidas:

—Le cuidé la pega, Presidente.

Aylwin ríe, pero por poco. El gobierno ha organizado un acto masivo de recepción en la Plaza de la Constitución. Y cuando el Presidente sale al balcón, la plaza esta semivacía: las masas del 88 y el 89 se han esfumado. En el palacio se culpa ácidamente al presunto autor intelectual, el director de Comunicaciones Eugenio Tironi, y al encargado, Enzo Pistacchio. Pero, ¿qué puede hacer el director de Organizaciones Civiles cuando las organizaciones civiles no están disponibles?

Foxley aterriza afiebrado, con un resfrío feroz, de los que dan difícil tregua a la lucidez. Desoyendo a una musculatura inane, parte al Ministerio. Se encierra con sus equipos por el resto del día. Al siguiente va a La Moneda y en 48 horas presenta un plan de emergencia ante el país, acompañado de los ministros de Transportes, Germán Correa, y Energía, Jaime Tohá. Su eje es un Fondo de Estabilización del Petróleo, cuyas normas serán especificadas por el ministro de Minería, Juan Hamilton, y que será aprobada por el Parlamento en enero de 1991[11]. Adicionalmente, se reducirá el gasto público y se dará a los empleados públicos un reajuste inferior al IPC acumulado en el año. Para negociar con la organización que los representa, la ANEF, Foxley halla un argumento insuperable: en el deterioro están incluidas las Fuerzas Armadas. No lo ha conversado con nadie, pero el efecto es impresionante. La noción de una emergencia nacional se expande.

Luego se va a la cama. Pero incluso acostado, Foxley sabe que acaba de tomar la más grave decisión de su vida, y la más áspera del gobierno de transición. Con ella sentará su liderazgo en el equipo económico. Terminarán la guerrilla interna, las especulaciones, los rumores, las dudas.

A 13 mil kilómetros, el feroz Saddam Hussein ha pavimentado el camino al apacible Alejandro Foxley.

En noviembre del 90, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el uso de la fuerza para liberar a Kuwait y fija el 15 de enero de 1991 como último plazo para que Irak abandone ese territorio. Dos noches después del ultimátum, las fuerzas aliadas de EE.UU. se lanzan sobre Bagdad en la devastadora *Operación Tormenta del Desierto*. 48 horas de ataque bastan para llevar al petróleo a su valor más bajo en medio año, 19 dólares por barril. Kuwait es recuperado por los aliados y el 27 de febrero el Presidente Bush ordena el cese del fuego sobre Irak, que, golpeado hasta el martirio, sostiene a Hussein en el poder.

Para entonces, el Fondo chileno funciona de maravillas. Tanto, que no es usado.

Y Foxley está en el control total.

	1988	1989	1990	1991
IPC (Variación %)	12,70	21,40	27,30	18,70
Desempleo (%)	9,70	7,90	7,80	8,20
Sueldos (base 100 = 1990)	96,42	98,19	100,00	104,87
Inversión (% PIB)	20,80	23,90	24,60	21,10
Ahorro (% PIB)	21,20	21,60	22,60	23,90
Crecimiento (%)	7,30	9,90	3,30	7,30
Superavit/Déficit*	133	298	135	264
Exportaciones**	7.052	8.080	8.373	8.942
Importaciones**	5.292	7.144	7.678	8.094
Reservas**	3.160	3.628	6.068	7.041

*Miles de millones de pesos.
** Millones de dólares de Estados Unidos.
Fuentes: Banco Central, INE, Dirección de Presupuestos y Fondo Monetario Internacional.

Notas

1. Una descripción sumaria de los equipos de Hacienda y Economía, en: Del Solar, Bernardita; y Aguirre, María Teresa: *Los nuevos boys de la economía*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.044, 15 de abril de 1991.

2. Análisis retrospectivos de la conducción económica durante el gobierno de Aylwin, incluyendo un muy esclarecedor texto de Alejandro Foxley, pueden hallarse en: Pizarro, Crisóstomo; Raczynski, Dagmar; y Vial, Joaquín (editores): *Políticas económicas y sociales en el Chile democrático*. Cieplan-Unicef, Santiago, 1995.

3. *Diario Oficial*, ley 18.985, 22 y 28 de junio de 1990.

4. El régimen militar había limitado este impuesto a las rentas distribuidas, estableciendo una excepción a partir de enero de 1990 para las rentas devengadas, a condición de que fuesen reinvertidas en nuevos proyectos. *Diario Oficial*, ley 18.775, 14 de enero de 1989.

5. Un detallado análisis técnico de la reforma, con cuadros comparativos entre lo propuesto y lo aprobado y testimonios de sus protagonistas, en: Marcel, Mario: *Políticas públicas en democracia: el caso de la reforma tributaria de 1990 en Chile*. Revista *Estudios*, Cieplan, junio de 1997.

6. Detalles sobre el acuerdo laboral desde el punto de vista empresarial en: Feliú, Manuel: *Los desafíos de la empresa moderna*. Editorial Renacimiento, Santiago, 1994.

7. Un estudio de los casos más notorios ejecutados tras la derrota del general Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en: Marín, Gustavo; y Rozas, Patricio: *Del área rara a la ley del Estado Empresario*. Pries-Cono Sur, Santiago, 1989.

8. Walder, Paul: *El regalo de la Corfo*. Revista *Hoy*, N° 671, 28 de mayo al 3 de junio de 1990.

9. Cámara de Diputados: Sesión 33ª, 24 y 25 de enero de 1991.

10. Una ley especial permitió a los miembros de las FF.AA. y empleados públicos comprar acciones de empresas privatizadas, pero las limitó a las dos más seguras: Compañía de Teléfonos y Endesa.

11. *Diario Oficial*, ley 19.030, 15 de enero de 1991.

7

Tres malditos cheques

Nadie podría haber imaginado que unos documentos fotocopiados en el Banco del Estado se iban a convertir en uno de los nudos de la transición. Menos podrían haberlo soñado los tres torneros que 30 años antes activaron una modesta empresa metalúrgica.

A mediados de agosto de 1990, una carpeta confidencial llega hasta el escritorio del Presidente Aylwin. Contiene las fotocopias de tres cheques pagados por el Ejército en enero de 1989, por un total de 971.940.001 pesos[1], alrededor de tres millones de dólares. Lo sorprendente es el destinatario: Augusto Pinochet Hiriart, segundo hijo del comandante en jefe, primero de los varones.

Las fotocopias proceden de los archivos del Banco del Estado, donde han sido halladas durante las tediosas investigaciones que realizan desde marzo las nuevas autoridades.

El Presidente convoca a los ministros de La Moneda y les exhibe la carpeta. Hay un silencio helado y luego un reguero de especulaciones. La primera idea del Presidente es citar al general Pinochet y aclarar con él el asunto. Pero los ministros Krauss, Boeninger y Correa se alzan en una sola voz para decirle que no, que eso no es posible. ¿Qué le va preguntar? ¿Qué le va a decir si la explicación no lo convence: cómo lo arreglamos?

La reunión concluye sin acuerdo. Mientras tanto, el ministro Correa queda encargado de guardar los papeles en su caja fuerte. Pocos días después los entrega al ministro de Defensa.

A fines de mes, el ministro Rojas está convencido de que tiene entre sus manos una auténtica bomba. Una mañana invita a desayunar en su casa a parlamentarios de la Concertación, y expone una serie de razones por las cuales, a su juicio, la posición del general Pinochet se ve severamente debilitada. Para el final deja los cheques; los exhibe ante los invitados.

En el excitado revuelo que se produce, sólo un par de diputados se muestran escépticos: ¿con unos cheques se pretende sacar a un hombre que ha gobernado durante 17 años con mano de hierro? Pero el ministro cree que el gobierno no debe dar una lucha frontal; no debe tomar iniciativas que le puedan ser reprochadas como actos hostiles. Lo apropiado sería que la Cámara de Diputados iniciara una investigación.

Días después, fotocopias de los cheques llegan a varios diarios de Santiago; algunos las publican sin explicaciones.

Con esos recortes, el 6 de septiembre 52 diputados de la Concertación suscriben la petición de que se oficie al ministro de Defensa.

En el Comité Asesor se encienden todas las señales de alarma. El mayor general Ballerino ordena una rápida investigación y, con los primeros antecedentes, llama al ex ministro Francisco Javier Cuadra, incorporado hace poco a la cúpula de Renovación Nacional, y le pide que organice una reunión. Al encuentro, en la casa de Cuadra, asisten Andrés Allamand, el diputado Alberto Espina, Ballerino y el coronel (J) Juan Romero.

Ballerino explica que se ha comenzado a agitar el asunto de los cheques como una farsa política con la que se quiere dañar al comandante en jefe.

—Para nosotros —dice—, está claro que no hay nada ilegal.

Desea que los dirigentes de RN tengan esta seguridad de primera fuente. Pero Allamand y Espina apenas conocen el caso: esbozan un par de preguntas —porque les suena mal aquello de que Pinochet Hiriart recibiese cheques del Ejército— y se quedan tranquilos con el ostensible aplomo de los dos oficiales.

Sin embargo, en el Comité Asesor la procesión va por dentro. Ballerino habla con su amigo y vecino, el abogado y ex subsecretario del Interior Gonzalo García. Su opinión es taxativa: el asunto se ve tan mal, que lo mejor sería convocar a un jurista especializado. El nombre apropiado es el del ex canciller Miguel Alex Schweitzer.

Ballerino agrega los del también ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, del ex ministro del Interior Carlos Cáceres, del mismo Cuadra. En los días que siguen, todos ellos se encontrarán en sucesivas reuniones en el quinto piso de Bandera 52 con el abogado Sergio Rillón, el auditor general Fernando Torres Silva, el coronel (J) Romero, el ex auditor Fernando Lyon y otros oficiales.

Los análisis jurídicos y políticos se suceden. Y se dividen: algunos piensan que el caso tiene la máxima gravedad; otros, que no es para tanto.

Ballerino contrasta las opiniones. Oye, discute, cavila. El problema parece desdoblarse, multiplicarse: está la cara política, de opinión pública; está el problema humano, las dificultades que el general tiene con sus hijos; está el lío institucional, la eventual mala reacción del Ejército; y está, sobre todo, el problema interno: ¿cómo explicar en las filas los impresentables giros al hijo?

Hay más. El Comité sabe que políticos de la Concertación investigan las actuaciones de Lucía Pinochet Hiriart como corredora de seguros vinculada al Instituto de Seguros del Estado. Estas acciones podrían tocar el corazón del general Pinochet, porque su primogénita es también su favorita, la hija con mala suerte que en medio de sus pellejerías se ha mostrado inquebrantablemente leal, afectuosa y comprensiva.

Los hombres del Comité todavía no lo saben, pero Lucía Pinochet es también valiente: cuando vea, a fines de año, que existe el riesgo de que su caso sea ventilado, visitará personalmente todos los medios de comunicación —incluidos los que fueron más duros opositores a su padre— para dar su versión y pedir prudencia. La obtendrá.

A lo largo de sus reuniones, los asesores externos y los oficiales del Comité Asesor llegan a una conclusión firme: si el asunto de los cheques llega a los tribunales, es posible ganarlo. Quizás haya que moverse en el nivel de la Corte Suprema, pero se puede ganar. Es la opinión que Schweitzer confirma en una reunión privada con el general Pinochet.

—Mire —agrega—, hay varios asuntos que considerar, incluyendo el hecho de que el proceso penal en Chile es tan lento, que casi no existe. Pero lo primero es que usted es el único intocable, el único que no debe ser afectado.

—Cuando usted dice que yo soy intocable, ¿quiere decir que mi hijo cometió delito? Yo no sé si puede haber cosas mal explicadas, pero mi hijo no delinquió. Por el solo hecho de llamarse Pinochet, ¿no tiene derecho a trabajar?

El tono amargo del general inunda el ambiente.

Pero lo que los abogados quieren decir es que si, en vez de ir a tribunales, el caso pasa a un nivel político, como una investigación parlamentaria, el precio sería subido, muy subido.

Por eso en el Comité hay alarma cuando se recibe el oficio del Ministerio de Defensa que solicita respuesta a la petición de la Cámara de Diputados.

Durante 20 días se trabaja a ritmo de combate. Ballerino, obsesionado con la idea de las múltiples facetas, pide al ministro de Defensa que su informe sea remitido al Parlamento con calificación de secreto. Y el ministro, persistiendo en su estrategia oblicua, cumple con ello.

El 18 de octubre se viene al suelo la última esperanza del Comité Asesor. Esa noche, descontenta e irritada con su respuesta, la Cámara decide, con 43 votos de la Concertación y las inquietantes abstenciones de la UDI y RN[2], formar la primera comisión investigadora de la nueva democracia, integrada por 13 diputados[3] y presidida —con apoyo opositor y en contra de los ingentes esfuerzos de la DC— por Jorge Schaulsohn. Tiene 90 días.

Los peores 90 días para las oficinas de Bandera 52 se inician al terminar octubre, cuando comienzan las citaciones de la comisión: los funcionarios públicos, incluidos los militares, no pueden negarse.

Ballerino consigue que Andrés Chadwick invite a Schaulsohn a un desayuno con ambos; pero el encuentro se limita a acordar que las citaciones sean reservadas —que no lo serán— y que se trate con extrema cautela una eventual concurrencia del comandante en jefe —que, punto para el Comité, no se producirá.

Ballerino sale con la negra sensación de que muchos oficiales serán citados: la temida expansión del caso por entre las filas del Ejército está por producirse.

Las primeras sesiones de la comisión sólo agregan oscuridad al espeso misterio de los cheques.

Pero a mediados de noviembre, Schaulsohn comienza a recibir en su departamento de Vitacura sobres sin remitente, cargados de documentos internos del Ejército sobre el caso[4].

La historia empieza a armarse. Pero es antigua.

Se inicia, remotamente, en 1967, cuando la empresa metalmecánica Val quebró y ofreció a sus trabajadores indemnizaciones en especies. Tres de los torneros de precisión aceptaron y se asociaron con un acróstico de sus apellidos: Valmoval, por Luis Valdivieso, Luis Moreno y Juan Valderrama. Durante diez años sobrevivieron con el giro de elementos domésticos e industriales.

A fines de los 70, la crítica situación con Argentina y las restricciones impuestas por Occidente al gobierno militar impulsaron la política de autoabastecerse de armas. Entre las empresas convocadas a presentar proyectos se encontraba Valmoval, que ya podía producir pequeñas piezas para fusiles.

La ambición germinó lentamente: ¿por qué no pasar de las piezas a los fusiles enteros? El Ejército tenía esos espléndidos ejemplares suizos SIG, pero su venta estaba descontinuada. Valmoval podría copiar pieza por pieza, con una marca... digamos, SIGA.

El Ejército acogió la idea y propuso una inversión cercana a los 10 millones de dólares, con 5 millones por anticipado, para recibir 10 mil fusiles. Valmoval aceptó el desafío; tendría que hacer grandes inversiones, tal vez gastarse todo el dinero, tal vez no obtener ganancias; pero al final del túnel sería una fábrica de armas: un diamante en América Latina.

No fue así. No era cosa de copiar las piezas; complejos principios físicos, químicos y hasta atmosféricos presiden el funcionamiento de las armas, y los abnegados torneros no los conocían.

Valdivieso, el más entusiasta, gastó meses en Alemania aprendiendo estos misterios. Tuvo suerte: consiguió comprar una marteladora gracias a un intempestivo embargo impuesto a China. Una marteladora, en simple, es un aparato integrado por diminutos martillos que puede convertir un bloque de metal en un delicado cañón: cuando se encarga una, el plazo de entrega oscila entre dos y tres años. Y Valmoval tuvo una de golpe y porrazo.

Pero la tensión con Argentina disminuyó, la emergencia bélica cesó, y el Ejército redujo su petición a un tercio: 3.300 fusiles. Durante el 79 —con el cardenal Antonio Samoré mediando entre Chile y Argentina—, Valmoval logró producir cien fusiles, de los cuales 32 fueron rechazados.

En los años siguientes, Valmoval subsistió a duras penas. En junio del 82, cuando ya vivía asediada por unos 400 millones de pesos de deudas, un acreedor pidió su quiebra.

Su representante, Valdivieso, terminó en la cárcel de Capuchinos. Y cuatro años después, cuando Valdivieso ya no podía seguir pagando su permanencia en esa "cárcel de lujo" y era tolerado en ella con el disminuido rango de un "mocito", llegó el periodista Fernando Paulsen, acusado por ofensas al Ejército.

Paulsen fue liberado por su abogado, el dirigente radical Isidro Solís. Y, conmovido por el caso de Valdivieso, insistió ante el abogado hasta que obtuvo que lo defendiera. Solís consiguió la libertad de Valdivieso. Poco después, el agradecido tornero llegó hasta la oficina del abogado:

—Oiga, le voy a pagar sus servicios —declaró—. No me mire con esa cara: creo que tengo cómo hacerlo. Si me ayuda a vender la fábrica... Sé que no vale nada, que está quebrada, que debemos plata. Pero hay una cosa que no tiene nadie: sé cómo fabricar fusiles. ¿Le parece poco?

Cuando Isidro Solís, ahora abogado del Ministerio del Interior, ve acercarse la comisión parlamentaria, pide audiencia con Aylwin.

—Presidente —le dice—, sé que es una insolencia: ¿puedo hablar con usted como abogado, bajo secreto profesional?

Aylwin asiente. Solís le cuenta su relación con el caso de los cheques y le entrega una carta con su renuncia. Aylwin se la rechaza.

—Lo único que le puedo pedir —dice— es que actúe en conciencia.

Pero el relato impacta al Presidente. ¡Tantos años de casualidades!

Tras la quiebra, Valmoval fue declarada unidad económica y pasó a ser administrada por una junta presidida por su principal acreedor, el Ejército.

En el 87, la junta tomó la decisión de venderla en un millón de dólares. La primera oferta vino de Erwin Jaeger Karl, un ex oficial de la Armada vinculado a los servicios de inteligencia[5]. El Ejército suscribió un convenio secreto con Jaeger para dar aprobación a su compra.

Pero Jaeger comenzó a tener dificultades para obtener créditos en el Banco del Estado; acudió entonces a Augusto Pinochet Hiriart, que aparecía como "representante" de otra metalúrgica llamada Proyectos Integrados a la Producción, PSP, y le ofreció asociarse para comprar Valmoval.

¿Qué era PSP? Según su escritura[6], una pequeña empresa formada en 1985, con un 99% del empresario Eduardo LeRoy y un 1% del técnico metalúrgico Juan Fernández. LeRoy era un amigo estrecho de Pinochet Hiriart, de acuerdo a este último; otro testimonio dirá luego que Pinochet Hiriart lo mencionó como un "palo blanco" de sus propios intereses. Para entonces, PSP se preparaba para concentrarse en servicios a la defensa, con la nueva estructura de sociedad anónima cerrada[7].

De pronto, las dificultades de Jaeger para cerrar la compra de Valmoval crecieron hasta límites extraños. En las mismas fechas, Pinochet Hiriart apareció acompañando a los dueños titulares de PSP a reuniones en la Corfo y en el Banco del Estado para obtener créditos para esa empresa.

El 3 de septiembre de 1987 venció el tercer plazo dado a Jaeger para pagar.

Al día siguiente se presentó una oferta de PSP; aquella misma mañana, en una sesión fulminante de 45 minutos, la Corfo aprobó un crédito para PSP por un millón 174 mil dólares, para un proyecto asociado a la minería. Así fue consignado en el acta. Sin embargo, sus firmantes supieron que se trataba de armas.

El 7 de septiembre, mientras transcurría el último plazo dado a Jaeger, el comandante en jefe autorizó a la Dirección de Logística para firmar un convenio secreto con PSP[8]. El papel

se suscribió el mismo día, y estableció que PSP cedería al Ejército el 49% de sus acciones luego del traspaso de Valmoval. Al siguiente, el brigadier Luis Arangua, presidente de la junta de acreedores de Valmoval, anunció en nombre del Ejército que se desechaba la oferta de Jaeger.

Seis días más tarde, el Banco del Estado dio a PSP un crédito por 338 millones de pesos. El tornero Valdivieso vio por fin brillar el sol: de ese dinero, 112 millones le fueron entregados en efectivo como pago por "asesorías futuras". Cuando se consolidó la nueva escritura de PSP, meses después, recibió otros 23 millones de pesos, 200 mil dólares en máquinas y el 8% de las acciones de PSP.

Ya derrotado, Jaeger escribió en octubre del 87 una carta al general Pinochet detallándole las gestiones de su hijo. Le fue respondida por el jefe de la Casa Militar siete meses más tarde: el Ejecutivo no intervendría en un caso que estaba en manos de la justicia.

En mayo de 1988, la Corfo decidió comprar el crédito que el Banco del Estado dio a PSP: con ello quedaba como la única acreedora.

Pero faltaba un paso: el Ejército no podía participar en sociedades anónimas. Entonces, el 18 de julio se dictó una ley[9] creando el Comando de Industria Militar e Ingeniería (CIMI), facultado para integrar tales sociedades. El CIMI ingresó a PSP con el 49% acordado[10].

Mientras se preparaba el traspaso definitivo de PSP a los militares, Pinochet Hiriart funcionó como "asesor" de la empresa, compró una de sus principales propiedades (que él mismo le había vendido antes) y participó con LeRoy en una empresa paralela, llamada SP[11].

Hacia fines del 88 los mandos militares llegaron a la conclusión de que la fábrica les era conveniente.

Raramente, el brigadier general Fernando Hormazábal, comandante del CIMI, lo desaconsejó. Lo que Hormazábal no sabía es que se preparaba el saneamiento completo de las deudas. Mientras el ministro de Hacienda Hernán Büchi modificaba el presupuesto de la nación para añadir algo más de tres millones de dólares al Ejército, Hormazábal recibía la orden de comprar el 51% restante de PSP.

Pero cuando, en los primeros días de enero, recibió los cheques extendidos a nombre de Pinochet Hiriart, se extrañó.

Lo que pasó en este punto es un negro misterio. ¿Consultó? ¿Los cursó, simplemente? ¿Lo comentó? ¿No le dijo a nadie? ¿Cómo pudo expresarse en ese momento la extrañeza que un año después reconocería ante la Cámara de Diputados?

El 4 de enero de 1989, Pinochet Hiriart recibió los tres cheques. También se extrañó, aunque por otra razón: ¿cheques? ¿No se hacen estas operaciones usualmente con efectivo? No, los procedimientos del Ejército son éstos. Lo toma o lo deja.

Lo tomó. Y Valdivieso volvió a resarcirse de las penurias carcelarias: su 8% le fue pagado por Pinochet Hiriart con un maletín de billetes. En cambio, LeRoy y Fernández, los dueños legales de PSP, no recibieron nada. Pinochet Hiriart cambió los cheques y se llevó el dinero: según diría en la Cámara, para cancelar préstamos externos; la versión de LeRoy y Fernández no existió.

En mayo del 89 concluyó el proceso: la Corfo cedió gratuitamente al Ejército las deudas de PSP.

Con las primeras citaciones de la comisión a oficiales, Ballerino sabe que ha comenzado el callejón oscuro. Constituye una pequeña fuerza de tareas, que conoce el caso en detalle, para que se reúna con cada uno de los citados, revise su papel y ensaye las declaraciones que harán.

El objetivo grande es uno solo: evitar a toda costa la impresión de que el comandante en jefe pudo saber de la operación de su hijo. De otro modo le sería aplicable el artículo 240 del Código Penal, que castiga a los funcionarios que intervengan en asuntos en que tengan interés sus cónyuges, parientes consanguíneos hasta el tercer grado y por afinidad hasta el segundo, y adoptivos.

Pero los documentos que misteriosamente aparecen en la comisión perforan la estrategia. En la noche del 28 de noviembre, Schaulsohn le muestra a Espina un memorando sin fecha, firmado por el brigadier Luis Arangua.

Hay en él tres cosas explosivas: la mención a la negociación secreta llevada por el Ejército con PSP; que Arangua se refiere a Pinochet Hiriart como uno de los dueños de PSP, en un 41 ó 43%; y que el brigadier propone vender a Pinochet Hiriart una propiedad porque ello "le permitiría generarse entradas razonables y dedicarse a materias de su propio interés, con plena libertad de acción".

Lo primero insinúa una negociación paralela llevada con la conciencia anticipada de quién será el ganador. Lo segundo alimenta la sospecha de que Pinochet Hiriart tuvo una participación en PSP mayor que la de asesor o apoderado[12]. Lo último refleja una extraña preocupación por la estabilidad económica del hijo del comandante en jefe.

Al día siguiente comparece el brigadier Arangua ante la comisión. El interrogatorio discurre lentamente, hasta que deriva hacia el asunto del convenio secreto del Ejército y PSP[13].

Arangua dice desconocerlo.

Entonces Espina muestra el documento recibido por Schaulsohn.

El brigadier queda demudado. La tensión inunda la sala.

En un esfuerzo de recomposición, Arangua reconoce su firma y explica con dificultad las afirmaciones de su memorando.

Tras el áspero tropiezo, el Comité Asesor llega a la convicción sombría de que sus recursos se agotan. Apenas puede recomendar que Pinochet Hiriart no concurra a la citación que la comisión le ha extendido para el 5 de diciembre. Pero el mismo consejo refleja bien hasta dónde está debilitada la defensa.

Las últimas actuaciones de la comisión parlamentaria sugieren que el rumbo conduce en forma implacable al comandante en jefe.

Con esa negra certeza, el lunes 10, Ballerino le pide al general Pinochet que lo reciba. Le explica que en sus análisis la situación se ve cada vez peor y que esto puede derivar en un desastre para la institución. Agrega que tal vez se pueda negociar con el gobierno, pero para ello necesita algún incentivo, algún caramelo que ofrecer. Hay pocos, mi general. Muy pocos.

Entonces Pinochet, buen entendedor de pocas palabras, dice, con esa media voz que usa para los instantes críticos, que bueno, que si el precio de todo es... A lo mejor podría pensarse en el retiro... Quizá cuando se vaya Aylwin, los dos juntos, un símbolo...

Ballerino necesita precisión. No, no antes de Aylwin. Sería malo para todos, para el gobierno, para el Ejército; para Chile.

Ballerino pide permiso para hablar con el gobierno.

—Adelante, señor general.

Esa tarde, Ballerino sabe que ha entrado en un páramo. Nadie puede compartir su secreto, nadie puede acompañarlo; su misión es única y solitaria, precisamente para que pueda ser desactivada o descalificada en cualquier momento. Cada paso que dé será un peligro. Se ha convertido en otra fuerza de tareas. Una fuerza de uno.

Llama al senador Sergio Onofre Jarpa y le propone una reunión de urgencia. El líder de RN es respetado en La Moneda y el Presidente Aylwin le tiene especial consideración. Podrá ser un buen intermediario.

El general le explica al senador la gravedad de la posición del comandante en jefe y le dice lo que está dispuesto a hacer para superar la crisis. Necesita que el Presidente comprenda bien el alcance de su decisión. Pero el Ejército, que tantas tensiones ha sufrido con el gobierno en los meses pasados, no puede hacerlo. Requiere ayuda.

El 12 de diciembre, Jarpa llama a La Moneda y pide audiencia con el Presidente. El gabinete de Aylwin, que conoce sus prioridades, la marca para el día siguiente.

El 13 comienza la fase crítica del proceso y el momento a partir del cual algunos hombres de gobierno —el ministro de Defensa, en especial— creen ver una conspiración. Jarpa informa a Aylwin sobriamente de lo que le ha sido dicho; no exagera, ni cambia los términos ni se pasa de listo; es hombre de pocas palabras, pero no de tergiversaciones[14].

Mientras se produce este encuentro en La Moneda, el mayor general Ballerino llama al ministro Enrique Correa a su celular; ésta es una audacia que hasta entonces no se ha permitido. Correa está en el Congreso, en Valparaíso, enfrascado en sacar la ley que dará autonomía a Televisión Nacional y el suplemento presupuestario que previamente deberá financiar al canal, literalmente quebrado por la gestión de los últimos años del régimen militar. El proyecto ha terminado por ser uno de los más arduos del gobierno: se ha convertido en una batahola de acusaciones en torno a la libertad de información.

Ballerino quiere ver con urgencia a Correa, ojalá hoy mismo, cuando regrese a Santiago. Correa, que percibe lo inusual de la llamada, acepta.

Teniendo en vista los disgustos previos del ministro de Defensa por estos encuentros, llama a Aylwin para obtener luz verde.

—Presidente, Ballerino me ha pedido que nos reunamos.

—Mire, qué curioso —dice Aylwin, tras un breve silencio—. Acabo de estar con Jarpa, que me ha planteado una cosa muy extraña. Tal vez sería bueno que pase por mi casa antes de esa reunión... No, mejor vea primero a Ballerino y luego nos juntamos en mi casa.

Correa apenas puede concentrarse en el debate de TVN en las horas siguientes. Al atardecer, ordena a su chofer que se dirija a la casa de Ballerino.

El mayor general está tenso e impaciente. Explica al ministro que, en opinión de su gente, si la investigación sobre los cheques llega hasta el final, el comandante en jefe podría ser declarado reo, lo que sería una tragedia que el Ejército está dispuesto a evitar a cualquier costo. El gobierno podría ayudar, a cambio de una colaboración institucional importante, que incluyera, por ejemplo, disponer de "nuestros" parlamentarios. Además, el comandante en jefe está llano a hablar de su retiro anticipado, en un plazo razonable. Este mensaje, dice, ha sido llevado por Jarpa al Presidente, pero el general quiere cerciorarse de su adecuada recepción.

Mientras prueba el té en la terraza de la casa de Vitacura, Correa intuye vagamente la explosividad de la propuesta. Aunque Ballerino le subraya que pueden hablar de los plazos, el ministro lo evita: le interesa dejar claro que la iniciativa es de ellos, no del gobierno. Inquiere sobre el nivel de formalidad de lo hablado y se compromete a conversar con el Presidente. El chofer enfila hacia la calle Arturo Medina.

Aylwin y Correa no se sienten muy intrigados por la simultaneidad de los mensajes, sino por su naturaleza. Es primera vez que ven al general Pinochet bajar sus hasta ahora incólumes banderas.

Correa propone una formulación con la que el Presidente concuerda: hay que tratar este asunto como una iniciativa del Ejército, y evitar en todo momento que se lo entienda como una presión del gobierno. El Presidente no puede ni insinuar la renuncia del general; ya lo hizo antes de asumir el mando y tuvo una respuesta negativa. Una segunda debilitaría su autoridad.

Esa noche, Correa cumple un último encargo telefónico antes de irse a dormir inquietamente:

—El Presidente —le dice a Ballerino— está listo para recibir al general en cuanto él lo solicite.

El fin de semana se arrastra en medio de un aire espeso. La comisión parlamentaria ha debatido dos veces acerca de la posibilidad de citar al comandante en jefe. La sola idea crispa los nervios de los asesores militares. Y los del gobierno también: ¿qué podría ocurrir en ese caso?

En el intertanto, el gabinete de Pinochet se comunica con La Moneda. La reunión se fija para el martes 18 de diciembre, a primera hora de la mañana, en la casa del Presidente.

El general llega de buen ánimo a la casa de Arturo Medina; se le nota preocupado, pero sonriente. El Presidente lo invita al living, se sientan y comienza un trabajoso diálogo sobre la situación en el Golfo Pérsico, la probabilidad de que Estados Unidos asalte Kuwait e invada luego a Irak, el impacto sobre los precios del petróleo y la industria de armamentos.

Luego hay un leve giro hacia la situación nacional, la proximidad del informe de la Comisión Rettig, la tramitación de las leyes Cumplido.

De los cheques y de la renuncia anticipada, ni una palabra. Cuando el general se despide, el Presidente queda intrigado y molesto. El general tampoco se va tranquilo.

En cuanto Ballerino lo asalta en su despacho para saber cómo le fue, Pinochet se muestra incómodo explicando que no tocaron el único tema relevante:

—Es que no me dio el lado...

Aylwin pide ubicar de inmediato al ministro Correa. Lo encuentran en su celular, camino al Congreso.

—¿Dónde va, Enrique?

—Llegando al túnel Lo Prado, Presidente.

—Mire, ha pasado algo muy raro. Creo que es mejor que se vuelva y lo hablemos brevemente.

Exasperado por las contramarchas, Correa regresa a La Moneda, donde Aylwin le cuenta que Pinochet no ha dicho nada acerca del retiro. Ni una palabra. Habría que aclarar este asunto de una vez por todas.

Correa, que debe concluir las negociaciones sobre TVN, dice que irá al Parlamento y que desde ahí ubicará a Ballerino.

Le cuesta poco.

—No me digas nada —se anticipa el mayor general—. Ya sé lo que pasó. Es que este caballero no sabe cómo decir las cosas, y parece que el Presidente no le dio una oportunidad clara. Creo que tenemos que preparar esta reunión entre nosotros, fijar una agenda y que los dos conversen de nuevo con una pauta ya establecida.

El ministro concuerda. Pero el tiempo apremia, dice: el gobierno no puede seguir dilatando esto. Hay que iniciar las conversaciones mañana.

Tras el almuerzo, Correa retorna a Santiago y se reúne con el Presidente.

Para entonces, el ministro de Defensa ya ha hecho presente la necesidad de restaurar la interlocución a través de los conductos regulares. Rojas cree que los diálogos paralelos pueden implicar al gobierno en alguna maniobra peligrosa.

Aylwin, molesto con la ambigüedad de la situación, se inclina por esta posición. El ministro Correa no tiene cómo oponerse, pese a que intuye que la deficiente relación entre Defensa y el Comité Asesor no facilitará las cosas.

—Mira —le dice a Ballerino en la tarde—, esto ya se ha puesto muy complicado. Tienes que hablar con el ministro de Defensa, que te recibirá mañana, a las 8.

—¿El ministro de Defensa? ¿Estás seguro de lo que me dices?

—Seguro. Es la última palabra. Mañana a las 8.

En el Comité Asesor se produce un nervioso movimiento. El coronel Carlos Molina Johnson llama al periodista Jorge Olave, asesor del ministro Boeninger, y lo invita a las oficinas de Bandera 52, donde le explica las complicaciones del momento y le insinúa que la Secretaría General de la Presidencia podría tomar cartas en el asunto. Olave, sin conocer la trama en la que se envuelve, asiente. Boeninger podría arreglar todo. Ballerino vuelve a llamar a Correa.

—Ahora resulta que no sabemos muy bien quién es el interlocutor —le dice—. Estamos con una persona de la Secretaría General de la Presidencia, que nos dice que se podría hablar con Boeninger.

—No —responde Correa, con un tono imperioso que percibe arriesgado, pero que le parece inevitable ante el raro curso que adquieren los hechos—, tienes que acostumbrarte a que a mí sólo me puede desmentir el Presidente.

Notas

1. Banco del Estado, cuenta corriente N° 9007334 del Ejército de Chile (Comando de Industria Militar e Ingeniería), cheques serie 002013 por $ 800.421.177, serie 002014 por $ 152.461.177 y serie 002015 por $ 19.057.647.

2. Sólo el diputado RN Luis Navarrete vota en contra.

3. Alberto Espina, Raúl Urrutia, Francisco Bayo (RN), Andrés Chadwick, Pablo Longueira (UDI), Eugenio Ortega, Sergio Elgueta, Sergio Velasco, Rodolfo Seguel (DC), Jaime Campos (PR), Felipe Valenzuela, Akin Soto y Jorge Schaulsohn (PS-PPD).

4. Los antecedentes recogidos por esta investigación apuntan a un alto oficial, que ejerció cargos en el área económica del gobierno militar, y que habría filtrado estos materiales luego de ver segada su carrera al generalato por falta de cupos en su arma. En todo caso, esta es la impresión predominante en el Ejército.

5. González, Mónica: *Historia inédita de los cheques del hijo de Pinochet*. Diario *La Nación*, 30 de diciembre de 1990.

6. *Diario Oficial*, 24 de agosto de 1985.

7. *Diario Oficial*, 7 de enero de 1988.

8. DS (R) 903. Este instrumento anulaba además el DS (R) 696, que autorizaba un previo convenio secreto con Jaeger.

9. N° 18.723.

10. Ejército de Chile: CJE (R) 4102-125, 10 de agosto de 1988.

11. Sobre esta empresa y el verdadero papel de LeRoy, ver Capítulo 19.

12. Erwin Jaeger envió a la comisión una carta tratando de probar que Pinochet Hiriart tuvo vinculación propietaria con PSP. No obstante, sus testimonios fueron desacreditados por el hecho de que cuando los envió estaba en Brasil, prófugo por giro doloso de cheques. En uno de los momentos más emocionales del proceso, el general Pinochet lo calificó de "gangster".

13. Texto completo en: *El testimonio del brigadier Arangua en la comisión que investiga los cheques del Ejército*. Diario *La Segunda*, 19 de diciembre de 1990.

14. Esta investigación halló que Jarpa fue preciso en la transmisión de mensaje, en contra de lo que cercanos al Ejército afirmaron con posterioridad. Ver: Soto, María Irene: *Cristián Labbé: "El gobierno creyó que tenía al general Pinochet acorralado"*. Revista *Hoy*, N° 702, 31 de diciembre de 1990 al 6 de enero de 1991.

8

La noche de los teléfonos

El caso de los cheques es de tal naturaleza, que Pinochet llega a imaginar que su renuncia puede ser una solución. Pero la complejidad de esa idea termina por desatar la primera crisis militar abierta, cuyo desarrollo atraviesa horas interminables.

El sol del miércoles 19 de diciembre se empina sobre la ciudad cuando Ballerino llega al piso 22 del edificio Diego Portales. Rojas lo recibe en su despacho, en medio de un sigiloso revuelo de ayudantes, y lo invita a los anchos y mullidos sillones de cuero.

Los dos hombres no se tienen confianza, pero saben que en este momento no se representan a sí mismos. Sin embargo, sus toques de estilo pueden resultar decisivos.

El ministro propone ir al grano. El mayor general dice que, en opinión de la institución, el gobierno y el Ejército podrían avanzar mejor hacia los propósitos de reconciliación si se pudiese arreglar ciertos problemas que empañan las relaciones. El Ejército está limitado para actuar y opinar, pero el gobierno no. Para ello, el comandante en jefe está dispuesto a considerar su salida del mando si fuese positivo para el país. Podría pensar, por ejemplo, en acogerse a retiro un año después de que el Presidente Aylwin concluya su mandato.

El ministro se demora poco. Si el general desea acogerse a retiro, en aras de la pacificación nacional, lo conveniente sería pensar en otros plazos. Los momentos cruciales vienen muy pronto: la Comisión Rettig, las leyes Cumplido, La Cutufa y, bien, este engorroso asunto de los cheques. Marzo, digamos, o quizás antes aún.

El diálogo no progresa mucho.

Ballerino sale de la oficina con la percepción de que será una negociación dura, y que está en los prolegómenos. Las distancias se acortarán. El ministro está apostando a ser quien obtenga el trofeo del retiro de Pinochet, pero debe saber que esa es una ilusión. Más temprano que tarde, retrocederá, y con mayor razón lo hará una vez que lleve su mensaje al Presidente. El tejo está todavía pasado, bien pasado.

El ministro se queda con la impresión contraria: si la propuesta es sincera, quiere decir que la posición del gobierno es muy fuerte. La comisión parlamentaria terminará su trabajo en enero; en el mejor de los casos, podrá tener una prórroga hasta abril. Después vendrá el informe de la Comisión Rettig: no sería bueno que sus resultados los sufriese un nuevo comandante en jefe.

Los mandantes son informados esa mañana. Al mediodía, todos se reúnen, sin mencionar palabra, en la Academia de Guerra, donde se gradúan 40 oficiales.

Extremando las gentilezas, el Presidente ha invitado a los graduados y al alto mando a un almuerzo en La Moneda. El general Pinochet, advertido del gesto, asiste con su esposa —que

pisa La Moneda por primera vez desde el traspaso— y envía un *bouquet* de flores a la esposa del Presidente.

El almuerzo se reviste de finezas decimonónicas. Todo el mundo está feliz, la tensión se ha hundido bajo el suelo.

Al salir del almuerzo, el coronel Sergio Moreno, secretario general del Ejército, le entrega al general Pinochet *La Segunda*, que anuncia el perturbador testimonio del brigadier Luis Arangua ante la comisión parlamentaria. El semblante del comandante en jefe se ensombrece, pero eso no lo notan los periodistas que al salir le preguntan si es verdad que está renunciando.

—¿Me están renunciando ya? —dice, molesto—. ¡Qué bueno!

El auto oficial vuela hacia la Comandancia en Jefe. La ira y las sospechas trabajan a mayor velocidad.

A las 15.30, Ballerino llega por segunda vez a la oficina de Rojas. El ambiente está algo más tenso. Ahora es el ministro quien toma la iniciativa. El retiro del comandante en jefe, dice, debe producirse no más allá del 15 de abril. Las razones ya han sido explicadas. ¿Se le va a permitir nombrar a su sucesor? No, en absoluto. Esta es la última palabra del gobierno.

El mayor general se sorprende ante la dureza del planteamiento. Le parece que el espacio de negociación se cierra con brusquedad. Pregunta si en verdad es la última palabra. Como el ministro lo ratifica, pide repasar el acuerdo. El ministro no cede un milímetro en la recapitulación: ni permanencia ni sucesión.

—Mañana a las 8 lo espero otra vez aquí, general.

Ballerino informa a Pinochet en la Comandancia en Jefe. Allí aguardan los abogados Gonzalo García y Miguel Alex Schweitzer, en medio de un grupo de oficiales. El general parece dispuesto a oír opiniones[1]. García estima que hay que seguir negociando. El riesgo de una acusación constitucional o una encargatoria de reo es demasiado alto. Los oficiales se inquietan. El auditor general Torres Silva no cree que tal peligro exista si el Ejército se pone firme. Schweitzer concuerda en la gravedad, pero añade una variante:

—General, usted conoce los gestos, sabe cómo es cuando uno se sienta a conversar. A veces hay que sacar la pistola y ponerla en la mesa...

Pinochet regresa a su escritorio e imparte la orden de acuartelar a la institución. Luego se va a su casa.

Cerca de las 18 horas se distribuyen por las unidades las claves para el acuartelamiento en grado 1, máxima emergencia, que significa que todos los oficiales y clases deben presentarse en sus unidades en un máximo de dos horas. Fuerzas especiales protegerán a las familias de los oficiales superiores. El movimiento comienza de inmediato en Santiago[2].

Media hora más tarde, Ballerino informa al senador Santiago Sinclair de la situación que se ha producido. En Valparaíso, Sinclair se dirige a la oficina del presidente del Senado, Gabriel Valdés, y transmite el mensaje. La situación es delicada, dice, porque el contacto entre el gobierno y la institución es escaso. Es Valdés quien informa, por teléfono, al Presidente Aylwin.

La cadena continúa. Aylwin llama a Rojas. Rojas llama al general Pinochet a su teléfono particular.

—General —dice—, el gobierno quiere saber de qué se tratan estas versiones sobre un acuartelamiento.

—Que si me presionan —responde el general—, yo actúo. Tengo que actuar, porque el gobierno no está procediendo de manera correcta.

—General, pero usted comprende que esto tiene sus marcos constitucionales.

—Sí, señor, lo sé muy bien. Pero usted me está chantajeando y lo único que ha hecho hasta ahora ha sido ponerme problemas...

El crispado diálogo dura poco más. La comunicación queda cortada cuando el movimiento militar está en curso, la opinión pública ha comenzado a alarmarse[3] y se ha planteado al gobierno el primer desafío fáctico[4].

A la misma hora en que Sinclair informa a Valdés, el diputado Andrés Chadwick está en la oficina del vicepresidente de la Cámara, Juan Antonio Coloma, con el ministro Correa, en el momento en que recibe un llamado de Ballerino: el Ejército se acuartela porque el ministro de Defensa le ha pedido la renuncia al comandante en jefe. Cuando Chadwick le cuenta, el ministro se toma la cabeza con las dos manos y se balancea nerviosamente:

—¡No, huevón, no es así! ¡Es un error, un error!

El ministro llama a Boeninger y decide volver a Santiago. Al salir, confirma:

—Oye, esto es un error. No es voluntad del gobierno pedirle la renuncia.

En el intertanto, Boeninger logra la única comunicación del gobierno con Ballerino esa tarde. Le hace presente que la situación es grave.

—Pero ustedes la han puesto así —dice Ballerino—. Con la petición de renuncia...

—No —corrige Boeninger—, el ministro dice que no ha pedido la renuncia.

Pero esa no es la versión que tiene el Ejército. Ballerino se abre por primera vez a la percepción de que el gobierno está poniendo marcha atrás.

A eso de las 19 horas, el acuartelamiento se ha consumado en gran parte del país. Mientras unos nietos juegan en la piscina, el general permanece en su escritorio con Ballerino y el coronel (R) Labbé.

Desde la guardia externa se informa que un pelotón de Carabineros quiere rodear la casa: dice tener órdenes de reforzar la custodia. Los militares no piensan igual. Labbé parte a hablar con el jefe de la unidad policial. Si no se van de inmediato, convocará a una unidad de paracaidistas para resolver la custodia. Los carabineros se retiran como llegaron: marchando.

A las 19.30, el Presidente sube a su auto con su jefe de gabinete. En ese instante, Carlos Bascuñán se da cuenta de que el sistema telefónico presidencial se ha caído. El sistema, que provee de conexiones analógicas por las cuales basta marcar una clave de cuatro números y un anexo para entrar a cualquier dependencia de La Moneda, ha enmudecido en alguna hora de la tarde.

Bascuñán se extraña: sólo él y Mariano Lacalle, jefe administrativo de La Moneda, tienen las claves de acceso. Habrá que echar mano a los celulares; pero el jefe de gabinete de la Presidencia sabe bien que estos aparatos son frágiles: dado que funcionan en frecuencias usualmente "barridas" por los servicios de inteligencia militar, son susceptibles de escuchas indeseables.

El chofer enfila hacia la Escuela de Carabineros, donde esta noche se gradúan 139 oficiales de la policía. De pronto, Bascuñán siente un sobresalto:

—Don Patricio, ¿y si los carabineros se han acuartelado? Nos vamos a meter a la boca del lobo.

—Bueno —dice Aylwin, que ya ha pensado en eso—, ahí lo sabremos. Ahí sabremos quién está con quién.

No piensa dejar de ir.

A las 20.10 es recibido en la Escuela por el general director, Rodolfo Stange, y conducido en medio de los saludos marciales hasta el estrado de honor. Cerca suyo está el vicecomandante del Ejército, el teniente general Jorge Lúcar, que no da señas de nada especial.

Mientras el coronel que dirige la Escuela lee su discurso, un ayudante se acerca a Lúcar y le habla al oído. El semblante del teniente general cambia[5].

Cuando se inicia el cóctel, el edecán de los diputados, Jaime Krauss, se allega al presidente de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo, que ya sabe del acuartelamiento:

—Dicen que los carabineros también están acuartelados.

—Pero eso —murmura Viera-Gallo, alarmado— quiere decir que estamos todos presos: el Presidente, los ministros, todos los que estamos aquí.

—Ese es el rumor —dice el edecán, retrocediendo ante la implicancia.

Pero el edecán no está equivocado. Minutos antes, el general Alfredo Núñez, director de Orden y Seguridad, se ha acercado a los ministros Krauss y Rojas y les ha dicho que, ante los

acontecimientos, sería conveniente acuartelar a la policía. Los ministros lo han aprobado y Núñez está radiando las órdenes para los carabineros ¿A quién servirán? No se sabe.

El Presidente toma entonces una decisión que a algunos les parece dramática: se irá a su casa. Quiere que lo acompañen los presidentes de la Cámara y del Senado.

Entre tanto, en el Ministerio del Interior comienza un nervioso tráfico de llamados hacia y desde las intendencias y gobernaciones. A lo menos desde siete ciudades se informa de movimientos en las unidades militares. La confirmación es completa: se están acuartelando. Algunos funcionarios socialistas se precipitan a sus despachos para quemar documentos y salir rápido del centro de Santiago. Mientras anochece, el subsecretario Belisario Velasco se va quedando solo en el palacio.

A las 21.30 llega Aylwin a la calle Arturo Medina, solitaria y silenciosa, donde espera su hijo Miguel Patricio. En los 20 minutos siguientes arriban los demás invitados: los ministros Correa, Boeninger, Krauss, Rojas, Hamilton, los senadores Valdés y Andrés Zaldívar, el diputado Viera-Gallo, el subsecretario Sánchez...

En el living se intercambian comentarios precipitados. Nadie tiene muy claro el posible desenlace.

—Patricio —dice de pronto Aylwin— ¿por qué no llama al almirante Martínez Busch?

Los presentes enmudecen. Ven al ministro Rojas marcar, poner tono de normalidad, sostener un diálogo surreal ("¿Almirante?", "¿Sí?", "Almirante, buenas noches, ¿cómo está todo?", "Bien, señor ministro, muy tranquilo". "Ah, qué bueno...").

Algunos sienten el escalofrío de la precariedad: ¿qué pasa si el almirante dice que la Armada está acuartelada?[6]. Poco después, Rojas confirma con el general Fernando Matthei que tampoco participa la FACh.

El temor a la asonada se disipa. El propio ministro de Defensa, con el raro aplomo que tanto evidencia la crisis como la enfrenta, se encarga de subrayar que el problema es cómo abordará el gobierno el acto de insubordinación, cómo se encaja un acuartelamiento no autorizado. Correa y luego Boeninger y Krauss concuerdan: no puede aceptarlo.

A exactas 30 cuadras, el mayor general Ballerino llega a una conclusión semejante en el escritorio de Pinochet. Mientras los puentes estén cortados, la situación mantiene su peligrosidad. Llama entonces al diputado Andrés Chadwick, a su celular.

—Mira —le dice—, el ministro me ha citado a una reunión mañana, y el Ejército no va a una reunión con él. Quisiera que transmitieras esto a Viera-Gallo.

—Puta, hagan lo que quieran —dice Chadwick, exasperado, en su habitación del Hotel O'Higgins—, pero para qué me mandan a mí a decir estas cosas...

—Te lo pido como un favor, porque estamos sin contacto.

Chadwick llama a Viera-Gallo. La respuesta demora unos minutos:

—El Presidente dice que la reunión es útil para resolver las cosas, y que debe mantenerse. El problema ahora es otro: el gobierno dice que no se puede hablar de nada mientras permanezca ocupado el edificio de las Fuerzas Armadas. La información que hay es que un grupo de oficiales de la FACh ha quedado encerrado ahí, y que no los dejan salir. Además, estaría tomada la calle Zenteno...

—Por Dios —replica Chadwick—, ¡si de lo que se trata es que no sigan ocupando más cosas!

—Lo mismo pienso yo —dice Viera-Gallo—, pero qué quieres que le haga.

El diputado vuelve a llamar a Ballerino. Lo atiende la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, que le pregunta por su familia antes de pasar el fono a Ballerino. Todo es insólito esta noche.

Y el mayor general explica: no hay nada, es un error, lo que sucede es que se ha reforzado la guardia del edificio de las Fuerzas Armadas, se han llevado los pertrechos propios de un acuartelamiento y los carabineros han cerrado el tránsito de la calle, como hacen todas las noches después de las 21 horas. No hay ocupación ni nada.

—Está bien —dice Chadwick—, pero transmitan eso rápido, porque es el punto de quiebre en este momento.

Pasadas las 22 se recibe en la casa de Aylwin un llamado del general Lúcar para el ministro Rojas. El vicecomandante quiere informar que el edificio de las FF.AA. está en calma y la calle Zenteno, desocupada.

El ministro se alegra y expone lo que el "comité de crisis" reunido con el Presidente ha definido como los tres pasos siguientes: dar por superado el incidente, confirmar la reunión con Ballerino y resolver el problema de que un acuartelamiento es un acto de fuerza inaceptable. El vicecomandante dice que puede concordar con el ministro una versión.

El teléfono no descansa desde ese instante. Pero antes de la medianoche, Lúcar comunica que en el reglamento existe un formato llamado "ejercicio de seguridad, alistamiento y enlace", que cae en las facultades del comandante en jefe y que es dos grados inferior al acuartelamiento. No hay más que hablar.

A la medianoche, Lúcar informa a una prensa insomne sobre el ejercicio. A las 2 de la mañana, cuando se retira de la casa del Presidente, cercado por las cámaras de televisión, el ministro Rojas da por superada la situación y explica que ha sido un ejercicio de enlace.

El ministro duerme poco y mal esa noche. A las 8 de la mañana ya está en su oficina, recibiendo de nuevo al mayor general Ballerino. Ahora el encuentro es cortante. Rojas quiere subrayar que jamás ha pedido la renuncia del comandante en jefe: se la han venido a ofrecer.

Ballerino, no menos tenso, replica que la conversación por él planteada derivó en un acto de presión y en un ultimátum: quiere recordarle al ministro que lo amenazó y le dio un plazo taxativo.

Pero el ministro dice que tales amenazas son un invento o una mala interpretación: lo que ahora importa es que el Ejército se ciña al orden constitucional, concluya estas demostraciones y responda por la inquietud que ha sembrado. Agrega que el general Pinochet ha sido citado por el Presidente, y que ése será el último hecho de este incidente.

Ballerino responde que el ejercicio de seguridad, alistamiento y enlace, conforme a los reglamentos, concluirá dentro de un par de horas[7].

A las 11, Aylwin recibe a Pinochet en La Moneda, en el segundo encuentro severo de alto nivel de esta mañana. Las manifestaciones de rechazo en la puerta son ahora más fuertes y excitadas.

El general se enoja con Carlos Bascuñán:

—Mire, lo tengo clarito —increpa—: usted y el gordito ése son los que me arman estas cosas.

—No sé a quién se refiere, general.

—Al gordito que está aquí, un poco más adentro.

—Perdone que insista: no sé a quién se refiere.

—Al señor Correa.

—Al ministro Correa.

—Sí, ¡usted y el ministro Correa son los que me organizan esto! Un día los voy a encarar...

Bascuñán no se inmuta: está preparado. Mientras avanzan hacia el despacho del Presidente, arguye que, aunque todo se cuida minuciosamente, hay cosas que no se pueden controlar. Pinochet se detiene un segundo en el rellano de la escala, exasperado:

—¡Bascuñán, no me discuta! ¡Yo fui muchos años Presidente, y sé que cuando las cosas se quieren, se pueden!

—No, general —dice Bascuñán, en un gesto de audacia que parece ensayado—. Si así fuera, tendríamos que entender que las pifias al Presidente en la Parada Militar fueron deliberadas.

Pinochet murmura algo inaudible y da la espalda para esperar que se abra la puerta del gabinete presidencial.

El Presidente está enojado por la tensión desatada ayer, y no le parece una buena excusa la conversación entre Rojas y Ballerino, ni tampoco lo que el general llama "campañas" de prensa. El país ha sido alterado más allá de lo que conviene a las instituciones y no está dispuesto a tolerarlo.

Pinochet explica extensamente cómo el Ejército aprecia el desarrollo de una campaña en su contra, agravada por las actitudes poco deferentes de algunos altos funcionarios. El no quisiera producir estas alteraciones, no quisiera que el Ejército esté inquieto: sólo aspira a la normalidad; pero en las circunstancias que se han dado...

Al mediodía, Aylwin recibe a los generales Matthei y Stange. A 300 metros, Pinochet atiende a los senadores Jaime Guzmán y Sergio Fernández. Cada uno da detalladas explicaciones, cada uno afirma férreamente su punto de vista.

Esa tarde, la Cámara emite una declaración de respaldo a la democracia aprobada por 74 votos contra 5 y dos abstenciones. El ministro Krauss expresa que las explicaciones no justifican la acción "que ha producido alarma en la ciudadanía".

Al frente, el Ejército da a conocer un comunicado que declara, con una pendiente irónica, que el ejercicio "alcanzó en plenitud los objetivos perseguidos".

Las extenuantes jornadas paralelas confluyen nuevamente en la noche, cuando Aylwin, Rojas, Valdés, Viera-Gallo y parte del gabinete son recibidos por Pinochet en la Escuela Militar para la graduación de 114 oficiales.

Viera-Gallo llega un poco antes, para hablar con Ballerino. Lo encuentra tendido sobre un sillón: ha tenido un alza de presión, y sangra por la nariz.

Conversan con calma. Viera-Gallo se convence de lo que pensaba hace ya meses: que un error del gobierno ha activado toda esta tensión.

Cuando las autoridades emergen hacia el patio de la Escuela, la simetría se completa sutilmente: las rechiflas son ahora para el gobierno, el aplauso abrumador para el general.

Hay algo de acero en esta manera de presentarse en los territorios adversos.

Cerca ya de cumplir su plazo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados ve pasar el Año Nuevo en medio de un frenético trabajo de clarificación de las 700 carillas de testimonios y documentos que ha reunido.

Pero uno de sus miembros, el diputado de RN Alberto Espina, se debate en la duda. Tras una reunión que ha sostenido con oficiales de Ejército en un departamento en Viña del Mar, Espina ha llegado a la convicción de que la situación es aún delicada; el informe que emita la comisión podría ser muy falible si no se logra que los implicados tengan alguna voz ante ella.

Además, ha vivido en carne propia la hostilidad que el proceso suscita en la derecha. Después del interrogatorio al brigadier Arangua ha recibido fuertes reproches en su propia bancada y hasta ha sentido la necesidad de consultar a Jarpa si sigue adelante. El líder de RN, lacónico como siempre, lo apoya secamente.

El jueves 3 de enero, Espina decide quebrar la disyuntiva. Mientras su amigo y colega Raúl Urrutia conduce el auto por Viña, Espina marca el teléfono de la Comandancia en Jefe y pide una audiencia urgente con el general Pinochet.

Al poco rato recibe respuesta: mañana, a las 12.30, en Bucalemu.

Espina y Urrutia se presentan puntualmente. El general los acoge en tenida veraniega y los invita a la terraza, donde culmina una vaina.

La conversación comienza con morosidad, y recién a los 30 minutos deriva hacia el papel de la comisión. Espina quiere garantizar que no hay ánimo persecutorio y que los diputados han trabajado con rectitud; Pinochet replica que no tiene reparos contra la comisión, sino contra el uso publicitario que se ha hecho[8].

—El informe —dice el diputado— va a concluir en que hay responsabilidad de su hijo en la obtención de dineros que provienen del Ejército. Eso puede tipificar un delito. Nada hace presumir que usted no lo sabía.

—Mire, Alberto: están persiguiendo a mi familia, como han querido perseguir al Ejército. Yo sé bien para dónde va esto —hay un breve silencio, y luego un torrente en el que el general va enrojeciendo con el énfasis—. Yo tendré mil defectos, pero nunca en mi vida he sido ladrón. ¿Usted cree que con 16 años de gobierno, si hubiera querido robar, no hubiera tenido cómo hacerlo? Con los puros gastos reservados me podría haber hecho rico. No, yo debería haber hecho como todos los presidentes: haber pescado a mis hijos y darles embajadas. Lejos. A mí me podrán cargar los derechos humanos; y nunca he dejado de decir lo que pienso de eso. ¡Por Dios, que me he ganado hasta un atentado! Pero jamás me he robado un peso. ¡Y jamás me imaginé terminar mi carrera con que me acusen de ladrón!

—General —responde Espina, notando la rabiosa congestión de Pinochet—, usted tiene el legítimo derecho a defenderse.

—Oiga, pero ¿usted viene a título personal?

—A título personal, y a decirle que en la comisión yo le garantizo que su prueba será analizada con toda seriedad, y si usted quiere concurrir...

—No, eso no, mi amigo. Yo quiero ayudar, pero no voy a exponer al Ejército a eso. Propóngame otra cosa.

—Que vaya a declarar su hijo.

—Yo no lo veo. Mire: tres veces. Tres veces lo eché de Chile. Cuando supe esto, lo llamé por teléfono. Vino para acá. Pero no lo veo. Si quiere, entiéndase con él.

—Yo lo puedo hacer, pero primero quiero que usted sepa. Usted es el comandante en jefe del Ejército, y aquí está involucrada su institución; usted es el que tiene que decir que se defienda de las imputaciones si cree que son falsas. Y no se entregue, porque lo noto en una actitud entreguista.

—¿Yo, entreguista? —el general, incómodo, llama a un ayudante y pide un número de teléfono, que dicta a Espina.

El sol del verano se curva lentamente en Bucalemu. Al almuerzo, el general aprovecha a los invitados para probar el ají, que le está limitado por orden médica. A las 17, los diputados dejan la hacienda. Cerca del portón, Pinochet toma a Espina de un brazo:

—¿Tiene hijos, usted?

—Sí, chicos. Nueve años, ocho años, en fin...

—Nunca escupa al cielo, Alberto.

Aquella noche, en Santiago, el diputado Jorge Schaulsohn permanece hasta tarde en su oficina céntrica redactando el preinforme que la comisión deberá revisar la próxima semana.

En el fin de semana, Espina prosigue su implacable marcha. Logra hablar con Augusto Pinochet Hiriart y obtiene una reunión para el lunes 7. Nuevamente va con Urrutia. Ahora se encuentran con un hombre joven, inquietantemente parecido al comandante en jefe, que a veces se muestra indignado con la barahúnda que se ha armado a su alrededor y a veces parece del todo indiferente.

Dedica largos minutos a describir los duros encuentros con su padre desde que era un joven oficial de Ejército. Su desgracia, dice en un momento, ha sido llamarse como se llama: se lo ha condenado, desde antes de que pudiera darse cuenta, a una vida castigada y vicaria. Mientras estuvo en el poder, su padre no le dedicó más que audiencias cortantes de diez minutos; no es en absoluto el hijo privilegiado que quieren pintar, sino la víctima de una historia ajena. Siendo así, no tiene interés en agrandar el problema actual: no ve necesidad de concurrir a la comisión, que no puede obligarlo.

Espina ensaya sus dotes de penalista e invoca su responsabilidad como adulto. Tras un largo forcejeo, logra que Pinochet Hiriart acceda a presentarse en Valparaíso.

Esa noche, Espina se reúne con los otros redactores del preinforme —Schaulsohn, Chadwick y Ortega— para trabajar hasta cerca de las 3 de la madrugada[9]. Allí anuncia que pedirá una sesión para recibir a Pinochet Hiriart, volver a interrogar a los abogados de la Corfo

y del Banco del Estado y recibir al general Fernando Hormazábal, quien ha solicitado aclarar su declaración anterior.

El informe deberá esperar unos días más.

Pero ahora se siente, por primera vez, la mano del gobierno en la comisión. El Presidente ha hecho saber que estimaría apropiado que el informe fuese unánime; el ministro Correa enfatiza este mensaje al diputado Schaulsohn, el mismo lunes 7, en La Moneda.

En los dos días siguientes, Correa y Boeninger instalan tienda en Valparaíso para mantener estrecho contacto con los redactores[10]. Correa inventa un ingenioso término para explicar su presencia: el gobierno desea que el informe sea "contextualizado" en las relaciones cívico-militares. El eufemismo apenas se contiene.

El 8, en el auditorio del Estado Mayor, en un acto presidido por el general Lúcar, el coronel Juan Emilio Cheyre lee una declaración que confirma la irreductible adhesión de la institución al comandante en jefe, "cualesquiera sean las características que revistan las acciones infamantes que procuren dañar a su persona".

El 15, a las 9.40, en medio de una nube de reporteros, Augusto Pinochet Hiriart llega a la Cámara de Diputados. Durante las tres horas que responde preguntas insiste en que no es socio de PSP, aunque sí de SP, una empresa menor en la que su amigo Eduardo LeRoy le ofreció participar. Fue por esta amistad, agrega, que consiguió, "en el exterior", créditos por tres millones de dólares para echar a andar la fábrica de fusiles.

Por esa razón, los socios de PSP le dieron poderes para que cobrara al Ejército: los tres millones de dólares que le pagaron se destinaron a cancelar esos préstamos.

Los diputados oyen la rara confirmación —la primera de que el dinero del Ejército no fue finalmente a las manos de LeRoy y Juan Fernández—, pero ninguno insiste.

Sus contactos exteriores quedan bajo el misterioso velo de la industria mundial de armas. Cuando explica que también consiguió 500 mil dólares para la segunda sociedad, SP, pide que la sesión se declare secreta y cuenta que parte de esa suma la pagó con asesorías al gobernante libio Muammar Gaddafi, lo que siembra un escéptico asombro en la comisión.

Las declaraciones sobre su padre coinciden con lo que ha oído Espina. Las relaciones entre ambos no sólo parecen enervadas, sino casi excluyentes. Dada esa tensión filial, Pinochet Hiriart asegura que jamás le habría dicho a su padre nada sobre el negocio de PSP. Los diputados quedan impresionados[11].

Tras Pinochet Hiriart ingresa el general Hormazábal. Desea precisar su declaración anterior. Una resolución firmada por él, en poder de la comisión, afirma que la orden de compra la dio el comandante en jefe. Otra copia de esa misma resolución, en poder de la Contraloría, establece que fue el vicecomandante.

Hormazábal dice que la primera es un borrador de la segunda; que esta última corrige una información errónea. Súbitamente se oscurece el problema central del conocimiento de Pinochet.

Todo marcha según lo previsto.

Aquella tarde, "sorpresivamente" según la ubicua prensa de esos días, el general Pinochet llega a la casa del Presidente Aylwin. Pero la sorpresa ha sido cuidadosamente planeada. Comenzó días antes, justo cuando los ministros Correa y Boeninger consumían sus horas en el Parlamento. Primero fue el senador Sinclair, que se acercó a Correa con una expresiva frase: "Quiero hablarle a nombre de un hombre caído". Después agregó algo más tajante:

—Mire, aunque el comandante en jefe hubiese firmado de su puño y letra los cheques, no vamos a permitir que lo toquen.

—Lo entiendo —dijo Correa—. Nosotros podemos ayudarlo sin precio alguno que no sea el de la lealtad...

Luego hubo un almuerzo privado de un grupo de senadores, en donde el mismo Sinclair explicó los sentimientos del Ejército sobre la comisión. Dijo que hería la dignidad de la institución y mantenía la sospecha de que el gobierno quería debilitar al comandante en jefe. Si es cierto que no desea tal cosa, el Presidente debería hacer un gesto explícito hacia el general, un gesto que, junto con confirmar la eminencia del Estado, aclarase la política de "mano tendida".

Los senadores Máximo Pacheco (DC) y Jaime Gazmuri (PS) transmitieron el mensaje a Aylwin y dieron origen a la invitación del Presidente para esta tarde de té en Arturo Medina.

La conversación comienza con cierta tensión, pero muy rápidamente se abre paso un clima de antigua cordialidad. El té sirve para reforzar el tono privado.

El general se queja, sin culpar a nadie, del mal ambiente que se ha generado: el Ejército se sabe en el centro de todo, pero no le gusta: los soldados, don Patricio, no somos para esto, no nos forman para vivir de punta con las autoridades. Incluso cuando repite sus reclamos contra el ministro de Defensa parece que lo hiciera con cierta resignación. El Presidente, midiendo cada palabra, dice que lo primero que hay que despejar es que el gobierno no busca la salida del comandante en jefe. Puede contar con eso, general.

A medida que avanza la tarde, Aylwin y Pinochet progresan poco: no pueden ser demasiado explícitos. Pero al final, el general cree haber entendido que el gobierno influirá para evitar las acciones agraviantes en su contra. El Presidente cree haber entendido que los militares guardarán estricta lealtad al Ejecutivo, con la garantía de su jefe. Después de todo, ¿cuántas veces repitió el general la frase "usted es el Presidente"?

En la semana siguiente, los redactores del informe, reducidos a Schaulsohn, Espina, Chadwick y Ortega, trabajan duramente. El ministro Correa no les pierde pisada. Pero no es el único: por teléfono, informado al detalle, también Ballerino. Y un tercero hace el nexo entre todos: Viera-Gallo[12].

Los redactores logran un primer trabajoso acuerdo: consignarán, lo más secamente, todos los documentos y testimonios relevantes. El segundo acuerdo es el destino del informe: puesto que se presumirán irregularidades administrativas —y no penales—, no se enviará a la Corte Suprema ni al Consejo de Defensa del Estado, sino a la Contraloría.

Las conclusiones dicen, sintéticamente, cinco cosas[13], pero sólo la última se refiere al nudo del problema: las actuaciones de Pinochet Hiriart excedieron las atribuciones propias de un mandatario (es decir, que podría haber sido socio). Sobre esta base, las bancadas promueven una objeción moral contra Pinochet Hiriart: será el castigado del episodio. La sexta conclusión, por la cual se intenta establecer que el comandante en jefe no tuvo conocimiento, motiva una polémica y dos postergaciones: la "absolución" parece un exceso a varios diputados. Por mucho que se busque evitar agravios, esta afirmación no puede ser sostenida por la comisión. La conclusión sexta se elimina.

En la noche del 24 de enero, las 61 carillas son leídas en la Cámara en un silencio espeso. Conforme a las instrucciones de los jefes de bancadas, los 84 diputados presentes lo aprueban.

Sólo Sergio Elgueta (DC) se desmarca del férreo alineamiento, leyendo un texto que describe, en 11 puntos, numerosos delitos eventuales y declara que la responsabilidad del comandante en jefe no puede ser excusada en nombre de la delegación de facultades. Mientras se alza un vocerío de incomodidad, Elgueta concluye dramáticamente:

—En verdad, señor presidente, nosotros podemos hacernos la misma pregunta que los orgullosos generales formularon en Delfos: ¿Qué puede perder Esparta? Y la respuesta fue dura y seca: la corrupción y el lujo[14].

Seis días después, Viera-Gallo despacha el informe a la Contraloría. A fines de mayo, el contralor responde que a su juicio no existen irregularidades administrativas. Pero no opina sobre aspectos penales; en vista de ello, la Cámara envía el informe al Consejo de Defensa del Estado.

El diputado Schaulsohn se indigna y califica el trabajo del contralor como "incompleto, sorprendente y decepcionante". Va más lejos: propone a su bancada una acusación constitucional por "notable abandono de deberes" en contra del contralor. El 5 de junio, la bancada PS-PPD acoge la ira de Schaulsohn y designa una comisión para redactar el libelo.

El brioso equipo no llega a escribir ni una línea.

Notas

1. El único lugar donde se registró la existencia de esta reunión fue el *Informe Confidencial* elaborado por el general (R) Ernesto Videla. Videla escribe desde una posición que propicia el entendimiento del gobierno con los militares, pero su información es usualmente de altísima calidad. El valor de *Informe Confidencial* para entender este período no ha sido debidamente revelado. Ver: *Informe Confidencial*, diciembre de 1990.

2. Algunas revistas describieron desplazamientos de tropas e incluso de material de guerra. Esta investigación no halló evidencias de ellos.

3. La primera información fue entregada por Germán Gamonal, a través de radio *Chilena*.

4. Robledo, Marcos; y Cavallo, Ascanio: *Toda la verdad sobre el acuartelamiento*. Diario *La Epoca*, 21 de diciembre de 1990.

5. Una versión conocida por esta investigación después de la publicación de este capítulo en la revista *Hoy* sugiere que Lúcar estaba informado de los hechos antes de llegar a la ceremonia de Carabineros. De hecho, Lúcar estuvo reunido con Pinochet y Ballerino, y al parecer el propio comandante en jefe le encargó que concurriera a la Escuela de Carabineros con normalidad.

6. La ausencia de políticos en la casa presidencial hace pensar a algunos en una soledad mayor: la del miedo al golpe de Estado. Se especuló después acerca de que políticos oficialistas buscaron asilo o se prepararon para ello. Esta investigación sólo constató la escasa asistencia a la casa del Presidente y la ninguna intención de llamar a las bases para resistir al movimiento militar.

7. Rojas creerá luego que fue una operación montada por Ballerino, destinada a sacar al ministro de Defensa. Esto se basa en las llamadas paralelas de Ballerino y en las diversas versiones que entregó. Esta opinión no es compartida por otros altos funcionarios, para quienes es claro que el jefe del Comité Asesor fue facultado para negociar, con un mandato de alcances inciertos.

8. Scantlebury, Marcia: *Alberto Espina, diputado de RN. Su reunión con Pinochet*. Revista *Caras*, 14 de enero de 1991.

9. Molina, Pilar: *La hora final del caso cheques*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 13 de enero de 1991.

10. Rodríguez, Ana Eugenia: *El destino de la Comisión*. Revista *Hoy*, N° 704, 14 al 20 de enero de 1991. Los diputados negaron toda injerencia del gobierno. La contradicción más flagrante ocurre cuando Schaulsohn declara que se decidió no citar a Pinochet porque no pareció necesario, pese a que lo que se quería saber es si conoció o no las operaciones: Rubilar, Eduardo: *Jorge Schaulsohn: "La verdad no se negocia"*. Diario *La Epoca*, 6 de enero de 1991.

11. *Diputados de la "Comisión de Cheques" intentaron hacer un perfil humano de Pinochet Hiriart*. Diario *La Segunda*, 16 de enero de 1991. La versión completa en: *Lo que dijo el hijo de Pinochet*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 20 de enero de 1991.

12. Un reconocimiento expreso de que el gobierno frenó la investigación, en: Boeninger, Edgardo: *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*. Editorial *Andrés Bello*, Santiago, 1997. Este libro es de especial importancia por su inteligencia para situar las crisis en un marco histórico-político amplio.

13. Las cuatro primeras: que en la quiebra de Valmoval podría haber transgresiones a la ley; que el patrimonio de Corfo pudo ser afectado con el otorgamiento de créditos a PSP y con su posterior cesión gratuita al CIMI; que en los poderes con que actuó el Ejército en la quiebra de Valmoval podrían haberse violado procedimientos legales; y que podrían existir reparos a la asociación del CIMI con PSP antes de que una ley lo autorizara. Cámara de Diputados: *Informe de la comisión investigadora del giro de sumas de dinero por el Ejército*, 24 de enero de 1991.

14. El texto del informe, sin sus notas, junto con la intervención de Elgueta, fueron publicados como separata en el diario *Fortín Mapocho*, 26 de enero de 1991.

9

La brevedad del perdón

La Comisión de Verdad y Reconciliación realiza un trabajo temible y exhaustivo para llegar a su informe de marzo de 1991, un instante que el país espera en ascuas. A pesar del rechazo de las Fuerzas Armadas, logra una precisión incontestable.

En octubre de 1990, el Presidente Patricio Aylwin lee un documento altamente secreto: un preinforme de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Un par de días después, recibe a Raúl Rettig y a los miembros de la Comisión, que le solicitan prorrogar por otros 90 días el plazo de entrega de su informe final, conforme lo ha previsto el decreto de creación. El Presidente cumple con la formalidad de acceder: en realidad, se ha sabido desde el principio que los seis meses, que vencen a fines de octubre, serían insuficientes. El documento secreto lo confirma.

Para entonces, la Comisión trabaja a toda máquina.

En el primer mes no ha tenido ni dónde sesionar: se reúne en las oficinas privadas de algunos de los comisionados. El Ministerio de Justicia no tiene cómo proporcionarle recursos: en los dos meses y medio previos a la entrega del mando, el antecesor de Francisco Cumplido ha vaciado gran parte del presupuesto del año.

Una vez que el Ministerio de Hacienda accede a suplementar los fondos de Justicia, la Comisión puede disponer de una oficina especial en Teatinos y comenzar a contratar personal auxiliar, aunque siempre con honorarios casi simbólicos. El presupuesto nunca da para que los comisionados almuercen; apenas cabrán unos cuantos refrigerios.

Pero además de esas limitaciones objetivas, la propia Comisión demora en definir la lógica y la mecánica de su trabajo. Durante mayo y parte de junio sesiona una vez por semana, 90 minutos por reunión, con audiencias dedicadas a los organismos de defensa de los derechos humanos, para allegar información ya sistematizada. A fines de junio, la evidencia de lo que falta obliga a ampliar las sesiones a dos por semana —martes y jueves— y a extender el horario desde el almuerzo hasta el fin de la tarde.

Las contrataciones de empleados de planta —abogados, estudiantes, secretarias, documentalistas— producen una inexpresada tensión. Anticipándose al secretario ejecutivo, los comisionados se reservan el derecho de designar al personal: cada uno quiere tener a unas cuantas personas de confianza allí donde se realizará el trabajo básico.

Además, estiman que no sería conveniente incorporar a gente que haya trabajado en organismos de derechos humanos, para que no se los acuse de prejuzgamiento.

Pero en este punto, el secretario Jorge Correa interviene para advertir que, como él tampoco es un especialista en el área, necesitará a lo menos a un asesor experimentado, que dé garantías de objetividad y conocimiento jurídico. Así llega Carlos Fresno, ex abogado de la Vicaría de la

Solidaridad, que será clave en la sociología de la Comisión, alentando a los juveniles equipos de abogados. Mucho después, ya cerca del final, y por razones parecidas, se incorporarán otros dos juristas ligados a la Vicaría, Pedro Aylwin y Gustavo Villalobos.

Se atribuye al mitológico profesor Avelino León la chilenización de un antiguo proverbio coloquial romano: *Suavitis, suavitis, in modus; duritis, duritis, in ré.* Los miembros de la Comisión, que lo conocen, sienten que podría ser su lema. La prudencia de las formas debe presidir todo el trabajo; el rigor de las conclusiones no será evitado.

A lo largo de los primeros meses, la Comisión discute arduamente cómo conseguir que las Fuerzas Armadas se integren a su tarea, aunque sea identificando a sus propias víctimas. Rettig propone un camino sintético: oficiar a los comandantes en jefe para que entreguen esas nóminas. Pero las notas caen en un silencio completo.

De pronto, los hallazgos de cadáveres en Colina, Pisagua, Chihuío, Calama, Copiapó, dan un abrupto impulso político a las respuestas. Las de la Armada, la FACh y Carabineros llegan con sigilo.

El Ejército prefiere un acto público, en el que entrega, el 6 de agosto, cuatro tomos y un video a cada uno de los comisionados. El primer tomo contiene un análisis de la situación que condujo al golpe de Estado de 1973. El segundo es una relación de víctimas militares que abarca a todo el personal muerto en actos de servicio, incluyendo los que pueden ser calificados como accidentes. Los dos últimos reproducen, por fotocopias, documentos y libros sobre el fenómeno insurreccional de comienzos de los 70. El video se estructura en tres partes: una ilustra el estado de caos y violencia durante el gobierno de Allende; otra reseña, con imágenes de mutilaciones y cadáveres, las muertes de militares en atentados subversivos; y otra recoge testimonios de víctimas civiles de actos terroristas, todos de Televisión Nacional[1].

Los miembros de la Comisión se sienten notificados: esta será la única colaboración del Ejército.

Pese a ello, algunos comisionados ponen atención a una sección del capítulo 5 del Tomo 1, titulada *Planteamientos que se someten a la Comisión*, que solicita tres cosas: 1) los hechos presentados por el Ejército deben formar parte del cuadro global; 2) las bajas, fallecidos y heridos, deben ser reconocidos como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos; y 3) medidas legales y administrativas que tiendan a "prevenir e impedir" la repetición de estos hechos.

De un modo oblicuo, al entrar en la lógica del análisis y las solicitudes, los militares han terminado por aceptar la necesidad histórica de la Comisión.

Las otras ramas de las Fuerzas Armadas se movilizan con discreción. El auditor Jorge Beytía recibe del almirante Martínez Busch la instrucción de sondear a miembros de la Comisión; a la Armada le preocupa especialmente la acusación de que en el buque-escuela, la emblemática *Esmeralda*, haya habido torturas. Las conclusiones de las indagatorias son sombrías.

La FACh procede con apertura. El general Matthei se siente libre de las violencias de la primera fase y sus abogados remiten sin dilación los expedientes de sus consejos de guerra, el aspecto más discutido de la gestión de la FACh, pero de responsabilidad de otros jefes: el entonces comandante en jefe, Gustavo Leigh, y el director de Inteligencia, Enrique Ruiz.

Los carabineros hacen más *lobby*. Varios generales concurren a reuniones con la Comisión, discuten con sus miembros, se quejan del daño que les producirá una inculpación muy severa, luchan por su imagen.

Lo que impacta a los comisionados son los pocos pero contundentes testimonios de los involucrados en la violencia estatal. El general (R) Sergio Arellano se reúne con tres comisionados en la oficina de Gonzalo Vial y los convence de que las ejecuciones perpetradas por su famosa

"Caravana de la Muerte"[2] fueron el resultado de órdenes superiores. En cambio, el comandante Miguel Krasnoff Marchenko, ex jefe de la agrupación *Halcón* de la DINA, se erige como el único oficial activo que responde un oficio, declarando su inimputabilidad y afirmando que, de haber estado en las situaciones de que se lo acusa, habría actuado igual, y lo volvería a hacer.

Las versiones de gente de izquierda reclutada por la fuerza como "colaboradores" de la DINA completan el cuadro. Marcia Merino, *La Flaca Alejandra*, y Luz Arce[3], entregan testimonios detallados, con nombres y chapas, de la estructura del terror estatal. Ingrid Olderock, antigua agente de inteligencia de Carabineros, añade pormenores impresionantes. Los ex agentes de la DINA aportan un dato adicional: la red que sigue vinculada a los antiguos jefes del aparato de seguridad está distribuyendo instrucciones para que nadie concurra a la Comisión.

Sensibles al desfiladero en que se mueven, los integrantes llegan pronto a la conclusión de que no podrán determinar responsabilidades individuales; aun en el evento de tener certezas absolutas sobre los culpables, no podrán mencionarlos; lo único que podrán hacer será enviar esos antecedentes a la justicia.

Los atentados terroristas que ocurren en esos meses añaden otra razón: la exposición de los agentes estatales a la *vendetta* propagandística. La "verdad innominada" comienza a imponerse sin necesidad de presión externa.

Pero el secretario de la Comisión queda preocupado. El gobierno no interviene, no presiona, no pregunta. No sabe qué tipo de informe va a tener. ¿Y si después no le gusta? Pide entonces una reunión en La Moneda y explica a los ministros lo de la "verdad innominada". Los ministros asienten, no hay comentarios. Todo funciona muy bien.

Con sobresaltos: cuando, el 7 de noviembre, es derrotada en el Senado la iniciativa gubernamental para abolir la pena de muerte, por sólo un voto, el ministro Cumplido despacha unas duras palabras contra el senador designado Ricardo Martin[4].

Martin, que ya vive bastantes tensiones entre su función parlamentaria y su calidad de miembro de la Comisión, se siente tocado y decide avisar a Rettig que renunciará. El veterano jurista se mueve con la agilidad mental que su edad no presagiaría:

—No, Ricardo, espera, voy a hablar con el Presidente, esto no puede ser.

El aviso da tiempo a Aylwin para pedir explicaciones a Cumplido y conseguir la grabación de sus declaraciones en la radio *Cooperativa* y en Televisión Nacional. Luego invita a Martin a tomar té en La Moneda.

Martin llega decidido a renunciar a la Comisión. Pero el diálogo lo va persuadiendo

—Mire, yo participo en una comisión para ayudar al gobierno, y resulta que uno de sus ministros me descalifica públicamente. Así no puedo seguir, el señor Cumplido me ha declarado la desconfianza del gobierno.

—Tengo la grabación de lo que dijo Pancho. No es como usted piensa, Ricardo. El no quiso ofenderlo ni descalificarlo. Hablé con él y me explicó.

Martin escucha y vacila. Al fin descarga:

—Presidente, usted me conoce y sabe que nunca me han inspirado otros propósitos que los de servir a la justicia y a los altos intereses de la nación.

—Por eso mismo es que le pido que se quede.

"Me embromó", dirá luego Martin, "con eso me embromó".

Para entonces, la Comisión debe acelerar el tranco. Varios de los titulares deben pedir permisos especiales en sus trabajos y el horario sube, entre los más dedicados, a unas 14 horas diarias, de lunes a viernes. La asistente de Zalaquett, Ingrid Wittevroodt, de nacionalidad belga, bate los récords de resistencia en las sintéticas madrugadas del verano: los funcionarios la llaman *Duracell*.

En ese período los comisionados se proponen apreciar cada caso. Todos los días, un taxi les lleva a sus casas un paquete de unos 200 resúmenes ejecutivos —preparados por la secretaría—, de entre una y diez páginas, que comprimen expedientes que a veces llegan a varios miles de fojas.

El compromiso es estudiarlos y, a primera hora de la mañana siguiente, llamar al secretario y señalarle dónde hay dudas, para la discusión de conjunto. Para esas dudas, los abogados allegan los *dossiers* y los comisionados debaten los detalles. Unos cuatro mil expedientes son analizados con este régimen de marcha forzada.

Las cuentas son fáciles de sacar para los funcionarios, por la repetición de preguntas y el conocimiento demostrado: Gonzalo Vial lee todos los resúmenes, cumpliendo con su advertencia de las primeras sesiones:

—Como seré yo quien ponga la firma, quiero conocer todos los casos.

Cuando José Zalaquett oye esa afirmación inicial, siente que se fija una medida: el informe será exhaustivo y no procederá, como ha temido, por la idea de los "casos ejemplares". Al mismo tiempo ve la garantía de que el informe final podrá resultar inatacable.

Zalaquett también lee todo. Entrenado en la escuela de las confirmaciones absolutas de Amnistía Internacional, sabe que un solo caso con bases insuficientes podría deteriorar todo el trabajo. Con su experiencia, entiende que las víctimas se inclinan a exagerar y que en situaciones como la de Chile existe el peligro de los desahogos largamente reprimidos.

Laura Novoa, conmovida por la abundancia de sucesos a los que nunca había tenido acceso, es la tercera lectora exhaustiva. A diferencia de los anteriores, e igual que José Luis Cea, ella no está adiestrada en el escepticismo: la conmoción que le causan los testimonios la inclina a aceptarlos con piedad. Mónica Jiménez repasa una cantidad desconocida, pero muy abultada.

De los próceres mayores, Jaime Castillo, Ricardo Martin y Raúl Rettig, todos sospechan lo mismo: que leerán únicamente lo más importante; como los miembros de las cortes, los tres juristas se reservan para lo de fondo. Rettig añade a ello la recién adquirida confianza en las capacidades de Vial y Zalaquett, por cuyo rigor desarrolla una auténtica admiración.

Cercados por las expectativas del país, e internados a solas en el territorio más doloroso del Chile contemporáneo, los comisionados desarrollan la solidaridad de los que descienden en conjunto a un infierno escondido.

A poco andar, Rettig renuncia a su política de equilibrios —uno de derecha, uno de izquierda— en los trabajos y visitas de la Comisión. En realidad, se puede confiar en todos.

El veterano jurista sólo no puede fiarse de sí mismo. El gobierno ha recibido versiones acerca de un posible atentado en contra de Rettig, y el director de Investigaciones, el general (R) Horacio Toro, se ha apresurado a ponerle dos vehículos de escolta, uno adelante y otro detrás.

—No he visto nunca nada más incómodo —protestará—. Ni siquiera se puede disponer de alguna arrancada.

En diciembre de 1990, la Comisión decide nombrar un grupo redactor, integrado por Cea, Vial, Zalaquett y el secretario Jorge Correa. Los comisionados se distribuirán partes del informe y las entregarán al equipo redactor para que las haga coherentes y confiera cierta unidad al estilo.

Este subgrupo discute y presenta un índice detallado. La Comisión agrega el calendario y las asignaciones individuales. Rettig escribirá el exordio, que justifica la necesidad del trabajo, su extensión y su cobertura.

Zalaquett asume la redacción de la parte conceptual, que explica las normas del derecho internacional y nacional por las cuales las víctimas pueden ser consideradas sujetos de violación de derechos humanos o de violencia política. Las actuaciones de la DINA y de la CNI, que parecen contramodelos de las doctrinas, corresponden naturalmente a Zalaquett.

A Vial se le encomienda uno de los capítulos más peliagudos: la descripción del cuadro histórico que rodea al 11 de septiembre de 1973: este texto será discutido y reescrito unas cuatro veces antes de que la totalidad de los comisionados lo suscriba; algunos de ellos lo usarán más tarde en sus clases como texto de estudio.

Como si fuera poco, Vial se encarga también de redactar la parte que se refiere a los tres primeros meses del régimen militar, donde se produce más de la mitad de las víctimas y que

ha sido reconstruido gracias a los registros de documentos guardados en la Biblioteca Nacional y el Instituto Médico Legal. Pareado con su esfuerzo, Zalaquett se hace cargo de la relación de víctimas que sigue a esa fecha.

El profesor Cea realiza el exhaustivo estudio de las normas jurídicas con las cuales actuó el gobierno emergido del golpe, así como el modo en que se comportó la justicia frente a ellas.

El senador Ricardo Martin, que se siente impresionado por la aplicación metódica de sus colegas, se reserva una de las partes más sensitivas: la descripción de las actuaciones de la justicia militar. Su trabajo es severo, implacable e inmarcesible: el antiguo miembro de la Corte reflota aquí toda una historia de estrictez del derecho.

Mónica Jiménez se aplica como asistente social a retratar el dolor de las familias de las víctimas, en un capítulo que recoge, como un asordinado coro, las voces de los dañados, perseguidos, dolientes. El texto es limado para despojarlo de reiteraciones, exageraciones y requiebros.

Laura Novoa redacta el conjunto de proposiciones de reparación, un capítulo donde se respiran ansias de solidaridad y respeto. Otra vez, los comisionados han de intervenir para introducir cierta frialdad jurídica.

Para el último capítulo, un llamado a no reproducir "nunca más" los hechos, Jaime Castillo discute un primer borrador con José Luis Cea en el restaurante Nueva York 27. Con adecuaciones, será el texto definitivo.

El informe final trabaja sobre el principio de la "convicción moral". No pudiendo tener convicción jurídica, y descansando sobre la conciencia de los comisionados, la frase tiene fuerza y ambigüedad: las familias de las víctimas podrán sentir con ella el reconocimiento oficial; no contarán, en cambio, con el imperio de la justicia.

Los comisionados procuran que la "convicción moral" sea absoluta. Aunque no se busca la unanimidad total, sólo se integran los casos en que no existen reparos consistentes. Los demás pasan a la categoría incierta de "sin convicción".

Entre los antecedentes con plena convicción, y especialmente entre las víctimas imputadas a la DINA, aparecen a menudo los nombres de los presuntos culpables. Son identidades que se repiten: un grupo de militares que pareció entregarse a las tareas de represión con particular dedicación. Esos nombres se despachan, en estricto secreto, a los tribunales, donde permitirán reabrir numerosos procesos temporalmente dormidos.

Además, la Comisión divide a las víctimas en dos categorías que lo cubren todo, a lado y lado: los que cayeron en virtud de violaciones a sus derechos humanos, y los que fueron ultimados en el contexto de la violencia política. Así entrarán los agentes del Estado caídos en actos de servicio y los civiles muertos en manifestaciones callejeras.

La Comisión identifica 2.298 víctimas, de las cuales 2.130 corresponden a violación de derechos y 168 a casos de violencia. Otros 988 expedientes son declarados sin convicción[5]. Para proseguir la indagación de estos últimos, y administrar las medidas de reparación, la Comisión recomienda crear un nuevo organismo.

(Esta entidad, creada por una ley aprobada en el Parlamento un año más tarde[6], se denominará Corporación de Reparación y Reconciliación. Será presidida por el antiguo jefe jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, Alejandro González, y tendrá entre sus titulares a dos de los miembros de la Comisión Rettig, el profesor Cea y el ex secretario ejecutivo Jorge Correa. En su informe final, de diciembre de 1996, agregará 899 víctimas, de las cuales 644 corresponden a violación de derechos humanos y 255 a violencia política. De esas personas, 776 murieron y 123 están desaparecidas. Con ello, el total se eleva a 3.197. Ver cuadro[7].)

LOS MUERTOS 1973-1990	Comisión	Corporación	Total
VICTIMAS DE AGENTES DEL ESTADO			
A. Muertos	1.151	521	1.672
B. Detenidos desaparecidos	979	123	1.102
VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA			
A. Muertos	168	255	423
TOTALES	**2.298**	**899**	**3.197**
VICTIMAS SEGUN MILITANCIA			
Partido Socialista	410	72	482
Movimiento de Izquierda Revolucionaria	408	32	440
Partido Comunista	377	50	427
Movimiento de Acción Popular Unitaria	33	3	36
Frente Patriótico Manuel Rodríguez	19	3	22
Partido Radical	17		17
Democracia Cristiana	7	5	12
Izquierda Cristiana	7		7
Otros partidos	21	9	30
Sin militancia conocida	999	725	1.724
TOTALES	**2.298**	**899**	**3.197**

Fuente: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación: *Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política.* Santiago 1996. Estas cifras son las definitivas y fueron corregidas por la Corporación.

En la tarde del 8 de febrero, los miembros de la Comisión llevan hasta La Moneda los seis tomos del informe, recién encuadernados. El Presidente los recibe en un acto solemne, y ese fin de semana se los lleva a Las Cascadas, a los pies del volcán Osorno. Serán su lúgubre lectura de vacaciones.

—Es tremendo —confidencia a su gente más cercana—. De lo más doloroso que he leído nunca.

Mientras avanza en el texto, escudriña en las dificultades que se presentarán cuando se haga público. Las riberas del lago Llanquihue son las únicas testigos de esas cavilaciones.

La tarea y las vacaciones concluyen en dos semanas. En cuanto regresa, el Presidente inicia una ronda de conversaciones con los partidos políticos, las iglesias y las organizaciones sociales, solicitando a todos que colaboren en la creación de un clima "constructivo" luego del informe.

Al amanecer del 27 de febrero, recibe en su casa al general Pinochet; al mediodía visita al general Matthei en la suya; al día siguiente recibe al almirante Martínez Busch, y 24 horas más tarde, al general Stange.

El 3 de marzo, el Presidente trabaja todo el día en el borrador del discurso que leerá ante el país.

No lo sabe todavía, pero esa tibia noche es de presagios: en las afueras de Rancagua, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez espera que lleguen a su casa el doctor y mayor (S) de Ejército Carlos Pérez Castro y su esposa para acribillarlos a la entrada. Pérez Castro ha

sido acusado por el propio Colegio Médico de haber participado en sesiones de tormento y el FPMR quiere añadir su venganza propagandística justo cuando está a punto de develarse el pasado.

El 4, Aylwin permanece en su casa introduciendo las últimas correcciones hasta el mediodía. Luego se va a La Moneda, para almorzar con los directores de los medios de comunicación y pedirles prudencia en esta grave hora de la nación.

Simultáneamente, el Ministerio del Interior logra disuadir a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de que no realice una manifestación prevista para el momento en que se emita el discurso presidencial. La Agrupación acepta a regañadientes, y en el Ministerio hay un respiro: no pueden decirlo, pero desconfían de su propio control sobre la policía. En febrero, para el día de la entrega del informe, no pudieron impedir que los carabineros cargaran contra los emocionados miembros de la Agrupación, que querían ver en ese acto el fin de sus penurias de 17 años.

A las 19, Aylwin graba el discurso que será emitido al país dos horas más tarde. La grabación tiene un par de interrupciones, pero ninguna de ellas afecta al momento climático; el tono del Presidente hace parecer más densa la atmósfera y más pesado el silencio de los técnicos cuando, luego de explicar que la responsabilidad del Estado significa el compromiso de toda la sociedad, expone con ojos brillosos el párrafo central:

—Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.

En seguida pide "solemnemente" a las Fuerzas Armadas y a quienes hayan tenido participación en los excesos "que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado". Luego anuncia nueve medidas (de las cuales sólo dos se concretarán plenamente: la reivindicación de la dignidad de las víctimas y el proyecto de ley que establece prestaciones y procedimientos especiales para las familias), además de una comisión especial que continuará la tarea de la Comisión Rettig, y convoca al país a superar las heridas del pasado[8].

Al día siguiente, mientras el informe es devorado por un público ansioso, el cuerpo de generales del Ejército se reúne en la Academia de Guerra para iniciar el análisis pormenorizado. Los operadores políticos de Aylwin obtienen acuerdos unánimes en el Senado y en la Cámara de Diputados para apoyar el llamado presidencial a la reconciliación.

Pero el movimiento recién comienza.

El 18 el general Matthei lee una declaración en la que, confirmando su adhesión a la intervención militar de 1973, lamenta la pérdida de vidas, asume la responsabilidad por la FACh y adhiere al camino elegido por el Presidente para la reconciliación.

Alentado por este espaldarazo, e irritado por declaraciones del Poder Judicial que han denunciado "campañas de desprestigio", Aylwin se arriesga a decir que a la Corte Suprema le faltó "coraje moral" durante el régimen militar. En la polémica que se desata hay, de nuevo, "colaboraciones" espontáneas: una bomba es lanzada contra la casa del ministro Efrén Araya, lo que permite una nueva protesta del pleno de la Corte.

La embestida contra el informe la anticipan los jubilados: primero los generales en retiro del Ejército, luego los almirantes retirados de la Armada, después los de la FACh. Parejamente, lo acusan de tener sesgo político, de no completar el marco histórico y de interpretar indebidamente los motivos de las Fuerzas Armadas. Se trata de impugnaciones algo abstractas, por lo que en el gobierno se disipa el primero de los temores: que el informe fuese desmentido en su descripción de hechos y casos.

Mientras se consolida la impresión de que la veracidad factual no será atacable, en el gobierno aumenta el temor a un rumor: que el Ejército y la Armada presentarán sus objeciones en forma conjunta y pública.

Pero el almirante Martínez Busch pide una audiencia con el Presidente en el palacio de Cerro Castillo y despeja esas aprensiones. Al mismo tiempo, el almirante aclara que la Armada desea

una instancia más formal que la mera declaración pública para dejar constancia de sus planteamientos.

Es ahora inequívoco que el Presidente debe citar al Consejo de Seguridad Nacional para dar a los comandantes en jefe la oportunidad de exponer sus puntos de vista en un marco constitucional.

La rareza del período la constituye una declaración del general Stange —el 22, el mismo día en que Aylwin convoca al Consejo de Seguridad Nacional— en la que adhiere "plenamente" al llamado presidencial a superar las heridas. La sorpresa aumenta cuando tres días más tarde, el mismo Stange dice que se trató sólo de una "puntualización" y que la opinión definitiva de Carabineros se hará presente en la sesión del Consejo.

En el propio gobierno hay algún desconcierto. Para todos resulta evidente que la policía uniformada es una de las más perjudicadas en el informe; primero, por la cantidad de casos en que funcionarios suyos aparecen envueltos en violaciones a los derechos humanos; y luego —en contrapartida— por su abultado número de bajas, distante de las otras fuerzas: 69 sobre un total de 132. Es cierto que Carabineros ha sido favorecido por un tratamiento especial del gobierno. Pero si también es cierto que, como han dicho una y otra vez los comandantes en jefe, la moral interna se debilita con estas acusaciones, ¿cómo explicar el doble paso del mando policial?

Quienes leen en esto una ambigüedad de los superiores ignoran que la ambigüedad proviene, esta vez, de los hechos. A diferencia de las otras instituciones, Carabineros ha tenido acceso privilegiado y anticipado a los materiales del informe.

Ya en diciembre de 1990, reuniones secretas del alto mando con miembros de la Comisión les han permitido saber el grado de involucramiento de su personal. Funcionarios enviados por el general subdirector, Gabriel Ormeño, han retirado dos maletas con copias de 109 expedientes desde un punto en el oriente de Santiago.

¿Y qué ha hecho Stange con todo eso? Seguir una estrategia silenciosa: en los tres meses transcurridos hasta la difusión del informe, muchos de los policías envueltos en esos casos han pasado a retiro por razones limpiamente administrativas.

No hay juicio ni impugnación. Sólo silencio.

A las 16 horas del 27 de marzo, en el salón de consejos de La Moneda, se inicia la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional en democracia. Asisten el Presidente, los generales Pinochet, Matthei y Stange, el almirante Martínez Busch, el presidente del Senado Gabriel Valdés, el contralor Osvaldo Iturriaga y el presidente de la Corte Suprema Luis Maldonado, como miembros de derecho pleno. Con derecho a voz, pero no a voto, están también los ministros de Relaciones Exteriores, Enrique Silva Cimma, de Defensa, Patricio Rojas, de Hacienda, Alejandro Foxley, y de Economía, Carlos Ominami; en lugar del ministro del Interior, que anda de viaje, concurre el subsecretario Belisario Velasco; oficia como secretario el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el brigadier general Luis Henríquez Riffo.

En cuanto el Presidente declara abierta la sesión, el almirante Martínez Busch plantea una moción de orden: desea saber si se aplicará a toda la reunión el artículo 6º del reglamento del Consejo, que permite dejar en reserva todo lo que se examine en él. El Presidente dice que no ve razón para ello y que las opiniones institucionales pueden ser difundidas.

Siguiendo la tabla, el Presidente propone que se analice la cuestión del ingreso y salida de tropas del territorio. Dado que el punto no ha podido ser resuelto en dos reuniones, el Consejo adopta el acuerdo de crear una comisión de análisis que presente un informe en abril. En seguida el Presidente cede la palabra para que se opine acerca del Informe Rettig.

El almirante Martínez Busch quiere promover una nueva moción de orden, para que las intervenciones sigan el orden de las antigüedades. Pero el general Matthei corta bruscamente:

—Aquí habla el que quiere.

El Presidente, sonriente, considera razonable que haya plena libertad para solicitar la palabra. Pero el general Pinochet, también sonriendo, dice que los uniformados están acostumbrados a respetar las antigüedades.

—Mire —interviene Valdés, con humor—, yo soy muy antiguo, pero llevo sólo un año en el Consejo. Así que eso no debiera pesar...[9]

El general Stange corta el debate pidiendo que se le permita leer la opinión de Carabineros. En lo esencial, objeta el marco histórico abarcado por el Informe y algunos de sus procedimientos; pero hacia el final se centra en la queja de que, siendo sus hombres los que están en contacto más cercano con la población, pueden ser también los más perjudicados por las reacciones de rencor o venganza; a la vez, el conjunto de las apreciaciones de la Comisión debilita el valor moral de la acción policial y siembra el desánimo en sus filas.

Cuando concluye, tras un breve silencio, toma la palabra el almirante Martínez Busch, quien tiene un extenso documento. Será el que dé a conocer a la opinión pública. Pero, para esta cita, el almirante sólo leerá párrafos que lleva marcados con lápiz rojo. De todos modos, la suya es la intervención más extensa de la jornada. La Armada objeta también el marco histórico considerado por la Comisión, defiende la actuación de los tribunales, confirma la calificación de "guerra" para el conflicto vivido en el 73, rechaza el concepto de "convicción" aplicado a las investigaciones, impugna varias de las propuestas de reparación y reafirma su adhesión al proceso vivido entre 1973 y 1990. Su último párrafo expresa la voluntad "de que esta sea nuestra última participación sobre esta materia".

Pinochet, que interviene a continuación, lee la declaración que se entregará a la prensa. En ella se confirman las aprensiones originales frente a la Comisión, y se objetan prácticamente todos los criterios empleados por ella, desde la "invasión" de facultades judiciales hasta la desestimación de la idea de "guerra", pasando, otra vez, por el marco histórico. También rechaza los reproches a la justicia militar y refuta conceptos doctrinarios sobre los militares. La *Declaración final* desecha la petición presidencial del perdón: "El Ejército de Chile ciertamente no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esa patriótica labor (de restablecer la paz social y la democracia)", así como "no puede arrogarse el derecho de perdonar a los agresores de las víctimas de sus filas", aunque "sí puede la superioridad pedir a las familias de los caídos en el cumplimiento del deber que por sí mismas pronuncien sus particulares actos de perdón".

En seguida pide la palabra el general Matthei, pero sólo para ratificar la declaración que ya ha hecho y solicitar que se incorpore al acta.

El presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, explica que, como ha estado de vacaciones, no se siente autorizado a emitir opinión, y que ella será dada por el pleno de la Corte, que estudia el Informe.

(El pleno opinará dos meses después, mediante un documento redactado por el ministro Germán Valenzuela, en el que rechaza la validez jurídica de la Comisión y subraya los esfuerzos hechos por el Poder Judicial para mejorar sus atribuciones durante el régimen militar. Unicamente del presidente de la Corte en el momento del golpe, Enrique Urrutia Manzano, no hay cómo rescatar alguna opinión imparcial; por ello se argumenta su desconocimiento de "los atropellos que habían sido denunciados a la justicia".)

Mientras los presentes se miran, irrumpe el ministro Ominami, para decir que comprende el interés de las FF.AA. por exponer sus posiciones y constata las dificultades de llegar a acuerdo sobre una etapa tan controvertida.

—No obstante ser hijo —agrega— de un oficial de las Fuerzas Armadas que sufrió los rigores de los atropellos a los derechos humanos, yo soy parte de un sector del país que: no entiende haber participado en guerra alguna; ha asumido su cuota de responsabilidad por la crisis institucional; y ha buscado hacer suyo el dolor de las Fuerzas Armadas y de Orden por los que han caído, y espera que este mismo sentimiento pueda anidarse en el corazón de las instituciones armadas en relación a las demás víctimas de las violaciones a los derechos humanos[10].

Entonces solicita que se incorpore al acta el acuerdo unánime del Senado que ha respaldado el llamado del Presidente. La intervención, cargada de emoción en un dirigente cargado a la emocionalidad, causa un expectante silencio. Tras unos largos segundos, el Presidente pregunta:

—¿No hay nada más? —y ante el vacío, concluye—: Se levanta la sesión.

En la tarde del día siguiente, tras un consejo de gabinete donde se pasa revista a la reunión, el ministro Correa declara a la prensa que el gobierno entiende que el debate del Informe ha llegado a su fin institucionalmente, y que se mantiene el hecho macizo de una verdad "incontrovertida", con plena "validez histórica y moral".

Las palabras de Correa apenas reflejan, con su frialdad de Estado, el sentimiento de éxito que recorre La Moneda.

El momento más difícil de todos ha sido superado con impecable sujeción a la Constitución, sin las alteraciones fácticas que se temían. Aunque no han pedido el perdón solicitado, las Fuerzas Armadas han adherido al deseo oficial de reconciliación; y, lo que es más importante, sus declaraciones no han objetado ninguno de los hechos descritos; sólo sus interpretaciones, como era por demás previsible[11].

El gobierno prepara entonces sus pasos siguientes. En la Secretaría General de la Presidencia se echan a andar los estudios para crear la comisión continuadora. En la Secretaría General de Gobierno, el ministro Correa conviene con los dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos una estrategia de propagación masiva del Informe Rettig: la Agrupación editará ejemplares de bajo costo y los difundirá por las regiones en una sucesión de conferencias en las que estarán presentes el ministro y el presidente de una comisión especialmente creada para este fin, Alejandro Hales.

En los tres días hábiles que transcurren desde la sesión del Consejo de Seguridad Nacional hasta el comienzo de abril, se alcanza a trabajar afanosamente en el plan de difusión.

Pero al atardecer del día 1°, dos hombres que palpan sus revólveres y sudan frío divisan por primera vez, en una escalera del Campus Oriente de la Universidad Católica, al hombre que han ido a asesinar.

Bajo las mismas balas caerá el Informe.

Notas

1. Ejército de Chile: *Chile*. Video presentado a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 26'33", agosto de 1991.

2. Una descripción completa del caso: Verdugo, Patricia: *Los Zarpazos del Puma*. Ediciones ChileAmérica Cesoc, Santiago, 1989.

3. Su versión, la más importante, fue publicada más tarde como libro: Arce, Luz: *El infierno*. Editorial Planeta, Santiago, 1993

4. Ver Capítulo 4.

5. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: *Informe final*, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Santiago, 1991.

6. *Diario Oficial*, ley 19.123, 3 de enero de 1992.

7. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación: *Informe final*, Santiago, 1996. Texto complementario: *Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política*. Santiago, 1996.

8. Texto completo en: *El Presidente anunció 9 medidas y llamó a FF.AA. a hacer gestos de reconocimiento del dolor causado*. Diario *La Epoca*, 5 de marzo de 1991.

9. *Minuto a minuto, cómo fue y qué se dijo en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de ayer*. Diario *La Epoca*, 28 de marzo de 1991

10 *Lo que dijo Carlos Ominami ante el Consejo de Seguridad*. Diario *La Epoca*, 29 de marzo de 1991.

11. En verdad, el *Informe final* de la Comisión Rettig contiene errores en la contabilidad de las víctimas, que no fueron reparados por nadie en su momento. Según la explicación que recibió esta investigación, ellos se debieron a la prisa con la que se debió concluir el trabajo. Las cifras fueron corregidas mucho tiempo después por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

10

Los comandantes y la Fase D

Asesinar al senador Jaime Guzmán les parece, a los jefes del FRMR, una muestra de fortaleza. En realidad, es lo contrario: el momento crítico en la decadencia de un proyecto insurgente que nació acunado por la Guerra Fría justo cuando ésta se extinguía.

A eso de las 18.15, Jaime Guzmán ve a la muerte en escorzo. Esta tarde del 1º de abril de 1991, el senador y líder de la Unión Demócrata Independiente ha terminado su clase de derecho constitucional en el Campus Oriente de la Universidad Católica y se acerca a la escala cuando ve, abajo, en el primer piso, a los dos sujetos morenos.

No los ve palpar sus revólveres, no percibe su sudor frío, no siente la adrenalina. Pero esto es lo más extraordinario: esa fugaz e instantánea visión lo hace volver y pedir que su chofer, Luis Fuentes, suba para acompañarlo.

El senador sabe que el peligro está en el aire. En los días previos ha tomado el protagonismo en el rechazo a la facultad extraordinaria de indultar que RN le ha propuesto al Presidente como fórmula para liberar a los presos políticos. Le han dicho que esto lo pone en la mira del terrorismo. Carabineros ha tenido la información de que Guzmán y Sergio Onofre Jarpa podrían ser blancos de atentados; el 29 de marzo, "día del combatiente" para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se han distribuido en la Villa Francia panfletos con los rostros de Guzmán y el general (R) Manuel Contreras cruzados por tajantes X.

Mientras Guzmán y Fuentes bajan hacia el estacionamiento, *El Negro*, Ricardo Palma Salamanca, y *Emilio*, Raúl Escobar Poblete, creen que el senador los ha detectado. *Emilio*, que está a cargo de la operación por instrucciones del comandante *Ramiro*, Mauricio Hernández Norambuena, decide dar paso al segundo curso de acción.

—Esperémoslo en el semáforo.

Todo confluye esta tarde. La luz roja detiene justo en el punto necesario al auto del senador Guzmán. *Emilio* alienta al *Negro* y éste reacciona con la pistola como meses antes lo ha hecho a las espaldas del coronel (R) de Carabineros Luis Fontaine: frenéticamente. *Emilio* vuelve a sorprenderse[1].

El chofer Fuentes vuela con el senador herido hacia la sede de la UDI. Los dirigentes Pablo Longueira, Pedro Páez y Juan Díaz suben al auto y lo acompañan en una desesperante carrera por las congestionadas calles de Providencia. A veces deben bajarse a suplicar que les abran paso para llegar al Hospital Militar.

Al anochecer, el país ya está convulsionado. El general Augusto Pinochet entra a la sala donde los médicos luchan contra las irreparables heridas de Guzmán y al salir anuncia su muerte[2].

La oposición exige que el Presidente cancele una gira y se ponga a la cabeza de la lucha contra el terrorismo. El ministro Krauss presenta su renuncia, que Aylwin rechaza. Una multitud rabiosa clama contra el gobierno en las puertas del Hospital Militar; hasta se grita por el regreso de la DINA.

En las horas siguientes, *El Negro* y *Emilio* reciben las felicitaciones de *Ramiro*.

Veinte años de historia comienzan a hundirse bajo sus pies.

A fines de 1971, mientras el ascenso del activismo opositor comenzaba a amenazar al gobierno de la Unidad Popular, un pequeño grupo de las Juventudes Comunistas planteó la necesidad de que su partido desarrollase una capacidad de defensa armada, más allá de que continuase con su línea propagandística de rechazo a la guerra civil.

El grupo, disciplinado en el leninismo, se vio en minoría y calló. Pero cuando sobrevino el golpe de Estado y el PC quedó inmovilizado, la tendencia adquirió nuevos bríos y sostuvo, en contra de la dirección central, que el golpe fue una derrota militar antes que política. Sus opiniones no encontraron eco en los dirigentes nacionales, pero sí en pequeños núcleos del exterior; en especial, entre los jóvenes comunistas que cursaban sus estudios en Cuba. Para ellos, el antiguo desdén cubano por la "política conciliatoria" del PC chileno comenzaba a adquirir el peso de una razón histórica[3].

Entre el 74 y el 77, el PC propició la construcción de un Frente Antifascista contra el régimen militar, que incorporara a la izquierda y al centro y hasta a los supuestos "militares democráticos", aunque pudiera conducirlo la DC. Era la máxima concesión.

En el 77, un tajante rechazo de la DC dejó a la dirección comunista en un páramo: el pacto no tenía viabilidad, tres direcciones internas habían sido destruidas por la DINA, el secretario general Luis Corvalán había sido sometido a la humillación de un canje, y la dirigencia soviética, encabezada por el ideólogo Boris Ponomarev, culpaba a la línea del partido del desastre.

En Moscú, los dirigentes comunistas cavilaban. En Budapest, la cúpula de las JJ.CC. resentía la fractura de posiciones. En la RDA, un grupo de intelectuales se instalaba en la Academia de Ciencias de Berlín y en Leipzig para estudiar una salida al marasmo político. El primer indicio del rumbo que tomaría ese análisis surgió en el informe al pleno de Corvalán, en agosto de 1977, cuando calificó como "una debilidad ideológica" la falta de preparación para la violencia y oficializó la noción de un "vacío histórico" que era preciso llenar[4].

En Cuba, lejos de las discusiones teóricas, los jóvenes comunistas chilenos se enrolaban en el Ejército para adquirir una instrucción militar que aún no sabían para qué serviría. Los favorecía una circunstancia extraña: desde que un batallón de chilenos luchó en la guerra de la independencia cubana, la legislación de ese país permitía que en sus fuerzas militares los chilenos fuesen considerados iguales a los cubanos.

Entre el 78 y el 79, una veintena de esos jóvenes completó sus estudios; algunos llegaron a ser oficiales de Estado Mayor y, cumpliendo el sueño del internacionalismo revolucionario, fueron destinados por Manuel Piñeiro, jefe del Departamento América del PC cubano, a reforzar la lucha guerrillera en Centroamérica.

Varios vuelos nocturnos y unos precarios lanchones caribeños los arrojaron sobre las playas de Nicaragua, donde la dictadura de Anastasio Somoza combatía fieramente el ascenso del Frente Sandinista.

Somoza emprendía su esfuerzo estratégico final. Convencido de que podría dominar a los improvisados cuadros guerrilleros urbanos, y a sabiendas de que Cuba infiltraba militares profesionales en sus costas, envió a sus tropas de elite hacia el sureste. Los sandinistas respondieron fortaleciendo lo que pasó a llamarse el Frente Sur, donde se libraron los combates más bravos.

Varias unidades quedaron bajo el mando de los comunistas chilenos. Cuando Somoza huyó del país y las columnas sandinistas entraron a Managua, algunos de esos jóvenes estaban entre los líderes, como tanquistas, artilleros o infantes. Uno de ellos fue nombrado como primer edecán del nuevo líder, el comandante Daniel Ortega. En la Loma 55, cerca de Peñas Blancas, una placa

recuerda al primer oficial chileno muerto en los combates, Days Huerta Lillo, que cayó durante el asedio a las tropas de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería[5]. El hermano de Huerta era en esos mismos días el secretario general clandestino de las JJ.CC.

El impulso triunfal persistió en esos combatientes. Unos siguieron la ruta centroamericana integrándose al Frente Farabundo Martí en El Salvador, otros partieron a destinos africanos y asiáticos y unos terceros siguieron especializándose en Europa oriental, cuya clásica división del trabajo alcanzaba también al campo militar: inteligencia y contrainteligencia en Moscú, documentos en Budapest, doctrina estratégica en la RDA y, a veces, técnicas de insurgencia en campos prácticos de Libia, Angola o Mozambique.

Pero, a fin de cuentas, los comunistas chilenos pensaban en Chile, el peor de sus dolores y la más dolorosa de sus derrotas. El grupo de Berlín y Leipzig —"los alemanes"—, que trabajaba con condiciones de privilegio otorgadas por el gobierno de Erich Honecker y al margen de las estructuras europeas del PC chileno, elaboró entonces la primera tesis militar, la Perspectiva Insurreccional de Masas, que contemplaba el levantamiento popular; más tarde se la redesignaría como política de Rebelión Popular de Masas. El trajín de las siglas (PIM y RPM) connotaba por sí solo el espíritu militar que había invadido la reflexión académica.

La tesis insurreccional copó a la asediada dirigencia con sede en Moscú, que autorizó, sin conocimiento del resto del partido, su puesta en práctica. Para ello se creó una Comisión Militar, que reportaba sólo ante la Comisión Política y el secretario general, a la que se integraron militantes con experiencia anterior en Chile y algunos hombres del grupo de "los alemanes".

La Comisión Militar, plenipotenciaria, dio sus propios pasos. A lo largo de Europa, América y Africa los encargados regionales de las JJ.CC. comenzaron a recibir una instrucción: seleccionar cuadros para "tareas especiales". Para ellos llegaron a dictarse órdenes radicales: prohibición de casarse, ruptura con sus familias, abandono de sus rutinas. Centenares de jóvenes iniciaron su preparación militar en la URSS, en la RDA, en Bulgaria y, sobre todo, en Cuba, que vio con orgullo cómo se validaban sus postulados revolucionarios.

Otras medidas fueron dictadas por el partido: todo militante que saliera de Chile debía entregar carnet de identidad y licencia de conducir y alegar, al regreso, la pérdida de esos documentos. Con ellos trabajaría el partido la *Operación Retorno*, con la que sus cuadros debían volver a Chile a partir de 1978.

Por fin, en el pleno que el PC realizó en Moscú en 1980, Corvalán anunció que el partido adoptaba la política de la RPM y cedió el podio a quien la representaría. Entonces ingresó al escenario un hombre vestido con uniforme verde oliva, que avanzó con paso marcial y se cuadró ante Corvalán:

—¡Permiso para hablar, compañero secretario general!

—Adelante, compañero.

El hombre se llamaba Galvarino Sergio Apablaza. Quienes lo habían visto como el único chileno que había podido dictar clases en la Academia de Guerra cubana, o como jefe de unidad del Frente Sur de Nicaragua, o como el notorio edecán del comandante Ortega, no se sorprendieron. Sólo fue una novedad para los que lo recordaban como un promisorio dirigente de las JJ.CC. en el Pedagógico, un estudiante de Química que cayó preso tras el golpe y debió emigrar a Europa, vía Panamá, con ayuda del partido.

Ahora Apablaza era todo un comandante. Junto con el comandante *Sebastián*, sería miembro eminente de la Comisión Militar, con supervisión sobre las cuatro áreas de trabajo: una fuerza militar propia (que sería el FPMR); el Trabajo Militar de Masas, dirigido a las bases; Logística, el aparato de abastecimiento; y Trabajo Hacia las Fuerzas Armadas, un intento de penetración en los militares chilenos que se iniciaría incorporando jóvenes al servicio militar.

Los primeros comandantes designados para constituir la dirección del aparato revolucionario empezaron a ingresar a Chile en 1981, cuando el régimen militar acababa de promulgar su nueva Constitución. El PC proporcionó los recursos para instalarlos, pero impuso una condición de hierro: sólo podían actuar bajo autorización de la dirigencia partidaria.

Los comandantes hallaron dificultades: las bases no parecían informadas, en algunas regiones los rechazaban, el partido no se mostraba claro. En contrapartida, las JJ.CC. seguían proporcionando cuadros para instrucción militar. Tras los cursos de Cuba, los jóvenes partían a adquirir experiencia de combate en Nicaragua, en la guerra que el régimen sandinista libraba ahora contra los "contras", y en el frente de Chalatenango, en El Salvador, junto al FMLN.

Al año siguiente, la crisis económica dio a los teóricos de la insurrección una abrupta certeza: las condiciones objetivas se estaban generando a toda prisa.

En 1983, el estallido de las protestas no sólo lo confirmó, sino que les proporcionó un campo de entrenamiento: enfrentar a la policía y a los militares en las calles. El PC amplió la instrucción para que los cuadros jóvenes, incluso estudiantiles, se integraran a la preparación de milicias. Cientos de muchachos debutaron en las tácticas insurreccionales, con sus rústicos pañuelos sobre el rostro, apedreando buses.

Así, un poco atrasados pero dispuestos a tomar la vanguardia, en noviembre de 1983 los comandantes recibieron del PC la autorización para echar a andar una fuerza militar, cuya ambigua situación se reflejaba en que el PC no la reconocería como propia, aunque los líderes continuarían bajo su férreo mando político. Como comandante en jefe asumió un hombre de 26 años, que fuera conocido como *Benjamín* en el Frente Sur nicaragüense y que ahora se llamaría, sucesivamente, *Rodrigo* y *José Miguel*: Raúl Pellegrin.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez marcó su debut público el 14 de diciembre de 1983 con golpes de efecto: asaltos a camiones y repartición de alimentos en poblaciones y, sobre todo, el atentado contra cuatro torres de energía, que causó un apagón entre Copiapó y Temuco.

El FPMR vivió sus años de auge en el 84 y el 85. Secuestros, bombazos, asaltos, ataques a cuarteles y, sobre todo, la lucha callejera de las protestas, expandieron el cuadro de oficiales y los contingentes (más artesanales) de las Milicias Rodriguistas.

El PC entró con entusiasmo a ese movimiento de ascenso, aunque algunos de sus dirigentes advertían, aún en sordina, que el FPMR parecía estarse extendiendo territorialmente más que el partido, usándolo como plataforma. En el Frente, a su turno, los comandantes observaban con cierta sorna las prevenciones que una y otra vez les repetían los oficiales de enlace del partido: en la autoestima de los hombres curtidos en la guerra de verdad, estas advertencias no eran sino los temores de una dirigencia aún indecisa.

Para 1986, la tesis de la Sublevación Nacional, implícita en la RPM pero concebida como un estadio superior, se impuso sobre la base de que, conducida por el partido, sería materializada por el FPMR. El 85 serían los preparativos, y el 86, su concreción. El PC lo designó oficialmente "el año decisivo".

Y lo sería. La estrategia, diseñada con la amplitud de una guerra, envolvió a más de 100 oficiales de diverso rango en un repertorio de tareas a partir del segundo semestre del 85.

En La Habana, Fidel Castro autorizó el apoyo al FPMR. Pero ese año el encargado para Chile del Departamento América del PC cubano, Humberto Sánchez, que por 14 años había orientado su política con un abierto favoritismo por el MIR, fue encarcelado bajo cargos de corrupción. Con ese vacío en el Departamento América, el FPMR halló una entusiasta acogida en el Ministerio del Interior, que se hizo cargo de la operación de mayor envergadura: enviar arsenales a Chile.

Logística, dirigida por el comandante *Pedro*, reunió a un grupo de oficiales del FPMR y consiguió internar miles de fusiles, cohetes y revólveres en la caleta Los Corrales, de Carrizal Bajo[6]. Pero un tropiezo accidental de un grupo de apoyo en La Paz, revelado por EE.UU. al gobierno, puso en alerta a los aparatos de seguridad. El 6 de agosto la CNI llegó al lugar y en cosa de días arrestó a parte del personal del FPMR.

Pese al fracaso de su más aparatosa operación, el FPMR continuó adelante con la siguiente: el asesinato del general Pinochet. Pero la emboscada del Cajón del Maipo fracasó en la tarde del 7 de septiembre, pese a las increíbles prevenciones tomadas por el comandante *Ernesto*, José Joaquín Valenzuela Levy, que concentró en el sector un inusitado poder de fuego.

Una tercera no llegó a configurarse: el asalto de Santiago. Los comandantes del FPMR habían planeado que una de las protestas populares se convertiría en el acto central de la Sublevación Nacional. La voladura del puente sobre el río Maipo aislaría a la ciudad por el sur, los puentes sobre el Mapocho serían dinamitados para bloquear el norte y una flota de camiones distribuiría armas en poblaciones del sur y el poniente. Los grupos armados debían constituirse en columnas y avanzar sobre el centro, para tomar La Moneda, aislando con barricadas y explosivos a las unidades militares de la capital.

Los jefes del FPMR, entusiasmados por el alto nivel de violencia de las protestas del 2 y 3 de julio de 1986, prepararon los planes para cuando se convocara a una nueva movilización. Santiago fue dividido en zonas y hasta se designó a los dirigentes del PC que encabezarían las columnas. Objetivo final: "Acelerar el desmoronamiento político-moral de las Fuerzas Armadas"[7].

Pero los hallazgos de Carrizal y el atentado contra Pinochet produjeron el fin de las protestas: el FPMR empezaba a quedar atrapado en sus propias acciones. Y esta vez el copamiento de Santiago fue desactivado por dirigentes del PC y abogados de derechos humanos.

Entonces comenzó la crisis. Crecientemente aislado de otras fuerzas políticas, el PC criticó con dureza la operación de Carrizal y, en especial, el atentado fallido a Pinochet, y ordenó a los encargados militares restringir la capacidad de decisión de los comandantes del FPMR. El partido tomó el control de los depósitos de armas y empezó a "recuperar" militantes. Los comandantes confirmaron sus aprensiones: el PC no tenía la decisión de entrar en la insurgencia.

A fines de año, Fidel Castro reunió en La Habana a Volodia Teitelboim con Raúl Pellegrin. La discusión entre ambos encarnó la distancia ya decisiva que separaba al PC del FPMR: mientras Teitelboim sostuvo que el "tiranicidio" de Pinochet pudo haber desatado un "yakartazo", Pellegrin defendió el atentado[8]. En forma inusual, Castro pareció ponerse esta vez del lado de Teitelboim, con un comentario críptico:

—La historia es sabia.

Pero Pellegrin no cedió un centímetro.

Para junio de 1987, la discusión interna alcanzó un punto climático. El PC acusaba a los comandantes de llevar una política fraccionalista. El FPMR respondía que la dirigencia comunista quería frenar la lucha de masas.

El clima se enervó hasta grados inéditos: cierto día, durante una discusión sobre el destino del Frente, un comandante desenfundó un arma y apuntó a un alto dirigente del PC. Pero la fractura ya era tan honda, que afectaba también a la cúpula del FPMR, y ese día otro comandante, *Daniel*, interpuso su metralleta para detener al exaltado.

Ese mismo mes, la CNI entró al debate mediante la *Operación Albania*, una *razzia* de 30 horas en la que mató a doce militantes del FPMR, incluyendo al menos a tres oficiales de alta graduación, entre los cuales figuraba el comandante *Ernesto*. El resultado fue de una precisión escalofriante: el PC acusó al Frente de irresponsabilidad y el Frente denunció al partido por no haber facilitado casas de seguridad.

En agosto, el PC intervino la dirección del FPMR y relevó a *José Miguel* del mando. Pero *José Miguel* rechazó la decisión. La Comisión Militar se quebró: *Sebastián* regresó al PC y *Salvador* se unió a *José Miguel*, con quien se fue parte importante de los cuadros[9].

Así nacieron los que pronto serían llamados FPMR-Partido y FPMR-Autónomo.

La ruptura podría quebrar al PC, pero su dirigencia no estaba dispuesta a permitirlo: moviéndose con cautela, mantuvo una deliberada confusión mediante el FPMR-Partido y comenzó un lento trabajo de recuperación de militantes.

José Miguel, en contrapartida, decidió mantener en alto la visibilidad del Frente, con nuevos golpes de audacia, que se iniciaron con la *Operación Príncipe*: el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño[10]. El 88, tras un proceso de "rediseño político", el Frente lanzó el proyecto de una Guerra Patriótica Nacional, "guerra de todo el pueblo y en todo el territorio",

que partía de la base de que el régimen militar no abandonaría el poder. *José Miguel* quiso encabezar personalmente el inicio de la campaña y 16 días después de la derrota del general Pinochet en el plebiscito, dirigió un ataque contra el poblado de Los Queñes, en la Sexta Región, mientras otras unidades golpeaban las localidades de La Mora, en la zona central, y Pichipellahuén, en el sur.

El FPMR-A había entrado en una lógica foquista para la que no estaba preparado. Días más tarde, *José Miguel* apareció muerto en el río Tinguiririca, junto a la comandante *Tamara*, Cecilia Magni.

Antes de que la caída de *José Miguel* consumara la dispersión, un secretariado de comandantes se hizo cargo del mando. Pronto se impondría, de entre ellos, un nuevo jefe: *Salvador*. Pero para fines de 1988, los frentistas ya debían aceptar que estaban perdiendo el protagonismo armado. En noviembre, en La Habana, los comandantes se reunieron con el MIR Militar y el grupo Lautaro (nacido del Mapu en 1983) para crear una Coordinadora Nacional Revolucionaria[11].

La situación se agravó en agosto del 89, cuando otro de los comandantes antiguos, *Aurelio*, Roberto Nordenflycht, murió tratando de disparar por segunda vez un cohete contra una instalación del Ejército en el aeródromo de Tobalaba. Entre los documentos que capturó la CNI se hallaba el plan de los frentes territoriales previstos para la Guerra. Nordenflycht era hijastro de Volodia Teitelboim, lo que no sólo reflejaba los vasos comunicantes entre el partido y el Frente, sino que aumentaba la confusión pública.

A comienzos de 1990, antes de la asunción de Aylwin, el FPMR-Partido organizó la fuga de 24 de sus militantes desde la Cárcel Pública. La acción sería un tributo a los arrestados en acciones de combate, pero también una señal para frenar la acción armada: la fuga debía ejecutarse sin violencia. El asombroso túnel de 60 metros quedó abierto en la noche del 29 de enero, y por él salieron otros 26 presos, la mayoría del FPMR-A[12]. El PC saludó el escape, pero los del FPMR-A recibieron el mensaje: no estaban incluidos.

Bajo el control de *Salvador*, los jefes del FPMR-A pasaron a las tácticas de guerrilla urbana. Parte de sus análisis fueron exactos: los servicios militares de seguridad no colaborarían con el gobierno de Aylwin, la Concertación no se embarcaría en una represión dura, la vigilancia disminuiría.

El incremento de las acciones del Lautaro demostraba que el clima era favorable. Así recobraron fuerza los asaltos, los atentados, los actos de propaganda armada y, en especial, las ejecuciones: los generales (R) Leigh y Ruiz (frustradas), el doctor Pérez Castro y su esposa, el coronel (R) Fontaine, el sargento de Ejército Víctor Valenzuela Montecinos[13].

Pero las muertes abrieron una nueva discusión en el FPMR-A. Algunos oficiales plantearon abiertamente la ausencia de horizonte en esas acciones, la inclinación hacia el terrorismo a secas y la necesidad de una elaboración política nueva. Otros, desalentados, se alejaron de sus células para buscar modos de reinsertarse a la normalidad de los matrimonios, los hijos, los empleos.

Dado ese ambiente de declinación, la Dirección Nacional del Frente, constituida en 1990, impulsó una consulta interna en el verano de 1991.

Y cuando esa consulta recién ha concluido, sin que se conozcan aún sus resultados, parten *El Negro* y *Emilio*, los pistoleros de *Ramiro*, a cumplir en el Campus Oriente las órdenes que introducirán un golpe de fuerza en la línea frentista.

El asesinato tiene un impacto desintegrador en el propio FPMR-A. Oficiales que dudaban y que preparaban una retirada lenta, deciden abandonar el grupo de inmediato. Mientras decenas de amargados ex combatientes vuelven a sus casas, centenares de furiosos simpatizantes de la derecha ingresan a la UDI.

Luis Corvalán lanza otra señal:

—Que guarden los fierros. Por si las moscas...

El tono amistoso del viejo prócer del PC indigna a la derecha y a la Concertación. En julio, impelida ya por la necesidad de cortar vínculos con el grupo rebelde, la dirección del PC disuelve

el FPMR-Partido y lo convierte en el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, con un sesgo civil y político.

El FPMR-A sufre, desde ese instante, sucesivas convulsiones. En un momento se escinde un llamado Destacamento Raúl Pellegrin; en otro, una unidad territorial se autonomiza; en otro, aparece un FPMR-Ejército Popular de Liberación Nacional; en otro, se revela que el encargado de un depósito de armas las está vendiendo a delincuentes comunes en el barrio Bellavista; y en alguno más infamante debutan las "mexicanadas", los asaltos cuyos botines se quedan en bolsillos privados.

Pero el efecto más importante ocurre en el gobierno. El ministro del Interior ha estado con su renuncia presentada, las policías se declaran perplejas, los actos de violencia no han hecho más que aumentar. El 4 de abril, el general Pinochet visita al Presidente en La Moneda. Quiere expresarle la preocupación del Ejército.

—Presidente —dice—, las estimaciones de inteligencia dicen que hemos entrado a la Fase D.

—¿Fase D? —repite Aylwin, intrigado—. ¿Y qué es eso?

—Terrorismo selectivo. Víctimas escogidas para crear conmoción. Es la previa a la guerrilla urbana.

En La Moneda, la expresión "Fase D" se esparce como un escalofrío. Nadie cree que el Frente pueda alcanzar un nivel insurreccional, y los funcionarios de izquierda intuyen que no sería difícil contenerlo. Pero las palabras de Pinochet han sonado como una advertencia: los militares podrían entrar en la lucha contra el terrorismo.

No, esto hay que detenerlo. El ministro Krauss, que ha obtenido aprobación para crear un Consejo de Seguridad Pública, se afana en instalarlo. Como desea que tenga cierta majestad jurídica, propone que lo presida Marcos Libedinsky, un ministro de la Corte de Apelaciones de especial buena disposición. Meses antes, cuando debió iniciar el infausto proceso de La Cutufa, aceptó realizar muchos de los interrogatorios a oficiales activos en la casa del mayor general Ballerino, para evitar la exposición. Y ahora, otra vez, está dispuesto.

Pero cuando Krauss presenta la solicitud al presidente de la Corte Suprema, Enrique Correa Labra, la máxima autoridad judicial cita a Libedinsky y lo amonesta: cómo se le ocurre que se va a mezclar con tareas de gobierno.

Krauss va entonces sobre abogados de prestigio: Rubén Galecio y Luis Ortiz Quiroga. Las negativas no lo desalientan, pero restringen su campo: el subsecretario de Aviación, Mario Fernández (DC), podría presidir el organismo. Su propio jefe de gabinete, Jorge Burgos (DC), podría oficiar de secretario ejecutivo. Le falta un socialista, y piensa en Osvaldo Puccio, hijo de su antiguo amigo el secretario privado de Allende, que casi se ha criado con sus propios niños.

—No, tío, yo no sirvo para eso —le dice Puccio—. Pero sé con quién debería hablar: Lenin Guardia.

Krauss no conoce a Guardia. Cuando consulta al PS, la directiva le responde con una propuesta oficial: Marcelo Schilling, un hombre serio, del aparato, que estuvo en el GAP de Allende y que entiende de seguridad.

El Presidente parte a Europa el sábado 6 de marzo. Krauss asume la Vicepresidencia, pero esta vez Aylwin ha decidido una "intervención blanca" en Interior: en lugar del subsecretario Belisario Velasco, subrogará a Krauss otro ministro, el socialista Enrique Correa. Quiere que en este momento crítico haya un ministro titular al mando, pero también tiene una razón más sutil.

—Mira, Belisario —le explica al subsecretario, sabiendo que éste puede ser un golpe contra su orgullo—, quiero que la responsabilidad sea compartida. Si te dejo a ti, como es usual, seguirá la DC sola con este problema...

Correa asume con la misión de echar a andar el Consejo, que se crea 12 días después, sin normativa, sin recursos y hasta sin instalaciones. Desde que Interior le facilita un despacho, pasa a ser conocido como la Oficina. El financiamiento proviene de los gastos reservados de Interior, que provee, no muy a gusto y en dinero contante, el subsecretario Velasco.

El 15 de marzo de 1991, dos semanas antes del crimen de Guzmán, un pistolero dispara, en Concepción, contra Héctor Sarmiento, prefecto jefe de la V Zona de Investigaciones. En Santiago, el director, el general (R) Horacio Toro, ordena capturar a los asesinos en forma fulminante.

Cuando cae el senador Guzmán, Toro desespera. La falta de recursos lo inmoviliza y el ministro Krauss, que se ha puesto como meta devolver a Carabineros a la tuición de Interior, favorece a la policía uniformada.

En mayo pide una audiencia al Presidente y le explica atropelladamente la magnitud de sus necesidades. Aylwin, un poco escéptico ante la vehemencia del general (R), sólo escucha. Toro, que divisa en ese silencio la desautorización final, regresa a su oficina y redacta su renuncia, la segunda en diez meses[14]. Pero esa noticia conmueve al gobierno: a fines de mes le asigna siete millones de dólares adicionales.

Con esos fondos reestructura la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), con el prefecto Guillermo Mora, y la Brigada de Inteligencia Policial (BIP), creada en 1987. Para las pesquisas del asesinato de Guzmán organiza el grupo Lex —a Toro le gustan los nombres simbólicos—, con detectives de diversas brigadas, y lo deja a cargo del subdirector operativo, Juan Fieldhouse.

En cosa de semanas la BIP obtiene, de un asalto que parece común, una primera pista.

En los cuatro meses siguientes, la búsqueda parece confirmar esa pequeña hebra: ciertos indicios sugieren que podría estar envuelto un delincuente habitual, Sergio Olea Gaona, cuya foto reconocen tres testigos. Hay más: Olea ha huido a España al saberse buscado.

Los hombres de la Oficina, que están ansiosos de mostrar algún resultado al público, respaldan a rajatabla las conclusiones del grupo Lex. Pese a saber que se trata de una inferencia "policialmente incompleta", el prefecto Fieldhouse acata la línea del gobierno.

Pero cuando se acerca el fin de año, el subsecretario Velasco recibe otros datos. Una hermana de un tal Ricardo Palma Salamanca está inquieta porque *El Negro*, que participa en un secuestro, se ha negado a cumplir órdenes de sus superiores en el FPMR; teme que lo puedan matar. En la angustia, ella, que además es funcionaria de La Moneda, ha narrado sus temores a una sicóloga que resulta ser pareja de Lenin Guardia, que trabaja con Velasco. El subsecretario verifica esos datos con un grupo de informantes al que llama "las señoras".

Y "las señoras" lo confirman. Añaden: *El Negro* participó también en el asesinato del coronel (R) Fontaine.

Con ese cuadro, Velasco pide a Krauss una reunión con los directivos de la Oficina y el general (R) Toro. Afirma, ante todos, que la hipótesis del grupo Lex puede ser errónea, que Olea es un tipo de delincuente en el cual el Frente no confiaría y que sus datos apuntan a Palma. Pero los hombres de la Oficina se sienten seguros en su pista y el encuentro concluye en un áspero altercado[15].

A la salida, Krauss, que presiente que Velasco puede tener algo sólido, lo alienta:

—Bueno, ¿y qué piensas hacer con tu información?

—No sé. A lo mejor trabajarla con Investigaciones...

El subsecretario se reúne con Toro y le encarga que busque al mejor de sus sabuesos. En los 15 días siguientes, Toro recuerda el informe que recibió en agosto sobre el crimen del prefecto Sarmiento: los pistoleros del Lautaro han sido capturados por un subcomisario, Jorge Barraza, actualmente adscrito a Delitos Sexuales, pero con un largo currículo que se inicia en la Policía Política de antes del golpe y se extiende en la CNI, para la que trabajó en el cuartel de Borgoño.

Indiferentes a esa operación, Burgos y Schilling, más el abogado Luis Ortiz, viajan a negociar la extradición de Olea. En Madrid se les une Miguel Alex Schweitzer, abogado de la familia del senador asesinado. Schilling tiene el protagonismo: debido a sus contactos, logra una entrevista con el principal asesor del ministro del Interior del PSOE, Narcís Serra, que ofrece garantías de una tramitación rápida de los exhortos.

A partir de ese instante, el gobierno queda matriculado con la extradición de Olea como pieza esencial para resolver el homicidio del senador.

Pero el día que regresa de España, un suceso casi doméstico intriga a Schilling: en un pasillo de La Moneda, uno de sus funcionarios, el documentalista Antonio Ramos, conversa en voz baja con una mujer en un raro ambiente de dramatismo. Es la hermana de *El Negro*.

Notas

1. El mismo protagonista ofrece una descripción de su conducta, por boca de *Emilio*, en: Palma Salamanca, Ricardo: *El gran rescate. Desflorando al viento*. Lom Ediciones, Santiago, 1997.

2. La descripción más exhaustiva del crimen y sus circunstancias: Salazar, Manuel: *Guzmán. Quién, cómo, por qué*. Ediciones BAT, Santiago, 1994.

3. Un análisis detallado de las malas relaciones históricas entre el PC chileno y el régimen castrista, en: Rodríguez Elizondo, José: *Crisis y renovación de las izquierdas. De la revolución cubana a Chiapas, pasando por "el caso chileno"*. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1995.

4. Corvalán, Luis: *Informe al Pleno del Partido Comunista de Chile*. 1977, mimeógrafo.

5. Vidal, Hernán: *FPMR. El tabú del conflicto armado en Chile*. Mosquito Editores, Santiago, 1995. Este libro, uno de los mejores en su género, contiene vívidos testimonios de comandantes del FPMR, así como un penetrante análisis acerca de las contradictorias relaciones entre el PC y el FPMR.

6. Esta operación fue detalladamente descrita, con fechas y procedimientos, por el propio Frente: *Emboscada al tirano e internación de armas, experiencia concreta de lucha popular*. Boletín *El Rodriguista*, N° 68, octubre-noviembre de 1996.

7. Un análisis crítico de este intento fallido, desde la óptica del FPMR, en: *Rescatando nuestra historia*. Boletín *El Rodriguista*, N° 69, diciembre de 1996. Este texto es especialmente importante, porque realiza una crítica ideológica de toda la historia del Frente, de sus diversas etapas y de sus relaciones con el PC.

8. El mismo dirigente comunista exhibe la dificultad del PC para asumir la política del FPMR en un escrito doblemente valioso por su textura literaria: Teitelboim, Volodia: *En el país prohibido. Sin el permiso de Pinochet*. Plaza & Janés Editores, Barcelona, 1988.

9. Las fuentes discrepan en las magnitudes. Unas dicen que con *José Miguel* se fue alrededor del 60% del contingente; otras, que no más del 35%. Sólo hay coincidencia en que los emigrados del PC fueron los que tenían mayor preparación militar.

10. El coronel Carreño fue secuestrado el 1° de septiembre de 1987 y liberado 92 días después, en Brasil.

11. El análisis militar de este fenómeno se halla en un documento de inteligencia militar publicado en 1991: *Las Fuerzas Armadas y la subversión*. Revista *Hoy*, N° 716, del 8 al 14 de abril de 1991.

12. Un relato detallado del episodio fue publicado apenas dos meses después de ocurrido: Peña, Ana Verónica: *Fuga al anochecer*. Editorial Los Andes, Santiago, 1990.

13. El sargento Valenzuela, de dotación de la DINE, fue asesinado al salir de su casa el 26 de octubre de 1990. Otros detalles sobre este caso en Capítulo 32.

14. Ver Capítulo 5.

15. En verdad, el FPMR sí trabajó con delincuentes comunes, algunos de los cuales se convirtieron en cuadros operativos relevantes. Ver Capítulo 32.

11

Una respiración en la nuca

El segundo gran golpe rodriguista, el secuestro de Cristián Edwards, cava el entierro de sus jefes. Y aunque los alienta la infernal negociación del dinero, en realidad sólo reciben una ayuda no prevista: una pugna intestina en el gobierno.

La instantánea desavenencia entre la Oficina y el subsecretario Belisario Velasco quiebra la unidad de la línea de investigación del gobierno en el crimen de Jaime Guzmán. Paradójicamente, ello ampliará su eficacia, pero los involucrados todavía ni lo sospechan. La tensión más persistente se produce entre Velasco y Jorge Burgos, aunque su origen no es la seguridad interior, sino una disputa política.

Cuando el Presidente Aylwin formaba su gabinete, en el verano del 90, Krauss propuso designar a Burgos como subsecretario del Interior. Pero Aylwin lo vetó: todavía estaba fresco el episodio del *Carmengate*, cuando Burgos denunció una presunta manipulación del padrón electoral y renunció a la Subsecretaría del PDC con una dura carta a Aylwin[1].

A insistencia de Krauss, Aylwin lo aceptó sólo como jefe de gabinete de su ministro.

Y desde que Velasco llegó a la Subsecretaría de Interior, el episodio del veto ronda sus relaciones: Velasco sospecha que Burgos ansía su cargo, y éste recela del papel de aquél en la pérdida que sufrió.

Y ahora, en la segunda mitad del 91, la desconfianza se extiende hacia el trabajo de seguridad, entre otras cosas porque la Oficina deberá funcionar con los fondos reservados del Ministerio del Interior, que Velasco administra en forma exclusiva.

Además, a los hombres de la Oficina les parece que el subsecretario se ha inclinado a considerar el clima de alarma pública como exageración de la prensa, y especialmente de derecha, sin tener en cuenta que los homicidios violentistas ya pasan de diez en un año y que las cifras de atentados están aumentando[2].

En verdad, Velasco ha venido construyendo sus redes laboriosamente, después de hallar un Ministerio sin archivos y la nula colaboración de los servicios militares de inteligencia.

Lo ayudan sus viejos nexos con la izquierda, creados en los 70, cuando fue miembro de un equipo clandestino de la DC dedicado a facilitar la salida del país a militantes en peligro.

En contraste con esas ventajas, durante sus dos primeros meses de funcionamiento, la Oficina depende casi exclusivamente de las informaciones que le entrega Investigaciones. Sus miembros buscan contactos autónomos, pero los resultados son aún magros.

En las cárceles, aprovechando la creciente hostilidad entre los remanentes del FPMR-Partido, ya extinguido como tal, y el FPMR-A, y las fragmentaciones de este último, consigue algunas cosas: nombres secundarios, chapas, direcciones.

Hasta que recibe un dato que incluye una propuesta.

Un oficial histórico del FPMR, que se ha retirado a medias del aparato operativo, estaría dispuesto a colaborar con dos férreas condiciones: que sus antiguos camaradas de combate no sean asesinados; y que, de enviarlos a la cárcel, se lo haga bajo cargos y circunstancias que les permitan una libertad y una reinserción rápidas. No pueden contar con él para nada que esté fuera de esos propósitos. Está convencido de que la lucha del Frente es inútil y desea evitar que sus compañeros entreguen la vida a una causa perdida.

La Oficina acepta el trato. El hombre se llama Agdalín Valenzuela y pasa a ser denominado con el código F1.

En la primavera de 1991, su primera información hiela la sangre de los jefes de la Oficina: tres comandantes manejan toda la estructura operativa del Frente. Si se llega a ellos, todo se acaba. Nombres de guerra: *Salvador*, *El Chele*, *Ramiro*.

F1 no aporta casi nada sobre sus identidades reales. Tras penosas indagaciones, la Oficina se entera de que *Ramiro* podría ser hijo de una jueza de algún tribunal de la Quinta Región; cuando consiguen empadronar a las familias de los jueces, pasan por encima de los hermanos Hernández Norambuena sin siquiera sospechar que uno de ellos es *Ramiro*. De *El Chele* dicen que se mueve en Las Condes y podría ser de raíz judía; y *Salvador* es un negro misterio.

Las indagaciones se focalizan en los chilenos que vivieron su exilio en Cuba; luego, en los que tuvieron instrucción militar; y al fin, en los que combatieron en Nicaragua. Favorece la tarea una circunstancia adicional: en Nicaragua lucharon también militantes socialistas que han regresado a Chile y llevan normalísimas vidas laborales. Saben poco del Frente, pero recuerdan a sus camaradas de armas.

Paradójicamente, la Oficina llega primero a la identidad de *Salvador*. Su destacado papel en Nicaragua lo hace más familiar para los que compartieron los nidos de artillería del Frente Sur. Galvarino Sergio Apablaza es un guerrero notorio. (De las identidades de *Ramiro*, Mauricio Hernández Norambuena, y *El Chele*, Juan Maco Gutiérrez Fischmann, sólo habrá noticias oficiales confirmadas en 1992 y 1996).

El 9 de septiembre de 1991 vuelve a cambiar todo. Al anochecer, tres sujetos siguen a un ejecutivo de 33 años, que va desde sus oficinas en Providencia 2019 hasta su estacionamiento en calle Coyancura, a dos cuadras.

Lo han vigilado varias veces, controlando su rutina. Pero la semana anterior, la decisiva, el ejecutivo ha ido a un seminario vespertino, alterando sus hábitos, y los hombres del FPMR han estado por desechar la operación. Se han dado, por pura exasperación, una última oportunidad para esta tarde.

Y cuando ya no creen, resulta: Cristián Edwards, gerente de diarios regionales de *El Mercurio* e hijo del propietario del principal diario chileno, va a buscar su auto a solas. Cuando mete la llave en la chapa, se hace la penumbra.

Envuelto en un saco de dormir, es arrojado al piso de un utilitario y en la calle Carmen Sylva, ya vendado, lo cambian a un auto, que da vueltas por quién sabe dónde, hasta que varias manos lo bajan y lo conducen a empujones hacia lo que percibe como una habitación pequeña. Un par de días después lo llevan a un cubículo de madera, estrecho y hermético.

Al día siguiente, la secretaria de Cristián Edwards se inquieta por la demora de su jefe. Comienza a llamar por teléfono, pero nadie lo ha visto.

—Se debe haber ido a Valparaíso —la tranquilizan—, al aniversario de *El Mercurio* de allá.

La secretaria no se conforma. Cristián Edwards es soltero, solitario, callado, taciturno, pero exageradamente responsable. No se iría sin avisar.

Al mediodía envía a un auxiliar al departamento del jefe: están la bolsa del pan, los diarios. En la tarde, va al estacionamiento: está el auto de la empresa.

Antes de irse, abre la correspondencia. Ve un sobre marcado para "Agustín Ewards" y lo deja en el lote destinado a las oficinas centrales de Lo Curro. Cuando lo vuelve a tocar, halla una dureza extraña. Intrigada, lo abre: es el carnet de Cristián Edwards y una nota que no entiende.

El 11 es feriado. La Concertación no ha conseguido derogar el asueto del aniversario del golpe. La UDI condecora a Pinochet y los manifestantes de izquierda vuelven a enfrentarse a la policía en la ciudad.

En *El Mercurio* sólo trabaja el turno. Y, odiándolo como sólo se odia a los turnos, el editor de redacción, Juan Pablo Illanes, se distrae en los ventanales cuando entra Felipe Edwards:

—¿Has visto a Cristián?

—No. ¿No iba a la ceremonia de Valparaíso?

—No sé. ¿Crees tú? No hay ni rastros. Tal vez se haya ido a la residencial...

Pero Felipe Edwards, intranquilo, lleva la inquietud hasta el fundo de su padre en Graneros:

—Es un secuestro —anticipa Agustín Edwards, que por años ha considerado demasiado vulnerable a su familia y demasiado desaprensivos a sus hijos.

Esa tarde la familia inicia las averiguaciones. Mientras los ejecutivos de *El Mercurio* son convocados de regreso a sus oficinas, aparece la carta, redespachada por la secretaria. Es, en verdad, incomprensible. Con un lenguaje seudorreligioso, que se encomienda al Señor y simula plegarias, habla de una "empresa común" que ha de terminar bien.

En la noche la familia decide avisar a la policía y al gobierno. Especialistas de Investigaciones y Carabineros, un abogado del Ministerio del Interior, un oficial de Ejército, el gerente general de *El Mercurio*, Jonny Kulka, e Illanes, se reúnen con Agustín Edwards para analizar los datos.

En la mañana siguiente, el ministro Krauss informa por teléfono al Presidente Aylwin, que se encuentra en Isla de Pascua. Luego preside la reunión donde participan Kulka e Illanes, el general (R) Horacio Toro y el general Sergio Lütjens, director de Inteligencia de Carabineros. La primera decisión es compartida por todos: nada debe saberse hasta tener más certezas sobre la naturaleza de los hechos. Krauss se compromete a solicitar en los tribunales una prohibición de informar, que esa misma tarde llegará, con rasgos crípticos, a todas las salas de redacción.

En el intertanto, un emisario de la familia Edwards visita al empresario Manuel Cruzat, que en 1984 fue la primera víctima de un secuestro político con fines económicos. En cuanto ve la carta, Cruzat sentencia:

—Son los mismos. El Frente. Tengan cuidado: no los menosprecien.

En la vorágine, Krauss solicita ayuda al FBI; el agente David Schuimp y un ayudante llegan desde Uruguay, pero no son expertos en secuestros, sino en coordinación de policías. Ambos se instalan en una oficina del cuartel central de Investigaciones.

Lo primero que les inquieta es la austeridad del secuestrado. Cristián Edwards gana un buen sueldo, es soltero, tiene pocas necesidades, y sin embargo carece de bienes visibles. ¿Tendría dinero en efectivo? En la pizarra donde traza sus análisis, Schuimp anota una pregunta: "*Where is the money?*". Quedará allí hasta que se vaya del país.

Por su lado, la familia Edwards pide auxilio a una compañía de seguros de Suiza, que accede a enviar a un especialista cubano-norteamericano, Hugh Bichino, que ha trabajado en la CIA y negociado unos 40 secuestros y conocido en detalle otros 100.

La recomendación es la misma: negociar.

Bichino impone dos criterios iniciales: la negociación la llevará un ínfimo comité de la familia, no más de tres personas, y el intermediario ha de ser alguien ajeno, que pueda dar confianza a todos. El comité se constituye con Agustín Edwards, Juan Pablo Illanes y el asesor jurídico Enrique Montero. La sugerencia de un sacerdote como mediador proviene de un oficial de la DINE: en la liberación del coronel Carlos Carreño, en 1987, fue crucial el cura Alfredo Soissa-Piñeyro. Ya está un poco quemado, pero...

Los hombres de *El Mercurio* hacen una breve lista y Edwards escoge a quien más conoce: el jesuita Renato Poblete, capellán del Hogar de Cristo.

El domingo 15 de septiembre se publica en el cuerpo C de *El Mercurio* una foto de Edwards realizando una donación a Poblete. Esa noche, el cura se ofrece en Canal 13 para una tarea de absurda amplitud: "Ayudar a quien tenga problemas".

Después de doce días de silencio, el 23 de septiembre, la central telefónica de *El Mercurio* recibe una docena de llamados de personas que no quieren identificarse y piden hablar con Agustín Edwards. Uno de esos llamados lo toma finalmente Enrique Montero, quien dice que el interlocutor apropiado es el padre Poblete. Tras una retahíla de insultos y amenazas, la voz anónima corta.

Al día siguiente, en un clima de rumores y algún enojo de los medios de comunicación, los ejecutivos de *El Mercurio* piden al ministro Krauss que solicite el levantamiento de la prohibición de informar. Esa tarde estalla la noticia en *La Segunda*. Y hacen su aparición, como ha advertido Bichino, los "chacales": los sujetos que dicen tener alguna pista a cambio de algún dinero. (Uno de ellos, empleado de un centro de esquí, se pasa de largo tras concluir el caso, e intenta extorsionar al empresario Carlos Cardoen, que avisa a la policía. El hombre cae preso).

El nerviosismo crece en el gobierno y en sus aparatos policiales. Cierto día, un detective informa a sus superiores que ha visto al secuestrado en los jardines de la casa de Agustín Edwards. El general (R) Toro pide a Edwards que lo reciba:

—Sabemos donde está su hijo —dice.

—¿Dónde? —pregunta Edwards, ansiosamente.

—Aquí. En esta casa.

Tras un segundo de perplejidad, Edwards advierte el alcance de la afirmación y estalla en ira. Toro es expulsado de la casa. Su agente ha confundido al secuestrado con su hermano Felipe. Toro no regresará a las reuniones que todos los viernes tienen los hombres de la Oficina, los mandos de Carabineros y el comité que representa a la familia. Por Investigaciones asistirá ahora el prefecto Juan Fieldhouse.

El 30 de septiembre, los secuestradores hacen llegar un sobre con la licencia de conducir y una carta manuscrita de Cristián Edwards. Bichino concluye: la negociación está por empezar. Pero el incidente con el general (R) Toro ha sembrado la desconfianza en el comité de la familia. Deciden entonces no informar al gobierno ni a Investigaciones, aunque sí a Carabineros; el general Lütjens y el general subdirector, Gabriel Ormeño, seguirán paso a paso las tratativas.

Otra carta de Cristián Edwards llega a un familiar en EE.UU., que la lleva al FBI para un peritaje caligráfico. Esa gestión también se mantiene en secreto.

En el intertanto, los secuestradores llaman por primera vez al padre Poblete y le dan instrucciones: debe recoger una carta en el baño de un bar de Santiago, el 1° de noviembre, día de Todos los Santos.

Por las mismas fechas, la Oficina consigue que F1 realice un detallado análisis del secuestro y de sus posibles pasos. Ya no cabe duda: es la dirección del FPMR-A, que ha lanzado la operación para abultar sus menguados recursos. Cuando Marcelo Schilling repite esta descripción en la reunión del viernes siguiente, nota que el comité de la familia y los oficiales de Carabineros guardan silencio. Se va inquieto.

El 1° de noviembre, el grupo de contacto del FPMR-A realiza una verdadera *gymkana* con el padre Poblete: debe recorrer baños públicos, cabinas telefónicas, plazas y calles solitarias antes de llegar a la olvidada tumba de una familia Edwards, donde halla una carta.

Es la petición de dinero[3], con las instrucciones para mostrar la aprobación. La familia debe publicar un aviso económico que diga: "Compro íconos veda", y agregar una dirección: el número de la calle será el número de días que se demorará en tener el dinero.

Pero en toda negociación, la primera cifra es sólo eso: la primera. El experto recomienda responder rápido y entrar a un proceso de discusión. Entonces el aviso que se publica es otro, que propone ofertas para los íconos veda. El padre Poblete esperará en su teléfono todas las mañanas a contar de ese momento.

Es una espera cansadora. Requiere paciencia, e incluso una dosis de humor: los secuestros tienen una cierta dimensión de juego, de siniestro desafío de inteligencias. Mientras los avisos económicos se publican con pequeñas variantes, el padre Poblete aguarda. Un día recibe el llamado de una señora:

—Mire, tengo un ícono veda...

—¿De qué siglo? —se apresura el sacerdote.

—Me parece que es del siglo XVIII.

—Ah, no. Sólo estoy interesado en los del siglo XIII hacia atrás.

La ínfima posibilidad de que alguien quisiera hacer un negocio de verdad con el críptico aviso se ha producido. Más adelante, los propios secuestradores se darán cuenta de que la repetición propicia equívocos y propondrán cambiarlo por un instrumento musical.

Unos días más tarde, un ministro recibe en La Moneda un llamado de un hombre de la CIA: quiere informar que un familiar de Edwards ha ido a las oficinas del FBI a pedir un peritaje. Schilling menciona el hecho en la reunión del siguiente viernes. El comité de la familia queda demudado.

De regreso en La Moneda, Schilling recibe un llamado de Illanes, y Burgos uno de Montero: quieren verlos de urgencia de nuevo. Esta vez, el encuentro es en el palacio. Illanes y Montero desean explicar por qué iniciaron la negociación sin informar a la Oficina. La situación es muy delicada, dicen, no han querido burlar a nadie, pero...

Los hombres de la Oficina aceptan las explicaciones. En adelante, estarán informados.

Y ese hecho puede resultar crucial: en enero, F1 informa que el comando del FPMR-A está nervioso. Algunos se sienten seguidos. Le han dicho:

—Nos están respirando en la nuca...

Quien les respira en la nuca, desde diciembre, es el subcomisario Jorge Barraza, a quien el general (R) Horacio Toro ha puesto a seguir la pista del subsecretario Velasco en el secuestro: *El Negro* Palma. Toro y Velasco tienen un acuerdo: si Barraza muestra eficiencia, se le creará una unidad propia para seguir este tipo de casos.

El subcomisario reúne a un grupo de su confianza y vigila al *Negro* Palma y a su contacto, *Emilio*. Los agentes montan operativos alrededor de tres casas en las comunas de La Florida y Macul, y anotan matrículas de autos, fotografían, filman, levantan planos. Hasta logran infiltrar a un hombre en una de las casas: para su fortuna, no tiene nada que ver con el Frente.

Cuando es informado, Belisario Velasco recuerda que apenas un mes antes ha entregado a Investigaciones, con la expresa instrucción de capturarlo vivo, la dirección donde se ocultaba Marco Ariel Antonioletti, un terrorista del Lautaro que había sido rescatado del Hospital Sótero del Río tras una sangrienta balacera. Pero los detectives han allanado con una andanada de disparos: Antonioletti cayó muerto con un balazo en medio de la frente; peor aún: con una bala que rebotó en una reja. Nada de eso puede repetirse.

—En una de esas casas puede estar Cristián Edwards —le dice a Toro—. Si le pasa algo por culpa de ustedes, los denuncio. ¿Me entiendes, Horacio? Ni un movimiento: tienen el 50% de posibilidades de equivocarse.

Barraza limita su tarea. Graba las rutinas de los frontis en tediosos videos; oye conversaciones telefónicas tan aburridas, que parecen criptogramáticas; averigua sobre las apacibles señoras que barren las veredas o salen a compras de almacén. Estudia la casa del pasaje Huara 143, en La Florida, donde *Emilio*, el jefe directo del *Negro*, vive con *Ximena*, estudiante del Campus Oriente de la UC y otra pieza del asesinato de Guzmán. Y estudia la de calle Poeta Vicente Huidobro 3718-1, que tanto visita *Emilio*. En el último día de 1991 informa a Toro que, con un 90% de certeza, Edwards está secuestrado en la segunda. Acierta.

Está encima de sus presas.

Les respira en las nucas.

Por fin, en la penúltima semana de enero de 1992, los secuestradores aceptan la última oferta de los negociadores de *El Mercurio*: un millón de dólares. Schilling recibe en la Oficina la reacción que han tenido los frentistas:

—La familia se abrió de patas.

El comité que representa a la familia Edwards respira con alivio: quiere decir que los secuestradores están satisfechos. Se ha llegado a la fase final. El padre Poblete recibe las instrucciones para llevar el dinero el sábado 25 hasta un "teléfono inteligente" ubicado cerca del cine El Golf. En ese punto, hay nuevas órdenes: lo esperan en la iglesia de los Angeles Custodios, en Providencia.

El sol castiga sin clemencia los desiertos alrededores de la iglesia. En un trozo de sombra, alguien que parece ser un fotógrafo parece dormitar. Después de largos minutos, Poblete decide que el contacto ha fallado, y se va. Mientras su auto parte, divisa al fotógrafo que corre en dirección contraria y aborda una micro hacia el centro.

El siguiente llamado es de advertencia: en el camino, dicen los frentistas, detectaron presencia policial. Nada de jugarretas, cura. A la próxima no hay tu tía.

Pero no es verdad. En el Frente se ha abierto una discusión sobre el fin de la operación y el ministro Correa ha recibido de un servicio extranjero la versión de que un hombre apodado *El Viejo* es decisivo para el desenlace[4]. Se ha decidido consultar al gobierno cubano si tiene información sobre esto. Y los hombres del Departamento América intervienen por primera vez: uno de ellos se reúne con un comandante del FPMR en Argentina para asegurarse de que no haya un final trágico.

La demora asombra al experto Bichino. Le parece insólita, única: los secuestradores pueden equivocarse por precipitación, pero no por parsimonia. Recomienda no acceder a la nueva fecha que proponen, el viernes 31 de enero. Llenos de dudas, Montero e Illanes hablan con Schilling, que se irrita con el consejo del cubano-norteamericano. Tienen que seguir, dice. El padre Poblete y el chofer Cancino deben acuartelarse en un departamento especialmente arrendado, y cumplir las nuevas instrucciones.

Ese viernes, el periplo del sacerdote y el chofer se inicia en la iglesia de los Angeles Custodios y culmina, horas después, en el kilómetro 14 de la Ruta 5 Sur, fuera de Santiago, donde Poblete debe arrojar desde un paso sobre nivel el maletín con los dólares[5].

Al día siguiente, los frentistas envuelven a Cristián Edwards en el mismo saco de dormir, lo suben a un furgón y, después de muchas vueltas, lo arrojan en las cercanías del paradero 14 de Vicuña Mackenna. Escuálido y desgreñado, el ejecutivo regresa a su casa después de 145 días de terror.

Esa misma noche Barraza se comunica con la familia Edwards. Necesita saber si el secuestrado podría identificar la ubicación del motor del vehículo en que fue sacado: adelante o atrás. La razón es que de las dos casas que vigila salieron a horas parecidas sendos vehículos. Los diferencia la posición del motor.

Cuando obtiene ese dato, Barraza confirma el domicilio del secuestro. Pero todavía no lo tocará. Está muy cerca de los peces gordos.

Para entonces, Toro ya lo ha puesto al frente de una nueva Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), que no depende de la Jipol, sino del director general de la policía. Lo financia Velasco, también con fondos reservados.

Toro instala una oficina en la calle Valentín Letelier, a pasos de La Moneda, y faculta a Barraza para elegir a sus hombres, que en un momento llegan a ser más de 60. Los provee de autos, teléfonos celulares, computadores, auxiliares; y ordena que todos los recursos de Investigaciones queden a su disposición, lo que les dará acceso privilegiado a las tres avionetas del servicio. La BIOC es el sueño de un policía.

Pero los sueños de unos son a veces las pesadillas de otros. ¿Un subcomisario a cargo de semejante unidad? Y los veteranos prefectos, ¿por qué deben pasar en la espesura de la burocracia mientras el otro tiene acceso directo al jefe? Los hombres de la BIP no llegan a 20 y viven en las estrecheces; se deben disputar los autos y los celulares ni los conocen. Y ahora...

Pero Toro no oye estas protestas sordas. Quiere eficacia. Y símbolos: agrega a la BIOC el nombre "General Bulnes", en memoria del hombre que derrotó al bandidaje y las montoneras en la década de 1830. Y hace algo más escoriante: al comienzo, fija la sede de la BIOC en Concepción, con lo que sus miembros pueden recibir viáticos cada vez que operen en otras ciudades. Cuando la traslade a Santiago, la ira ajena ya estará sembrada.

Desalentados, los hombres que encabeza el prefecto Fieldhouse sellan su alianza con la Oficina, que a su vez pone distancia de cuanto aparezca asociado al subsecretario Velasco.

Por eso, cuando conocen los avances de Barraza, los hombres de la Oficina intentan ponerlo a prueba. Un funcionario va a exhibirle la foto de *Salvador*.

—Oye, ¿sabís quién es éste?

—No —dice Barraza, examinando con atención—. Ni idea.

Pero en cuanto nota el ligero mohín del funcionario, el subcomisario entiende que es alguien importante. Ha oído el nombre de *Salvador*, y no hace más que atar cabos. Unos días después visita a Jorge Burgos, y ve de nuevo la foto en el escritorio.

—Don Jorge —comenta—, tengo un asunto muy curioso. Yo conozco a todos los frentistas que estuvieron en Nicaragua, y hay uno que es muy parecido a usted... Bueno, me han dicho que es su primo. Artillero, de los jefes. Está en las fotos de la entrada a Managua...

—No sabía —dice Burgos, perturbado.

—Para que vea. Está en Chile. Tengo el nombre.

Burgos se siente amenazado. No lo sabe aún, pero su primo no fue frentista ni comunista, sino socialista. Estuvo en Cuba, fue de los primeros en Nicaragua, pero en Chile se ha dedicado a los negocios.

—Bueno —dice Barraza—, me han dicho que ya sabe quién es *Salvador*.

—Sí, nos llegó una foto de Apablaza —se precipita Burgos, y la muestra.

—Ah, es mejor que la nuestra —dice Barraza—. ¿Por qué no me la presta?

Cuando sale, Barraza tiene el *top* de la información de la Oficina.

Una vez que Schilling se entera de que ha obtenido la exclusiva foto de *Salvador*, inquiere por todos lados. Recién dos días más tarde Burgos se anima a admitir que fue un desliz suyo.

Con todo, la BIOC pierde a los frentistas después del secuestro. Tiene los datos de a lo menos cuatro de los participantes, y durante todo febrero los rastrea sin éxito. Hasta que una mujer, Ingrid Flores, ayudista del FPMR, aparece muerta en Maitencillo. ¿Razones del deceso? Desconocidas; pero los frentistas lo vinculan con Schilling, quien está de vacaciones en la zona.

Cuando deciden emigrar de Maitencillo, los hombres de Barraza están alertas. En marzo los encuentran en el camping Las Vertientes, en Colliguay. Rodean el lugar y filman desde largas distancias. Un agente se instala con su mujer y sus hijos en el camping y establece las funciones del grupo. Nueve militantes se pasean bajo el sol del fin del verano. Barraza tiene a algunos identificados: *Emilio*, Raúl Escobar Poblete, jefe operativo, y su pistolero, *El Negro* Palma; *Ximena*, Marcela Mardones, punto de apoyo en el crimen de Guzmán y pareja de *Emilio*; *La Secretaria*, Maritza Jara, encargada política y jefa de la casa del secuestro; *Palito*, José Miguel Martínez Alvarado, vigilante en el secuestro; *Natalia*, Silvia Brzovic Pérez, también del grupo del secuestro.

(Los tres que aún no identifica son los más importantes, todos comandantes: *Ramiro*, Mauricio Hernández Norambuena; *Rambo*, Rodrigo Rodríguez Otero; y, presuntamente, *El Chele*, Juan Gutiérrez Fischmann[6]).

El 20 de marzo, el general (R) Toro, fulminado por los planes *Halcón*, renuncia a Investigaciones. El gobierno designa en su lugar al subdirector, Nelson Mery. En ese instante comienza la soledad de Barraza.

Primero acude a Velasco:

—Subsecretario, tengo rodeada a toda una célula del Frente en Colliguay.

—Bueno, deténgalos —dice Velasco.

—No. Estoy esperando al pez gordo.

—¿Y cuántos días lleva en esto?

—Dos o tres. Ahora los tengo a todos, pero falta *Salvador*.

—Deténgalos. No se le vayan a ir...

—No. A mí no me pasan esas cosas.

Intranquilo, Velasco informa a Mery. El nuevo director es hombre de la estructura, le disgusta la inteligencia política y comparte la desconfianza por el estrellato de Barraza.

El 23 de marzo, un equipo de la Jefatura Antinarcóticos se acerca hasta unos cinco kilómetros del camping de Colliguay, buscando un laboratorio de coca. Los agentes de la BIOC los hacen retirarse, pero Barraza queda con una negra sospecha: ¿alguien está tratando de reventar su operación?[7] Al día siguiente, el 24, el grupo del Frente, que dice haber detectado la vigilancia[8], quiebra el cerco. Ni los autos ni las avionetas que moviliza Barraza impiden que la mayoría de los frentistas se dispersen y desaparezcan. Sólo dos de los perseguidos son ubicados nuevamente por la BIOC: Martínez Alvarado, al que han visto comprar un pasaje de bus para Mendoza, y *El Negro* Palma, que regresa a sus casas de siempre en Santiago.

Barraza se presenta esa tarde ante Mery. Quiere pedir permiso para seguir a Martínez Alvarado hasta Argentina. Pero ahora Mery se exaspera:

—¿Querís llegar hasta Fidel, huevón? ¡Arréstalos de inmediato!

En el bus a Mendoza son detenidos Martínez Alvarado y Maritza Jara. A Palma Salamanca lo bajan de una micro en La Florida. El resultado es ínfimo. Todos los jefes han huido. Pero hay algo valioso: ya están identificados, o en vías de serlo. Barraza conseguirá, con trucos elementales, que Palma Salamanca lo ayude en esa tarea mediante la confesión más detallada que pudiera imaginar[9].

El 30 de marzo logra ingresar a una reunión de evaluación del caso Edwards en el Ministerio del Interior donde están todos los jefazos, incluidos los de la Oficina. Las versiones sobre lo que realmente dice allí el subcomisario son tantas como las personas que asisten. Pero de esta sorprendente discrepancia sólo emerge una conclusión: la hipótesis de la culpabilidad de Olea Gaona en el crimen de Guzmán resulta desafiada por segunda vez, ahora con el peso de una confesión como la de Palma.

Pero para entonces Barraza ya libra una verdadera guerra interna. El prefecto Fieldhouse lo asedia, el director Mery le quita la autonomía y lo pone bajo el mando del prefecto Haroldo López, los recursos se le recortan.

Barraza se defiende con fiereza. Se enfrenta a Fieldhouse y López y hasta trata de acceder al Presidente: primero, a través de Marcelo Trivelli, sobrino de Aylwin, a quien Barraza ha ayudado en una investigación privada; luego, mediante Toro, que pide una audiencia formal.

La BIOC inicia un penoso camino a la disolución y Barraza intuye que su brevísimo estrellato terminará, a la postre, con su carrera policial. La debilidad de su posición será, en la hora del desquite, su principal fortaleza: la magra cosecha de presos del FPMR.

En contraste con ese relativo fracaso de la BIOC, la BIP se anota aquel verano el más resonante de sus éxitos, otra vez a partir de un informante de la Oficina.

El jueves 9 de enero, un grupo de detectives ingresa con orden judicial a la casa donde vive Bernardo Acevedo Lagos, *El Mexicano*, segundo jefe nacional del grupo Lautaro. Hallan un computador con programas codificados. Cuando Acevedo regresa, junto a su novia, comiendo un helado, oye un susurro que le suena como un trueno:

—Policía...

La BIP decodifica las claves en cosa de minutos. Halla un tesoro: las planillas de pagos de los jefes, las casas de seguridad, las armas, los planes, el presupuesto y la contabilidad. Casi no

lo pueden creer. ¿Tan aficionado puede ser un movimiento que ha asesinado a más de 30 funcionarios del Estado, cometido decenas de asaltos e invadido varias poblaciones del sur de Santiago?

Puede. En los siguientes dos años son arrestados casi 20 miembros de su comité central, pulverizando toda la estructura superior de un movimiento que no tiene bases militantes consistentes. Cortadas las cabezas, el frágil cuerpo se dispersa.

En verdad, el Lautaro nació de una escisión del Mapu en 1983, en un momento en que en todos los partidos de izquierda surgían fracciones tentadas por la lucha armada. Los dirigentes no lograron constituir una estructura militar sino hasta 1986, en un Congreso realizado en Lima. Pero desde entonces derivó hacia una extraña amalgama de violencia, bandolerismo, sexo y anarquismo. Gracias a eso, un hombre de la Oficina que llegó a especializarse en su lenguaje, pudo producir proclamas falsas para sembrar la confusión en el lautarismo. Durante los 90 los panfletos apócrifos inundaron la volátil estructura.

El último en caer, a mediados del 94, es el jefe máximo, *Diego Carvajal*, Guillermo Ossandón, un líder un tanto mesiánico al que los agentes de la BIP atrapan en una cabina telefónica en Cartagena. Tienen presentes las órdenes: no se puede golpear a los detenidos. "Bueno", se dicen, "pero antes de detenerlo...".

Por eso Ossandón recibe el primer puñete con una frase que tardará en entender:

—¡A nombre de Arriagada! —y luego el segundo—: ¡Y del Claudio![10]

El hombre trata de luchar y, ya en el suelo, desenfunda un revólver que no dispara. Quiere que lo maten: es lo que ha anunciado en las entrevistas que ha dado. Pero los detectives tienen órdenes perentorias: vivo.

Mientras esté preso agonizará el Lautaro.

Notas

1. En este episodio, ocurrido el 27 de noviembre de 1988, y que nunca logró dilucidar, Burgos y otros militantes descubrieron a dos partidarios del aylwinismo en las cercanías de los ficheros del PDC, en el último piso de su sede de entonces, en calle Carmen 8. Lo que Burgos nunca supo es que los hombres a los que sorprendieron habían ido, no a agregar nombres, como supusieron, sino a lo contrario: a retirar unas fichas irregulares que empeñosos militantes del aylwinismo habían introducido en el padrón.

2. Las acciones de violencia política en esos años, según informes del Ministerio del Interior de 1994:

	1990	1991	1992
Lautaro	128	161	118
FPMR-A	90	107	52
MIR-M	26	18	28
Otros	2	10	50
Total	**246**	**296**	**248**
Robos de Bancos	46	97	36

3. No hay coincidencia entre las fuentes acerca de la cifra requerida, aunque sí en que se trata de millones de dólares: 4 millones (gobierno), 5 (policía), 10 (negociadores).

4. Desde que la identidad de *El Viejo* no fue nunca aclarada, algunos investigadores creen que podría tratarse del mismo *Salvador*, que en su trabajo de fachada como taxista era conocido como *El Viejo*.

5. Detalles del recorrido, en: Otano, Rafael: *Crónica de la transición*, Editorial Planeta, Santiago, 1995. Ver también: *El largo epílogo de una historia infame*, Revista *Qué Pasa*, Nº 1.087, 9 de febrero de 1992.

6. La presunción de que el sujeto al que Barraza identificaba como *Piolín* —por "pasar piola"— en Colliguay era Gutiérrez Fischmann fue puesta en duda por testimonios posteriores de familiares, que dijeron que no sería él.

7. El supuesto testimonio de otro subcomisario, más el empleo de un auto que antes había usado Mery, darán más tarde a Barraza los elementos para configurar la tesis de una presunta conspiración por la cual tanto el director de Investigaciones como Marcelo Schilling habrían saboteado sus pesquisas para proteger a elevadas figuras del FPMR. Pese a las interrogantes que abrieron, estas afirmaciones no fueron probadas en los tribunales. La versión de Barraza acerca de estos hechos puede hallarse con detalles en: Beltrán, Gerardo: *Testimonio de grueso calibre*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.315, 22 de junio de 1996.

8. Ver: *Entrevista a Salvador y El Chele, dirigentes del FPMR*. Boletín *El Rodriguista*, N° 68, octubre-noviembre de 1996.

9. La intervención del prefecto Juan Fieldhouse, que llevó ante Palma al abogado del Codepu Adil Bercovic, quien advirtió al frentista de que no debía hablar más, confirma a Barraza su tesis de la conspiración de Investigaciones para demoler su trabajo.

10. El inspector César Arriagada Ortiz, el detective Claudio Hans Hormazábal y el conductor Patricio Armando Arriaza Cabezas fueron asesinados por un comando del Lautaro mientras cumplían funciones de escolta frente a la casa del intendente de Santiago, Luis Pareto, el 10 de septiembre de 1992.

12

Qué lindo es Cuba

En la triunfal política de reinserción mundial, presentando a un país que ya no tiene adversarios, sólo brilla con incandescencia una excepción: Cuba. Para normalizar las relaciones con el gobierno de Fidel Castro habrá una sucesión de condiciones.

—Me alegro —dice Patricio Aylwin— de que no tenga usted las limitaciones que tendremos nosotros con nuestra democracia.

—Presidente —expresa Fernando Collor de Melo, siempre más seguro de lo que parece razonable—, a usted también le va a ir bien. Va a poder hacer los cambios.

El juvenil Presidente brasileño acaba de asumir y esta es una de sus primeras audiencias en el palacio de Planalto, en Brasilia. Nadie puede imaginar aún que este hombre que derrotó a la clase política será expulsado indecorosamente en sólo dos años. Ahora, en marzo de 1990, su respuesta a Aylwin es una síntesis de las expectativas que medio mundo expresa sobre la democracia chilena: las cosas cambiarán.

En su primer viaje al exterior, apenas 72 horas después de ser investidos, el Presidente Aylwin y su canciller Enrique Silva Cimma se saben las estrellas de la fiesta en la asunción del segundo Presidente democrático brasileño después de una larga dictadura.

Un par de días atrás, Santiago se ha convertido en una pasarela de figuras mundiales y latinoamericanas que demuestran su aprecio por la restauración de una de las democracias más mistificadas del hemisferio.

Parte del espectáculo ha sido justamente la reapertura de relaciones de Chile con todo el mundo, símbolo de una nación renacida que de un día para otro carece de enemigos y expresión de lo que el gobierno de Aylwin ha convertido en centro y eslogan de su política exterior: la reinserción.

La palabra irrita a los partidarios del anterior régimen; sugiere que el país estuvo aislado, cuando sus relaciones comerciales, que son lo que importa, se extendieron más que nunca[1].

En la Cancillería, los funcionarios de carrera, aun los que fueron simpatizantes del gobierno militar, la entienden mejor; la subordinación, en todos estos años, al mundo de los créditos y de las balanzas de pagos ha ofendido sutilmente su profesionalismo[2]. Para los más de 80 exonerados por el gobierno militar que se reincorporan a su oficio, esta es la médula del asunto: con la democracia ha regresado la diplomacia.

Doce nuevas embajadas amanecen con destinaciones el 11 de marzo de 1990. Los cargos suscitan sordas luchas en los partidos de la Concertación, que han confeccionado listas de militantes, sólo para contemplar, con cierta impotencia, que el Presidente aplica también en esto su idea del "suprapartidismo" y toma las decisiones a solas con su canciller.

Paradójicamente, el único desacuerdo entre ambos se origina en la principal embajada, la de EE.UU.

—He pensado —dice Aylwin, revisando las nóminas— en Germán Riesco...

—Perdón, Patricio —interrumpe Silva Cimma—, pero tiene en EE.UU. a un PPD y un PS[3], ¿y va a nombrar a una persona del PAC? ¿No cree que su partido se va a enojar? Es la embajada número uno.

—Tiene razón. ¿Y quién podría ser?

—Genaro Arriagada, ¿qué le parece?

—No, no, Enrique, de ninguna manera.

El ministro calla. Ha oído el rumor de que, aunque Arriagada es el candidato obvio, Aylwin no le perdona haber apoyado a Eduardo Frei en las internas del PDC. Pero en verdad, Aylwin ya le ha ofrecido la otra embajada con sede en Washington, la de la OEA, porque cree que la representación ante la Casa Blanca republicana requiere otro estilo. Y Arriagada ha rechazado esa oferta. Otro dirigente de la DC entra al cargo mejor valorado: Patricio Silva[4]. Germán Riesco parte a la presentación de credenciales más solemne del planeta: la del palacio de Buckingham.

Cuando las designaciones concluyen, una sola excepción resplandece con incandescencia: Cuba. Los profesionales de la Cancillería han advertido que reanudar relaciones de inmediato no acarrea beneficios, que EE.UU. no lo verá con simpatía y que hay asuntos pendientes entre los estados[5].

Aunque el programa de la Concertación no dice sino que se abrirán relaciones con todo el mundo, la excepción de Cuba se convierte en uno de los puntos claves de la nueva agenda de política exterior, con enrevesadas derivaciones hacia el interior.

Y se hace sentir desde la primera salida del Presidente. El 15 de marzo de 1990, en la puerta del palacio donde Collor de Melo acaba de jurar, Aylwin y Silva Cimma esperan su auto cuando oyen un vozarrón:

—¡Pero miren a quienes me encuentro aquí! —clama Fidel Castro. La conversación está urgida por la agenda, pero Castro no olvida lo principal:

—Bueno, don Patricio, qué vamos a hacer con nuestras relaciones...

—Mire, hemos estado conversando este asunto con mi canciller, a quien usted conoce. Le he pedido que se encargue personalmente de resolverlo.

—Qué bueno, Enrique —Castro se concentra en Silva Cimma—. ¿Tú conoces a Willy Serrano, no?

—Un poco... En la Internacional Socialista.

—¿Qué te parece que lo ponga en contacto contigo? Le pediré que se haga cargo por nuestra parte.

Serrano no es del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino del Departamento América del Partido Comunista de Cuba. Pero Silva Cimma entiende que, por ser el Departamento también más cercano a Castro, aceptar esta rareza de la diplomacia isleña sería garantía de eficacia política. Por eso se reúne esa misma tarde con Serrano en la Embajada chilena de Brasilia.

Allí le plantea, por primera vez, las tres condiciones que serán la base de la política chilena hacia Cuba.

El canciller Silva Cimma ha sido uno de los políticos más sagaces de la transición. A lo largo de la década del 80, consolidó una estrecha alianza con Aylwin, a quien acompañó en el famoso seminario de 1984 donde ambos abrieron la opción de una oposición institucional al régimen militar[6].

Bajo su cordialidad y su asordinado estilo de clase media, Silva Cimma oculta una firmeza de decisión que lo puede tornar implacable. En los 80 ganó la conducción del Partido Radical,

lo alejó de su pasado izquierdista, lo convirtió en un aliado de la DC, le sacó lustre a su participación en la Internacional Socialista y reforzó la línea laica y socialdemócrata que a Aylwin le hacía falta en su diseño de coalición[7].

Luego, como generalísimo del candidato DC, aseguró para el PR una preeminencia que la "línea progresista" encarnada por su viejo rival, Anselmo Sule, no habría logrado en este esquema político.

Y cuando llegó la hora del primer gabinete de la democracia, Silva Cimma tendría su puesto estelar.

Una vez nominado en la Cancillería, logró que el Presidente electo recibiera a la dirigencia de su partido. Como todo grupo que ha estado en el poder, los radicales no se resignaban aún a su pérdida de masividad. Silva Cimma les había garantizado ya, por su sola presencia, una sobrerrepresentación en el servicio exterior. Pero, con el rugido del león en cuerpo menguado, los radicales esperaban más de todo.

—He decidido —dijo Aylwin, en la veraniega tranquilidad de la quinta campestre de su amigo José Moure— que el PR tenga dos ministerios.

—Le estamos muy agradecidos, Presidente —contestó Juan Agustín Figueroa, previamente advertido por Silva Cimma del papel que tendría—. Porque, bueno, dos ministerios más la Cancillería...

—Momentito. No se me pongan diablos —interrumpió, sonriendo, Aylwin—: dos en total. Uno es la Cancillería. El otro puede ser la Corfo, o Agricultura.

—En ese caso —intercedió Silva Cimma, siguiendo el guión—, permítame proponerle, Patricio, a *Cucho* Figueroa para Agricultura. Usted sabe que él...

—Hecho —cortó Aylwin. La conversación terminó con un brindis y con Juan Agustín Figueroa investido ministro, para alegría de todos, salvo de su primo Gonzalo Figueroa, que se había imaginado también en el gabinete.

Silva Cimma tiene el bálsamo para el orgullo dañado: Figueroa, Gonzalo, se irá de embajador ante la Unesco, una preciosa sede en París, gran premio para un demócrata y en realidad para cualquiera, para qué andamos con cosas.

A los cubanos les ofende la feroz excepción del nuevo gobierno. No les parece justa ni agradecida. Por años estuvieron recibiendo a centenares de exiliados chilenos, les dieron educación, los prepararon para lo que quisieran, y ahora...

—Lo más justo era que restablecieran las relaciones con Cuba —sintetiza Fidel Castro en TVN, en junio de 1991—, por cuanto Cuba fue muy solidaria con Chile durante todo ese período[8].

Es apenas una síntesis. Los dirigentes cubanos entienden que la coalición que llegó al poder en Santiago no es la que más le debe a La Habana, pero les irrita que Chile, y en particular los hombres de izquierda que han ascendido al gobierno, no reconozcan la ayuda que Cuba prestó a muchos de sus compatriotas.

La Habana está llena de señales. Uno de los hospitales se llama Miguel Enríquez y otro lleva el nombre del Presidente socialista. La importante avenida Carlos III fue rebautizada Salvador Allende y los monolitos se yerguen por toda la isla, de Pinar a Baracoa.

Pero no han sido sólo símbolos.

En el frenesí de la solidaridad, entre fines de los 70 y comienzos de los 80, llegó a haber unos 17 mil chilenos en Cuba. De ellos, poco menos del 60% se incorporó al trabajo, con una vida de ciudadanos.

Los demás fueron mantenidos con dinero y prestaciones sociales por el gobierno. Peor aún, muchos de los que pidieron instrucción militar en Punto Cero, el campo de entrenamiento situado en el apacible camino a Varadero, dejaron malos recuerdos entre sus instructores, quienes estimaban una pérdida de tiempo entrenar a gente tan indisciplinada y errática.

Según cálculos extraoficiales, la sola instalación de cada familia chilena costaba al Estado cubano unos 17 mil dólares. A esa cifra debía agregarse lo que se les pagaba como salario al iniciar su vida de rutina.

El Departamento América llegó a ser dotado con un ítem especial de un millón 500 mil dólares únicamente para atender demandas especiales de los chilenos, como viajes, reuniones o imprevistos.

Unos 400 chilenos recibieron marcapasos gratuitos. La cifra de prestaciones hospitalarias fue estratosférica. Y qué decir de la educación secundaria, técnica y universitaria.

Pero tal vez el gesto más expresivo, en un país con permanentes carencias de vivienda, fue la decisión adoptada por el Consejo de Ministros cuando se construyeron los complejos habitacionales de Alamar, al este de La Habana: en cada edificio, un departamento debía ser reservado a una familia chilena.

Así que esto de las condiciones es urticante.

¿Lo es? En Santiago, no todos creen eso. El Presidente Aylwin se muestra dispuesto a abrir relaciones: sería parte de su tarea de superación del pasado.

Pero el clima en la Concertación es tan poco claro, que decide hacer confianza en dos hombres ajenos a la Cancillería: el subsecretario Belisario Velasco y el ministro Enrique Correa.

La dupla es una compleja paradoja.

Velasco, DC, tiene negocios en Cuba, viaja una vez por año a La Habana desde 1967 (con un lustro de interrupción a fines de los 70) y Fidel Castro lo trata como a un amigo: cuando viajó a Chile en el 71, fue a cenar a su casa, para pataleta de su partido.

Correa, PS, desconfió siempre de la revolución tropical y terminó de indigestarse el mismo 71, cuando el canciller Clodomiro Almeyda le encargó negociar los acuerdos tras la visita de Castro. Su diagnóstico sobre el papel de Cuba es tajante: nadie ha contribuido más a la destrucción de la izquierda chilena, desde su intervención en el PS, el Mapu y el PC en los 60, su apoyo al MIR en los 70 y 80 y su auspicio a la lucha armada hasta muy cerca del fin del régimen militar.

Y todo de la mano del Departamento América, de la policía secreta y de Manuel Piñeiro, que conserva una especial relación con Chile, no sólo por su matrimonio con la teórica de la revolución Marta Harnecker, sino especialmente por sus misiones como enviado de Castro ante Allende.

Piñeiro consolidó su prestigio en los comienzos de la revolución, cuando organizó el G-2, el impenetrable aparato de contrainteligencia del nuevo régimen. En los años 60, como viceministro del Interior, se hizo cargo de la Dirección General de Inteligencia, que dejó su huella en todas las operaciones de exportación de la revolución hacia América Latina.

Piñeiro conservó esa posición hasta 1974, cuando se creó el Departamento América, que encabezó desde entonces hasta ahora, en los 90[9]. Y no hay dirigente de la izquierda chilena que no conozca el peso de sus intervenciones, durante todos esos años, en las disputas del PS, siempre en favor de las líneas "duras", y en la inclinación del PC hacia la militarización.

Correa, que siempre se fió más de los soviéticos, pide al embajador de la URSS, Yuri Popov, que lo ayude a establecer el mapa del poder real en La Habana. Popov es un especialista: como amigo personal de Mijail Gorbachov, ha estado a cargo de las negociaciones triangulares secretas para los acuerdos de paz de Centroamérica, donde la URSS ha hecho el nexo entre EE.UU. y Cuba.

Popov ayuda a afianzar la convicción del ministro Correa: hay que sacar del cuadro de las relaciones al Departamento América, cuyo historial está demasiado ligado a la subversión regional.

Tras el derrumbe en dominó de los "socialismos reales", Cuba no está en posición de rechazar amistades, ni siquiera condicionadas, y menos cuando se trata de las nuevas *vedettes* de América.

La primera condición es la devolución de un depósito del Estado chileno por 10 millones de dólares, que fue congelado por La Habana en septiembre de 1973. El gobierno de Santiago

llevó el caso a la Corte de La Haya, que en 1980 falló a su favor y congeló cuentas cubanas en Suiza por unos 42 millones de dólares, equivalentes al monto original más intereses.

Pero, aunque hace ya años que no cuenta con esos fondos, La Habana no está dispuesta a cederlos blandamente. Tiene su propia versión sobre la deuda.

Según ella, a fines de 1972, al regresar de una gira en la que halló una decepcionante indiferencia en la URSS, Allende paró unos días en Cuba. Urgido por la crítica situación económica, habría pedido a Castro un préstamo informal por 10 millones de dólares. A cambio de esto, habría ofrecido depositar francos suizos, que según dijo pertenecían al PS, por una cifra equivalente; por razones de orgullo político, el depósito se consignó a nombre del Banco Central chileno, con conocimiento del tesorero del PS y ex gerente del Banco Central, Jaime Barrios.

El préstamo de Castro no fue registrado en ningún documento y su rastro se fue a la tumba con Allende.

Jaime Barrios estaba entre el último grupo de prisioneros capturado en La Moneda el 11 de septiembre de 1973; lo llevaron al Regimiento Tacna y el 13 lo subieron a un camión militar en el que nunca regresó. Probablemente esa noche negra estuvo en el grupo de prisioneros que fue ejecutado junto a una fosa en los terrenos de Peldehue.

Ahora, en 1990, no hay testigos del supuesto préstamo de Castro.

Los cubanos contactan al empresario y ex presidente de la Sofofa Orlando Sáenz para luchar por el dinero. Sáenz realiza un intenso *lobby* en el gobierno, pero se topa, irónicamente, con la resistencia del ministro Correa, que no cree nada de la versión cubana y amenaza con avanzar en el juicio de La Haya.

La segunda condición es la liberación de un chileno, Juan Carlos Prado Araya, que llegó a ser teniente de las Fuerzas Armadas cubanas y está encarcelado desde hace once años bajo la acusación de espionaje. La DGI asegura que en los interrogatorios, Prado Araya dijo que trabajaba "para Pinochet"; nunca precisó la agencia ni el tipo de contactos.

Pero Castro ha vivido con la certeza de que la DINA fraguó al menos tres atentados en su contra, aunque carece de pruebas. Prado Araya ha llegado a ser un símbolo de esa guerra secreta y su libertad supone una decisión política que los cubanos desean reservarse para un momento significativo.

El tercer requisito es cesar todo apoyo a los grupos subversivos. Esta demanda se desdobla, a través de los meses, en tres subtemas: terminar la ayuda material a la subversión; emitir una señal inequívoca de que Cuba no respalda tales acciones; y determinar la cuantía del armamento desembarcado en Carrizal Bajo.

La Cancillería cubana afirma que la instrucción de guerrilleros chilenos cesó tras el plebiscito de 1988, pero el Departamento América parece más preciso: el último chileno entrenado militarmente egresó unos días después de asumir Aylwin.

En cuanto a otras ayudas, los revolucionarios chilenos saben que Cuba ya no está en posición de brindarlas: el abandono soviético ha comenzado a plantear la inquietante "opción cero".

Por lo demás, los hombres del Departamento América han maniobrado al menos desde 1987, cuando el gobierno argentino de Raúl Alfonsín les pidió desmantelar los santuarios del FPMR en ese país, en nombre de la estabilidad del Cono Sur[10].

Y ahora hasta han conseguido que, apenas iniciado el gobierno de Aylwin, sean los propios dirigentes del FPMR los que les pidan suspender la ayuda... en nombre de la estabilidad de la última revolución viva.

Desautorizar en público a la izquierda armada es más doloroso para Castro. Pero, por conductos privados, les hará saber que no aprueba la violencia en Chile en este momento. Y algo más: Cuba podría acoger a los revolucionarios más intransigentes, para evitar que sigan actuando en territorio chileno.

—Aquí los metemos a un CDR[11], y ya está.

¿Las armas de Carrizal? Castro dice que revelar su monto sería delación. Pero en los pasillos del gobierno cubano circula otra versión: el todopoderoso comandante sólo se habría enterado muy recientemente del verdadero volumen de los embarques.

Según esto, la operación habría sido autorizada para equipar a un pequeño núcleo destinado a dar protección a los dirigentes de la entonces oposición, incluidos los DC. Sin embargo, el FPMR habría hallado una acogida más entusiasta en el ministro del Interior José Abrantes —destituido en 1990, bajo cargos de corrupción—, que aumentó las cifras a espaldas de Castro y quebrantando la política de no entregar arsenales a organizaciones incipientes. Pero el comandante, dicen los funcionarios, no reconocerá jamás ese engaño.

Algunos socialistas, que recelan de Castro más que de sí mismos, desechan esta versión: el Ministerio del Interior no es capaz de escapar al control del barbado dirigente ni de su hermano Raúl.

Una cosa dan por cierta: los Castro no reconocerían nada. Ni el engaño ni la connivencia.

Durante todo 1990, Willy Serrano y sus dos alternos en el Departamento América, Héctor Durán y Emilio Vidal, viajan a Santiago para reforzar las "medidas de confianza". En septiembre, para el funeral de Allende, se reúnen con el ministro Correa y con el subsecretario Velasco.

En marzo de 1991, amplían el circuito, ahora con dirigentes de derecha, empresarios y sindicalistas.

La ronda de figuras chilenas por La Habana no es menor: los empresarios Carlos Cardoen, Manuel Feliú y Max Marambio, el ex dirigente DC Angel Domper, casado con una hija del *Che* Guevara, el subsecretario Velasco, los parlamentarios DC Carmen Frei, Eugenio Ortega y Andrés Zaldívar y los dirigentes de RN Pedro Daza y Andrés Allamand. Una desgracia aproxima a este último a la cúpula caribeña: su primer hijo hombre, Juan Andrés, ha caído a una piscina a los 2 años, y ha sufrido un daño sicomotor que la medicina se esfuerza en superar. Castro atiende a Allamand y le impresiona el fuerte consejo que el dirigente derechista le da:

—O mantiene el elefante blanco de la revolución, con todos sus lastres, y se hunde con él, o convierte la revolución en caballitos livianos que puedan correr hacia el progreso. No le quedan más caminos, comandante.

"Este hombre es valioso", confidencia Castro a sus asesores. "Es el verdadero adversario del futuro".

Uno de los encuentros más importantes ocurre en julio de 1990, cuando viaja a La Habana una delegación de cuatro senadores: el socialdemócrata Mario Papi, el DC Ricardo Hormazábal y los RN Ignacio Pérez Walker y Hugo Ortiz de Filippi.

Durante una reunión que se prolonga por cuatro horas, es este último quien aprovecha la persistente denuncia de Castro acerca del intervencionismo norteamericano para introducir "el otro problema":

—Si Estados Unidos —dice— interviene contra Cuba, Cuba tendrá el apoyo de América Latina. No aprobamos la intervención en otros países, como no aprobamos la suya con las armas que llegaron a Carrizal.

—Pero eso fue distinto —replica Castro, algo sorprendido—. Había una dictadura, y yo ofrecí medios de defensa a los demócratas de Chile...

—Pero ahora hay democracia, comandante, y esas armas están en manos de grupos fanatizados. Para el gobierno es indispensable saber cuántas armas fueron despachadas desde Cuba.

—Ah, no, eso no lo sé con exactitud. Algunas se cayeron al mar, fue una operación muy complicada...

En lo que resta de la cita, Castro evita el problema del embarque de armas como si fuera una infección. Atiende, en cambio, al del preso Prado Araya.

—Superar el pasado —le dice Ortiz de Filippi— significa olvidar este tipo de acusaciones, comandante...

—Espías tienen todos —dice Castro—. La gracia es que no los pillen.

En noviembre de 1990, el Ministerio del Interior presenta un programa para reanudar relaciones con Cuba que describe el paulatino cumplimiento de las condiciones previstas. Pero cuando el plan es expuesto ante el gabinete, el ministro Edgardo Boeninger, que se ha reunido con funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, dice que este paso puede ser prematuro, que a lo menos convendría esperar la reunión de la OEA en Santiago, programada para mediados del 91.

Tampoco el ambiente latinoamericano es muy propicio. En una reunión del Grupo de Río, Aylwin ha terminado en la paradójica situación de defender la soberanía de Cuba, junto al mexicano Carlos Salinas de Gortari y al colombiano César Gaviria, frente a la cerrada veleidad de Carlos Menem y Luis Alberto Lacalle.

Además, las acciones terroristas aumentan y Castro no ha hecho ningún pronunciamiento.

Los cubanos intensifican sus reclamos. En abril, Belisario Velasco le propone al presidente del PS, Jorge Arrate, que viaje a La Habana para obtener la condena al uso de la violencia en Chile.

Arrate acepta, pero con una condición: que luego de su viaje se restablezcan las relaciones. No quiere hacer un mero saludo a la bandera. Poco después, durante una cena oficial en La Moneda, consulta al ministro Correa sobre el evento de su viaje.

Pero Correa, que sabe que los hombres del Departamento América tratan de seducir a Arrate y que se imagina que el jefe del PS, renovado desde hora muy temprana, entiende poco de Cuba, lo desalienta: el Presidente, dice, no tiene intenciones de reanudar relaciones muy pronto. Arrate desiste.

Al mes siguiente, mientras Aylwin declara en Madrid que no habrá reanudación de relaciones en tanto persista la ambigüedad ante los grupos armados, el diputado socialista Camilo Escalona pregunta al ministro Correa y al presidente de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo, si puede intentar alguna gestión ante los cubanos durante un breve viaje que hará a la isla.

El ministro tiene una idea: que los cubanos inviten a Viera-Gallo para que éste formule algunos planteamientos oficiales a Castro. La situación es óptima, porque Viera-Gallo viajará primero a EE.UU., donde se reunirá con el Departamento de Estado. Podrá saber exactamente el clima que prima en Washington.

Además, para entonces habrá concluido la Asamblea de la OEA en Santiago.

La OEA sesiona entre el 2 y el 8 de junio y el gobierno de Aylwin obtiene su primer triunfo resonante: la *Declaración de Santiago*, que respalda la democracia y desalienta el trato con los países que se aparten de ella.

Pocos días después, Castro concede una entrevista a TVN —a la hija del subsecretario Velasco, Marilú—, en la que por primera vez dice que la ayuda de Cuba a los insurgentes cesó "desde el momento en que se produjo el cambio de gobierno en Chile". Es una distancia muy bien calculada.

A fines de junio, el presidente de la Asamblea del Pueblo, Juan Escalona, recibe a su homólogo chileno, Viera-Gallo. Este ya ha informado a Santiago sobre la posición norteamericana: no les gusta la reanudación de relaciones, pero entienden que no pueden interferir en la política exterior chilena. Además, ya tienen un aliado más incondicional: Menem, el Presidente argentino que fustiga a Castro en todos los foros, que ha mandado tropas al Golfo Pérsico y que quiere mantener una "relación carnal" con Washington[12].

El lunes 1° de julio, Viera-Gallo se reúne con Castro y reitera las tres condiciones.

Lo de la deuda, dice, debe ser solucionado conforme lo dicta el derecho internacional y en Santiago se entiende que Cuba ha aceptado esta tesis. También hay satisfacción por las declaraciones de distancia respecto del FPMR, aunque todavía sería útil conocer la cuantía del armamento que se hizo llegar a ese grupo. Sin embargo, sigue preso Prado Araya.

Y está lo de fondo: el gobierno chileno preferiría que las relaciones las llevara la Cancillería cubana.

—Eso —dice Castro— lo conversaré con el Presidente Aylwin en Guadalajara.

El martes 2, mientras Viera-Gallo aborda su vuelo de regreso a Santiago, el prisionero Prado Araya es sacado sin explicaciones de su celda y conducido hasta el mismo avión. Viera-Gallo lo encontrará arriba sin noticia previa. Es un regalo sorpresa.

Con él se cumplen las condiciones, pero en el gobierno chileno el clima continúa enrarecido y la personal oposición de Boeninger a la reanudación de relaciones plenas sigue incólume. El director general de la Cancillería, Carlos Portales, es quien propone la fórmula que Correa logra instalar en La Moneda: reanudación progresiva, primero consular.

Dieciséis días más tarde, Aylwin y Castro se encuentran en la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara y sostienen una reunión durante 50 minutos. Aylwin dice que, ahora que se están despejando los problemas, el gobierno de Chile está listo para dar el primer paso: relaciones consulares y comerciales.

Castro le responde al cuarto punto planteado por Viera-Gallo: las relaciones irán pasando progresivamente a la diplomacia profesional. Pero no es conveniente separar todavía al Departamento América: esa es su gente de confianza, la única que puede garantizarle que las dificultades se superarán sin las trabas de la burocracia estatal.

Al otro día los cancilleres Enrique Silva Cimma e Isidoro Malmierca anuncian la buena nueva.

A Colombia le gusta la fórmula: ese día proclama también, en el mismo Hospicio Cabañas, la restauración de relaciones consulares con Cuba.

Los inversionistas chilenos se apresuran para entrar a Cuba. Los españoles les llevan ventaja en toda la línea. Con el consulado del que se hará cargo el diplomático Patricio Pozo, las garantías mejoran sustancialmente[13].

Pocas cosas enojan más a Aylwin que el hecho de que su exitosa política exterior esté siempre marcada por la sombra del general Pinochet. A veces son los propios dirigentes mundiales, que preguntan sobre la permanencia del general en el mando del Ejército.

Algunos van más lejos. Para la Asamblea General de la ONU de 1990, Silva Cimma selecciona, de entre más de 50 peticiones de reuniones de otros cancilleres, la que le formula el ministro de la URSS Eduard Shevardnadze. Pero en la sede soviética de Nueva York, el georgiano parte con una pregunta irritante:

—Le ruego, señor ministro, que me explique cómo fue esto del milagro de Pinochet.

Silva Cimma despliega los argumentos que tendrá que repetir tantas veces: no hay tal milagro, señor ministro, porque la deuda social, la falta de equidad, los problemas de derechos humanos...

Y luego están los periodistas, la peste negra, los majaderos que siempre le preguntan al Presidente si Pinochet cogobierna. Ya está harto de esos desconfiados interrogatorios cuando, en abril de 1991, le toca más de lo mismo en Madrid.

Después de repetir por enésima vez que el general no es una amenaza para la democracia, agrega algo nuevo: que en realidad Pinochet ha contribuido a la estabilidad. Es la aceptación, a distancia, de la tesis que el mismo general le ha planteado desde antes del cambio de mando.

Unos meses después la reitera en Guadalajara ante Tomás Borge, el ex ministro de Defensa sandinista, defenestrado del poder por las primeras elecciones democráticas y convertido en entrevistador para el diario mexicano *Excelsior*.

Pero ante una pregunta de Borge añade otra novedad impactante: estaría dispuesto a una prórroga de su mandato si el pueblo la aprobara en un plebiscito.

La tentación sacude a La Moneda. Durante casi un mes, los ministros se agitan buscando la viabilidad de la operación de alargue. El Presidente se muestra tan sensible al asunto, que los que intentan desmentirlo —como alguna vez el ministro Correa— caen bajo fulminante sospecha.

Finalmente es Boeninger quien, preparado incluso para renunciar, entra al despacho de Aylwin y le dice que la sola idea de la prolongación es un error, que la institucionalidad debe cumplirse y que la democracia sólo se fortalecerá tras pasar la prueba de una segunda elección.

El 7 de agosto, el Presidente se presenta ante los periodistas de La Moneda y descarta toda posibilidad de prolongar su período.

—Creo, por lo demás —agrega—, que no se puede hablar de que sea necesario prolongar el período de transición porque, a mi juicio, la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia.

La afirmación no es todo lo improvisada que parece, ni obedece a un impulso repentino de optimismo. Quienes la leen así, se equivocan.

Es parte de una operación política.

Notas

1. Una completa descripción de estos conceptos del nuevo gobierno se halla en el primer discurso del mismo Silva Cimma ante la Academia Diplomática, el 3 de abril de 1990. Ministerio de Relaciones Exteriores: *La política exterior de Chile 1990-1992*. Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago, 1992.

2. Los funcionarios reaccionan con prudencia ante los criterios del nuevo gobierno, aunque fundan, en agosto de 1990, una Corporación del Servicio Exterior que se irá orientando a exigir la profesionalización de toda la diplomacia. Balances antagónicos sobre la Cancillería en este período pueden hallarse en: Rodríguez, Ana Eugenia: *Diplomáticos, políticos y "ventaneros"*. Revista *Hoy*, Nº 719, 25 de febrero al 3 de marzo de 1991. En este artículo, algunos de los entrevistados (sin nombre) atribuyen a los "ventaneros", ex militares ingresados irregularmente al Ministerio, la organización de una campaña de desprestigio contra las nuevas autoridades. Y: Hidalgo, Guillermo: *Botín ideológico*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.064, 2 de septiembre de 1991. Este artículo afirma que las embajadas están ocupadas por más de un 80% de políticos, mientras que "en los peores momentos de la administración anterior los uniformados llegaron a ocupar el 50%", sin precisar el método y la fuente de tales comparaciones. También: Coddou, Paula: *Intrigas diplomáticas*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.031, 14 de enero de 1991.

3. Juan Somavía, del PPD, aceptó la Embajada ante la ONU tras ver derrotada su aspiración de ser canciller; y Heraldo Muñoz, PS, fue destinado a la OEA.

4. Originalmente estaba previsto que Silva asumiera la Embajada en Argentina, pero el cuadro debió modificarse cuando, acogiendo la insistencia del Presidente de que aceptara un cargo diplomático, el jefe operativo de su campaña, Carlos Figueroa, le pidió la representación ante la Casa Rosada.

5. *Informe Confidencial*, mayo de 1994.

6. Este encuentro ha sido relevado hasta el punto de que algunos autores marcan en él el comienzo remoto de la transición, como es el caso de: Otano, Rafael: *Crónica de la transición*. Editorial Planeta, Santiago, 1995.

7. La CNI realizó y distribuyó, en 1989, una conversación telefónica entre Silva Cimma y Ricardo Lagos, donde este último reprocha al líder radical su favoritismo hacia la DC y en particular hacia su compañero de lista y contendor senatorial por Santiago Poniente, Andrés Zaldívar, que finalmente resultaría triunfante.

8. Soto, María Irene: *Amigos otra vez*. Revista *Hoy*, Nº 729, 8 al 14 de julio de 1991. Este artículo aporta detalles sobre los negocios de empresarios chilenos en Cuba.

9. Una completa y compleja descripción del papel y la trayectoria de Piñeiro puede hallarse en: Castañeda, Jorge G.: *La utopía desarmada*. Ariel, Buenos Aires, 1993.

10. Detalles sobre estas conversaciones en un excelente libro sobre el gobierno de Alfonsín: Morales Solá, Joaquín: *Asalto a la ilusión*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 1990.

11. Comité de Defensa de la Revolución.

12. La frase será usada textualmente años después, en 1997, por el canciller Guido di Tella, para asombro de la secretaria de Estado Madeleine Albright.

13. Aylwin no pudo consumar su deseo de restablecer las plenas relaciones con Cuba antes de concluir su gestión. A comienzos de 1994, cuando la decisión estuvo tomada, el canciller Silva Cimma consultó al Presidente electo Eduardo Frei si preferiría que esa decisión fuese postergada para su gobierno. Frei quedó de pensarlo y unos días después, durante una reunión de los ministros políticos de ambos presidentes en casa de Aylwin, Genaro Arriagada pidió formalmente que el gobierno saliente dejara la reanudación de relaciones con Cuba al nuevo equipo.

13

Algo gracioso pasó camino a Zagreb

Las relaciones entre el gobierno y los mandos militares continúan tensas en 1991, pero nada hace presagiar la magnitud del problema que estallará a fines de ese año: un contrabando de armas que pone al país al margen de la legalidad mundial.

Cuando el Presidente Patricio Aylwin declara que a su juicio la transición ha terminado, muchos políticos del oficialismo se sienten desconcertados. ¿Terminar? Pero si apenas ha comenzado: ahí están el general Pinochet, los "enclaves autoritarios", los casos pendientes de derechos humanos. No hay duda: el Presidente se ha precipitado...[1].

Pero no es exactamente así. Aunque los hechos vayan a contradecirlo en cosa de semanas, su afirmación no pretende ser objetiva: es un esfuerzo de voluntad. O más: un esfuerzo de persuasión.

La idea tiene un promotor principal, el director de la Secretaría de Comunicación y Cultura, Eugenio Tironi, que piensa, desde su posición mediática, que los fenómenos políticos no sólo ocurren factualmente, sino también cuando se los designa. He aquí el verbo, el poder del verbo: la transición puede terminar si la mayor voz del Estado dice que ha terminado.

¿Y para qué debe terminar? Aquí ya no es sólo Tironi, sino todo el equipo de asesores del ministro secretario general de la Presidencia, Edgardo Boeninger, un grupo de intelectuales —Ricardo Solari, Ignacio Walker, Angel Flisflisch, Rodrigo Atria, Zarko Luksic, entre otros— que prepara unos *Informes de análisis* que alcanzan rango mitológico cuando se difunde que Aylwin los estudia y los subraya. El ministro del Interior Enrique Krauss, que no se fía de los equipos sesudos, los denomina "los fumadores de opio".

Hacia julio de 1991, las encuestas han mostrado que el Presidente se encuentra en la cota más baja de popularidad desde que asumió. Aunque la cifra supera el 50%, el equipo de Boeninger estima que se trata de una advertencia: los discursos iniciales —la reconciliación, la justicia, la restauración de las libertades— se están agotando, la gestión no resistirá cuatro años de lo mismo y el fantasma del "gobierno de administración" se instalará si no se hace algo drástico.

Para "los fumadores de opio", ese algo consiste en desplazar el centro del debate desde los problemas militares hacia los desafíos del desarrollo y la modernización. Cuando Tironi propone declarar el fin de la transición, su posición es aceptada como un golpe de lucidez. Los hombres de Boeninger añaden los pasos complementarios, que serán cuatro:

1) La *Carta de Navegación*, un documento que actualiza objetivos y prioridades.

2) Un discurso del Presidente a los dirigentes de la Concertación en un acto que se realiza en el subterráneo salón José Joaquín Prieto de La Moneda.

3) El reforzamiento de un programa propagandístico llamado "El gobierno responde a la gente". Y

4) Una ronda de reuniones del Presidente con las jefaturas ministeriales para evaluar y definir realizaciones visibles.

Mientras la Concertación debate sobre las palabras del Presidente, en esos primeros días de agosto de 1991 quienes más se entusiasman son los supuestos afectados: los hombres del Comité Asesor, para los cuales tanto el fin de la emergencia como la confirmación presidencial de que el general Pinochet contribuye a la estabilidad son signos de una nueva legitimidad.

El mayor general Jorge Ballerino cree que el segundo "mes del Ejército" es una oportunidad para potenciar esas ideas. No le cuesta convencer al jefe: este año ofrecerá numerosas entrevistas.

Ballerino tiene buenas razones para su optimismo. En mayo anterior, contra su opinión, el general Pinochet emprendió una gira por Brasil, Portugal, Gran Bretaña y Sudáfrica. En realidad, Ballerino se ha opuesto a todas las salidas del general, sin comprender que, después de 11 años de encierro, Pinochet quiere viajar: a donde sea. Y si es con pretexto, mejor.

El viaje devino en desastre cuando, antes de iniciar el último tramo, hacia Johannesburgo, el brigadier general Carlos Parera, en misión en Sudáfrica, avisó que el activista negro Nelson Mandela planeaba manifestaciones contra el general. Desde la comitiva se le dijo a Parera que, existiendo una invitación del ministro de Defensa, el general Magnus Malan, que se había hecho amigo del general Pinochet, insistiera ante el gobierno de Frederick de Klerk para obtener garantías. Pero el brigadier general declaró que no había podido hacer nada. Para el entorno de Pinochet, esta falta de empeño ha sido un pecado capital.

Parera, objetado por el gobierno el año anterior, ha quedado con la cabeza sobrepuesta en el uniforme.

Pero el Comité Asesor consiguió convertir la derrota en triunfo al anunciar, al regreso del general, el desarrollo del Rayo, un cohete de largo alcance llamado "el misil de los pobres", cuya licencia fue exitosamente rubricada por el general en Gran Bretaña.

En el mes siguiente, Pinochet y Ballerino almorzaron en Lo Curro con el ministro Correa y el presidente de la Cámara, Viera-Gallo, figuras rutilantes de la izquierda de la Concertación, y les pudieron exponer, en nómina, las inquietudes del Ejército[2].

Entre ellas reapareció el asunto de los cheques pagados al hijo de Pinochet. Viera-Gallo explicó que, tras recibir el informe sin objeciones de la Contraloría, el 31 de mayo envió al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes para estudiar el último punto pendiente: la quiebra de Valmoval, sobre la cual hay dos reparos importantes en el reporte final de la comisión investigadora de la Cámara[3].

Pero no debería haber problemas. Cuando se levantaban de la mesa, ministro y diputado oyeron una críptica frase de Pinochet a Ballerino:

—Acuérdese de esa cosita.

Ballerino retuvo a Correa a la salida y le explicó: la hija mayor del general Pinochet, Lucía, seguía con el problema del ISE y el proceso había sido agitado por los diarios. Para evitarlo, Lucía Pinochet había tenido que irse a EE.UU., y ya se pasó una Navidad con los nietos del general a la distancia. Correa dijo que vería lo que podrían hacer.

Arduo es, en verdad, el destino de Ballerino. Un día después de la primera y la más peligrosa de las entrevistas de su plan de imagen, la que realiza el diario *La Epoca*[4], el general Pinochet dicta una conferencia en la Escuela Militar. Al salir, asediado por la prensa ante el hallazgo de cadáveres de ejecutados en el Cementerio General, donde se han inhumado de a dos y tres cuerpos por tumba, despacha un comentario feroz:

—¡Qué economía más grande!

La sacudida nacional es tan fuerte, que el ministro Correa debe declarar que el gobierno considera "crueles" las expresiones del general. Y oye las explicaciones privadas: el general está irritado porque las exhumaciones coinciden con el "mes del Ejército".

De poco sirven.

Los parlamentarios de la Concertación, que habían sido laboriosamente persuadidos por el Comité Asesor, comienzan a excusar su asistencia al cóctel que ofrecerá el general en Lo Curro el día 19. Viera-Gallo le sugiere a Ballerino posponer una cena que habían planeado con generales y dirigentes socialistas. Cuando el periódico *Punto Final* titula *Cínico y sádico*, Pinochet firma una carta en que exige al ministro de Defensa tomar medidas contra el vocero mirista. Rojas anuncia una querella[5].

El "mes del Ejército" progresa otra vez por una pendiente.

El 11, la UDI condecora al general Pinochet en su casa, un gesto que le costará un ácido reproche del gobierno y hasta la amenaza de estudiar el delito de sedición. En La Moneda, el ministro Krauss invita a una misa a los que estuvieron en el palacio en el terrible día de 1973, una iniciativa que provoca sorda indignación entre los generales.

Indiferente a ese clima, siguiendo una especie de implacable trama interior, el ministro especial para el caso Letelier, Adolfo Bañados, dicta el 17 las encargatorias de reo y las órdenes de detención para el general (R) Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza por el asesinato de Orlando Letelier. La fecha no es nada inocente: se trata del último día hábil antes de que se cumplan los 15 años del crimen, fecha de su prescripción definitiva. Luego, Bañados parte a pasar el largo feriado de Fiestas Patrias a Maitencillo. Cuando regrese, emitirá citaciones a 30 coroneles activos que sirvieron en la DINA. Indignado, el general Pinochet advertirá al ministro de Defensa:

—El gobierno no puede quedarse indiferente. Yo le digo que si este señor los quiere interrogar, tendrá que ir a verlos a los cuarteles...

El 19, las rechiflas contra el Presidente, el ministro de Defensa y el gabinete retumban en el Parque O'Higgins. Esta vez, el jefe de la Guarnición de Santiago, el brigadier general Guido Riquelme, ha tomado la precaución de acordar con el subsecretario de Guerra la distribución de las entradas: tres mil para las FF.AA., dos mil para el gobierno y mil para delegaciones extranjeras. También ha previsto usar la voz más alta para iniciar la Parada. Hasta exagera:

—¡Peermisoo, señoor Preesideente....!

—¡Eso sí que se escuchó! —exclama en la segunda fila el ministro Correa. Las risas invaden la tribuna.

El brigadier general Riquelme no ha querido ni la sombra de una confusión con Parera. Por eso, cuando la Parada concluye, se muestra compungido por las rechiflas.

—Hice todo lo posible —le explica al subsecretario.

—No se preocupe —responde éste—. El convento no puede ordenarse tanto si la superiora anda de fiesta.

Riquelme es el primer general en el que el ministro de Defensa y el subsecretario de Guerra deciden confiar. Es su acceso a la "cocina" de los generales.

En ese clima llega el momento crítico de los ascensos y retiros en el alto mando. En vista de que el ministro Rojas viaja fuera del país a fines de septiembre, Pinochet intenta un golpe de audacia: adelanta el término de la junta calificadora y pide una reunión con el Presidente.

Poco antes se ha quejado ante Aylwin por las manifestaciones que lo hostigan cada vez que va a La Moneda. Y el Presidente, bajo el impulso optimista del primer semestre, le ha dicho:

—Pero es muy sencillo, general. Véngase a mi casa, bien temprano. Así no hay rocha. Que su secretario, Moreno, se ponga de acuerdo con Bascuñán, cada vez que lo necesite.

Con ese sistema, Aylwin y Pinochet se han estado reuniendo casi una vez por mes, en audiencias breves y ejecutivas. Pero como el Presidente está consciente de los objetivos mayores del general, cada vez que lo intuye necesario, lo remite a hablar con el ministro de Defensa. Esta audiencia puede ser uno de esos casos.

No, le dice el jefe de gabinete Carlos Bascuñán al brigadier Sergio Moreno, la agenda del Presidente está copada. Hay que esperar unos diez días. Justo cuando esté de regreso el ministro Rojas.

Paralelamente, Ballerino contacta al ministro Correa, que subroga a Rojas, y le muestra una nómina de 30 brigadieres de entre los cuales habría que elegir a cuatro para ocupar las plazas de brigadieres generales que Pinochet ha decidido llenar este año.

En el número 17 aparece el brigadier José Zara, que trae recuerdos violentos a la Concertación[6].

—Sería mejor —dice Correa— que este amigo no estuviera...

Ballerino toma nota.

Visto que el general Pinochet mantiene su criterio de no remover a los oficiales que le disgustan al gobierno, habrá que sugerir a la junta de generales que los cuatro nuevos brigadieres generales salgan de entre los primeros 16, para no sobrepasar a Zara.

En la mañana del 8 de octubre, Pinochet visita a Aylwin en su casa. Hubiese querido tratar el problema de los ascensos a mayores generales, que son su facultad privativa, pero ya es tarde: el ministro ha regresado y dentro de un rato se reunirán. Ahora quiere quejarse de la hostilidad que se ha vuelto a crear en torno al Ejército. Las citaciones judiciales con publicidad, las declaraciones sobre el presupuesto militar, la insistencia en torno a la ex CNI.

—Y todo esto, agitado por la prensa de gobierno —dice.

—El gobierno no controla a la prensa, general —dice Aylwin—. Los tiempos han cambiado...

El general lleva una carpeta que quiere que el Presidente vea. Son recortes, la mayoría de *La Nación*.

El mismo 8 de octubre, Pinochet se reúne con Rojas y le entrega la nómina de los cuatro nuevos brigadieres generales[7]. En cuanto a los mayores generales... El gobierno, interrumpe Rojas, espera que este año pasen a retiro Parera y Castro Ivanovic, objetados el año pasado. El general se enoja. Este asunto ya se ha discutido: Parera pasará a retiro, pero Castro no. No hay razón para que salga, ya se ha explicado suficiente. Pero el ministro insiste: deben irse los dos. La reunión concluye ásperamente.

Al día siguiente, el general Pinochet parte a Arica, sin entregar la nómina de nuevas destinaciones, y hace públicos los ascensos de los brigadieres. En verdad, ha tenido en mente ofrecer una negociación mayor, pero la sola presencia del ministro lo desquicia y ha terminado por irse sin mencionarla[8].

Una semana después, el 14 de octubre, Pinochet vuelve a reunirse con Rojas para reanudar la discusión sobre los mayores generales. Lo de Castro es inadmisible para el Ejército, dice. Castro debe ascender, tal vez ocupar un puesto más bien administrativo, como Personal, y el próximo año se podría ir.

—Tengo que consultarlo con el Presidente —advierte Rojas.

Al día siguiente, llama al general por teléfono: trato hecho.

Sólo dos generales saldrán de las filas: Parera y el brigadier general Manuel Concha, ex ministro de Economía y ahora encargado en Londres del proyecto Rayo, que cumple su último cometido con el lanzamiento de dos cohetes en Iquique.

Diez días más tarde, una cincuentena de oficiales, activos y en retiro, vestidos de civil y atentos al escrutinio ajeno, ofrecen una comida de desagravio al destituido Parera en la parrillada La Cholita.

Los discursos son bravos y prodigan una palabra que suena como un hierro: lealtad.

El término del proceso de promociones no cierra la etapa de tensión que se ha iniciado entre el gobierno y el Ejército. Tampoco lo hace la postergada cena a la que invita, el 11 de noviembre,

José Antonio Viera-Gallo en su casa de calle Espoz, donde se juntan el mayor general Ballerino, los brigadieres generales Jaime Concha y Luis Cortés Villa, el coronel Carlos Molina Johnson y el coronel (J) Juan Romero con los ministros Correa y Ricardo Lagos, el senador Ricardo Núñez, el diputado Víctor Manuel Rebolledo y los dirigentes del PS-PPD Jorge Arrate y Erich Schnake.

La conversación que acompaña al buffet se desliza desde la homologación de títulos para las academias militares hasta una ley de amnistía que ponga fin a los presos políticos y a los procesos de derechos humanos. Pero no hay acuerdos: es un encuentro social.

En la segunda mitad de noviembre, la Segunda Sala de la Corte Suprema, rechazando una apelación, ordena que el proceso contra Contreras y Espinoza continúe como va. El Presidente Aylwin declara su satisfacción y el mando militar vuelve a enojarse. Ballerino pasa el mensaje a Correa: quiere decir que el Presidente no es neutral ante la justicia.

En el intertanto, Rojas se comunica con Pinochet y le pide que dé de baja al brigadier Espinoza. La situación de este hombre, dice, es irregular. Está activado por decreto, cuando ya ha cumplido con largueza su tiempo de servicio.

Pinochet rechaza con ira la petición: eso significaría, señor, declararlo culpable cuando la justicia no ha emitido fallo. No, por ningún motivo.

Entonces Aylwin, igualmente enojado, anuncia que enviará al Parlamento un proyecto para restituir al Presidente la facultad de llamar a retiro a oficiales de las FF.AA. Por primera vez en dos años, los comandantes en jefe de la Armada y de la FACh se alinean junto a la conocida opinión de Pinochet. La señal es fuerte, puesto que incluye al general Ramón Vega, que ha sucedido al general Fernando Matthei en el mando de la FACh el 31 de julio, en el primero, único y apacible cambio de jefatura militar que ha podido hacer el gobierno de Aylwin.

Pero el Presidente insiste: además, indultará a todos los presos políticos, aun los que hayan estado envueltos en hechos de sangre, porque le parece injusto que estén entre rejas cuando "otros" andan sueltos.

Los hombres del Comité Asesor suman.

Ahí está la propuesta del diputado PPD Vicente Sota para modificar la ley de presupuesto de las FF.AA.; la moción de los diputados DC Rodolfo Seguel y Rubén Gajardo para que las FF.AA. reciban el 10% de las utilidades, y no de las ventas, de Codelco; la acusación del diputado PPD Jorge Schaulsohn contra el contralor por el caso de los cheques, aún pendiente; el estudio de las leyes secretas dictadas durante el gobierno militar; el debate en el Senado para crear la Comisión de Reparación y Reconciliación; y el anuncio del ministro Rojas de que exigirá la reducción del personal de la ex CNI en un 30%, 430 funcionarios. Y ese asunto de Lucía Hiriart con el ISE, tan desagradable. Es un cuadro de hostigamiento[9].

Por eso, cuando los 27 generales que están en Santiago lo visitan el 25 de noviembre para celebrar su cumpleaños 76, Pinochet no se contiene:

—¡Pero qué quieren estos huevones!

La celebración tiene ese día un tono aciago. El general no está para fiestas. Se siente al borde de la guerra. El ardor invade el recinto[10].

Días más tarde, Krauss pide al Presidente que lo reciba unos minutos.

—Otra vez está este lío del ISE, Presidente. Parece que de nuevo van a mover el proceso. Ballerino lo ha vuelto a plantear.

—No podemos hacer nada —dice Aylwin—. Está en manos de la justicia.

—Si me autoriza, creo que puedo intentar algo. Este caballero es un ser humano y quiere pasar la Pascua con sus nietos, con regalos y a lo mejor hasta quiere hacer de Viejo Pascuero —dice Krauss, riendo.

—Es que la ley es la ley —se irrita Aylwin.

—Ah, no me diga que ahora cree que los fallos salen sólo porque la ley resplandece...

—Bueno —se rinde el Presidente—. Usted vea.

Esa Navidad, Lucía Pinochet Hiriart volverá a estar en casa de su padre. Y Krauss recibirá una carta en la que, "como padre", el general le agradece las gestiones por su primogénita.

Ninguno de los protagonistas políticos imagina todavía lo que está a punto de estallar: una espoleta que se ha activado en octubre de 1991, cuando aterriza en Santiago un representante de Ivi Finance & Managment Incorporated, una empresa con sede en los paraísos legales de Panamá y Luxemburgo, presidida por el alemán Gunther Leinthauser, nombre familiar en el submundo de la venta de armas.

El enviado de Leinthauser quiere sondear: ¿hay en Chile armamento de segunda mano que pueda servir a otros ejércitos del Tercer Mundo?

La respuesta llega con entusiasmo desde Famae: sí, el Ejército tiene de todo. ¿Qué se le ofrece? Acostumbrado a las estrecheces, el Ejército carece de desechos: conserva, repara, mantiene. ¿Quiere un viejo Mauser, un Styer? Ahí están, impecables, brillantes.

Y si quiere más cosas, venga a Famae. Una antigua fábrica, siempre deficitaria, siempre al borde de la quiebra. Hasta que llegó mi brigadier general Guillermo Letelier, que venía de Corfo. Después de que el gobierno militar diera a Famae rango de empresa autónoma, Letelier entró a la gerencia general a modernizarla. Y en dos años la tiene fabricando munición OTAN y Parabellum, fusiles, subametralladoras, granadas, minas y cargas, carros, bombas de racimo y, ahora, el cohete Rayo[11].

Aunque persisten los déficit, la industria militar que dejó atrás la "edad del hierro" de los corvos entusiasma a los especialistas. Justo ahora, en octubre, el subsecretario Sánchez prepara, con el jefe del CIMI y presidente de Famae, brigadier general Fernando Hormazábal, un jugoso contrato por 500 millones de dólares con Malasia, que por primera vez logrará una integración horizontal entre las tres fábricas de las FF.AA., Famae, Asmar y Enaer.

Y he aquí que de pronto se abre la fabulosa expectativa de exportar material de baja: fusiles brasileños Imbel y chilenos SG-542, cohetes Low, Blow Pipe y Mamba, morteros calibres 60 y 120 mm., cascos antibalas, chalecos tácticos, bayonetas y munición por toneladas. En el consejo de generales donde informa de esta oportunidad, Letelier es felicitado:

—Te pasaste, viejo.

Por eso, cuando el hombre de Ivi, el francés Ives Marziale, llega el 19 de noviembre a Famae, acompañado por el inglés Sidney Edwards y el capitán (R) de la FACh Patricio Pérez, la oferta está casi completa: 370 toneladas, por 6 millones de dólares, al destino que Ivi ha planteado: Sri Lanka.

En tiempo récord, al día siguiente el directorio de Famae aprueba la operación, avalada por un certificado de destino con un timbre y una firma del ministro de Defensa de Sri Lanka. También la aprueba el director de Movilización, brigadier general Eterio Pavez, con lo que se cumple el último trámite legal.

El subsecretario toma una prevención de rutina: consulta por oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores si hay alguna restricción para exportar armas a Sri Lanka. Dada la prisa, reitera la pregunta por teléfono al subsecretario Edmundo Vargas. No, dice Vargas, ningún problema[12].

En la semana que sigue, Marziale y el capitán (R) Pérez detectan que dos aviones Ilyushin, que han traído maquinaria industrial, esperan carga para regresar. Les proponen el negocio: ayuda humanitaria que irá a Lisboa, donde será entregada a un carguero yugoslavo que la llevará a Sri Lanka. ¿Carguero yugoslavo? ¿Lisboa, la vieja capital europea del tráfico de armas? Muy raro. Los Ilyushin fueron contratados por Southern, una de las aerolíneas favoritas de la CIA en el pasado; y en cuanto conoce la verdadera carga, su representante, Jean Paul de Bourguignon, la rechaza.

Pero desde ese instante la CIA conoce el negocio.

En este punto, el capitán (R) Pérez aporta algo más importante: un ex jefe de Inteligencia de la FACh, el general (R) Vicente Rodríguez, actual representante de Enaer para América Latina[13]. La FACh ha rechazado realizar el transporte, pero Rodríguez tiene cómo hacerlo. A

través de la empresa Main Cargo, de Antonio Sahd, y del agente de aduanas Sergio Pollmann, contrata un Boeing 707 de Florida West Airlines, pilotado por el norteamericano Marc Rae. Sahd también representa a Florida West.

Y el aporte del capitán Pérez es tan decisivo, que en adelante el general (R) Rodríguez dirige todas las operaciones sensibles. Más tarde dirá que lo hizo como un favor al capitán (R) Pérez[14]. Menudo favor en una operación de esa magnitud, que sólo podría explicarse por una generosidad ilimitada, o por el hecho, algo más pedestre, de que el capitán (R) es su socio en una empresa de suministros aeronáuticos desde enero de 1991[15].

En el frenesí de la gran operación, el brigadier general Letelier acude al brigadier general Carlos Krumm, director de Logística, para pedirle en préstamo al empleado civil Ramón Pérez Orellana. Este Pérez Orellana es famoso en el Ejército como un solucionador de problemas y tiene reconocimiento como agente de aduanas. Letelier presencia cuando Krumm se comunica por celular con el encargado de Exportaciones e Importaciones de Logística, el coronel Gerardo Huber, a cuyo mando trabaja Pérez Orellana.

—Huber, ponga a Pérez a disposición de Letelier[16].

El 29 de noviembre, un camión de Main Cargo recoge en Famae las 36 cajas de 11 toneladas y pico, por un valor de 203.330 dólares, que forman el embarque de muestras al que sucederán luego otros dos más sustanciosos, si todo sale bien. El capitán Pedro Araya entrega a Pérez Orellana una factura que indica como destino a Nigeria. Más tarde, Araya explicará la confusión porque Marziale solicitó un embarque idéntico para ese país africano[17]. Pérez Orellana advierte el error y la factura es modificada por otra que señala el destino de Sri Lanka y marca la carga como "pertrechos de propiedad del Estado".

Al sellar las cajas, el capitán Araya decide agregar dos subametralladoras de Famae nuevas, que son el orgullo de la empresa y se han comenzado a vender a otros países. Y con ese gesto, Araya incurre en el primer ilícito penal: exportación ilegal.

El funcionario civil Pérez Orellana lleva la orden de embarque en regla. En vista de que el avión alquilado no ha llegado, consigue permiso para que el camión estacione junto al cabezal norte del aeropuerto.

Y es en Pudahuel donde el general (R) Rodríguez y el agente Sahd presentan la segunda gran sorpresa: un cambio de rotulación que redesigna la carga como "ayuda humanitaria", con un timbre del Hospital Militar y una nueva hoja de vuelo, a Budapest por Cabo Verde. El piloto Rae, dicen, es norteamericano, y podría tener problemas en su país con la denominación real.

Pérez Orellana razona: el embarque está vendido y pagado, el nuevo dueño puede hacer con él lo que quiera. Firma.

Pero lo que finalmente ocurre es lo inverso: Rae exige que se rotule "pertrechos de armamento" y Antonio Sahd debe confeccionar una nueva hoja de embarque. No hay allí detalle del inventario.

Para tratarse de una exportación pagada al contado y en regla, ya tiene demasiadas rarezas. La última, y más crucial, es la que pide el general (R) Rodríguez. Como cabeza del embarque, Rodríguez ha tomado los servicios de aeropuerto de la empresa chilena Fast Air, que en la noche del 30 de noviembre recibe a las dos tripulaciones que llegan en el avión de Florida West, las ingresa, carga el combustible y realiza la estiba.

Rodríguez requiere de Fast un servicio adicional: que un oficial chileno acompañe el vuelo. A la gente de Fast no le extraña demasiado: en el mundo de los vuelos cargueros, el cobro por horas ha generalizado la práctica de las demoras y las rutas alargadas. Como control, ya es usual enviar a alguien de confianza del alquilador.

Pero ahora Fast no tiene pilotos disponibles. Sólo puede recomendar a Aníbal Pinto, un ex piloto de la FACh que ha dejado la compañía carguera hace poco. Con la aprobación del general (R) Rodríguez, Pinto sube como oficial de ruta, con asiento justo detrás del piloto, para el tedioso vuelo transatlántico.

Todo transcurre en calma hasta que sobrevuelan el Adriático, cuando Rae intenta aterrizar en un puerto italiano.

Apenas advierte la maniobra, Pinto comienza a reclamar por la extraña decisión. Pero habla poco inglés: sus chilenismos caen en oídos sordos. Y sordo es Pinto para los gritos de Rae. Mientras se imprecan sin entenderse a 30 mil pies de altura, el Boeing se balancea como un péndulo sobre los Balcanes. La tripulación presencia el absurdo debate.

Por fin, Rae lleva el avión hasta Budapest, en Hungría. Ni siquiera alcanzan a comunicarse con el teléfono que Leinthauser ha dado en esa ciudad. En cosa de minutos el avión es cercado y allanado. Las armas quedan confiscadas ese domingo 1º de diciembre.

Las autoridades húngaras han descubierto que su destino final es Zagreb, la capital de Croacia, sobre la cual pesa un embargo decretado por la ONU mientras dure la guerra civil que desintegra a Yugoslavia. Los croatas preparan la defensa de Bosnia contra la ofensiva serbia, que se iniciará días después en Mostar para alcanzar en abril al baluarte de Sarajevo.

Así, el embarque pone a Chile fuera de la legalidad mundial. Además, demora el reconocimiento oficial a las nuevas repúblicas de Eslovenia y Croacia, pese a las presiones de la poderosa comunidad de esta última[18].

Misteriosamente, las autoridades húngaras retienen el avión por un par de horas y luego dejan que Rae se lo lleve tranquilamente a Ostende, en Bélgica. No hay quien ignore que Budapest es el centro del comercio de armas para Europa Oriental, que la vigilancia norteamericana favorece a la industria israelí y que EE.UU. no ha tolerado competencia en la región.

CHarles Gillespie, el respingado embajador de EE.UU. en Santiago, se comunica el 5 de diciembre con el Presidente Aylwin para darle una información que el mundo aún desconoce: un embarque chileno para Croacia ha sido detenido en Budapest. Añade algo más: la CIA ha detectado en Miami que los mismos hombres que gestionaron el vuelo están tratando de alquilar otro para enviar más armas, ahora por Bucarest, Rumania.

Aylwin informa a Rojas, y cuando el ministro se comunica con su colega de Sri Lanka, el doctor Wijethunge, un escalofrío lo recorre: el gobierno cingalés no ha autorizado ninguna compra de Chile.

El 7, el diario húngaro *Nepszava* revienta la información con el redoble de un escándalo internacional. Cuando lee la prensa, el lunes 9, el brigadier general Letelier llama a un par de subordinados.

—Esto es lo nuestro —les dice.

—No, mi general —le responden—, ya vimos. ¿De dónde saca esa idea?

—¿Que de dónde la saco, huevones? ¿Cuántos embarques chilenos han partido a Europa en estos días?

Los temores de Letelier se confirman en minutos, cuando recibe el llamado del ministro Rojas:

—General, usted me engañó. ¡Sabía de este embarque!

—Ministro —contesta Letelier—, lo que dice es muy grave. No es cierto, yo no sabía. Pero si usted mantiene eso, espero que tenga cómo probarlo.

—Tengo. La Embajada de EE.UU. nos informó hace cuatro días.

En verdad, la prueba no es tal: sólo significa que los norteamericanos estaban enterados. Rojas lo sabe, y más lo sabe el subsecretario Sánchez, que ha regresado con el brigadier general Hormazábal en el primer vuelo disponible desde Kuala Lumpur. Como miembro del directorio de Famae y firmante de la autorización, tiene directa responsabilidad administrativa.

Por eso, una de sus primeras gestiones es reunirse con Letelier, que le propone una defensa conjunta. No, dice Sánchez, cada quien se defiende solo. Pero si Letelier dejara Famae, quizás el gobierno evitaría iniciativas legales muy drásticas.

Letelier ya ha adquirido una buena defensa, el miércoles 11: un fax en el que el *trader* Leinthauser le pide disculpas por las molestias y le asegura que, pasadas las dificultades, "la carga será enviada a su destino final, que es el país asiático conocido por usted". Pero el brigadier general entiende que su situación es insostenible.

El 16 de diciembre, el diputado Schaulsohn propone crear una comisión investigadora en el Parlamento y expresa sus sospechas de que en el embarque pueda estar envuelto Augusto Pinochet Hiriart o su empresa PSP, vendida al Ejército. La reacción del alto mando es feroz. El Comité Asesor prepara una réplica que los generales aprueban en una reunión presidida por el vicecomandante Lúcar, a la que no asiste Pinochet; en el tercer punto llega a recomendar que Schaulsohn no integre comisiones investigadoras sobre estos temas.

La Cámara replica defendiendo el derecho del diputado. Rojas declara que, con ese punto tercero, los generales pueden haber sobrepasado la Constitución.

Ese día, el 17, Pinochet recibe a Aylwin y Rojas para la investidura de los nuevos brigadieres generales. Todavía no conoce las declaraciones de Rojas. Y a la salida, la prensa lo fusila con ellas.

—¿Eso dijo el ministro? ¿Que sobrepasamos la Constitución? Bueno, la sobrepasamos, y se acabó.

El gobierno trata de salir del desafío manteniendo su autoridad; los dichos de Rojas y Pinochet se aclaran en privado. Pero en el intertanto, el auditor general Torres Silva trata de sacar el proceso de los tribunales civiles presentando una denuncia a la justicia militar. Cuando la titular del 18° Juzgado del Crimen, Berta Rodríguez, cita al empleado civil Pérez Orellana, Torres lo retiene, lo interroga y lo envía al tribunal una semana más tarde, el último día del 91.

Rojas, que siente esa demora como una provocación, solicita un ministro especial[19]. La Corte Suprema deniega el pedido, pero accede a nombrar un ministro en visita, Hernán Correa de la Cerda, que se agrega al sumario administrativo en Famae, a la investigación que Pinochet encarga al mayor general Guillermo Garín y al proceso que en la Justicia Militar abre por los mismos días el fiscal Raúl Rozas.

Letelier advierte que las acusaciones pueden inferir un daño decisivo a la industria militar. Por eso, cuando se presenta con el brigadier general Pavez en el escritorio del general Pinochet, le pide un rato privado:

—Mi general —le dice—, creo que lo mejor es que me saque de Famae.

—¿Usted está loco, Letelier? ¿Y darle un triunfo al Pelado, y al subsecretario ése?

—No se trata de eso, mi general. Esto es muy complicado, puede enredar a Famae y al Ejército. La manera de pararlo es que rueden cabezas, mi general. Sáqueme de Famae, pero no del Ejército, porque me andan buscando, y afuera se van a tirar como perros.

A la salida de Letelier, el Ejército suma otras medidas. Nada muy duro: los traslados del jefe y el subjefe de la sección de negocios de Famae y del funcionario Pérez Orellana.

En contraste, el gobierno se muestra nervioso. El rumor de las inminentes caídas de Rojas y Sánchez se expande en la Concertación. Los ministros Correa y Boeninger se mueven de prisa para evitar que la Cámara cree una comisión investigadora; si ello ocurre, la destitución de Sánchez será casi inevitable. Correa se encarga de impedir que se entusiasmen en el Senado. Al primero que aborda es a Sinclair:

—¿Recuerda lo que me dijo para el caso de los cheques? Ahora yo le digo que aunque el ministro de Defensa fuera croata, no vamos a permitir que lo boten.

El canciller Silva Cimma regresa tardíamente desde su casa en El Quisco para proponer las dimisiones de Sánchez y su propio subsecretario, Vargas, como responsables de un severo perjuicio a la política exterior. Su sugerencia es rechazada por el Presidente. Pero las dudas persisten.

Quienes las cancelan, el 7 de enero de 1992, son los diputados de RN, que anuncian que promoverán una acusación constitucional contra Rojas. El 8, el Presidente confirma a su ministro.

La investigación progresa lentamente y no logra hallar en el aparato del Estado, civil o militar, más que las trazas del entusiasmo por el negocio nuevo[20]. Sólo el empleado civil Pérez Orellana, que aceptó los formularios falsos de los compradores, y el capitán Araya, que metió

las muestras gratuitas, son procesados de entre la parte vendedora: por falsificación de documento público, uno, y por infracción a la ley de control de armas, el otro. Todos los demás pertenecen a los intermediarios.

Pero el gobierno obtiene una amarga conclusión: hay zonas del Estado que le están vedadas, que le resultan esquivas, opacas, a veces negras.

Notas

1. Este criticismo persistirá por años y encuentra una perfecta traducción en un libro que dedica al episodio un capítulo irónicamente llamado "El sueño del fin de la transición": Otano, Rafael: *Crónica de la transición*. Editorial Planeta, Santiago, 1995.

2. Soto, María Irene: *Almuerzo en el Club de Oficiales*. Revista *Hoy* Nº 725, 10 al 16 de junio de 1991. Y: Cavallo, Ascanio: *Adivina quién viene a almorzar*. Diario *La Epoca*, 9 de junio de 1991.

3. Ver capítulo 8, nota 12.

4. Sepúlveda, Oscar: *"Ahora tengo un solo trabajo, así que es más fácil", dice el general Pinochet*. Diario *La Epoca*, 1º de septiembre de 1991.

5. *Punto Final*, Nº 247, 9 de septiembre de 1991.

6. El 31 de marzo de 1988, el coronel Zara, director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, dijo en un discurso de aniversario que "nuestros corvos brillantes y acerados estarán prestos al llamado de nuestro líder", en lo que, en medio de la campaña plebiscitaria, se entendió como una amenaza al conjunto de la oposición.

7. Arturo Silva Souper, Sergio Moreno Saravia, Eugenio Covarrubias Valenzuela y Juan Stuven Silva.

8. Esta investigación no logró determinar en qué nivel y quiénes participaron en el plan de Pinochet, pero sí que sólo llegó a oídos del gobierno tiempo después. Habría consistido, en lo medular, en ofrecer la disolución programada del Comité Asesor a cambio de modificar las orgánicas de la Vicecomandancia y el Estado Mayor, además de no objetar los ascensos propuestos en los escalafones superiores. Para el proceso completo es muy valioso ver: *Otra vez los ascensos*. *Informe Confidencial*, octubre de 1991.

9. Una vez más, el único medio que registró la tensión militar con un mes de anticipación fue el *Informe Confidencial* del general (R) Ernesto Videla. Ver: *Ojo con diciembre*, noviembre de 1991.

10. *Algo vuelve a oler mal*. Revista *Hoy*, Nº 750, 2 al 8 de diciembre de 1991.

11. Una buena síntesis sobre la evolución de Famae: *Los laberintos de Famae*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.083, 13 de enero de 1992.

12. Esta respuesta es cuando menos apresurada, porque la situación de Sri Lanka es, a la fecha, ampliamente discutida en organismos internacionales y de derechos humanos, dada la crueldad de la guerra que libran el gobierno central y la minoría tamil. Esta última denuncia la existencia de más de 40 mil desaparecidos a manos del Ejército que presuntamente recibirá las armas chilenas.

13. En 1989, Rodríguez presidió una comisión secreta de ex jefes de inteligencia dedicada a enfrentar los cargos del ministro en visita Carlos Cerda en contra del Comando Conjunto, integrada también por los abogados Sergio Miranda Carrington, que pidió la amnistía para sus 36 defendidos, y Julio Tapia Falk, que la rechazó para los 4 suyos.

14. *Destino de armas se supo antes de contratar flete*. Diario *La Epoca*, 3 de enero de 1992.

15. La empresa tenía el nombre de fantasía Sodisac. *Diario Oficial*, 15 de enero de 1991.

16. Este hecho es central para explicar la menguada participación del coronel Huber, un hombre temperamental según sus camaradas, en el embarque y en la investigación judicial que conduciría, según diversas tesis, a su suicidio u homicidio, en febrero de 1992. Para una descripción completa de las dudas suscitadas por su muerte: Salazar, Manuel (editor): *Bajo Sospecha. Doce crímenes en suspenso*. Editorial Grijalbo, Santiago, 1996.

17. Es seguro que Marziale, actuando a nombre de Leinthauser, quiso realizar una compra duplicada con el supuesto fin de llevarla a Nigeria, para lo cual Famae pidió permiso al Ministerio de Defensa el 20 de noviembre de 1991. Defensa denegó la autorización sobre la base de un informe negativo de Relaciones Exteriores.

18. Una versión conocida por esta investigación, que no fue confirmada, sostiene que el embarque fue financiado por empresarios locales de raigambre croata. En todo caso, el reconocimiento diplomático de Chile se produjo recién en enero de 1992, después de que lo hiciera El Vaticano y luego de que se hiciera pública la resistencia del nuevo embajador de Yugoslavia, de origen serbio, a entregar su sede a su antecesor, de origen croata, que a la vez se acreditó como representante del nuevo gobierno de Zagreb.

19. Esta figura jurídica, creada por las leyes Cumplido y utilizada sólo en el caso Letelier, permite que en casos calificados un ministro de la Corte Suprema se haga cargo, con plenos poderes, de la investigación.

20. El detalle del material requerido supuestamente por Sri Lanka es el siguiente:
—5.000.000 de balas 7.62.
—6.000 fusiles SG-542 (7.62).
—10 lanzadores Blow Pipe.
—50 misiles Blow Pipe.
—10 lanzadores Mamba.
—500 misiles Mamba.
—4.855 cohetes Low.
—14 morteros (Comando, 120).
—10.000 granadas de mortero.
Originalmente, la petición incluía fusiles M-16, de calibre 5.56, pero el Ejército no tiene de éstos, con excepción de los que incautó al FPMR en 1986. Como alternativa, Famae propuso la venta de fusiles brasileños Imbel (7.62), que habían sido mal evaluados en Chile. En las negociaciones se agregaron bayonetas para los fusiles y muestras de cascos antibalas, cascos antifragmentación y chalecos tácticos.

14

El zafarrancho de los halcones

La administración Aylwin supo desde el comienzo que carecía de una seguridad confiable. Cuando el director de Investigaciones resintió el peso de ese vacío, ordenó elaborar los planes Halcón. Ellos determinarían su estrepitosa caída a comienzos de 1992.

¿Cuándo comenzaron las preocupaciones del gobierno de Aylwin por la seguridad de La Moneda? ¿Quién sembró la paranoia de los teléfonos pinchados, las cámaras ocultas, los micrófonos? El 11 de marzo de 1990 no, de seguro: ese fue el día de la borrachera del poder, la ocupación del Palacio por los sedientos *mujiks* de la Concertación. Pero el 12 ó 13 pudo ser: cuando los *mujiks* descubrieron que gobernaban.

De hecho, no fue sino hasta fines de ese mes cuando el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Bascuñán, y el ingeniero Germán Quintana decidieron trasladar a La Moneda la red de teléfonos presidenciales, una línea especial que comunica a todo el aparato de gobierno.

Durante todo ese tiempo la planta de la red, el corazón del sistema, estuvo en las oficinas de la DINE en calle República, donde los operadores de turno pudieron disfrutar de la tosca inexperiencia de los nuevos habitantes de La Moneda, empezando por Patricio Aylwin. Quintana mandó a sus equipos para que desconectaran las líneas presidenciales; la planta, analógica, anticuada, quedó en la DINE.

Pero La Moneda no adquirió nada mejor. Utilizó otra planta antigua y Quintana recibió la instrucción de garantizar la seguridad sólo de las comunicaciones dentro del palacio. Bascuñán no creyó necesario invertir más dinero, entre otras cosas porque el principal cliente, el Presidente, mostraba un olímpico desapego por la seguridad y retenía su hábito de discar personalmente cualquier teléfono cuando lo necesitaba.

La preocupación por los micrófonos fue algo más compartida y se generalizó entre los ministros desde que, durante una revisión en la oficina privada del ministro de Defensa, un oficial se abrió paso entre los técnicos y, sin más explicación que un lacónico "Permiso", se llevó un macetero que jamás regresó al despacho.

En La Moneda, el temor de que hubiese instalaciones de escucha se difundió tempranamente. Y el ministro Krauss, bombero, alguacil, amigo y familiar de carabineros, cívico donde se lo pidan, haciendo fe de la policía, aceptó una revisión general del palacio por el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), que dio los resultados más satisfactorios: negativos.

Pero el jefe del gabinete del Presidente, Carlos Bascuñán, necesitaba certezas mayores. Por eso acogió de buen grado las insinuaciones del gobierno alemán, que envió un equipo para revisar los despachos presidenciales. El jefe del grupo, digamos Hans Schmidt, verificó la limpieza de los salones y dio una cartilla de instrucciones. Por si requerían alguna consulta, dejó

un teléfono en Bonn, que Bascuñán usó días más tarde. Pero en el mes siguiente, cuando quiso hablar de nuevo con Hans Schmidt, la operadora le dio dos sorpresas:

—Ese teléfono no existe, señor. Y el nombre tampoco: el último Hans Schmidt registrado murió en 1946...

Tampoco al subsecretario Belisario Velasco le parecieron suficientes las prevenciones de Carabineros. Y como el ministro Krauss sabía que el subsecretario entendía y disfrutaba de estas cosas, lo autorizó a buscar nuevas fuentes. Velasco demoró poco en hallar la ganosa ayuda de la Embajada de Israel, que ofreció traer a unos expertos del Mossad.

Los especialistas israelíes llegaron a La Moneda a fines de marzo, con unas cajas rodantes que escrutaron cada rincón del edificio. No hay nada, sentenciaron.

Unos meses después, fue la Embajada de EE.UU. la que prestó su ayuda. Los agentes del FBI compartieron la conclusión de los colegas del Medio Oriente. No hay nada, qué bueno.

Pero Velasco y otros pocos funcionarios recelaban de estas espléndidas noticias. Había pequeños indicios, que la mayoría prefería atribuir al hecho más obvio: en La Moneda seguían trabajando muchos profesionales y todo el personal auxiliar que había servido durante el régimen militar. Para ojos paranoides, el palacio podía ser una planilla de potenciales espías.

Paradójicamente, el ministro Correa ratificó las dudas de Velasco cuando contó que el general Pinochet le había dicho que en el palacio le grababan sus conversaciones. En verdad, el general nunca dijo si tenía más evidencias que las frases que le reproducían los ministros.

Pero Correa estaba convencido de que el general, desconociendo la capacidad de Aylwin para repetir diálogos con perfecta fidelidad, lo imaginaba como un palaciego Apolonio, oyendo tras los pesados cortinajes.

¿Quién podía atribuir seriedad a semejantes especulaciones?

Velasco.

Un año después del cambio de mando, el subsecretario aceptó la oferta de una tercera embajada, la de España, que aseguró que los especialistas del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) estaban entre los mejores de Europa.

Cuando llegaron, los españoles propusieron cambiar el método: la revisión sería sorpresiva, nadie se movería del palacio por unas horas, las comunicaciones telefónicas, en especial las de la guardia, quedarían suspendidas. ¿La razón? Si había aparatos ocultos, sería más fácil descubrirlos estando activos; en el caso de tener control remoto, cualquier aviso permitiría desactivarlos y complicar el rastreo.

Así fue. Cinco hombres del Cesid se dejaron caer sobre La Moneda en la mañana: un, dos, tres, momia es.

Y comenzaron a revisar con dos máquinas dependencia por dependencia. Sus sensores se mostraron indiferentes hasta que llegaron a la sala de reuniones del ministro del Interior. Allí comenzaron a aullar.

Por aproximaciones paulatinas llegaron a la pata de un pesado y antiguo librero, en cuya zona posterior hallaron un agujero digno de una solitaria termita. Al rasparlo, descubrieron que una fina amalgama de madera dejaba paso a un canal tallado a lo largo de más de 40 centímetros: una antena y un micrófono de alta sensibilidad encabezaban una hilera de baterías de larga duración que, tras desgastarse, podían sucederse unas con otras. El aparato era de tan alto refinamiento, que los españoles pidieron autorización para llevarlo a Madrid como objeto de estudio. Nunca lo devolvieron.

En el despacho del subsecretario Velasco, los sensores volvieron a inquietarse. Esta vez, los indicios fueron más oscuros: apuntaban a la mesa de reunión.

Pieza por pieza, el mueble fue desarmado hasta que no quedó sino su estructura básica. La alarma se concentró en uno de los largueros que servían de sustento al cajón de la mesa: cuando lo desclavaron, los agentes hallaron otro canal, de nuevo de unos 40 centímetros, con la consiguiente fila de baterías y un micrófono.

Nunca hubo certeza sobre el origen de los dispositivos. El de Velasco era más peligroso: mientras el ministro Krauss apenas ocupaba su sala de reuniones, el subsecretario realizaba todo su trabajo en el despacho. En parte por eso, al otro día Velasco decidió llamar al jefe de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Alfredo Núñez, responsable de la guardia de palacio:

—Alfredo, hemos descubierto micrófonos. Yo creo que fueron ustedes.

—¡Cómo se te ocurre! —exclamó Núñez—. Es una acusación muy grave, Belisario...

—No es una acusación todavía. Es una advertencia. Los hallamos en maderas trabajadas, con mucho tiempo de artesanía. Hace seis meses, para la última revisión, no estaban. Y ¿quiénes se quedan a solas en La Moneda desde el viernes hasta el lunes? Ustedes: no hay más. La próxima vez los denuncio.

La apreciación de Velasco no era compartida en La Moneda. Desde luego, no por el ministro Krauss, que se inclinaba a sospechar de algún servicio extranjero, quizá los mismos que tanta ayuda prestaron antes.

Pero en las revisiones que se siguieron realizando cada seis meses, nunca más volvió a aparecer micrófono alguno.

Durante todo su primer año, el gobierno de Aylwin sabía que no tenía cómo neutralizar, o siquiera conocer, las eventuales operaciones de inteligencia en su contra. Sólo podría confiar, algún día, en Investigaciones.

Pero cuando el Presidente invitó al general (R) Horacio Toro a su casa, en los últimos días del verano del 90, imaginaba que sería una tarea larga.

—Sé que esto es lo peor que le puedo ofrecer, Horacio. Pero necesitamos una policía para la democracia.

Toro, que había sido secretario de los Independientes por Aylwin, esperaba algo más tranquilo, tal vez la Digeder. Pero el desafío terminó por entusiasmarlo, acaso porque su peculiar coraje nunca se avino muy bien con la prudencia y la quietud.

En 1967, como mayor, fue uno de los dirigentes secretos del "Tacnazo", la asonada contra el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El día que el general Roberto Viaux se acuarteló en el Regimiento Tacna, Toro esperó en el Ministerio de Defensa a dos compañías de paracaidistas que tomarían presos al alto mando y al ministro. Para su suerte, los paracaidistas nunca llegaron.

Pero el general Carlos Prats supo de su participación y, cuando llegó a la comandancia en jefe, bloqueó su ascenso una y otra vez. En 1973, cuando comandaba el Regimiento Guías en Concepción, Toro cometió su audacia final: redactó un documento en el que, junto con criticar al gobierno de la UP, advertía sobre el poco aprecio de la oficialidad por el comandante en jefe. El documento circuló y Prats ordenó la baja de Toro.

Entonces vino el golpe de Estado y el general Pinochet alcanzó a reintegrarlo antes de que el trámite se completara. Además, lo puso en la subjefatura del Comité Asesor de la Junta. Pero en 1978 Toro ya tenía opiniones propias sobre el itinerario del gobierno militar: allí concluyó su carrera[1].

En cuanto llegó a Investigaciones, en marzo del 90, hizo el diagnóstico propio de un temperamento impetuoso: los detectives se veían disminuidos, acomplejados, intelectualmente subalternos del mando militar que tuvieron durante más de 16 años. La primera tarea sería devolverles la autoestima.

Cuatro meses después, detectó un segundo problema: la corrupción. El 11 de junio lo dijo ante la prensa. Esa tarde, las radios de las patrulleras hirvieron de protestas anónimas contra el director que los desprestigiaba. Toro quiso investigar el origen de los mensajes, pero no pudo; eran muchos y los hombres se protegían entre sí. Segunda tarea: formar un mando de confianza.

En esos meses, las evidencias sobre envolvimiento de policías con el tráfico de drogas emergieron con fuerza desconcertante. Toro quedó impresionado cuando el subsecretario Velasco le contó que al regresar de una reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) en Ixtapa, a la que asistió con un oficial de Investigaciones que el mismo Toro

le había presentado como un calificado especialista, fue a verlo el primer secretario de la Embajada de EE.UU.:

—Señor Velasco —le dijo—, me han encomendado contarle que por deferencia a su persona no detuvimos en México a su acompañante. Tenemos fuertes sospechas sobre su relación con el narcotráfico.

Tercera tarea: limpiar.

El 30 de agosto de ese año, con el apoyo de las únicas tres personas que pudo llevar a su gabinete —su secretaria, un ayudante y un asesor legal—, Toro ejecutó sorpresivamente su *Operación Carrusel*: la destitución de los 22 mandos superiores de Investigaciones, un descabezamiento destinado a marcar el cambio del estilo institucional.

Para entonces, Toro ya tenía otro flanco abierto: el Ejército. En el mismo marzo del 90, a días de asumir, impartió instrucciones para vigilar los movimientos del general Pinochet. Otros hombres fueron destinados a seguir al almirante Martínez Busch.

Cuando los reclamos de ambos comandantes en jefe coincidieron en el escritorio del ministro Rojas, éste ofició a Krauss para que detuviera tales acciones. (Toro se quejaría más tarde de que Pinochet malinterpretó el propósito de proteger al principal blanco de la transición.)

El director de Investigaciones debió restringir sus operaciones. Por un tiempo.

La DINE, con razón, no le creyó. Intervino sus teléfonos. Su secretaria fue sometida a una indiscreta vigilancia. Su domicilio quedó bajo observación. Su celular fue constantemente rastreado. Los informes de las escuchas llegaban puntualmente a las oficinas del Comité Asesor, a la espera de que algún tropiezo mayúsculo creara la oportunidad para derribarlo[2].

Toro, que conoció esas iniciativas, no sólo no se amilanó, sino que tomó la ofensiva. En mayo despachó un radiograma a todas las unidades para que verificaran si había vigilancia de la DINE. Las respuestas afirmativas llegaron por decenas. Sabía que estaba en desventaja.

El Ejército disponía de una sobrecapacidad instalada que superaba cuanto pudiera tener: los 2.000 hombres heredados de la CNI, con todos sus equipos y recursos (entregados a la Dirección de Material de Guerra), los más de 300 efectivos de la DINE y todas las unidades funcionales, como Telecomunicaciones, el Batallón de Inteligencia o incluso el Comité Asesor.

En su cuartel de calle General Mackenna, Toro podía contar con cerca de 300 detectives, que se repartían en cuatro dependencias de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol): el Departamento de Información e Inteligencia, la Brigada de Inteligencia Policial (de Santiago, BIP), la Brigada Especial y el Grupo Operativo Táctico. Todos ellos podían cumplir tareas de inteligencia.

Los puso en eso, y se notó: a fines de septiembre, los periodistas expulsaron a dos detectives que tomaban notas en una conferencia de prensa de los trabajadores del cobre. Toro pidió disculpas públicas y exigió a sus hombres más discreción.

Pese a las dificultades iniciales, logró producir un informe reservado, que comenzó a enviar cada miércoles a seis escritorios de gobierno[3]. La *Síntesis semanal* se vino al suelo en agosto de 1990, cuando *Hoy* publicó su edición 21, que contenía apreciaciones sobre una supuesta inestabilidad de la Fuerza Aérea[4]. El general Matthei reaccionó con dureza contra la "irresponsabilidad temeraria" de la policía civil y el gobierno debió desautorizar, con cierto nerviosismo, la actuación del general (R).

(Sin embargo, los informes no estaban tan descaminados: por esos días el jefe de la FACh soportaba la embestida de unos anónimos en los que se cuestionaba su conducción y se formulaban reivindicaciones salariales.)

Lo más grave para la policía comenzó a ocurrir a eso de las 18 horas del 19 de diciembre de 1990, cuando la señora de un detective se encontró en un supermercado de calle Manuel Montt con un grupo de señoras de militares que se aprovisionaban de alimentos. Cuando le contó a su marido, éste llamó al jefe operativo de inteligencia, conocido como *Osvaldo*.

La base de *Osvaldo* estaba en un cuartel de Pajaritos, cerca de una población militar. Al hombre le bastó asomarse para ver cómo las guardias comenzaban a cerrar las calles. Dos motos fueron despachadas a observar una población de oficiales en Providencia: también se estaban reforzando las guardias. Minutos después, el prefecto Luis Acuña, jefe de la Jipol, recibió el llamado de un cuartel de Valdivia: el Ejército se estaba acuartelando. Casi a la misma hora, el ministro Krauss intentaba ubicar al general (R) Toro. Pero éste había salido a comprar un auto, y no devolvió el llamado al ministro hasta casi una hora después. El tono inusualmente alterado de Krauss movilizó su adrenalina.

Toro vio la escasez de su información. Sintió, con amargura, que fallaba gravemente al gobierno en su primera gran crisis. Al anochecer ordenó al prefecto Acuña que activara un plan de reacción que se venía estudiando a partir de una propuesta del jefe de la plana mayor de inteligencia policial, el prefecto Guillermo Mora.

Sería el plan *Halcón*: el ave de vista privilegiada, que escudriña a distancias enormes.

Esa noche, acompañado por Toro en la oficina de Teatinos, Mora preparó un instructivo, pidió apoyo a todas las unidades de la capital y mandó a la calle a cuanto tenía a mano en la Jipol: cuatro autos y doce detectives.

Debían vigilar todo lo que parecía básico para un golpe de Estado, al menos según el modelo de 1973: la Academia de Guerra (*Escuela*), centro de dirección, que esa noche bloqueó con barricadas las calles aledañas; el Comando de Telecomunicaciones (*Casa de Campo*), centro de enlace; el Comando Aéreo de Tobalaba (*Pajarera*), donde podían llegar tropas de regiones; y el Regimiento Buin (*Quinta Bella*), la más poderosa unidad del norte de Santiago. Este último auto debió partir más tarde hacia la ruta de Colina-Peldehue, por donde podrían entrar a la capital las unidades del Fuerte Arteaga y en especial las de la Escuela de Paracaidistas (*Club House*). Cuando se encontró con una columna de tanques rodando en la carretera, informó con alarma.

—¡Síguelos! —le gritaron desde la central.

—¿Tai más huevón? —se quejó—. ¡Me voy!

La población militar de Pajaritos (*Casa*), quedó bajo el escrutinio del cuartel cercano. Mora tuvo especial preocupación por el Hospital Militar (*Playa Roja*): si había allí dispositivos especiales —por ejemplo, para recibir heridos o muertos—, sería porque se preparaba algo más grave. No los hubo.

Dos turnos se pasaron la madrugada en eso. A las 11 del día siguiente, recién pudo Toro presentarse ante Krauss para decirle que todo se había normalizado.

¿Necesitó los reproches del Ministerio del Interior? Es claro que los escuchó, pero quien lo conociera podía estar seguro de que el orgullo herido del general (R) reaccionaría sin necesidad de impulso ajeno.

Ese mismo mes, Toro ordenó que Mora, al que consideraba como uno de sus mejores hombres, preparase un plan más ambicioso. Mora no hizo más que afinar la puntería: el plan *Halcón II* debía detectar todo movimiento del Ejército (*Libra*), la Armada (*Géminis*), la FACh (*Piscis*) o Carabineros (*Aries*) que fuese anormal. Disponía medidas de vigilancia, captación de informantes, incluso contrainteligencia[5].

Halcón II entraría en operación cuando hubiese acción. Entre tanto, la recopilación de información debía proseguir. Cada unidad de Investigaciones tendría un oficial de enlace con la dirección de Jipol. En los primeros días de 1991, la circular 1/91 instruyó a esos oficiales sobre los contenidos de su informe mensual, centrados en la oposición y los servicios de seguridad.

A fines de año, Mora se hizo cargo de Jipol, que se anotaba los primeros éxitos resonantes en la lucha contra el Lautaro. Hacia fin de año, otra circular, la 2/91, ordenó investigar hasta los partidos de la Concertación.

En diciembre distribuyó un instructivo para el Plan de Búsqueda de Información, denominado "Direccionamiento del Esfuerzo de Búsqueda", dividido en cuatro campos que ya lo abarcaban todo: Interno (Político, Social, Gremial y Sindical, Religioso, Judicial y Terrorista), Económico, Externo (con énfasis en cubanos) y Militar. La instrucción llegaba hasta las vidas privadas[6].

El 23 de abril de 1991, Marco Antonio de la Fuente, militante comunista, llegó a la redacción de *La Epoca* y entregó un secreto que lo atenazaba: había sido informante de la CNI y ahora la DINE le pedía información sobre partidos de izquierda, en particular el PS. De la Fuente usaba la chapa de *Max* y sus agentes de control eran *Charly* y *Pepe*. El diario tomó más de dos meses de verificaciones y montó un dispositivo para fotografiar un "punto" entre *Max* y *Charly*.

Mientras De la Fuente partía a refugiarse en Mar del Plata, *La Epoca* reveló el caso de espionaje a comienzos de julio[7]. La noticia sacudió a los partidos de la Concertación, pero el Ejército le restó importancia y no inició ninguna acción visible. Sólo en la DINE hubo movimiento: los agentes habían caído en una "trampa de aficionados"[8].

Pero el ministro Rojas inició sus propias indagaciones. El subsecretario Sánchez revisó una por una las fichas del personal, hasta acercarse a un grupo posible. El 26 de julio, tras seguir indicaciones de vecinos, *La Epoca* publicó la identidad de *Charly*: el sargento primero Carlos Kramm Soto.

En la tarde, Rojas ofició a Pinochet para exigir un sumario. Esa noche el Ejército anunció el inicio de una investigación, y recién a fines de agosto vino a confirmar cuanto se había publicado: la DINE había realizado espionaje político fuera de reglamento.

El mayor general Ballerino citó en reserva a algunos periodistas y les informó de la determinación oficial: *Charly* sufriría arresto y anotación, *Pepe* tendría anotación y el capitán a cargo cargaría con un día de arresto y anotación. Además, saldrían de la DINE[9].

Pero no fueron los procedimientos descubiertos, sino la tenaz negativa del Ejército lo que puso sobre alerta al gobierno. El jefe de la DINE, el brigadier general Hernán Ramírez Rurange, insistía en que su gestión, iniciada en octubre del 90, estaba concentrada en racionalizar su servicio, pero su nombre entró a las sospechas del oficialismo[10]. A fines de año el general Pinochet lo cambió a un puesto mayor: la Guarnición de Santiago.

Al terminar el 91, los hechos confirman al prefecto Mora que su tarea es indispensable. La DINE está más activa que nunca e incluso el general (R) Toro ha debido denunciar el abrumador seguimiento a que se lo somete[11].

Mora carece de filiación política, aunque hay un hecho recurrente en sus recuerdos: fue el investigador del atroz asesinato de dos cajeros del Banco del Estado en Calama, cometido por hombres de la CNI. Estudió en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en Rinconada de Maipú ("los hijos del silencio") y tuvo cursos en la Anepe. Es un profesional del rubro. Además, pertenece a esa escuela de policías que recuerda que Investigaciones fue el servicio mejor informado de Chile hasta 1973; los militares aniquilaron esa capacidad.

Y Toro lo respalda. A la vista de sus informes, decide que toda Zona Policial del país tendrá una BIP. Todos los oficiales de enlace de los cuarteles se convertirán en "Oficina de Inteligencia"[12].

Mora sigue los manuales con aplicación, hasta que una de las 197 copias de sus instrucciones[13] llega al escritorio del oficial de enlace en Limache, que está de vacaciones. Quien lo reemplaza es el subcomisario Juan Arias, un admirador del Ejército y miembro del Club Cien Aguilas, que agrupa a ex oficiales y amigos de los militares.

En diciembre de 1991, atormentado por haber tenido que seguir al general Pinochet en una pasada por Olmué, Arias revela las instrucciones a su contertulio en Cien Aguilas, el armero porteño Rodolfo Fritz.

Fritz viaja a Santiago el 21 de enero de 1992 y visita a un conocido, el teniente coronel Sergio Díaz López, jefe del Centro de Informaciones de la DINE, para contarle la historia de Arias. Díaz le pide fotocopias.

El 22 de enero, Arias llega a la oficina de la DINE en la capital y entrega al teniente coronel Díaz una copia del Plan de Búsqueda de Información. El 29 vuelve a llamarlo. Pero ahora se juntan en Quillota, frente a la Municipalidad. Acuerdan otra cita, a eso de las 22 horas, en Viña, donde Arias le entrega nuevos documentos.

En el intertanto, una camioneta con cuatro hombres del Regimiento de Caballería Motorizada de Quillota se estaciona cerca de la casa del prefecto Mora. Uno de ellos indaga por su teléfono. Mora se sabe vigilado, pero no sabe que es el centro de una gran operación de chequeo.

Lo peor ocurre a la semana siguiente, cuando detecta que una moto lo sigue rumbo a su casa. Por radio, la central le informa que se trata de una moto robada. Mora trata de perderla y, cuando ya no puede, entra contra el tránsito por calle Ricardo Lyon, se baja y se parapeta con su arma. El motorista pasa a su lado como un celaje.

En los días posteriores, el teniente coronel Díaz califica los documentos entregados por Arias como C-2: informante de confianza dudosa y material probable.

Pobre Arias.

¿Pobre?

Casi tres meses más tarde, el 16 de marzo, el diputado de la UDI Andrés Chadwick se encuentra con el ministro Enrique Correa y le cuenta que ha recibido documentos que prueban que Investigaciones espía a particulares. La primera reacción de Correa es precisar el alcance de los documentos y negociar su difusión. Pero Chadwick, que se siente con una carta de triunfo, no está para negocios.

En la mañana siguiente, los diputados Chadwick y Pablo Longueira denuncian la existencia de la circular general 2/91 y del Plan de Búsqueda de Información 1/92 de Investigaciones, ambos firmados por Mora.

Como Correa, el ministro Krauss entiende que el escándalo se produce en el peor de los momentos: cuando el Presidente ha querido promover la creación de una Subsecretaría de Seguridad y traspasar la dependencia de Carabineros a Interior, además de reformar la ley orgánica de las FF.AA.[14]

Por eso convoca a una reunión de urgencia, a la que asisten Jorge Burgos, Marcelo Schilling, Rodrigo Asenjo y Hugo Frühling (todos de la Oficina), el director subrogante de Investigaciones, Nelson Mery, y los prefectos Juan Fieldhouse y Mora. Para perplejidad de todos, Mora reconoce la autenticidad de los documentos de la UDI, se atribuye la totalidad de la autoría y pone su cargo a disposición del mando institucional.

Krauss ordena ubicar a Toro, que se encuentra invitado por la Real Policía Montada en Ottawa.

—La UDI ha denunciado unos planes de espionaje de ustedes. Creo que debes regresar de inmediato.

—No sé de qué se trata, Enrique. Pero estoy aquí invitado como representante del gobierno de Chile, y lo dejaría en ridículo si me voy intempestivamente. Me iré cuando termine el programa, ¿no te parece?

—Mira, esto es muy grave.

—Créeme que es lo mejor. Pero si sirve de algo, te presento mi dimisión, aunque sea por teléfono.

—Bueno, no se trata de eso...

—Ya, pero ténla en cuenta si necesitas. Vuelvo el 20.

Tras cortar, el ministro informa al Presidente. El ministro nota en la reacción de Aylwin que la ira se subsume en la amargura: recibir este golpe su gobierno, que tanto ha insistido en los derechos de las personas... Hay que hacer una declaración enérgica.

El 18, Krauss lee un comunicado oficial que rechaza la vigilancia de personas y declara no conocer ni haber aprobado tales procedimientos. Investigaciones está de nuevo desautorizada.

Esa tarde, el subcomisario Arias se siente descubierto: los superiores revisan en el cuartel de Limache los documentos secretos. Está seguro de que no podrá viajar a Concepción, como

había previsto. Pero los mandos no dicen nada, y el subcomisario se va sin más problemas que una sorda inquietud.

Esa noche se reúnen de urgencia los generales de Ejército, debido a las declaraciones del Presidente de Ecuador, que rechaza la presencia en ese país del general Pinochet, en viaje de vacaciones[15]. En la cita se comentan con cierto humor los planes *Halcón*.

En Investigaciones se trabaja febrilmente para establecer el origen de la filtración. El análisis de las firmas de Mora —nunca son todas idénticas— da la confirmación final: Limache.

El viernes 20 de marzo, el general (R) Toro regresa desde Canadá y se reúne con su alto mando. Le tienen una salida. Se podría decir que, sospechando de una infiltración, la policía distribuyó deliberadamente documentos falsos. Sin embargo, semejante versión sólo sería posible si el gobierno tiene la firme decisión de darle respaldo. Si no, es mejor que ni la mencione.

Pero cuando llega a La Moneda, Toro nota de inmediato el aire de circunstancias que rodea a Krauss y Rojas. Entiende que no lo van a respaldar. Poco después sube al despacho presidencial, donde conversa a solas con Aylwin y oficializa su renuncia.

El entusiasmo se apodera de la sede de la UDI. El gobierno está arrinconado y, si ha dejado caer a su jefe de Investigaciones y a su prefecto estrella, es porque la cosa es muy grave. El razonamiento va más lejos: alguien debió darles estas órdenes, cómo iban a actuar solos[16]. Hay que ir tras el ministro del Interior.

Lo que la UDI no sabe es lo que está ocurriendo con el subcomisario Arias. Esa misma mañana, ha retornado desde Concepción y, nervioso por el escándalo, ha llamado al teniente coronel Díaz, que lo tranquiliza y resta importancia al barullo. No puede ser lo mismo, dice, porque sólo la DINE ha trabajado el material.

Pero no, insiste Arias: es que no es tan sencillo, los documentos tenían un timbre distorsionado que permitiría reconocerlos. Calma, dice Díaz. ¿Juntarse mañana sábado? No. Díaz no puede. Lo atenderá el lunes.

El que tiene la razón es Arias. Todo es más urgente. Cuando llega a Limache, esa tarde, los superiores lo esperan para interrogarlo. Lo reducen con cierta violencia, lo trasladan a Santiago y luego de vuelta a Limache, lo presionan y lo amenazan. A las 22 horas, el subcomisario cuenta cómo entregó los documentos a la DINE. La confesión se prolonga por tres días[17].

En la noche del sábado 21, los invitados de un matrimonio militar bromean sobre el caso. El teniente general Lúcar pregunta al brigadier general Covarrubias si la DINE conoció estos planes. No, mi general, dice Covarrubias. Más tarde explicará que ello se debió a la presencia de gente ajena al Ejército.

El gobierno, enterado de la confesión de Arias, contempla en silencio el anuncio de una acusación contra Krauss por Chadwick y Longueira. Y en 24 horas, la participación de la DINE estalla como una granada en las manos de la oposición.

El lunes 23, el ministro Rojas pide explicaciones al vicecomandante Lúcar. Este responde de modo fulminante, recordando su conversación de la noche del sábado: el Ejército no conoce de esto.

Pero al día siguiente debe retroceder: el brigadier general Covarrubias le ha informado que su unidad tiene los documentos desde mediados de enero. Lo que ocurre, explica, es que el teniente coronel Díaz los ha sometido a un exhaustivo estudio, conforme a las instrucciones impartidas tras la emboscada del caso *Charly*. Covarrubias ratifica personalmente al ministro que el teniente general Lúcar no estaba informado. De todos modos, añade Lúcar, encargará un informe a la DINE.

Pero Lúcar tiene otra conclusión, más privada: Covarrubias no trabaja para él. No lo cuida. Ya verá.

Esa tarde el Ejército emite un comunicado detallando el modo en que accedió a los planes *Halcón*. Nunca menciona cómo ni por qué mano llegaron los documentos del subcomisario Arias a la UDI.

El gobierno queda con la convicción de que el enlace se produjo, no desde la DINE, sino desde el Comité Asesor, y que su cerebro fue Ballerino. Así se lo dirán los ministros Boeninger y Correa en una cena posterior, el 26 de marzo, sólo para que Ballerino lo niegue con una de sus enigmáticas sonrisas[18].

El jueves 26 de marzo se realiza en la Cámara de Diputados la sesión especial promovida por la UDI antes del tropiezo de la DINE. El debate se puebla de recriminaciones. Krauss jura que desconocía los planes, mientras Rojas fustiga a la DINE.

Como se sospecha que la DINE tiene en verdad todos los planes, Krauss entrega ocho documentos sobre las actividades de inteligencia de Investigaciones, seis más que los de la UDI. El acuerdo de crear una comisión investigadora no puede ser detenido —pese a que se opone nada menos que el nuevo presidente del PDC, el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle—; gobierno y oposición parecen atrapados en un abrazo de vértigo.

Esa noche, el ministro Correa cena en casa del mayor general Ballerino. Le explica que el gobierno no respalda el espionaje entre instituciones del Estado, por el peligro de anarquización que entraña. Por eso dejó caer a Toro. Pero ahora ocurre que también la DINE ha espiado. El brigadier general Covarrubias debería caer, como mínima compensación.

Ballerino es escueto: no puede responder. Unos días después lo llamará para decirle que el general Pinochet ha tomado su decisión: no, Covarrubias no se irá. No hizo nada incorrecto, cumplió con su deber.

En abril declaran ante la comisión investigadora de la Cámara los ministros Krauss y Rojas. Pero en la comisión[19], presidida por el DC Francisco Huenchumilla, la Concertación tiene una mayoría de ocho a seis, lo que casi garantiza que el gobierno no será dañado. Por eso, cuando se filtra la declaración completa de Krauss[20], el diputado Andrés Aylwin acusa a la oposición y renuncia al "show" que la comisión constituye para la derecha.

La oposición busca demostrar que los planes *Halcón* pudieron operar desde antes del acuartelamiento de 1990, pero no consigue ningún elemento. Luego intenta probar el envolvimiento del ministro, pero también falla. Finalmente, se ve empujada a la conclusión —bastante incierta— de que *Halcón II* no fue aplicado, ni tampoco el Plan de Búsqueda de Información.

Su agonía es previsible y, si no fuese porque en agosto se agrega el caso de intercepción del teléfono celular del senador Sebastián Piñera, debiera morir en el segundo semestre del 92. Para una historia superflua quedan sus 38 sesiones y 176 y media horas de trabajo. El caso Piñera no le añade sino pobreza. En su informe final, de enero del 93, la comisión deberá resignarse a un fuerte desequilibrio: mientras los planes de Investigaciones fueron conocidos a fondo, los diputados no lograron acceder a los datos relevantes del caso Piñera[21].

El subdirector Nelson Mery es confirmado como nuevo director de Investigaciones. El general (R) Toro permanece como asesor del ministro Krauss y más tarde será designado cónsul en Sevilla. El prefecto Mora ingresará a estudiar Derecho. El subprefecto Arias, que pide la baja del servicio, es procesado por la jueza de Limache, Rosario Lavín, por destruir papeles y revelar documentos a su cargo como funcionario público. El general Covarrubias sigue al frente de la DINE y el teniente coronel Díaz no se mueve de Inteligencia.

Notas

1. Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; y Sepúlveda, Oscar: *La historia oculta del régimen militar*. Editorial Grijalbo, Santiago, 1997.

2. Ver capítulo 3.

3. En orden numerado: 1) Ministro del Interior, Enrique Krauss; 2) Ministro de Defensa, Patricio Rojas; 3) Subsecretario del Interior, Belisario Velasco; 4) Subsecretario de Investigaciones, brigadier (R) Jorge Pantoja; 6) Asesor de Asuntos Especiales del Presidente, Federico Willoughby; y 7) Secretario del Presidente, Marcelo Zapata. El 5) quedaba en poder de Toro.

4. Soto, María Irene: *El informe de Toro*. Revista *Hoy*, Nº 681, 6 al 12 de agosto de 1990. También: Soto, María Irene: *La Moneda busca al topo*. Revista *Hoy*, Nº 682, 13 al 19 de agosto de 1990.

5. Detalles sobre los textos de ambos planes fueron publicados en exclusiva por: Oyarzún, María Eugenia: *Planes "Halcón" y "Halcón II"*. Diario *La Tercera*, 26 de abril de 1992. Este artículo también incluye una síntesis del documento denominado "Tirón de Orejas", despachado por la Jipol el 2 de enero de 1992 y oficialmente reconocido como la Circular 1/92.

6. El texto completo de este oficio, en: *Instructivo secreto de Investigaciones*. Diario *El Mercurio*, 19 de marzo de 1992.

7. *Informante revela espionaje de DINE al gobierno*. Diario *La Epoca*, 3 de julio de 1991.

8. La expresión fue usada literalmente en esos días por un alto oficial en conversación con periodistas.

9. Una completa síntesis del caso, en: *La verdadera historia del espionaje político*. Diario *La Epoca*, Segundo Cuerpo, 8 de septiembre de 1991.

10. Una descripción de la estructura y el trabajo de la DINE puede hallarse en: Salazar, Manuel: *¿En qué está la DINE?* Diario *La Nación*, Segundo Cuerpo, 10 de mayo de 1992.

11. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados logra identificar, en su informe final, un número mayor de acciones de la DINE que de Investigaciones. Para un buen resumen: Moore Jeraldo, Rubén: *Diputados revelan el intrincado revés de la trama*. Diario *Las Ultimas Noticias*, 11 de enero de 1993.

12. Dirección General de Investigaciones de Chile: Orden (S) Nº 1, 17 de enero de 1992.

13. *Un caso sabroso... y peligroso*. *Informe Confidencial*, marzo de 1992. Sólo los instructivos fueron con firma. El plan *Halcón II* fue distribuido en siete copias, una por cada zona policial, y no tenía firma. El Laboratorio de Criminalística logró establecer que la copia entregada a la prensa fue trucada, superponiéndole una firma de Mora tomada de otro documento.

14. Ver capítulo 16.

15. Otros detalles sobre este viaje en Capítulo 16.

16. Esta hipótesis fue profusamente difundida en la prensa de esos días. Ver, por ejemplo: Arthur, Blanca: *Los enredos del espionaje*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 29 de marzo de 1992. Y: *Los laberintos del Torogate*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.093, 23 de marzo de 1992.

17. El subcomisario Arias diría más tarde que fue golpeado y se lo obligó a declarar ante una cámara de video. Ver: Oyarzún, María Eugenia: *Subcomisario Juan Arias: "Fui secuestrado, detenido y golpeado"*. Diario *La Tercera*, Suplemento Tiempo, 3 de mayo de 1992.

18. Versiones diversas recogidas por esta investigación, pero no autentificadas, señalaron al coronel (R) Cristián Labbé como posible enlace entre el Comité Asesor y los diputados de la UDI. Estos últimos han ofrecido a lo menos dos versiones divergentes: 1) Que los recibieron de una persona que se presentó en la sede de la UDI y los verificaron con un equipo de trabajo formado por los dirigentes; y 2) Que los recibieron por correo anónimo y los confirmaron mediante militantes de regiones vinculados familiarmente a la policía.

19. Gustavo Alessandri, Baldo Prokurica, Alberto Espina, Raúl Urrutia (RN), Andrés Chadwick, Pablo Longueira (UDI), Andrés Aylwin (luego, Rubén Gajardo), Francisco Huenchumilla, Claudio Huepe, Guillermo Yunge (DC), Dionisio Faulbaum (PR), Jaime Estévez, Juan Martínez, Víctor Manuel Rebolledo (PS-PPD).

20. *Lo que revelan las actas de la "Comisión Espionaje"*. Diario *La Segunda*, 7 de mayo de 1992.

21. Cámara de Diputados de Chile: *Informe de la Comisión Especial sobre Servicios de Inteligencia de Chile*, diciembre de 1992. Texto complementario es la presentación del diputado Huenchumilla: Cámara de Diputados de Chile: Legislatura 325ª, Extraordinaria, Sesión 35ª, miércoles 6 de enero de 1993.

15

El alemán, el ruso y el chileno

El 11 de diciembre de 1991, uno de los hombres más poderosos del mundo entró a cenar a la Embajada de Chile en Moscú. A partir de ese momento, el caso de Erich Honecker se convirtió en la crisis más prolongada y dramática de la diplomacia de Aylwin.

Al anochecer del 11 de diciembre de 1991, uno de los hombres más poderosos del mundo llega con su mujer a la Embajada chilena en Moscú, en la calle Yunosti, del arbolado suburbio de Riezanski. Viene a iniciar el penúltimo acto de la tragedia planetaria que le ha sido deparada.

Como un moderno Lear, despojado de su inmensa investidura, Erich Honecker se siente abrumado por el espectáculo de sevicia y traición que se ensaña sobre sus antiguos dominios.

Pero en este crepúsculo de hielo de la vieja capital de los zares, Honecker sólo viene a cenar con Irma Cáceres, la esposa del embajador chileno Clodomiro Almeyda, que desde hace cuatro días está en Santiago, llamado, por propia petición, a informar sobre la confusa situación de la agonizante Unión Soviética.

Son apenas las 17, pero ya está oscuro y la visita es urgente. A las 16 horas del día anterior, el 10, Honecker ha recibido a los ministros rusos del Interior, Andrei Dunayev, y Justicia, Nikolai Fiodorov, y al vicecanciller Boris Kolokolov, que le han notificado que será deportado a Alemania, una Alemania que ya no es la suya, sino otra, única y triunfante. Le han dicho que la fecha de salida es el día 13: en 72 horas más.

Así que en verdad Honecker y su esposa Margot vienen menos a cenar que a tratar de detener la infamante historia que los persigue desde hace ya dos años.

Irma Cáceres los recibe y llama al primer secretario de la embajada, José Miguel Cruz. Le informa que ha decidido que el matrimonio se quedará en la residencia chilena y le pide que avise a Santiago. Luego ordena que el chofer de guardia vaya a retirar las maletas ya preparadas de la dacha de los Honecker.

Algunos de sus muebles, el menaje de casa y parte de su ropa ya están en la embajada de calle Yunosti, en unos pesados baúles, desde hace meses, cuando nadie imaginaba que todo esto podía ocurrir. Cuando debieron dejar Alemania, en marzo anterior, Margot Honecker le pidió a Irma Cáceres que le guardara esos baúles que no tenían cabida en la pequeña dacha asignada por el gobierno soviético[1].

Durante los años de exilio de los Almeyda, se había desarrollado entre ambas la cercanía de las madres: Irma Cáceres no podía olvidar que su hijo había recibido atención clínica excepcional gracias a la personal preocupación de Margot Honecker; para ésta, ese interés por los chilenos era natural, desde que su única hija, Sonia, se había casado con un exiliado chileno.

militante comunista y víctima de esa "violencia fascista" que también habían sufrido en el pasado los alemanes.

En Santiago es de mañana cuando el informe de Cruz llega a manos del director general de la Cancillería, el socialista Carlos Portales, que justo conversa con el embajador Almeyda. Nada deliberado. El canciller Silva Cimma está con principio de surmenage en El Quisco y el subsecretario Vargas ha viajado a Río de Janeiro para la constitución del tribunal arbitral sobre Laguna del Desierto.

Portales reúne de urgencia a sus asesores para buscar con La Moneda una fórmula jurídica que responda a la situación de hecho creada en Moscú. El invento es extraño: Honecker será "huésped temporal" de la Embajada de Chile.

En la mañana del 12, Margot Honecker llama desde la Embajada chilena a la de Corea del Norte, que hace algún tiempo le ha ofrecido a su marido un tratamiento médico especial. Pero esa misma noche, el representante coreano le informa que el avión en que podrían irse está retenido por las autoridades rusas.

Más tarde agrega otra novedad: las autoridades han negado la visa de salida[2] del matrimonio y levantado la inmunidad que lo protegía.

Honecker tiene también una invitación de Hafez el-Assad, el hombre fuerte de Siria. Pero los rusos cancelan toda opción. Sólo habrá visa para salir hacia Alemania.

Por los ventanales, Margot Honecker e Irma Cáceres contemplan a las fuerzas de seguridad rusas que comienzan a cercar la embajada.

¿Cuándo comenzó la tragedia de Erich Honecker? En cualquier fecha, como todas las tragedias. En 1923, cuando tenía 11 años y entró al grupo comunista infantil de Wiebelskirchen. En 1929, cuando se unió a los comunistas de Alemania. En 1935, cuando la Gestapo lo arrestó y condenó a diez años de prisión. En 1946, cuando, bajo dominio soviético, lo eligieron presidente de la Juventud Libre. En 1958, cuando ingresó al Comité Central del SED (Partido Socialista Unificado) de la República Democrática Alemana. A las 14 horas del 13 de agosto de 1961, cuando se inició en Berlín la construcción del Muro, nueva frontera entre las dos Alemanias y el Pacto de Varsovia y la OTAN, expresión física de lo que Winston Churchill bautizaría como "Cortina de Hierro". O en mayo de 1971, cuando el veterano *premier* Walter Ulbricht, gestor del Muro, fue forzado a proponerlo como su sucesor.

Si se cree en el destino, todo día es un hito.

Pero quizás Honecker recordaría con más precisión el Año Nuevo de 1988, cuando estalló en Leipzig, bajo el amparo de los templos de la Iglesia Protestante, la primera manifestación callejera en su contra. El motivo era casi pedestre: familias que reclamaban porque sus hijos querían ir de vacaciones a Occidente.

En sólo cinco meses, la situación alcanzó niveles críticos: Hungría se negaba a devolver a los alemanes que trataban de pasar hacia Austria, las embajadas de Alemania Federal en Praga y Varsovia se abarrotaban y la dirigencia soviética guardaba un silencio virtuosamente cómplice.

Honecker intentó ampliar el Muro cerrando las fronteras de Checoslovaquia y Polonia, pero eso implicaba intervenir en la política global de la URSS. No pudo.

El Presidente soviético, Mijail Gorbachov, que quería extender su *glasnost* a todo el bloque comunista, había decidido abandonar a la intransigente RDA en medio de un complejo cuadro mundial[3]. Se lo dijo a Honecker en octubre de 1988, para el 40° aniversario de la RDA, después de darle los tres besos socialistas que mucho más tarde Honecker llamaría "los besos de la traición":

—Los que se demoren serán castigados por la realidad.

Pero en el endurecido militante de toda una vida, en el ex preso de los nazis, en el espartano jerarca de la Guerra Fría, no había espacio para esta retórica.

Y se quedó solo sin darse cuenta: a fines de ese mes, la Nomenklatura del SED decidió —en Moscú, con la bendición de Gorbachov— su destitución. Honecker se fue a su residencia de Wandlitz, al norte de Berlín, con un ambiguo status de arraigo domiciliario.

El 9 de noviembre se reunió el Comité Central del SED, con la asistencia de Margot Honecker, todavía ministra de Educación, para discutir el problema de los estudiantes retenidos en las fronteras.

Bajo la presión de la prensa, el encargado de comunicaciones, Günther Schabowski, salió a informar sobre la sesión. Mientras hablaba, recibió una nota.

—El Comité Central ha resuelto abrir la frontera —leyó.

—¿Desde cuándo? —preguntó un periodista. Schabowski miró la nota:

—Desde ahora.

La televisión oriental transmitió la noticia, pero los ciudadanos de la RDA, siempre escépticos ante sus noticiarios, no reaccionaron. Minutos después la repitió la TV de Berlín Occidental.

Entonces los berlineses de uno y otro lado se lanzaron sobre el Muro. Los guardias activaron el alerta, pero la muchedumbre era abrumadora. El Muro cayó a picotazos[4].

Poco más de un mes más tarde, un fiscal de la RDA ordenó interrogar a Honecker bajo los cargos de corrupción y abuso de poder. Para entonces, su médico, el doctor Peter Althaus, que sospechaba de la presencia de un cáncer al riñón, decidió sacarlo de Wandlitz en su propio auto y llevarlo al hospital de La Charité, donde lo operaron por primera vez.

A los diez días, Althaus avisó a su familia que Honecker sería detenido al amanecer, en la misma clínica.

Honecker respondió fieramente a los primeros cargos. Cuando salió del arresto inicial, no tenía dónde ir. Un pastor de la Iglesia Evangélica le ofreció su casa y lo tuvo en ella hasta febrero de 1990.

A fines de mes, y a la vista de que comenzaban a emitirse órdenes de detención digitadas por la dirigencia comunista que había gobernado con él, los soviéticos ofrecieron a Honecker tratamiento médico en la base de Beelitz, entre Berlín y Leipzig.

Las primeras elecciones libres de la RDA se realizaron el 18 de marzo de 1990 y dieron un cómodo triunfo a una coalición prooccidental. El Partido del Socialismo Democrático, sucesor del SED, retuvo un menguado 13 por ciento.

La RFA comenzaba a dominar el panorama interno de la RDA y la vieja profecía de Josef Stalin, que vivió convencido de que a la larga sería imposible mantener a Alemania dividida, iniciaba su implacable consumación.

El renacimiento de la democracia en Chile despertó en miles de chilenos diseminados por el exterior el ansia de regresar. Varios países europeos crearon programas especiales para darles facilidades: la reinserción parecía un proceso mucho menos traumático de lo que finalmente fue.

En ese caudal de ilusiones entró también el marido de la única hija de Erich y Margot Honecker, Sonia[5]. Por lo demás, en el derrumbe de la RDA se habían acabado los empleos y los horizontes para ellos. La pareja llegó a Santiago con sus dos hijos poco después de la asunción de Patricio Aylwin.

Un par de meses más tarde, en mayo, la situación de Honecker era ya muy deteriorada, aunque muy pocos lo sabían. Beelitz se había convertido en una involuntaria cárcel, a la que muy escasos amigos visitaban de tarde en tarde. En el estrecho círculo de los conocedores había, curiosamente, numerosos chilenos: dirigentes comunistas y socialistas que contemplaban con asombro la velocidad y la violencia de los cambios en los países donde habían pasado sus exilios.

¿Explicaría eso la sensibilidad que otros millones de chilenos no tenían? Cuando el Muro fue derribado, Chile se agitaba en el fragor de la primera campaña presidencial en dos décadas; el acontecimiento más importante de la historia mundial en el último medio siglo pasó por las páginas de los diarios envuelto en un tumulto de emociones locales.

En el este de Europa se estaba desmoronando no sólo una generación de gobernantes provectos, sino todo un sistema filosófico, el centro de todos los conflictos del siglo XX; pero para la fértil provincia ninguna implicancia parecía mayor que la inminente recuperación de la democracia criolla.

Entre quienes conocían la situación de Honecker con más detalle ocupaba un lugar eminente Clodomiro Almeyda. A él, y a otros hombres del PS que habían vivido en la RDA con el más que generoso asilo de Honecker en los años 70 y 80, se debió que el gobierno de Aylwin comenzara a interesarse en su destino poco después de asumir.

El Presidente entendía que, si para una parte de la coalición era una importante cuestión ética retribuir a quien le había prestado tanta ayuda, el gobierno debía acoger esos sentimientos. Por eso no rechazó nunca las gestiones para que el derrotado jerarca pudiera viajar a Santiago para visitar a su hija y a sus nietos.

Con la aprobación del Presidente, la Cancillería llevó discretamente la oferta a la embajada en Santiago de la declinante RDA. Sin embargo, en las convulsiones de un país en extinción, el embajador ya había regresado a Berlín. Quien la recibió fue el encargado de negocios. Y la respuesta oficial, con el aval del último primer ministro de la RDA, Lothar de Maiziere, fue favorable.

Pero poco después la embajada de la RDA fue absorbida por la de la RFA y el encargado de negocios de Berlín quedó bajo el mando de la diplomacia de Bonn.

Cuando le informó de esta gestión, el embajador Wiegand Pabsch se presentó en La Moneda con ostensible alteración: Alemania, ahora única, no permitiría el amparo a un dictador y el Canciller Helmuth Kohl, DC y generoso amigo de la democracia chilena, lo consideraría un acto impropio.

Con todo, no fue esa gestión la que paralizó el eventual viaje, sino el orgullo del viejo luchador alemán, el militante que no se había exiliado con los nazis y que menos lo haría con la victoria —"temporal"— del capitalismo.

Así se lo sugirió a Osvaldo Puccio cuando éste lo visitó en su reclusión hospitalaria. Puccio llevaba una invitación del ministro Enrique Krauss para que Honecker viajara a Chile e Irma Cáceres le abrió las puertas de la base soviética para esa privada conversación con el ex jerarca alemán.

Por esos días, Almeyda y su esposa debían estar en Moscú, donde el dirigente socialista asumiría como primer embajador de la democracia. Pero en la capital soviética los trámites eran infernales y la Cancillería había conseguido recién un local para la embajada: un *bunker* de 5.000 metros cuadrados en el barrio de Riezanski, originalmente pensado para la legación polaca.

Mientras tanto, los tres funcionarios enviados por la Cancillería debían hacer funcionar la representación en una habitación del hotel Kosmos. Almeyda esperaba a que terminaran de llegar los muebles y los equipos; de tanto en tanto, su esposa viajaba a Alemania y mantenía el contacto con los viejos amigos.

En su habitación de Beelitz, Honecker despreciaba los cargos de corrupción: su cuenta corriente ya había sido confiscada con un miserable botín de marcos equivalentes, en los mejores cálculos, a unos 50 mil dólares. Nada de lo que le imputaban sobre cuentas suizas y empresas clandestinas era cierto.

Pero la nueva acusación de ordenar el asesinato de los alemanes caídos en el intento de cruzar la frontera era más insidiosa.

Honecker temía menos por sí mismo —después de todo, había gobernado un Estado soberano y no olvidaba que Kohl lo había recibido como tal en 1987— que por las cuantiosas tropas fronterizas que podían ser ahora criminalizadas. Fue lo que se dedicó a advertir, en sucesivas cartas a la dirigencia soviética, antes de que se iniciaran las conversaciones "Dos más Cuatro"[9] que condujeron, en forma sumaria, a la absorción de la RDA por la RFA el 3 de octubre de 1990.

En cuanto la unidad quedó consumada, el tribunal de Berlín-Moabit dictó una orden judicial contra Honecker.

Se lo acusaría por las muertes del Muro, pero los cargos no fueron formalizados. Sus abogados intentaron una y otra vez que la orden fuese levantada para iniciar un proceso regular.

Las solicitudes se disolvieron con las nieves de ese invierno, que arreció entre las convulsiones de la nueva estructura política.

Kohl no mostraba ninguna disposición a considerar la soberanía que antes había reconocido. Los costos de la unificación eran demasiado altos como para no buscar en las ruinas de la RDA

la expiación necesaria. Varios de los ministros de Honecker fueron procesados y encarcelados. Extrañamente, ningún cargo fue incoado contra Margot Honecker, una de las figuras más demonizadas en la RFA, a la que se acusaba de haber amparado adopciones forzadas desde su cargo de ministra de Educación, que ejerció durante 26 años.

En marzo de 1991, la situación de Erich Honecker se hizo insostenible. Agentes alemanes intentaron arrestarlo en Beelitz, pero los soldados soviéticos les negaron el acceso sin una orden del comando de las Tropas Occidentales de la URSS. Por fin, el 12, la dirigencia soviética lo convenció de aceptar un tratamiento clínico en Moscú. Ya sin alternativa, el viejo líder aceptó partir al día siguiente.

Los soviéticos avisaron al gobierno alemán a lo menos 90 minutos antes del vuelo. Bonn se quejaría más tarde de que ese tiempo fue insuficiente para interponer su objeción. Pero esa explicación no hizo sino reforzar la impresión de que Kohl pudo aceptar secretamente el viaje. Ese día, el Canciller enfrentaba un intenso debate doméstico en el Bundestag. Sin embargo, sus pensamientos parecían no estar allí, como se dejó ver en el inquietante lapsus con que llamó a uno de sus colegas: "*Herr* Honecker...".

Así que en cuanto *herr* Honecker aterrizó en Moscú, la diplomacia alemana protestó e inició las exigencias para que regresara a Berlín[7].

Los socialistas chilenos, ahora presididos por Ricardo Núñez, reanudaron las gestiones para que el gobierno lo acogiera. En julio, una carta del partido pidió oficialmente al Presidente que se le ofreciera asilo, siguiendo la larga tradición chilena.

Pero para entonces Alemania no quitaba la vista de la Cancillería chilena, que comenzó a verse crecientemente inmovilizada. La concesión de asilo era perfectamente posible, pero Bonn hizo primar con fuerza su posición: ello implicaría un juicio sobre la falta de garantías de derecho en Alemania; de concederse, Bonn tendría que iniciar un proceso de extradición y actuar contra el Estado chileno. No sería una situación amistosa.

Peor aún, la tragedia política de gran escala no había cesado de perseguir a Honecker. El 18 de agosto de 1991, el vicepresidente Gennadi Yanayev y otros siete jerarcas comunistas arrestaron a Gorbachov en su dacha veraniega de Crimea y ocuparon el poder[8].

El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, se atrincheró en el Parlamento, llamó a la movilización popular e incitó a la desobediencia a los militares. Quebrado el Ejército Rojo, la asonada se derrumbó en tres días y Gorbachov fue reinstalado en el poder. Pero el héroe era ahora otro: Yeltsin.

Con Gorbachov debilitado y la URSS anarquizada, el matrimonio Honecker sintió nuevamente que la tierra cedía bajo sus pies.

El 6 de octubre aterrizó en Santiago Margot Honecker. Fue recibida por Núñez y el ex secretario general del PS, Carlos Altamirano, ambos exiliados en la RDA en la primera hora.

La gratitud hacia el régimen de Honecker se sobreponía al hecho casi irónico de que ambos se habían ido de la RDA precisamente por la asfixia del sistema[9]. Con todo, nadie podía ignorar que unos ocho mil chilenos obtuvieron ayuda en la RDA y el mismo Altamirano fue sacado de Chile, cuando era el fugitivo más buscado, gracias a una operación financiada y montada por la inteligencia de la RDA, la Stasi, bajo las órdenes personales de Erich Honecker.

Tras recibir una visión detallada de lo que ocurría en la URSS, los dirigentes se comprometieron a gestionar alguna solución con el gobierno de Aylwin.

El momento no pudo ser peor: 13 días después viajó a Chile, en una festiva gira que combinaba trabajo y vacaciones, el Canciller Kohl. En la conferencia de prensa que dio con Aylwin antes de partir, mostró una irónica seguridad.

Luego de que el Presidente respondiera a un periodista que Chile recibiría a cualquier visitante "con pasaporte en regla", el voluminoso *Kanzler* añadió, sonriente, que Honecker sólo tenía pasaporte para regresar a Alemania. ¿Qué sabía Kohl? Lo evidente: que, al generar la condición del pasaporte, Chile abandonaba su intención de tratar a Honecker como un eventual refugiado[10].

El 8 de diciembre, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajstán, Moldoca, Kirguistán y Tadjikistán acordaron federarse en una Comunidad. La URSS se desmembraba como una gran casa en demolición. La mayor parte de sus restos serían heredados por el Presidente ruso Boris Yeltsin.

Entre sus primeras decisiones administrativas, el 15 de noviembre, figuraron la cancelación de la inmunidad y la expulsión de los Honecker. Suyos fueron los enviados a darles el ultimátum en la dacha.

Portarse bien con Alemania era uno de los pivotes de la política europea de la nueva Comunidad.

En Santiago, el ingreso de los Honecker infesta de sospechas el ambiente político. Entre ojos: el embajador Almeyda, de quien, sin embargo, nada se puede decir, entre otras cosas porque no pudo saber con antelación de la notificación rusa. La majestad de su ausencia en el momento crítico es a un mismo tiempo expresiva, misteriosa y oportuna.

En la cúpula de la Cancillería chilena hay sentimientos encontrados. Ahora que todo iba tan bien: una política exterior estelar, un gobierno sin enemigos, un país pequeño saliendo del aislamiento político... y he aquí que de pronto está envuelto en el centro del descalabro planetario, involuntario protagonista del lado de los vencidos.

Sólo el tono agresivo del embajador alemán Wiegand Pabsch, que se presenta de inmediato para hacer saber al subsecretario Vargas la molestia de su gobierno, devuelve a los funcionarios la noción del orgullo.

El ministro Boeninger, que asiste en Moscú a un seminario organizado por el Partido Demócrata de EE.UU., hace las primeras averiguaciones independientes cuando invita a su hotel al primer secretario Cruz. No hay más gestiones por su parte. Sólo un diagnóstico que es a la vez una advertencia:

—Esto va para largo. Hay que armarse de paciencia.

El Presidente Aylwin despacha sendas cartas al Presidente Yeltsin y al Canciller Kohl, el 14 y el 16 de diciembre. En ambas reitera que no habrá asilo político, que Chile no hará abandonar la embajada a Honecker en consideración a su estado de salud y que una solución debe ser buscada entre las partes con arreglo a las normas de derecho y equidad.

Pero antes de la caballerosa respuesta de Yeltsin, el ministro Fiodorov, la cara dura del nuevo Kremlin, irrumpe con estilo cosaco y declara a la prensa que si Honecker no sale el lunes 16, se pondrán en marcha mecanismos para "hacer cumplir la decisión del gobierno". El Grupo Latinoamericano de embajadores en Moscú se mueve con celeridad para hacer frente a la insólita amenaza. Pocos días después consigue el compromiso del canciller Andrei Kozyrev de que la inmunidad diplomática no será violada.

Sin embargo, la volatilidad de la situación en Rusia no permite tener ninguna seguridad. Por eso, la Cancillería chilena trata de apurar las cosas. La misión ante la ONU en Nueva York recibe la instrucción de consultar al gobierno de Cuba si estaría dispuesto a recibir a Honecker.

El embajador Ricardo Alarcón transmite en 24 horas la categórica respuesta de La Habana: no. Cuba está recibiendo inversionistas y turistas alemanes en cantidades, y esa riada de divisas no puede ser puesta en riesgo.

En la mitad del invierno moscovita del 92 —enero—, Honecker sufre una devastadora gripe.

El embajador Almeyda, que acaba de regresar a Moscú, pide que un equipo médico de la clínica Botkin lo examine en la embajada. Los equipos portátiles arrojan un diagnóstico: lesiones del hígado sospechosas de constituir un tumor maligno.

Pero cuando Almeyda informa a Santiago, la Cancillería chilena tiene un reporte secreto que revela que esa noche, durante un pequeño cóctel de onomástico, el diagnóstico fue comentado con cierta satisfacción. Para tratarse de un posible cáncer, ha sido una situación un tanto alegre y se ha comentado con efusión acerca de la obligación humanitaria que se crea desde ahora. Silva Cimma ya tiene suficientes sospechas sobre su embajador en Moscú. Exige un segundo examen.

—No lo haga, don Cloro —contradice desde un celular en El Quisco el ministro Correa, que conoce vivencialmente los métodos rusos—. No haga ese segundo examen.

Pero Almeyda está atrapado por las instrucciones. El trámite se vuelve interminable. Como si el cáncer fuese un trofeo, la diplomacia alemana presiona al gobierno ruso. Cuando se anuncia que Honecker irá a un segundo examen, la Embajada alemana anuncia que tal salida no garantiza el regreso a la legación chilena. Honecker se niega a ir a la clínica en tales condiciones.

Después de extenuantes trámites ante la Cancillería rusa, el primer secretario José Miguel Cruz consigue un compromiso de garantías del vicecanciller Kolokolov y Honecker ingresa a la clínica Botkin el 24 de febrero de 1992, para nueve días de exámenes.

En el intermedio, una delegación de diputados, todos doctores y la mayoría comunistas, llega a la clínica y pide incorporarse a la junta médica. La dirección de la clínica rechaza la solicitud y entrega su informe el 3 de marzo: no hay tumor.

En la Cancillería de Santiago estalla una crisis. La cuestión del tumor se ha vuelto tan central para mantener la condición de "huésped", que el segundo informe de la clínica Botkin parece definir la política chilena.

Silva Cimma ordena el inmediato regreso de Almeyda y la oposición se prepara para presentar una acusación constitucional en la primera fisura que halle. Lo menos que espera es ver caer la cabeza del embajador en Moscú, un viejo líder socialista, histórico y porfiado, que fue canciller de Allende y que burló al gobierno militar ingresando clandestinamente primero y defendiéndose solo, más tarde, de una espuria acusación por delitos de conciencia.

Dos días después, el 5, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán anuncia que elevará una *demarche*, la forma más dura de las notas diplomáticas, al gobierno de Chile para exigirle que ponga fin a la estancia de Honecker en su embajada ahora que han desaparecido las razones humanitarias que invocaba. Agrega que no puede aceptar que la definición sea tratada "como un asunto privado por la Embajada chilena".

La inusitada virulencia sorprende a la diplomacia chilena, empezando por el embajador en Bonn, Carlos Huneeus. La nota no parece un esfuerzo de entendimiento, sino una provocación: los alemanes no pueden ignorar que con ello sólo obligarán a Chile a defender la soberanía de sus decisiones. ¿Quién puede tener interés en empeorar las cosas? Hay quien: el FDP, el pequeño partido liberal del ministro de exteriores Hans Dietrich Genscher, que ha iniciado un sordo enfrentamiento con el *Kanzler* Kohl luego de que éste asumiera todo el protagonismo de la unificación.

Rusia, que capta el vuelco, lo aprovecha con una nueva posición oficial: el de Honecker es un problema entre Alemania y Chile. Yeltsin fija esta línea con una gentil carta a Aylwin en la que expresa su deseo de que "logren un entendimiento" y "nos mantengan al tanto de sus contactos".

El viernes 6 de marzo, el canciller Silva Cimma recibe al embajador Wiegand Pabsch y, antes de que se acomode, le deja caer la indignación del gobierno chileno por la *demarche* de Bonn, que a su tono abusivo ha añadido la descortesía: se ha conocido primero en la prensa. A Pabsch no le impresiona esa dureza. Tiene una notificación verbal de su gobierno y la va a entregar como quiera que pueda. Por primera vez, el canciller chileno siente una cierta irritación por la inclemente presión alemana.

En los días siguientes, Bonn empleará sus métodos más rudos, incluyendo las amenazas por los periódicos, para intensificarla. Curiosamente, alguien tiene menos prisa que los fogosos diplomáticos teutones: ningún cargo formal ha sido presentado todavía contra Honecker.

En la mañana del 8 de marzo, Silva Cimma cita secretamente a Almeyda a la casa de su amigo el embajador Augusto Bermúdez y le enrostra la situación creada ante Alemania y la nueva Rusia. El canciller está inquieto; el embajador, no. La tenue superioridad del deber ético sobre la razón de Estado rodea el encuentro.

Pero nada es seguro. En las siguientes 24 horas la tensión se eleva en todos los partidos de la Concertación, atrapados por sus diversas posiciones ante los informes médicos. El PS defiende

el asilo, con o sin enfermedad. El PPD divisa que una acusación por violación de derechos humanos es indefendible para una coalición que quiere hacer sus propios juicios por razones semejantes. La DC piensa en su privilegiada relación con Alemania.

En la mañana del 8, aún enojado, Silva Cimma ofrece algo así como una renuncia al Presidente:

—No puedo seguir, Patricio —dice—. Soy su amigo y lo seguiré siendo, pero Almeyda me deja en ridículo.

El Presidente lo convence de que esa decisión perjudicaría a todos. La amistosa persuasión tiene más sagacidad de la que aparenta. Poco antes, conociendo la posición del canciller, el ministro de Transportes, Germán Correa, líder del "almeydismo", ha comunicado al Presidente en privado sobre otra potencial renuncia: si el embajador Almeyda es destituido, al menos él tendrá que dejar el gabinete.

Quien precisa la situación es el ministro Enrique Correa, que fuera un favorito de Almeyda en la Cancillería de Allende. En realidad, en el PS se juega una doble carta. Si Almeyda es castigado por asilar a Honecker, su popularidad entre las bases izquierdistas aumentará. Visto que ha anunciado que se presentará como candidato a la presidencia interna a fines de año, una destitución abrupta podría catapultar su prestigio. Hay quien cree que Almeyda quiere motivar una salida brusca. En una tortuosa conversación con Correa, ha tratado de provocarla, pero el ministro tiene su misma escuela:

—En realidad, don Cloro —le dice—, puede hacer lo que quiera, y no lo vamos a sacar. Si quiere renunciar, tendrá que hacerlo por su cuenta...

En la tarde, durante una reunión del Presidente con la plana mayor de la Cancillería, el embajador Ramón Huidobro, director de la Academia Diplomática, propone emitir una declaración detallando paso a paso la conducta del gobierno chileno. El canciller sugiere el segundo paso. Visto que no se puede pedir a Almeyda que saque a Honecker, se podría enviar a un diplomático que represente al Estado ante los dos países involucrados.

A las 17 horas del domingo 8 de marzo, mientras lee el periódico local en su casa de Nueva York, el embajador alterno ante la ONU, James Holger, recibe el llamado del canciller Silva Cimma:

—Jimmy, por decisión del Presidente se va a Moscú. A ver el problema Honecker, ya sabe.

—Don Enrique, por suerte estoy sentado. No conozco ningún detalle de ese caso, sólo lo que ha salido en la prensa...

—No se preocupe, el embajador Berguño va para allá con una carpeta con los antecedentes. Además, le explicará algunas cosas más confidenciales...

Al día siguiente, para tranquilidad de los corazones socialistas, Aylwin confirma a Almeyda en la Embajada de Moscú.

Tras pasar tres días de intensivo diálogo con Jorge Berguño en Nueva York, Holger llega a Moscú con su esposa, Cecilia Becerra, el 13 de marzo. Esa noche, Irma Cáceres ofrece un pequeño cóctel para que los Holger conozcan a los Honecker.

Holger advierte dos cosas de inmediato: que Clodomiro Almeyda y Erich Honecker se tratan con formalidad, mientras sus esposas se tutean; y que el alemán adopta una actitud favorable si se lo trata con la dignidad de Estado que ha tenido. Eso le permite anticiparle con crudeza su misión. Le comunicará, cuando sea posible, el retiro de la calidad de "huésped". No será expulsado por la fuerza ni habrá operación policial. Deberá irse por su voluntad.

Y Honecker no la tiene.

Costaría urdir una misión más difícil para un diplomático. Pero Holger une al talento un currículo con increíbles coincidencias. En 1965, con rango de primer secretario, debió abrir la primera Embajada chilena en la URSS, que asumió Máximo Pacheco. Tres años más tarde fue enviado a la Embajada en la RFA, en Bonn. Y en 1971, el entonces canciller Clodomiro Almeyda le encargó abrir la primera Embajada en la RDA, donde debió trabajar con el prócer comunista

Carlos Contreras Labarca, que no se hizo problemas por el hecho de que su padre, el almirante Emanuel Holger, hubiese firmado, como ministro del Interior de Gabriel González Videla, su decreto de relegación a Pisagua en los 50.

Más tarde, en los 80, mientras trabajaba en la burocracia internacional, fue enviado como representante del secretario general de la ONU a Chipre y allí se hizo amigo del embajador destinado por Gorbachov: Yuri Fokin, un hombre al que se auguraba un porvenir brillante.

Y en este momento, cuando va a la primera reunión en la Cancillería rusa, Holger se encuentra en la mesa de interlocución con el vicecanciller Kolokolov y su amigo Fokin, ahora jefe del Segundo Departamento Europeo, que se encarga de Alemania. Esta antigua relación será clave: le permitirá a Holger conocer las pulsiones internas de la diplomacia rusa.

Con Alemania las cosas son más difíciles. En su primera negociación en Bonn lo recibe el subsecretario de Relaciones Exteriores, el doctor Dieter Kastrup, que ha integrado el equipo negociador de la unificación y que tiene una fama de hombre áspero a la que hace honor en cuanto el chileno se sienta:

—Esto es muy simple, *herr* Holger: ustedes colocan a ese señor en la puerta de su embajada...

—El gobierno de Chile también quiere que salga, doctor. Pero dentro de un marco jurídico apropiado.

—Ustedes están albergando a un criminal.

—Me llama la atención que diga eso, doctor, porque Alemania es un estado de derecho, y no necesito decirle que quien decide si una persona es criminal son los tribunales, no el Poder Ejecutivo —Holger endurece el tono, sabiendo que dirá algo escoriante—. Y es extraño que sustente esa posición, que recuerda ciertas prácticas de otros estados, y de la propia Alemania bajo otro régimen, en una época no muy lejana...

Kastrup parece congestionarse de ira y se contiene apenas:

—Quizá sea mejor... —dice— que sigamos la reunión otro día.

El incidente es crucial para Holger. Aunque el embajador Huneeus ha insistido en que convendría seguir un camino político —la DC de Bonn se muestra dispuesta a entender la naturaleza de la alianza entre la DC y el PS en Chile—, las rudezas de la diplomacia alemana han bloqueado esa ruta, y el propio Presidente ha dado la instrucción de seguir un camino jurídico[11].

A fines de marzo, Holger debe tomar nuevas medidas prácticas. La primera es pedir que la Cancillería envíe un especialista de su departamento técnico para encriptar los mensajes a Santiago: ya no los verá ningún otro funcionario de la embajada. La segunda es rogar al Presidente Aylwin que retire la calidad de "enviado especial" a Roberto Cifuentes, un encargado de relaciones internacionales del PDC con el cual no ha logrado entenderse. La tercera: solicitar refuerzo al embajador en Alemania, Carlos Huneeus, quien le envía a su tercer secretario, Jorge O'Ryan, que se convertirá en un factor central en la relación con los Honecker, especialmente en los momentos difíciles. La cuarta: aumentar la frecuencia de los contactos con Yuri Fokin.

En la capital rusa se respira un aire de conspiración y suspicacia. Cierto día de abril, Holger invita a Fokin a uno de los restaurantes favoritos de los diplomáticos acreditados en Moscú:

—Jimmy —le dice Fokin, casi riendo—, *that place is wired*.

Entre la dirigencia moscovita nadie confía en nadie. El vicepresidente Aleksandr Rutskoi está entrando en una sorda rivalidad con Yeltsin y el caso Honecker es un arma más. Rutskoi opina que Rusia no debe actuar servilmente con Alemania, que la presión debe ser resistida y que Honecker no puede ser entregado sin garantías. Sabe que con eso ataca el corazón de la política europea de Yeltsin, que consiste en obtener de Alemania dinero y asistencia.

El 8 de abril, el canciller Silva Cimma cita a su despacho a los embajadores de Alemania y Rusia, Wiegand Pabsch e Igor Rybalkin. Tiene una carta de Aylwin para sus presidentes. Ante la inflexibilidad que han mostrado ambos gobiernos, y la ninguna colaboración que

han prestado para dar una salida conforme al derecho. Chile invocará el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que en su artículo 13 garantiza a toda persona amenazada de expulsión el derecho a apelar ante "una autoridad competente"[12].

Pero Rusia contraataca con un argumento inesperado. Honecker ingresó ilegalmente a Alemania, protegido por Gorbachov a título personal. Por tanto, no cabe en la protección del artículo 13. ¿Y Alemania? Impecable: si Moscú opina que Honecker es un ilegal, sostener otra cosa —como hace Chile— significa "intervenir en sus asuntos internos". La discusión se prolonga por semanas, y parece ciega: es el caso único de un refugiado cuyos dos países legitimadores se han disuelto en medio del proceso[13].

A fines de mayo, la viceministra alemana de Relaciones Exteriores Ursula Seiler-Albring viaja a Santiago para una poco exitosa reunión de cancilleres de Europa y América Latina. Trae una carta de Kohl para Aylwin: una amistosa invitación para que Chile abandone la tesis del artículo 13.

Como la solución jurídica autorizada por Aylwin cae en un despeñadero, Holger es llamado a informar a Santiago. También regresa Almeyda, pero no a consultas, sino a fijar la fecha de su retiro definitivo de Moscú, para unas semanas más. Ya no tiene más que hacer en la capital rusa. Sus viejos conocidos han sido derrotados y no puede olvidar que, para su presentación de credenciales, hubo un hombre que lo abrazó con especial afecto: "Es la séptima vez que nos encontramos", le dijo. Era Gennadi Yanayev, ahora preso como cabecilla del golpe contra Gorbachov.

El gobierno chileno endurece su posición: Alemania debe presentar de una vez los cargos formales para asegurar un juicio justo y Rusia debe disponer de la revisión por un tribunal adecuado de la apelación de Honecker[14].

Pero la Cancillería percibe que este es su último desplante antes de un final ingrato. Para muchas de sus autoridades superiores, mantener la tensión con Alemania y Rusia por tiempo indefinido es ya inviable.

Para fortuna del gobierno, en la delegación de la viceministra ha llegado a Santiago Ulrich Spohn, ahora encargado de América y antes ministro consejero de la RFA en los difíciles días del plebiscito de 1988. El ministro Enrique Correa, que lo ha conocido en esos avatares, lo invita a su casa para una cena de amigos. El ministro está resfriado, por lo que el lugar del encuentro parece natural.

Cuando llega, Spohn descubre que Correa lo espera con Boeninger. Le tienen una propuesta: Chile cederá en lo del Pacto y tratará de que Honecker vaya a Alemania, pero si, como se espera, se confirma su mal estado de salud, lo dejarán viajar a Chile de inmediato.

Al salir, Spohn tiene un trato. Nadie lo reconocerá nunca, pero entre caballeros...

Por fin, el 3 de junio, 14 meses después de la salida de Honecker desde Berlín, Alemania presenta los cargos contra Honecker. A partir de ese instante se sabe que las resistencias chilenas serán doblegadas. Hay sólo un matiz para la diplomacia centroizquierdista de Santiago: si Honecker ha de salir de la legación moscovita, ello no debe ocurrir antes del 28 de junio, el día previsto para las primeras elecciones municipales en casi 20 años. Para el PS sería un golpe intolerable. Pero esa sola y lamentable condición revela el deterioro del orgullo nacional.

Holger regresará a Moscú con una decisión notablemente disminuida. Antes de viajar, él mismo convence al Presidente de que es imperioso que hable con Kohl en la Cumbre de Río, que se iniciará el 12 de junio. Aylwin acepta la propuesta.

El embajador Huneeus se mueve febrilmente en Bonn para conseguir la cita de Aylwin en la recargada agenda de Kohl. Ha de ser a la medianoche del 12, no hay alternativa. La reunión es crucial. Kohl repite el mensaje entregado a Spohn en Santiago con escasa sutileza: "Es un hombre viejo...". Alemania aceptará la apelación formal para que Chile flexibilice su "interpretación" del artículo 13.

En la casa de calle Yunosti, la rutina de los tres matrimonios encerrados progresa con exasperante lentitud. Cada mañana, los Holger salen de su dormitorio en la segunda planta, situado entre el de los Almeyda y el de los Honecker, para iniciar una larga jornada de formalidades.

Holger y Honecker sostienen reuniones de trabajo casi diarias; la esposa de este último toma laboriosas notas, una costumbre que delata su larga formación estatal. A veces se cruzan las anécdotas livianas, los recuerdos del centro exacto de la Guerra Fría, el siglo de las traiciones. A veces la conversación deriva en discusiones agrias. Uno de esos días, cuando concluyen un almuerzo silencioso y hosco, el tercer secretario Jorge O'Ryan no encuentra mejor remedio que contar chistes de don Otto; por ejemplo, el del sofá —el hombre que vende el sillón para que su esposa no lo engañe en él:

—No puede ser —se indigna Honecker—, esa no es una manera seria de resolver problemas de infidelidad.

—*Lieber* Erich —dice Margot, con esa frágil sonrisa que conserva de sus muchos atractivos—, ¿no te das cuenta de que con esa broma se ríen de reacciones como la que acabas de tener?

Pero Honecker no entiende, y la sucesión de chistes de O'Ryan cae en un pesado silencio.

Otras veces, el aire se carga de una gravedad dramática.

—Yo agradezco los esfuerzos de Chile, el único país al que he podido acudir —dice Honecker con solemnidad, sin dejar que asome la tristeza—. Estoy consciente de que es una situación muy tensa. Vea, la embajada está rodeada de fuerzas de seguridad y periodistas. En esta situación, es imposible salir. Yo quisiera terminar con la presión de Alemania e irme de una vez. Pero quiero agotar primero todos los esfuerzos para obtener las garantías que me da el derecho internacional.

Holger no puede eludir el drama individual del líder caído, que teme terminar sus días como un nuevo Rudolph Hess en la soledad de Spandau, purgando a solas los sueños terribles de toda una nación. Entiende que no le crea a la nueva Alemania, ese "estado fascista" que está encarcelando a los dirigentes del derrotado Estado oriental, sin más razones que las de política interna.

A los abogados de Honecker, Friedrich Wolff, de la ex RDA, y Nicholas Becker y Wolfgang Ziegler, de la RFA, los trata de convencer para que aumenten las garantías de un juicio justo en Berlín. Al viejo líder le sugiere que su dignidad estará mejor protegida si se defiende en Berlín, ahora que sus antiguos camaradas lo acusan de vivir en una jaula de oro, mientras ellos son perseguidos.

A fines de junio, Rusia informa a Holger que, existiendo una orden de expulsión, la Cancillería se considera "autoridad competente" para resolver la situación de Honecker. En otras palabras, que no acepta que la "autoridad competente" mencionada por el artículo 13 deba ser sólo un tribunal. Lo que resulta obvio a ojos del mundo es una rareza en un Estado anarquizado, que durante 500 años ha carecido de tribunales independientes y apelaciones.

Los 30 días siguientes son un inútil agón entre un destino ya decidido y los esfuerzos por contrariarlo. Margot Honecker, que tiene libertad de movimientos en Moscú, intenta un último *lobby* con los diputados comunistas, que hasta han creado un comité en defensa de su marido.

El resultado es adverso. Los diputados no consiguen más que impacientar al gobierno de Yeltsin, que comienza a hablar, en los medios diplomáticos, de un "complot" en su contra digitado por los Honecker. Su propósito es transparente: declarar a Honecker "peligro para la seguridad nacional", figura exceptuada del derecho de apelación.

En Santiago, la intranquilidad del canciller Silva Cimma aumenta. Llama, no una, sino varias veces, al embajador Holger para apurarlo. En algún instante se molesta con la obsesión jurídica.

La semana final es angustiosa.

El miércoles 22 de julio, el embajador alemán en Moscú, Klaus Blech, entrega al canciller Kozyrev una nota verbal que requiere la expulsión de Honecker. El jueves, Rusia la acoge. El

viernes, Holger es citado a la Cancillería rusa: su huésped dispone de 24 horas para solicitar audiencia ante la "autoridad competente", que es... la misma Cancillería. Holger pide una prórroga por 24 horas más, para preparar mejor la defensa.

Nyet.

El sábado los abogados de Honecker preparan dos escritos de apelación, uno para el gobierno ruso y otro para el presidente del Parlamento, Ruslan Jasbulatov[15]. No ignoran que Jasbulatov está enfrascado en una agria lucha de poder con Yeltsin. De ello se aprovechará Yeltsin para confirmar que Honecker "conspira".

Ese día Holger lleva personalmente a la Cancillería rusa los mismos papeles que ya antes han presentado Wolff, Ziegler y Becker. Sabe que no serán acogidos. Entonces llama al Presidente Aylwin, que se encuentra pasando el día en Barcelona, para presenciar la inauguración de los Juegos Olímpicos, y le explica que esta parece ser la última ocasión. La apelación pedida por los rusos podría ser presentada como la que ha requerido Chile.

—Usted se olvida —le dice Aylwin, dubitativo, advirtiendo lo impresentable de la situación— de que soy abogado...

—No, no me olvido —dice Holger—. Ni tampoco me olvido de que es un político. Lo importante es que usted crea que puede manejar esta fórmula.

—Sí —dice Aylwin, tras un largo silencio. Piensa en Kohl, en los socialistas chilenos, en la dignidad del Estado, en el trato secreto—. Sí, creo que la puedo manejar. Usted sabrá lo que debe hacer, embajador.

La "apelación" es previsiblemente denegada en todas sus partes el lunes 27. Holger informa a Honecker e inicia los preparativos.

En la tarde del 28, visita la Cancillería rusa, donde entrega a Fokin una autorización firmada para el ingreso a la embajada de fuerzas de seguridad y le pide ayuda para manejar la situación con decoro.

El último acto comienza a las 17 horas del miércoles 29 de julio de 1992, cuando Holger le entrega a Honecker la orden de expulsión de Rusia. El veterano líder alemán la recibe con la fórmula "bajo protesta". En seguida, Holger agrega, también por escrito, la notificación de que Chile ha retirado su condición de huésped y debe salir de la embajada. Honecker intenta un último recurso:

—*Herr* Holger, estoy dispuesto a abandonar la embajada si se garantiza el respeto a los derechos que me da la ley internacional.

—Ya no podemos hacer más —dice Holger.

—¡No saldré! —se exalta Honecker— ¡No acepto! ¡Soy un huésped!

En ese instante Holger hace un gesto y el primer secretario Cruz deja entrar al grupo del KGB. Lo encabeza un teniente general y lo acompaña un segundo secretario del Segundo Departamento Europeo, al que Fokin ha enviado para recibir a Honecker —para que no lo retenga el KGB— y llevarlo a territorio alemán. De un par de vozarrones tonantes los Honecker entienden que les dan 10 minutos.

La resistencia de Erich Honecker se derrumba.

—Queremos que su salida sea digna —le dice Holger—. Lo acompañaremos hasta donde desee. Lo llevaremos en el auto de la embajada, a menos que prefiera el auto de la Cancillería rusa, que espera en el subterráneo.

Honecker pide tiempo para vestirse. Ha decidido ponerse su mejor traje, que en verdad es casi el único. Precedido por su esposa, sube al piso superior. Los hombres del KGB se precipitan a seguirlo. Hace días que se rumorea de un eventual suicidio.

—No —corta Holger—. Nosotros lo acompañamos. Esta es la casa de Chile y yo me hago responsable de lo que ocurra.

Los agentes quieren certezas escritas, pero el segundo secretario ruso los detiene. Holger y Cruz siguen a Honecker hasta su cuarto. Lo ven cumplir un severo ritual:

—Mi camisa blanca —dice él.
—Planchada —dice ella, y se la alcanza.
—Mi pantalón negro —dice él.
—Planchado —dice ella.
—Mi corbata —dice él.
—Lista —dice ella.
—Mis remedios —dice él.
—En el baño —dice ella.

Honecker entra al pequeño cuarto. Cruz avanza tras él. Mientras Holger lo detiene, oye la voz de Margot Honecker:

—Déjelo. No va a hacer lo que usted cree. Es un luchador.

Holger lo toma del brazo para salir. En la puerta, Honecker levanta el puño izquierdo: como su padre obrero, como el padre obrero de Margot, como los millones de obreros de Alemania en otros años, el *proletariat* de todo un siglo, ahora vencido...

El auto llega hasta Vnukovo, donde lo espera un pequeño avión civil de Aeroflot, para ejecutivos. Holger y O'Ryan suben con Honecker para cerciorarse de sus comodidades. Viajarán con él el funcionario ruso y dos hombres del KGB. Honecker se despide de los chilenos y expresa por última vez su gratitud.

Las miradas fugaces son lo único que delata la tragedia. En todo el resto, son hombres de Estado, en misiones de Estado.

Brevísimo epílogo. Esa noche, Erich Honecker ingresa a la cárcel berlinesa de Moabit, donde estuvo, 50 años antes, preso por los nazis hasta que el primer tanque soviético —"cuando no había ninguna otra construcción del sector en pie"— derribó las puertas, como un metálico ángel liberador.

Al día siguiente Margot Honecker aborda un vuelo de Aeroflot para viajar a Santiago. Ha dicho que no volverá a pisar Alemania, y si ese rencor no fuese tan intenso, tal vez escucharía a los abogados que le dicen que tampoco le conviene hacerlo.

El barrio de Riezanski se vacía de policías y periodistas. En los silenciosos alrededores de la embajada, por los senderos del parque Kuzkovo, vuelven a oírse, en las noches cortas del verano, los fantasmales pasos del conde de Sheremétievo, el extinto amo de estos parajes.

El 5 de agosto se realiza en Valparaíso una sesión especial del Parlamento para analizar el caso. El canciller Silva Cimma pide que una parte del debate se declare secreto, y explica que el gobierno ruso advirtió que Honecker conspiraba con los antiguos comunistas. La única prueba que puede citar es el *lobby* de los diputados médicos. Los parlamentarios denostan al canciller por creer esa trama burda y le enrostran haberse pasado en El Quisco las dos peores crisis de la política exterior, el embarque a Croacia y el refugio de Erich Honecker:

—¡Por eso le dicen Henry Quisco! —grita un insolente diputado de la UDI.

Ese mismo mes, la clínica de la cárcel de Moabit emite un informe sobre el estado de Honecker. El tamaño del tumor que se ha desarrollado en su riñón es tal, que el diagnóstico de la clínica Botkin que en marzo dictaminó su inexistencia no pudo sino ser adulterado.

El 12 de noviembre se inicia el juicio. El 3 de diciembre Honecker hace su defensa, que rechaza la competencia del tribunal y acusa a Alemania de criminalizar la historia.

El 12 de enero de 1993, la corte de Berlín ordena la liberación incondicional de Honecker, visto que su dolencia es terminal.

Al día siguiente aborda un vuelo de Lufthansa y el 14 llega a Santiago. A sus 80 años, ha oído que no debe intervenir en la política interna de Chile, pero todo eso parece ridículo frente a la pesadilla de los últimos cuatro años.

Y tiene razón: es ridículo[10].

Notas

1. Tiempo después, parlamentarios de RN quisieron utilizar el ingreso de esos baúles como prueba de que ya entonces se preparaba el ingreso de los Honecker a la Embajada chilena. Esta versión no tiene asidero, dado que para entonces la protección del gobierno soviético era todavía sólida.

2. Rusia conservaba, a la fecha, la policiaca costumbre de los "socialismos reales" de agregar a la visa de entrada el requisito de una visa de salida.

3. El mejor ensayo que se ha escrito sobre el derrumbe del comunismo como fenómeno ideológico es: Furet, Francois: *El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX*. Fondo de Cultura Económica, México, 1995. Para esta investigación fue útil un extenso artículo, con la virtud de la frescura, de: Adomeit, Hannes: *Gorbachev and the german unification: revision of thinking, realignment of power*. Revista *Problems of Communism* (Washington), julio-agosto de 1990.

4. Una interpretación local sobre el origen y el fin del Muro, importante para este análisis, puede hallarse en: Corvalán, Luis: *El derrumbe del poder soviético*. Editorial Los Andes, Santiago, 1993. No es accesorio tener presente que Honecker fue uno de los líderes que insistieron en favor del canje de Corvalán por el disidente soviético Vladimir Bukovsky, cuando la dirigencia del Pacto de Varsovia tenía dudas.

5. Erich Honecker tuvo otra hija, Erika, con su primera mujer, Edith Baumann, de quien se separó a comienzos de los años 50.

6. El Tratado Dos Más Cuatro, establecido entre la RFA y la RDA junto con EE.UU., la URSS, Francia y Gran Bretaña, se firmó el 12 de septiembre de 1990, tras un proceso iniciado el 5 de mayo de ese año. Aunque devolvió la soberanía plena a una sola Alemania, estableció también, entre otras cosas, que los sucesos de la RDA debían ser juzgados conforme a las leyes de la RDA.

7. Kinzer, Stephen: *Honecker taken to Soviet Union: Germany demands his return*. Diario *The New York Times*, 15 de marzo de 1991. La sospecha de que para la jerarquía alemana el regreso de Honecker era más una molestia que una necesidad rondaría todo el proceso posterior, como lo constató a menudo el corresponsal de *El Mercurio* en Bonn. Ver, especialmente: Saavedra, Julio César: *Invitado de piedra*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 29 de marzo de 1992.

8. Gorbachov, Mijail: *El golpe de agosto. Las causas y las consecuencias*. Editorial Atlántida/Zig Zag, Santiago, 1991.

9. Este es un proceso que afectó a la mayor parte de los dirigentes políticos chilenos exiliados en ese país y hasta prefiguró la posterior "renovación" del PS. Ver: Rodríguez Elizondo, José: *Crisis y renovación de las izquierdas. De la revolución cubana a Chiapas, pasando por "el caso chileno"*. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1995. Y: Lavín Almazan, Vivian: *En el Berlín de Honecker*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 5 de junio de 1994. Un enfoque literario del mismo fenómeno: Cerda, Carlos: *Morir en Berlín*. Editorial Planeta, Santiago, 1993.

10. En el derecho internacional es uso común que no se exija pasaporte a los refugiados, e incluso algunos estados consideran que, teniendo pasaporte, dejan de ser refugiados. El mejor estudio sobre el poco apego al derecho de los refugiados que existió en este caso y los cambios de la posición chilena sólo ha sido publicado, irónicamente, en inglés: Orrego, Francisco: *The status and rights of refugees under international law: new issues in light of Honecker affair*. *Inter-American Law Review*, The University of Miami, primavera-verano de 1994, volumen 25, N° 3.

11. Con todo, Alemania había rechazado ya las vías jurídicas alternativas planteadas en Chile por especialistas, todas tendientes a despolitizar el debate: el asilo a Honecker con un subsecuente juicio de extradición elevado ante la Corte Suprema chilena; el traslado del caso a Acnur; la entrega de Honecker a la protección de la Cruz Roja; la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; una presentación ante la Corte Internacional de Justicia; y la creación de un mecanismo arbitral *ad hoc*. Ver: Simeone, Elia; y Valle, Mario: *Nuevas vías de solución para el caso Honecker*. Diario *El Mercurio*, 8 de marzo de 1992.

12. Organización de Naciones Unidas: *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, 16 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171, adoptado por Resolución 2200 (XXI), 6 I.L.M. 368 (1967) de la Asamblea General. El texto del artículo 13 dice que "un extranjero que esté legalmente en el territorio de un Estado parte de este Pacto puede ser expulsado sólo como consecuencia de una decisión adoptada conforme a la ley y, a menos que imperiosas razones de seguridad nacional lo exijan de otro modo, debe poder presentar sus razones contra su expulsión y someter su caso a revisión, y ser representado para este propósito, ante una autoridad competente o una persona o personas especialmente designadas por la autoridad competente".

13. Debido a esta condición excepcional, juristas chilenos propusieron en este período llevar el pleito a la Corte Internacional de La Haya en calidad de *novus*. La insinuación fue abortada en su origen por nuevas presiones directas de Alemania.

14. *Chile condiciona la salida de Erich Honecker*. Diario *El Mercurio*, 29 de mayo de 1992.

15. Los textos solicitan: asilo territorial en Rusia o que se le permita viajar a un país de su elección; que la decisión de retornarlo a Alemania siga las normas de un debido proceso de extradición; y que se le permita contratar a un abogado ruso.

16. Erich Honecker, que fue atendido en la Clínica Las Condes con fondos reservados del gobierno chileno, murió el 29 de mayo de 1994 y fue sepultado al día siguiente en el Cementerio General de Santiago, con el apoyo de una colecta realizada por el PS. Margot Honecker vive en un condominio de La Reina. Sonia Honecker, separada, vive con sus hijos y trabaja en Santiago. Erika Wildau (Honecker) vive en Alemania.

16

El año del marcapasos

El Presidente intentó introducir un paquete de reformas a la Constitución a mediados de 1992. Su esfuerzo tropezaría con el doble rechazo de la oposición y los militares; y, sobre todo, estancaría al gobierno en su propósito de ampliar la legitimidad democrática.

En marzo de 1992, el gobierno de Patricio Aylwin inicia su tercer año. Aunque están en medio de algunas de sus mayores convulsiones —el embarque a Croacia, los planes *Halcón*, el caso Honecker—, el Presidente y su equipo se sienten satisfechos. La economía muestra tendencias positivas, los dolores pasados se están superando, la sociedad se ve optimista. Hasta el "problema principal" ya no lo parece tanto, según dice el Presidente en el aniversario de su asunción:

—La verdad es que ya estoy acostumbrado a gobernar con el general Pinochet en la Comandancia en Jefe.

Hasta entonces, La Moneda se contabiliza una sola derrota política mayor: la operación de controlar la sucesión, iniciada a mediados del 91 por el ministro Edgardo Boeninger —con el silencio del Presidente—, mediante el lanzamiento del ministro Alejandro Foxley como próximo candidato de la Concertación.

Boeninger sólo alcanzó a dar el primer paso, recolectar las firmas de la mayoría de los ministros DC, cuando se topó con los primeros escollos: el rechazo de Enrique Krauss, Patricio Rojas y Jorge Jiménez. Las reuniones para llegar a un acuerdo derivaron en amargas tormentas y Boeninger no llegó ni a asomarse al segundo paso, que sería negociar con otros ministros, y especialmente del PS-PPD, para evitar una resistencia demasiado dura del titular de Educación, Ricardo Lagos.

El primer indicio de que la operación había desatado fuerzas incontenibles en la DC se produjo cuando el senador Eduardo Frei, acompañado de su cuñado el diputado Eugenio Ortega, llegó al palacio para ofrecerle la presidencia de su partido al ministro Krauss. Cuando le consultó al Presidente, paseando por las Torpederas, en Valparaíso, recibió una respuesta sugestiva:

—Quisiera que dejes el gobierno conmigo, Enrique. Pero no te limitaría una buena posibilidad si no viera que hay otras mejores para ti. Has hecho un muy buen ministerio y... tú puedes ser el hombre. ¿Por qué otro?

Krauss rechazó la oferta de Frei en nombre de la lealtad con el gobierno y abrió la compuerta para que el senador se presentara como candidato a la presidencia de la DC, en una competencia que ganó holgadamente.

Pero ese tropiezo no haría que un hombre como Aylwin perdiera de vista el objetivo principal: la Concertación debe encabezar un segundo gobierno, aunque no sea con un elegido de La Moneda. Y para ese momento, la transición debe estar concluida.

En marzo del 92, esto significa cumplir el programa de reformas que quitará a las instituciones su pátina autoritaria. Los hechos confirman esa necesidad.

El Consejo de Seguridad Nacional ha sido una amenaza permanente, aunque no consumada, ante las autoridades debido al empate de militares y civiles.

La inamovilidad de los comandantes en jefe ha limitado al Presidente en momentos críticos. No hace mucho, el ministro Rojas le pidió al general Pinochet reducir la planta de la ex CNI en 900 hombres[1], pero el general le presentó un rechazo terminante. El ministro debió insistir con un argumento sustantivo: la última ley de presupuesto sólo pudo aprobarse con el compromiso de que esa planta sería disminuida, ante lo cual el general aceptó una reducción de 250 agentes. Pero ahora, meses después, desconoce ese acuerdo y condiciona esas salidas a que el gobierno pague indemnizaciones[2].

Frente a otros requerimientos de interés del gobierno, como el retiro del brigadier general Eugenio Covarrubias o del brigadier Pedro Espinoza, los militares se han amparado en la ley orgánica que impide al Presidente decidir la permanencia de los oficiales.

El Tribunal Constitucional, cuyos integrantes fueron designados en el régimen militar, ha actuado contra el gobierno cuando éste ha derrotado a la oposición en el Congreso, y hasta se ha atribuido competencia para revisar decretos reglamentarios del Ejecutivo[3].

El Senado, con sus siete miembros también designados por el régimen militar, tiene una mayoría opositora artificial. Y aunque la posición minoritaria del gobierno lo ha forzado a negociar sus proyectos más importantes —lo que, para Boeninger, no deja de ser positivo—, puede conducir a un "estrangulamiento programático"[4] a la Concertación.

El Poder Judicial continúa estrechamente ligado a los militares desde que, a fines de 1989, el entonces ministro de Justicia Hugo Rosende promoviera una indemnización especial para estimular el retiro de los ministros de más edad y lograra de ese modo designar a nuevos jueces leales al régimen militar y con alta estabilidad futura. El ministro Cumplido quiso imitar la maniobra de Rosende y a fines de 1991 ofreció una indemnización de casi 180 millones de pesos a los ministros mayores de 70 años que quisieran retirarse; pero sólo uno aceptó.

Con la oposición, las cosas no marchan mejor. La UDI, se sabe, rechaza de antemano toda reforma a la Constitución. Pero la situación de RN enoja al gobierno y, muy personalmente, al Presidente. Para las negociaciones de 1989, Aylwin creyó obtener la garantía directa de Sergio Onofre Jarpa de que las reformas que no aceptara el régimen militar serían tramitadas con apoyo de RN allí donde este partido estuviera de acuerdo. Y ahora resulta que RN desconoce tales compromisos, que nunca llegaron a firmarse[5].

A Aylwin le irrita que la derecha le haga esto después de que en ese año decisivo él mismo debió interponer la palabra empeñada para frenar al líder de la izquierda de la coalición, Ricardo Lagos, que no creía en esas promesas y exigía desplegar la fuerza de la Concertación.

RN está presidida ahora por Andrés Allamand, pero el gobierno ha tenido evidencia de la debilidad interna del dirigente "liberal". Durante todo el 91, La Moneda subordinó su estrategia legislativa al objetivo de conseguir una reforma constitucional que permitiera elecciones municipales abiertas. El centro de las negociaciones fue RN, pero cuando Allamand interpuso amenazas terminales para conseguir sus propios objetivos, el gobierno negoció a sus espaldas con los senadores de RN. Con ellos y con la UDI sacó adelante la reforma[6].

A la inversa, cuando el gobierno intentó, a fines del 91, promover otra reforma para traspasar la dependencia de Carabineros desde el Ministerio de Defensa al de Interior, halló cierta disposición

favorable en el grupo comandado por Allamand. Pero el general subdirector de la policía, Gabriel Ormeño, realizó un eficaz *lobby* entre los parlamentarios de RN y echó a pique el proyecto más acariciado del ministro Enrique Krauss[7].

Peor aún, en el verano han surgido indicios de que La Patrulla Juvenil, el principal diseño de Allamand, puede entrar en crisis. Tal como ha hecho Frei en la DC, el senador Sebastián Piñera ha tratado de dar base a su candidatura presidencial encabezando la campaña para las municipales de junio de 1992. Y se ha embarcado en eso hasta que, en marzo, se le ha puesto al frente la diputada Evelyn Matthei, miembro del mismo equipo.

Así, el gobierno se siente en un callejón. En enero de 1992, la Secretaría General de la Presidencia ha recomendado cambiar la estrategia de negociaciones parciales y lanzar un paquete de reformas constitucionales.

El proyecto se afina en las oficinas de Boeninger. Sus analistas han concluido que, si se recogen todas las propuestas de la Concertación, se llegaría a más del 50% de los artículos de la Constitución[8].

Para evitar la denuncia de la oposición acerca del "desmantelamiento" de la Carta, y en nombre del principio de la economía legislativa, Boeninger ha propuesto centrarse en los aspectos medulares y usar los tres documentos de mayor consenso: el Acuerdo Nacional, suscrito en 1985 por un arco que iba desde el PS hasta Unión Nacional, cimiento de la posterior RN; las Bases de Sustentación para la Gobernabilidad, firmadas en 1986 por los partidos que se agruparían en la Concertación; y los acuerdos de las Comisiones Técnicas de la Concertación y RN, sellados en 1989.

En ese proceso ha caído una de las propuestas más sentidas en la Concertación: la introducción del plebiscito como mecanismo para resolver disputas entre el Ejecutivo y el Congreso o para promover reformas a la Constitución[9].

Así, el gobierno ha llegado a sólo siete objetivos esenciales:

1) La eliminación de los senadores designados, cuasiaceptada por el último gabinete del régimen militar, que propuso mantenerlos por los primeros ocho años, una oferta que no fue acogida por la Concertación;

2) El aumento de 120 a 150 diputados y de 38 senadores elegidos a 50, siguiendo una propuesta de RN;

3) La modificación de la integración del Tribunal Constitucional, otorgando más importancia a la participación del Congreso;

4) La integración al Consejo de Seguridad Nacional del presidente de la Cámara de Diputados, que rompería el empate civiles-militares;

5) La restitución de la facultad presidencial de remover a los comandantes en jefe;

6) La modificación del sistema electoral binominal por uno proporcional para los parlamentarios; y

7) La reducción del quórum requerido para modificar la Constitución, de dos tercios a tres quintos.

A lo largo de las extensas discusiones de todo un año, los equipos de Boeninger han llegado a identificar un puñado de "monedas de trueque" para entusiasmar a la oposición. Con ellas caen dos de los objetivos: el cambio del sistema binominal y la reducción de los quórum para las nuevas reformas. Otras "monedas":

a) Elevar los quórum para asegurar las garantías a la propiedad y a la actividad económica;

b) Acortar el período presidencial a cuatro años;

c) Concordar en la eliminación de los senadores designados para que en 1997 el gobierno, probablemente de la Concertación, no incremente su mayoría;

d) Ofrecer privatizaciones en sectores claves[10];

e) Favorecer a RN con la imagen de los "acuerdos históricos", lo que significa desactivar la amenaza de cobrarle la palabra empeñada en 1989;

f) Aumentar las facultades del Parlamento.

Pero las "monedas" van cayendo una a una en el primer trimestre del 92. Los quórum que propone el gobierno son inferiores a los que ya existen. La extensión del período presidencial, con la lucha ya previsible entre Ricardo Lagos y Eduardo Frei, complica más a la Concertación que a la oposición; por lo demás, el gobierno parece no haber advertido que esto tendrá que negociarlo con el candidato que se imponga en su conglomerado. Los senadores designados han forzado al gobierno a transar y no es tan claro que los pueda dominar: cuatro de ellos serán siempre escogidos por los militares. ¿Las privatizaciones? En verdad, constituyen otro factor de división en el oficialismo. La amenaza de la palabra empeñada no interesa a los sectores "duros" de RN: no la dieron ellos. Como ofertas, todas pudieron parecer seductoras hace dos años. Pero ahora son escuálidas.

Y la última —el aumento de facultades parlamentarias— se cae por dentro. Aylwin y la mayoría de sus ministros están convencidos de que un Presidente fuerte es el único freno posible a los militares. Aun cuando se crea que la parlamentarización es el esquema apropiado para Chile, la transición no la hace conveniente en estos años.

Por el contrario, de lo que se trata ahora es de reforzar la autoridad del Presidente. Y por eso el complemento de cualquier reforma constitucional es el cambio de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para que el Jefe del Estado pueda remover libremente a los oficiales.

El 5 de marzo, el ministro Patricio Rojas se reúne en su oficina con el general Pinochet, para informarle acerca de las reformas a la Constitución y a la ley orgánica de las FF.AA. que el gobierno enviará al Parlamento. Cuando el ministro insinúa que la idea puede ser apoyada por otros comandantes en jefe, Pinochet lo interrumpe:

—¡Eso es mentira!

En adelante, la reunión es un infierno. Las secretarias y los ayudantes del piso 20 del Diego Portales empalidecen ante los gritos que emergen del privado.

Rojas, firme y nervioso a la vez, amplía el campo de conflicto: insiste en cobrar el compromiso del retiro de los hombres de la ex CNI. La indignación de Pinochet se redobla. No hará lo que el ministro pretende. El ministro no entiende a los militares. El ministro propone puras arbitrariedades. ¿Arbitrariedades, general?

Al llegar al último tema, el general ya está copado por la ira. El ministro desearía que asista a una reunión de los comandantes en jefe con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Dick Cheney, cuyo viaje ha gestionado Rojas, todo un honor. No, dice Pinochet, no tengo nada que hablar con ese señor.

Rojas acompaña al general hasta la puerta de su gabinete. Mientras Pinochet baja en el ascensor, el ministro declara a la prensa que la cita fue "amable". Cuando se lo cuentan, el general estalla en imprecaciones[11].

Seis días más tarde, el 11, Pinochet reúne a los generales y les informa sobre las reformas que Rojas le ha descrito. Añade una instrucción: la Comisión de Reparación y Reconciliación que se está creando debe ser tratada como la Comisión Rettig. Mínima colaboración.

El 16 asiste a un almuerzo de los comandantes en jefe convocado por el almirante Jorge Martínez Busch, el más vehemente opositor a las reformas. Allí donde Pinochet lucha contra ellas abiertamente, Martínez Busch aporta ingredientes doctrinarios que se mueven en el entresuelo de la política, invaginando las posiciones vacilantes en un solo cuerpo de resistencia.

En la tarde, Pinochet despacha un oficio en el que informa a Rojas que viajará fuera de Chile de vacaciones.

También pide audiencia al Presidente, pero, como es usual, le dicen que de un día para otro no es posible, "a menos que se trate de un asunto muy urgente". No, responde, nada urgente. El 17 de marzo vuela a Ecuador.

Y el 18 sufre un amanecer amargo. Enterado de que Pinochet ha aterrizado horas antes, el Presidente de Ecuador, el centroizquierdista Rodrigo Borja, declara que para su país no es grata esta visita y que preferiría que no estuviera allí.

En el Ejército estalla un revuelo. El vicecomandante, teniente general Jorge Lúcar, cita al jefe del Comité Asesor, mayor general Ballerino, y le ordena estudiar la grave situación que se ha creado. Luego habla con el ministro de Defensa: lo que ha pasado es muy delicado, el general puede sufrir algún peligro...

—Bueno —dice Rojas—, eso pasa por salir de esta manera, sin avisar.

—Sí, ministro —dice Lúcar—, pero eso ya fue así. Ahora hay que arreglar el problema.

Toda la tarde se consume en ese esfuerzo. Al anochecer, Ballerino recomienda dar una señal pública que confirme la molestia del Ejército, ya conocida por el gobierno. Por ejemplo, una reunión de generales.

Los generales son convocados para las 22 horas, en el edificio de Zenteno. Junto con despachar las órdenes, el vicecomandante Lúcar llama al ministro Rojas:

—Yo convoqué a los generales. Ya sabe, para que no lo haga otro general, que puede estar interesado...

El gobierno ya conoce la sorda tensión que enfrenta a Lúcar con Ballerino. No le caben dudas acerca de quién es el general "interesado".

Pero no es aún una guerra desatada. De hecho, en su exposición ante los generales, Lúcar declara su satisfacción por el trabajo del Comité Asesor y da a conocer la conclusión a que han llegado ambos:

—Mi general debe volver.

Los murmullos se expanden por el salón. La mayoría parece de acuerdo. Pero de pronto se levanta una mano. Es el general Guillermo Letelier, caído de la gerencia de Famae por el caso Croacia, pero al que todos identifican como un "regalón" de Pinochet:

—No estoy de acuerdo, mi general —dice.

—Ah, ¿no? —dice Lúcar—. Y a ver, ¿por qué?

—Porque sería una humillación, mi general. Sería como volver con la cola entre las piernas. Mi general no puede seguir en Ecuador, pero no puede volver a Chile. Hay que sacarlo para otra parte, mi general.

—Eso está bueno, mi general —interviene Ballerino, dirigiéndose a Lúcar. Luego interpela a Letelier—: Y dígame, ¿usted lo va a sacar?

—Diga, Letelier —repite Lúcar—, ¿usted lo va a sacar?

—Mi general, si me lo ordena, yo lo saco, mi general.

Los murmullos vuelven a elevarse. Letelier queda con el peso de la tarea. En los días siguientes tendrá que maniobrar febrilmente ante la embajada de Brasil, para llevar a Pinochet a Río con el máximo de seguridades.

Pero esta noche hay un segundo problema. El general Pinochet no puede ser ofendido por un país extranjero en medio del silencio del gobierno.

A las 2 de la mañana, Ballerino llama al ministro Correa:

—Perdona que te despierte, Enrique —dice—, pero la situación está un poco caldeada. Los generales han planteado que el gobierno debería emitir una declaración en defensa del comandante en jefe.

Correa asiente sin demorarse: lo hará.

Unos días después, un rumor invade como un ciclón las oficinas de Defensa: Ballerino se ha reunido con el secretario general de la DC, Genaro Arriagada, y con un amigo personal de Eduardo Frei, el empresario Edmundo Pérez Yoma, al que todos perciben como probable ministro de Defensa futuro, y les ha planteado la necesidad de cambiar al ministro

10. Max Horacio Díaz Trujillo y Luis Rodrigo Morales Salas.

11. Juan Martínez (PS), Jorge Morales (RN), Jorge Ulloa (UDI) y Guillermo Yunge (DC).

12. A favor: Marcos Aburto, Hernán Cereceda, Enrique Zurita, Roberto Dávila, Lionel Béraud, Arnaldo Toro, Marco Aurelio Perales, Germán Valenzuela, Hernán Alvarez, Adolfo Bañados y Luis Correa Bulo. En contra: Oscar Carrasco y Mario Garrido.

13. Cámara de Diputados de Chile: Legislatura 325ª, Extraordinaria, Sesión 38ª, viernes 8 y sábado 9 de enero de 1993.

14. Arturo Frei, Eduardo Frei, Jorge Lavandero, Mario Papi, Laura Soto y Andrés Zaldívar.

15. Senado de Chile: Legislatura 325ª, Extraordinaria, Sesión 27ª, especial, miércoles 20 de enero de 1993.

16. La votación por capítulos dio los siguientes resultados:

1) Traspaso a la Justicia Militar del caso Chanfreau:

Lionel Béraud:	23 en contra, 22 a favor
Hernán Cereceda:	23 en contra, 22 a favor
Germán Valenzuela:	24 en contra, 21 a favor
Fernando Torres:	23 en contra, 22 a favor

2) Integración impropia del auditor Torres:

Lionel Béraud:	29 en contra, 16 a favor
Hernán Cereceda:	29 en contra, 16 a favor
Germán Valenzuela:	30 en contra, 15 a favor
Fernando Torres:	23 en contra, 22 a favor

3) Retraso en fallo de causa Nº 1510-87:

Lionel Béraud:	23 en contra, 22 a favor
Hernán Cereceda:	20 en contra, 25 a favor
Germán Valenzuela:	24 en contra, 21 a favor
Fernando Torres:	23 en contra, 22 a favor

Ballerino tiene sus propios planteamientos. El gobierno ha vetado el ascenso al capitán Pedro Fernández Ditus, implicado hace seis años en el "caso quemados", y el oficial podría presentar algún recurso.

—Puede hacer lo que quiera —replica Sánchez—. Pero es una decisión del Presidente y no hay más que hablar.

Además, dice Ballerino, el Ejército se siente discriminado. Por ejemplo, ahí están las misiones en el extranjero, que las otras ramas de las FF.AA. realizan. No, general, usted sabe que es el comandante en jefe quien se opone, por su rechazo a EE.UU. Es cierto, admite Ballerino, pero tal vez esto se podría superar si el gobierno arregla que el general Pinochet se encuentre en alguna parte con su par norteamericano. El gobierno no tiene problemas, si la oportunidad se da, replica Sánchez, pero no depende de él.

¿Otros detalles? Bueno, el viaje del general a Ecuador, tan desafortunado. Y sin aviso... Ballerino concuerda; se ha opuesto tanto a estos viajes, que ya el comandante en jefe ni siquiera se los informa.

Ah, y la situación del coronel Francisco Pérez Egert, director de la Escuela de Caballería de Quillota y ex miembro de la DINA, que ha negado el acceso a un juez que busca desaparecidos en esa zona y que ahora ha sido propuesto como agregado militar en Londres. El subsecretario aconseja que la nueva destinación sea retirada hasta que se aclare la protesta del juez de Quillota. De otro modo, podría suscitarse otro escándalo internacional. Ballerino se compromete a plantear tal riesgo al comandante en jefe[12].

Ninguna de las respuestas tranquiliza a Rojas. Cuando Pinochet regresa de sus vacaciones y lo visita, el ministro mantiene vivo el reproche por la reunión de Ballerino con Arriagada y Pérez Yoma.

—Milito hace 20 años en la DC, general —le dice—, y ningún general me va a venir a desbancar en mi partido.

No es sólo esto. Las relaciones de este señor Ballerino con los políticos sobrepasan la Constitución. A propósito, señor general, tampoco el gobierno estima resueltas sus dudas sobre la relación de la DINE y la UDI en los planes *Halcón*. Para ser francos, sospecha del Comité Asesor.

El rechazo de Pinochet hacia el estilo de Rojas es siempre más intenso y más personal que el del ministro, como lo reconocen sus propios subordinados. Por eso ya no extraña que los gritos inunden el gabinete de Defensa en estas ocasiones.

Y por eso unos días después, cuando obtiene audiencia con Aylwin para saludarlo tras las vacaciones, el general vuelve a alterarse al ver a Rojas en el despacho presidencial.

—¿Así que le fue bien en sus vacaciones? —dice el Presidente—. Cuánto me alegro. Pero nos metió un lío, general. Si nos hubiera avisado...

—Yo pedí hora para contarle, Presidente...

—Pero usted debe dirigirse al ministro para estas cosas.

—No, señor. La última vez que le informé al ministro, lo supo altiro la Cancillería y me encontré con problemas afuera. El señor Rojas lo sabe.

¿Y la DINE, general? Es muy difícil creer que no entregara los planes *Halcón* a la UDI. La actuación del general Covarrubias ha sido ambigua. El gobierno destituyó al general (R) Toro, y el Ejército no ha hecho nada.

—Es que Covarrubias hizo bien, Presidente —dice Pinochet—. Mire, le voy a contar una cosa: el año pasado recibí un documento firmado por usted, muy grave para el Ejército. Le pedí a Covarrubias que me verificara. ¿Sabe qué me informó? Que era falso. No era su firma, Presidente. ¿Se fija? La DINE es una gran ayuda.

Aylwin sonríe. No cree en esta clase de aparatos, pero le hace alguna gracia el aire de misterio que los rodea.

—Bueno, general —dice—, a lo mejor usted tiene razón. Pero no me parece que el Presidente no pueda proponer el retiro de un oficial en el que no confía. Por eso voy a mandar la reforma a la ley de Fuerzas Armadas.

A comienzos de mayo de 1992, el gabinete de Pinochet inicia consultas informales con la oficina del presidente del Senado, Gabriel Valdés, para saber si es posible que el general asista en su condición de ex jefe de Estado al mensaje a la nación que el Presidente debe dar el día 21.

Informada de los precedentes de la Cancillería, la oficina de Valdés entrega una respuesta escueta: puede hacerlo, pero sin uniforme. No puede haber dos generales de Ejército en primeras filas.

Pero Pinochet sabe bien lo que busca. En todo el gobierno de Aylwin, no ha asistido nunca a una de estas ceremonias, siempre consciente de que el gobierno militar puede ser aludido de mala manera.

¿Por qué, entonces, preguntar por el protocolo? Por lo que espera: que el gobierno se inquiete, se modere, se ponga nervioso. Una actuación por fantasmagoría.

Resulta: todo eso ocurre hasta la mañana del 21 de mayo, cuando un ordenanza informa al Senado que el comandante en jefe no podrá asistir por razones de fuerza mayor; lo reemplazará el vicecomandante Jorge Lúcar.

En verdad, la "fuerza mayor" está prevista hace semanas y se radica en el Hospital Militar, donde un equipo médico realiza una operación para implantar un marcapasos en el corazón de Pinochet, que está sufriendo ciertas insuficiencias coronarias.

La intervención es singularmente exitosa. Cuando se recupere, el general pedirá, como humorada, un segundo marcapasos para mantener en su escritorio.

El secreto y la operación distractiva tienen sus razones. De enterarse, el oficialismo podría reclamar la inhabilidad del comandante en jefe. El año anterior, durante un simple chequeo médico, ya lo intentó.

En Valparaíso, ignorante de esto, la Concertación admira la entereza del Presidente Aylwin, cuyo mensaje fustiga a los cancerberos de una institucionalidad maniatada y llama a introducir reformas a la Constitución.

Pero para entonces los objetivos iniciales del gobierno se han reducido a apenas cuatro: el cambio de la integración del Tribunal Constitucional; la incorporación del presidente de la Cámara al CSN; el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe; y la reducción del quórum para reformar la Constitución de 2/3 a 3/5, salvo en los capítulos I y III (*Bases de la institucionalidad* y *Derechos y deberes constitucionales*)[17].

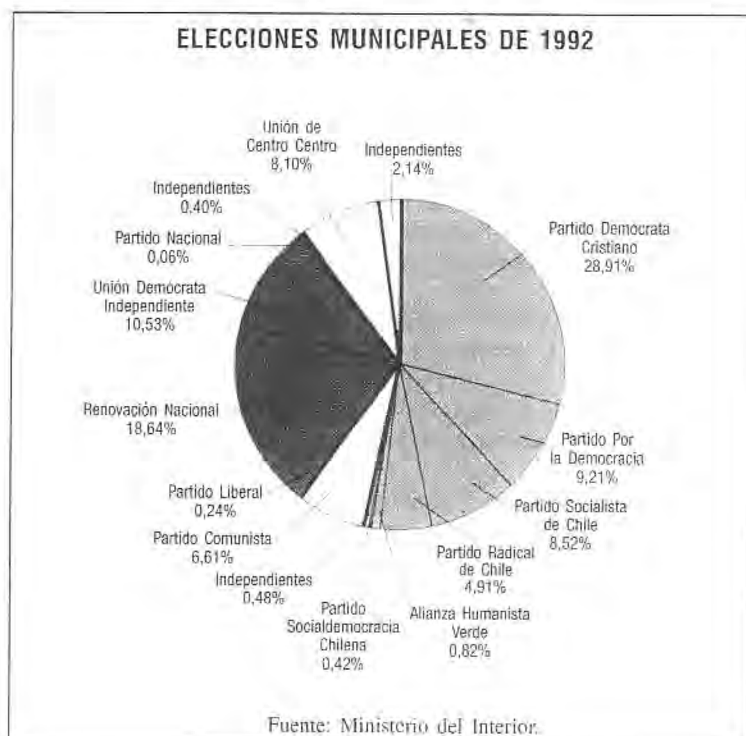
De los senadores designados no hay una palabra. Tampoco del aumento de parlamentarios. Y ninguna para cambiar el sistema binonimal.

Si las metáforas pudieran oírse, tal vez el ruido del marcapasos tendría que invadir el atestado recinto del Congreso Pleno: su cadencia mecánica e invariable mostraría el futuro de las reformas.

Ninguna será aprobada, ni en este año ni en otro.

Pero Pinochet, que cree poco en las metáforas, está dispuesto a actuar contra las reformas en todos los terrenos. En junio inicia reuniones con los dirigentes de la UDI y RN; algunas figuras de la Concertación, como Gabriel Valdés, Andrés Zaldívar y Jaime Gazmuri, visitan también sus comedores.

Uno de los encuentros más resonantes se gesta el 9 de julio de 1992, cuando el senador Sebastián Piñera llega a la ceremonia de juramento a la bandera que presentan 22 batallones en el Fuerte Arteaga, con la presencia del Presidente Aylwin.



Fuente: Ministerio del Interior.

Piñera ha encabezado la campaña municipal de RN y, pese a su fiera lucha con Evelyn Matthei, los buenos resultados mejoran su opción. Consciente de ello, va a Peldehue para dar una señal positiva a los militares.

—¿No ve que no ladramos? —lo saluda Pinochet.

En la tumultuosa ceremonia, Piñera busca a Francisco Javier Cuadra, con quien no ha tenido buenas relaciones, pero que le parece el hombre apropiado para conducirlo a un diálogo directo con Pinochet.

Y, sin que lo sepa, Cuadra lo busca a él. Poco antes, Ballerino le ha dicho que el Ejército está preocupado por el proyecto de reforma a la ley orgánica de las FF.AA. y, en especial, por el modo en que puedan votar algunos senadores de RN, empezando por Piñera. Cuadra le ha ofrecido contactarlo para una reunión. Los intereses de ambos confluyen en Peldehue.

Unos días después, Piñera y Cuadra llegan a desayunar en las oficinas de Pinochet, que los recibe con Ballerino.

—Si va a ser candidato —dice Pinochet—, es bueno que conozca los problemas. Por ejemplo, esto de la reforma a la ley orgánica...

—Lo he estudiado detenidamente, general —dice Piñera, notando la sorpresa de los militares.

Si se aplican los criterios de una empresa, dice, parece razonable que el gerente tenga facultades para nombrar los puestos importantes. En cambio, no es razonable que el presidente de la empresa no pueda incidir en el despido de alguien si le parece inapropiado.

Pero Piñera quiere mostrarse flexible. Aunque en principio se inclina en favor del proyecto del gobierno, está abierto a recibir observaciones y propuestas. Se le pueden hacer llegar a través de Ballerino o Cuadra.

Una semana más tarde, la reunión privada se revela en la prensa. Los militares se enervan: ¿la filtró Piñera para ganar posiciones en su disputa dentro de RN? Las sospechas parecen confirmarse cuando Evelyn Matthei comienza a solicitar una audiencia con Pinochet.

Piñera no es de fiar.

Las elecciones municipales del 28 de junio de 1992 disparan la carrera presidencial para el año siguiente. La directiva de la DC, que ha esperado resultados espectaculares para imponer de una vez al senador Frei, ve con cierta angustia cómo se licuan sus expectativas cuando sus votantes no llegan al 30%.

La cifra de la DC confirma su mejor opción para obtener la candidatura de la Concertación, pero no consolida automáticamente a Frei. Los senadores Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar se levantan como competidores. Durarán poco, porque el fervor partidario se inclina masivamente hacia el mágico apellido del prócer de los 60; pero mantendrán la tensión hasta el fin del año.

El Partido Radical levanta la candidatura del senador Anselmo Sule, que trasluce uno de dos objetivos: negociar con los "grandes" o, si éstos entran en un combate muy bravo, proponerse como alternativa.

El PS y el PPD viven horas más complejas. La candidatura de Ricardo Lagos, todavía ministro de Educación, parece retrasada y no se perfila con nitidez. Lagos no ignora que en sus propias filas hay quienes están disponibles para negociar su postulación antes de dar la batalla. Por añadidura, la convivencia del PS y el PPD bajo la doble militancia está llegando al límite. El viejo proyecto del PS de tragarse al PPD parece ya frustrado ante la evidencia de que el "partido instrumental" ha adquirido autonomía. La presión de los jefes del PS por extirpar la doble militancia será su último esfuerzo por enviar al PPD a un rincón subsidiario. Fallarán[14].

En la derecha, el resultado que bordea el 30% excita a los dirigentes e irrita al gobierno: en realidad, no se trata de una gran *performance*, sino de una magníficamente explotada en términos publicitarios.

Con sus siete puntos de ventaja sobre la UDI, RN siente que ya tiene ganado el derecho al candidato. La UDI carece de un rostro instalado; cuando más, podría dar testimonio postulando a su presidente, Jovino Novoa. El ex ministro José Piñera, que había ingresado a la UDI tras el asesinato de Jaime Guzmán, ha decidido salir del partido para iniciar la marcha hacia la Presidencia como independiente. Pero su caminata se intuye forzada en un esquema político bipolar de dos grandes coaliciones.

La mejor opción, hacia julio de 1992, la tienen su hermano Sebastián y la diputada Matthei. Pero esas expectativas tan auspiciosas son, quizá, lo peor que les puede pasar. Por influjo de ellas, la disputa se encarniza y queda al borde de romper todos los límites.

Así se intuye en el Consejo General de La Serena, cuando Sergio Onofre Jarpa denuncia a Piñera de interponer la influencia corruptora de su fortuna, como lo muestra el hecho de que el nuevo presidente de Santiago, Cristián Barra, trabaja en una de sus empresas.

Piñera, que recuerda que la contratación de Barra le fue pedida por dirigentes del partido, acude a Evelyn Matthei para detener el ataque. Pero la respuesta de la diputada muestra el filoso acero que ambos han instalado entre sí, entre sus bandos y en el corazón de RN:

—*That's your problem, my dear. Not mine.*

Notas

1. A la fecha, esta suma significaba sacar a la casi totalidad de los ex CNI, puesto que poco más de 1.200 fueron dados de baja entre el 22 de febrero de 1990 y fines de 1991.

2. La discusión se prolongará hasta el fin del gobierno de Aylwin. En noviembre de 1993, el Presidente debió insistir en la baja de más de 300 funcionarios para cumplir con el compromiso contraído ante el Congreso de que a lo menos 1.000 ex agentes habrían dejado sus puestos para 1994.

3. En enero de 1990, el Tribunal Constitucional aceptó un requerimiento de RN para revisar el decreto reglamentario 140 del Ministerio de Vivienda. Aunque falló a favor del gobierno, en el Ejecutivo cundió la alarma por el precedente que esa resolución podía sentar. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: *Informe de análisis*, 18 de enero de 1991.

4. La expresión pertenece al equipo de analistas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: *Informe de análisis*, 10 de mayo de 1991.

5. Cavallo, Ascanio: *Los hombres de la transición*. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1992.

6. Una síntesis sobre la importancia de la reforma para el gobierno, en: Ministerio de Planificación y Cooperación: *Balance de seis años de las políticas sociales. 1990/1996*. Santiago, 1996.

7. Tras su retiro, a comienzos de 1993, el general Ormeño ingresó a RN.

8. Uno de los primeros borradores, firmado por Ricardo Solari y fechado el 18 de abril de 1991, que muestra la amplitud de los temas abarcados, fue publicado por el diario *La Segunda: Nuevo proyecto de reformas constitucionales*, 22 de abril de 1991.

9. Los argumentos de Boeninger están expuestos en un documento de marzo de 1992: *Cambios que propondrá el gobierno a la Constitución, El Diario*, 19 de marzo de 1992.

10. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: *Informes de análisis*, 3 de enero de 1992 y 19 de junio de 1992. El Presidente nunca estuvo de acuerdo en ofrecer la venta de empresas del Estado a cambio de acuerdos políticos, pese a la insistencia de su Ministerio asesor.

11. *Informe Confidencial*. Marzo de 1992.

12. El 26 de diciembre de 1991, el coronel Pérez Egert negó el acceso al regimiento al juez Raúl Beltramí, que investigaba la desaparición de tres personas detenidas en 1974 por una patrulla presuntamente integrada por el mismo oficial. El juez sometió a proceso al coronel, pero el caso fue transferido a la justicia militar y el juez Beltramí recibió una amonestación de la Corte Suprema por excederse en sus funciones.

13. Presidencia de la República: Mensaje N° 48-324, al presidente de la H. Cámara de Diputados, 1° de junio de 1992.

14. Para una descripción detallada del proceso interno en el PDC y la trayectoria de Frei: *Cómo ganó Frei el 93. La historia secreta de las primarias*. Revista *Hoy*, N° 1.057, del 27 de octubre al 2 de noviembre de 1997. Sobre el proceso vivido por Lagos hay una descripción completa en: Otano, Rafael: *Crónica de la transición*. Editorial Planeta, Santiago, 1995.

17

Un huachito y dos generales

La guerra ilimitada entre Sebastián Piñera y Evelyn Matthei enfrenta a dos estilos y dos grupos dentro de la derecha. Pero, más secretamente, enfrenta también a los dos oficiales más importantes del mando militar, que inician una lucha sin cuartel por el poder.

—Huachito —le dice Evelyn Matthei al capitán Fernando Diez, comandante de la Cuarta Compañía de Guerra Electrónica, del Regimiento de Telecomunicaciones Nº 9 Soberanía, en las alturas precordilleranas de Peñalolén. Están en una sala privada del brigadier general Ricardo Contreras, jefe del Comando de Telecomunicaciones, y el término le resulta tan chocante al capitán, que lo comentará con sus camaradas de armas y lo citará ante la justicia una y otra vez[1].

Pero la diputada de Renovación Nacional no repara en ese rechazo, porque su tarea de esta noche del domingo 8 de noviembre de 1992 está por sobre las formas.

—Huachito, ya todo se sabe, el ministro Rojas tiene tu nombre. Tienes que decir la verdad, no te va a pasar nada. Tenemos los mejores abogados, hasta trabajo si necesitas, lo que quieras...

—Yo a usted no la conozco —dice Diez, sintiéndose ante una trampa—, no sé por qué me mete en esto.

Evelyn Matthei insiste, pero el capitán la niega como a una aparición: como si no creyera que le está pasando lo que temió desde la infausta noche del 23 agosto, cuando vio en Megavisión al propio presidente del canal, Ricardo Claro, apretar el botón de una radiograbadora corriente y emitir, para millones de oídos, dos voces que lo torturan semana tras semana.

Hasta salen a pasear por el patio: numerosos oficiales los ven en ese trámite. Diez vive el drama de la mentira penal. Tal vez imagina que sin confesión no habrá nunca prueba, pero sabe que cuando entregó a la diputada la grabación subrepticia de una conversación de telefonía celular entre el senador Sebastián Piñera y su amigo, el ejecutivo de Coca Cola Pedro Pablo Díaz, era parte de un engranaje más amplio.

De eso se defiende. No es culpable, piensa, porque nadie es culpable de una denuncia patriótica. Al revés, es víctima de una traición, otra de las traiciones de la política.

Cuando esa ciega rabia hace que el capitán se exalte frente a la diputada, el brigadier general Carlos Krumm, el primer comandante que tuvo Diez (en el Regimiento de Telecomunicaciones Nº 6 Tarapacá, de Iquique), que ha venido para ayudar al brigadier general Contreras, saca a Evelyn Matthei de la sala y se encierra a solas con él.

La larga conversación, que casi sobrepasa la medianoche, no tiene resultados.

Para entonces ya se ha instalado en el Regimiento un equipo del Batallón de Inteligencia (BIE), el brazo operativo de la DINE, premunido de un detector de mentiras.

En la tarde del día siguiente, el lunes 9, el capitán se quebranta y reconoce su autoría ante Krumm. A partir de ese instante, según el propio Diez, sus declaraciones son fabricadas en conjunto con el BIE, y mecanografiadas por su esposa, Marianela Díaz, que también es secretaria de la Academia de Guerra, ocultando detalles y circunstancias agravantes[2].

La sensación de triunfo de Renovación Nacional tras las elecciones municipales duró efímeros 56 días. Quizá menos: la disputa entre los precandidatos Sebastián Piñera y Evelyn Matthei había devenido en conflagración ya antes de los comicios, y tenía al partido quebrantado y crispado.

Era una situación inesperada. Piñera había iniciado los sondeos para su candidatura apenas una semana después de ser elegido senador, a fines de 1989, siguiendo un diseño que unificaba a la recién triunfante Patrulla Juvenil: la candidatura para Piñera, la presidencia de RN para Andrés Allamand, el liderazgo de los diputados para Alberto Espina y una senaturía futura para Evelyn Matthei.

Tal diseño suponía desplazar al principal líder de RN, el senador Sergio Onofre Jarpa. Paradójicamente, el caudillo parecía aceptarlo. En agosto de 1990 cedió la presidencia a Allamand y en el verano del 91, durante un almuerzo en el Congreso, respaldó a Piñera.

A ambos les puso limitaciones.

Con Allamand, vetó el ingreso a la mesa directiva de Piñera y Evelyn Matthei. No por objeciones personales, sino como freno al ancho dominio que el joven presidente intentaba extender. Allamand debió aceptar una mesa integrada por cinco figuras cercanas a Jarpa y sólo tres a él mismo[3].

Luego asistió, en la noche del 6 de agosto de 1990, al Consejo General que en Valparaíso proclamó presidente a Allamand con una lucida fiesta de estilo americano. Volaron sombreros de cartón, serpentinas y cintas tricolores, y hubo multitud de mujeres preciosas, algunas parlamentarias, que hicieron el deleite de una derecha de historial masculino. En ese firmamento casi californiano brillaron Evelyn Matthei y su principal asesora, Lily Pérez, el fichaje estelar más joven de aquellos días. Allamand anunció que en esa carpa se hallaba el próximo Presidente de Chile y, con excepción de los otros interesados de entonces —que también aplaudieron a rabiar—, todos entendieron que se refería a Sebastián Piñera.

Cuando se reunió con Piñera, en enero del 91, Jarpa le dio tres consejos: no atacar al régimen militar, defender la agricultura y no actuar con tanta precipitación. Piñera entendió que el cacique le sugería que se pusiera bajo su tutela. Jarpa entendió que su mensaje era una prevención contra la prepotencia del dinero.

Pero ni Allamand ni mucho menos Piñera respetaron los consejos ni los deseos del viejo líder.

Allamand se dedicó a subrayar el "cambio de estilo" creando un *shadow cabinet* en el que relegó al caudillo a los temas de Defensa y metió a RN a cuantas personas podían disgustarle, empezando por el ex ministro Francisco Javier Cuadra, convertido en asesor directo de la cúpula partidaria.

Pero Jarpa controlaba todavía áreas decisivas del partido, como la bancada de senadores, el grupo agrario y los sectores más doctrinarios y tradicionales. Allamand hizo esfuerzos denodados por tomar las riendas de RN durante todo 1991. Cada uno de esos pasos aumentaba la distancia de Jarpa, que atribuía los tropiezos del joven presidente a la influencia perturbadora de Piñera y su fortuna.

En el segundo semestre del 91 también comenzó a distanciarse Evelyn Matthei, que a su relación siempre tensa con Espina sumaba ahora un creciente sentimiento de marginación. Para peor, ese año quedó embarazada y debió alejarse del mundo de restaurantes y sobremesas nocturnas donde se fraguaba la política cupular de RN.

El estilo de Piñera hizo el resto. Sus cortos modales, sus maneras atropelladas y su impetuosa seguridad no alejaron sólo a los viejos próceres de la derecha, sino también a algunos de los

hombres de Allamand: Gustavo Alessandri Balmaceda, Federico Mekis, Federico Ringeling, Fernanda Otero, Francisco Ignacio Ossa, Cristián Correa.

La resistencia a Piñera fraguó en el verano del 92. Alentada por esos dirigentes, y con el respaldo más discreto —pero explícito— de Jarpa, Evelyn Matthei decidió competir con su antiguo profesor, empleador y amigo.

Allamand y Piñera contemplaron la operación con una mirada poco menos que irónica. Ambos pensaban en un problema estratégico, casi de Estado: Eduardo Frei había ganado la presidencia del PDC y de seguro convertiría la campaña municipal en un primer paso del desafío presidencial. En concordancia con la oportunidad de adelantarse a la UDI, la campaña de RN fue diseñada como una plataforma para Piñera: recorrería comuna por comuna, instalaría sus consignas y hasta pondría parte del financiamiento.

Esa circunstancia colmó la medida de Evelyn Matthei y confirmó todas sus sospechas sobre el carácter excluyente y egoísta de la alianza entre Piñera y los otros miembros de La Patrulla Juvenil.

La campaña interna fue una escalada continua desde entonces. Mientras Piñera invertía esfuerzo y dinero para hacerse del control territorial de RN, Evelyn Matthei alentaba y captaba todas las resistencias de un partido que consideraba al empresario un advenedizo en la derecha, un DC encubierto que se aprovechaba de la ausencia de liderazgos decididos.

Tampoco les faltaba alguna razón. A fines del 88, Piñera era tan cercano a la DC, que el entonces presidente de ese partido, Patricio Aylwin, lo invitó a una reunión en su casa donde su equipo prepararía su candidatura presidencial. Sólo dos de los hombres que habían trabajado para el Comando del No expresaron allí su convicción de que el candidato debía ser un hombre más joven, el empresario Eduardo Frei Ruiz-Tagle: Genaro Arriagada y Sebastián Piñera.

Arriagada soportó la derrota y el ostracismo interno en la DC.

Piñera, persuadido por Allamand, se embarcó en la volátil candidatura de Hernán Büchi, ministro de Hacienda de Pinochet[1]. Y a fin de año, Allamand lo impuso como candidato a senador por Santiago Oriente, aplastando las aspiraciones de figuras más inequívocas, como Gustavo Alessandri Valdés, Miguel Angel Poduje y Miguel Otero. Piñera gastó un millón de dólares, puso a dos gerentes de Bancard al frente de la administración de la campaña, recorrió las comunas con su hermano Miguel, el cantante, y se enfrentó al mismo Frei sin el menor complejo.

Ganó. Como ganó también su amiga Evelyn Matthei, en la diputación de Las Condes, contra todos los pronósticos y sobre todo contra uno de los más vehementes defensores de la "obra" del régimen militar, el ex editor de *El Mercurio* y ahora dirigente de la UDI Joaquín Lavín.

Pero la trayectoria de Piñera había dejado un reguero de heridos y una legión de insatisfechos. Por eso, cuando el tesorero de RN, Cristián Correa, propuso el nombre de Evelyn Matthei, las adhesiones comenzaron de inmediato. Para algunos, probablemente los más jóvenes, era una opción legítima y audaz. Eso se confirmó cuando hombres de la cúpula le advirtieron a la propia diputada que no permitirían que su precandidatura creciera demasiado, porque, aun en el caso de que perdiera, quedaría a las puertas de la presidencia de RN.

Para otros, en cambio, era un medio, el mejor posible, de detener a Piñera. Mucho tiempo después, según Allamand, el senador y ex general Bruno Siebert admitiría el propósito de dinamitar, a través de la diputada, la candidatura sospechosa del empresario.

Sin embargo, ella nunca llegó a sentirse usada: por mucho que se la tratara de encasillar, el alza de su popularidad demostraba que podía sobrepasar los circunscritos márgenes de los jefes de RN.

Como quiera que se lo viera, Allamand se convirtió en el hipocentro del enfrentamiento desbordado entre el senador y la diputada. Pese a propiciar desde el comienzo la candidatura de Piñera, pronto se vio atrapado por la taxativa exigencia de imparcialidad que le formulaba Evelyn Matthei.

—¿Por qué apoyas a Sebastián? ¿Por qué no a mí?

—Porque no creo que estés preparada...
—¿No? No sabes lo que valgo, nunca has sabido. Te lo voy a demostrar.
Esta celosa disputa es lo único que puede iluminar, con la tenue luz de una explicación sicológica —no política—, el clima de intensa emocionalidad que envolvió al proceso.

A comienzos del 92, Piñera ya sabía que estaba bajo el escrutinio de los sectores "duros" de la derecha. Ese verano tuvo ciertos indicios de que los teléfonos de sus oficinas de Bancard estaban intervenidos. Durante febrero y marzo notó, con más incomodidad que alarma, que ciertos vehículos lo acompañaban en sus trayectos o se repetían en las cercanías de su casa de los faldeos del cerro Calán[5].

Cuando la lucha por cooptar a las dirigencias regionales arreció, a partir de abril, a la vista que serían los delegados al Consejo General quienes decidirían sobre el candidato[6], empezó a advertir otras cosas. Por ejemplo, que ciertas conversaciones privadas eran rápidamente conocidas por sus adversarios.

El caso más memorable ocurrió en Curicó, territorio de Jarpa, donde Piñera logró captar el apoyo del dirigente Juan Carlos Bustamante. Al día siguiente de la reunión entre ambos en esa ciudad, Bustamante recibió un llamado de Jarpa, que ya parecía enterado de los detalles del encuentro.

Piñera no prestó mayor atención a esas señales, ni dio importancia al clima de creciente encono que adquiría la competencia con su amiga Evelyn Matthei. Ella, más sensible a ese ambiente, hizo algún intento por ponerle coto. Acompañada por Cristián Correa, le propuso a Allamand que instituyera una comisión de notables para regular la lucha interna. Dijo que probablemente Piñera ganaría, porque ya controlaba parte de la "máquina" del partido, pero que esa victoria sería más transparente si la avalaba una comisión especial. Nunca supo si Allamand llegó siquiera a plantear la idea a Piñera.

El caso es que el senador estaba en lo contrario. En esas semanas intensificó el ritmo de su campaña, asumió el 18% obtenido por RN en las municipales como un éxito personal y en julio amplificó una reunión privada sostenida con el general Augusto Pinochet para convertirla en un golpe publicitario[7].

Hasta que llegó el domingo 16, cuando viajó desde Talca a Santiago únicamente para asistir a un programa de TV.

Esa mañana, utilizando un *scanner* de banda de la sala de Control de Propias Tropas de su Compañía, el capitán de Ejército Fernando Diez "barrió" una conversación en la que el senador Piñera instaba a su amigo, el ejecutivo Pedro Pablo Díaz, a persuadir al periodista Jorge Andrés Richards, amigo de ambos, para que presionara a Evelyn Matthei en el foro televisivo *A eso de...* que tendría lugar ese día.

Diez grabó el diálogo y lo entregó al comando de Evelyn Matthei, quien lo hizo llegar al empresario Ricardo Claro, dueño de Megavisión e invitado al mismo foro donde asistiría Piñera el domingo siguiente.

Para entonces, Piñera estaba seguro de que ganaría en el Consejo General, si no en forma aplastante, al menos holgada. En la mañana del 23 creía haber obtenido los últimos votos importantes, los de Concepción, cuando se encontró con Evelyn Matthei en el aeropuerto local. Apenas cruzaron unos frígidos saludos, ambos con cierto aire de secreto triunfalismo. Piñera almorzó con sus amigos Carlos Alberto Délano y Andrés Navarro y durmió una siesta para relajarse antes del programa nocturno.

Fue un descanso inútil. Aquella noche, reproduciendo la cinta al aire, Ricardo Claro pulverizó en dos minutos 31 segundos su precandidatura presidencial, lanzó a RN a un proceso de autodestrucción del que no se recuperaría en todo el siguiente lustro y condenó a la derecha a un nuevo papel testimonial en las elecciones de 1993.

El programa *A eso de...* se disolvió penosamente en un par de actos. Uno de sus integrantes, el ex embajador en el Vaticano Héctor Riesle, modelo de un cierto integrismo católico, se vio

envuelto en un espeso manto de ilicitud ética cuando se descubrió que conocía la sorpresa de Claro con anticipación. El periodista Richards nunca logró explicar claramente sus conductas en las entrevistas sucesivas a Evelyn Matthei y su amigo Sebastián Piñera. Los otros participantes, el DC Tomás Jocelyn-Holt y el conductor Jaime Celedón, no borraron sus titubeantes respuestas ante la alevosía del dueño del canal. De la periodista Pilar Molina no se podría haber dicho nada: aquella noche infausta estaba en Sevilla. Ricardo Claro soportó con entereza los desaires de muchos enemigos acumulados a lo largo de su trayectoria empresarial, que hallaron la ocasión para tratar de demostrar que la pía medalla con que lo había condecorado la Santa Sede era cuando menos inoportuna[8].

Perdida atrozmente la primera partida, Piñera tomó con fiereza la decisión de ganar la segunda y se propuso demostrar que la inocencia del comando de Evelyn Matthei en el episodio no era más que un carnaval de mentiras, medias verdades y secretos quebradizos. En los dos meses siguientes, concentró fortuna, empresas, comando y contactos en esa tarea. Una pizarra instalada en su cuartel general de Bancard registró cada detalle extraño, cada declaración contradictoria, cada vacío imperceptible. Dos periodistas, una de radio *Cooperativa* y otra del diario *Las Ultimas Noticias*, fueron convertidas en canales para las filtraciones que irían acorralando poco a poco a Evelyn Matthei.

Acorralaban también a Allamand, ansioso por contener los efectos de una verdad excesivamente desagradable: pronto uno y otro llegarían a ocultarse partes de la información. Cuando Piñera detectó que Allamand intentaba obtener datos de su esposa, Cecilia Morel, cortó también la información en su casa.

La discrepancia entre ambos tenía que ver con el desenlace. Allamand comprendía, más emocional que políticamente, que la situación de la diputada era ya crítica. Piñera lo intuía, pero quería inferir un daño final, equivalente al que creía haber sufrido.

En el tortuoso laberinto de la investigación, Evelyn Matthei contempló el progresivo alejamiento de sus seguidores —empezando por su asesora Lily Pérez—, mientras numerosas figuras eminentes del partido eran manchadas por el escándalo. El proceso de revelación del secreto ha sido narrado en otras partes; sus detalles forman un penoso fresco de deslealtades, violencias morales y jugadas dobles que hundió por un lapso desconocido las aspiraciones de RN[9].

A comienzos de octubre de 1992, Piñera averigua que en el país existen tres equipos capaces de interceptar celulares en gran escala. Uno está en poder de Investigaciones, otro es de la Embajada de EE.UU. y un tercero es del Comando de Telecomunicaciones del Ejército. Por descarte se concentra en este último. Y averigua hechos esenciales: por ejemplo, los nombres de los capitanes que se turnan en el mando de los *scanners* del Regimiento Soberanía, especialista en estas tareas. No dice todo lo que sabe; sólo insinúa, revela fragmentos, infiltra.

Pero causa efectos devastadores.

—No tiene cómo saber —le dice, tranquilizador, Francisco Ignacio Ossa a Evelyn Matthei.

—No lo conocen —responde ella—. No parará.

Tiene razón. Mientras siente que se acerca al centro de la conspiración, Piñera intensifica la presión con métodos infernales; por ejemplo, breves llamados, sin identificarse, a la propia diputada y sus seguidores:

—¿Qué te parece el capitán Diez?

Entre el 7 y el 17 de octubre de 1992, Evelyn Matthei decide confesar su participación a cuatro dirigentes claves, con el iluso fin de detener la escalada: Sergio Onofre Jarpa, Roberto Palumbo, Ricardo Rivadeneira y Andrés Allamand. Otros la conocían de antes: Miguel Otero, como presidente subrogante de RN, al día siguiente del programa de Megavisión; y Juan Luis Ossa, hermano del otro principal involucrado, una semana después.

En los primeros días de noviembre, Allamand recibe la cuarta de una serie de llamadas anónimas que a veces le proporcionan información militar y a veces le anticipan lo que va a ocurrir. La de esta ocasión es imperiosa:

—Usted cree que está ayudando a su partido al no decir lo que sabe. Se equivoca, don Andrés. Si no nos ayuda, va a ser peor.

—Busquen —dice Allamand, oprimido por el secreto— en Peñalolén.

El rumor de la participación militar ya atraviesa todo RN. Así se lo informa el conflictuado presidente del partido al mayor general Ballerino, que traspasa el dato a Pinochet. Este convoca a una reunión de urgencia en su despacho a los generales Lúcar, Sánchez Casillas, Ballerino y Torres Silva, y ordena que Ballerino se haga cargo de una investigación interna.

Centro de las sospechas es el Comando de Telecomunicaciones, donde se producen las escuchas telefónicas que todos los días parten al E-2 de la Segunda División y, con el formato de informes, cada semana a la DINE y a otros organismos. Por ejemplo, al Comité Asesor.

A decir verdad, los hombres del Comando no son un dechado de prudencia y el orgullo profesional los ha llevado a cometer imprudencias casi escolares. Poco más de tres años antes, una vendedora de CTC les fue a ofrecer celulares garantizando su alta seguridad. Con sorna, los oficiales la invitaron unos días más tarde a la base de Peñalolén para hacerla oír una conversación interceptada de su propio celular.

La investigación se inicia el 4 de noviembre y la encabeza el coronel (OA) Gonzalo Jara, con una orden escrita del Comando de Institutos Militares, a cargo del brigadier general Jaime Concha, que es el conducto pertinente.

Ballerino se asegura de llamar esa mañana al brigadier general Ricardo Contreras, jefe del Comando de Telecomunicaciones, para decirle que su unidad está bajo investigación.

Contreras ordena que se haga firmar a los oficiales una declaración jurada negando su participación. Todos suscriben. Los del Regimiento Soberanía lo hacen recién el viernes 6. Pero un día antes, el jueves 5, Ballerino informa al mando que no hay oficiales envueltos. Esa desprolijidad le costará luego las peores sospechas.

Hasta la noche del domingo 8 de noviembre de 1992, el capitán Diez debe preguntarse por qué todo el mundo se ha concentrado en él. No es un aficionado. Durante el régimen militar, era el hombre encargado de instalar la telefonía del general Pinochet en el lugar donde estuviera y ahora mismo, en estos días, está a cargo de la misión de rastrear el espectro electromagnético del Cajón del Maipo, donde el general sufrió el atentado de 1986. Como ex agente de la CNI y luego de la DINE, sabe que no hay delación sin delator, ni delator sin jefe. ¿Quién ha organizado esta trampa?

Diez desconoce lo que ha pasado 48 horas antes, cuando el presidente de RN, Andrés Allamand, llamó al mayor general Jorge Ballerino y le pidió que fuera, con urgencia, a la casa de Ricardo Rivadeneira.

Cuando Ballerino llegó, el archidemandado Allamand se iba a alguna condenada reunión en otro sitio. En rigor, no necesitaba estar: la peor de las verdades que hubiese querido oír le había sido revelada en la más dolorosa intimidad.

El jueves anterior, en casa de Roberto Palumbo, la directiva y los bandos en pugna habían intentado concordar una versión que salvara al partido. La porfía de Piñera en el desenmascaramiento completo de su adversaria la había hecho inviable. El viernes, Evelyn Matthei había declarado ante el ministro en visita Alberto Chaigneau, omitiendo la participación del capitán Diez. Y el sábado 6, la diputada admitió en una declaración pública su conocimiento previo de la cinta de Piñera.

Al mediodía, enterada de que Piñera insistía en que la verdad era otra, lloró de angustia frente a Allamand y Rivadeneira, en la casa de este último. Allí les propuso buscar un camino de salida.

Estaba desesperada. Quería hablar con el general Pinochet, pero cuando consiguió que el almirante Merino le diera su teléfono, se halló con que el general andaba en Punta Arenas. Al segundo intento de Allamand, la telefonista de turno de la Central de Telecomunicaciones del Ejército le dijo que, por instrucciones del general, Ballerino podría atenderlos.

Esa tarde, tras exigir garantías que nadie pudo darle, Evelyn Matthei entregó a Ballerino, a solas y por primera vez, el nombre del capitán Diez, fingiendo cierta incerteza.

El mayor general llamó de inmediato al vicecomandante Jorge Lúcar y le dio las negras nuevas. En la noche comenzaron los interrogatorios a Diez.

La negativa adquirió tal tenacidad, que a las 14.30 del domingo 8, el brigadier general Contreras llamó a Ballerino y le propuso llevar a la diputada las fotos de los oficiales del Comando para que reconociera al culpable. La diputada aceptó, pero después quiso obtener nuevas garantías y hasta trató de impulsar una negociación con el gobierno, que su principal promotor, el senador Sergio Onofre Jarpa, desechó por teléfono. Jarpa estaba tomando distancia.

Cuando intentó que la gestión la realizara su padre, el general (R) Fernando Matthei, éste le reveló una sorpresa: esa misma tarde, el ministro Rojas lo había invitado a su casa para contarle que ya conocía el nombre del capitán Diez, y que lo revelaría en las próximas horas.

Puesta ante tamaña derrota, la diputada cedió, aunque nunca del todo: propuso que el otro principal comprometido en la recepción de la cinta, Francisco Ignacio Ossa, identificara en las fotos al capitán.

Ballerino, en un agotador papel de correveidile, le contó en seguida al teniente general Lúcar, que permanecía en su casa reunido con ocho generales. De allí salió la autorización para que Evelyn Matthei y Ossa fueran al Comando de Telecomunicaciones a persuadir a Diez de que ya todo estaba perdido.

De modo que para el lunes 9, Diez se sabe envuelto en una trama que lo supera. Cuando el brigadier general Krumm le dice que el detector ha indicado que miente, habla con el mayor Jorge de Ossó, segundo comandante del Regimiento Soberanía, y le anuncia que confesará ante Krumm. Advierte que se aproxima el fin de su carrera militar.

Pero el proceso ya se ha convertido en un intríngulis de indagaciones incompletas. Aunque fue iniciado cinco días después del programa *A eso de...*, el 28 de agosto, por una denuncia del subsecretario de Telecomunicaciones Roberto Pliscoff, el ministro en visita designado por la Corte, Alberto Chaigneau, sólo logra avanzar a tropezones[10].

Los vacíos se multiplican. Cuando el mayor De Ossó no responde a la pregunta de si la DINE ha solicitado alguna vez grabar a dirigentes políticos, nadie insiste. Ni se investiga el caso de la vendedora de la empresa telefónica a la que se le grabaron conversaciones personales en Peñalolén.

Tampoco hay quien averigüe por qué el BIE manipuló las primeras respuestas de Diez, y si lo hizo también con otros oficiales. Aunque Diez declara a lo menos dos veces que Francisco Ignacio Ossa le pidió más grabaciones de dirigentes de RN para forzarlos a negociar, no se logra saber si alguno de los involucrados logró obtener, por ese u otros medios, otras cintas[11]. Tampoco se esclarece si, como dice Ossa, el capitán lo amenazó para que su nombre no fuese revelado.

Personas que aseguraban saber que la grabación no fue entregada a Evelyn Matthei el 23 de agosto, sino el 16 (cuando ella fue la entrevistada en *A eso de...*) se retractan ante el juez. El mayor general Ballerino declara por oficio sobre su participación el 7 y 8 de noviembre, pero nada dice de su investigación previa, que llegó al punto de descartar la participación militar.

El vicecomandante Lúcar no declara nunca. Tampoco se obtienen los informes por escrito sobre intercepciones de celulares que la Cuarta Compañía de Guerra Electrónica entregaba a la DINE, aunque fuesen las incluidas en el concepto de "propias tropas".

Cuando se le hace notar a Diez, en un interrogatorio, que su versión de los hechos no parece lógica, el expediente consigna, sin nueva insistencia, la siguiente perla: "Así fueron los hechos. No cuadran, pero así fueron los hechos".

Finalmente, el 16 de diciembre Chaigneau encarga reo a Diez por infracción a la ley de Telecomunicaciones y propone el desafuero de la diputada para procesarla como encubridora. Pero en el mismo acto se declara incompetente y el caso pasa a manos del fiscal militar Sergio

Cea. Entre las primeras decisiones del fiscal viene la revocación de la encargatoria de reo para Diez, puesto que el delito no estaría tipificado.

Dos sentencias emergerán de la tramitación siguiente.

En la primera, Diez será acusado de incumplimiento de órdenes superiores e incumplimiento de deberes militares[12]. Tales órdenes serían las de no interceptar comunicaciones civiles.

Pero el sagaz abogado del capitán, Marcelo Cibié, descubre que ellas fueron redactadas *después* del incidente, tras un estudio del teniente Gustav Layerholz, y mañosamente intercaladas en los instructivos del Regimiento Soberanía con fechas anteriores y firmas falsificadas.

Entonces hay una segunda sentencia, en la que se sobresee a Diez del incumplimiento de órdenes, pero se lo condena por el delito más genérico de incumplimiento de deberes militares, a cien días de arresto[13].

Para esa fecha, Diez lleva 141 días de arresto, por lo que la pena se da por cumplida.

¿Por qué tantos vacíos en la investigación judicial? En parte, porque la verdadera lucha no se libra en los juzgados, sino en otras oficinas: las de la Vicecomandancia y las del Comité Asesor.

Se trata de una guerra silenciosa, que no tiene fecha de inicio pero que se arrastra por lo menos durante dos años; o más, según el punto de vista de los protagonistas.

El general Jorge Lúcar asumió la Vicecomandancia en octubre de 1989, el último año del gobierno militar. No fue un nombramiento apacible. Esa vez, el general Pinochet entró al privado contiguo al salón José Joaquín Prieto, en el *bunker* de La Moneda, e hizo llamar al teniente general Jorge Zincke, entonces vicecomandante.

Aunque se rumoreaba que Zincke saldría, los generales reunidos contemplaron con cierto escalofrío la palidez del alto oficial al salir. Hubo quienes se apresuraron a felicitar a su seguro sucesor, el mayor general Jaime González Vergara. Pero cuando volvió a asomarse, el ayudante de Pinochet, Ramón Bascur, no mencionó su nombre, ni el de los seis mayores generales que le seguían, sino uno inesperado:

—Mi mayor general Lúcar. Por favor, adelante...

El estupor inundó la sala. Lúcar quedó investido de las poderosas facultades de la Vicecomandancia en un ambiente polémico.

Pronto comenzaron los rumores: un vicecomandante de transición, seguro que no durará más de un año, mi general prepara otro cambio grande.

No era la única circunstancia que hacía difícil el puesto de Lúcar. Tendría que ser el segundo de un general que estaba dejando el poder político. Y para él, que nunca estuvo en cargos políticos, esto significaba mantener el mando en un plano estrictamente militar y procurar que el general se inclinase en esa dirección.

Quienes notaron ese esfuerzo fueron el ministro Patricio Rojas y el subsecretario Marcos Sánchez. Lúcar llegó a ser el único oficial de la cúpula militar con quien las autoridades civiles de Defensa podían sostener una interlocución pacífica.

Hasta que el 20 de noviembre de 1990, cuando amainaron las últimas sacudidas de los ascensos de ese año, Sánchez obtuvo un indicio elocuente de la difícil posición que comenzaba a vivir el vicecomandante.

—Don Marcos —le dijo Lúcar, camino del ascensor—, ¿por casualidad habrá visto algún decreto sobre la Vicecomandancia?

—No —dijo Sánchez, seguro—. ¿Tendría que haber recibido alguno?

—No sé. Tal vez sí.

Cuando Sánchez regresó a su oficina, se precipitó sobre los papeles que ese día le habían llegado desde la Comandancia en Jefe. Y halló una sorpresa: un decreto que modificaba la orgánica de la Vicecomandancia, quitándole algunas de sus prerrogativas principales.

Una vez que Rojas se enteró, ordenó retener el decreto. El general Pinochet insistió varias veces, pero se halló con amables evasivas. Hasta que, el 8 de abril de 1991, Rojas le envió

un oficio comunicándole que la orgánica de la Vicecomandancia definitivamente no sería modificada.

¿Pudo alegrarse Lúcar? Ni tanto: por las órdenes de comando internas, el general Pinochet lo relevó del mando de todas las unidades operativas y sacó de su responsabilidad las dos direcciones claves: Inteligencia y Finanzas. Lo dejó con la menor, Logística, los seis comandos[14] y algunas otras dependencias.

En rigor, no se trataba de una ofensiva personal. Pinochet estaba volviendo al mando militar y necesitaba retomar el control directo. Con el tiempo, iría restituyendo algunas de las facultades —nunca todas— a la menguada Vicecomandancia.

En cambio, el Comité Asesor vive sus momentos de auge. Como la "línea de retaguardia" del comandante en jefe, el mayor general Jorge Ballerino goza de una influencia inigualada y su acceso de privilegio a Pinochet es bien conocido en las filas.

Hace ya tiempo que se rumorea que podría ser el sucesor de Pinochet. Y ahora quizás esté en la posición óptima para acercarse a la cima: el Comité Asesor es un organismo que va por fuera de los escalones tradicionales. Si el general quisiera hacer un cambio brusco e inesperado, podría llevarlo a la Vicecomandancia.

Quienes así opinan desconocen lo que en verdad piensa La Moneda. En noviembre de 1992, el general Pinochet ha invitado a tomar té en sus oficinas al ministro Enrique Correa y, a solas, le ha hecho una revelación:

—El próximo año voy a poner a Ballerino de vicecomandante.

—Usted comprenderá que voy a informar de esto al Presidente, general. Si el ministro habla con el comandante en jefe y no le cuenta al Presidente, es conspiración...

—Infórmele, no más.

Correa ha llevado la noticia a Aylwin y ha oído una especie de sentencia:

—No, yo no voy a permitir que Ballerino sea vicecomandante.

Pero eso no lo sabe el alto mando, y el recelo por los cargos está también en el trasfondo de la relación distante que mantiene el jefe del Comité Asesor con el vicecomandante Lúcar. Después de todo, Lúcar no puede dejar de sospechar que en el recorte de sus atribuciones Pinochet ha actuado bajo la influencia de algún oficial cercano.

La distancia entre los dos generales es de antiguo —han seguido carreras casi divergentes—, pero desde fines del 90 no ha hecho más que acentuarse y hasta alcanza bordes cómicos: por ejemplo, en la única vez que Ballerino visita la casa de Lúcar antes del incidente del espionaje, para una cena social, el perro maltés del vicecomandante se muestra apacible con todos los invitados, pero estalla en ladridos cuando entra Ballerino. Fuera del campo doméstico, sólo muy rara vez los dos generales pueden estar de acuerdo en sus opiniones. Sus estilos se repelen radicalmente.

La posición de Ballerino parece consistente ante el gobierno, desde que ha desarrollado un estrecho vínculo con el ministro Correa. Tanto, que por esos mismos días, tres adolescentes pinochetistas apedrearon el auto de Ballerino, en su propia casa, creyendo que allí vivía Correa[15]. En contrapartida, su debilidad es la mala relación que sostiene con el ministro de Defensa, que tras el "ejercicio de enlace" se niega siquiera a atenderlo.

Para Lúcar es a la inversa: su desconfianza hacia el florentino Correa sólo es comparable con el aprecio que desarrolla por el áspero Rojas.

Y ahora, ante el escándalo que ha estallado con el Comando de Telecomunicaciones, es Rojas quien lanza el primer mandoble contra Ballerino: 48 horas después de la confesión de Diez, el 11 de noviembre de 1992, envía un oficio a Pinochet pidiéndole que informe de los contactos de Ballerino con dirigentes de RN "o de otros partidos políticos", las fechas y la eventual utilización de instalaciones militares para esas reuniones. Agrega un reclamo por el hecho de que Andrés Allamand ha mostrado tener la información antes que el Ejército pusiera al tanto al ministro.

El segundo llega, públicamente, del teniente general Lúcar. Cuando la prensa lo interroga acerca del papel de Ballerino en el descubrimiento del capitán Diez, el vicecomandante declara que "él no ha descubierto nada" y que en el Ejército "no existen protagonismos personales".

Ballerino protesta ante el general Pinochet por la alusión: después de todo, dice, mis gestiones eran para informarle, nunca dejó de saber cada paso. Y agrega una nota escoriante: sería mejor que se preguntara cómo supo el ministro de Defensa el nombre del capitán Diez al día siguiente de que él se lo informara al vicecomandante...

Por lo demás, añade Ballerino, el Comando de Telecomunicaciones depende de la Vicecomandancia.

Mientras la confrontación escala, Lúcar se convence de que enfrenta una ofensiva. En los primeros días de noviembre, *La Segunda* publica la información de que el Comando de Telecomunicaciones depende del vicecomandante y los comentarios sobre la "responsabilidad del mando" comienzan a sucederse. Casi no hay duda: alguien busca derribarlo usando este episodio.

Además, desde que perdió el control de la DINE, Lúcar sospecha que ella está siendo utilizada en su contra. Durante todo el año ha pensado que lo tienen bajo vigilancia y que sus teléfonos están intervenidos.

Algunos de los informes de la DINE no llegan a su escritorio; de eso está seguro. Y le han dicho que, en el caso de la intercepción a Piñera, hubo un reporte escrito, como corresponde al informe que semanalmente entrega la Cuarta Compañía de Guerra Electrónica a la DINE, y que ésta reparte a los órganos pertinentes. Uno de esos órganos habría sido el Comité Asesor.

Por añadidura, Lúcar recuerda que antes de que se conociera el nombre del capitán Diez, preguntó al director de la DINE, el brigadier general Eugenio Covarrubias, si alguien del Ejército podía estar involucrado.

—No, mi general —dijo Covarrubias, con todo aplomo—. No hay nada de eso.

Es la segunda vez que Covarrubias le ha negado un hecho grave: Lúcar no olvida que también lo dejó en mal pie con los planes *Halcón*.

En medio de la tormenta, Pinochet ordena abrir una investigación y designa para ello al brigadier Jaime Izarnótegui. Pero este hombre es el secretario de la Vicecomandancia, y la ayuda que le presta el auditor general Fernando Torres Silva inquieta al Comité Asesor, que ha sido su oponente constante en estos años.

Entonces es Ballerino quien vuelve a intervenir: con esto se abre el riesgo de una indagación manipulada; además, por su rango Izarnótegui no tendrá acceso a los superiores que aparecen vinculados al caso. Pinochet decide relevarlo y encarga la tarea al inspector general, el mayor general Guillermo Garín. La tortilla se vuelca: Garín es, como todo el mundo sabe, amigo de infancia de Ballerino.

Pero lo que hace estallar la tensión no es esta solapada lucha por controlar la investigación interna, sino una información que tiene el auditor Torres Silva. En uno de sus numerosos interrogatorios al capitán Diez, Torres Silva ha descubierto que un oficial de la DINE instruyó al asediado capitán para que declarase que, en fechas cercanas a la intercepción, el teniente general Lúcar estuvo repetidas veces en el Regimiento Soberanía. Ya no se trata sólo de que Telecomunicaciones pudo ser utilizada a espaldas de Lúcar, que es su superior, sino que además se intenta involucrarlo directamente en la operación.

Impactado por la maniobra, Torres Silva pide a Diez que ponga este testimonio por escrito y se lo entrega al vicecomandante.

Días después, Pinochet convoca a una reunión para evaluar el caso. Asisten Lúcar, Torres Silva, Ballerino, Sánchez Casillas, Covarrubias y Contreras.

El encuentro va subiendo de tono con las recriminaciones mutuas. Lúcar presiona a Covarrubias: la DINE, dice, ha ocultado información, sabe más de lo que dice y está haciendo su propio juego.

—Aquí parece que hay una confabulación, toda una operación montada...

—Mi general —interrumpe Covarrubias—, no creerá que la DINE...

—No he dicho nada, Covarrubias. Pero ahora usted ha mostrado la herida.

Covarrubias intenta responder cuando Lúcar le pide a Torres Silva que muestre el papel suscrito por Diez, que habla de las visitas supuestas del teniente general.

—Eso es una mentira —corta Pinochet—. Aquí no se puede querer involucrar al vicecomandante en jefe...

Tras ese expreso respaldo a Lúcar, Pinochet cancela la reunión.

A la salida, Lúcar increpa todavía al brigadier general Contreras: no puede ser que no supiera nada. Asediado, Contreras admite que había un enlace permanente con el Comité Asesor.

Ahora la guerra es irreversible. Durará todavía todo un año más.

Garín dirige, no un sumario como ha pedido el gobierno, sino un "informe de seguridad": un procedimiento, principalmente verbal, orientado a detectar las vulnerabilidades militares y proponer sanciones para quienes las produzcan o permitan. Según las normas, tales informes deben ser incinerados cinco meses después de producidos, dado que por doctrina la electrónica es una de las dos únicas guerras (junto con inteligencia) que se libran permanentemente.

En este caso, los documentos son quemados poco después de que el memorando de síntesis llega al general Pinochet, el 15 de diciembre de 1992.

Y el memorando afirma que el capitán Diez actuó solo y que "no es posible determinar el móvil" por el cual lo hizo. Garín estima que el teniente coronel Enrique Seymour, comandante del Regimiento Soberanía no se dedicaba a la parte técnica de su unidad y delegó una parte excesiva de sus funciones; quien atendía el cuidado de los equipos era el segundo comandante, el mayor De Ossó. Pero ambos habrían ignorado la actuación de Diez.

En el punto 7 agrega algo inexacto, según denunciará dos meses después el abogado Cibié: que "se comprobó que existen todas las disposiciones doctrinarias y reglamentarias internas (...) destinadas a impedir la fuga de información".

En seguida propone, además de aceptar la renuncia del brigadier general Contreras, trasladar a Seymour de Santiago, con anotación en la hoja de vida, y sacar de Peñalolén al mayor De Ossó y a los mayores Juan Francisco Urzúa, Vladimir Schramm y Juan Alberto Coloma. No precisa las funciones de estos últimos.

Tras leer la comunicación de Pinochet en que le informa de estos resultados, el Presidente Aylwin le pide que haga llegar todos los antecedentes al ministro de Defensa. El 29 de diciembre, Pinochet responde que los documentos fueron incinerados[16].

El gobierno, que percibe la disputa subterránea entre los generales, se divide ante la respuesta.

Rojas, defendiendo la existencia de una "línea profesional" en el Ejército encabezada por Lúcar, sostiene que ella debe ser protegida contra la embestida de la "línea política" que encarna Ballerino. Correa se juega por Ballerino, rechazando las "líneas" que describe el ministro de Defensa: ambos generales, dice, son igualmente leales a Pinochet, pero con Ballerino uno sabe a qué atenerse, sus cartas son abiertas; en cambio, con Lúcar...

El Presidente atiende a ambas posiciones. En lo personal, se inclinaría por la de Rojas, pero los argumentos de Correa son poderosos. En esa disyuntiva se inmoviliza el Ejecutivo, aunque el enfrentamiento en el gabinete emerge a borbotones hacia la opinión pública. Cuando los dirigentes de RN dicen que Rojas les habló de la incineración de la investigación, Correa declara que se trata de "presunciones".

En el verano del 93 comienzan las resoluciones.

El capitán Diez perderá su empleo, pero quedará libre de sanciones penales. La Corte de Apelaciones rechaza la petición de desafuero contra la diputada Matthei, con lo cual no puede ser procesada. El Tribunal Supremo de RN dictamina la inhabilidad y suspensión de derechos por diez años para ella, por tres años para sus colaboradores Cristián Correa y Francisco

Ignacio Ossa, por dos años para el senador Miguel Otero y por un año, con censura por escrito, para Piñera.

Desalentada por la disparidad de los castigos, Evelyn Matthei presentará su renuncia a RN en marzo, cuando hayan pasado todos los eventos partidarios[17].

Pero Piñera no ceja. Semana tras semana insiste en que la verdad aún no se conoce. Y cuando deja de hacerlo, más por soledad que por cansancio, hay quienes se lo reprochan. Por ejemplo, Mariana Aylwin:

—¿Y qué te pasó Sebastián, que no seguiste?

—Pregúntale a tu papá.

Intrigado por esa alusión críptica, el Presidente invita a Piñera a una reunión en su casa, el jueves 20 de mayo de 1993. El senador repite allí, con detalle, sus razones para creer que una vasta conspiración, ya no contra él, sino contra todo el sistema político, circunda al caso de espionaje que lo ha afectado.

—Y hay más cintas, Presidente. Eso es seguro. Esto no fue accidente, sino parte de una rutina.

El Presidente toma nota, pero no adelanta nada. El fin de semana siguiente deberá viajar a Europa.

Unos días después, Piñera recibe una llamada, cerca de las 17 horas, en su celular:

—Mire, señor Piñera —dice una voz adulta—, mejor que termine con estas cosas, porque si no, va a tener consecuencias familiares...

—¿A qué se refiere? —pregunta Piñera, y oye que el teléfono cambia de manos. La voz de su hijo Juan Cristóbal se escucha en el audífono.

—Papá, unos tíos me vinieron a buscar al colegio y quieren que hable contigo.

—Juan Cristóbal, dónde... —alcanza a musitar Piñera.

—No se preocupe —interrumpe la voz adulta—, su hijo va a llegar a la casa, pero es mejor que sepa que estas situaciones pueden pasar.

Piñera vuela de regreso a su casa, donde su esposa, Cecilia Morel, ya está intrigada por la demora de Juan Cristóbal. La angustia termina a las 20 horas, ya de noche, cuando el niño toca el timbre. Los "tíos", amables, lo han dejado a unas cinco cuadras.

Pero no es ese secuestro incompleto, esa amenaza ejecutada a medias, lo que detiene a Piñera, sino la constatación de que está solo.

No lo ayudarán el gobierno, ni sus camaradas ni sus amigos ni nadie. Tampoco sacudirá al mundo del poder.

Sobre ese mundo, a fines de mayo, ha caído un pesado boinazo.

Notas

1. Causa Nº 684-92, Segunda Fiscalía Militar, contra Fernando Andrés Diez Vidal, por infracción al artículo 299, Nº 3, y otros, del Código de Justicia Militar.

2. Causa Nº 684-92, Segunda Fiscalía Militar. Declaración del capitán Fernando Diez, 18 de noviembre de 1992.

3. En ese momento, podía identificarse como "hombres de Allamand" sólo a Alberto Espina, Carlos Reymond y Cristián Correa. Los demás eran Miguel Otero (primer vicepresidente), Gonzalo Eguiguren, Félix Viveros, Enrique Larre y Marina Prochelle.

4. Cavallo, Ascanio: *Los hombres de la transición*, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1992.

5. En septiembre de 1992, Piñera contrató a una firma norteamericana para revisar sus instalaciones telefónicas, privadas y de negocios. El informe reveló que todas habían sufrido algún tipo de intervención.

6. La decisión sobre este punto marcó el primer enfrentamiento entre Piñera y Matthei. Mientras aquél propuso una votación directa de las bases, ésta impulsó la decisión del Consejo. El triunfo de la diputada fue también la primera señal para Piñera de que la competencia sería áspera.

7. Ver capítulo 16.

8. Los descargos de los participantes pueden hallarse en un documento grabado para venta en quioscos: *Reportaje a la verdad. Edición especial de "A eso de..."*. Video de Axion Limitada, 95'49", noviembre de 1992.

9. Estos pormenores pueden encontrarse en dos libros que, con similar estructura, registraron la evolución del caso prácticamente día por día: Bofill, Cristián: *Los muchachos impacientes*. Editorial Copesa. Santiago, diciembre de 1992. Y: García de la Huerta, Carolina; y Piriz, Francisco Javier: *Piñera versus Matthei*. Edición de los autores. Santiago, enero de 1993.

10. Proceso N° 139.683-7.

11. Andrés Allamand dijo haber conocido evidencias inequívocas de la existencia de otras cintas relacionadas con toda la dirigencia de RN. Tales certezas nunca se incorporaron al proceso judicial.

12. Este dictamen, del 22 de abril de 1993, lleva las firmas del juez militar, brigadier general Hernán Ramírez Rurange, y el coronel (J) Samuel Correa Meléndez. No es inútil recordar que, hasta fines del 91, el brigadier general Ramírez había sido el jefe de la DINE.

13. Dictamen del 13 de julio de 1993, firmado por el brigadier general Ramírez y el teniente coronel (J) Juan Carlos Manns Giglio.

14. Los comandos son: Apoyo Administrativo, Apoyo Logístico, Ingenieros, Industria Militar e Ingeniería, Institutos Militares y Telecomunicaciones.

15. En este incidente, ocurrido en la madrugada del 17 de diciembre, Paul Seaquist Caroca, de 17 años, fue herido en un brazo por la guardia de Ballerino. Sus compañeros David Liedderman (19) y James Vincent (18), todos estudiantes de la Lincoln International Academy, lograron huir indemnes. *Los desenfrenados*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.133, 26 de diciembre de 1992.

16. Ejército de Chile: CJE SGE (R) 6415-80, 29 de diciembre de 1992.

17. Como candidata independiente en la lista de la UDI, Evelyn Matthei demostrará su potencia electoral en dos triunfos más: en 1993, diputada por San Antonio, donde la derecha carecía de representación; y en 1997, senadora por la Cuarta Región, con la segunda mayoría.

18

Nuestro hombre en Compañía

Nadie podía imaginar, a fines de 1992, que una acusación contra cuatro miembros de la Corte Suprema podía prosperar entre la mayoría de derecha del Senado. La Corte era, después de todo, un baluarte del régimen anterior, y Hernán Cereceda, su emblema...

El 15 de diciembre de 1992, el auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, redacta un breve dictamen, de carilla y media, a nombre de la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuya esencia se reduce a tres palabras: "No ha lugar".

Lo ha hecho decenas de veces, como fiscal, auditor general o integrante de la Suprema. Pero este es un día especial: en las mismas horas, diez diputados de la Concertación presentan la primera acusación constitucional contra miembros del Poder Judicial en la democracia restaurada. Y Torres es uno de los cuatro imputados por "notable abandono de deberes".

La coincidencia de fechas es demasiado exacta para resultar inocente. Con todo, el tropiezo decisivo no será esta rareza, sino una triquiñuela de otro de los acusados, presidente de la Tercera Sala y buen amigo de Torres, el ministro Hernán Cereceda, que organizará su defensa afirmando que el sintético dictamen fue redactado un mes antes, el 15 de noviembre.

Esta mentira, según algunos, y error tipográfico, según su abogado, centra el libelo en el ministro Cereceda.

Otros hechos lo configuran como el blanco predilecto; pero este será el pretexto que permitirá a los acusadores, en los laberínticos cálculos del siguiente mes, diferenciarlo de los otros jueces acusados, Lionel Béraud, Germán Valenzuela y el auditor Torres.

La acusación se inicia, en verdad, a bastante distancia de ese dictamen. El origen es la indignada reacción de la Concertación ante el traspaso a la justicia militar del proceso por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau, una operación jurídica cuya desprolijidad sólo puede explicarse por la prisa del auditor Torres para sacar el caso de la vista pública.

Chanfreau, estudiante de Filosofía y militante del MIR, fue sacado de su casa el 30 de julio de 1974 y llevado a la calle Londres 38, el recinto de tránsito de la DINA. El 13 de agosto de ese año fue la última vez que lo vio su esposa, Erika Hennings, también detenida.

El proceso fue sobreseído varias veces. Pero en junio de 1990, con el regreso de algunos ex detenidos y la identificación de los oficiales de la DINA que participaron en su secuestro y retención[1], la Corte de Apelaciones nombró ministra en visita a la magistrada Gloria Olivares.

Contra todo lo esperado, el proceso comenzó a moverse. Un dato antiguo de Investigaciones reflotó: Osvaldo Romo, *El Guatón*, pieza civil clave en las operaciones de la DINA, vivía desde 1980 en la localidad de Mogi Guazú, cerca de Sao Paulo.

La ministra Olivares dictó una orden de detención contra Romo. La policía brasileña lo arrestó el 29 de julio, bajo cargos de residencia ilegal. El 10 de agosto, el Presidente Aylwin envió una carta al Presidente Fernando Collor de Melo pidiendo la expulsión de Romo.

Apenas 48 horas después, el comandante de la II División de Ejército, el brigadier general Hernán Ramírez, actuando como juez militar de Santiago, pidió el traspaso del caso Chanfreau a la justicia militar.

La carrera contra el tiempo se había iniciado.

En septiembre del 92, la ministra Olivares citó, interrogó y careó a algunos oficiales de la DINA. Varias veces reiteró, sin éxito, órdenes para que se presentara el coronel Miguel Krasnoff, ex jefe de la agrupación Halcón 1 de la DINA, encargada de la represión del MIR, y ahora jefe del estado mayor de la IV División, en Valdivia. Cuando el oficial estaba al borde del desacato, el ministro Rojas intervino con un oficio para exigir al Ejército que Krasnoff se presentara ante los tribunales.

Para septiembre, la molestia de los mandos militares era más que notoria, como lo hizo saber el general Pinochet al ministro de Defensa[2].

Entonces, la Segunda Sala paralizó a la ministra Olivares mediante una orden de no innovar dictada en nombre de la contienda de competencia iniciada por la justicia militar.

Con todo, para fines de mes, la expulsión de Romo era cosa de horas. Pero el 30, el Presidente Collor de Melo fue suspendido con una acusación constitucional por corrupción. La incertidumbre volvió a extenderse, aunque sólo alcanzó a durar unos días. En el nuevo gabinete brasileño fue designado canciller Fernando Henrique Cardoso, un antiguo militante izquierdista que había vivido su exilio en Chile a comienzos de los 70.

Romo luchó denodadamente contra su expulsión durante octubre. El 24, ya rendido, comenzaron los preparativos para su traslado a Santiago.

En los seis días siguientes, la contienda de competencia del caso Chanfreau adquirió un ritmo frenético. Asegurada su vista por la Tercera Sala, fue fallada el 30: Béraud, Cereceda, Valenzuela y Torres Silva votaron por el traspaso a la Sexta Fiscalía Militar; los ministros Mario Garrido y Oscar Carrasco, ambos nombrados durante el gobierno de Aylwin, discreparon de la mayoría.

Para fundar su sentencia, los tres ministros y el auditor general debieron sostener una argumentación especiosa. Por ejemplo: ignorar que aún no existía personal militar imputado; eludir el hecho de que las autoridades militares insistían en no tener antecedentes; y considerar los recintos de la DINA como unidades militares, en contradicción con la política sostenida por los mandos del Ejército durante años.

Pero el segundo argumento, el de fondo, era aún más polémico: la afirmación de que hubo un "estado de guerra" en 1973, con arreglo a un decreto interpretativo dictado un día después del golpe militar[3]. Sin embargo, los mismos ministros, integrando el pleno de la Corte Suprema, habían dictaminado dos años antes que tal guerra no existió.

El motivo fue un recurso presentado por el abogado Alfonso Insunza en agosto de 1990, destinado a evitar la aplicación de la ley de amnistía en 70 casos de detenidos desaparecidos[4]. Insunza aspiraba a que la declaración de guerra hiciera posible aplicar la reforma introducida en 1989 al artículo 5º de la Constitución, sentando la primacía de los tratados internacionales, en virtud de los cuales estos delitos serían inamnistiables.

Y ahora, los tres magistrados civiles que votaron en ese pleno declaran que, dado el estado de guerra imperante en 1974, un caso como el de Chanfreau es de competencia de los tribunales militares. Los jueces desestiman también la objeción del abogado querellante, Nelson Caucoto, que hace ver que en estado de guerra debieron existir tribunales militares de tiempo de guerra, cuya normativa es distinta de los de tiempos de paz, que son los actuales.

Pero la Tercera Sala no está para esas discusiones. Ante un recurso de reposición de la parte acusadora, retorna al fallo de 1990, explicando que éste siguió el decreto ley Nº 5, que sólo tuvo efectos jurisdiccionales, pero que ello no consideraba ninguna situación específica que demostrara la existencia de una guerra. Con ese retruécano, la sala se limita a continuar un criterio ya convertido en tradición por la Corte Suprema[5].

Y es por esas conductas sistemáticas ante los casos de derechos humanos que la posibilidad de una acusación constitucional comienza a rondar por la Concertación ya desde 1990[6].

La notoria manipulación del caso Chanfreau revive la indignación moral del oficialismo y hace que cristalice en la iniciativa de diez diputados que suscriben la acusación contra la Tercera Sala. No firma más que el mínimo, para que los otros 61 queden habilitados para el sorteo de la comisión de estudio de la acusación[7].

Pero en el camino se agrega otra actuación de los mismos cuatro miembros de la Tercera Sala. Ahora es un megaproceso de la Segunda Fiscalía Militar, en el que se han acumulado las investigaciones sobre la internación de armas en Carrizal (86), el atentado contra Pinochet (86), el homicidio del carabinero Miguel Vásquez Tobar (86), el secuestro del coronel Carlos Carreño (87) y el asalto al retén de Los Queñes (88). Es, en suma, el juicio al FPMR[8].

El proceso fue llevado desde su inicio por Torres Silva, designado fiscal *ad hoc*, con las peculiarísimas condiciones que esta figura implica en la justicia militar chilena: el investigador es también querellante y contraparte de los imputados.

En este caso, debido a la conmoción pública, al abierto desafío lanzado por la subversión y, según cabe presumir, a ciertos rasgos de temperamento, Torres Silva fue particularmente vehemente en su tarea. Sólo por las declaraciones que formuló en esos tres años de fiscal *ad hoc*, ningún procesado podría haberse sentido ante un frío analista imparcial. Ni siquiera hubiese sido necesario que dictara once autos de procesamiento y que insistiera en calificarlos dentro de la severa ley antiterrorista. Pero además hizo ambas cosas.

Y ahora, en 1992, Torres Silva aparece decidiendo como juez supremo sobre recursos interpuestos por las partes. Ni se ha inhabilitado ni ha aceptado una "recusación amistosa" presentada por la defensa; tampoco lo han objetado los otros miembros de la Tercera Sala.

Extremando el desplante, ha firmado, con esos otros miembros, el rechazo a la sugerencia de inhabilidad.

Además de no calificar su ostensible prejuzgamiento sobre el proceso —más allá de que no alcanzara a dictar sentencias, lo que tampoco hizo la Corte Suprema—, la Tercera Sala le ha permitido que, siguiendo el turno, redacte los fallos que rechazan los recursos.

Curiosamente, tales fallos van en contra de su propia opinión; la Corte Marcial ha rebajado la calificación de las imputaciones, ante lo cual el Ministerio Público Militar ha interpuesto recursos de casación y de queja. Y como muestra de su especial interés, Torres Silva propone durante semanas borradores de sentencias que acogen los recursos de casación, con el propósito de persuadir a sus colegas de la Tercera Sala[9]. Pero la letra de la ley es taxativa: en los casos de ley de seguridad del Estado no caben tales recursos. Y aunque deja constancia de su voto de minoría, igual los redacta.

Y en ese trabajo, para el que no necesitaba revisar el proceso, ha demorado cinco meses, hasta este memorable 15 de diciembre.

Agravante: hay dos reos presos[10]. Según el principio pro reo que preside todo el proceso penal chileno, la existencia de imputados detenidos exige a los jueces acelerar sus diligencias para evitar la potencial injusticia de mantener a inocentes en prisión.

Pese a tener conciencia del retraso antijurídico, los demás miembros de la Sala no dicen nada y su presidente, Cereceda, comete un error más grave: no deja constancia de haber apurado la gestión.

¿Por qué se demora Torres Silva? ¿Por qué no dicen nada sus colegas? Una explicación, tribunalicia, lo atribuye a su esfuerzo por convencer a los otros jueces de acoger los recursos.

En el Ministerio de Justicia se sospecha otra cosa: el auditor general quiere dilatar los procesos para evitar que, una vez sentenciados, los presos puedan ser indultados por el Presidente.

En cambio, los recursos de queja, que buscan rectificar la opinión de la Corte Marcial e insistir en la calificación de delitos terroristas, son emitidos una semana después, el 23. Y aquí da lo mismo quien los redacte: Torres está en minoría, pero esa circunstancia resulta inicua ante el hecho de que los cuatro ministros ya están acusados y notificados.

Pero los cuatro piensan, con razón, que este punto es el menos relevante de la acusación. Lo principal es el caso Chanfreau, con el cual el oficialismo busca presionar a la Suprema en los casos de derechos humanos.

Esto explica que en sus defensas, la cuestión de los recursos demorados sea respondida con argumentos triviales y que la de Cereceda se "equivoque" por un mes en las fechas de los fallos.

Con esos datos se inicia la acusación, a un ritmo parsimonioso y rodeado de escepticismo. Dado que la oposición es mayoría en el Senado, la acción de los diputados parece meramente testimonial. Y así se la considera cuando se constituye, el 21 de diciembre, la comisión encargada de estudiar la procedencia del libelo, presidida por el DC Baldemar Carrasco e integrada por otros cuatro diputados[11].

La Corte Suprema reacciona con espíritu de cuerpo y el 24 de diciembre realiza un pleno en el que deja constancia de que la acusación vulnera la Constitución y "atenta gravemente contra las bases fundamentales de la institucionalidad". En el acuerdo votan los tres ministros acusados; los ministros Carrasco y Garrido —los mismos que votaron contra el traspaso del caso Chanfreau— se declaran contrarios[12].

Pero con ello queda preparada la petición para convocar al Consejo de Seguridad Nacional. El 28 de diciembre llegan al despacho de Aylwin tres oficios casi simultáneos: del presidente de la Corte y de los comandantes en jefe del Ejército y la Armada. Mientras Aburto y Pinochet "solicitan" la citación, el almirante Martínez Busch la "sugiere respetuosamente".

El Presidente, que quiere evitar que se dé notoriedad a la primera ocasión en que se fuerza una reunión del Consejo, lo convoca de inmediato para el 30 de diciembre. En esas 48 horas, sus ministros se mueven para asegurar que no haya votos para un pronunciamiento contra la acusación constitucional. Blanco principal de esos esfuerzos es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Ramón Vega.

La reunión se abre con un ritmo parsimonioso. El Presidente hace un largo saludo y luego se lee el acta de la sesión anterior, con el visible propósito de rebajar la tensión. Cuando se entra en materia, el primero en hablar es el almirante Martínez Busch, que, admitiendo que la acusación es procedente desde el punto de vista formal, opina que en el fondo constituye la revisión de un fallo y un ataque a la justicia militar. Lo sigue Pinochet, que abre una carpeta con siete capítulos y lee uno de ellos: un análisis que sostiene que el Parlamento invade las atribuciones del Poder Judicial. Al final pide que se "represente" a la Cámara que su acción "atenta gravemente contra las bases de la institucionalidad".

Luego habla Aburto, que también menciona la intromisión en las facultades de la Corte y describe las consecuencias de la acusación, incluido el evento de que los jueces sean imputados por grupos y motivos "meramente políticos".

Pero el presidente del Senado, que ha venido con la firme determinación de defender los fueros del Parlamento, lo interrumpe:

—Ya pasó el tiempo de recriminar a los políticos...

Aburto se sorprende, pero sigue:

—Los jueces no pueden estar expuestos a las reacciones temperamentales de algunos políticos.

—Eso, señor, es una condición fisiológica, inherente a todos los seres humanos, que refleja estados de ánimo.

—Ahora bastaría que los parlamentarios se ofusquen...

—Cualquier persona puede perder el criterio alguna vez. ¿Qué tiene?

Como el entredicho entre Aburto y Valdés no cesa, el Presidente propone un alto para tomar un café. Mientras entran los mozos, Pinochet se acerca al jefe de la FACh:

—Y usted, Vega, ¿con quién está?

—¿Yo? —pregunta Vega, sonriendo—. Con usted, pues, mi general...

Cuando la sesión se reanuda, Valdés dice que una intervención del Consejo en las atribuciones del Parlamento sí sería un grave atentado a la institucionalidad. El contralor Osvaldo Iturriaga coincide en que tal cosa sería peligrosa. El general Rodolfo Stange expresa su preocupación por el efecto que todo esto puede tener sobre la justicia militar. Y cuando le toca el turno a Vega, ocurre lo inesperado: el general concuerda en que la acusación es inquietante, pero no le parece conveniente que el Consejo presente una opinión escrita al Parlamento.

Tras él interviene el Presidente, con un minucioso análisis de las normas que presiden la figura de la acusación constitucional. Y, recogiendo la ambigüedad de la intervención de Vega, concluye:

—Pero aquí no se ha producido acuerdo. Se levanta la sesión.

El anodino resultado de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional alienta a la Concertación. En Valparaíso, la comisión informante de la Cámara demora 17 días en su estudio.

El único elemento extraño es un raro debilitamiento de la coalición gobiernista. El Partido Radical estima que la acusación no puede fundarse en las causales esgrimidas y anuncia su rechazo, fundado en la opinión del diputado y profesor de Derecho Jaime Campos.

Pero el PR es pequeño en la coalición y, dada la mayoría de los demás socios, la validez de la acusación se aprueba. De un modo igualmente previsible, en la madrugada del sábado 9 de enero la Cámara declara imputados a los cuatro ministros por 66 votos contra 39.

Hay sólo dos detalles inquietantes: aunque los diputados del PR persisten en desagregarse, disciplinados por la vigilante acción del senador Carlos González Márquez, el propio Jaime Campos pronuncia un discurso feroz, que concentra en Hernán Cereceda, a quien califica como "el paradigma, el prototipo del juez venal"[13].

Campos ha reunido información que mostraría que el ministro Cereceda profita de su cargo. Se le han contado casos de influencias ejercidas en favor de su hermano Pablo, síndico de quiebras. Se le ha dicho que el ministro Enrique Correa Labra, fallecido en los primeros días del mes, lo increpó numerosas veces, en presencia de testigos, por "tramitar", es decir, por actuar en favor de alguna parte en los litigios.

Como otros de los ministros antiguos —Bórquez, Eyzaguirre, Rivas, los llamados "jinetes del Apocalipsis"—, Correa Labra nunca tuvo simpatía por Cereceda.

Para notar el segundo detalle se requeriría de observadores muy perspicaces: un senador de RN, Ignacio Pérez Walker, ha asistido a todas y cada una de las sesiones de la comisión informante de la Cámara. No tenía por qué hacerlo. Pero ahí ha estado, día tras día.

Una cosa es segura: Pérez tiene una admiración particular hacia el diputado Andrés Aylwin. Y cuando presencia que la Cámara oficia a la Corte para que Cereceda precise si el fallo de los recursos de casación fue el 15 de noviembre (como dice) o el 15 de diciembre, y que la Corte no responde, y que el Parlamento insiste y que, por fin, Andrés Aylwin se apersona en los tribunales para exigir la dramática respuesta certificada: el 15 de diciembre, Pérez se convence de que algo muy anómalo ocurre en la Suprema.

¿Basta ese antecedente? No.

Hay uno más remoto: cinco meses después de la instalación del Congreso, el presidente de RN, el senador Sergio Onofre Jarpa, invitó a un almuerzo de los senadores abogados de RN con algunos de los más eminentes juristas afines: José María Eyzaguirre, Ricardo Rivadeneira, Carlos Reymond, Miguel Luis Amunátegui y otros. En la sobremesa se habló de los problemas de venalidad en los tribunales. Varios nombres quedaron en el ambiente.

Y he aquí que el senador Hugo Ortiz de Filippi, ex integrante de la Corte, amigo del ministro Servando Jordán y activísimo abogado del foro, sorprende a sus colegas de la bancada de RN cuando afirma, en otro almuerzo el martes 12, que considera un "deber de país" limpiar a la Suprema de elementos inapropiados. Su blanco, de nuevo, es Cereceda.

Hay cierta paradoja en el asunto. A fines de 1984, el ministro Hugo Rosende aumentó tres plazas en la Suprema. Para designar a esos "ministros de probeta", el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, consultó a su entonces asesor jurídico: Hugo Ortiz de Filippi. Y fue Ortiz de Filippi quien recomendó a Cereceda y a su amigo Servando Jordán. El tercer cupo se lo reservó Rosende para Enrique Zurita.

Cereceda entró a una Corte sin claros liderazgos. Los "jinetes del Apocalipsis", con toda su autoridad jurídica, no eran dados a ejercer el poder real. Al menos no como lo concebían Rosende y Cereceda, que pronto se convirtieron en amigos y aliados para mantener el mando del Poder Judicial al servicio del gobierno militar. Ningún hombre llegaría a gozar de una confianza tan completa de Rosende como Cereceda.

Y es por eso que en 1992 la Concertación lo tiene en la mira. En su diagnóstico, la esquiva arquitectura de la Corte reposa en Cereceda. El oficialismo lo considera el factótum de todos los nombramientos de ministros posteriores a él y conoce la existencia de una densa red de funcionarios que le deben favores y ascensos.

Otra paradoja se aloja en esta relación. A fines de los 50, Cereceda había sido ayudante de Aylwin en su cátedra de Derecho Administrativo, antes de allegarse al profesor y ministro Ramiro Méndez, que sería su tutor en la carrera judicial. Como ex alumno del Internado Nacional Barros Arana, Aylwin sentía especial afecto por el rector Eliodoro Cereceda, padre de su ayudante.

Durante los 60, cuando Aylwin alcanzó la presidencia de la DC en el gobierno de Frei, Cereceda era considerado un juez afín a ese partido, y Aylwin intentó apoyar su carrera. En 1968, cuando se produjo un cupo para la Corte de Apelaciones de Santiago, llamó al entonces ministro de Justicia, William Thayer, para pedir que lo eligiera de entre la terna que presentaría al Presidente. Thayer prefirió a otro, pero su propuesta le fue rechazada debido a la intensa presión de la DC. Thayer presentó su renuncia y Frei prefirió revertir la decisión para no perder a su ministro. El nombramiento de Cereceda quedaría postergado hasta la próxima vacante.

Pero durante el régimen militar, Aylwin constató lo que estimó un viraje de Cereceda, que ya se comportaba como un irrestricto mandatario de los deseos de La Moneda. Nunca volvió a considerarlo. Hasta marzo de 1992, cuando Eliodoro Cereceda murió y el ahora Presidente envió sus condolencias al hijo. Hernán Cereceda pidió audiencia para agradecer el gesto. En esa primera reunión después de más de 20 años, Aylwin usó un tono cortante para imponer brevedad.

También él había escuchado los rumores adversos a Cereceda. Un grupo de abogados de la Concertación le había planteado la necesidad de iniciar una querella de capítulo bajo cargos de venalidad. Pero tal libelo debía ser visto por un ministro de Corte de Apelaciones. ¿Quién se atrevería? El Presidente pidió antecedentes, pero los abogados nunca se los llevaron.

Aprobada la acusación en la Cámara sin los votos radicales, el fracaso parece seguro en el Senado. La minoría de la Concertación se hace irremontable si los cuatro radicales y socialdemócratas la rechazan.

Convencido de que eso ocurrirá, el dirigente radical y ministro de Agricultura, pero sobre todo eminente abogado del foro, Juan Agustín Figueroa, decide que el fracaso no debe producirse sin algún beneficio.

De nuevo hay entre ellos historias pasadas. En los años 60, Figueroa y Cereceda fueron competidores en el concurso por la cátedra de Derecho Procesal en la Universidad de Chile, que el radical ganó holgadamente. En los 80, cuando Cereceda estaba en la Corte de Apelaciones,

Figueroa defendía al empresario Javier Vial en el proceso ordenado por el régimen tras el *crack* financiero de 1982: Vial era el rebelde que se negaba a pactar con el régimen —a diferencia de otros empresarios quebrados— y Cereceda fue el encargado de darle su escarmiento: durante nueve meses lo mantuvo en prisión, negando una y otra vez su excarcelación. Nadie en el foro, ni menos Figueroa, olvidaría el caso.

Y la aversión de Figueroa no ha hecho más que aumentar. Pero ahora, ante la inminencia de la votación del Senado, llama a Cereceda y le propone una conversación privada. Por las posiciones de ambos, debe parecer casual, un encuentro callejero... Tal vez frente al diario *La Nación*, junto a la estatua de Diego Portales.

El miércoles 13, mientras caminan hacia Alameda, Figueroa formula su propuesta:

—Hernán, yo creo que esta acusación no va a prosperar. Los radicales no la apoyamos. Pero ya sabes que la muerte de Correa Labra deja un lugar en la Corte, y nos interesa que en la quina que la Corte le mande al Presidente esté Marcos Libedinsky. Es un hombre de muchos méritos, ya sabes...

Cereceda no responde con la asertividad necesaria. No puede: la Corte ha decidido que mientras se tramite la acusación, no enviará la nómina para sustituir a Correa Labra.

Ese silencio cuesta caro. Figueroa entiende que no hay trato.

A esa misma hora, Ortiz de Filippi ha redoblado su actividad. A diferencia de la Concertación, al senador de RN no le importa la cercanía de Cereceda con el gobierno militar; al revés, cree que tal identificación desprestigia a ese gobierno en la misma medida en que Cereceda es acusado, como lo ha hecho Campos, de "venalidad". Peor todavía, Cereceda podría ser el próximo presidente de la Corte si sigue en su cargo; si sale, podría asumir ese cargo... Servando Jordán.

Por eso, Ortiz de Filippi inicia un febril programa de reuniones. Primero visita a Sebastián Piñera en sus oficinas de Bancard y le explica su disyuntiva. Dos votos de oposición bastarán para destituir a uno o varios ministros; uno sería insuficiente y quedaría expuesto a la vindicta del Poder Judicial. Piñera le pide 24 horas. Y al día siguiente lo llama. Puede contar con su voto.

Ortiz de Filippi sabe también de la intención de Pérez, pero las seguridades de Piñera le parecen mejores.

El miércoles 12 almuerza con los senadores designados, donde repite sus argumentos y plantea, sin comprometerse, que podría haber votos de derecha contra Cereceda. Aunque el senador Sergio Fernández insiste en que, cualesquiera sean los argumentos, una destitución sería altamente inoportuna, el general (R) Santiago Sinclair formula una idea inesperada:

—¿Y si renuncia voluntariamente? Por ejemplo, con fecha posterior a la acusación...

Ortiz de Filippi ve una oportunidad. Sólo hay que proponérselo a Cereceda. Con ese fin se ofrece para hablar con el presidente de la Suprema, Marcos Aburto.

Y lo hace. Pero Aburto responde que no puede plantear tal cosa a su colega, y sugiere que podría intentarlo la senadora Olga Feliú, elegida en su cargo por la Corte. Ortiz de Filippi va sobre ella y halla una respuesta similar. Tal vez sería más apropiado que lo hiciera el senador Ricardo Martin, también designado por el tribunal mayor. Martin, que ha sido igualmente un crítico de Cereceda, se siente inhabilitado.

Desechada la salida de la renuncia, a Ortiz de Filippi le queda todavía la incógnita radical. Pero, como militante de ese partido y de la Masonería hasta los años 60, no tiene dificultad en almorzar el jueves 13 con los cuatro senadores radicales y socialdemócratas —Carlos González Márquez, Ricardo Navarrete, Anselmo Sule y Mario Papi— y repetir sus argumentos. En esta ocasión agrega otro: si la acusación fracasa, el diputado Jaime Campos será desaforado y procesado por injurias. Sólo la caída de un ministro podría evitar esa desgracia.

El argumento es penetrante. Con la ayuda del senador Navarrete, Ortiz de Filippi obtiene un compromiso para votar contra Cereceda. De los cuatro asistentes, sólo Papi se muestra

reticente. Para persuadirlo, Ortiz de Filippi pide ayuda a su amigo Gabriel Cáceres, otro prominente abogado y figura de peso en el ambiente masón.

Pero la garantía mayor es la palabra del presidente del Senado, Gabriel Valdés: cuando el senador de RN le cuenta, el viernes 15, que tiene los dos votos necesarios para destituir a Cereceda, Valdés le asegura que la Concertación votará como un todo en ese caso.

Y Valdés se compromete también a resolver otro temor de los senadores de derecha: que en el lugar de Cereceda, el gobierno nombre a un ministro afín a la DC. Le pedirá al propio Presidente garantías sobre esto.

En paralelo, el senador Ignacio Pérez, que también prepara activamente su voto, habla con el senador Máximo Pacheco y el ministro Francisco Cumplido para que, en nombre de Aylwin, le prometan lo mismo.

El lunes 18 llegan las respuestas. Trato hecho.

Para ese mismo día, el gobierno ya saborea en serio la posibilidad de remecer a la Corte Suprema. Resta sólo una dificultad: ¿cómo destituir a uno solo de los jueces, y cómo liberar a la derecha de la culpa de sancionar a un juez por un caso de derechos humanos?

Ortiz de Filippi y Pérez tienen otra vez, por canales separados, la solución: dividir los votos por personas y por causales. El presidente del Senado la acoge.

En las horas previas a la sesión decisiva, un frenesí de gestiones sacude al mundo político. La esposa del ministro Lionel Béraud, a quien se atribuye una contaminante cercanía con Cereceda, llama a diversas personas para subrayar las convicciones cristianas de su marido. De Valenzuela se dice que la Masonería está dispuesta a salvarlo, aunque no pertenece a la Orden. Y por Torres Silva se mueve todo el Ejército. Esa noche las caras conocidas se repiten en el Hotel Miramar.

—Hola, Enrique —le dice el general Jorge Ballerino al ministro Correa, cuando casualmente lo ve en el *lobby*—. Parece que te va a ir mal mañana.

—¿Sí? —contesta Correa, críptico—. Yo creo que no.

El martes 19 se presentan la acusación y los descargos. Para lo primero, la Cámara ha designado a tres de los mejores espadachines de la Concertación: Gutenberg Martínez, Sergio Elgueta y Jorge Schaulsohn. En la defensa, Cereceda y Béraud se unen tras el abogado Fernando Saenger. Valenzuela opta por defenderse por escrito. Y en nombre de Torres Silva asiste su subordinado más cercano, el coronel (J) Enrique Ibarra.

Ibarra se enfrenta al primer incidente. El senador Jaime Gazmuri lo increpa por asistir de uniforme, entendiendo que ese atuendo implica, no sólo una cierta amenaza, sino el envolvimiento militar. A Ibarra le cuesta explicar que es al revés, que se trata de un signo de respeto. No hay en el oficialismo quien le crea.

Acusación y defensa, réplicas y dúplicas, se prolongan hasta el mediodía del miércoles 20. Esa tarde, a las 16.45, comienza la votación, que cada senador, en orden alfabético, fundamenta con un discurso. Los votos son previsibles mientras avanza la hora. Pero los propósitos de Ortiz de Filippi, Pérez y Piñera, que inusualmente se han sentado juntos, ya son conocidos.

Por eso, Sinclair se acerca a Ortiz de Filippi:

—Hugo, el general Pinochet quiere hablar contigo. Está en este teléfono —susurra, y le extiende un papel.

—Jimmy —responde Ortiz de Filippi, sabiendo que el general quiere abogar por Cereceda—, en este momento no lo puedo llamar. Más tarde...

Sinclair no puede insistir mucho. Opta por girar hacia Pérez y repetirle el mensaje. Pérez tampoco se apura. Ninguno de los dos atenderá ese día al general.

A pesar del férreo alineamiento de los bloques políticos, hay ciertos matices. Por ejemplo, en la segunda causal (integración impropia), seis senadores de la Concertación acusan sólo a Torres Silva y exculpan a los otros tres ministros[14]. A Valenzuela, siguiendo un acuerdo con Ortiz de Filippi, Navarrete lo excluye de todo.

El turno de Ortiz de Filippi llega cuando ya es de noche. En medio de la expectación, el senador de RN, como si eligiera por casualidad, dice que "para el solo efecto de esta votación", acusa a Cereceda por la tercera causal, la demora de los fallos del megaproceso al FPMR. El hemiciclo se remece de aplausos.

Cuatro turnos después, vota igual el senador Pérez. Con ese acto, Cereceda queda destituido. Pero a continuación se suma Piñera, que apoya su voto en el llamado del abogado defensor de Cereceda, que ha pedido analizar la trayectoria de su cliente[15].

En 8 horas 40 minutos, Cereceda termina 39 años de carrera debido a un fallo demorado por el auditor Torres Silva. Este se salva con los márgenes más bajos de todos: el único voto de ventaja que tiene la oposición con los designados. Béraud obtiene una mejor diferencia a favor en la segunda causal. Y Valenzuela resulta ser el menos inculpado[16].

Esa noche la Concertación y el gobierno se felicitan. Por primera vez en la historia de la República, la Corte ya no puede sentirse intocable.

Mientras Cereceda queda destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, la Corte declara su acatamiento del procedimiento constitucional, el mismo que en el pleno de diciembre había calificado como anticonstitucional. Más tarde, cuando Cereceda intente una querella contra el diputado Campos, la misma Corte la declarará improcedente.

En RN estalla una tempestad. El presidente Andrés Allamand censura la conducta de los senadores disidentes, Jarpa pide sanciones para Pérez y Piñera (excluyendo a su ex asesor Ortiz de Filippi) y el senador Francisco Prat anuncia que renunciará al partido, lo que tampoco llega a hacer.

Pero el diagnóstico más sombrío es el que tiene el Ejército. Si la judicatura es tan fácil de intimidar como se demostró desde 1973, ¿qué puede pasar ahora que hemos perdido a nuestro hombre en la Suprema?

Notas

1. Antecedentes detallados sobre el caso: Arce, Luz: *El infierno*. Editorial Planeta, Santiago, 1993.

2. Esta actitud persistirá todavía a fines de 1992, cuando el general Pinochet hace llegar al Presidente Aylwin un informe de la DINE que da cuenta de la intranquilidad entre los oficiales. El documento cita como ejemplos a los mismos ex agentes de la DINA citados en el caso Chanfreau: Krasnoff, el ahora teniente coronel Fernando Lauriani, el sargento segundo Basclay Zapata. Ejército de Chile: DINE SC (S) 2300-243, 20 de diciembre de 1992.

3. DL Nº 5: "Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse "estado o tiempo de guerra" para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece del Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación".

4. Causa Nº 553-78.

5. Cuando intervenga ante la comisión de la Cámara, el abogado Hernán Montealegre sintetizará esta creación de incerteza del derecho por parte del tribunal máximo: "La Corte Suprema ha dicho cuatro cosas distintas en esta materia. En 1974 dijo que en Chile había estado de guerra. En 1990 dijo que no lo hubo. Ahora, con motivo del fallo de la Tercera Sala, los acusados vuelven a decir que sí hubo estado de guerra. Y con motivo de la reposición que se presenta a este último fallo de la Tercera Sala, vuelve a decir que no hay estado de guerra. Lo que ocurre es que nadie sabe en este país si se vivió o no se vivió un estado de guerra, porque la Corte Suprema dice primero que sí y después que no".

6. *Informe Confidencial*, septiembre de 1990. En ese período, varios abogados de la Concertación estudiaron una eventual acusación precisamente a partir del fallo ante el recurso de Alfonso Insunza.

7. Sin embargo, entre los firmantes figuran algunos de los más destacados diputados de la Concertación: Andrés Aylwin, Ramón Elizalde, Sergio Jara, Gutenberg Martínez, Jorge Pizarro (DC), Víctor Jeame Barrueto, Jaime Estévez, Jaime Naranjo, Carlos Montes (PS-PPD) y Roberto Muñoz Barra (SD).

8. Causa Nº 1510-87.

9. Cereceda reveló estos intentos de Torres Silva en un reciente libro de memorias. Cereceda, Hernán: *Rompiendo el silencio. El acusado del 93*. Editorial Pretor, Santiago, 1998. Sin embargo, no los mencionó en sus descargos ante el Congreso y sólo hizo una breve referencia en una entrevista de prensa: Oyarzún, María Eugenia: *"Mi injusta destitución equivale a pena de muerte"*. Diario *La Tercera*, 31 de enero de 1993.

10. Max Horacio Díaz Trujillo y Luis Rodrigo Morales Salas.

11. Juan Martínez (PS), Jorge Morales (RN), Jorge Ulloa (UDI) y Guillermo Yunge (DC).

12. A favor: Marcos Aburto, Hernán Cereceda, Enrique Zurita, Roberto Dávila, Lionel Béraud, Arnaldo Toro, Marco Aurelio Perales, Germán Valenzuela, Hernán Alvarez, Adolfo Bañados y Luis Correa Bulo. En contra: Oscar Carrasco y Mario Garrido.

13. Cámara de Diputados de Chile: Legislatura 325ª, Extraordinaria, Sesión 38ª, viernes 8 y sábado 9 de enero de 1993.

14. Arturo Frei, Eduardo Frei, Jorge Lavandero, Mario Papi, Laura Soto y Andrés Zaldívar.

15. Senado de Chile: Legislatura 325ª, Extraordinaria, Sesión 27ª, especial, miércoles 20 de enero de 1993.

16. La votación por capítulos dio los siguientes resultados:

1) Traspaso a la Justicia Militar del caso Chanfreau:

Lionel Béraud:	23 en contra, 22 a favor
Hernán Cereceda:	23 en contra, 22 a favor
Germán Valenzuela:	24 en contra, 21 a favor
Fernando Torres:	23 en contra, 22 a favor

2) Integración impropia del auditor Torres:

Lionel Béraud:	29 en contra, 16 a favor
Hernán Cereceda:	29 en contra, 16 a favor
Germán Valenzuela:	30 en contra, 15 a favor
Fernando Torres:	23 en contra, 22 a favor

3) Retraso en fallo de causa Nº 1510-87:

Lionel Béraud:	23 en contra, 22 a favor
Hernán Cereceda:	20 en contra, 25 a favor
Germán Valenzuela:	24 en contra, 21 a favor
Fernando Torres:	23 en contra, 22 a favor

19

Las desventuras de un primogénito

¿Sabía el comandante en jefe de los negocios de su hijo? ¿Conocía de sus sucesivos y penosos fracasos económicos? ¿Cómo podía arreglarlos? La historia de SP, una pequeña metalúrgica de La Cisterna, crispa los nervios al inicio de 1993.

Hacia fines de 1992, un escalofrío recorre las oficinas de la Comandancia en Jefe del Ejército: según versiones seguras, Augusto Pinochet Hiriart, el primogénito varón del general, ha enfrentado dificultades financieras de gran magnitud durante el último año y medio y, aunque ellas han sido puestas bajo relativo control, podrían emerger abruptamente si las indagaciones judiciales pendientes por el caso Valmoval se extienden demasiado.

La situación es altamente volátil: pese a que la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el pago en cheques, por cerca de tres millones de dólares, del Ejército al hijo del comandante en jefe con motivo de la venta de la empresa de armas PSP (a su turno, compradora de la falente Valmoval) no llegó a establecer delitos[1], el caso está ahora en manos del Consejo de Defensa del Estado, que lo podría activar en cualquier instante. Como la Cámara ha expresado dudas acerca de una quiebra envuelta en el proceso, podría producirse la intervención de la justicia del crimen.

¿Y qué tienen que ver las dificultades de 1992 con el caso de los cheques?

En apariencia, poco.

De hecho, en la opinión pública prevalece la impresión de que el caso de los cheques quedó superado, con intervención del gobierno, después del "ejercicio de enlace" de diciembre de 1990.

Bajo un manto de conveniente duda —pero duda sin pruebas— han quedado los dos elementos centrales de esa indagación: si Pinochet Hiriart era más que un mandatario en el momento de cobrar los cheques extendidos por el Ejército y si el comandante en jefe supo del envolvimiento de su hijo en la gestión de venta.

Una y otra cosa son complementarias: si lo supo pero el hijo era sólo un mandatario, la gravedad es relativa; si el hijo era más que un mandatario y el general no lo supo, los hechos son más serios. Pero si Pinochet Hiriart tenía intereses en la propiedad, y el general los conocía, el peso de la incompatibilidad para los funcionarios del Estado, y las normas establecidas en el DFL1, el estatuto de las Fuerzas Armadas, caerían como una lápida sobre el máximo jefe militar.

Ninguna de esas dos piezas claves ha podido ser esclarecida por los diputados, y al concluir la investigación las opiniones de cada quien casi dependen de su posición frente al régimen militar.

En cambio, los problemas de este infausto año 92 afectan a una empresa instalada en la comuna de La Cisterna, llamada Sistemas y Productos, SP, que ha contraído deudas y compromisos fuera de todo control y más allá de su patrimonio.

Club por La Moneda; Germán Correa almorzó una vez en el comedor oficial con un invitado y concedió una entrevista de prensa en el despacho presidencial; el 11 de septiembre de 1994, el Vicepresidente pidió abrir el salón de audiencias para tomar un café con ex ministros de Allende, y encontró cierta resistencia de parte del personal auxiliar. En cuanto a las diferencias de Paula Desbordes con Marta Larraechea, ellas estuvieron centradas en la nueva orientación dada a la Fundación Integra y afectaron también a otras personas de esa institución. Sin embargo, es un hecho que, amplificados y alimentados por el clima vigente en el palacio, estos episodios fueron utilizados para minar la estabilidad del ministro del Interior, única razón que justifica su descripción aquí.

2. *Ministro Arriagada comparó gobiernos de Frei y de Aylwin.* Diario *La Segunda*, 7 de julio de 1994.

3. Insistentes versiones de entonces sostuvieron que, pese al comunicado, Frei estaba en efecto trabajando en la evaluación de sus ministros, la que postergó debido al incidente entre Correa y Rodríguez Grossi. Ver, por ejemplo: *El "caso Rodríguez". Informe Confidencial*, agosto de 1994.

4. Arthur, Blanca; Lavín, Vivian; y Sepúlveda, Eduardo: *¿Aprobado o reprobado?* Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 11 de septiembre de 1994. El impacto de este artículo es diversamente apreciado por los altos funcionarios de entonces: mientras unos le atribuyen efectos decisivos, otros lo consideran un pretexto para decisiones ya tomadas. En cualquier caso, el ministro del Interior es evaluado "regular", mientras el secretario general de la Presidencia recibe la calificación de "malo".

5. Más tarde, durante la Parada Militar, Lagos preguntó a Figueroa sobre el probable cambio de gabinete, pero éste negó tener información y se mostró molesto por el hecho de que el embajador Molina le hubiese advertido sobre el regreso de Insulza.

6. Poco después, Figueroa le planteará a Correa la opción de irse como embajador en Italia, cargo que Mariano Fernández dejaría vacante para asumir la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Correa desestimó el ofrecimiento.

Cuando LeRoy tomó el 99% de Nihasa, en febrero de 1985, fue por gracia de un segundo aporte de Pinochet Hiriart, antecedido por una modificación del convenio secreto, también firmada ante Bruna y dos testigos: ahora Pinochet hijo sería dueño de un 94% del capital y un 89% de utilidades y pérdidas, mientras que LeRoy retendría un 5% de capital y un 10% de utilidades y pérdidas.

Por eso después, cuando algunos describían al enigmático LeRoy como "un amigo" y otros como un "palo blanco", no erraban ni una ni otra vez. En realidad, ambas cosas no eran incompatibles.

Como se trataba de evitar que Pinochet Hiriart apareciera en las escrituras públicas, y para cumplir con el requisito de que una sociedad de responsabilidad limitada debe tener más de un miembro, él y LeRoy decidieron incorporar a un antiguo profesor, ex decano de Ingeniería de la UTE, al que ambos apreciaban. Así apareció Juan Fernández Avendaño, con un modesto 1% en todo, para el cual no aportó capital alguno: al maestro, con cariño.

Pero el de febrero de 1985 no fue sólo un cambio de estructura propietaria. Además de la composición, los socios decidieron cambiar el modesto nombre de la Metalúrgica Nihasa por uno algo más sonoro: Proyectos Metalúrgicos Integrados a la Producción, PSP. Una de las razones fue evitar que los compromisos contraídos por su propietario anterior, Tucapel Salinas, recayeran sobre el trabajo de la fundición.

Hasta entonces, Nihasa se había dedicado al mobiliario ornamental: escaños, ánforas, escaleras de caracol, muebles de terraza, maceteros. Pero en la segunda mitad de los 80 la empresa comenzó a florecer con órdenes de trabajo de diversas empresas e instituciones. Empresas con presencia del Estado, como Ferrocarriles, se incorporaron a la cartera de clientes junto con algunas industrias privadas mineras y pesqueras. La línea de elementos ornamentales fue fortalecida cuando CEMA Chile contrató con PSP los adornos de metal para sus numerosas sedes en el país. El Ejército le traspasó el acondicionamiento de sus camionetas y jeeps para los tiempos bravos de los desórdenes callejeros: rejillas, cortacables, barras de protección, barredoras de "miguelitos", refuerzos. Uno de los contratos más lucrativos se obtuvo de los desechos militares: las vainillas de las balas usadas contienen una aleación de cobre y cinc de alta ley; procesadas y refundidas, podían ser vendidas a Madeco y otras industrias que requerían de estos metales.

Pinochet Hiriart, que a la sazón vivía en Estados Unidos, funcionaba como el gestor de los nuevos negocios en sus frecuentes, aunque nunca muy prolongados, viajes a Chile.

Con ese respaldo, PSP creció alegremente hasta mediados de 1987, cuando surgió la posibilidad de comprar Valmoval, una empresa declarada en quiebra y administrada por su principal acreedor, el Ejército, para el cual había alcanzado a producir algunos fusiles, aunque defectuosos. La industria era atractiva hasta el punto de que empresarios como Carlos Cardoen, Francisco Javier Errázuriz y Miguel Paredes alcanzaron a interesarse. Pero ni ellos ni el ex oficial de la Armada Erwin Jaeger, que hasta llegó a tener un compromiso con el Ejército, pudieron contra la pequeña PSP.

Pinochet Hiriart encabezó las gestiones de compra y luego de venta al mismo Ejército, no sin que antes la industria volviera a funcionar en plenitud y comenzase a fabricar armas eficientes.

Pero cuando llegó el momento del pago, algo extraño sucedió.

Pese a que hasta entonces se había puesto especial cuidado en que Pinochet Hiriart no figurase en documentos públicos, los cheques del Ejército fueron emitidos a su nombre. No se sabe si por desconfianza personal de Pinochet Hiriart, o por la de los mandos del Ejército que ordenaron los giros, los cheques ignoraron a los socios titulares de PSP, LeRoy y Fernández.

Con posterioridad, ambos debieron firmar un poder en el que sostenían que el hijo del comandante en jefe era sólo un "mandatario"[5]. Este documento sería clave para liberar a Pinochet en las investigaciones posteriores, pero también para los hechos que sobrevendrían en los años siguientes.

La Cámara de Diputados sospechó más tarde de la amplitud del poder de Pinochet Hiriart y de su verdadera relación con la empresa. Pero no pudo probar nada.

¿Por qué? Porque entre los numerosos documentos que recibió faltaron los dos centrales: el convenio secreto y su modificación, guardados en las oficinas de Guillermo Bruna.

Tampoco pudo probar que el comandante en jefe conociera de este negocio. De haberlo hecho, las disposiciones sobre negociación incompatible lo habrían derribado de su cargo.

Y bien, ¿lo conoció? Los testigos sobre este punto sólo pueden confrontar sus palabras.

Una cosa es segura: el general estaba perfectamente informado de la relación amistosa entre su hijo y su socio LeRoy.

El hecho es que Pinochet Hiriart recibió el equivalente de tres millones de dólares y los socios titulares de PSP, nada. Ante la Cámara de Diputados, meses después, el hijo del comandante en jefe no negó este hecho y explicó, con cierta vaguedad, que parte del dinero se había destinado a cancelar créditos conseguidos en el exterior por él mismo.

Lo cierto es que hubo un pago certificado: el 8% que se había acordado con Luis Valdivieso, el tornero mecánico que había gestionado Valmoval desde su creación, fundándola, convirtiéndola en fábrica de armas, afrontando con la cárcel su cesación de pagos y, por fin, ideando su venta al Ejército. Cerca de 160 millones de pesos le fueron entregados al contado por Pinochet y su amigo LeRoy.

LeRoy y Fernández no recibieron nada en ese momento. Sin embargo, más tarde, durante las indagaciones de la Contraloría, de la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones y de la justicia del crimen, ambos declararon que sí recibieron el pago, y hasta ingeniaron formas para demostrar que habían invertido esos dineros.

Un detalle se les pasaba por alto.

Al reconocer tales pagos como ingresos, debían declararlos a Impuestos Internos, con las tasas que tienen las ventas particulares de acciones.

Si los dos socios sobreentendían que Pinochet Hiriart pagaría sus impuestos, o que alguien lo haría por él, se equivocaron rotundamente: los tributos jamás fueron cancelados. De los dos, sólo LeRoy podría requerir ese compromiso: contaría con la cláusula sexta del convenio secreto de 1984.

Aunque Impuestos Internos tiene normas que le impiden entregar información abierta, parece un hecho cierto que los impuestos por la venta de PSP no han sido pagados (salvo en la parte de Valdivieso) hasta el día de hoy. Juan Fernández Avendaño, el accionista minoritario, falleció en noviembre de 1992.

Pero la legislación chilena establece que, a menos que renuncien a sus derechos completos, los herederos —en este caso, dos hijos profesionales— cargan con la deuda tributaria. Y diez años después, abultados con intereses y multas, esos impuestos impagos podrían ascender, según cálculos independientes, a cifras cercanas a los 2.000.000.000 de pesos.

¿Qué puede explicar esta grave omisión de Pinochet Hiriart y de sus tan campantes socios? En cada caso parecen influir factores diferentes.

Para LeRoy y Fernández podría haber parecido irrisorio preocuparse de semejantes nimiedades en los luminosos días de comienzos de 1989, después de que se cerrara con éxito la venta de PSP.

Aunque no tomaron parte del dinero, Pinochet Hiriart les ofreció potenciar una pequeña empresa paralela que habían creado cuando el negocio de PSP con el Ejército cumplía sus trámites finales, como un modo de continuar en el giro metalúrgico.

La empresa fue constituida el 3 de agosto de 1988, como sociedad anónima cerrada, bajo el nombre Sistemas y Productos S.A., SP, con dos accionistas titulares: LeRoy y Adolfo Carmona,

que ya había sido director de PSP en nombre del comandante en jefe del Ejército. Las acciones serían 70, de un valor de un millón de pesos cada una: 63 de LeRoy y 7 de Carmona. Posteriormente adquiriría también algunos títulos el profesor Juan Fernández.

Pero otra vez se entendía que los verdaderos capitales eran proporcionados por Pinochet Hiriart y, en esta ocasión, esa situación quedó confirmada más formalmente por el traspaso, el 14 de septiembre de 1988, de 56 de las acciones de LeRoy a su antiguo compañero de universidad.

La empresa comenzó a funcionar con una planta y fundición en un terreno de calle Augusto Biaut. Esta propiedad había sufrido previamente un veloz proceso de traspasos, entre agosto y septiembre de ese año. Primero la compró Pinochet Hiriart, que en cosa de días la vendió a PSP —donde ya participaba el Ejército—, la que a su turno la vendió rápidamente a SP.

Otra propiedad fue también comprada por SP a Pinochet Hiriart, una oficina a un amigo y aparente asociado suyo, un fundo en Buin a su esposa Verónica Molina, y un terreno industrial a una particular. Con ello SP quedó constituida como industria en operaciones.

En rigor, SP debía ser una metalúrgica destinada principalmente a que LeRoy y Fernández mantuvieran una fuente de ingresos después de la fabulosa operación de PSP, reteniendo a la vez los negocios civiles —varios de ellos con el Ejército— que los socios habían conseguido en el pasado. Pinochet reconoció más tarde ante la Cámara, otra vez vagamente, su relación con esta empresa[6].

Lo que no dijo, por cierto, es que para entonces, siguiendo los mismos principios de los convenios secretos de 1984 y 1985, era en verdad el accionista mayoritario.

En todo caso, para Pinochet Hiriart la situación era muy distinta en el primer semestre de ese año 1989. Al consumarse el negocio de PSP, el hijo del comandante en jefe pensaba iniciar una nueva vida en el extranjero, una vida que pondría fin a las desventuras económicas sufridas en Chile en el pasado.

El 12 de julio, su esposa y sus cinco hijos partieron a Estados Unidos, donde Pinochet Hiriart había previsto instalar una empresa de gimnasios y academias de karate y abrir una representación de SP, SP International, por si aparecían nuevos negocios para enviarles a los amigos en Chile.

Primero tomó depósitos a nombre suyo y de su hijo mayor en el Royal Scotland Bank of New York y luego los dividió entre el Banco Real y el Great American Saving Bank. En esta división desapareció su nombre y los dineros quedaron a nombre de su esposa y de sus hijos. El depósito del Banco Real fue firmado con la autorización para que Verónica Molina comprase una casa de 500 mil dólares en la ciudad de Sacramento, California. Al final los dineros se concentraron —un millón y medio de dólares— en una cuenta personal a nombre de ella en el Banco Gran América de Sacramento.

Los trámites de radicación en California duraron unas semanas. Copado por ellos, Augusto Pinochet Hiriart no percibió la desgracia que se incubaba en su familia. Los detalles son poco relevantes.

El hecho es que, cuando ya los dineros estaban a su nombre, Verónica Molina optó por una nueva pareja —un chileno que había viajado con ellos—, se separó de hecho y Pinochet Hiriart perdió la familia, la casa y, eventualmente, parte del capital. Según algunas versiones, el FBI llegó a intervenir preventivamente para que la situación no derivara en acciones peligrosas.

A comienzos de noviembre del 89 —menos de cinco meses después de emigrar—, Pinochet Hiriart debió regresar a Chile.

Parecía decidido a cobrar revancha de lo que le había sucedido, pero no tenía nada de cuanto había ganado con la venta de PSP. Mientras instruía a sus abogados en EE.UU. para congelar las cuentas de su esposa, buscó refugio en sus amigos de SP e inició las acciones para recuperar a sus hijos. En un dictamen fulminante e inusual, el 6 de diciembre de 1989 el Cuarto Juzgado de Menores le dio la tuición de los niños.

El proceso de reinstalación en Chile no fue, según parece, nada fácil. SP funcionaba como una empresa corriente, con ingresos razonables (aunque bastantes deudas de puesta en marcha), pero Pinochet Hiriart tenía también otros proyectos en mente, especialmente en el área pesquera, donde había logrado una importante relación con una industria extractora y otra procesadora. Cuando quiso que SP facilitara su razón social y sus activos como respaldo para operaciones crediticias triangulares, las cosas comenzaron a agriarse.

Por primera vez, a los hasta entonces pasivos socios LeRoy y Fernández no les gustaron tales movimientos. Tampoco les gustó que Pinochet Hiriart nombrara como gerente general a Mónica Meza Shertz, una ex secretaria de Televisión Nacional, ni las transferencias accionarias en las cuales se incorporó Macarena Blas, que para entonces era la segunda pareja del socio mayoritario.

A su turno, Pinochet Hiriart criticaba la conducción realizada por LeRoy como anterior gerente, las deudas que había contraído y los pocos negocios nuevos que había gestionado.

Las tensiones se prolongaron durante todo el año 90. En agosto, viendo que ni siquiera podía constituir una comisión revisora de cuentas que se había acordado, el presidente del directorio, Adolfo Carmona, renunció al cargo y a la sociedad.

Finalmente, en cuanto LeRoy y Fernández supieron que dos créditos del Banco O'Higgins habían sido tomados para las otras empresas con que Pinochet Hiriart estaba relacionado, prepararon también su retiro definitivo.

Uno de sus primeros pasos fue dirigirse al coronel (J) Samuel Correa, en noviembre de 1990, cuando la investigación de la Cámara de Diputados estaba en plena efervescencia y se acercaba a sus momentos más peligrosos. Ambos estaban citados por la Cámara y el Servicio de Impuestos Internos los había llamado para responder por su deuda de la venta de PSP.

Por eso, le plantearon al abogado militar tres puntos para resolver: 1) que el Ejército tomara el compromiso formal de cancelar la deuda de impuestos; 2) que se les pagara el porcentaje de la venta de PSP que jamás recibieron; y 3) que se solucionaran los problemas de SP ante los bancos.

La ruptura se produjo en el verano de 1991, poco después de que la Cámara había cerrado su investigación.

Pinochet Hiriart no sólo aceptó, sino que hasta propició, al parecer con cierta indignación, la salida de Le Roy y Fernández de la empresa. Se les dejó de pagar honorarios y servicios y en febrero hasta se les prohibió la entrada al recinto de la industria.

Pero esta vez LeRoy y Fernández no estaban dispuestos a ceder sus derechos por nada. Dado que las investigaciones iniciadas en el Parlamento eran aún riesgosas, puesto que faltaba que las enviaran a la Contraloría, ninguno de los dos debió extrañarse cuando un abogado del Comité Asesor los llamó para conocer sus pretensiones.

LeRoy y Fernández fijaron de inmediato el precio al contado: 60 millones de pesos. Días más tarde fueron citados a las reservadas oficinas de Bandera 52, donde el dinero les fue entregado en billetes.

Era una dirección conocida para ellos. Se habían convertido en visitantes asiduos desde que Impuestos Internos y la Bridec se empeñaban en conocer también el destino de los dineros de PSP: allí se les instruía sobre lo que debían declarar.

En su condición supuesta de socio mayoritario, era LeRoy quien debía responder por el grueso del capital.

¿Qué habría hecho con los tres millones de dólares? Las escrituras de unos terrenos, convenientemente abultadas, sirvieron para explicar una parte. Otra parte, más sustantiva, la puso una máquina marteladora que los socios habían comprado a fines de 1988 y que había sido adquirida, de segunda mano, en poco más de 500 mil dólares. Sin embargo, para efectos de derechos aduaneros, su valor comercial oficial era cercano al millón de dólares.

La historia de la marteladora era aún más curiosa. Pinochet Hiriart, LeRoy y Fernández la compraron justo cuando PSP estaba siendo vendida al Ejército. Llegó a nombre de SP y, en el amistoso clima de esos días, el Ejército se ofreció para desaduanarla. Como además se trataba

de un artefacto enorme, que no funcionaría hasta algún tiempo más, el Ejército la guardó temporalmente.

Por esas razones casuales no quedó en los inventarios de PSP ni de SP, un hecho que en adelante sería muy importante.

Con el dinero que recibieron de la venta de sus partes en SP, LeRoy y Fernández crearon una nueva industria, Recicla S.A., que se dedicó a reprocesar metales.

Pero apenas un mes después, en marzo del 91, los problemas de SP empezaron a salir de control. Varios especialistas fueron convocados para estudiar si sería posible rectificar el rumbo, ordenar la contabilidad de los anteriores tres años, establecer balances presentables y negociar las deudas. Por diversas razones, esos esfuerzos fracasaron.

En agosto la situación se había vuelto insostenible. Los pasivos superaban largamente a los activos y los balances reales arrojaban pérdidas superiores a los 120 millones de pesos.

Entonces intervino un brigadier (R), Raúl Dinator, de quien se entendía que estaba en directa comunicación con el general Pinochet, junto con un perito tributario, Juan Quiroz, que había trabajado en otros asuntos del Ejército e incluso de PSP, y que ahora ayudaría a ordenar libros y cuentas de la empresa.

Dinator intentó ordenar la gestión de ventas, liquidar algunos activos y allegar nuevos negocios, especialmente con el Ejército. El perito hizo cuanto pudo por esclarecer la documentación.

Pero para comienzos de 1992 los vencimientos, además de nuevos compromisos contraídos por Pinochet Hiriart, hacían inmanejable el cuadro financiero. La posibilidad de que algún acreedor pidiera la quiebra lanzaba a la empresa hacia el terreno de la pesadilla: en tal caso serían revisados no sólo los balances, sino las actas de directorio, los registros de accionistas, las facturas, los inventarios.

A la vista de tal panorama, dos abogados de renombre, uno civil y otro del Ejército, idearon lo que parecía la única forma de salir del atolladero: liquidar la empresa progresivamente y borrar toda huella del paso del primogénito del comandante en jefe por ella.

Venderla, aun a precio de liquidación —como en algún momento se propuso— no serviría de gran cosa, puesto que en ese caso se revelaría la documentación; por lo demás, tampoco había interesados notorios.

En consecuencia, la única solución "limpia" sería devolverla a sus socios originales y simular una perfecta continuidad histórica en la gestión de SP, como si jamás hubiese habido ningún cambio sustantivo, ni separación entre los dueños, ni, por supuesto, paso alguno de Pinochet Hiriart.

Incomprensiblemente, o tal vez porque temían verse envueltos en los dudosos balances de 1988, cuando SP se lanzó a comprar propiedades sin tener ningún respaldo en activos, Eduardo LeRoy y Juan Fernández, los mismos socios que habían roto con Pinochet Hiriart, aceptaron hacerse cargo de la empresa en crisis en abril de 1992. Según afirmarían después en cartas a diversas autoridades, los alentaba el compromiso del abogado civil y el abogado militar de que dispondrían de recursos para ir zanjando las deudas.

Habría que modificar gran parte de los documentos de la empresa. Sólo unos pocos no podían rehacerse: al menos, no en su integridad. Por ejemplo, el registro de accionistas, que da cuenta del ágil paso de Pinochet Hiriart por la sociedad. Pero alterar las actas del directorio resultaría un riesgo menor en comparación con el bien cautelado.

En virtud de esa operación se producen absurdos deliciosos, como éste: mientras un documento interno informa que se prohíbe la entrada a SP de LeRoy y Fernández a contar del 26 de febrero de 1991, el 15 de marzo de ese mismo año LeRoy aparece presidiendo la sesión de directorio de SP, mientras Fernández firma el acta como el único otro director titular.

Aunque después de este tratamiento las actas del directorio de SP no son nada fiables, en adelante registran un frenético movimiento destinado a liquidar los ya menguados activos para pagar deudas de corto plazo. Nada parece suficiente: muchos bienes se han perdido en el caos administrativo que acompaña a la crisis; otros tantos están bajo embargos o hipotecas bancarias; además de vacíos previsionales, los trabajadores reclaman sueldos impagos e indemnizaciones incumplidas y hasta hay algunos que han insinuado que acudirán a un parlamentario; los dineros transferidos a las empresas Pescaysén, La Cornellana e Industria de Alimentos del Mar son de muy escarpada recuperación; los impuestos impagos amenazan con la intervención del Estado.

Así se ha llegado al final de 1992, cuando la noticia de los nuevos problemas del hijo del comandante en jefe es ya ampliamente conocida por el círculo de asesores del mando superior.

Con la muerte de Juan Fernández, la desesperada situación de SP queda en manos únicamente de LeRoy, aunque la familia del fallecido profesor conoce el grado de compromisos en que ha sido envuelta sin tener arte ni parte.

Unos y otros comienzan a sentirse nuevamente engañados. Varios indicios lo sugieren: ni el Ejército ni los abogados civiles están ayudando a pagar de verdad los compromisos de SP; el lío de los impuestos permanece igual; los abogados reaccionan sólo cuando algún caso colateral está a punto de producir órdenes de tribunales; el experto encargado de asesorarlos ante Impuestos Internos ni siquiera recibe sus honorarios.

Pero el signo peor se produce a fines de marzo de 1993, cuando el último socio, LeRoy, ya estrangulado por las deudas, se entera de que uno de los abogados civiles está tratando de vender el fundo comprado por SP a la esposa de Pinochet Hiriart, que es uno de los pocos bienes que le quedan a la empresa para salir de su catástrofe. De esa maniobra deja constancia en diversos documentos, aunque no llega a saberse qué hace para impedir que se consume[7].

Ese mismo mes, cartas distribuidas entre distintos organismos del Ejército advierten sobre la acumulación de problemas que se derivan todavía de la venta de PSP y de las irregularidades que afectan a toda la gestión de SP. Los montos envueltos parecen inabordables y ciertos movimientos podrían bordear la calificación de fraude.

En abril de 1993 comienza la peor parte.

El 24, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Guillermo Piedrabuena, despacha el expediente por la quiebra de Valmoval y su posterior venta a PSP al Quinto Juzgado del Crimen.

El juez Alejandro Solís inicia las indagaciones con peculiar diligencia. Numerosos oficiales y la mayoría de los involucrados en la operación del 88 son citados a declarar. Entre ellos, el todavía presidente titular de SP, Eduardo LeRoy. Pero el juez no sabe lo que está ocurriendo con la empresa hija de PSP y no se interna en ese problema. En rigor, no alcanza.

Quienes sí lo saben están dispuestos a impedirlo. El juez Solís, se dice entre las filas militares, tiene comportamientos hostiles a la institución y su carácter es impredecible. Su juicio no será equilibrado. No puede ser que siga con este caso, donde hasta se ha permitido citar a siete oficiales superiores, con toda la nefasta publicidad que ello implica.

Para entonces ya se acerca el fin de mayo de 1993.

Y quienes creen que lo que va a suceder a continuación tiene relación sólo con aquel caso, ya un poco obsoleto, de los cheques pagados al primogénito del comandante en jefe, desconocen que en el trasfondo se agita el drama de SP, la pequeña metalúrgica de La Cisterna que quiso ser más grande que la vida.

Notas

1. Ver capítulos 7 y 8.
2. *Diario Oficial*, 19 de mayo de 1983.
3. *Diario Oficial*, 10 de septiembre de 1983.
4. *Diario Oficial*, 4 de septiembre de 1984 y 8 de febrero de 1985.
5. Según una versión conocida por esta investigación, en realidad tal poder sólo vino a suscribirse durante la investigación de la Cámara de Diputados, casi dos años después.
6. *Lo que dijo el hijo de Pinochet*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 20 de enero de 1991.
7. El fundo, llamado Santa Verónica, había sido adquirido originalmente a la CORA. Con posterioridad a estos hechos, a fines de 1994, fue adquirido por el arquitecto Gastón Etcheverry, a un precio muy superior del que se habría obtenido en caso de remate.

20

La mañana de las boinas

El "caso de los cheques" gatilla, en mayo de 1993, la segunda y peor crisis militar de la transición. Los oficiales se las ingenian para añadir, a ese impresentable motivo, todas las razones institucionales que pueden justificar un extenso movimiento de insubordinación.

El sábado 22 de mayo de 1993, el Presidente Aylwin almuerza en La Moneda con los ministros Enrique Krauss, Edgardo Boeninger y Enrique Correa. Dentro de unas horas inicia una gira por los países escandinavos y Rusia y su gabinete político afina los temas pendientes, que quedarán en manos de Krauss en su calidad de Vicepresidente.

Y los temas son muy pocos. El país está en quietud excepcional y los ministros deben esforzarse para hallar un conflicto potencial: las reivindicaciones de los profesores, que podrían ser agitadas por el PC.

Pero el ministro Krauss tiene una carta guardada:

—Creo que el segundo hecho que puede causar problemas es la decisión del Consejo de Defensa del Estado de pasar a la justicia del crimen la calificación de la quiebra de Valmoval —dice, y un instante de hielo se extiende entre los presentes. La turbulenta imagen de los cheques pagados por el Ejército al hijo del general Pinochet reaparece.

Krauss se ha enterado hace sólo unas horas de este abrupto viraje procesal. Pero se ha enterado, además, de que un mes antes, en abril, el presidente del CDE, Guillermo Piedrabuena, había consultado al Presidente sobre la oportunidad de dar un paso tan sensible, y Aylwin le había dicho que debía cumplir con la ley. El 25 de abril, Piedrabuena había enviado los antecedentes al Quinto Juzgado del Crimen, que debería calificar si la quiebra de Valmoval fue fraudulenta, caso en el cual habría pena de cárcel.

Y Aylwin no ha dicho nada a sus ministros.

—Pero qué puede hacer el gobierno —dice ahora, irritado, como siempre que divisa algún intento por saltarse la ley—, ¡si eso está en manos de los tribunales!

—Sí, Presidente —insiste Krauss—, pero usted sabe cómo han sido estas cosas.

En medio del ciego diálogo, Correa enmudece. Apenas tres días antes ha tomado té con el general y le ha asegurado que el proceso está bajo control. Curiosamente, el general tampoco le ha dicho nada sobre el traspaso al tribunal del crimen.

Pero estas discusiones disgustan al Presidente. Por lo demás, ¿qué podría pasar con un caso que lleva un mes en tribunales?

En la tarde, la comitiva presidencial, amplificada con cuatro ministros —el canciller Silva Cimma, Boeninger, Foxley y Alejandro Hales, titular de Minería— parte alegremente hacia su

primera escala, Estocolmo. La gira es en buena medida un gesto de gratitud hacia los países que acogieron a tantos exiliados chilenos.

Pero la recepción de esos mismos exiliados se infiltra como un presagio en medio del optimismo oficial: en protesta por la existencia de presos políticos y la mantención de Pinochet en el Ejército, la indignada comunidad chilena arroja huevos a la comitiva.

El lunes 24, el mayor general Jorge Ballerino reúne a un grupo de coroneles y tenientes coroneles en sus oficinas de la Inspectoría General del Ejército. Varios de ellos trabajaron antes en el Comité Asesor.

Tiene una misión para encomendarles. Las relaciones con el gobierno, dice, pasan por un muy mal momento. El general Pinochet asistió por primera vez, el viernes anterior, al Mensaje del 21 de mayo, como un signo de buena voluntad, pero el Presidente Aylwin insistió en anunciar las modificaciones a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. En la tarde del mismo 21, el Estado Mayor preparó una *Apreciación de Situación* que muestra la gravedad de este proyecto y de su discusión en un ambiente electoral.

Las citaciones a oficiales en procesos de derechos humanos siguen siendo tratadas con escándalo. En el Ministerio de Defensa hay oídos sordos para las preocupaciones del Ejército, el que además es tratado en forma distinta que las otras instituciones. La Moneda tampoco presta gran atención.

Por esto, Ballerino quiere que los oficiales estudien medidas de "hostigamiento", como señales para el gobierno. Por ejemplo, llamar a reservistas fuera de fecha, o cerrar las poblaciones militares: cosas de ese tipo.

El equipo no alcanzará a producir ni una sola sugerencia: los hechos serán más rápidos.

El martes 25, Ballerino y el nuevo jefe del Comité Asesor, Jaime Concha, se comunican con el ministro Correa para pedir que el Vicepresidente Krauss los reciba. En la tarde repiten esas gestiones a través del subsecretario Belisario Velasco y del abogado Isidro Solís.

Krauss se muestra disponible, pero cuando consulta a Defensa, tanto el ministro Patricio Rojas como el subsecretario Marcos Sánchez se oponen tajantemente. Si los recibe, dicen, Ballerino va a legitimarse como un interlocutor político y el Comité Asesor como una instancia valedera.

Como Krauss replica en que no puede dar una negativa completa, Rojas y Sánchez matizan: en todo caso, que no sea antes del consejo de generales previsto para el viernes 28.

Cuando los generales insisten, la secretaría de Krauss da una respuesta: el lunes 31. Antes, imposible. Pero el jueves 27 los oficiales se enteran de que el Vicepresidente ha tenido tiempo para recibir al equipo de fútbol de la UC, vicecampeón de la Copa Libertadores.

Esa noche, el general Pinochet cena en el Comando de Telecomunicaciones con seis senadores de Renovación Nacional: Sergio Onofre Jarpa, Bruno Siebert, Julio Lagos, Sergio Romero, Alberto Cooper y Mario Ríos, a quienes los dirigentes de RN llaman sarcásticamente "los generales". Para el excluido senador Sebastián Piñera, que el encuentro se realice en la unidad desde donde fue destruida su candidatura presidencial es una verdadera provocación.

Y el general quiere hablar esta noche, precisamente, de ese señor Piñera, que ha estado diciendo que el Ejército quemó la investigación del caso de espionaje telefónico; del señor Andrés Allamand, que se ha referido al Ejército como uno de tres "poderes fácticos"; y, sobre todo, de la reforma que el gobierno quiere introducir a la ley de las Fuerzas Armadas, una medida que politizaría a las instituciones.

El diálogo es eficaz. Los senadores aseguran que el proyecto del gobierno fracasará, porque no contará con los votos de RN en el Senado.

Alrededor de las 7.40 del viernes 28, el mayor general Ballerino ordena a su chofer que, en vez de dirigirse a su oficina de Bandera, enfile rumbo a la Comandancia en Jefe. Ballerino ha leído en el auto el titular del diario *La Nación* —"Reabren caso cheques del hijo de Pinochet"— y ahora cree que es mejor preparar al general. Como otros oficiales cercanos, Ballerino sabe que el caso de los cheques conduce directamente a la caótica situación que, en estos mismos momentos, viven los siguientes negocios emprendidos por el primogénito del general[1]. Pero cuando llega a Zenteno, el comandante en jefe ya está en su oficina. Y una vez que le muestra el diario, estalla en indignación: no, esto es inaceptable, ahora sí que está claro que es una campaña, ya van a ver...

Ese día el Vicepresidente Krauss llega a La Moneda temprano, porque debuta el comité consultivo de seguridad, con todos los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Un solo incidente altera este comienzo. En representación de la DINE llega un coronel, puesto que su jefe, el brigadier general Eugenio Covarrubias, debe asistir a la reunión de generales prevista para esta mañana. El subsecretario Marcos Sánchez tiene la ingrata misión de decir al coronel que no puede entrar, que esto es sólo para jefes titulares.

La reunión transcurre por cerca de media hora cuando un ordenanza lleva un mensaje a Krauss: tiene un llamado urgente.

Es Ballerino, que por orden del comandante en jefe le pide una audiencia urgente, para ahora mismo.

Krauss se demora. Percibe el tono agitado, pero trata de medir su verdadero alcance. En este momento está en una reunión, a ver...

—¡Ayudante! —oye Krauss por el teléfono. Es un vozarrón alterado, el inequívoco enojo de Pinochet—. ¡Ordene el alerta! ¡Grado 1! ¡Que se mueva la Primera División hacia...!

—Oye, Jorge —dice Krauss, bruscamente inquieto—, pero tranquilidad, tranquilidad.

—Sí, Enrique, pero mi general quiere que me recibas de inmediato.

—Bueno, vénte para acá. Termino... ¿en media hora?

—Voy. Oye, ¿puedo entrar por el subterráneo?

—Sí —dice Krauss—, cómo no, daré las instrucciones.

En Zenteno, Ballerino trata de atemperar el ánimo. Sabe que los gritos del general tras el teléfono son un truco, pero las cosas siempre pueden empeorar. No dice nada sobre los 30 minutos de demora: se va.

El auto entra al estacionamiento subterráneo de La Moneda, donde un ayudante espera a Ballerino. Y como el mayor general viene además con una urgencia extrainstitucional, lo conduce hasta el baño privado del Presidente.

Krauss anticipa el fin de la reunión y le pide a Marcos Sánchez que lo acompañe a recibir a Ballerino. El mayor general es sintético: el Ejército estima inaceptable que la causa de los cheques haya pasado al juez Alejandro Solís, al que considera izquierdista, por iniciativa de un organismo del Estado, como es el CDE. La institución entendía, agrega Ballerino, que el ministro Enrique Correa se había comprometido a que el informe de la Cámara de Diputados moriría sin movimiento. El titular de *La Nación* demuestra que esto es orquestado.

Pero no, dice Krauss, el CDE es autónomo, y *La Nación* también; además, la información ya salió un día antes en *El Diario*. Con todo, los problemas se pueden arreglar. Mientras habla, el citófono presidencial lo interrumpe. Cuando toma el auricular, enmudece. Una imperceptible lividez se extiende por su rostro.

—No sé para qué estamos hablando —dice, con un rictus amargo—. Ya están sacando cosas a la calle. ¿Qué pretenden?

Ballerino no sabe, pero se imagina que, si se está reforzando la guardia de Zenteno con unidades de comandos y si hay unidades en la calle, bueno, eso muestra la gravedad del asunto.

—Todo se puede hablar —dice Krauss—, pero no hay para qué hacer estas cosas. Resolvamos este asunto del juicio. Dame un rato para ubicar a la gente.

—¿Y *La Nación*?
—También lo arreglamos. Pero tengo que encontrar a Enrique Correa.

Apenas sube al auto oficial en Antofagasta, Correa recibe del intendente Blas Espinoza el primer alerta:

—Te llama tu subsecretario.

—¿Edgardo? Qué raro.

Pero Edgardo Riveros no llama por sí, sino por encargo de Krauss: el Vicepresidente necesita que regrese a Santiago. Correa ha ido a una ceremonia con los atacameños —las cuestiones indígenas están en su cartera— y tiene prevista una conferencia en Antofagasta. Pero ahora debe cancelar todo y buscar el próximo vuelo a la capital.

En La Moneda, el Vicepresidente ordena ubicar al presidente del CDE, Guillermo Piedrabuena.

En el edificio de las Fuerzas Armadas, Ballerino informa a Pinochet, que da un puñetazo en la mesa:

—¡No, no es suficiente! ¡Tienen que arreglar esta cuestión de los oficiales que están citando!

Poco después, la reunión de los 38 generales que están en la capital se inicia en un clima tenso. Algunos, pocos, han alcanzado a recibir el estado de alerta en sus unidades o casas, y llegan con uniforme de campaña.

El secretario general, el coronel Jaime Lepe, introduce el temario y luego habla Pinochet, describiendo el clima de hostigamiento que se ha vuelto a crear. No menciona el caso de los cheques. Algunos generales piden la palabra: desean agregar otros antecedentes que muestran que el Ejecutivo no quiere arreglar las cosas.

Poco antes de la interrupción para el almuerzo —que, ahora sí, la totalidad de los generales utilizará para ponerse el uniforme de campaña—, Ballerino recibe un llamado de Krauss: Piedrabuena ya está en La Moneda.

Ballerino parte con el brigadier (J) Juan Romero, segundo hombre de la Auditoría General y su asesor jurídico más cercano. En el segundo viaje del mayor general a La Moneda se producen los dos acuerdos buscados en la mañana. Primero el Ministerio del Interior procurará que el caso de los cheques salga de la competencia del juez Solís, pase a un juzgado más confiable y, una vez que se lo sobresea, no habrá apelación del CDE. En cuanto a *La Nación*, en la edición de mañana habrá una rectificación.

Mientras se prolonga el debate sobre cuál juzgado sería más apropiado, Ballerino propone que Piedrabuena y Romero vean ese asunto mientras él se reúne con Krauss y Sánchez en otra sala.

Porque, dice, ya no son los únicos problemas. El general Pinochet le encargó plantear otras tres cuestiones importantes: la necesidad de dictar una ley de amnistía para terminar con los problemas de derechos humanos, la exigencia de que las citaciones a oficiales despachadas por los tribunales sean llevadas con discreción y la renuncia del gobierno a su proyecto de modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

Krauss responde que el Presidente ya descartó una amnistía, pero le informará de esta petición cuando regrese. En cuanto a las citaciones a oficiales, interviene Sánchez, se acordó un procedimiento con el auditor Torres Silva, que éste no activó sino hasta el caso de los cheques; y sobre la reforma a la ley orgánica, Krauss subraya que el Presidente envió un proyecto considerablemente modificado respecto del original.

Cuando se vuelven a reunir con Piedrabuena y Romero, ya hay una especie de acuerdo: el gobierno y el CDE intentarán que el juez Solís se declare incompetente y el caso pase a manos del juez Jorge Colvin, titular del Segundo Juzgado del Crimen, para que éste lo cierre o lo traspase a la justicia militar[2].

Esa tarde, la tarea de hablar con *La Nación* queda en manos del mayor general Concha, que llama para dictar el titular que los militares quieren ver al día siguiente, con el informe exculpatorio de la Contraloría emitido hace ya muchas semanas. El editor general, Alberto

Luengo, resiste la presión. Poco después recibe el respaldo del presidente del directorio, Raimundo Valenzuela, y del propio ministro Correa, y la situación pasa a una rara tierra de nadie: *La Nación* del día siguiente no tendrá titular y la información pedida por Concha irá en las páginas interiores[3].

Cuando la reunión de los generales se reanuda, después del almuerzo, los ánimos están caldeados. El gobierno finge que no puede resolver los problemas, cuando la mayoría los ha creado él mismo. La respuesta de Krauss sobre la ley orgánica es inaceptable y la negativa a arreglar los problemas de las citaciones judiciales muestra la indiferencia oficialista.

Las protestas se multiplican. Tras la destitución del magistrado Cereceda, los jueces, intimidados, están torciendo la correcta interpretación de la ley de amnistía, que consiste en cerrar los casos sin investigar. En el Ministerio de Defensa están paralizadas decenas de decretos. A Famae se le han frenado las ventas de material. Los sueldos del personal se vienen deteriorando, y más encima el ministro Rojas insiste en que las indemnizaciones del personal de la ex CNI que ha salido se carguen al ya apretado presupuesto del Ejército.

Algunas intervenciones son exaltadas. Si el gobierno no toma en serio nuestros problemas, ¿habrá que ir a pasear una columna de tanques frente a La Moneda? ¿Qué pasa si cruzamos para el frente con una unidad de comandos? ¿Y qué si el Presidente se queda afuera, se disuelve el Congreso y se llama a nuevas elecciones?

Pinochet escucha en silencio. Ha aprendido que estos momentos de catarsis son necesarios cada cierto tiempo. La reunión se prolonga hasta el atardecer. Se les informará si hay nuevas resoluciones, señores.

Pero en La Moneda, el Vicepresidente y sus principales asesores creen que la crisis ha sido controlada.

Con las respuestas a las demandas presentadas por Ballerino, no hay razón para que las cosas se agraven.

Ninguno imagina todavía que esa misma tarde la Inspectoría General del Ejército está convocando a oficiales de estado mayor, algunos de los cuales son los mismos que integrarían el frustrado comité de "hostigamiento".

A partir de ahora deben dejar sus unidades y constituirse como parte de un Cuartel General de crisis. Las oficinas de la Inspectoría General, en el cuarto piso de Zenteno, están siendo desalojadas para eso.

La misión: agregar demandas a los planteamientos iniciales formulados a Krauss.

De entre ellos, sólo los más lúcidos perciben la razón profunda. Un nuevo movimiento militar motivado por el caso de los cheques es impresentable, no ya para el público, sino dentro de las propias filas.

Esa noche, advertidos de la crisis, viajan a Santiago desde Valdivia el presidente del Senado, Gabriel Valdés, y desde Concepción el de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo. Este último se dirige, sin informar al gobierno, a la casa de Ballerino, donde lo encuentra reunido con Concha, Romero y otros oficiales.

—José Antonio, lo que está pasando es muy serio —dice Ballerino, y el semblante sombrío de sus subalternos lo acompaña—. Entre los generales ha habido propuestas descabelladas: desde ocupar La Moneda hasta tomar presos a varios de ustedes esta misma noche. Esto ha estado a punto ~~de~~ salir de control.

Cuando se va, Viera-Gallo llama a Correa.

A cuadras de distancia, el subsecretario Sánchez regresa a su casa después del día más aciago que ha pasado en el Ministerio de Defensa. Llega a tiempo para despedir a los padres que llegan a recoger a las invitadas al cumpleaños de su hija.

—¿Cómo salió todo? —le pregunta uno.

—¿El cumpleaños? Bien, muy bien —dice Sánchez, en un esfuerzo de simulación cuya inutilidad queda en claro de inmediato:

—No, lo otro.

El sábado, las medidas militares recrudecen. Investigaciones informa que desde el día anterior no ha cesado la actividad en las unidades principales de Santiago. En la mañana el general Pinochet ha estado recorriendo algunos de esos recintos.

La aviación del Ejército ha sido adelantada desde San Bernardo hacia Tobalaba y unidades de Peldehue se han desplazado al regimiento Buin. Se han movido tropas desde Valparaíso y en la carretera de San Felipe se ha avistado una columna de tanques. Un equipo de *La Epoca* ha sido agredido por un camión con militares.

Esa mañana, Ballerino llama al ex ministro Francisco Javier Cuadra para explicarle que la situación es muy tensa. El gobierno parece no darse cuenta de la magnitud del problema: alguien que le merezca confianza debe hacérselo saber.

Tras el almuerzo, mientras asiste al bautizo del hijo de su chofer, el ministro Correa recibe tres llamados de su asesor Jorge Donoso, advirtiendo de los movimientos militares. Decide volver a su casa y dormir un poco, pero el teléfono suena de nuevo: esta vez es Krauss, que también sabe de los movimientos de Pinochet.

Los hechos son atenazantes y contradictorios. Los movimientos militares crecen en intensidad, pero Pinochet no se halla disponible en ninguno de los teléfonos usuales. El Presidente, desde la distancia, se muestra enojado ante cada nuevo informe.

Es que ese día Aylwin ha llegado con su voluminosa comitiva a Noruega. Como es un fin de semana, la visita oficial no puede iniciarse todavía. El embajador Juan Martabit ha tomado las medidas para que Aylwin pueda pasar esos dos días muertos en el centro de esquí de Lillehammer, para regresar en el tren a Oslo en la mañana del lunes. Y allí el Presidente consume las nerviosas horas paseando con Silva Cimma, con Boeninger, con Carlos Bascuñán. El teléfono satelital instalado en el Hotel Quality Hafjell no ha parado.

En la tarde, Cuadra logra ubicar a Sergio Molina, ministro de Planificación, y le describe la tensión militar. Como lo nota algo escéptico, dramatiza:

—Ustedes están como la aristocracia inglesa, que jugaba cricket mientras los tanques alemanes avanzaban por Europa. Estamos hablando de golpe de Estado...

—¿Qué? ¿Golpe de Estado?

Molina se compromete a pasar el mensaje al gobierno: en la noche podrá ver a Krauss en el matrimonio de Verónica, la hija mayor del senador Eduardo Frei.

Cerca de la misma hora, el senador Santiago Sinclair repite una gestión semejante con el senador Arturo Frei, que también irá a la boda.

La ceremonia religiosa congrega al *tout Santiago* en la iglesia Recoleta Dominica. Para la noche los invitados son más selectos, pero llegan a varios centenares. Krauss pasa una velada incómoda: medio mundo le pregunta por lo que está pasando. Y, de entre todos, Sergio Molina y Arturo Frei lo abordan con mensajes concretos. Lo mejor será juntarse en la mañana.

Otros mensajeros se multiplican en las horas siguientes[4].

Al amanecer del domingo 30, el Vicepresidente Krauss enfrenta el más grave de los problemas de su vida política. Así se lo explica al Presidente en su primera comunicación del día, pero nota a Aylwin muy poco receptivo. Para sí, culpa de la intransigencia a esos asesores que a miles de millas no ven las boinas negras, los blindados, los cohetes.

Esa mañana se reúne en su casa con Correa, Rojas, Molina, el senador Arturo Frei y los subsecretarios Belisario Velasco y Edgardo Riveros. La decisión, que Rojas alienta animosamente, es invitar a Pinochet a una reunión para aclarar el conflicto.

¿Es en esos momentos cuando se jode la transición chilena? ¿Marcan ellos el tipo de fin del gobierno de Aylwin? Tal vez. Pero en esos mismos instantes, la clase política vive en otro mundo.

La derecha, sacudida aún por el escándalo del espionaje telefónico, no halla forma de salir del marasmo. En RN se ha levantado la candidatura del ex dirigente empresarial Manuel Feliú, pero la UDI interpone como competidor a su presidente, Jovino Novoa, y desde entonces se sabe que no habrá acuerdo sobre uno ni otro. El selecto círculo de empresarios que digita la política del sector —el segundo de los "poderes fácticos" mencionados por Allamand— no acepta a Feliú y apuesta a un tercer nombre, aunque sin entusiasmo alguno.

Al revés, la Concertación vive este domingo lo que le parece uno de sus instantes rutilantes: la proclamación de Eduardo Frei como su candidato único, después de unas primarias asombrosamente masivas, aunque previsibles, en las que el abanderado de la DC se ha impuesto al líder de la izquierda, Ricardo Lagos, en el final de un tortuoso proceso por el cual Lagos debió combatir la tentación de sus partidarios de entregar la candidatura para negociar cupos parlamentarios. Ahora, Lagos es el principal de los oradores que proclaman a Frei[5].

Irónicamente, la ceremonia tiene lugar en el edificio Diego Portales, sede de los grandes protocolos del régimen militar y parte del Ministerio de Defensa, el epicentro de la tensión actual. En los pasillos circulan rumores alarmados sobre lo que ocurre con los militares, pero nadie quiere prestarles demasiada atención.

Quien ha podido tener una percepción privilegiada del estado de las cosas es un lugarteniente de Frei, al que no por casualidad el Ejército ha escogido como objeto de una querella por sedición, como un evidente modo de dar una señal anticipada al futuro gobierno.

Contra Genaro Arriagada han circulado en los meses previos unos anónimos, firmados por supuestos "oficiales de Ejército", pero la acción judicial es mucho más expresiva. Y lo es más cuando, este mismo domingo, un detective usa sus horas extraordinarias para ir a notificarlo a su oficina de secretario general del PDC. Arriagada no puede contener el temperamento explosivo:

—¡Qué se ha creído! —le grita al impertérrito policía—. ¡Dígale a quien lo mandó que es un miserable!

A la hora de almuerzo, Krauss ha recorrido varias postas telefónicas. Pero se ve aislado: no consigue hallar un número para hablar con el general.

Finalmente, logra confirmar que está en la residencia de Presidente Errázuriz. Entonces decide que el edecán naval, el capitán Fernando Pérez Quintas, vaya a esa casa. El edecán, astuto, se pone parka y jeans y se acerca al lugar por una puerta lateral.

Para fortuna de todos, en el intertanto el general Pinochet ha ordenado a Ballerino que vaya hasta su casa. El mayor general llega casi junto con el edecán. Lo hace pasar e informa al general que el hombre ha venido a pedir un teléfono para que lo pueda llamar el Vicepresidente.

Pocos minutos después Krauss llama a Pinochet.

—General, esto no puede seguir, le hace mal al Ejército, al país... Creo que es importante que nos juntemos...

—Cómo no. Pero yo no voy a La Moneda. ¿No ve que está llena de micrófonos?

—Y yo no voy a ir a la Comandancia. Quizá qué hay.

—Entonces en la Escuela de Telecomunicaciones.

—Mucha altura, general. Me mareo con la altura.

—¿Y el Club Militar?

—También es alto. ¿No le parece mi casa, general?

—Lo invito a la mía.

—No, cómo lo voy a molestar.

El humor tenso de ambos no alcanza a encubrir sus reales temores: los dos recelan presentarse en lugares donde puedan quedar bajo arresto, cualesquiera sean las fuerzas envueltas. Ballerino advierte la *impasse*:

—Bueno —dice Pinochet—, usted es amigo de Ballerino, ¿por qué no nos juntamos en su casa?

—Claro, soy amigo, pero nunca me ha invitado... Déme dos minutos y lo llamo, general.
Krauss advierte el dramatismo de sus opciones. Si va, será acusado de ceder más de la cuenta. Si no, la República estará en peligro. Llama a Correa y le cuenta; cuando se siente respaldado, vuelve a marcar el número de Pinochet.
—Bueno, general, veámonos en la casa de Jorge. Yo voy a ir con el ministro de Defensa.
—Ah, no, ¿no ve que ese caballero es el que crea los problemas?
—Pero tengo que ir con alguien —se demora Krauss—. ¿Y Correa?
—Bueno. Con el ministro Correa no hay problemas.
—Ya. ¿Alonso de Monroy cuánto?
—¿Cuánto? —pregunta Pinochet.
—2539 —dice Ballerino.
—2539 —dice Pinochet.
—2539 —memoriza Krauss—. En una hora.
Cuando cuelga, Pinochet autoriza a Ballerino para que vaya a su casa a organizar el encuentro.
Y Ballerino se halla con una dificultad mayor: una periodista y un camarógrafo de Megavisión aguardan ante la puerta de su casa. Como un fogonazo divisa el peligro: si hay prensa en las cercanías, la cita fracasará. Antes de entrar, baja del auto y habla con la periodista. Le miente sin arrugarse: no hay interés en este lugar, ya todo ha pasado, voy a dormir. La periodista le cree. Quizá sea la última vez en su vida.
Pocos minutos después de que se ha ido, llega la caravana del general Pinochet. Viene acompañado del secretario general del Ejército, el coronel Jaime Lepe, y es primera vez que pisa la casa de su brazo derecho. Por lo mismo, la señora de Ballerino, Guadalupe Astorga, extrema las atenciones para crear un clima familiar. Los dos primeros invitados pasan al escritorio. ¿Pisco sour, whisky, agua mineral, bebidas, otra cosita?
La espera es breve. Krauss y Correa llegan por separado y sin escoltas, pero casi al unísono. Lupe Astorga, que lo ha planeado en ese brevísimo tiempo, recibe a Krauss con peculiar calidez:
—Enrique, qué agrado tenerte en mi casa —dice, y agrega, para no soslayar la gravedad del instante—: Tal vez no sea el mejor momento, pero para nosotros es un honor.
—Gracias, gracias, Lupe —repite Krauss. Las guardias de Pinochet y de Ballerino (nadie sabe cuál es cuál, ¿quién distingue a un grupo de comandos de otro grupo de comandos?) acaban de rendirle honores presidenciales, pero ese detalle no logra tranquilizarlo.
En el escritorio de Ballerino la conversación deriva rápido hacia los puntos de fondo.

Anunciando primero que en la reunión participará el coronel Jaime Lepe para tomar apuntes, Pinochet va al grano. La institución, dice, está extremadamente inquieta por el trato que se está dando a los oficiales citados en los procesos de derechos humanos, por parte de los jueces, la prensa, la comunidad. El Ejército tiene derecho a exigir que el gobierno lo defienda de estas agresiones. Y por eso aspira, señor Vicepresidente, a que se pueda dictar una nueva ley de amnistía, para terminar con todo esto.
Además, el Ejército está sufriendo un grave deterioro de remuneraciones. Los oficiales ya no pueden mandar a sus hijos ni siquiera a los colegios católicos:
—Usted, que es tan amigo de los curas, usted sabe —enfatiza—. Y usted tiene un hermano militar, sabe lo que significa. Y usted... se preocupa de los carabineros, ¿ah?
Krauss no puede dejar de recordar que, según le han dicho, en privado Pinochet lo llama "El Guatón de los Pacos". Pero eso no llega a distraerlo.
—Y está ese ministro, Rojas, que no tiene ninguna identidad con el Ejército, que se dedica a hostigar. Y qué hablar del subsecretario. ¿Sabe cuántos decretos nos tiene parados? Cientos.
Mientras Correa toma notas, Krauss argumenta que ninguna de estas cosas justifica los movimientos de las últimas horas.

—Usted va a pasar a la historia —enfatiza— como una figura excepcional, porque luego de haber sido una autoridad con mucho poder, fue, primero, capaz de limitarlo, y luego, de respetar las normas que impuso... Y esto lo echa a perder. Estas materias me las puede plantear a mí, o al Presidente...

—No, si no hay caso. Tengo que recurrir a esto para me oigan.

—Mire, yo estoy dispuesto a considerar todas estas materias, pero siempre que se depongan las medidas.

—Ah, ¿usted está dispuesto? ¿Se compromete?

—Por supuesto. Cualquier gobierno democrático tiene la obligación de escuchar y contestar.

—Ah, en ese caso...

Y entra otro oficial, con un cuaderno.

—En ese caso, firmemos un acta.

—Yo le firmo lo que quiera —dice Krauss, y se apresura a corregir—: pero no veo para qué.

—Entonces, no va a cumplir.

—No, general, basta mi palabra. ¿Por qué un acta?

—Es que el ministro Rojas dice que quemamos los papeles...

—No, general —interrumpe Correa—. El gobierno ha dicho que no importa qué papeles se destruyan si las evidencias son conocidas por quien corresponde.

—Eso lo dijo usted, pus, ministro —interviene Lepe—, no lo dijo el ministro de Defensa.

Correa mira a Lepe con perplejidad. "Ah, puta", piensa, "éste es importante".

—Usted —remarca Krauss— está hablando con quien ejerce el mando supremo de la nación, y no tiene derecho a cuestionar eso. Yo me comprometo a que el ministro de Defensa va a revisar los decretos que usted dice que están parados.

—No, pero es que ese ministro tiene que salir.

—Ah, no, el ministro es del Presidente. Yo no soy el Presidente. El no es secretario de Estado mío.

—¿Y el subsecretario?

—Lo mismo. Es el Presidente quien dispone, usted lo sabe. Lo que sí puedo es exigir que se revisen estas situaciones que usted denuncia. Veamos el tema de los derechos humanos. Pongo a Burgos.

—Sí, lo conozco —dice Ballerino.

—Bueno, Burgos. Para que vea que hemos estado preocupados: el propio Presidente le encomendó ver estas situaciones. Y en lo de Defensa, trabajemos también. Eso lo puede ver Enrique.

—Ya —dice Pinochet—, con Ballerino. ¿Y empiezan ahora?

—No, pues: mañana. Pero usted depone las medidas.

—Lo vamos a considerar. Echemos a andar las comisiones.

Los ministros se van primero. Mientras Krauss se despide, el general Pinochet aparta a Correa:

—Ministro —le dice, con tono ambiguo—, yo parezco huevón, no más. Usted es zorro: pero yo también. No me engañe a Ballerino.

Esa noche, el coronel Juan Emilio Cheyre, jefe del estado mayor del Cuartel General de crisis, informa a los jefes de áreas del resultado de la reunión de Krauss y Pinochet. Las conversaciones se suceden entre coroneles y tenientes coroneles.

Por teléfono:

—Increíble. Estos huevones no conocen su poder.

—Sí, pero hay que esperar. Aylwin puede dejar la cagada. Capaz que llame a retiro a mi general...

En un auto:

—Si pasa algo grave, si llegamos a un golpe, ¿te pliegas?

—No. Prefiero irme a retiro.

Los hombres del Cuartel General forman un equipo de elite directamente ligado a Ballerino. Bajo el coronel Cheyre, se dividen en dos grupos. El primero es una secretaría permanente, integrada por el coronel Luis Clavel, el teniente coronel Eduardo Convalía, el teniente coronel Navarrete y el mayor Gárate. El segundo es el departamento de análisis, subdividido en tres campos: tendencias políticas, a cargo del coronel Roberto Arancibia; comunicaciones, con el coronel Jaime García; y judicial y derechos humanos, en manos del teniente coronel Juan Miguel Fuente-Alba y el mayor Gárate.

A este núcleo básico, pieza dinámica para que el "boinazo" se expanda más allá de los cheques, se agrega, en los días siguientes, una densa estructura de comisiones para reunir y seguir las demandas: la jurídica, a cargo del brigadier general (J) Torres Silva, apoyado por Fuente-Alba; la de bienes, encabezada por el brigadier general Hernán Abad; la política, dirigida por el mayor general Concha; la de finanzas, con el brigadier general Aurelio Palominos. Con la más crítica, la de asuntos administrativo-institucionales, surge un conflicto en cosa de días: primero queda a cargo del brigadier general Richard Quaas, subjefe del Estado Mayor y por tanto subordinado de Ballerino.

Pero cuando voces atentas le hacen ver a Pinochet que con ello Ballerino quedará al mando de toda la crisis, el general decide que esa responsabilidad pasará al jefe del Estado Mayor, el mayor general Rodrigo Sánchez Casillas. Y con eso la concentración de poder se diluye, aunque Ballerino retiene lo central.

A miles de kilómetros, en Lillehammer, durante la cena que comparten Aylwin, su esposa Leonor, el doctor Gonzalo Sepúlveda, Carlos Bascuñán y los ministros Silva Cimma y Boeninger, estalla una agria polémica cuando este último insinúa que habría que considerar el regreso del Presidente.

Al amanecer del lunes 31, Krauss, que ha pasado una mala noche, llama al Presidente Aylwin, ya instalado en la residencia oficial para huéspedes de Oslo, en Parkveien 10, y le informa de su reunión con Pinochet, subrayando que la presión se está descomprimiendo.

La apaciguada versión no tranquiliza a Aylwin, que se irrita ante la sola idea de que el Vicepresidente haya concurrido a la casa de Ballerino. Menos le gusta que se constituyan equipos bilaterales. Pero nada puede hacer. Tras los amargos reproches a Krauss, le confirma que no cancelará el resto de la gira: aún le queda Rusia, a pesar de que el jefe de gabinete de Boris Yeltsin no ha podido dar seguridades de que la temperancia de su jefe le permita asistir a la recepción del mandatario chileno.

Krauss soporta la reprimenda sin saber todavía que el movimiento militar continúa. Esa mañana, los generales llegan en traje de campaña al aniversario de la Escuela de Infantería, que se celebra con la escenificación de la toma de una radio por un comando[6].

Pero a esa hora también llegan a La Moneda el mayor general Ballerino y el coronel Lepe, para iniciar las conversaciones con el ministro Correa, que se hace acompañar por su jefe de gabinete, Ramiro Pizarro, en el *bunker* de La Moneda. El mayor general viene con un *dossier* de problemas. Y los repasan:

- Los decretos pendientes en Defensa, estimados en más de 100[7], para lo cual acuerdan crear una comisión combinada entre la Subsecretaría de Guerra y la Secretaría del Ejército.
- La regularización de los bienes inmuebles en manos del Ejército cuya propiedad no ha sido traspasada. La solución será vista por el ministro de Bienes Nacionales, Luis Alvarado, con el director del Comando de Ingenieros, brigadier general Abad, en 30 días.
- Los problemas de Famae, a la que se le ha retenido un decreto para vender 12 carros Mowag al Ejército; pese a que los reparos del ministro son correctos —hay un sobreprecio importante—, para esta mañana el decreto ya ha sido firmado. Además, Famae requiere un crédito Corfo y la firma de decretos supremos para varias exportaciones. Ambas cosas son aprobadas.

- La modificación propuesta por el gobierno al Ceremonial y Protocolo disminuye la importancia del Ejército. Aquí Correa se siente sin facultades: la petición queda pendiente hasta que regrese el Presidente.
- El caso de los cheques, que será tratado por el brigadier (J) Romero con un miembro del CDE.
- La posibilidad de una conmemoración conjunta de los 20 años del golpe de Estado: la verá otra comisión, con el director de la Secretaría de Comunicación y Cultura, Eugenio Tironi, y el jefe del Comité Asesor, el mayor general Concha.
- El proyecto para modificar la ley orgánica de las FF.AA.: el gobierno no le dará urgencia.
- Tampoco impulsará un proyecto anunciado para modificar la ley del Congreso que permitiría investigar actos administrativos previos al 11 de marzo de 1990.
- El Servicio Militar Obligatorio no se modificará.
- La ley de educación superior se mantendrá como estaba, desechando una modificación sugerida por el ministro de Defensa.
- Los bienes de Salvador Allende retirados por militares de su casa de calle Tomás Moro, que su viuda e hijas están reclamando judicialmente: Correa sólo puede comprometerse a que el subsecretario de Guerra hablará con la familia de Allende para bajar la presión[8].
- El caso del brigadier general Guillermo Letelier, que afronta juicios de cuentas por su gestión en la Corfo. Correa informa que pidió al subcontralor, Arturo Aylwin, apurar la tramitación de tales juicios.
- El Club Militar de Lo Curro, cuyo traspaso pide el Ejército, será visto por la comisión Alvarado-Abad.
- Los procesos pendientes por derechos humanos serán revisados caso a caso por Burgos y Torres Silva.
- La petición de una nueva amnistía queda pendiente hasta el regreso de Aylwin.

Los resultados entusiasman a Pinochet, aunque ordena mantener las medidas y elaborar un acta con los acuerdos. Correa y Ballerino escriben constancias por separado: pero su redacción es tan parecida, que resulta evidente que han sido concordadas.

Esa noche el general invita a cenar al almirante Martínez Busch, al general Ramón Vega y al general Rodolfo Stange y les informa en detalle.

EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DEL "BOINAZO"

28 DE MAYO: 10.30 horas: Ballerino-Krauss

1 Cambio de juez del caso Valmoval ✔
2 Titular de *La Nación* ●

28 DE MAYO: 13.00 horas: Ballerino-Krauss

3 Procesos por derechos humanos ✔
4 Ley de Amnistía ✖
5 Modificación de la LOC de FF.AA. ✔

30 DE MAYO: 20.00 horas: Pinochet-Krauss

6 Arreglo de remuneraciones ✖
7 Renuncia de ministro Rojas ✖
8 Renuncia del subsecretario Sánchez ✔

31 DE MAYO: 10.00 horas: Ballerino-Correa

9 Decretos atrasados ✔
10 Destinación de bienes inmuebles ✔
11 Autorización para Famae ✔
12 Traspaso de Lo Curro ✔
13 Arreglar el reglamento de protocolo ✔
14 Mantener ley de educación ✔
15 Bienes de Salvador Allende ✖
16 Caso del general Letelier ✔
17 20 años del 11 de septiembre ✖

1º DE JUNIO: 20.00 horas: Ballerino-Correa

18 Corporación Reparación y Reconciliación ●
19 Mantener competencia de Tribunales militares ✔
20 Construir cárceles militares ●

22 DE JUNIO: 17.00 horas: Sánchez Casillas-Rojas

21 Reposición de fondos de catástrofes ✖
22 Destinación de playa en Lluta ✖
23 Capacitación laboral de conscriptos ✔
24 Compra de 10 helicópteros ●
25 Adquisición de material para Ingenieros ✔

El martes las guardias y los generales vuelven a amanecer camuflados. A la segunda reunión Ballerino asiste con Torres Silva, Lepe y el teniente coronel Fuente-Alba. Correa está con Burgos. El tema central son los procesos por derechos humanos, para los cuales se toman dos acuerdos: lograr que las citaciones a oficiales se hagan en forma reservada y apurar la tramitación de los casos. Además, explorarán la posibilidad de que la Corte Suprema emita un auto acordado interpretando la amnistía para sobreseer sin investigar.

Sólo tres temas nuevos aparecen esta vez:

- La Corporación de Reparación y Reconciliación, a la que se pedirá prudencia en sus investigaciones.
- El proyecto que modifica la competencia de los tribunales militares, al que no se pondrá urgencia.
- La creación de cárceles militares para el evento de que algún oficial pueda ser condenado. Correa declara que el gobierno está de acuerdo, y que sólo falta saber si es más expedita la vía administrativa o una ley.

En teoría, tras la reunión, con todas las comisiones en marcha, las razones para continuar el alerta militar se han extinguido. Así lo confirma Ballerino a Correa.

Pero más tarde, Pinochet llama a La Moneda:

—Ministro... —dice.

—Vicepresidente —corrige Krauss.

—Vicepresidente, no se ha cumplido lo que convinimos.

—¿Cómo que no? Están trabajando.

—No, pero la salida del ministro Rojas.

—General, le dije categóricamente que eso no entraba.

—¿Y el subsecretario?

—Tampoco.

—Bueno, quiere decir que se mantienen las medidas.

—Muy bien, general, usted toma sus decisiones. Pero yo he cumplido.

Poco después Ballerino hace el intento con Correa:

—Enrique, mi general dice que no hay arreglo si no sale el ministro de Defensa.

—No, Jorge, en eso no vamos a ceder un milímetro.

—Pero es que me pidió que te dijera que si no se cumple esto, va a mover tropas en algunas ciudades.

—Eso es inaceptable —dice Correa, intuyendo que el general está en el límite—. Dile que mueva las tropas que quiera. Y se atendrá a las consecuencias, supongo.

Media hora después, Ballerino llama por separado a Krauss y Correa. Las medidas están suspendidas.

El miércoles 2 de junio los uniformes se normalizan. Ese día aterriza en Santiago el jefe de gabinete de Aylwin, Carlos Bascuñán, que ha debido separarse de la gira debido a la enfermedad de una hija. De inmediato, en La Moneda, Krauss le expone los detalles de la situación. Bascuñán transmite el criterio del Presidente: no se debe continuar negociando.

La misma línea sigue el ministro Francisco Cumplido, que insta a Krauss a no aceptar más presiones y lo reitera en público. Cuando los militares protestan, Aylwin llama desde Rusia a Cumplido: y le halla razón a su ministro de Justicia.

El sábado 5 regresa Aylwin. Mientras el Presidente recaba opiniones, el 6 Pinochet asiste en Arica al Día de la Infantería. El miércoles 9 se reúnen en La Moneda:

—Cómo le va, Presidente —saluda Pinochet, sonriente.

—Mal, pues, hombre —dice Aylwin—, cómo me va a ir. Con esto que han hecho mientras yo no estaba... Mire, general, estoy muy herido: aquí ha hecho usted un acto de presión fuera

de todas las reglas, que causa un grave daño al país y a su imagen. Yo siempre he tenido las puertas abiertas para usted. Lo he tratado con respeto. A mediados de mayo lo recibí. ¿Por qué no me planteó nada de esto?

—Porque eso era para informarle del viaje a China.

—No, general, esa es una excusa. Aquí se ha producido un daño al país y a mi persona. Yo no merecía este trato de su parte, general.

—No, Presidente, cómo se le ocurre que iba a querer causarle daño. Algunas cosas se han magnificado...

—Nadie ha magnificado nada, general, y usted lo sabe. Quiero reiterarle que repruebo categóricamente su acción. Sin perjuicio de esto, estoy dispuesto a escucharlo y a revisar todos los problemas que tenga su institución, y a darles solución en cuanto sea posible.

—Mire, Presidente, le traigo una carpeta que muestra los decretos que nos han tenido parados en Defensa: 109 en total. Esto afecta a nuestro personal y a la marcha de la institución, hay gente perjudicada en sus ingresos[9]. Nos tienen los inmuebles trancados, no los quieren traspasar, casi 60. Y está lo de los juicios de derechos humanos. Mi gente está siendo condenada, no por la justicia, sino por la prensa, y especialmente la del gobierno...

—Pero yo entiendo, general —lo interrumpe Aylwin—, que esto se ha suscitado, en un primer momento, por una diligencia que ha ordenado el CDE en un proceso que afecta a uno de sus hijos...

—Eso es parte de la persecución —dice Pinochet, incómodo.

—¿Usted se da cuenta de que yo, como Presidente constitucional, no puedo andar interfiriendo en las decisiones de órganos autónomos? He sido profesor de Derecho Administrativo por muchos años, y siempre he tenido muy clara la necesidad de autonomía de ciertos órganos. Usted lo hacía de otra manera: pescaba el teléfono y llamaba a Mauricio Flisflisch y le decía que hiciera tal o cual cosa, y él la hacía. Pero yo no.

—No, pero las cosas no son así...

—Sí, general, son así.

—Mire, Presidente, llamaron al señor Piedrabuena y la cosa se está arreglando. ¿Ve que no son así? Pero hubo que llegar a esto.

—Espero que sea la última vez, general. La última. En cuanto a los juicios, han hablado de 500 casos, pero Burgos me ha dicho que son unos 180, de los cuales unos 15 son los más serios. Vamos a estudiarlo con detalle. Y vamos a buscar una alternativa de solución global. Recién he recibido una propuesta del abogado Miguel Alex Schweitzer, que fue ministro suyo[10]. Una vez que la haya estudiado, lo llamaré para que nos juntemos.

En los últimos 20 minutos de la cita, Aylwin hace pasar al ministro Rojas. Es una manera de respaldarlo, aunque ya ha tomado la crisis en sus manos.

El siguiente encuentro, en casa de Aylwin, se produce a primera hora del 6 de julio. El general está más relajado. Cuando plantea el caso del Club de Lo Curro, Aylwin se apresura:

—Se lo voy a traspasar en septiembre. Pero usted sabe que el ministro Alvarado y el general Abad han convenido una lista de propiedades que me podrían devolver a cambio, incluyendo el Palacio Ariztía, que lo pasaremos a la Cámara de Diputados. Además de eso le voy a pedir un terreno del regimiento Sangra, en Puerto Montt, y unas hectáreas en el morro de Arica.

—Puchas, lo del Sangra es complicado, porque pensábamos vender ese terreno para arreglar el regimiento, que está muy deteriorado, y hacer otras reparaciones en otras unidades. Déjeme estudiarlo[11].

Pinochet propone dictar una ley de muerte presunta para resolver los casos de procesos por desaparecidos. Pero el Presidente ya está pensando en ministros en visita especiales para hacerse cargo de los casos de derechos humanos, con plazo y condiciones de excepción. El general se muestra de acuerdo en principio.

Antes de irse, le dice al Presidente que está consciente de que algunos oficiales deben pasar a retiro.

—Ah, don Patricio, y este año, ¿usted va a requerir que se vaya algún general?

—No, general —dice Aylwin. Después recuerda que sí querría la salida del director de la DINE, Eugenio Covarrubias. Pero ya es tarde.

Más curioso todavía es el hecho de que, tal como hicieran antes Correa y Ballerino, el Presidente y el comandante en jefe intercambian actas privadas sobre sus conversaciones.

A lo largo de todo junio, las comisiones civiles—militares multiplican las reuniones. La actividad más intensa se registra en el grupo integrado por Jorge Burgos, el abogado Luis Arévalo, el auditor Torres Silva y el teniente coronel Fuente-Alba. Uno a uno revisan los 40 procesos más urgentes —casi todos por secuestro— y se reparten la tarea de hablar con los jueces para lograr su traspaso a la justicia militar.

Ballerino, preocupado de que la imagen pública del Ejército sea fortalecida —cosa que le parece crucial para que el gobierno cumpla sus compromisos— ordena al Comité Asesor que refuerce sus contactos con la prensa. El brigadier general Víctor Lizárraga, vicecomandante de la Tercera División, es traspasado en comisión de servicio para apoyar al Comité en esa labor[12]. Diversos oficiales son asignados para obtener crónicas favorables en algunos diarios y se elabora una lista de directores y redactores políticos con los que se mantendrá contacto permanente[13]. Lizárraga y los coroneles Cheyre y García son los más activos en esta misión.

Mientras el jefe del Estado Mayor, el mayor general Rodrigo Sánchez Casillas, agrega algunas nuevas peticiones en sus reuniones con el ministro Rojas y el subsecretario Sánchez, hacia mediados de mes el Presidente concluye que no puede mantener al subsecretario.

Entonces llama a Jorge Burgos:

—Lo voy a nombrar subsecretario de Guerra. Como usted sabe, Martita Wörner deja la subsecretaría de Justicia para ser candidata a diputada. Voy a pasar a Marcos Sánchez para allá, porque tampoco lo voy a dejar botado. Pero quiero que usted me recomponga las relaciones con los militares. El ministro es el duro; usted tiene que ser el blando.

¿Y el caso de los cheques, el origen de todo? Los abogados Alfredo Etcheberry e Isidro Solís, y luego el propio ministro Krauss, conversan con el juez Alejandro Solís acerca de él. El 28 de junio, el juez Solís acepta declararse incompetente y traspasar el expediente al Segundo Juzgado del Crimen. Poco después Solís será ascendido a la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda.

Notas

1. Ver Capítulo 19.

2. Este cambio es posible apelando al principio de radicación: si se considera que el eventual ilícito se inició en el Banco del Estado, corresponde al Quinto Juzgado; si, en cambio, se estima que comenzó en la Corfo, pasa al Segundo.

3. Detalles sobre esta negociación en: Otano, Rafael: *Crónica de la transición*, Editorial Planeta, Santiago, 1995.

4. En la versión original de este capítulo se afirmaba que "el peor papel" entre estas gestiones fue atribuido por altos funcionarios al ministro de Vivienda Alberto Etchegaray. No obstante que esa opinión es confirmada por varios de los protagonistas, en carta al autor el entonces ministro precisó que su única intervención consistió en una entrevista que concedió el 16 de junio a *La Segunda*, cuyo contenido fue autorizado por el Presidente Aylwin. La entrevista se habría originado en la versión de que, durante un momento de la crisis militar, el general Pinochet habría dicho: "Llamen a Molina o Etcheberry". Desconcertados por el mensaje, los ministros Krauss y Correa habrían interpretado que en verdad se refería a Etchegaray, un hombre reconocido por sus relaciones con la Iglesia Católica. Esta versión, y sobre todo la fecha de la entrevista, anulan la posibilidad de que la intervención se produjese en medio del conflicto, aun cuando los funcionarios políticos mantengan su calificación.

5. Un prolijo recuento sobre el proceso de las primarias: *Cómo ganó Frei el 93. La historia secreta de las primarias*. Revista *Hoy*, N° 1.057, 27 de octubre al 2 de noviembre de 1997.

6. Mery, Hugo: *Mensajes camuflados*. Diario *La Época*, Suplemento Temas, 6 de junio de 1993. Este artículo contiene uno de los más ajustados análisis de los hechos publicados en ese período.

7. El primer cálculo de los oficiales está abultado, por lo que esa noche reciben una severa reprimenda de Pinochet. La corrección definitiva sólo se realizará hacia fines de la semana.

8. El 12 de septiembre de 1973, el notario Rafael Zaldívar, con el coronel Jorge Court y el experto en arte Fidel Angulo, levantaron dos actas con los bienes hallados en la bombardeada casa de Tomás Moro 200. La primera registró 394 partidas; la segunda, dineros en dólares y en escudos que fueron entregados al secretario de la Escuela Militar, capitán Hernán Cortés Alvarez, para ser depositados en la caja fuerte de esa unidad. De los cuadros de Allende, en 1976 y 1977 el entonces ministro de Salud, general Fernando Matthei, entregó 34 a diversos organismos (Universidad de Chile, Comandancia en Jefe de la FACh, Dirección General de Salud, Corte de Apelaciones de Antofagasta). En 1990, el nuevo ministro de Salud, Jorge Jiménez, recuperó 36 cuadros (incluyendo un Picasso, un Guayasamín y dos Siqueiros), 16 cerámicas y 8 objetos y los devolvió a Hortensia Bussi. La viuda también logró recuperar del Banco Central un juego de medallas de oro, talonarios de cheques y la billetera de Allende. En octubre del 91, el coronel Lepe fue al Banco Central y abrió dos sobres: uno, con billetes de diversos países y otro con cheques por US$ 41.000; luego retiró el inventario de esas especies. Sin embargo, cuando el ministro Rojas pidió investigar el destino de los bienes, el mismo Lepe respondió (CJE. SEC. GRAL (R) Nº 4180/104) que la institución carecía de antecedentes. El 7 de mayo de 1993, la sucesión de Allende interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones requiriendo la devolución de los bienes. El escrito hacía notar que, fuera del acta de Tomás Moro, habían sido incautados también cinco autos, tres de los cuales aparecieron más tarde vendidos por el Ejército a particulares; y la yegua Aceituna y la potranca Furia, que fueron retiradas desde un fundo en Olmué por un comando naval y llevadas a la base El Belloto. Para entonces, el economista Juan Eduardo Herrera calculaba que el dinero depositado en la Escuela Militar alcanzaba, en moneda actualizada, a US$ 23.335 y $ 50.613.024. A requerimiento de la Corte, Rojas ofició a Pinochet insistiendo en investigar el destino de los bienes. En agosto de 1993, Pinochet reiteró la versión dada antes por Lepe y únicamente aceptó entregar los sobres revisados por ese coronel, sin pronunciarse sobre lo guardado en la Escuela Militar. En noviembre, la Corte de Apelaciones ordenó la devolución de todos los bienes, fallo que fue refrendado más tarde por unanimidad en la Corte Suprema. Otra vez no hubo respuesta del Ejército. Ante la insistencia de Isabel Allende, el siguiente ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma ofreció devolver los US$ 8.666 consignados en la Escuela Militar, sin actualización. Más tarde, la sucesión logró introducir una indicación en la ley de devolución de bienes que le abriría otro camino para recuperar su herencia o ser indemnizada por ella. Un recuento más pormenorizado de estos hechos apareció después de la publicación de este capítulo: Páez, Claudia: *El botín de guerra*. Revista *Hoy*, Nº 1.102, 7 de septiembre de 1998.

9. Con posterioridad se hizo común afirmar que los decretos afectaban al personal. En el documento entregado por Pinochet, 44 aparecen clasificados como "administrativos y financieros"; 59 son de bienes e infraestructura; y 6 con destino desconocido. De ellos, sólo dos podrían afectar situaciones de personal, por lo que la acusación contra Sánchez era, en esto, del todo injusta.

10. Ver Capítulo 21.

11. Finalmente, el Ejército retuvo el predio de Puerto Montt y cedió un paño en el Morro de Arica.

12. La intervención de Lizárraga significó un cierto desplazamiento para Concha, cuyo Comité Asesor tuvo escasa presencia en la crisis. A fin de año, Lizárraga fue nombrado nuevo jefe del Comité.

13. La nómina incluye a: Joaquín Villarino, Blanca Arthur, Pilar Molina, Cristián Zegers, Héctor Olave, María Eugenia Oyarzún, Ascanio Cavallo, Hugo Mery, Marcelo Rozas y Roberto Pulido, además de "contactos" no especificados en TVN, UC-TV, Megavisión y Chilevisión.

21

La caída de la dupla dorada

La "ley Aylwin" muestra, con su fracaso, las limitaciones del gobierno de Aylwin en sus días finales. En un nivel más oculto precipita también la caída de los dos protagonistas del diálogo civil-militar: el ministro Enrique Correa y el general Jorge Ballerino.

Apenas regresa de Europa, el 5 de junio de 1993, el Presidente Patricio Aylwin inicia las gestiones para afrontar lo que parece la más importante reivindicación de los militares: los juicios por violaciones a los derechos humanos. Aplacar esas inquietudes no es el único motivo. Durante las horas difíciles del "boinazo", el Presidente ha fijado una consigna para sus ministros: este gobierno no desea dejar problemas de derechos humanos pendientes para el que lo suceda.

En los días previos, el debate ha sido intenso a través de la prensa, pero a Aylwin le han llamado la atención dos intervenciones. Una es del abogado Miguel Alex Schweitzer, ex canciller del régimen militar, que se ha mostrado sensible al problema de las familias de los desaparecidos, promoviendo un mecanismo de secreto para que los que conocen sus paraderos puedan revelarlos, amparados al mismo tiempo por una ley interpretativa de la amnistía que permita cerrar los procesos.

Como acostumbra a hacer cuando está concentrado en un problema, Aylwin llama personalmente a Schweitzer y oye los detalles de su idea[1]. La ley interpretativa no le gusta, pero Schweitzer tiene una alternativa: un auto acordado de la Corte Suprema que uniforme la aplicación de la amnistía.

La segunda opinión que lo inquieta es la del abogado José Zalaquett, miembro de la Comisión Rettig, que en una entrevista en *La Segunda* ha afirmado que el gobierno puede resolver el problema militar sin contradecir la política que ha seguido ante estos casos[2].

Otra vez Aylwin invita a Zalaquett a La Moneda, aunque no a una cita personal, sino a una reunión que el 10 de junio —un día después de que el Presidente se reúne con el general Augusto Pinochet por primera vez tras el "boinazo"— encabezan los ministros Enrique Correa y Edgardo Boeninger, con los abogados Alfredo Etcheberry, Luis Ortiz, Gustavo Villalobos y José Zalaquett. El 15, Zalaquett redacta un memorando para el Presidente cuyo planteamiento central es que un gobierno democrático puede afrontar limitaciones para resolver estas heridas sociales, pero no debe añadir "ni un átimo de legitimidad" a los intentos previos por consagrar la impunidad[3].

En los días siguientes, las consultas del Presidente se suceden: profesores de Derecho Penal, partidos políticos, dirigentes religiosos, agrupaciones de derechos humanos. Cuando cree haber reunido material suficiente, encarga al ministro de Justicia Francisco Cumplido que inicie el

estudio de un proyecto de ley para acelerar la tramitación de los procesos y resolver el caso de los desaparecidos, objetivos en principio contradictorios.

El 29 de junio convoca en La Moneda a una reunión ampliada. Asisten los ministros Krauss, Cumplido, Correa y Boeninger, los abogados Alfredo Etcheberry, Luis Ortiz, Manuel Guzmán, Jorge Correa, Alejandro González, Gustavo Villalobos y José Zalaquett, y los dos abogados que han comenzado a trabajar con el Ejército en los casos urgentes, Jorge Burgos y Luis Arévalo.

Las reuniones se suceden hasta los primeros días de julio. También los memorandos. Como va resultando evidente, el centro del problema son los casos de desaparecidos, que no se pueden cerrar mientras no se establezcan fecha y circunstancias de muerte.

Zalaquett cree posible crear mecanismos que permitan obtener la verdad y garantizar la reserva a quienes den información. Arévalo se inclina por la idea de los ministros en visita especiales, que podrían declarar con cierta laxitud la muerte presunta. Jorge Correa concuerda con los ministros especiales y el secreto, pero enfatiza dos cosas adicionales: 1) el gobierno no se puede comprometer a cerrar procesos y 2) no se debe perder de vista que el verdadero origen del "boinazo" fue el caso de los cheques. Luis Ortiz sugiere agregar un artículo al Código de Procedimiento Penal para que los jueces puedan declarar probada una muerte mediante presunciones fundadas. El ministro Cumplido opina que los militares no tienen incentivos para declarar la verdad, y que la eficacia de los ministros especiales sólo podría asegurarse si los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas estimulan al personal uniformado a colaborar con datos[4].

El 6 de julio[5], Pinochet propone a Aylwin dictar una ley de muerte presunta o una ley interpretativa para que los jueces apliquen siempre la amnistía de un mismo modo: sin investigar. Pero para entonces el Presidente ya ha afinado la idea de los ministros en visita especiales, y el comandante en jefe se muestra receptivo. Junto con ello fijan el universo de casos, donde sólo se incluirían los cubiertos por la ley de amnistía de 1978 (ver cuadro).

El ministro Enrique Krauss se entera tarde de que un proyecto de ley está en curso. Hasta entonces Krauss es partidario de que los procesos se vean caso a caso, sin producir ninguna legislación excepcional. Y, atenazado por la idea de que el Presidente crea que las negociaciones

CASOS PENDIENTES (JUNIO 1993)

UNIVERSO DE CASOS		NATURALEZA DE LOS HECHOS	
1. Procesos de tramitación:		1. Por secuestro o desaparecimiento:	
a. En sumario 1ª instancia	166	a. En tramitación	103
b. Ante Corte Suprema	15	b. Sobreseídos temporalmente	377
c. Ante Corte Marcial	3		
		Subtotal	**480**
Subtotal	**184**		
		2. Por homicidio u otro:	
2. Procesos sobreseídos temporalmente:		a. En tramitación	64
a. En justicia ordinaria	568	b. Sobreseídos temporalmente	191
b. En justicia militar (*)	32		
		Subtotal	**255**
Subtotal	**600**		
		3. No identificados hasta ahora	**49**
TOTAL	**784**	**TOTAL**	**784**

(*) En su primer informe al Presidente, el auditor general del Ejército agregó en estas líneas otros 229 casos sobreseídos temporalmente, pero luego se detectó que correspondían a hechos posteriores a la ley de amnistía.
Fuente: Memorándum del ministro de Justicia al Presidente de la República, junio de 1993.

del "boinazo" conducen a una ley, decide introducirse a su despacho minutos antes de que reciba al Presidente de Portugal, Mario Soares. La prisa logra que por primera vez desde 1990 lo tutee:

—Patricio, ese proyecto es un disparate —dice, atropelladamente—. No puedes ceder más. No hay ningún compromiso.

—Te entiendo, Enrique —dice Aylwin—, pero no se trata de ceder. Tal vez podamos arreglar este problema.

El 12 de julio vuelven a reunirse en casa de Aylwin. El general trae su contrapropuesta. Acepta los ministros en visita, pero añade cuatro condiciones: dictar normas interpretativas para asegurar la aplicación de la amnistía; concordar entre el gobierno y el Ejército los nombres de los ministros; incluir normas expresas de privacidad para las declaraciones; y, visto que el Ejército no tiene antecedentes sobre los desaparecidos, estudiar un mecanismo para aplicar las normas anteriores.

El siguiente encuentro debe producirse el 20 de julio. Pero el 19, el mayor general Jaime Concha, jefe del Comité Asesor, visita al director de la Secretaría de Comunicación y Cultura, Eugenio Tironi, y le anticipa el contenido del memorando que han preparado para el general. La propuesta del gobierno, dice, se está alejando de lo que desea el Ejército. Para que se ajuste a ello se requiere afinar los cuatro requisitos ya planteados al Presidente: asegurar una sola interpretación de la amnistía, ahora mediante un compromiso formal entre Pinochet y Aylwin; nombrar a los ministros de común acuerdo entre ambos; garantizar que los jueces den valor probatorio a declaraciones genéricas del Ejército[6]; establecer una norma por la cual los sobreseimientos temporales se conviertan en definitivos por "la sola disposición de la ley"; y limitar la competencia de los ministros a los casos que se llevan en tribunales civiles, en ningún caso de la justicia militar.

De modo que cuando el general llega, el Presidente ya sabe lo que dirá. En contrapartida, le tiene el borrador del proyecto preparado por Cumplido. Lo que lo desconcierta es que, en ese cierto aire de intimidad que producen estos encuentros, Pinochet se sale bruscamente de libreto:

—Lo que hay que hacer, don Patricio, es una amnistía general, para todos, y salen los que mataron a mis escoltas, y vuelven los que están en Suecia y se terminan los procesos. Y usted y yo nos vamos al Senado...

Aylwin reacciona con vacilación. Un proyecto para permitir que sea senador vitalicio pese a que su mandato es de sólo cuatro años ha sido rechazado unos meses antes por la oposición de derecha, y ese desaire se ha convertido en uno de los momentos más desagradables de su gestión. ¿Qué quiere decir ahora Pinochet?

—No, general —dice—, creo que no es viable...

Cuando se despiden, la amnistía queda resonando en Aylwin. Y como le parece que no ha sido suficientemente categórico, cuando le envía su acta privada sobre la reunión, adjunta una carta en que le subraya que la idea "me resulta imposible tanto desde el punto de vista moral como político".

Al día siguiente, el 21, Pinochet envía al Presidente un oficio en el que reitera la necesidad de compromisos personales y propone un nuevo texto para el proyecto. Pero Cumplido, que nota que en él se fijan procedimientos exclusivos para los militares y fórmulas de sobreseimientos automáticos, advierte al Presidente que en esas condiciones el proyecto será rechazado.

En los grupos de derechos humanos cunde la inquietud. No se trata sólo del proyecto, sino sobre todo del hecho de que los tribunales están traspasando algunos casos candentes a la justicia militar.

El peor de todos es el del secuestro de los hermanos Jorge Elías y Juan Carlos Andrónico Antequera, donde, en este mismo mes, la Cuarta Sala de la Corte Suprema traspasa la competencia del proceso a la justicia militar, que absuelve al principal inculpado, el teniente coronel Fernando Lauriani y cierra el caso aplicando la amnistía. El hecho tiene significación porque, apenas cinco meses antes —en los días de la destitución de Hernán Cereceda—, la Primera Sala

de la misma corte había confirmado el procesamiento de Lauriani; lo único nuevo en julio es que en el intertanto el Ejército ha reconocido que Lauriani pertenecía a la DINA y que la casa clandestina de José Domingo Cañas, donde fueron vistos los hermanos Andrónico, era "un recinto militar", datos negados durante casi dos décadas[7].

Como el de los hermanos Andrónico, otros casos han comenzado a ser traspasados a la justicia militar y cerrados velozmente[8].

A primera hora del 26 de julio, el Presidente se reúne con todos los generales del Ejército presentes en Santiago, en el *bunker* de La Moneda. La exposición que realiza es cruda y apunta a subrayar que no habrá solución sin colaboración para establecer el destino de los desaparecidos. Por lo demás, insiste, los oficiales en servicio activo comprometidos en los casos conocidos son pocos: alrededor de 20. Y los sobreseimientos temporales de que tanto se ha quejado la institución fueron dictados, en su mayoría, durante el régimen militar.

Quince generales intervienen con preguntas tras el discurso del Presidente. Uno de ellos, Guillermo Garín, propone una amnistía amplia y total, semejante a la que en 1894 zanjó las heridas de la Guerra Civil; otro, Guillermo Sánchez, plantea si alguien se ha preguntado por el daño que se infiere a los oficiales jóvenes cuestionando al Ejército; un tercero, Luis Cortés Villa, se queja por la construcción, en el Cementerio General, de un monumento a los detenidos desaparecidos y ejecutados desde 1973; y aun otro, Ricardo Izurieta, pide que se reconozca que lo positivo del régimen militar fue superior a lo negativo para dar tranquilidad a los oficiales que se sienten hostigados.

En los días siguientes, Aylwin se reúne con los mandos de la Armada, la FACh y Carabineros, ante los cuales repite sus explicaciones.

Esa misma semana, el general Ballerino recibe del general Pinochet la autorización para juntarse con el presidente del Partido Socialista, Germán Correa, y el del Partido Radical, Carlos González Márquez, a quienes expondrá, por separado, los puntos de vista de la institución y sus reservas acerca del proyecto que impulsa el Presidente.

Ballerino no puede imaginar que ese tipo de reuniones comienza a sellar su destino.

Mientras La Moneda y el Ejército realizan sus febriles movimientos en torno a la ley, en los tribunales se espera con tensión el fallo que está pronto a dictar el ministro Adolfo Bañados en el caso Letelier, que podría condenar al ex director de la DINA, el general (R) Manuel Contreras, y a su subordinado el coronel Pedro Espinoza.

Para coincidir con la brusca reactivación del caso, el programa *Informe Especial*, de Televisión Nacional, ha entrevistado al ex agente Michael Townley en Estados Unidos y se rumorea que habrá impactantes revelaciones en su testimonio. A fines de julio, inquieto por las repercusiones que podría tener el programa, el director de TVN, Jorge Navarrete, encuentra a su amigo Jorge Burgos en un partido de la Universidad de Chile y le ofrece ver una copia del video. Pero el amigo Burgos es también subsecretario de Guerra, y lo primero que hace es informar al ministro y al Presidente sobre lo explosivo del contenido en momentos en que el gobierno está próximo a anunciar su proyecto.

Curiosamente, Aylwin no piensa primero en eso, sino en el juez Bañados. Debido a una indirecta relación familiar, conoce desde hace años el temperamento de Bañados, su quisquilloso recelo hacia las presiones, su reacción alérgica a las interferencias políticas; alguna vez, como abogado, Aylwin sufrió una amonestación suya. Y ahora teme que la entrevista de Townley pueda ser entendida por Bañados como una presión del gobierno; hasta lo cree capaz de cambiar su fallo.

Entonces, el martes 2 de agosto le pide al ministro Correa que consiga la postergación de la emisión de *Informe Especial*. El ministro se opone: una intervención de este tipo destruye la política de autonomía de TVN. Pero Aylwin no cede, y Correa, molesto, se ve obligado a llamar a Jorge Navarrete y al presidente del directorio de TVN, su ex asesor Jorge Donoso, para decirles que, aunque no está de acuerdo, en nombre del Presidente solicita la postergación.

Esa mañana circula en La Moneda la versión de que Correa podría renunciar. Boeninger, inquieto ante esa posibilidad que considera catastrófica, le propone almorzar y se van juntos al barrio Bellavista.

—No —despeja Correa—, no voy a hacer nada contra el Presidente, Edgardo. No le voy a hacer la canallada de renunciar en un momento como éste.

Pero en la tarde urde la manera de dejar en claro su desacuerdo sin crear una crisis política. Aprovechará una faringitis para ausentarse del palacio por doce días, con una licencia médica perfectamente en regla.

Esa noche lo llama Burgos para disculparse por haber provocado la crisis. Pero Correa, que aprecia el pragmatismo de Burgos, no está enojado con él, sino con Navarrete; paradójicamente, la tentación de removerlo sería la contradicción final con la política de autonomía.

Por fin, el 5 de agosto de 1993, el proyecto de la llamada "ley Aylwin" ingresa a la Cámara de Diputados para iniciar el más tortuoso y agónico recorrido legislativo de la transición". La calificación de "suma urgencia" que le asigna La Moneda tiene algo que ver: significa que la Cámara debe revisarla en diez días, y que, tras su aprobación plenaria, tendrá que verla el Senado en otros diez.

Mucho antes de que esos apretados plazos se cumplan, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos inicia una huelga de hambre que suscita la solidaridad de toda la Concertación, más allá de que sus dirigentes sigan los criterios del Presidente. El PS se ve envuelto en un espeso conflicto de lealtades entre el pragmatismo y el exigente clamor de sus bases, mientras el PPD se siente atenazado por los informes críticos de Zalaquett, apoyados en forma irrestricta por el presidente Jorge Schaulsohn.

Tratando de salvar un proyecto que se ve destinado al abismo, los diputados del oficialismo se esfuerzan por introducirle enmiendas; es lo que intentan Viera-Gallo, Gutenberg Martínez, Aldo Cornejo y otros. Carlos Smok, PS, trata de hablar con el Presidente para exponerle su rechazo: no consigue audiencia.

El martes 31 de agosto, Pinochet visita a Aylwin para decirle que, en las condiciones en que se discute, el proyecto le parece inapropiado. Al día siguiente, después de largos conciliábulos, ásperas contradicciones y una esquiva ambigüedad en sus conversaciones con el Presidente, el PS y el PPD votan en contra del proyecto. Una circunstancia adicional precipita ese fracaso: el mismo día, la justicia militar dicta el sobreseimiento definitivo en el caso del socialista Eduardo *Coco* Paredes, que fue arrestado en La Moneda el día del golpe.

La conclusión es obvia: esas cortes no tienen interés en buscar la verdad y, por tanto, la sola posibilidad de que algunos de sus miembros sean designados como ministros especiales hace inviable el proyecto.

Ese miércoles se suceden las reuniones. En la noche, los dirigentes de la Concertación llaman al Presidente para pedirle que retire la urgencia del proyecto, lo que es una forma de dejarlo morir en silencio.

Septiembre se inicia con la crispación de ese fracaso. El general Pinochet vuelve a hablar sobre el Ejército alemán en el Rotary Club, y agrega unas agrias calificaciones sobre el proyecto rechazado en la Cámara. El aniversario del golpe —el mismo que en algún momento se quiso ordenar como una conmemoración de unidad— deviene el más violento de todos y en la Parada Militar las rechiflas se concentran, con fuerza redoblada, en el ministro de Defensa.

Quien debe anunciar el retiro de la ley es, irónicamente, el ministro Correa, retornado de su licencia. Una de esas tardes umbrías, a solas con el Presidente, aparece por primera vez el asunto de su discrepancia. Hasta entonces, ambos han estado enojados en silencio.

—Siento mucho lo que ha ocurrido, don Patricio —dice el ministro—. Para usted puede ser una incomodidad que yo siga...

—No, Enrique —dice Aylwin—. Aquí somos todos grandecitos, y yo puedo permitir que mis ministros tengan opiniones distintas.

En la larga conversación repasan los problemas con la Concertación, el fracaso de la ley, la estrategia de Pinochet, el papel de Ballerino.

—Bueno —interrumpe Aylwin, de pronto—, si queremos llegar a la médula-médula de nuestras diferencias, Enrique, hay que empezar por decir que usted tiende a la negociación política con los militares, mientras que yo sólo creo en la razón jurídica. Y estoy convencido de que si les damos pie para negociaciones políticas con el poder civil, le ocasionamos al país un daño enorme.

Correa está de acuerdo: le parece que esa descripción sintetiza bien la divergencia. Cuando se despiden, ambos sienten que la tensión se ha disipado.

Pero Correa entiende que su protagonismo está concluyendo mucho antes que el gobierno.

Dos semanas más tarde, en la primaveral mañana del 13 de septiembre, Victoria Rencoret, la ágil secretaria que ha acompañado a Ballerino en los últimos años, oye por enésima vez las quejas del general acerca de que ve un poco borroso.

—¿Sabe qué más, mi general? —dice ella—. Vaya de una vez al oculista. Le voy a pedir hora de inmediato en el Hospital Militar.

Treinta minutos más tarde, pasadas las 9, Ballerino está en manos del doctor Orvietto. Y comienza lo previsible: las letras, las luces, las pruebas. Cuando el doctor le tapa el ojo izquierdo, Ballerino protesta:

—Pero destápeme el derecho, porque así no veo nada.

Entonces el médico detecta que el mayor general carece completamente de visión en el ojo derecho. Ballerino no regresará a la oficina hasta después de las 14, con el semblante sombrío. La razón de su ceguera parcial son varios tumores que presionan el nervio óptico. Necesita una operación de urgencia, pero no en Chile, sino en EE.UU., con la tecnología apropiada.

El 16 de septiembre Ballerino vuela con su esposa al Hospital de la Universidad de California, en San Francisco. Los acompaña el médico de cabecera del propio general Pinochet, el doctor Luis Palma, con la tácita misión de informar al comandante en jefe el verdadero estado de situación.

El 24, el doctor Charles Wilson extirpa el tumor directamente montado sobre el nervio óptico. Aunque las biopsias muestran que se trata de tejido no canceroso, pertenece a una de las categorías tumorales más virulentas, las reproductivas, de alta incertidumbre. El tratamiento debe proseguir con aplicaciones de cobalto.

Pero Ballerino se empeña en apurar la recuperación. Se niega a permanecer en San Francisco —pese a que el Ejército paga los gastos— y se traslada a Miami para preparar el regreso antes de la junta que decide los ascensos a brigadieres generales. En Miami se encuentra con Lucía Pinochet Hiriart, que sufre el impacto de la primera visión: Ballerino con la cabeza rapada, los gruesos puntos de la trepanación a la vista, el aspecto cadavérico post-operatorio.

El viernes 8 de octubre, como luchando contra ese estado, duerme poco, se empeña en caminar, rechaza las sillas de ruedas y se embarca hacia Santiago.

El sábado 9 llega a su casa exhausto. Y entonces pasa a visitarlo el general Pinochet, que a su turno acaba de regresar de unas vacaciones en Río de Janeiro[10]. Aunque Lupe Astorga le explica que se ha dormido tras un viaje agotador, Pinochet insiste en verlo. Se para junto al lecho con el semblante ceñudo; y no oye las explicaciones de Lupe Astorga, porque, como es sabido, al general le disgustan las charlas sobre enfermedades.

Tras la junta calificadora de los generales, el 14 de octubre el general Pinochet envía al Presidente la nómina de coroneles y brigadieres que podrían ascender a brigadieres generales, dando inicio al proceso de renovación de la cúpula militar.

Pese a que percibe la deteriorada posición de su ministro de Defensa, Aylwin responde que la lista debe ser analizada con Patricio Rojas. ¿Por qué insiste en que, justo en el año final, el general siga el canal formal que tantas veces ha sobrepasado? ¿Es un postrer gesto de respaldo a Rojas? Sin duda. Pero resulta altamente funcional con una segunda razón, que todo el gobierno

conoce: este es el año del posible salto del mayor general Ballerino, y el Presidente está decidido a bloquearlo.

Ahora, tanto él como su ministro han encontrado el motivo perfecto en la inesperada operación de San Francisco. Rojas recupera su autoridad de médico para dar su diagnóstico:

—Las operaciones a la cabeza nunca tienen una recuperación del ciento por ciento.

Rojas fija la cita con Pinochet para el 20. Y ese día no se centra en los ascensos, sino en otros cinco temas pendientes: la creación de un comité para analizar las auditorías realizadas en Famae, que han revelado la existencia de un endeudamiento de 9.000.000.000 de pesos al fin de 1992; la necesidad de llegar a un número de 1.000 ex CNI exonerados para el 10 de marzo de 1994, cumpliendo un compromiso tomado con el Congreso al aprobarse el presupuesto del nuevo año; la modificación de la ley de salud de las FF.AA. y su incorporación al sistema que rige al resto de la nación, con cotizaciones más altas; la lista de 14 oficiales en servicio activo con problemas judiciales por derechos humanos, "excluyendo deliberadamente", según dice el informe del ministro, al coronel Jaime Lepe; y la situación de los agentes *Charly* y *Pepe*, denunciados por espionaje al gobierno[11], que siguen en funciones en el Ejército.

Como ya es normal, el comandante en jefe sale enfurecido del despacho de Rojas. Le ha tocado temas que no estaban previstos y para los cuales no venía preparado, y apenas se ha referido a la definición de los ascensos. En los días que siguen, la polémica secreta entre La Moneda y el edificio de Zenteno se circunscribe al caso de Famae y a las elusivas respuestas de Pinochet para completar la salida de 1.000 ex CNI[12].

El 28 de octubre, Ballerino viaja por segunda vez a Estados Unidos para internarse en el Hospital de la Universidad de California, donde el doctor Wilson debe extirparle dos tumores residuales en las cercanías del nervio óptico y proseguir las radiaciones.

Entendiendo que la callada postergación que sufre el proceso de ascensos y retiros del alto mando tiene que ver con esto, el gobierno ha estado insistiendo en acelerar la conformación de la cúpula militar. Y para eso se reúne, el mismo 28, el Presidente con Pinochet.

—Bueno —dice Pinochet—, este año se tiene que ir Lúcar, porque cumple los 38.

—¿Y en quién ha pensado? —dice Aylwin.

—Bueno, en Ballerino... Pero también podría seguir Lúcar, si usted quiere, usando la ley Canessa.

—Eso. Eso vamos a hacer, general. Vamos a aplicar la ley Canessa para que Lúcar no tenga que salir. Ballerino no sería conveniente. Usted sabe que lo aprecio, que en algunos momentos él ayudó a mi gobierno, pero como ha tenido que tomar muchos contactos con ministros, con parlamentarios y con políticos, creo que no sería conveniente. Se le ha visto como un general político.

—Bueno, en ese sentido —replica Pinochet, con inesperada condescendencia—, tal vez no sería conveniente.

(A Ballerino le indignará más tarde la pasividad del general ante la imputación de Aylwin. Después de todo, ¿quién le encargaba conversar con ministros y políticos? El general. ¿Y quién facultaba a sus ministros y políticos para hablar con él? El Presidente[13].)

Cuando pasa otra semana sin nuevos oficios y noticias, al iniciarse noviembre Aylwin llama a Pinochet por teléfono para insistir en que concluya el proceso. No, dice el general, es que el ministro metió otros problemas; además, ninguna disposición exige terminar el proceso en octubre; y por último, está la proximidad de las elecciones, que hace conveniente la estabilidad del alto mando, incluso ya están nombrados los jefes de plaza...

El 3 de noviembre despacha un oficio al Presidente donde incorpora sólo dos cambios en los primeros cuatro cargos del Ejército. Dado que según su proposición deberían pasar a retiro los mayores generales Rodrigo Sánchez Casillas y Miguel Espinoza, Ballerino, que sigue en antigüedad a Sánchez Casillas, asumiría la jefatura del Estado Mayor y el mayor general Richard Quaas se haría cargo de la Inspectoría General.

Cuando se vuelven a reunir, el martes 16, el general parece venir concentrado en el tema de la salud:

—Lo veo muy bien, Presidente. Buen físico.

—Usted también se ve bien, general.

—Es que yo hago ejercicio. ¿Usted hace ejercicio?

—Bueno, ahora no mucho. Porque a mí me gusta caminar, nadar, jugar pimpón. Y no tengo mucho tiempo.

—Las rodillas, Presidente. Las rodillas son las que nos friegan a los viejos. Hay que cuidarse las rodillas.

Pero ahora Aylwin quiere cerrar el problema del alto mando, y tiene una lista de argumentos que demuestran que el retraso es anómalo e innecesario; la incertidumbre interna y pública debe terminar cuanto antes.

—Bueno, Presidente, ¿quiere mantener de todas maneras a Lúcar?

—Ya cursamos el decreto. ¿Por qué me lo pregunta?

—Es que Lúcar ha perdido mucho ascendiente ahora último. No lo digo por él, sino por el amigo Rojas, que parece que lo protegiera.

—No, general, creo que es mejor que quede así.

—Bueno, es facultad suya. En cuanto al Estado Mayor, le propongo a Ballerino.

—Pero se me ha dicho que está muy enfermo.

—Sí, está enfermo. Lo tuve que mandar a operar a Estados Unidos...

—Entonces, no sería bueno un cargo como ése.

—Bueno, si me lo pregunta, yo estuve varios años en el Estado Mayor y sé que requiere dedicación muy intensa y salud firme.

—En ese caso, no hay más que hablar. Pongamos ahí a Quaas, y deje a Ballerino en la Inspectoría.

La facilidad de la conclusión le sugiere a Aylwin que la propuesta sobre Ballerino ha sido una mera constancia. Y refuerza esa impresión cuando le propone que también pase a retiro el mayor general Ramón Castro Ivanovic. No, Presidente, para qué vamos a volver a ese caso: me va a desarmar el alto mando... En cuanto al brigadier general Guillermo Letelier, sólo habrá que esperar que terminen los juicios de cuentas en la Contraloría. Ah, y también tendrá que salir el brigadier general Humberto Julio, pese a su excelente hoja de servicios. El Presidente se intriga. Lo que ocurre, dice Pinochet, es que tuvo un incidente, a gritos, en presencia de otra gente, con el vicecomandante Lúcar. No puede seguir[14].

El 11 de noviembre, mientras Pinochet asiste a una conferencia militar en Brasil, Aylwin se reúne con Lúcar y le confirma su deseo de que permanezca en su cargo. El 16 recibe a Pinochet para dar por concluido el acuerdo sobre el alto mando y hacerlo desistir de su propósito de anunciar los cambios después de las elecciones del 11 de diciembre. El general acepta: entregará un comunicado en un par de días.

El jueves 18, en el Hotel Plaza 55 de San Francisco, Ballerino recibe un llamado del coronel Lepe, que, por instrucciones del comandante en jefe, debe decirle que el gobierno ha vetado su paso a la Vicecomandancia y al Estado Mayor, por lo que permanecerá en la Inspectoría General.

—No —dice Ballerino, con indisimulada ira—, dile a mi general que en ese caso renuncio de inmediato.

Lepe transmite el recado a Pinochet, y éste decide congelar la situación. No telefonea a Ballerino, ni tampoco recibe sus insistentes llamados.

La noticia de la renuncia verbal llega a La Moneda, pero cuando informa a la Concertación, Krauss, que subroga a Rojas en Defensa, estima que se trata de un gesto "con elástico". Correa, que no piensa lo mismo, gasta sus últimos esfuerzos intentando persuadir al Presidente de que la salida de Ballerino es un desastre. Fracasa.

El miércoles 24, indignado por la incomunicación a que se lo somete, Ballerino despacha una renuncia escrita, por fax: sumariamente, dice que no acepta que un general de menor antigüedad, como es Quaas, tenga el puesto que corresponde al tercero en la línea, que es él. Quien la recibe es Lepe. Cuando se la lleva a Pinochet, éste le ordena que la guarde: no la dará por recibida.

Esa tarde, pensando que los equipos del nuevo gobierno podrían revertir la situación, el ministro Correa llama desde el Hotel Miramar a Ballerino:

—No renuncies. No te apresures. Todavía hay tiempo...

—Te lo agradezco, Enrique —dice el mayor general—, pero ya envié el fax. Esto no tiene vuelta.

El lunes 29, interrogado acerca de las razones de Ballerino, Pinochet explica que el jefe del Estado Mayor, el inspector general y el comandante del Primer Cuerpo dependen directamente de él, lo que los iguala:

—Valen todos cinco pesos cincuenta. Los tres.

En el intertanto, pide nuevos reportes médicos sobre Ballerino. El Hospital Militar emite un informe lapidario, que considera virtualmente inhabilitante la dolencia del mayor general. Cuando Ballerino se entera de esto, piensa en que el director del Hospital, el coronel Atiliano Jara, es el más cercano amigo del vicecomandante Lúcar. Entonces pide al doctor Palma que entregue su opinión a Pinochet. Este cumple: envía un informe según el cual la recuperación de Ballerino es satisfactoria. Palma será sancionado en el Hospital Militar con una calificación de tres puntos menos.

Con esos datos, Ballerino se prepara para regresar premunido de informes clínicos favorables. El 22 de diciembre lo recibe en Pudahuel, por encargo de Pinochet, el mayor general Castro Ivanovic (que también ha quedado sobrepasado, en su cargo de director del Personal, por el ascenso de Quaas). El comandante en jefe lo atenderá al día siguiente, a las 9. Ballerino intenta que sea a las 11.30, para descansar del viaje. Pero no: a las 9.

Esa mañana, Pinochet hace sus últimos esfuerzos para disuadir a Ballerino de que permanezca en la Inspectoría. El próximo año podría pasar a la Vicecomandancia. Pero Ballerino no cede un ápice: ha sido vetado por razones políticas pese a que se limitó a cumplir órdenes y no puede aceptar que se le proponga romper la centenaria tradición militar para burlar ese bloqueo. Su salud ha sido usada como excusa[15]. Ahora lleva un oficio cuidadosamente redactado para evitar que su dimisión sea eludida. Rendido, Pinochet le propone al fin que la salida se haga efectiva el 31 de enero, para reorganizar el mando.

Al otro día, Ballerino recibe la visita de Correa. El ministro ha estado preparando su aterrizaje para cuando salga del gobierno, y quiere ofrecerle al mayor general que trabaje con él en Flacso. Ballerino declina la oferta con una sonrisa afectuosa.

No hay nada que hacer. Han caído. Y sólo podrían decir lo que el astuto capitán Renault de *Casablanca*: "Quizá sea el comienzo de una hermosa amistad...".

Notas

1. El centro de la propuesta, el anonimato de los informantes, sigue un modelo creado por un connotado médico que durante años convirtió los nacimientos no deseados —especialmente en la clase alta— en adopciones no legales, cuya regularización procuraba él mismo.

2. La entrevista es gestionada por el mismo Zalaquett, a través del historiador Gonzalo Vial, de quien se ha hecho amigo en la comisión Rettig.

3. Zalaquett, José: *Notas sobre la situación pendiente de derechos humanos*. Documento privado, 17 junio de 1993.

4. Cumplido, Francisco: *Algunas reflexiones sobre los procesos por violaciones a los derechos humanos*. Documento privado, 5 de julio de 1993.

5. Ver Capítulo 20.

6. El texto estándar propuesto era: "Efectuadas diligencias y en virtud de antecedentes reunidos y lo señalado por el Informe Rettig, concluimos que la persona falleció".

7. El auto de reo contra Lauriani se originó con el proceso Nº 9298-11 del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel; fue confirmado por la Corte de Apelaciones de San Miguel; y refrendado por la Primera Sala de la Suprema por todos sus miembros: los ministros Hernán Alvarez, Marco Aurelio Perales y Oscar Carrasco y los abogados integrantes Fernando Castro y Juan Colombo. La Cuarta Sala, que lo traspasó a la justicia militar, fue integrada por los ministros Roberto Dávila, Mario Garrido y Marco Aurelio Perales, el auditor Fernando Torres Silva y los abogados integrantes Arnaldo Gorziglia y Pedro Montero.

8. Una visión general de este proceso: Human Rights Watch Americas: *Unsettled bussiness: Human rights in Chile at the start of the Frei Presidency*. Volume VI, Nº 6, may 1994.

9. Cámara de Diputados: Boletín Nº 1057-07.

10. Este viaje fue altamente accidentado. En principio, el general quería visitar también Eslovaquia e Israel. La demora de la visa eslovaca obligó a cancelar el paso por Europa, y la insinuación de la Cancillería israelí de que podría ser declarado persona *non grata* abortó también ese intento.

11. Ver Capítulo 14

12. A fines de octubre, Pinochet subraya que entre 1990 y 1993 han salido 644 funcionarios, y que en 1994 saldrán otros 110. Con ello quedarán 365 de los 1.119 originales. A principios de noviembre, Aylwin rechaza este cálculo y exige que los retiros de antes de marzo de 1994 sean a lo menos 356 para cumplir con la cifra comprometida.

13. Esta posición fue detalladamente recogida por el general (R) Ernesto Videla en su publicación: *Informe Confidencial*, noviembre de 1993.

14. Finalmente, pasaron a retiro los mayores generales Rodrigo Sánchez Casillas y Miguel Espinoza y los brigadieres generales Humberto Julio y Manuel Gárate. Ascendieron a mayores generales: Ricardo Gaete y Hernán Abad. Y a brigadieres generales: Enrique Gillmore, Juan Nielsen, René Vuskovic, Raúl Carvajal, Sergio Espinoza y Hugo Jaque.

15. No obstante lo positivo de los informes médicos, la intuición del general Pinochet no fue del todo errónea a la larga: la salud de Ballerino se vio quebrantada en los años siguientes.

22

El verano ácido del 94

Al comienzo de 1994, Aylwin prepara la entrega del poder con la sensación de que saldrá con sus objetivos indemnes y con su prestigio en alto. Lo que empaña ese optimismo es algo que le cuesta entender: las operaciones de un joven Dávila en Codelco.

Hay buenas razones para entender que *gobernar hasta el último día* no puede significar que el gobierno se comporte como si estuviéramos en 1990 ó 1991". Esta es una de las frases finales del *Informe de Análisis* de la Secretaría General de la Presidencia fechado el 20 de agosto de 1993. Al costado del párrafo, el Presidente Patricio Aylwin anota, con el lápiz rojo de las lecturas analíticas, un grueso signo de interrogación. Es la clase de preguntas que se formula con irritación.

El documento se titula *El final que este gobierno merece* y será, irónicamente, el último de los *Informes de Análisis*.

Tras el fracaso de la "ley Aylwin", y en medio del último tramo de la campaña presidencial, el gobierno entra en una silenciosa declinación. Mientras el movimiento legislativo se paraliza, los funcionarios políticos comienzan a preparar sus aterrizajes fuera del poder... o en algún hueco de los que ofrezca el gobierno que viene.

En octubre, el Presidente debe soportar todavía una nueva derrota en el Parlamento, cuando despacha un proyecto para reducir el período presidencial de ocho a cuatro años. Aunque el texto tiene el respaldo de la Democracia Cristiana, cuando se vota en el Senado se ausentan de la sala Carmen Frei y su primo Arturo Frei, poderosa señal de que la dinastía que se aproxima a La Moneda ni siquiera está de acuerdo en lo fundamental con la administración saliente: la valoración de una estabilidad vinculada a la simultaneidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

A fines de ese mismo mes, un comando del Lautaro que huye frenéticamente tras asesinar a un carabinero en la puerta de un banco, es cercado por la policía en la avenida Apoquindo, frente a El Faro. Parte del comando ha subido a una micro y, pese a la evidencia de que en ella viajan pasajeros inocentes, los carabineros responden el fuego lautarista con cerradas descargas por los flancos. Ocho muertos y doce heridos resultan de un dispositivo que sugiere que la policía ya no se siente atada a las restricciones del poder político.

En noviembre cae la última gran operación oficial: el intento por instalar en la dirección de la FAO al DC Rafael Moreno, derrotado por el senegalés Jacques Diouf y por la evidencia de que una Cancillería que carece de política africana mal puede aspirar a los sillones de los grandes foros sectoriales.

Para diciembre, el Presidente se puede alegrar todavía de que a las sacudidas del fin de mandato no se haya agregado una estampida indecorosa:

—Ningún gobierno —les dice a los presidentes de la Concertación en un almuerzo— ha tenido más estabilidad que el mío en este siglo.

Y tiene razón: su gabinete termina virtualmente intacto. A lo largo de todo su período, Aylwin ha sufrido sólo una crisis ministerial. En octubre de 1991, una huelga de los médicos de los servicios de urgencia llevó al equipo político a precipitar la dimisión del ministro Jorge Jiménez, en un desenlace que fue más penoso por el hecho de que el ministro Edgardo Boeninger terminó entregando a los médicos más recursos de los que se habían negado a Jiménez para negociar.

Otros cuatro ministros salieron del gabinete en la segunda mitad del 92, pero ahora para dedicarse a carreras electorales: Ricardo Lagos, en la presidencial interna de la Concertación; Carlos Ominami, como generalísimo de Lagos primero y luego para senador; Juan Hamilton, también para senador; y Germán Correa, para la presidencia del Partido Socialista.

La tarea más difícil la han tenido Lagos y Ominami durante la primera mitad de 1993. En los dos años anteriores, Eduardo Frei había arrasado en las internas de la DC y se había impuesto sin competencia en el proceso para escoger al candidato presidencial de ese partido, tras el retiro de Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar.

La contundencia y la velocidad de su ascenso eran tan expresivas, que muchos hombres del PS y el PPD sintieron tempranamente la tentación de negociar rápido para obtener compensaciones parlamentarias. Las bien graduadas amenazas de los hombres de Frei en este sentido tuvieron una eficacia devastadora entre buena parte del "laguismo".

A lo largo del verano del 93, Lagos se enfrentó casi en solitario a las debilidades de sus partidos y a los temores de sus negociadores. Sus diálogos telefónicos cortantes alcanzaron el rango de un estilo y no hubo político de la corte PS-PPD, incluido el propio Ominami, que no cayera en algún momento bajo la fulminante sospecha de estar vendiendo la candidatura a precio vil.

Pese a todo, su tenacidad consiguió que la DC accediera a unas primarias semiabiertas que Frei ganó cómodamente. Al concluir el proceso, Frei instruyó a Genaro Arriagada para abrir un cupo senatorial a Lagos en la Séptima Región, y el lugarteniente llegó a hablar con Manuel Antonio Matta —yerno de Aylwin— para que dejara su candidatura en favor del líder PS-PPD. Pero Lagos declaró que no quería ir al Parlamento y se reservó para apoyar a sus partidos en la campaña.

Al comenzar diciembre, las encuestas dan una ventaja aplastante a Frei, pese a que las candidaturas del sacerdote Eugenio Pizarro, por los comunistas, del economista Manfred Max-Neef, por una heterogénea combinación izquierdista-ecologista, y de Cristián Reitze, por los humanistas-verdes, podrían restarle votos.

Pero ello no sólo no ocurre, sino que el 11 de diciembre Frei obtiene la Presidencia con la más alta votación del siglo: 58,01%.

La oposición de derecha, en cambio, ha avanzado tarde y a tropezones tras la caída de los precandidatos de Renovación Nacional, Sebastián Piñera y Evelyn Matthei. En el verano del 93, entendiendo que ya carecía de posibilidades de imponer un candidato propio, el presidente de RN, Andrés Allamand, ofreció a la UDI un acuerdo en torno a uno de cuatro nombres: el ex ministro Carlos Cáceres, el senador independiente Arturo Alessandri, el empresario Manuel Feliú o el ex ministro Fernando Léniz.

Pero la UDI, que desconfiaba —con razón— de los propósitos de RN, rechazó la propuesta y anunció que lanzaría la postulación de su presidente, Jovino Novoa.

Entonces Allamand tomó la opción de que Feliú se convirtiera en el candidato de RN. Consciente de las fracturas internas de ese partido, Feliú impuso una doble condición: que la postulación le fuera pedida por la unanimidad de los grupos internos de RN y que luego se

realizara una convención para tener un solo candidato de derecha. Allamand maniobró con cuidado en medio de la tempestad incesante de su partido y logró que en los últimos minutos de un consejo general se diera a Feliú una aclamación equivalente a la unanimidad.

Pero Feliú no era del gusto de los empresarios que dominaban la Sofofa. Su facilidad para alcanzar acuerdos con el gobierno y su pasada gestión al frente de la Confederación de la Producción y del Comercio se alejaban de la ortodoxia derechista[1]. Los presidentes de RN y la UDI fueron convocados a una reunión en casa de Eugenio Heiremans, quien los esperó con Ernesto Ayala para reprocharles la falta de acuerdo en torno a su nombre favorito, el de Carlos Cáceres.

Hacia mayo, la dirigencia de RN resentía la presión sobre la candidatura de Feliú y la intervención despiadada en las listas parlamentarias. Ello estuvo en el origen de las ásperas declaraciones de Allamand acerca de los "poderes fácticos" que manejaban la política derechista y en la denuncia de Heiremans y Hernán Briones —entonces presidente de la Sofofa y más tarde cabeza de la Fundación Augusto Pinochet— como sus principales operadores[2]. Heiremans negó reiteradamente tales cargos, pero, en una de las escasas entrevistas que concedió, sugirió que el mejor nombre para la alianza derechista sería el del senador Arturo Alessandri[3].

Feliú invirtió sus mejores empeños en asegurar la realización de una convención en la que también se incluyese la Unión de Centro Centro, el partido personal del empresario Francisco Javier Errázuriz. Dado que el argumento de persuasión eran los cupos para las parlamentarias, el ex dirigente empresarial debió intervenir en los planes de RN y a veces batallar duramente para conseguir los espacios de la UDI y la UCC. Unicamente no logró persuadir a José Piñera, que abandonó la UDI para arrojarse a una solitaria candidatura en la que, a pesar de su endurecimiento en temas polémicos, no consiguió nunca el respaldo del *establishment* derechista. Pero, logrado el acuerdo entre los partidos, Feliú se fue a descansar a Vichuquén y dejó la campaña en manos de los debilitados dirigentes de RN.

La convención se fijó para agosto, tres meses después de que Frei ganase la candidatura del oficialismo.

Poco antes de la fecha, fue justamente Feliú quien recibió el primer llamado del senador Alessandri: deseaba competir en la convención y estaba dispuesto a reunir las firmas para ello. Feliú aprobó el ingreso del cuarto contendor, que venía sumarse a Novoa y Errázuriz.

Allamand aceptó la idea de mala gana. Cuatro años antes, él mismo había recomendado a Alessandri no arriesgarse en Santiago y postular por la Segunda Región: no lo consideraba un político con la fuerza suficiente para imponerse en terrenos difíciles.

LAS ELECCIONES DE 1993

Presidenciales		
Candidatos	Votos	Porcentaje
Eduardo Frei	4.008.654	58,01
Arturo Alessandri	1.685.584	24,39
José Piñera	427.286	6,18
Manfred Max Neef	383.847	5,55
Eugenio Pizarro	324.121	4,69
Cristián Reitze	81.095	1,17
Válidos	6.910.587	
Blancos	135.257	
Nulos	269.046	
Escrutados	7.314.890	

Parlamentarias				
Partido	%	Diputados	Senadores Elección 93	Senadores Total
PDC	27,12	37	4	13
PPD	11,84	16	2	2
PS	11,39	16	3	5
PR	2,98	2		1
RN	16,31	29	5	11
UDI	12,11	16	2	4
UCC	3,21	1	1	1
Ind. Der.	4,81	4	1	1
PC	4,99			
PN	0,04			
P. del Sur	0,20			
AHV	1,01			

Pero la mayor consistencia militante de RN podía dar una razonable ventaja a Feliú, aun en una convención altamente dividida.

No fue así: un acuerdo entre la UDI y la UCC, que de paso retiró a Novoa y Errázuriz de la carrera, convirtió en minoría a RN y Alessandri fue proclamado candidato tras vencer a Feliú.

La campaña de Alessandri fue tan breve como penosa. Ante la certeza de la derrota, los empresarios le dieron un apoyo apenas formal y concentraron la entrega de recursos en los candidatos al Parlamento. Entre 3 millones y 5 millones de dólares[4] fueron invertidos sólo en la competencia de Las Condes, donde se enfrentaron Allamand y el diputado de la UDI Carlos Bombal, en un claro apronte para las presidenciales venideras. Los fondos del comando de Alessandri llegaron a ser tan escasos, que el presupuesto para giras no pudo remontar los 250 mil dólares; en algunos de sus viajes debió ir sólo con un par de personas. Los candidatos a diputados y senadores se concentraron en lo suyo, sin proporcionar ninguna ayuda al abanderado presidencial, y hasta hubo algunos que evitaron mostrarse en su compañía.

En diciembre la situación ha llegado hasta el punto de que no hay dinero para arrendar un local con servicios para esperar los resultados del día 11.

Previsiblemente, esa noche Alessandri completa una pobre *performance* de 24,39 puntos, 20 menos de los que obtuvo la derecha en 1989 y 12 menos de los que obtienen los candidatos a parlamentarios del pacto. Allamand y Bombal ganan los dos cupos para diputados de Las Condes (con una clara ventaja del segundo) y la correlación de fuerzas entre RN y la UDI se mantiene.

Las elecciones dejan al gobierno de Aylwin sin el protagonismo, pero con los problemas. En diciembre, el Presidente sigue exigiendo al general Pinochet que se complete el retiro de los ex agentes de la CNI hasta alcanzar la cifra de 1.000 comprometida con el Parlamento para antes del 11 de marzo de 1994.

El 5 de enero, Pinochet visita al Presidente electo. Pero no es este gesto el más significativo, sino el que realiza al día siguiente, cuando llega hasta un condominio ubicado en calle Las Hualtatas. Es la casa del ministro de Defensa *in pectore* de Frei, Edmundo Pérez Yoma, confirmado para el cargo sólo quince días antes.

Pinochet había temido que, como se decía en los mentideros políticos un mes atrás, Frei se tentara con nombrar a un socialista, como Enrique Correa. Cuando las versiones se concentraron en Pérez Yoma y en el otro de sus hombres más cercanos, Carlos Figueroa, el alivio volvió a la Comandancia en Jefe. A Figueroa lo había conocido en sus visitas a Argentina, donde el entonces embajador lo recibió con gentileza; para el "boinazo", Figueroa le pidió audiencia para informarse de las demandas militares.

Con Pérez Yoma las relaciones eran más antiguas. Pinochet no ignoraba que en los años de su gobierno, Pérez Yoma gastó ingentes esfuerzos para que su empresa constructora obtuviera algunas de las numerosas licitaciones a que convocaban las Fuerzas Armadas. En esos trámites llegó a hacerse amigo y hasta compartió la afición a la zarzuela del general (R) Héctor Martínez Amaro (el padre del almirante Martínez Busch), el superior más respetado de Pinochet, que por esos años estaba en la Caja de Previsión de la Defensa. Pero además, Pinochet había tenido una recurrida relación con el padre de Pérez Yoma, Edmundo Pérez Zujovic, cuando éste era ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva y el general, en su condición de oficial más antiguo de la plaza, debía subrogar al intendente de Iquique, Luis Jaspard da Fonseca, en sus frecuentes ausencias. Más tarde, cuando Pérez Zujovic fue asesinado por un comando de la Vanguardia Organizada del Pueblo, Pinochet, ya jefe de la Guarnición de Santiago, debió administrar un toque de queda y dirigir la caza de los terroristas en un barrio vecino al Hipódromo Chile, en el norte de la capital.

Por eso, en cuanto la nominación de Pérez Yoma fue confirmada, el 24 de diciembre, Pinochet lo llamó para visitarlo de inmediato. Pero el ministro se iba esa misma tarde a unas vacaciones anticipadas en el sur y el encuentro debió postergarse para enero.

Y ahora, cuando llega a su casa acompañado de cuatro mayores generales ("los que estaban en Santiago", explica), Pinochet viene a ponerse a su disposición, reconociendo lo que en el 90 tanto execró: la línea jerárquica del ministro de Defensa.

Marca con ello una radical diferencia respecto de su trato con Rojas. Pero no es su único propósito: la guerrilla con Defensa durante estos años lo ha enervado y tiene la expectativa de que con el nuevo ministro pueda entablar un nuevo estilo de relación.

Pero aquel mes Rojas sigue en funciones. Y dos semanas después halla la manera de hacer sentir la autoridad del gobierno vigente. Hace algunos meses, tras un desayuno en la Comandancia en Jefe, el mayor general Jorge Ballerino pidió al ministro Enrique Correa que se esperara el fin de unos juicios de cuentas de la Contraloría para pasar a retiro al brigadier general Guillermo Letelier, como quería el gobierno. Ese acuerdo fue confirmado durante el "boinazo", donde el mismo Correa gestionó la aceleración de esos juicios. Letelier estaba sin cargo y ocupaba una oficina prestada en el Comité Asesor; pero si salía con juicios de cuentas pendientes, podía ver afectados sus derechos previsionales.

Y ahora, los problemas están solucionados, pero Letelier sigue en su puesto: así lo demuestra el ministro al Presidente. El 24, Aylwin despacha un oficio a Pinochet en el que detalla los 13 procesos ya fallados en favor de Letelier y los otros 11, también absolutorios, que afectaban a otros ex ejecutivos de la Corfo[5]. Como conclusión, le indica, debe "dar curso sin más trámite al retiro ya resuelto" del brigadier general.

Tres días después Pinochet responde: el retiro ha sido cursado. Pero esa misma tarde envía un nuevo oficio, adjuntando ahora un informe de la Dirección de Inteligencia que subraya que en la institución nuevamente se siente un estado de hostigamiento público. Gesto por gesto.

Si Pinochet quiso dilatar la conformación definitiva de su alto mando para cuando asumiera el nuevo gobierno, es claro que sus resultados han sido magros. No lo son, en cambio, los del general director de Carabineros, que ha pedido al gobierno prorrogar por un año el servicio del general subdirector Alfredo Núñez, aplicándole la ley Canessa. Pero como Núñez cumple su período el 16 de marzo de 1994, los hombres de Aylwin prefieren dejar la decisión final al equipo de Frei.

Con ellos tendrá Stange la oportunidad que busca.

El viernes 21 de enero de 1994, un ejecutivo de Codelco de 34 años, estrella menor en el cielo del equipo "modernizador" que había asumido la gestión del gigante estatal por encargo de Aylwin, llama a Wolfgang Becker, operador del *broker* Merrill Lynch en Hamburgo. Desde Reñaca le pide que absorba posiciones comprometidas con otros dos operadores del mercado de futuros del cobre, porque Codelco está excedido en sus márgenes. Becker sabe que Juan Pablo Dávila ha estado sufriendo grandes pérdidas a nombre de la empresa chilena. Por eso le recomienda que informe a sus superiores y le avisa que no cumplirá su petición hasta que hable con uno de ellos, el subgerente de Ventas Carlos Derpsch. El lunes podrá responderle.

A partir de ese instante Dávila se sabe al borde del abismo. El mismo día llama al gerente de Ventas Owen Guerrini y le pide que lo reciba de urgencia en su casa. Las operaciones de futuros han escapado de control, dice, luego de que ha pasado semanas tratando de revertir un error cometido en el registro computacional hace unos meses. Tras fallar en esos esfuerzos, las pérdidas podrían bordear los 100 millones de dólares.

Guerrini informa de inmediato al vicepresidente de Comercialización, Gonzalo Trivelli —sobrino directo del Presidente Aylwin—, que a su turno llama al presidente ejecutivo, Alejandro Noemi. El responsable mayor de la empresa recibe la sumaria información en su celular, cuando va rumbo a Cachagua, y mientras inicia el rápido retorno a la capital, intuye que un fin de semana de descanso empieza a convertirse en uno de pesadilla.

Durante el sábado y domingo, los ejecutivos se acuartelan alrededor de Juan Pablo Dávila y el computador personal desde donde hacía todas sus operaciones, para tratar de establecer la magnitud real de la catástrofe. De la plana estelar que en cuatro años ha mejorado todas las cifras

de gestión de Codelco, sólo están ausentes el vicepresidente de Operaciones, Máximo Pacheco Matte, y el vicepresidente de Finanzas, Ignacio Guerrero, que se han ido con sus familias a una casa en Hornitos.

Ese fin de semana se convoca a Santiago a los encargados de Codelco en las principales bolsas metaleras del mundo, el London Metal Exchange y el Commodity Exchange de Nueva York. A Marcelo Awad y Ricardo Olivares se suma luego el operador alemán Wolfgang Becker, mejor informado que todos acerca de los movimientos de Dávila.

El lunes 24 Codelco despacha notas a los *brokers* de todo el mundo informando que Dávila ya no es el encargado de futuros. La firma Price Waterhouse es convocada para iniciar una auditoría de urgencia y los abogados presentan una denuncia en el 5° Juzgado del Crimen para investigar responsabilidades penales.

Recién esa noche, Alejandro Noemi se comunica con las primeras autoridades de gobierno, los ministros Alejandro Foxley y Alejandro Hales, ambos miembros del directorio de Codelco, para pedirles que se reúnan en privado al día siguiente, antes de una sesión de directorio fijada para las 9.

El martes, los directores que llegan a la hora se hallan con que los máximos ejecutivos sesionan a puertas cerradas con los ministros y que la cita se posterga para la tarde. A la salida, Foxley y Hales se encaminan a La Moneda y transmiten una versión en detalle al Presidente. Sea porque los ministros enfatizan mucho en la favorable situación de caja con que el país puede enfrentar el problema, sea porque malentiende el abstruso mundo de estas operaciones, el Presidente no muestra alarma. Sólo aprueba la manera en que será encarado el problema.

Esa tarde el directorio[6] recibe el primer informe de Noemi y aprueba una declaración pública que explicará los hechos al día siguiente, en conferencia de prensa.

En la noche, Aylwin recibe a los ministros de la Corte Suprema para una cena de despedida en La Moneda. Lo acompañan el ministro Francisco Cumplido, la ministra nominada de Frei para Justicia, Soledad Alvear, y el ministro del Interior, Enrique Krauss, que se ha enterado parcialmente de lo que ocurre.

—Presidente —dice Krauss—, ¿ya supo? Va a ser un lío...

—No, si parece que es manejable. Voy a ver a Gonzalo Trivelli, pero mi impresión es que no tiene gran importancia.

—Cuidado. Usted sabe cuál es mi fórmula mágica: cuando hay catástrofe, declarar zona de catástrofe; cuando hay lío judicial, pedir ministro en visita.

—No creo que sea el caso. Esperemos un poco.

Pero Krauss no quiere perder tiempo y aprovecha la presencia de su ex compañero Luis Correa Bulo, a quien considera como su mejor aliado en la Corte:

—Coco, creo que mañana te voy a pedir ministro en visita por una cuestión de Codelco.

—Lo que querai, Enriquito. ¿Y qué ministro querís?

—¿Quién está de turno?

—El Benquis. ¿Te gusta el Benquis?

—Sí —dice Krauss, recordando que José Benquis ha sido también compañero en la universidad—, ponlo.

El miércoles 26 los ejecutivos de Codelco se preparan para la peor conferencia de prensa de sus vidas. Pero antes de iniciarla, los sacude un titular de *La Epoca*[7] que informa de la catástrofe. La conferencia se convierte en un infierno de interrogantes agresivas, que ni siquiera resulta aplacada por el anuncio de las dimisiones de los tres ejecutivos responsables en mando jerárquico, Trivelli, Guerrini y Derpsch. (Un cuarto, Guerrero, presenta también su renuncia, pero no es aceptada sino hasta dos semanas después).

Al día siguiente, con los titulares del escándalo a la vista, Krauss insiste ante Aylwin por el ministro en visita. Pero el Presidente aún no está convencido.

—Presidente, es más grave de lo que usted cree —dice Krauss—. Llame a Noemi y pregúntele.

Poco rato después recibe el llamado de regreso:

—Adelante, Enrique. Pida el ministro.

El lunes 31 de enero, el ministro Edgardo Boeninger, que ha debido interrumpir sus vacaciones en Tongoy, se reúne en su oficina con Hales, el presidente de la DC, Gutenberg Martínez, el abogado y director de Codelco Fernando Molina, el presidente ejecutivo de la empresa ya designado por Frei, Juan Villarzú, y el subsecretario de Hacienda Jorge Rodríguez Grossi. Se trata de decidir el destino de Noemi: si se le mantendrán sus poderes para que encabece la investigación de Codelco o si se dictará una intervención para que otras personas se hagan cargo.

En el gobierno ya se sabe que Noemi ha reaccionado con irritación ante la petición de ministro en visita. Al tomar esa decisión, La Moneda induce a la opinión pública a pensar que hay negocios turbios detrás de lo que, según todavía se cree, no ha sido más que un acto irresponsable. Teniendo esa visión, una intervención de la empresa equivaldría a incitar a Noemi a la renuncia.

Mantendrá sus facultades.

Pero el miércoles 2 de febrero la situación sufre un vuelco. Después de reunirse en Codelco con Noemi y Pacheco, Andrés Allamand y Sebastián Piñera anuncian una acusación constitucional contra los ministros Foxley y Hales, que, como miembros del directorio, debieron autorizar las operaciones especulativas a futuro.

Hay algo peor. El mismo día se hace público que Codelco ha pagado indemnizaciones por 144 millones de pesos a los tres ejecutivos renunciados[8]. Aunque tales desahucios son usuales en los ejecutivos de esa empresa, una ola de indignación se extiende por la prensa de las siguientes 24 horas.

Esa noche convergen en la casa del Presidente los ministros Krauss, Foxley y Hales, los subsecretarios Rodríguez Grossi y Ricardo Solari, Noemi, Pacheco, el vicepresidente de Desarrollo y Comercialización de Codelco, Jorge Bande, y la jefa de su servicio jurídico, Laura Novoa. De la tempestuosa reunión emergen tres conclusiones. Primero, los ministros Foxley y Hales saldrán de la línea de fuego, vista la amenaza lanzada por la oposición; Rodríguez Grossi tomará la representación de Hacienda y Krauss y Solari se harán cargo de los efectos políticos. Segundo, los actuales ejecutivos de Codelco tienen plazo hasta el viernes 4 para entregar un informe detallado. Tercero, el Presidente no descarta pedir la renuncia de Noemi.

En los dos días siguientes, Krauss y Solari llegan a la conclusión de que, con las indemnizaciones y con el progresivo aumento de la magnitud real de las pérdidas —que ya se acercan a los 200 millones de dólares—, la situación ha escalado hacia una crisis política mayor. Dado ese cuadro, no ven otro camino que la salida de Noemi.

Así se lo dicen al Presidente, una y otra vez.

En la noche del jueves 3, Máximo Pacheco y Laura Novoa concluyen el informe de 14 carillas que al día siguiente llegará por fax a Cerro Castillo, donde el Presidente pasará el fin de semana. Noemi recibe entonces la citación para presentarse en la mañana del sábado 5.

Mientras Foxley viaja desde Cachagua y Hales y Eugenio Tironi parten desde Santiago en autos, Krauss y Solari abordan un helicóptero y se reúnen primero, a solas, con el Presidente. La renuncia de Noemi, reiteran, es ahora imperativa.

Pero Aylwin no necesita pedirla. Noemi, que llega a Cerro Castillo con su hermano Paulino —también empresario minero—, ha olisqueado el mal ambiente y trae su carta de dimisión redactada.

El domingo, Noemi no puede leer su breve discurso de despedida ante el centenar de ejecutivos que lo aclama. Su derrota parece más dura desde que, sin ser amigo de Aylwin, recibió su respaldo para soportar incluso embestidas mayores, como la que emprendió el ministro Juan Hamilton en el 92, cuando tenía listo el nombramiento de Eduardo Aninat, y la intervención directa de Trivelli y Pacheco en la casa del Presidente revirtió la decisión.

Noemi apenas puede imaginar que recién comienza lo peor. El 13 de febrero, la Cámara de Diputados constituye una comisión investigadora[9]. A fines de marzo, el diputado Luis Valentín Ferrada presenta tres memorandos en los que intenta probar, sin éxito pero con fuerte impacto

público, la existencia de una red oculta de comercialización del cobre y de negociaciones incompatibles donde no sólo Noemi, sino también otros ejecutivos, tendrían funciones protagónicas[10]. En el intertanto, Investigaciones lo arresta y lo hace pasar una noche de prisión antes de declararlo en libertad incondicional.

La investigación de las maniobras de Dávila seguirá por cuatro años más, aunque el ministro José Benquis se convence tempranamente de que el ex ejecutivo oculta operaciones de las que obtuvo fuertes beneficios[11].

Aunque la teoría política no lo haya confirmado, parece cierto que el traspaso del poder entre gobiernos del mismo signo es usualmente más traumática que entre adversarios. En el caso de Aylwin y Frei, sólo la estrecha vinculación que conservan muchos de los que trabajaron en la campaña del No de 1988 evita que las asperezas sean mayores.

Pero la dureza del proceso tiene esta vez menos que ver con los equipos o con los 1.700 funcionarios que a lo largo del país dependen del Ejecutivo. Compete directamente a los jefes máximos.

La historia política no ha estudiado todavía las relaciones entre el Presidente Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin en los años 60. Pero parece claro que la férrea incondicionalidad del entonces presidente del PDC, que actuó con mano de hierro para disciplinar al partido detrás del gobierno, no estuvo nunca acompañada de la intimidad, ni siquiera de la amistad familiar. Y es difícil saber si es en esos viejos tiempos, o en los más cercanos de fines de los 80, cuando Aylwin aguantó con indignación las acusaciones de fraude interno lanzadas por el comando de Frei Ruiz-Tagle en el episodio del "Carmengate", donde hay que buscar las razones; lo cierto es que en 1994 las dos familias se prodigan una calculada frialdad.

Durante los años de Aylwin, el senador Frei no fue nunca invitado a gira alguna y sus visitas a La Moneda resultaron más escasas de lo que parecía normal tratándose del presidente del partido del Jefe de Estado. Los Frei se quejarían, posiblemente, de que la disciplinada conducta del PDC en esos tiempos no fue retribuida ni reconocida por Aylwin. Los Aylwin retrucarían, tal vez, que la otra familia intentó siempre imponer el peso de su apellido en las decisiones políticas.

A fines del 93, Krauss, aprovechando su papel de Vicepresidente para ejercer de componedor, invitó alguna vez a la senadora Carmen Frei y al diputado Eugenio Ortega a pasar con sus niños una tarde en el Cerro Castillo, sabiendo que les traería recuerdos de la juventud. La jornada fue tan luminosa, que Krauss —más emotivo que la emoción— le propuso a Aylwin que invitara a toda la familia Frei alguno de esos días. Por razones desconocidas, Aylwin, que asintió, nunca lo hizo. Y ningún desaire habría ocurrido... si no hubiese sido porque Krauss se había anticipado a anunciar la invitación.

La tensión mayor, sin embargo, se expresa con un silencio cortante entre las dos esposas, Leonor Oyarzún y Marta Larraechea. Ambas encuentran razones para su distancia. Leonor Oyarzún se quejaría de que ha intentado explicar a su sucesora las tareas y las necesidades de la esposa del Presidente, y no ha tenido receptividad alguna. Para Marta Larraechea, la permanencia de los equipos femeninos de ese gabinete sería un síntoma de los intentos de su antecesora por limitar su gestión.

Si los hombres de ambos gobiernos estiman que esta clase de tensiones es políticamente irrelevante, varios de ellos sufren un sobresalto cuando, en una de esas calientes noches, se organiza en casa de Aylwin una cena de las dos parejas presidenciales con varios matrimonios ministeriales. Las miradas gélidas y los silencios metálicos llenan de escalofríos la mesa y no falta quien llegue a temer que el traspaso formal del mando será más duro que cuanto ya se ha imaginado.

(En verdad, el único incidente serio se producirá después, cuando Aylwin, indignado por las versiones de La Moneda que lo acusan de haber retenido granjerías de la Presidencia, devuelve dos autos que entendía facilitados para su servicio.)

Con todo, Aylwin se esfuerza en exhibir un retiro ordenado del poder. Entre sus últimos encuentros figura una visita de despedida del general Pinochet, más cordial que cualquiera de las anteriores. Tanto, que por primera vez Aylwin lo acompaña hasta la puerta.

—Lo voy a echar de menos —dice Pinochet, mientras avanzan—. Parece que me encariñé, fíjese.

—Para que vea, pues, general, cómo son las cosas —dice Aylwin—: yo me voy y usted se queda.

—Ya nos veremos en el Senado —dice el general, con tono cómplice—. Ahí conversamos más...

Y cuando llegan a la puerta, agrega:

—Creo que le queda una decisión pendiente. Sobre los individuos estos... los que mataron a mis escoltas. Dicen que los piensa indultar.

Aylwin titubea. Los indultos han sido materia de persistente queja militar en los últimos meses, pese a que desde el comienzo el gobierno fijó su voluntad de liberar a los subversivos encarcelados en el régimen militar. Estos son los últimos que le quedan, y sabe que Pinochet los considera símbolos.

—Sí —responde finalmente—, en efecto, es un asunto que tengo que decidir.

—¿Y cuál va a ser su decisión?

—No lo sé, general. Tengo que decidir.

—Para qué lo va a hacer usted. Es un lío. Déjeselo a los que vienen...

—Es una decisión presidencial, general.

Mientras regresa a su despacho, Aylwin piensa que el asunto importa a Pinochet más de la cuenta. Tiene tomada la decisión de indultar, pero imagina que el general puede aprovechar la ceremonia de traspaso de mando para resistirla: poner formaciones anómalas, alterar el protocolo, perturbar el acto, quién sabe.

En la mañana del viernes 11 de marzo, poco antes de partir a entregar el poder a Valparaíso, Aylwin firma los decretos de indulto, que permutan 40 años de prisión por extrañamiento, y los envía por mano a la Contraloría para una toma de razón ya concordada.

Cuando se entere, días después, Pinochet se considerará traicionado. Pero no se lo podrá decir a Aylwin.

No volverán a verse, ni en el Senado ni en ninguna parte.

Notas

1. Ver Capítulo 6.

2. Armas Molina, Pilar: *Allamand: "Hay interferencia empresarial en las decisiones de la centroderecha"*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 16 de mayo de 1993.

3. Soza, María Teresa: *El papel de Heiremans*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.154, 22 de mayo de 1993.

4. La discrepancia de cifras se origina en las versiones que aún hoy dan los comandos de ambos candidatos.

5. Estos juicios se originan mayoritariamente en la licitación de Endesa, para la cual Corfo contrató una corredora de valores y dispuso oficinas y recursos presuntamente no establecidas en las bases del proceso. La ausencia de tales bases —guardadas en los archivos de Corfo— y, posteriormente, su diversa interpretación, motivaron la intervención de la Contraloría a partir del segundo semestre de 1990.

6. Integrado por los ministros Alejandro Foxley y Alejandro Hales, más Alejandro Noemi, Fernando Molina, Mario Waissbluth, Javier Codocco, Jorge Sepúlveda y el general de Carabineros Manuel Ugarte.

7. *Error financiero causa grave crisis en Codelco*. Diario *La Epoca*, 26 de enero de 1994.

8. En detalle: 24 millones, Trivelli; 29 millones, Guerrini; y 91 millones, Derpsch.

9. Esta comisión sentó el precedente de que una investigación parlamentaria puede continuar aunque cambie la integración de la Cámara de Diputados por efecto de una elección interpósita. De hecho, su composición cambió de febrero a marzo. El presidente de la primera fue Juan Carlos Latorre (DC) y el de la segunda, Felipe Valenzuela (PS).

10. El informe de la comisión investigadora, que excluye estos memorandos, en: Cámara de Diputados de Chile: Legislatura 329ª, Ordinaria, Sesión 4ª, martes 7 de junio de 1994.

11. Más tarde, en 1996, el juez Benquis logrará establecer que Dávila recibió comisiones de diversos *brokers* por montos que trepan a varios millones de dólares. Una esclarecedora síntesis de la evolución del caso: *Cerco cerrado*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.378, 6 de septiembre de 1997.

23

Respetable público: la troika

El Presidente Frei debuta en 1994 con un gabinete que es un perfecto modelo teórico. Tan perfecto, que se estrella penosamente contra la realidad política y en menos de un mes se halla corroído desde las entrañas...

—No —dice Genaro Arriagada, subiendo el tono un poco más de lo que le conocen sus interlocutores—, ese es un invento de la prensa. Aquí no hay troika. Lo que hay son tres ministros, iguales, i-gu-a-les.

Tiene una manera de pronunciar "iguales", piensa uno de los dos oyentes, que es como si quisiera decir que hay uno mucho más igual que los demás. Y ése, por supuesto, es él mismo: el amigo personal del Presidente electo Eduardo Frei, el lugarteniente de todas sus batallas desde 1988, el consejero y político de ideas sorprendentes, el analista más castigado por la administración Aylwin —"me gané la Beca Presidente de la República", decía, explicando su obligada emigración a Princeton, tras perder toda esperanza de un cargo en el primer gobierno de la Concertación—, el articulador de la extraña amalgama llamada "freísmo" y, ahora, el factótum visible del régimen entrante.

A los interlocutores, el socialista Germán Correa y el PPD Víctor Manuel Rebolledo, ya designados ministros del Interior y secretario general de Gobierno, les sorprende esta negación tan enfática de un mote periodístico que, después de todo, sólo quería describir al equipo político que acompañará al nuevo Presidente en los salones de La Moneda.

Más les extraña desde que ha sido Arriagada quien ha insistido en que ambos, por su condición de dirigentes de los dos partidos fuertes de la alianza ("después de la DC", aclara siempre, y tras la quinta vez la frase adquiere un velo de amenaza), debían asumir esos ministerios. De no ser por su tenaz convicción de que el nuevo gabinete debía integrar a las máximas cabezas de la Concertación para asegurar la lealtad de sus partidos, tal vez Correa seguiría en la presidencia del PS y Rebolledo en la vicepresidencia del PPD, tratando el primero de domar a sus chúcaras tendencias y navegando el segundo en el océano de conspiraciones que ha sido el PPD en estos tiempos.

Correa y Rebolledo no se parecen en nada, pero ahora, cuando despunta 1994, tienen una explicación en común para la posición que han alcanzado: en ambos casos, su presencia en el equipo de La Moneda encarna una aspiración sentida por sus partidos, una reivindicación respecto del hegemonismo con que antes los ha tratado la DC. Si se les pregunta, dicen siempre lo mismo: que no están por sí solos, sino en nombre de su gente.

Y sin embargo, en este ajetreado enero, la vehemencia de Genaro Arriagada parece amagar esas altas expectativas.

Claro que quizás Arriagada sólo está tenso y, desde luego, cansado. Después de la campaña, y ya ungido secretario general de la Presidencia, ha debido acompañar a Frei en el nombramiento de algo más de mil cargos que dependen del Ejecutivo, en cada uno de los cuales ha habido a lo menos otros tres postulantes que ya lo culpan de su marginación, mientras que de los elegidos habrá una mayoría que estime que la nueva administración apenas se ha limitado a reconocer sus merecimientos.

Y por ello, a tan pocos días de las elecciones, el clima ya se está enrareciendo entre los tres principales ocupantes de la casa de calle Renato Sánchez, sede del comando operativo del Presidente electo. Para entender el fenómeno hay que retroceder unas cuantas semanas.

Hacia octubre de 1993 —tres meses antes de los comicios—, las especulaciones sobre el gabinete que acompañaría a Frei se habían convertido en el deporte favorito del mundo político. Las alentaba el singular hermetismo del candidato, una propensión al silencio que muchos de sus locuaces colaboradores no sabían bien cómo interpretar, y que tendía a multiplicarse porque, en ese mundo, muy pocos podían preciarse de conocerlo.

En 1982, Frei se había asomado a la política tras la intempestiva muerte de su padre, cuando Genaro Arriagada lo invitó a integrar el directorio de la radio *Cooperativa*, donde tenían sillones Edmundo Pérez Yoma y Carlos Figueroa, empresarios como él, aunque también hombres con una más decidida orientación al poder. En 1986, Frei sorprendió a la DC e incluso a su familia —la primogénita del clan, Carmen Frei, era hasta entonces la heredera única de esa vocación— con el anuncio de que entraría en la carrera política. Y dos años más tarde, el ingeniero era ya precandidato en la DC, desafiando a próceres tan consagrados como Patricio Aylwin, Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar.

Por eso en 1993, cuando su triunfo final ya se divisaba, el ingeniero de 53 años, padre de cuatro hijas y amante del fútbol, era todavía un misterio para la mayor parte de la clase política. También lo era su equipo, donde, con la excepción de Arriagada, Figueroa y el economista Juan Villarzú, había personajes de baja figuración: el empresario Pérez Yoma, el ex asesor de la ONU Renán Fuentealba, Pedro Goic, que tras un cierto protagonismo a comienzos de los 70 se pasó más de una década como asesor del BID y la FAO, Carlos Massad, dedicado por años a la banca, y su hermano Francisco Frei, empresario de *leasing*.

Para resolver el misterio, los políticos se dieron una explicación: Frei ganaría debido a su apellido y gobernaría acompañado por hombres de más experiencia, que serían los titulares del poder, naturalmente en la sombra.

La versión ganó pie en todos los ambientes. Parecía confirmarla el hecho de que algunos altos funcionarios de Aylwin ya se asignaban cargos y posiciones dentro del nuevo gobierno, como si éste no fuese a tener más remedio que aceptarlos.

¿Llegó ese clima a influir en las decisiones del candidato? Lo seguro es que por lo menos se apoderó de sus consejeros más cercanos, que se propusieron aislar a Frei de cualquier figura que pudiese eclipsarlo. Sobre esa base trabajó el pequeño grupo constituido para estudiar el futuro gabinete: Genaro Arriagada, Edmundo Pérez Yoma, Carlos Figueroa, Francisco Frei, Juan Villarzú y el presidente de la DC, Gutenberg Martínez.

Ya en octubre del 93, ese núcleo había identificado los peligros principales en quienes parecían las figuras más fuertes de la Concertación: el DC Alejandro Foxley, prestigiado por la exitosa gestión del Ministerio de Hacienda, y el líder del PS-PPD, Ricardo Lagos. Y actuando en consecuencia con el temor a la imagen de un gobierno débil y un Presidente periclitado por otros liderazgos, sus miembros definieron el primer principio del futuro gabinete: ni Foxley ni Lagos estarían en los ministerios de la primera fila, los políticos. Visto que tampoco sería posible mantenerlos fuera del gobierno, habría que reservarles carteras sectoriales con el relieve suficiente para no ofenderlos.

Por eso la noticia de que tanto Foxley como Lagos aspiraban a ocupar Relaciones Exteriores sembró alarma entre los asesores. En el crispado clima preelectoral, algunos llegaron a imaginar

que los dos dirigentes tenían un acuerdo para finalmente repartirse la Cancillería y el Ministerio del Interior, porque la instalación de uno en un puesto suponía la del otro en el que quedase. El propio Frei tuvo, durante un tiempo, más dudas que sus consejeros:

—Una vez cada cierto tiempo pienso que podría ser positivo —decía—. Una semana al mes me parece que sería bueno, y tres me parece que malo.

Las cavilaciones comenzaron a cesar cuando Frei declaró que tenía la decisión de que Interior quedase en manos de un socialista. Era una manera de reivindicar a ese mundo, cuya lealtad en la campaña lo había conmovido. Pero ¿quién podía ser?

—Tiene que ser un nombre de peso —dijo uno de los asesores.

—Uno fuerte —dijo otro.

—Fuerte en el PS —dijo otro.

—Entonces, el más fuerte —dijo Arriagada—: el presidente del partido.

—Genial —dijeron todos.

Ninguno imaginó que a partir de ese momento comenzaba a construirse la teoría con que se organizaría el equipo ministerial.

La primera vez que Germán Correa oyó que su nombre estaba considerado para el gabinete fue cuando se lo mencionó, a título de rumor, la periodista de *La Epoca* María Eugenia Camus. La segunda fue más contundente: una alusión directa de Pérez Yoma, en septiembre del 93, en plena campaña.

En noviembre, Genaro Arriagada le informó que no se trataba de un cargo cualquiera: Frei quería que asumiera Interior. Pero Correa había ganado la presidencia del PS con el propósito de transformar al partido y prepararlo para el poder en una gestión de tres años. Además, la tesis de Arriagada, cuyo centro era la necesidad de tener una presencia contundente de los partidos en el gabinete, no le parecía correcta: los primeros tiempos, a su juicio, serían "de gracia" y el gobierno no necesitaría ayuda sino hasta su segunda mitad, cuando la fuerza exocéntrica de las siguientes elecciones dispersara a los partidos.

Parte de ese mes fue consumido por las deliberaciones del equipo más cercano acerca de la duración del mandato presidencial, que se volvieron tortuosas por el silencio de Frei. Los ocho años establecidos por la Constitución no le gustaban a nadie, pero para entonces los consejeros sabían que un poderoso entorno familiar, constituido por Carmen Frei y su esposo Eugenio Ortega, Arturo Frei Bolívar y la esposa del candidato, Marta Larraechea, veían con desagrado los intentos de reducir el mandato. Por insistir ante el Congreso con el proyecto de cuatro años enviado por Aylwin, el ministro Enrique Correa había entrado en la lista negra de ese entorno.

GABINETE: PRIMER TIEMPO

MINISTERIOS	MINISTROS	MINISTERIOS	MINISTROS
Interior	Germán Correa	Relaciones Exteriores	Carlos Figueroa
Defensa	Edmundo Pérez Yoma	Economía	Alvaro García
Hacienda	Eduardo Aninat	Educación	Ernesto Schiefelbein
Justicia	Soledad Alvear	Obras Públicas	Ricardo Lagos
Agricultura	Emiliano Ortega	Bienes Nacionales	Adriana Delpiano
Trabajo	Jorge Arrate	Salud	Carlos Massad
Minería	Benjamin Teplizky	Vivienda	Edmundo Hermosilla
Transportes	Narciso Irureta	Secretaría Gral. Gbno.	Víctor Manuel Rebolledo
Planificación	Luis Maira	Secretaría Gral. Presid.	Genaro Arriagada
Corfo	Felipe Sandoval	Energía	Alejandro Jadresic
Sernam	Josefina Bilbao		

De entre el grupo asesor, sólo Arriagada y Pérez Yoma concordaban en un acortamiento a cuatro años. Pero, una vez perdida la batalla en el Parlamento (con el rechazo del proyecto por un Senado del que expresivamente se retiraron Carmen y Arturo Frei), Arriagada siguió bregando por una reducción que a lo menos llegara a seis años.

Cuando el candidato aprobó por fin ese período —el mismo que había tenido su padre en los 60—, Arriagada se lanzó a una fatigosa operación para asegurar el respaldo de la oposición. En una cena con Sergio Fernández consiguió el compromiso de los votos de a lo menos cuatro senadores designados y los dos de la UDI. En un almuerzo con Sergio Onofre Jarpa obtuvo una promesa por 14 votos de RN. (En el intertanto pasaron las elecciones, donde más de siete millones de votantes sufragaron sin saber por cuántos años y sólo después, con la certeza de los compromisos obtenidos por Arriagada, el gobierno de Aylwin accedió a despachar un segundo proyecto, que fue aprobado en el verano).

A partir del 13 de noviembre, Frei, parte de su equipo y los dirigentes del PS y el PPD, Germán Correa y Víctor Manuel Rebolledo, iniciaron una fulminante gira por todo el país. En los últimos días de ese mes, Gutenberg Martínez asumió la tarea de volver sobre el renuente Germán Correa:

—Tienes frenado el gabinete —le dijo—. Frei ya decidió que, si tú no vas a Interior, el esquema del gobierno va a ser muy distinto del que se está previendo. Has parado todo, ¿te das cuenta?

Se trataba de una situación extraña. Correa estaba bajo intensa presión para aceptar el principal cargo ministerial, pero al mismo tiempo los articuladores mayores de la campaña mantenían un cauteloso silencio acerca de sus propias funciones en el futuro cuadro del gabinete. La gira había sido un vivero de chistes sobre la incertidumbre de todos y el hermetismo del candidato, aunque no era tampoco un secreto que Arriagada, Pérez Yoma y Figueroa trabajaban intensamente en las variantes. Con un detalle: en cada nueva planilla que elaboraban, siempre quedaban abiertas las mismas tres vacantes: Relaciones Exteriores, Defensa y Secretaría General de la Presidencia.

La excepción al sigilo era Villarzú, que, ungido por la prensa como el seguro ministro de Hacienda, pareció aceptar de antemano esa función. Sus opiniones sobre cómo debía ser conducida la economía a partir de 1994 poblaron diarios y revistas y hasta hubo anticipos de cómo sería su equipo[1].

En la noche del viernes 10 de diciembre, horas antes de las elecciones, Frei dejó ver su molestia en una cena íntima:

—Si sigue hablando como ministro, no lo nombro ni junior.

En los días siguientes Villarzú supo que circulaban rumores acerca de sus compromisos financieros. En verdad, había firmado avales para préstamos bancarios que irían a Minera Mapocho. Pero desde octubre de 1992 había comenzado a prepararse para entrar al gobierno abandonando directorios y despejando su situación patrimonial. En octubre de 1993 había conseguido terminar ese proceso; pero el Boletín de la Superintendencia de Bancos, cuyo número trimestral más reciente databa de septiembre, lo mostraba todavía con un poderoso endeudamiento. Tras las elecciones comenzaron a circular fotocopias del Boletín. Inquieto, Villarzú se acercó a Arriagada y le describió los hechos:

—¿Tú crees que le debo explicar esta situación al Presidente?

—Te pediría que lo hicieras. Creo que es demasiado delicado.

—¿Y cuál es tu opinión?

—Dame 24 horas para pensarlo.

Cuando pidió audiencia a Frei, Villarzú ya sabía que la opinión de Arriagada era contraria a que asumiera. El Presidente electo escuchó en silencio; sólo dijo que consideraría la situación. Más tarde recibió el juicio negativo de Arriagada. Pero la intervención decisiva correspondió a Raúl Troncoso, otro amigo de la familia que había regresado desde la Embajada en Italia para integrarse al equipo en la fase final de la campaña. Troncoso reflotó los argumentos del padre de Frei sobre la inconveniencia de que los hombres vinculados a los negocios, y especialmente a la banca, ocuparan cargos de gobierno. Más grave sería que tales cargos fuesen del área económica[2].

El ministerio de Villarzú quedó lapidado en cosa de horas. Pérez Yoma se encargó de sugerirle que presentara una voluntaria "renuncia" a Frei. En la noche del martes 21, mientras ardían las gestiones del gabinete, Villarzú cumplió esa penosa tarea. Asumiría la conducción de Codelco. Hacienda pasaría, como inesperado regalo, a Eduardo Aninat, que hasta entonces se preparaba para partir como embajador a Estados Unidos[3].

En los días previos a las elecciones, el equipo de Frei decidió que la conformación del gabinete se anunciaría un mes más tarde, a mediados de enero. Preparándose para esa negociación, los presidentes y secretarios generales del PS y el PPD, Germán Correa, Luis Maira, Víctor Manuel Rebolledo y Jorge Schaulsohn, invitaron a Arriagada y Pérez Yoma a desayunar el viernes 10 de diciembre. Su propuesta era fijar un criterio para conversar sobre los cargos de gobierno a partir del lunes.

Allí oyeron los jefes del PS y el PPD, por primera vez *in extenso*, la tesis de la presencia integral de los partidos en el gobierno. También escucharon el veto parcial a Lagos y Foxley:

—A nuestro juicio —dijo Arriagada—, los presidenciables no deben estar en el área política, sino en un ministerio social importante.

—La cosa es muy simple —confirmó Pérez Yoma, con su estilo crudo y directo—: Eduardo tiene que ir fortaleciendo su liderazgo como Presidente y no puede tener a gallos como éstos a cada lado.

Ese fin de semana, el cientista político Arturo Valenzuela, un chileno nacionalizado norteamericano que tenía estrechas vinculaciones con el equipo del Presidente Bill Clinton, organizó una cena con un grupo de seguros funcionarios del nuevo gobierno, incluyendo a Arriagada y Lagos —invitados estelares—, y los tres miembros de la comisión de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, Pilar Armanet y Eduardo Aninat (aún embajador en EE.UU.)

—Bueno, Genaro —irrumpió Valenzuela, en medio de la cena—, ¿nosotros podemos comentar en Washington que Ricardo es el próximo canciller?

Arriagada quedó helado por lo que le pareció una agresión del anfitrión. El silencio cortó los alientos por medio minuto; tal vez Arriagada calculaba los costos entre la mentira, la ignorancia o la verdad. Y se decidió:

—No, Ricardo no va a ser el canciller.

El encuentro culminó con el aire de un desastre. A primera hora de la mañana siguiente, Lagos llamó a Arriagada:

—No voy a aceptar tu veto, Genaro. Tus ideas no tienen por qué ser las que sirven a este país.

—Ricardo, tú entiendes que no es nada personal —se defendió Arriagada—. Yo en esto tengo una lógica de Estado y me parece que Frei tiene un tiempo, que son los próximos 6 años. Tú tienes otro, que va después de Frei. La Moneda no resiste dos tipos así.

—Esa es una tontería, y tú lo sabes. Si no le tienes confianza al Presidente, es cosa tuya. Yo no puedo aceptar que tus temores se impongan a nuestros legítimos derechos.

En tanto Lagos intuía, tras la dureza del diálogo, que no sería útil desgastarse en una lucha de este tipo, Arriagada vio aumentar sus angustias después del triunfo del día 11. Foxley le había planteado al Presidente electo su aspiración de ocupar la Cancillería en cuanto fue a saludarlo, y Frei había guardado uno de sus inquietantes silencios. Por eso Foxley invitó a Arriagada a almorzar:

—He hablado con Arturo Frei, Genaro —dijo, apenas se sentaron en La Cascade—. Y me ha dicho que claramente el Presidente tiene pensado que yo sea ministro de Relaciones Exteriores, y que tú te opones.

—Mira —explicó Arriagada, mientras rumiaba la ira por las "interferencias" del entorno familiar—, tú, como Lagos, después de Frei, eres un *papabile*. Lagos lo es. Pero no puedes ser parte del palacio, porque tienes otra lógica, otro tiempo.

—Si insinúas que no voy a ser leal, no te lo acepto, Genaro. Esa lógica del oportunismo no tiene nada que ver conmigo.

Los enemigos comenzaban a acumularse en las espaldas de Arriagada. Por si no bastara, en esos mismos días de calvario, debió volver a insistir con Germán Correa.

Pero éste dijo que no quería más recados. El jueves 16, Frei lo recibió en su casa de calle Baztán y, con singular elocuencia, le explicó sus razones para quererlo en Interior.

—Si quieres un ministro socialista —se defendió Correa—, tienes varias opciones...

—No —cortó Frei—, no quiero eso. Quiero a Germán Correa.

El dirigente del PS pidió tiempo para consultar a su partido. La comisión política socialista se dividió ante la oferta; la tendencia de la "nueva izquierda" y algunos de los amigos "terceristas" de Correa —especialmente sus más cercanos, como Ricardo Solari y Luciano Valle— se opusieron firmemente, pero dejaron la decisión en sus manos.

—Es que no te imaginas —le dijo Arriagada, con tono picante, en una de sus nuevas embestidas— el ataque por aire, mar y tierra que vamos a iniciar sobre tu partido para quebrar tu voluntad...

Correa demoró horas en entender que no era broma. El jueves 16, cuando ya la mayoría de la comisión política del PS opinaba que debía aceptar, visitó al Presidente y le preguntó qué tipo de ministro del Interior esperaba:

—Porque, Eduardo —agregó—, seamos francos: yo no soy parte de tus amigos más cercanos, y lo que no deseo es que las decisiones se tomen aquí en tu casa, en *short* y al borde de la piscina, y yo me entere por los diarios.

—No, Germán. Lo que espero es que hagamos un equipo. Somos de la misma generación, no pertenecemos al pasado, no les debemos a las crisis de otras épocas. Podemos iniciar una nueva etapa para el país.

La aceptación de Correa desató el proceso de nominación de ministros. El viernes, Arriagada le ofreció a Foxley el Ministerio de Educación. El aún titular de Hacienda reaccionó con ferocidad: le parecieron ofensivas tanto la propuesta como el hecho de que no la formulase el Presidente.

El martes 21 —poco antes de la "renuncia" de Villarzú—, Frei recibió a Lagos, que reiteró su aspiración por Relaciones Exteriores. El Presidente explicó sus razones para no cumplir tal deseo y le propuso Obras Públicas, que no sólo tendría una de las prioridades del gobierno, sino que además coordinaría todas las tareas de infraestructura. Lagos pidió tiempo para pensarlo. En el PS y en el PPD recibió recomendaciones de no aceptar, y hasta ofrecimientos para resistir en rebeldía. Pero Lagos, que apreciaba con más finura las complejidades del nuevo equipo en el poder, decidió aceptar.

Esa misma noche, Frei llamó a Foxley y le insistió con Educación. El economista lo rechazó por segunda vez. Sería la última.

Mientras las primeras filtraciones sobre las dificultades de Frei llegaban a la prensa, el equipo presidencial optó por acelerar el ritmo; ya no cumpliría la fecha prometida, sino que se adelantaría para Navidad. El miércoles, Arriagada se reunió con Sergio Bitar, senador y presidente del PPD, para informarle que su vicepresidente, Rebolledo, asumiría como secretario general de Gobierno. La evasiva actitud de Bitar le dio un indicio de que la situación del PPD no era nada fácil.

Era la confirmación de que la dirigencia de los partidos no garantizaba su homogeneidad. En verdad, ya había indicios de lo mismo con Correa, que tras ganar el liderazgo socialista hasta había soportado una rebelión de las tendencias. Pero la tesis de Arriagada era tan impermeable a las evidencias, que hasta se permitió una humorada en el caso de la DC: puesto que su presidente, Gutenberg Martínez, era diputado, la solución sería... nombrar a su esposa, Soledad Alvear, en el estratégico campo de Justicia.

Por supuesto, nada de esto podía decirse, porque, además de la dignidad del Estado, estaba en juego la de las personas. Cuando el PPD notificó confidencialmente su oposición al nombramiento de Rebolledo, Arriagada usó el secreto al revés: como nadie podría probar que sus

adversarios dispusieran de una mayoría fraccional superior a la suya, Rebolledo tendría plena legitimidad para asumir. El Presidente lo ungió con el cargo el jueves 23, en su casa, tras una extensa conversación sobre las dificultades de la formación del gabinete.

Para entonces, la teoría de Arriagada acerca de la integración de los partidos al gobierno se había extendido hasta los grupos internos. Los radicales, menores, sólo recibirían Minería, en la persona de Benjamín Teplizky. Pero en el PS habría lugar, además de los "terceristas" representados por Germán Correa, para los "renovados", con Jorge Arrate en Trabajo, y para la "nueva izquierda", con Luis Maira en Planificación, que aceptó ese lugar tras rechazar la friolera de cuatro carteras distintas: Trabajo, Transportes, Economía y Agricultura. El "laguismo duro" del PPD entraría con Alvaro García a Economía y, fuera del grupo que respondía a Rebolledo, una tercera fracción tendría hueco en Bienes Nacionales, con Adriana Delpiano. Para la DC quedarían, del "aylwinismo", Edmundo Hermosilla en Vivienda; de los "chascones", Felipe Sandoval en Corfo; de los "colorines", Narciso Irureta en Transportes; y del "freísmo", Carlos Massad en Salud.

Para esa zona líquida de cruce entre la DC y la Iglesia Católica se pensó en Alberto Etchegaray, que podría pasar de Vivienda con Aylwin a Educación con Frei. Pero Etchegaray pidió 48 horas para pensarlo. El viernes 24, Ramón Aboitiz —socio de Frei en la empresa de ingeniería Sigdo Koppers— decidió que Energía no era apropiado para él, y el mismo día el empresario Andrés Navarro, impactado por lo ocurrido con Villarzú, desistió de hacerse cargo de Agricultura.

Con una prisa que resultó difícil de entender para quienes no conocían las amargas intimidades, el viernes 24 de diciembre se anunció el gabinete, con tres vacíos: Educación, Agricultura y Energía. El lunes 27 Etchegaray rechazó Educación con la explicación de que el servicio público lo había alejado de su familia, a la que quería regresar. Esa semana los puestos vacantes fueron llenados casi de emergencia: el experto de la Unesco Ernesto Schiefelbein asumiría Educación y el ingeniero agrícola Emiliano Ortega (concuñado del Presidente), Agricultura, ambos con oposición de Arriagada, Germán Correa y, de modo más intermitente, Pérez Yoma; y el ingeniero Alejandro Jadresic se haría cargo de Energía.

Como a esas alturas parecía previsible, los silenciosos asesores más cercanos ocuparon los ministerios que les acomodaban: Figueroa, Relaciones Exteriores; Pérez Yoma, Defensa; y Arriagada, la Secretaría General de la Presidencia.

Sólo Arriagada se sitúa en la intersección entre el poder real de los amigos y el poder formal de los ministros de La Moneda. Y desde que estos últimos se instalan en la sede de calle Renato Sánchez, en enero del 94, para la prensa resulta natural hablar de la *troika*.

En la segunda semana de enero de 1994, Frei encarga a los tres ministros políticos que diseñen la nómina de subsecretarios. Dos criterios deben dominar: se ha de mantener el equilibrio de los partidos y la opinión de sus directivas debe ser considerada. (Una tercera restricción, la exclusión de los subsecretarios de Defensa, serviría para compensar con un cupo el número impar asignado al PS y al PPD. Pero la Armada rechazó la nominación de Juan Gabriel Valdés, que debió ser sustituido por otro DC, Carlos Eduardo Mena).

Correa, Rebolledo y Arriagada se reúnen con los jefes de la Concertación, reciben las nóminas de postulantes y acuerdan sesionar para analizar nombre por nombre. Pero Arriagada desaparece por tres días y sus presuntos pares se enteran de que la nómina de subsecretarios está decidida. Arriagada ha trabajado a solas con el Presidente.

Mientras el PS y el PPD se consideran perjudicados por las asignaciones, Correa oye que Belisario Velasco ha sido confirmado por Frei como subsecretario de Interior. De inmediato protesta ante Arriagada: no tener la deferencia de informarle, dice, es una desconsideración que no soporta. Prefiere dejar el gabinete, a menos que Frei le dé explicaciones... y disculpas.

Arriagada maniobra con angustia —hasta llega a hablar con el mismo Velasco— para evitar que el orgullo de Correa desemboque en una crisis de gabinete antes de asumir. Por fin, durante

una reunión de trabajo en la casa de calle Baztán, a solas, el Presidente explica a Correa que desearía que Velasco se quedase en Interior, aunque, si el ministro lo desea... No, dice Correa, no tengo objeción contra él.

¿Deteriora ese desplante la relación entre el Presidente y su ministro del Interior? En principio, parece que no. De hecho, en febrero Frei invita a Correa a Coya, donde pasa unos días de descanso, y le permite una revancha de gran escala: entre los dos nombran a los intendentes, los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales. Ahora son el PDC y —de nuevo— el PPD los que se declaran perjudicados; peor aún, el propio ex vicepresidente del PPD, Rebolledo, se halla desbordado por el nombramiento de personas a las que ni conoce como secretarios regionales de su ministerio. En la DC la situación llega a ser tan grave, que la mesa presidida por Gutenberg Martínez tambalea; Arriagada es inculpado de descuidar los intereses del partido.

Así, cuando asumen sus cargos en La Moneda, Correa, Rebolledo y Arriagada conviven en un clima de desconfianzas mutuas. Los tres sospechan que a sus espaldas los colegas organizan anchas conspiraciones. Cada uno imagina que los otros dos han establecido alianzas en su contra. Todos los gestos adquieren un semblante agresivo. Por ejemplo, la modificación del protocolo por la cual el ministro secretario general de la Presidencia adquiere preeminencia sobre el secretario general de Gobierno. O la contratación, por Arriagada, de un equipo de asesores entre los cuales figura el periodista Ignacio González. Cuando Rebolledo protesta por esta incorporación en la que presiente una amenaza contra su función de vocero, Arriagada ensaya la más cruda de las explicaciones:

—Es muy simple: aquí hay dos ministros del área PPD-PS y yo soy el único ministro de la DC. A lo menos tengo que aparecer un día a la semana hablándole al país; si no, el partido no lo va a entender.

Pero, al menos de momento, los ministros políticos entienden que deben funcionar como tales. Arriagada proporciona un principio operativo: un comité político en el que se integran, además de los tres ocupantes de La Moneda, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. Ello permite que los tres amigos más cercanos al Presidente queden en el núcleo de las decisiones[4].

Pero el comité no puede impedir que la convivencia en La Moneda se deteriore hora por hora. Como ha profetizado Arriagada, la *troika* ya no es más que una entelequia de la prensa.

El martes 15 de marzo de 1994, en su segundo día hábil como ministro del Interior, Germán Correa recibe en su despacho al general director de Carabineros, Rodolfo Stange. El ministro no ignora que el general le tiene una profunda desconfianza: ha sabido que ni siquiera quería ir a saludarlo cuando fue designado, y que sólo lo hizo porque algunos de sus generales se lo recomendaron. Desde esos días de enero, Stange ha preferido entenderse con el ministro Pérez Yoma, aprovechando la ambigüedad que la doble dependencia le permite a Carabineros.

Correa conoce la polémica situación creada con el alto mando de Carabineros en los últimos meses de la administración Aylwin, cuando el general Stange logró que el gobierno aceptara la renuncia de uno de sus generales más confiables, Mario Morales, y pidió prorrogar el tiempo de servicio del general subdirector Alfredo Núñez, que cumple su período máximo reglamentario el 16 de marzo[5]. El Presidente Aylwin y el ministro Krauss decidieron dejar la decisión final al nuevo gobierno. Y como Correa ha oído que Carabineros pretende que la aprobación del alto mando por Aylwin a fines del 93 equivale a la prórroga automática del servicio de Núñez, ha pedido informes en derecho, todos los cuales le confirman que el alto oficial sólo puede permanecer con un decreto que expresamente le aplique la ley Canessa.

Además, ya conoce el criterio que el Presidente Frei ha compartido con el ministro Pérez Yoma: la ley Canessa, que es un instrumento de excepción, no será aplicada sino cuando se justifique por circunstancias excepcionales. Salvo que se le atribuye cierta responsabilidad en la aplicación de fuerza desmedida en el incidente a balazos frente a El Faro de Apoquindo, no se trata de una objeción personal contra Núñez, sino de un criterio de gobierno.

—De modo que tenemos un problema, general —dice Correa—. Los actos del general Núñez después del 16 serán inválidos, y usted y yo seríamos responsables si lo permitiéramos.

—Pero, ministro, creía que esto ya estaba resuelto.

—No lo está. Tiene que pedir que se aplique la ley Canessa. Pero le advierto que el criterio del Presidente es no hacerlo.

—Es que esto es una sorpresa...

—No, general, no lo es. Tengo los oficios del ministro Krauss donde le advierte de esto.

En el gobierno se extiende la impresión de que el general Stange ha intentado una triquiñuela. Correcta o no, esa percepción se confirma cuando trasciende a la prensa que se ha impuesto un veto al general Núñez y trata de manipular el nombramiento del nuevo subdirector. Y es decisiva para que al día siguiente, el jefe de Carabineros reciba del Presidente una respuesta escueta:

—No vamos a aplicar la ley Canessa, así es que por favor hágame llegar el expediente de retiro del general Núñez.

El 17, el ex ministro Krauss despacha una carta pública en la que deja constancia de que Stange jamás pidió por escrito la prórroga del servicio de Núñez[6]. El general no contesta; la institución se ve sacudida por los rumores y hasta circulan versiones sobre una dimisión masiva de los generales. A la semana siguiente Stange envía a La Moneda su propuesta para nuevo subdirector, que el Ejecutivo se apresura para aceptar: el general inspector Fernando Cordero, primo del ex ministro Krauss y hombre "blando" según las descripciones que el gobierno ensaya en el jabonoso mapa interno de la policía.

El incidente marca el primer gran gesto de autoridad del nuevo gobierno. Y el comienzo de su primer gran conflicto.

Notas

1. Por ejemplo, ver: Del Solar, Bernardita, y Aguirre, María Teresa: *El Chicago boy de Frei*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.183, 12 de diciembre de 1993.

2. Según una versión conocida después de la publicación de este capítulo, Villarzú había informado en detalle de su situación financiera a Frei y a todos sus colaboradores desde que comenzó a gestionar la liberación de sus compromisos. Así, su caída habría sido más una "conspiración de silencio" que otra cosa.

3. Paradójicamente, Aninat se convertiría en uno de los pocos ministros estables de Frei y a fines de 1998 cumpliría un récord como el ministro de Hacienda más duradero del siglo.

4. Otros detalles de este proceso, en Capítulo 34.

5. Dávila, Lucy: *Quién manda aquí*. Revista *Hoy*, Nº 852, 15 al 21 de noviembre de 1993. Y: Córdova, Hugo: *Luz roja*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.179, 13 de noviembre de 1993.

6. Los párrafos sustantivos de la carta, así como otros detalles relevantes de esta crisis, en: Dávila, Lucy: *El primer round*. Revista *Hoy*, Nº 871, 28 de marzo al 3 de abril de 1994.

24

La guerra verde

El fallo judicial sobre uno de los peores crímenes de los 80 pone al gobierno de Frei en lucha contra el director de Carabineros, Rodolfo Stange. Un conflicto que se prolonga por meses no puede sino deteriorar a los protagonistas. Aunque uno se imponga.

—General —le dice Luciano Fouillioux al director de Carabineros, Rodolfo Stange, mientras el helicóptero se desliza por la soleada mañana de la Sexta Región, en dirección al Cachapoal—, ya habrá visto que la prensa está anunciando que el fallo del ministro Milton Juica en el caso de los degollados está por salir. Aunque se trate de carabineros en retiro, sería bueno que nos reuniéramos para ver las posibles consecuencias de esto.

—Cómo no —dice el general—, me parece una buena idea.

Fouillioux lleva 14 días como subsecretario de Carabineros, un cargo al que llegó después de haber trabajado en la campaña de Eduardo Frei al lado de Edmundo Pérez Yoma, y todavía no imagina la crisis que está por desatarse. En realidad, nadie en el gobierno la vislumbra, aunque un manto de desconfianza ha comenzado a rodear las relaciones con el general Stange desde que los hombres de La Moneda creyeron sorprenderlo en una maniobra para mantener de facto a su subdirector, el general Alfredo Núñez.

En el intertanto, Fouillioux ha tratado de tender puentes hacia el mando de Carabineros para superar esa tensión inicial, y tal vez por eso esta mañana, la del 25 de marzo de 1994, el general Stange lo ha invitado a inaugurar el nuevo cuartel policial de Quinta de Tilcoco.

Y como a Stange le interesa la propuesta del subsecretario, en la mañana del lunes 28 lo recibe en su despacho de calle Zenteno. Pero ahora abundan las versiones acerca de que la resolución del ministro Juica involucrará también al general director en la sórdida trama de los crímenes ejecutados en 1985, que figuran entre los más despiadados de la historia.

—General —dice Fouillioux—, habrá visto lo que se dice ahora...

—Sí —dice Stange, con cierta desaprensión—, pero no hay nada de esto. No se preocupe, porque mis asesores ya me han dado las seguridades de que yo no vengo en las resoluciones del ministro.

La seguridad del general conduce el diálogo hacia el problema de qué hacer ante las probables condenas de los otros oficiales envueltos. Aunque ya están en retiro, Stange se muestra complicado por esas inculpaciones. Por mucho que se sostenga que no hay envolvimiento institucional, es un hecho que se ha mantenido en contacto con ellos, que los ha apoyado en su defensa y que resiente las acusaciones de abandono que algunos de ellos le formulan.

El subsecretario entiende; el mando jerarquizado supone también un compromiso con los subalternos. Por eso empeña su prudencia cuando le propone que Carabineros realice una declaración

reconociendo la gravedad del delito. Stange queda de pensarlo. Al día siguiente responde que los generales rechazan la idea. "Están un poco duros en esto", agrega.

Lo que el subsecretario no sabe es que las confianzas están quebradas hace ya mucho tiempo en Carabineros a propósito del caso de los degollados. Varios de los procesados se han acogido a la ley de arrepentimiento eficaz y algunos miran con ciego rencor la pasividad del mando para investigar el asesinato del coronel Luis Fontaine, el principal de los acusados en su condición de ex jefe de la Dicomcar. Peor todavía: uno de los jefes implicados, el mayor Guillermo González Bettancourt, ha grabado una reunión en la que Stange les explica el apoyo clandestino que les prestará y los insta a ocultar información ante el juez. Juica ha interrogado al general sobre la cinta y Stange ha reconocido su participación, explicando el contexto en que se dio y negando que quisiera obstruir el trabajo de la justicia[1].

Pero Juica no le cree. Y aprecia que, en todo caso, más allá de su opinión, hay una verdad lapidaria: el mando policial no ha mostrado el menor interés en investigar los crímenes.

En verdad, el general Stange podría difícilmente ignorar la opinión del ministro Juica. En fecha tan anterior como 1992, ya tuvo la certeza de que el juez se dirigía no sólo contra los autores materiales de los asesinatos, sino también contra los mandos superiores por su nula colaboración en el proceso.

A fines de marzo de aquel año, cuando Juica se aprestaba a dictar sus primeras encargatorias de reo, el general inspector Mario Morales realizó una discreta gestión destinada a saber si, como se rumoreaba en ambientes judiciales, el ministro podría involucrar al general director. Cuando algunos abogados se lo confirmaron, el general eligió un domingo para ir, vestido de riguroso civil, a ver al propio ministro a su casa de calle Lyon.

Juica fue crudo. Había perdido toda confianza en Stange desde que, habiéndole dado la justicia la posibilidad de investigar él mismo los crímenes, se había iniciado una amplia operación de encubrimiento con obvia anuencia de los superiores: negativas para presentar a los sospechosos, ocultamiento de documentos, destrucción de recintos, extravío de vehículos e incluso instructivos para que los hombres concurrieran a declarar con disfraces[2]. No, le dijo el ministro a Morales, no se podía seguir hablando de inocencia: Stange debía ser procesado por obstrucción a la justicia.

Morales informó al general subdirector, Gabriel Ormeño, y habló luego con el ministro Enrique Krauss. El procesamiento del general director, le dijo, y su eventual destitución por ello, significaría que numerosos generales, incluido él mismo, se verían forzados a renunciar. Krauss, que calibró la gravedad de la crisis en un momento en que el Presidente Aylwin estaba fuera de Chile, habló con Juica. El 2 de abril de 1992 el ministro en visita dictó encargatorias de reo contra trece carabineros, incluyendo al anterior general director, César Mendoza. Stange no apareció en la nómina.

Stange conoció las gestiones por Ormeño. Se había salvado en el filo. Pero cuando el mismo general Morales declaró a los periodistas que sentía estupor y dolor por el hecho de que se confirmara la participación de policías en los asesinatos, Stange se encargó personalmente de reprocharle el desprestigio que causaba a la institución. "Los generales opinan que usted nos está poniendo de rodillas", le espetó.

Morales comenzó a entrar en una extraña situación. Había hecho casi toda su carrera de oficial superior, desde teniente coronel hasta general inspector, como jefe de gabinete de Stange y su pequeño grupo de ayudantes había reducido a cero la influencia del otrora poderoso Consejo Asesor Superior. Sin embargo, desde 1986 —un año después de asumir ese puesto— había estado en la mira de los servicios de seguridad y la CNI había emitido informes oficiales que lo sindicaban como filo DC. Las acusaciones no le hicieron mella bajo el sólido paraguas de la Dirección General, pero sabía que la parte más sombría del régimen militar lo estimaba peligroso[3]. Paradójicamente, la misma influencia hizo que el gobierno de Aylwin lo considerase como el "duro" en la sombra de Carabineros durante toda su fase inicial. Pero en 1992, en lo que pareció una obvia preparación para sucederlo a la hora de su retiro, Stange lo trasladó a la

Dirección de Orden y Seguridad, donde Morales, académico y sofisticado, trabó rápidamente una relación de confianza con Krauss y el subsecretario Belisario Velasco.

Cuando formuló sus declaraciones sobre el caso de los degollados, Morales ya estaba bajo la sospecha de ser demasiado cercano al gobierno, una versión que parecía alentada con especial empeño por su superior inmediato, el general inspector Alfredo Núñez, que ya era candidato a ocupar la Subdirección si ella quedaba vacante[4]. Ni las gestiones ante Juica y Krauss ni los puntillosos informes al general Ormeño modificaron ese panorama. Peor aún, el propio Ormeño, que hasta entonces era considerado el más cercano a Stange, entró en una rarísima posición de soledad, como si el solo conocimiento de los hechos lo hubiese tocado con la desconfianza.

En octubre del mismo año, los generales se enteraron, por consultas directas del ministro Krauss —que incluso les mostró el oficio—, que Stange había propuesto el pase a retiro de Ormeño, Morales y el general Fernando Cordero, amigo de escuela de Morales y primo de Krauss. Sin embargo, cuando se lo preguntaron, Stange dijo que no había tal cosa.

Ante la inaudita situación, y aprovechando su relación casi diaria, Krauss le anunció a Morales que el gobierno rechazaría su retiro. Morales dijo que en tal caso sería mejor que tampoco se fueran Ormeño y Cordero, un gesto que Krauss debió agradecer por la defensa de su primo, que él no podía hacer. Pero cuando el ministro conversó con el Presidente, llegaron a la conclusión de que no podrían mantener forzadamente a un subdirector; por lo demás, tampoco confiaban en Ormeño, a quien identificaban como cabeza del *lobby* que había impedido el traspaso de Carabineros al Ministerio del Interior.

El lugar de Ormeño fue ocupado por Núñez. Morales siguió activo, pero fue transferido al Consejo Asesor Superior, el órgano que él mismo había contribuido a anular. En los meses siguientes soportó un callado infierno: seguimientos, sumarios, anónimos y rumores sin fin. Como el tercero en la línea de mando, a fines de 1993 podría asumir la Subdirección, puesto que Núñez completaría su tiempo de servicio. Pero, entendiendo que en tales condiciones sería inviable, anticipó su retiro voluntario para noviembre de ese año.

En cualquier caso, Stange supo lo que opinaba Juica. Por eso ahora, en 1994, su confianza resulta doblemente extraña.

(En 1998, cuando el Presidente Frei proponga al ministro Juica para ascender a la Corte Suprema y la derecha se alinee para tomar venganza por el proceso a Stange, el general (R) Morales, ahora director de Gendarmería, le recordará al ex director general y ahora senador el favor prestado por Juica en 1992. Stange se retirará de la sala y no participará en la votación contra el juez.)

En la tarde del miércoles 30 de marzo de 1994 el gobierno recibe los detalles del fallo que Juica dictará al día siguiente: además de sentenciar a 15 carabineros y un civil, propone el procesamiento, a través de la justicia militar y por incumplimiento de deberes militares, de dos oficiales superiores y cinco generales, de los cuales el único activo es Stange[5].

La primera crisis de gran magnitud provoca un movimiento frenético en el gobierno de Frei. El comité político se reúne en la mañana del 31 con el Presidente y con un grupo de abogados y acuerda la estrategia oficial: defender la soberanía de las decisiones judiciales y confirmar la prescindencia del gobierno. La declaración es redactada durante la reunión y Germán Correa recibe el encargo de leérsela al general Cordero. Y el subdirector de Carabineros, asesorado de cerca por el general inspector Manuel Ugarte, pide algunos cambios de tonalidad y sugiere ciertas líneas.

Stange se ha ido a pasar el fin de Semana Santa a su fundo en Puerto Montt, a orillas del Maullín. En la tarde partirá a Huelmo, en la misma zona, el ministro Pérez Yoma. Stange lo ha invitado a tomar té el viernes 1°: ahí podrán conversar más libremente de este problema.

Cuando la declaración ya ha sido afinada con Cordero, los ministros concuerdan en leer el texto y no responder preguntas. Lo hará el ministro Correa. La protesta *sotto voce* del director de Comunicación y Cultura, Pablo Halpern, cae en el vacío: el ministro secretario general de

Gobierno, Víctor Manuel Rebolledo, tiene un avión a la espera en Cerrillos para llevarlo a la ceremonia de aniversario del diario *El Día* de La Serena.

Pero justo antes de bajar a enfrentar a los periodistas, Correa advierte que hace pocos días ha habido un incidente porque el subsecretario Velasco se negó a responder preguntas y los periodistas de "La Copucha", la sala de prensa del palacio, se han rebelado. En un caso como éste, dice, será imposible no contestar. Y la pregunta más obvia será si el gobierno pedirá la renuncia a Stange. Lo que puede responder, agrega, es que no tiene esas atribuciones y que el general debe evaluar con su conciencia la situación, siguiendo la tesis, ya concordada, de que hay que dejarlo en la estacada.

La conferencia de prensa se desarrolla exactamente según lo previsto y Correa agrega a la declaración su ensayada respuesta[6]. Al concluir, llama al general Cordero y le describe la conferencia, incluyendo el añadido.

—¿Qué le parece, general?

—Por lo que usted me dice, ministro —expresa Cordero—, creo que no debería haber problemas. Estoy con varios generales aquí, que lo han oído por el citófono abierto, y piensan lo mismo.

Correa deja el ministerio a las 21.30. Es el último. Todo está resuelto.

A sus espaldas estalla una tormenta. El general Stange, informado en Puerto Montt de los detalles, considera la respuesta de Correa como una provocación para insinuarle la renuncia. Una nueva declaración toma forma, con un rechazo a las palabras del ministro y un respaldo cerrado al jefe[7]. La leerá al día siguiente el mismo Cordero, rodeado de todos los generales. Y cuando Stange regrese a Santiago, lo irán a buscar en masa al aeropuerto.

El té con Pérez Yoma queda cancelado.

El lunes 4 de abril el comité político se vuelve a reunir. Parece que sus bríos se hubiesen renovado tras el fin de semana largo. Sólo Correa protesta porque en esos días se ha quedado incomunicado de los demás ministros. En el acalorado debate se separan posiciones: Pérez Yoma y el canciller Carlos Figueroa opinan que se debe exigir a Stange su renuncia tras el acto limítrofe con la insubordinación realizado por sus generales; Correa y Genaro Arriagada se muestran más prudentes: no se puede hacer eso sin tener las facultades; Rebolledo tiende a compartir esta última posición. Pero el clima emocional del episodio los envuelve a todos. Con su vehemencia usual, Pérez Yoma toma el teléfono y llama al subsecretario Fouillioux:

—Cítame a Stange para las 3 —brama, y luego murmura—: le vamos a pedir la renuncia...

—Pero, Edmundo —alcanza a decir Fouillioux—, ¿tú crees...?

—Nada. Cítamelo no más.

A las 15 horas, Stange llega a las oficinas de Pérez Yoma, que lo recibe a solas. La situación es muy mala, general. La acusación del ministro Juica es de una gravedad tremenda, y más encima sus generales han sacado esta declaración insolente, y montado un show, primero al leerla y después en el aeropuerto. El gobierno, empezando por el Presidente, cree que debe renunciar.

Stange se defiende con dificultad. El ministro lo advierte abrumado, respirando con dificultad, como si la arritmia que sobrelleva se agudizara. Le parece que está a punto de acceder. Pero de pronto, con germánica bonhomía, Stange le pide tiempo para meditar hasta el día siguiente.

Esa tarde, Pérez Yoma regresa a La Moneda convencido de que la crisis dará al gobierno un triunfo resonante.

—Está listo —anuncia—. Sólo falta que Eduardo le dé el empujoncito.

Pero a la misma hora, Stange ha iniciado consultas con el auditor de Carabineros, Carlos Pecci, y con el abogado Pablo Rodríguez, recién contratado para su defensa en los tribunales. Ambos creen que una dimisión en estas circunstancias equivale a una autoinculpación, y que debilitaría en forma decisiva la defensa judicial.

A primera hora del martes 5, Stange ordena llamar al jefe de la Agenda Presidencial, Miguel Salazar, para que se le facilite la sala de prensa y un podio para dirigirse a los periodistas tras

su encuentro con el Presidente. Salazar rechaza la idea, y lo respaldan Rebolledo y Halpern: esa tribuna es para ministros y subsecretarios, y además en este caso hay demasiados riesgos envueltos. Pero Pérez Yoma y Fouillioux están convencidos de que la petición confirma que Stange anunciará su dimisión, e insisten en que se le faciliten las cosas.

A las 9.30 lo recibe el Presidente. El general inicia el diálogo con un extenso balance sobre su período al frente de Carabineros, el modo en que el Cuerpo ha contribuido a la reconciliación y los planes que tiene para el futuro cercano. Luego explica su posición ante el proceso de los degollados y por qué considera injusta la imputación de Juica. Añade que está seguro de que finalmente será exculpado.

Frei responde que el gobierno estima demasiado grave el cuadro que se ha creado. Pero el diálogo avanza con lentitud y ambigüedad entre los dos hombres poco verbales. Por fin, cuando Frei plantea la posibilidad de la renuncia, Stange responde que no puede hacerlo hasta que no demuestre su inocencia. "Y vendré a verlo después, para ver si opina lo mismo, Presidente".

Después de 80 minutos, Stange sale del despacho y pide un baño para refrescarse. Mientras se encamina a la sala de prensa, el Presidente llama a Correa y le informa de la negativa del general. Demudados, los ministros se reúnen a esperar lo que Stange dirá a los periodistas. Y sienten vértigo cuando lo oyen declarar:

—Yo-no-re-nun-cio.

Se ha declarado la guerra. En su siguiente encuentro, unos días después, Pérez Yoma se lo dirá en términos brutales a Stange, con gritos que quebrantarán los sutiles tabiques de su gabinete:

—Usted, general, no sólo fue a orinarse en la casa del Presidente, sino que además a hacerlo con ostentación.

—No era la intención, ministro, cómo se le ocurre —dirá Stange, afligido—. Si se ha interpretado así, me arrepiento de veras.

—Mire, general: yo no le creo. Conmigo, desde ahora ya sabe a qué atenerse. No se lo voy a perdonar.

Los jefes policiales perciben en la misma noche del 5 que la situación es crítica. Un general, Osvaldo Muñoz, llama al diputado Aldo Cornejo, que es estrecho amigo de un hermano del general Ugarte, para pedirle que interceda ante el gobierno. Más tarde, el general Cordero opta por un acercamiento más frontal y le pide al subsecretario Fouillioux que se cree una mesa de conversaciones, ojalá con él mismo.

Pérez Yoma autoriza el paso y a partir del miércoles 6 Fouillioux y el jefe del gabinete político del ministro, Gonzalo García, inician una ronda de extenuantes reuniones con los generales Cordero, Ugarte y Pecci. En la noche de ese primer día, la propuesta oficial de que Stange tome vacaciones hasta conocer el dictamen definitivo de la justicia y luego pase a retiro es aceptada en principio. Pero Stange duda y pide tiempo para reflexionar.

El viernes 8 responde: no. Los negociadores del gobierno, exasperados, amenazan a Cordero con sacar la crisis a la luz pública e incluso exponerse al Consejo de Seguridad Nacional. Esa noche les llega el oficio que informa que Stange toma vacaciones por 30 días a contar de esa fecha. Pero no hay compromiso de renunciar. El mando subrogante queda en manos de Cordero.

Mientras los 30 días vuelan, el gobierno se enfrenta al riesgo de quedar de nuevo sin solución. Fouillioux se empeña a fondo con el general Cordero y obtiene una propuesta: un permiso administrativo por 60 días, con un propósito decoroso: digamos, el estudio de un plan de modernización, encargado por el propio Ejecutivo.

Pero en la primera semana de mayo, Pérez Yoma recibe la información de que, concluyendo sus vacaciones, Stange retornará sin completar su permiso administrativo, que ya está cursado. El lunes 9 lo recibe para volver a discutir el asunto. Y, otra vez en tono duro, el ministro le propone llegar a un compromiso para que se retire una vez que concluyan el proceso y los permisos especiales. Sin el argumento de la defensa de su honor, Stange declara que debe

pensarlo. Y el martes 10 Pérez Yoma recibe un oficio que le informa que el general director reasumirá el mando el día 17.

El ministro estalla en cólera.

Pero para entonces, el gobierno sabe que en la cúpula policial se han quebrado las confianzas. Durante la ausencia de Stange, Cordero ha dado ostensibles señales de ejercer el mando en plenitud y ha mantenido un diálogo asiduo con el gobierno. A medida que le han dicho que Cordero parece aspirar a reemplazarlo, Stange se ha preocupado de subrayar que no ha delegado sus facultades; pero desde la distancia es difícil controlar la situación. De modo que el regreso anticipado parece menos un desafío al gobierno que un esfuerzo por frenar a sus subordinados.

A su turno, los carabineros han percibido que también el gobierno está embarcado en una disputa intestina por el manejo de la crisis. La semana anterior, el ministro Correa ha recibido del director de Seguridad, Isidro Solís, la versión de que el general Juan Salinas, muy cercano a Stange, puede proponer una negociación. Correa ha planteado el tema al Presidente, pero éste no le ha respondido nada y más tarde el ministro del Interior ha sabido que el ministro de Defensa sigue a cargo del conflicto. La falta de definición ha llevado a Correa a redactar una renuncia que se propone llevar un sábado a Cerro Castillo, donde el Presidente pasa el fin de semana. Pero lo ha detenido la opinión de Ricardo Solari: si renuncia ahora, tendrá que explicar por qué. Y no puede hacer tal cosa en medio de una crisis.

Correa se resigna y en la semana del 9 de mayo recibe de Solís la propuesta del general Salinas: Stange esperará la resolución final del juez y renunciará seis meses después, con todos los honores del caso.

El viernes 13, la gestión de Correa llega a oídos de Genaro Arriagada, que propone reunirse de urgencia, esa misma noche, en casa de Pérez Yoma, con Correa. Y allí, a gritos, descalifica la operación:

—¡Movidas paralelas! ¡Y con generales de tercer orden! ¡Están poniendo en peligro al Presidente! ¡Esto debe cesar de inmediato!

Correa entiende que la violenta embestida de Arriagada echa a pique el intento. La conexión Solís queda desactivada. Y con ella, el retiro pactado.

El lunes 16, antes de que se consume el anunciado regreso al mando, Pérez Yoma se reúne nuevamente con Stange. No puede volver, le dice, porque su permiso no ha sido anulado. Si quiere hacerlo a la fuerza tendrá un conflicto administrativo. Debe salir, y ahora las facultades que delegue deben quedar por escrito, para que no se repitan las desavenencias de los últimos días. El general quiere estudiarlo con sus asesores.

Pero el ministro, que ya ha aprendido a leer estas dilaciones, le advierte que no terminará la reunión sin que se haya zanjado el asunto de las facultades. Fouillioux y el general Pecci las pueden estudiar. Y mientras los dos funcionarios se dan a esa tarea, el propio Stange se integra para supervigilar lo que Pecci está cediendo. Esa noche queda redactado el decreto de subrogación que confiere a Cordero 10 de las 17 facultades privativas del general director.

Al día siguiente, el jefe de Comunicaciones Sociales de Carabineros, el mayor Camilo Salinas, filtra a la radio *Chilena* la versión de que Stange reasumirá en plenitud cuando regrese del permiso. En La Moneda hay un estallido de ira: la fuente es identificada en cosa de minutos. Fouillioux recibe la orden de pedir medidas severas al general Stange.

Y cuando está hablando con él, suena el teléfono presidencial: Frei exige que el mayor Salinas sea removido de su cargo. Fouillioux transmite el enojo del Presidente palabra por palabra, y Stange responde que Salinas dejará el cargo mañana, y muy pronto la institución. Sólo cumplirá lo primero.

A comienzos de junio, el ministro de la Corte Marcial declara que no hay fundamentos para procesar a Stange. A petición del propio mando de la policía, la investigación de la justicia militar ha sido llevada por un juez civil. Claro que se trata del ministro Alfredo Pfeiffer, bien conocido en la comunidad alemana que ha defendido a Stange.

El 17 de junio, de regreso en Santiago, visita a Pérez Yoma para entregarle el primer borrador del plan de modernización, un grueso volumen que el ministro deja a un lado sin casi mirarlo. Lo que le importa es otra cosa: como todavía hay recursos pendientes tras el fallo de Pfeiffer, el permiso debe continuar.

Stange está de acuerdo. Pero unos días después pide una nueva audiencia con el ministro. Carabineros ha escuchado que el gobierno estudia un incremento de remuneraciones para los uniformados y el general quiere asegurarse de que el ministro conozca sus necesidades en directo[8]. Pérez Yoma la pasa a Fouillioux y mira a Stange con extrañeza:

—General —le dice—, ¿le pedí yo esto?

—No, ministro, pero como estamos hablando del plan de modernización...

—¡Qué plan de modernización! Me importa un bledo esa huevada, lo que me importa es que usted se vaya. ¿Lo entiende? ¿Con cuántas neuronas funciona usted, general? Y ahora me trae una propuesta de aumento de sueldos, que no-le-he-pe-di-do: ¿se imagina lo que voy a hacer con ella?

La crudeza del ministro carga de tensión el ambiente. Stange, que no quiere perder la compostura ni la educación de que se enorgullece, contesta algunas formalidades y se va.

—Lo voy a volver loco —se agita el ministro—, juro que lo voy a volver loco.

El 18 de julio Stange regresa al mando y entrega la versión final del plan de modernización, redactada por una comisión que ha encabezado el general (R) Núñez, marginando por completo a Cordero. El plan queda arrumbado en Defensa y el gobierno se las arregla para filtrar a la prensa que el general director sigue en su cargo sin la confianza del Presidente. Frei aprueba esa estrategia; ya ha hecho plenamente suya la tesis dominante en el equipo político: a derrota política, victoria moral.

Las señales se despliegan de inmediato. Un día después se rechaza el permiso para que Stange concurra a una reunión en Lima de la Organización Internacional de la Policía Uniformada. En pocas semanas se rechaza también la petición de fondos para que Carabineros sea el anfitrión de un Congreso Mundial de policías, en octubre. Pérez Yoma deja de asistir a todas las ceremonias de Carabineros.

El 31 de agosto la Corte Suprema sobresee definitivamente a Stange. Sólo entonces modera el ministro de Defensa su trato hacia el general. En septiembre visita las escuelas de Suboficiales y de Carabineros, invita a los generales a un almuerzo y aprueba los ascensos de oficiales subalternos. Pérez Yoma tiene una razón adicional para su nuevo enfoque: ya sabe que habrá cambio de gabinete y que con Figueroa en Interior podrá afinar una estrategia de pinzas contra el jefe policial. Por eso también se anticipa a autorizar un viaje futuro de Stange a Egipto y plantea que, ya sin urgencia y ante sus recientes quebrantos de salud —arritmia, hipertensión, una operación a la próstata—, se retire en 1995, tal vez en abril, para el aniversario de la institución.

Cuando en octubre el general lleva la propuesta del nuevo alto mando, que incluye los retiros de Cordero y Ugarte, Pérez Yoma está preparado.

—No, general —le dice—, tal como han estado las cosas, lo mejor es que usted siga con su mando tal como está.

Stange vacila, pero le parece razonable. El anuncio, a fin de año, tiene un efecto devastador: mientras los generales se sienten respaldados, los coroneles ven brutalmente frenadas sus carreras por un mando objetado.

En febrero de 1995, tras retornar de su viaje a Egipto, Stange comienza a analizar la fecha de su retiro con la asesoría del general Pecci. Varias reuniones con Pérez Yoma acercan los criterios, aunque en todas ellas el general deja siempre pendiente la respuesta final.

A comienzos de marzo, en el avión que lo trae de regreso de otro viaje, esta vez a El Salvador, Stange les comenta a dos empresarios que podría retirarse el 27 de abril, la fecha propuesta por Pérez Yoma. La noticia se filtra rápidamente a la prensa.

Y el 23 de marzo el general llega a la oficina de Pérez Yoma con semblante pesaroso: ante las versiones que se están publicando, no puede irse en la fecha planteada, porque otra vez parecerá que lo están echando. Pero el ministro, que ya conoce en detalle el origen de los rumores[9], está decidido a no darle tregua. Si quiere corremos la fecha, general, pero usted me firma ahora su renuncia, en blanco. Stange protesta por la exigencia: querría hablar con el Presidente, para explicarle... Cómo no, general, pero no hay audiencia sin este papel firmado. El ministro le extiende un oficio sin fecha. Stange guarda silencio. Parece sorprendido.

—Me gustaría llevármelo. Necesitaría pensarlo...

—Ah, no. No otra vez. Usted no sale de esta oficina mientras no firme —corta Pérez Yoma.

Tras un largo forcejeo, Stange accede a firmar para que el documento sea entregado al Presidente, que lo recibe como el trofeo más valioso de su ministro de Defensa[10].

En el acuerdo, sin embargo, parece implícito que Stange podrá pedir aplazamientos razonables. Tras el primero —el del 27 de abril— parece posible que se realice el 2 de agosto, cuando cumple 10 años al mando. Pero como esta versión se desliza una vez más a la prensa, hay un segundo aplazamiento, por tres meses más: de ese modo podrá presidir el Congreso Mundial de policías, que ahora sí se realizará en Santiago, en los primeros días de octubre. Aprovechará esa ocasión para un último desplante ante la prensa: la fecha de su dimisión, declara, la decidirá por sí mismo.

Concluido el Congreso, el 7 de octubre, Stange anuncia el retiro en una ceremonia oficial. El 14 entrega el mando al general Cordero, que será acompañado por el general Ugarte como nuevo subdirector.

Un año más tarde, el general (R) completará los sondeos para postular como candidato al Senado por la Décima Región en la lista de la UDI[11]. Mientras esté en ello, el general director Cordero se encargará de remover del alto mando a todos los hombres que más respaldaron a Stange en sus 18 meses de resistencia a la voluntad presidencial. En menos de dos años no quedará ninguno.

Notas

1. El texto de la cinta: Matus, Alejandra: *La cinta de la denuncia de Juica*. Diario *La Epoca*, 3 de abril de 1994. Y: *Stange recomendó ocultar información a juez*. Diario *La Epoca*, 4 de abril de 1994.

2. Los abogados querellantes sostuvieron que muchas de estas acciones fueron diseñadas por un llamado "Comité Creativo" dirigido por el general Pedro Casanueva Ulloa. *Largo camino*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.200, 9 de abril de 1994. Ver también: Soto, María Irene: *Lo que han dicho los procesados*. Revista *Hoy*, N° 778, 15 al 21 de junio de 1992.

3. Un oficio de la CNI de enero de 1986 ponía también bajo sospecha a su esposa, María Teresa Parraguez, a la que calificaba de pro marxista por el hecho de haber participado en... el Ballet Folclórico Nacional.

4. Hidalgo, Guillermo: *La batalla por el mando*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.128, 21 de noviembre de 1992.

5. Sentenciados por secuestro, homicidios y asociación ilícita terrorista: Guillermo González Bettancourt, Patricio Zamora, Claudio Salazar, Alejandro Sáenz, José Fuentes y el civil Miguel Estay Reyno. Por secuestro y asociación ilícita terrorista: Julio Michea, Juan Luis Huaiquimilla, Luis Jofré y Manuel Muñoz. Por secuestro: Julio Hurtado, Santiago San Martín, Ramón Valenzuela, Luis Canto, Oscar Valdebenito y Sergio Saravia. Los oficiales superiores a los que propuso procesar por incumplimiento de deberes eran Miguel Sandoval y René Anziani, y los generales, además de Stange: César Mendoza, Carlos Donoso, Juan Bautista Alegría y Pedro Casanueva. Para una transcripción textual y seleccionada de sus fundamentos: *Las claves del fallo del magistrado Juica*. Diario *La Epoca*, 1° de abril de 1994. Y: *Razones de Juica para pedir proceso a Stange*. Diario *La Epoca*, 3 de abril de 1994.

6. *Gobierno, atento a análisis del mando*. Diario *La Nación*, 1° de abril de 1994.

7. El texto completo en: Oyarzún, María Eugenia: *Unánime respaldo de generales a Rodolfo Stange*. Diario *La Tercera*, 2 de abril de 1994.

8. El monto de recursos adicionales solicitado era de 17.000 millones de pesos, sobre un presupuesto anual que se había más que duplicado desde 1990, alcanzando a 78.000 millones de pesos. A fines de ese año, Fouillioux consiguió de Hacienda un suplemento por alrededor de 3.500 millones de pesos, que Stange propuso invertir en equipos y armamento. Contra su opinión, Defensa lo asignó mayoritariamente a ranchos para el personal, dado

que hasta entonces las raciones no cubrían más que un 40% de la dotación. Stange argumentó contra esa decisión que "el gobierno no conoce a los carabineros ni a su espíritu de sacrificio": el gobierno quedó con la sospecha de que el general no quería beneficios que pudieran dar al poder civil una imagen favorable entre el personal, presentando en cambio sus continuos rechazos a los incrementos de remuneraciones. Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos los altos funcionarios de la época, para algunos de los cuales las restricciones al personal eran simplemente un rasgo del estilo de mando.

9. La versión de las filtraciones interesadas aparece ampliamente explicada en un artículo que, notablemente, anticipa con exactitud la verdadera y definitiva fecha del retiro: Dávila, Lucy: *Los verdes en campaña*. Revista *Hoy*, Nº 872, 3 al 9 de abril de 1994.

10. Dávila, Lucy, y Villalobos, Juan Cristóbal: *El día en que el general firmó*. Revista *Hoy*, Nº 952, 16 al 22 de octubre de 1995.

11. Antes de tomar esta opción, Stange habría intentado representar a Renovación Nacional, el partido que acogió a su antiguo subdirector, Gabriel Ormeño, pero habría recibido la negativa de Andrés Allamand. Guzmán, Gabriela: *El tiro de Stange*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.350, 22 de febrero de 1997.

25

La guillotina de Fiestas Patrias

En septiembre de 1994 la situación del gobierno parece normal sólo para los que no la conocen por dentro. El Presidente Frei pasea con su ministro del Interior durante las celebraciones de ese mes como si nada pasara. Pero el día 20 es una pesadilla.

Edmundo Pérez Yoma asume el Ministerio de Defensa con la declarada simpatía del Ejército. La justifica un conjunto de factores —la imagen de su padre, su carrera empresarial, su distancia respecto del saliente Patricio Rojas, su estilo áspero y directo, incluso los mensajes que los militares reciben durante el 93 acerca de los incidentes que no se repetirían en su caso—, pero el principal es la declaración de propósitos que formula cuando el general Augusto Pinochet lo visita por primera vez, antes de que asuma:

—Yo soy el escudo político de las Fuerzas Armadas, general. No soy un entendido en defensa, soy un político. Por tanto, las cosas políticas las veré yo, y las que el Ejército le quiera plantear al gobierno pasarán por mí. Pero eso también significa que no quiero Ballerinos ni huevones que anden hablando con otra gente.

En cuanto se instala en el edificio Diego Portales se propone subrayar el interés profesional:

—General, quiero conocer a su institución.

—Yo lo acompaño, ministro —se entusiasma Pinochet.

(Meses antes, cuando el recién asumido subsecretario de Guerra Jorge Burgos le planteó lo mismo, el general respondió en otro tono: "Dedíquese a firmar los papeles. La labor del subsecretario son los papeles". Aunque cuando Burgos se despedía, intentó corregir la rudeza: "Eso de conocer al Ejército... ¿para qué lo quiere? No ha hecho ni la guardia". Pinochet terminaría por alentar el interés de Burgos y su mantención en el cargo es otro de los "buenos síntomas" que Pinochet ve en el ministerio de Pérez Yoma.)

Mientras cumplen el exhaustivo programa de visita a las unidades, el general advierte al ministro sobre los pequeños trucos del protocolo militar:

—Usted no puede llegar conmigo, sino después; yo lo tengo que estar esperando en la puerta de la unidad.

—Yo no puedo estar a su derecha, porque usted es el superior; a la izquierda, siempre.

—Cuando usted entre a una unidad, tiene que estar izada su insignia y bajadas todas las demás.

—Y lo más importante: cuando vea que esto no se cumple, tiene que retar al oficial, porque lo van a tratar de pistolear, no lo olvide...

En mayo le da una muestra directa cuando, visitando las unidades de Punta Arenas, un alto oficial se cuadra y le pide permiso a él para iniciar las actividades:

—¡Señor! —brama Pinochet— ¡El superior jerárquico es el ministro! A él tiene que pedirle permiso, ¿o no conoce el reglamento?

El ministro despliega su estilo en las visitas. No quiere ver dormitorios, sino salas de guerra; no quiere revisar oficinas, sino planes de combate; no le interesa el papeleo, sino el armamento; puede compartir el rancho del regimiento y pasar al casino de oficiales; el masculino lenguaje de los palabrones y los chistes picantes no le es ajeno.

Por añadidura, el ministro se propone hacer funcionar el sofisticado sistema de consejos diseñado en los años 40 para afrontar el carácter tripartito de las Fuerzas Armadas, que nunca antes ha funcionado: la Junta de Comandantes en Jefe, que reúne a las tres cabezas institucionales más el ministro; el Consejo Superior de Seguridad Nacional, donde los comandantes en jefe se integran con los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía; y el Consejo Superior de Defensa Nacional, un organismo de expertos que coordina las adquisiciones. En seis meses logra que todo el mecanismo esté en actividad.

Debido a ese enfoque —un control civil de los militares desde los intereses de la defensa—, Pérez Yoma despeja del gobierno de Frei el proverbial temor de que los conflictos vividos por Aylwin sigan vigentes.

A veces se pasa de largo. El 23 de mayo, ante un auditorio donde está Pinochet pero también la prensa, afirma que "nadie tiene superioridad moral para juzgar a los gobiernos de los últimos 30 años". Esas palabras desatan la ira de la Concertación y de los ex funcionarios del gobierno de Aylwin, que hizo de la superioridad moral uno de sus pilares. Pérez Yoma tendrá que explicar en privado el alcance de sus dudosas palabras.

Pero su desparpajo en el terreno más escarpado de la transición, sumado a su cercanía única con el Presidente —es el ministro que lo tutea en público, que bromea con él, que hasta se permite contradecirlo—, le confieren la posición más fuerte del gabinete. Ningún colega puede comparársele en la amplitud de su influencia.

Y es Pérez Yoma quien anuncia, antes de que el primer gabinete de Frei cumpla su primer mes, que el equipo político concebido por Genaro Arriagada es un fracaso. Germán Correa carece de autoridad como ministro del Interior, Víctor Manuel Rebolledo no tiene el carisma de un secretario general de Gobierno y el propio Arriagada no se ha hecho cargo de la coordinación que se espera del secretario general de la Presidencia.

En verdad, el equipo político ha nacido dañado y en los primeros meses las relaciones entre los tres ministros que ocupan La Moneda no hacen más que deteriorarse.

Rebolledo advierte que Arriagada ha monopolizado la relación con el Parlamento, que debió corresponderle, y le disputa la vocería ante la prensa; a Correa lo divisa deprimido y cerrado sobre sí.

Arriagada estima que Rebolledo no se hace cargo de la relación con la prensa y que utiliza su cargo para intervenir en la lucha interna del PPD; a Correa le reprocha su inmovilismo, las indecisiones y las filtraciones de las sesiones del comité político.

Pero la situación más complicada es la que vive Correa, que sospecha que tanto Arriagada como Rebolledo conspiran en su contra. Tampoco logra imponerse ante el subsecretario Belisario Velasco, ni siquiera en los nombramientos del personal del Ministerio. En mayo se ve abruptamente enfrentado a Pérez Yoma a propósito del manejo de la crisis con Stange. Para peor, su esposa, Paula Desbordes, no encaja con el estilo de Marta Larraechea y sus conductas son atentamente escudriñadas, en especial en las primeras ocasiones en que Correa queda de Vicepresidente. El rumor de que las dependencias y el personal del Presidente han sido usados íntegramente en su primera ausencia —para la Cumbre Iberoamericana de Cartagena de Indias, a mediados de junio— circula como un dardo envenenado[1].

A partir de entonces el ministro del Interior comienza a tener crecientes dificultades para comunicarse con Frei. A diferencia de su antecesor, pero igual que su padre, este Presidente impone la norma de que sus ministros le pidan audiencia a través de sus edecanes; y en ellos comienzan a rebotar, una tras otra, las solicitudes de Correa.

Alguna tarde en que logra verlo a solas, el ministro le pregunta al Presidente si no será que se siente incómodo con él en el gabinete. No, dice Frei, cómo se te ocurre; lo que sucede es que todos hemos debido afrontar nuevas tareas, y nos estamos adaptando. Correa aprovecha de sugerir cambios en el sistema de toma de decisiones y se muestra crítico del propósito de "sectorializar" los ministerios, una tesis que por estos días ha desplegado Arriagada, según la cual Interior debe concentrarse en la seguridad pública y la Secretaría General de Gobierno en las comunicaciones.

Pero esos pequeños oasis no modifican el desierto cotidiano en que vive el ministro cuando cumple tres meses en el cargo. Encerrado en la confianza de un pequeño círculo de colaboradores socialistas, se entera por ellos, con amargura, que en el palacio campea la versión —atribuida a Arriagada— de que se halla sumido en una ciega lucha por el poder.

A fines de mayo, el Presidente reúne en el *bunker* de La Moneda a unos 150 dirigentes de la Concertación y lee un discurso que reseña las principales metas del gobierno. De paso advierte contra las disputas de poder entre sus colaboradores. Y cuando los periodistas interpretan que tras la críptica frase podría haber una alusión a Ricardo Lagos —que ha anunciado la formación de un "polo progresista" en la Concertación a partir del PS y el PPD—, Correa se da cuenta de que no es así:

—Eso —comenta en su gabinete— fue para nosotros.

Tampoco las circunstancias del país ayudan. Aunque en las semanas previas a su debut el equipo político estaba seguro de que tendría unos 100 días de gracia, los conflictos han estallado cuando el nuevo personal no terminaba de instalarse. Primero el de los generales Núñez y Stange, que tienen por el suelo las relaciones con Carabineros; y luego, en procesión, el de los mineros del carbón, el de los portuarios que resisten la privatización de Empremar, el de los grupos partidarios que se oponen a licitar las sanitarias, el del personal de servicios de urgencia que presiona por más recursos, el de los profesores que rechazan la modificación del Estatuto Docente.

En privado, los asesores de Genaro Arriagada sacan sus propias conclusiones: no ha habido período de gracia, el proceso de nombramiento de funcionarios ha dejado heridas en todos los partidos y la imagen de La Moneda es la de un gobierno sin alma, que carece de las motivaciones épicas que rodearon a Aylwin, de los contenidos morales de la recuperación de la democracia y del espíritu de renuncia de quienes forman su base política.

Es un gobierno asediado.

Y ulcerado por dentro.

A fines de junio, en una de las circunspectas sesiones de gabinete donde el Presidente suele leer algunos documentos, Genaro Arriagada presenta una exposición sobre la orientación general del gobierno. Se trata, dice, de no insistir más en los temas de la transición y asumir el desafío de la modernización, un objetivo con el que este gobierno llevará al país de la mano hacia el siglo XXI.

En verdad, se trata de un esfuerzo por dar una mística a los alicaídos componentes del gabinete: el propósito heroico, cree Arriagada, puede ser sustituido por una épica de las realizaciones. El aire moral de los primeros años de la Concertación puede ser cambiado por la ética mesiánica de una nación que progresa.

Tampoco es el primer intento: muy en los comienzos, el gobierno ha anunciado que sus prioridades estarían en el desarrollo, pero la protesta de los socialistas lo ha obligado a corregir, aclarando que las reformas institucionales podrían correr en paralelo. Desde que decidiera inaugurar su sexenio con un encuentro internacional de empresarios, el gobierno ha estado sometido, entre sus propias bases, a la sospecha de adolecer de un sesgo antirreformista.

Ahora, los pocos miembros del gabinete que han oído la idea de la modernización —los del comité político— la aprueban en silencio; los demás, la mayoría, se sienten desconcertados: descubren en ese instante que han carecido de una idea-fuerza y no logran establecer cuál es el contenido exacto del concepto de modernidad. En los días siguientes, varios de ellos mostrarán su perplejidad en entrevistas con la prensa.

Pese a esa manifiesta falta de debate y socialización, Arriagada lleva adelante su teoría, que expone extensamente en el Tercer Congreso de la Asociación Chilena de Ciencia Política: tras preguntarse si el 94 es el primer año de Frei o el quinto de la transición, responde con la propuesta de un "cambio de eje" que sustituya los problemas de la transición por los de la modernización[2].

Las "tesis de julio" resisten poco. En menos de un mes el gobierno se ve envuelto en una especiosa polémica acerca de la necesidad de despachar al Congreso reformas constitucionales, aun sabiendo que no las obtendrá. Y es a propósito de esa contradicción que la situación del gabinete comienza a desbordarse. Cuando Arriagada anuncia que el gobierno ha decidido una estrategia para enviar por partes las reformas, Rebolledo piensa por primera vez en renunciar: no conoce tal estrategia.

Quien percibe ese grado límite es Gutenberg Martínez, que invita a Correa, Rebolledo y Arriagada a cenar a su casa, en un esfuerzo amistoso de conciliación. Pero Arriagada es inflexible en la defensa de la preeminencia política de su ministerio y hasta el anfitrión se siente incómodo con la radical reducción de las facultades de sus otros huéspedes. El fracaso del encuentro se agrava cuando el ministro del Interior recibe de los dirigentes de Renovación Nacional la versión de que su colega secretario general de la Presidencia les ha dicho que las negociaciones políticas sólo le corresponden a él.

A comienzos de agosto las señales del gabinete son ya tan confusas, que cuando el subsecretario de Desarrollo Regional, Jorge Rodríguez Grossi, declara que RN bloquea el proyecto de ley de rentas municipales por proteger intereses personales, es el socialista Correa quien sale en defensa del partido derechista por las "inconvenientes" palabras de su subsecretario DC. Este, de vuelta, afirma que aquellas son sólo opiniones del ministro, y en seguida recibe la visita de desagravio de una masa de diputados y senadores de su partido, en lo que se entiende como un claro desafío a Correa. El Presidente conversa con ambos por separado, pero no despide a ninguno. La flagrante contradicción queda intacta entre fuerzas de suma cero.

Ese fin de semana el Presidente se va a Cerro Castillo, donde recibe un llamado del director de la Secretaría de Comunicación y Cultura, Pablo Halpern, que ha convertido a ese organismo en un enorme sensor de la imagen de Frei. La prensa está interpretando, le advierte, que el retiro en la residencia de Viña del Mar se debe a que se prepara un cambio de gabinete, empezando por Interior. Lo mejor sería detener estas especulaciones. El Presidente accede y ese día sale un comunicado oficial que, afirmando que no habrá cambios en el gobierno, equivale a una confirmación de los ministros[3].

Pero quienes se mueven en el círculo íntimo de Frei saben que las cosas son muy distintas.

El 20 de agosto, el ministro del Interior admite ante el pleno del PS que el trío de ministros de La Moneda no ha funcionado.

El 22, durante una sesión del comité político, Arriagada recibe una andanada de críticas de Figueroa, Pérez Yoma y Correa por la desprolija presentación de las reformas constitucionales, que han debido ser retiradas para introducirles correcciones. Parte de la embestida se desvía hacia el problema más genérico de la falta de coordinación.

El 23 Pérez Yoma apunta el fuego contra Rebolledo, al que denuncia por no estudiar ni atender a las orientaciones que dan las encuestas. Los ministros de Frei están saliendo peor evaluados que los de Aylwin, y al secretario general de Gobierno parece no importarle. Peor aún, el ministro de Defensa ha encargado por su cuenta una encuesta independiente que muestra que la imagen del gobierno entero se está deteriorando.

Ese mismo día, el nuevo presidente del PDC, Alejandro Foxley, visita a Correa y le expresa su preocupación por lo que sucede en La Moneda. Tras oír la desalentada versión de Correa, Foxley se siente alarmado y le pide que no cometa la locura de presentar una renuncia que sacudiría al gobierno. Debe tener paciencia, le recomienda, las cosas se arreglarán.

Con el comienzo de septiembre se abre una nueva discusión por las conmemoraciones previstas para el 11, el 21° aniversario del golpe militar. En el gobierno están fijas las imágenes de los violentos incidentes del año anterior y ahora, las organizaciones de izquierda han pedido autorización para una marcha que pasaría por calle Morandé, junto a La Moneda. El intendente

Fernando Castillo Velasco es partidario de permitirla y así se lo expresa a Frei, cuyo silencio meditabundo interpreta como aprobación. Y por lo mismo, cuando el subsecretario Velasco le notifica que el Comité de Seguridad ha decidido no dar permiso, el intendente presenta su renuncia al Presidente, que la acepta de inmediato. La atención se vuelve a centrar en Correa: todo el episodio ha transcurrido al margen suyo, pese a que los intendentes dependen del ministro del Interior.

Para entonces la conclusión ya es definitiva: el equipo político debe ser cambiado.

El domingo 11 de septiembre Frei regresa de la Cumbre de Río de Janeiro. En Santiago, la jornada ha sido más tranquila que cuanto se temía. Pero ese mismo día, *El Mercurio* ha publicado una encuesta, realizada entre la clase dirigente, que evalúa uno por uno a los ministros. Los del área política están en los últimos lugares, junto con los titulares de Minería, Transportes, Mideplan y Corfo. La crónica ha levantado un huracán entre los altos funcionarios, que divisan en ella la lápida del equipo ministerial[4].

Halpern aporta al clima una encuesta reservada que muestra, según se dice, una baja de casi tres puntos en la popularidad del gobierno. Pero estas fantasmales cifras son un misterio: a diferencia de la administración Aylwin, donde las encuestas de la Secretaría de Comunicación y Cultura eran conocidas por la mayoría de los ministros, Halpern ha impuesto un estilo de secreto radical que mantiene al gabinete en la penumbra.

En la noche del lunes, Frei recibe en su casa a Pérez Yoma, Figueroa y Arriagada, el "Círculo de Hierro" en pleno. Le tienen novedades para la cena: la semana anterior hubo elecciones en el PPD y Jorge Schaulsohn resultó triunfador sobre la lista de Víctor Barrueto, que tenía el indisimulado apoyo del ministro Rebolledo. Schaulsohn le ha dicho a Pérez Yoma que el PPD cree necesario un cambio en el diseño político del gobierno y está dispuesto a que el liderazgo no lo ejerza un militante suyo. La conclusión: Rebolledo puede salir.

Esa "carta blanca" del PPD favorece el cambio global: sólo habrá que soportar la molestia del PS por la salida de Correa. Pero además, agrega el Presidente, hay que sacar de una vez al ministro de Educación, que no se ha mostrado capaz de conducir las reformas que el gobierno quiere convertir en su principal obra para la posteridad. Otros podrían también salir: el titular de Mideplan, Luis Maira, pero ello significaría aumentar el conflicto con el PS; y el ministro de Corfo, Felipe Sandoval, pero eso podría agravar las negociaciones del carbón y además abrir otro flanco en la DC.

Cuando hablan de las sustituciones, a los asistentes les queda claro que Pérez Yoma ya ha persuadido a Frei de que el hombre para Interior es Figueroa. En su lugar, a propuesta del mismo Figueroa, debe quedar el subsecretario José Miguel Insulza, PS. Para la Secretaría General de Gobierno, Arriagada tiene el nombre: José Joaquín Brunner, candidato eterno a Educación, PPD, distante de Lagos y sin grupos conocidos. Para Educación, un realizador energético, un hombre que no tema a las presiones: el alcalde de Santiago, Jaime Ravinet.

Pero los presentes no pueden obviar la situación de Arriagada, autor del diseño que acaba de naufragar.

—Sí, sé que estoy destruido —dice Arriagada.

—Bueno —dice Pérez Yoma—, no dramaticemos. Yo creo que tú tienes derecho a lo que quieras, ¿no, Eduardo?

—Por supuesto —dice Frei—, puede ser Educación, o Relaciones Exteriores, y dejamos a Insulza...

—No, nada de premios de consuelo. Prefiero quedarme donde estoy.

—Entonces —dice Frei, cortando el denso silencio que se crea—, ningún problema, no te preocupes.

El martes, Arriagada se comunica con Ravinet para ofrecerle Educación. El alcalde pide 72 horas y una reunión con Frei y Aninat para analizarlo. El mismo día, el secretario general de la Presidencia invita a su casa a Brunner y le ofrece la Secretaría General de Gobierno. Brunner acepta.

Pero la noticia de la misteriosa cena del lunes se esparce por el ambiente político. Inquieto, Rebolledo visita por separado a Figueroa y a Pérez Yoma. Les pregunta su opinión sobre lo que está ocurriendo y de sus respuestas, a medias críticas y a medias evasivas, deduce que un cambio está próximo.

El miércoles 14 parte en viaje a Europa el subsecretario Insulza. Aunque su nombramiento está decidido, nadie lo detiene: una cancelación alertaría al PS.

También Correa percibe un aire extraño. Nota que, más allá de su incomunicación usual, el Presidente no lo ha llamado desde que ha vuelto de Río.

El viernes 16, el subsecretario Velasco, que inicia sus tradicionales vacaciones de septiembre, parte a Estados Unidos con su esposa. En Santiago, Ravinet, que ha concluido que no dispondrá de los recursos ni las facultades para reformar la educación, responde que prefiere continuar en la alcaldía.

La decisión produce una sensación de catástrofe entre quienes comparten el secreto. Frei tendrá que pasar las ceremonias de Fiestas Patrias junto a un ministro del Interior en plena caída. El agravante es que la situación ya no soporta dilaciones, porque la noticia de la debilidad terminal de Correa, altamente volátil para el PS, ha comenzado a filtrarse a partir de los dirigentes socialistas que han sido sondeados.

Esa noche las discusiones se tornan intensas en casa de Frei. Pérez Yoma y Figueroa promueven para Educación a Mario Fernández, el único candidato a parlamentario derrotado al que el Presidente le ha permitido regresar al gobierno, a su puesto de subsecretario de Aviación. Pero Arriagada cree que se necesita un prócer más consagrado, como Sergio Molina. Convence a Frei y se propone hallarlo: Molina anda en Bolivia.

El sábado, Figueroa ubica a Insulza en Holanda y le instruye cancelar la gira y regresar de inmediato a Santiago. Insulza consigue un vuelo esa misma noche. Pero ha recibido el llamado en casa del embajador chileno, el PPD Germán Molina. Y éste, más rápido que los aviones, le cuenta por teléfono al ministro Ricardo Lagos, que inicia aceleradas averiguaciones.

En la misma noche el Presidente logra encontrar al subsecretario Velasco en la localidad californiana de Santa Barbara. Lamenta interrumpir sus vacaciones, pero lo va a necesitar como ministro de fe.

En la mañana del domingo 18 de septiembre, Frei sale de La Moneda con Germán Correa para abordar la carroza que los lleva al Te Deum. El ministro nota que el Presidente está incómodo, algo distante, y le parece que la conversación es forzada:

—Cómo se mueve esta carroza.

—Sí, es como inestable.

—Como gelatina.

—Claro.

—¿Sabes que mi padre usó esta misma?

—No me digas.

—Hace 30 años. Increíble cómo pasa el tiempo.

Las ceremonias transcurren con aparente normalidad. Sólo los nervios del "Círculo de Hierro" están quebrantados. Les parece que el detalle de la carroza añade un agravio a la ya trágica situación.

Al terminar, Arriagada llama a Brunner a su casa de playa, para que se presente en la casa de Frei a las 19. Mientras viaja hacia Santiago, el celular suena en el auto de Brunner.

—Oye —dice Ricardo Lagos— se habla de un cambio de gabinete y dan tu nombre para la Secretaría General de Gobierno. ¿Tú sabes algo?

—Algo he escuchado, unos rumores. Pero tú sabes que en estas cosas nada vale hasta que no habla el Presidente, y él no ha hablado conmigo.

—Lamento que sea por segunda vez —dice Lagos, recordando que Brunner era el candidato de Aylwin para Educación, pero que finalmente él tomó esa cartera—: tal vez deba perjudicarte de nuevo.

—No te preocupes —dice Brunner, sabiendo de qué hablan: Lagos quiere en ese puesto a un operador suyo, el ministro de Economía Alvaro García.

Minutos después Brunner queda confirmado por el Presidente.

En la mañana del lunes 19 las intuiciones vagas de Correa comienzan a tomar cuerpo. La prensa del día informa sobre el regreso de Insulza. ¿Qué otra razón habría para cancelar una gira que no fuese un cambio en Relaciones Exteriores? Mientras cavila en su casa de La Florida, suena el teléfono:

—Germán —le dice el presidente del PS, Camilo Escalona—, ¿has escuchado de un cambio de gabinete?

—Bueno —dice Correa, con humor—, desde el 11 de marzo que lo vengo escuchando...

—No, en estos días. Lagos me dijo que oyó ese rumor. Que saldrían Rebolledo y Schiefelbein.

—Y yo, seguramente, ¿no?

—No me dijo nada sobre ti[5].

Pasadas las 14, Correa se reúne en La Moneda con el resto del gabinete, que partirá en conjunto a la Parada Militar. El regreso de Insulza lo tiene intrigado, así que en cuanto ve a Figueroa lo interroga:

—¿Por qué volvió José Miguel, Carlos? ¿Qué pasa?

—Nada, hombre —responde Figueroa, tomándolo del brazo y sacándolo del Salón O'Higgins donde toman el café—, es que fíjate lo que puede ser la burocracia: tengo que viajar y Edmundo no me puede subrogar. Tuvimos que hacerlo volver por estas malditas cuestiones...

La respuesta tranquiliza apenas al titular de Interior. Esa tarde comparte los palcos del Parque O'Higgins, cuya testera encabezan Frei, Pérez Yoma, Pinochet, Schaulsohn y el senador socialista Ricardo Núñez, en la más heterogénea formación de la transición. Por primera vez desde el retorno de la democracia, el titular de Defensa y el Presidente son recibidos en la ceremonia con un ruidoso aplauso que disputa el protagonismo a las rechiflas en las tribunas. Lo que pocos saben es que Pérez Yoma se ha preocupado de garantizar esos vítores entregando las entradas a piquetes de agitadores democratacristianos organizados en un municipio de la zona sur de Santiago. El bullicio contenta al gobierno.

Al regresar a La Moneda, hay un té del Presidente con los ministros y sus esposas. Correa comparte la mesa de Frei y vuelve a notarlo incómodo, parco, distante.

En la noche lo acompaña en la llegada al cóctel que el Ejército ofrece en Lo Curro y luego se pasea por la mansión militar envuelto en un aire de sospechas. ¿Algunos lo evitan? ¿Hay gente que parece estar hablando de él? ¿Cambian de tema cuando se aproxima?

—...pero si sale Germán, es grave, gravísimo para el PS —oye decir a Ricardo Núñez, el presidente subrogante del Senado, que no lo ve acercarse.

—Cómo se te ocurre, no he dicho eso —disimula el senador Arturo Frei, que sí lo ve.

Pasada la medianoche, lo vuelve a llamar Escalona:

—¿Y? ¿Supiste algo del cambio de gabinete?

—Nada. ¿Por qué, hay algo nuevo?

—El Presidente me acaba de llamar. Me pidió que fuera a La Moneda después de las 12.

—Eso es cambio de gabinete. Pero yo no sé nada.

Cuando corta tiene un comentario para su esposa:

—Paulita, se terminó.

Está en lo correcto, aunque ignora que esa misma noche es insomne en casa del Presidente. En calle Baztán, Frei, acompañado por Arriagada y el recién llegado subsecretario Velasco, completan el cambio del día siguiente. Velasco logra ubicar en La Paz a Sergio Molina, para ofrecerle Educación. El ex ministro de Frei Montalva y de Aylwin no desea regresar al gabinete tras sus recientes cuatro años de servicio, pero, como el hombre de Estado que ha sido desde joven, entiende que al Presidente no se le puede decir que no.

A las 8 del martes 20, Arriagada se instala en su oficina y comienza a marcar los teléfonos ministeriales para advertir a todos —menos a los afectados— que las renuncias que deben presentar son una formalidad y que no han de preocuparse.

A la misma hora Germán Correa se prepara para iniciar la reunión de coordinación de su Ministerio, sin Belisario Velasco, que está en EE.UU. Eso cree Correa, hasta que el jefe de gabinete de Velasco lo saca del error:

—Don Belisario dice que se va a demorar, porque está hablando con el Presidente, pero que vendrá luego.

—¿Belisario? ¿Está aquí?

—Sí. Suspendió las vacaciones.

Mientras transcurre la reunión, Correa termina de sacar las cuentas. A la salida, Rodríguez Grossi lo sigue a su oficina:

—Oye, ¿qué está pasando?

—Cambio de gabinete, ¿no te has dado cuenta?

—¿Y quién sale?

—Adivina —dice Correa, mostrándole el sobre que lo espera en su escritorio. Contiene una breve esquela: "Solicito a Ud. la presentación de su renuncia...". Es la circular que ha llegado a todos los ministros. En ese instante suena el citófono presidencial. Frei, que no suele llegar a La Moneda antes de las 9.45 pero que ahora está allí desde antes de las 9, desea que suba a su despacho.

GABINETE: SEGUNDO TIEMPO

Ministerios	Ministros	Ministerios	Ministros
Interior	Carlos Figueroa	Relaciones Exteriores	José Miguel Insulza
Defensa	Edmundo Pérez Yoma	Economía	Alvaro García
Hacienda	Eduardo Aninat	Educación	Sergio Molina
Justicia	Soledad Alvear	Obras Públicas	Ricardo Lagos
Agricultura	Emiliano Ortega	Bienes Nacionales	Adriana Delpiano
Trabajo	Jorge Arrate	Salud	Carlos Massad
Minería	Benjamín Teplizky	Vivienda	Edmundo Hermosilla
Transportes	Narciso Irureta	Secretaría Gral. Gbno.	José Joaquín Brunner
Planificación	Luis Maira	Secretaría Gral. Presid.	Genaro Arriagada
Corfo	Felipe Sandoval	Energía	Alejandro Jadresic
Sernam	Josefina Bilbao		

—Oye —dice Frei—, te pedí la renuncia porque creo que no podemos seguir. Voy a cambiar el gabinete y vamos a iniciar una nueva etapa porque, tú sabes, las cosas no han andado bien.

—Mire, Presidente, usted tiene todo el derecho, yo se lo respeto, ya sabe que soy presidencialista —responde Correa, cambiando el trato corriente por un trato formal—. Pero la forma en que lo está haciendo... va a tener un alto costo político para usted, para el gobierno y para mí, que podíamos haber evitado. Esto era conversable. No hemos tenido comunicación, no me han dejado trabajar, he pagado las habas que se han comido otros burros. Podíamos ver la forma de hallar una salida digna, no esta manera de echarme de repente. ¿Por qué no me dijo nada antes?

Frei guarda silencio. La situación le incomoda.

—Hay una razón —sigue Correa— que me hace diferente a los demás ministros, Presidente, y usted la conoce mejor que nadie: yo no pedí venir.

El Presidente mantiene su mutismo.

—Usted me arrancó de la presidencia de mi partido, porque era importante que un socialista volviera a Interior, y estuve de acuerdo. Si no fuera por eso, no habría aceptado. Yo me voy ahora, pero usted sigue por cinco años y medio más, y déjeme que le explique que las lógicas del gobierno y de los partidos son diferentes. Hay que entenderlas, Presidente...

—Mira —dice Frei, por fin—, esta cosa de los partidos no me preocupa. Yo con la clase política no me entiendo, no entiendo sus deslealtades. En el mismo sillón donde estás ahora se sentaron socialistas que vinieron a criticar tu desempeño, a decirme que esto no funcionaba.

—Tal vez, tal vez. Pero usted sabe que no pedí venir...

—Bueno, tú eres un hombre importante para mi gobierno y para la Concertación. Puedes pedirme lo que quieras[6].

—No vine en busca de pega, Presidente, y no me voy con otra pega.

(Dos días después, cuando los 400 delegados al Consejo Nacional del PS reciben a Correa con una ovación que es de desagravio, Luis Maira saca al ex ministro en un intermedio y le dice, por encargo de Frei, que su oferta para que asuma un cargo sigue en pie. Correa, que a su humillación suma ahora la indignación del partido, reitera su rechazo.)

Tras Correa asciende al despacho presidencial Rebolledo, que no necesita explicaciones.

—Le fallamos, Presidente —dice, adelantándose—. Nos dio su confianza y le fallamos. He estado muy amargado por esto, y en cierto sentido lo esperaba. Hasta me extrañó que no lo hiciera antes.

—No, Víctor Manuel, falló el sistema —contemporiza Frei—. En todo caso, tú conoces mi aprecio personal. Cuenta con el gobierno para lo que necesites.

—Te voy a pedir una cosa —dice Rebolledo, cambiando bruscamente el trato—. Tú sabes que en el PPD se hizo una campaña muy sucia en mi contra: que me robé plata, que usé el ministerio, que todos me odian, que tú no me hablas... No necesito nada más que me ayudes a recomponer mi imagen.

(La salida de Rebolledo no sólo no suscita reclamos del PPD, sino que en privado hasta hay expresiones de regocijo. Tres meses después, Insulza llama al ex ministro a Europa, donde se halla en gira partidaria, y le informa que Frei lo ha incluido en la delegación oficial que lo acompañará a la Cumbre de las Américas convocada por el Presidente Bill Clinton en Miami.)

Schiefelbein es el único sorprendido de veras por la noticia de su destitución.

Esa mañana también pierden sus subsecretarías Gonzalo Undurraga, el acompañante de Schiefelbein, y Rodríguez Grossi, cuyo destino queda sellado desde que Figueroa se instala en el cargo y se mantiene Belisario Velasco: no puede haber tres DC en Interior. En su lugar asume el socialista Marcelo Schilling, que ha llegado a La Moneda en *jeans* y debe aceptar la oferta de un pantalón más formal de parte del edecán naval, Cristián Millar. A Educación asciende uno de los asesores de Arriagada, el también socialista Jaime Pérez de Arce.

Otros ministros sienten que han salvado sus cabezas por un pelo. Y la mayoría piensa que la más afortunada es la de Arriagada, un DC rescatado de las aguas. En el juramento de los nuevos ministros, Lagos, que no pierde conciencia de su liderazgo en los dos partidos afectados, comenta a Pérez Yoma el descuido de las formas.

—Es que Lagos es Lagos —ironiza el ministro de Defensa.

—Y Pérez —replica el de Obras Públicas, más ácido— es Pérez.

Notas

1. Parte de estos rumores fueron desmentidos por Paula Desbordes a la revista *Hoy*. Indagaciones posteriores han permitido establecer lo siguiente: Paula Desbordes sólo condujo en junio un recorrido para damas del Rotary

Club por La Moneda: Germán Correa almorzó una vez en el comedor oficial con un invitado y concedió una entrevista de prensa en el despacho presidencial: el 11 de septiembre de 1994, el Vicepresidente pidió abrir el salón de audiencias para tomar un café con ex ministros de Allende, y encontró cierta resistencia de parte del personal auxiliar. En cuanto a las diferencias de Paula Desbordes con Marta Larraechea, ellas estuvieron centradas en la nueva orientación dada a la Fundación Integra y afectaron también a otras personas de esa institución. Sin embargo, es un hecho que, amplificados y alimentados por el clima vigente en el palacio, estos episodios fueron utilizados para minar la estabilidad del ministro del Interior, única razón que justifica su descripción aquí.

2. *Ministro Arriagada comparó gobiernos de Frei y de Aylwin*. Diario *La Segunda*, 7 de julio de 1994.

3. Insistentes versiones de entonces sostuvieron que, pese al comunicado, Frei estaba en efecto trabajando en la evaluación de sus ministros, la que postergó debido al incidente entre Correa y Rodríguez Grossi. Ver, por ejemplo: *El "caso Rodríguez"*, *Informe Confidencial*, agosto de 1994.

4. Arthur, Blanca; Lavín, Vivian; y Sepúlveda, Eduardo: *¿Aprobado o reprobado?* Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 11 de septiembre de 1994. El impacto de este artículo es diversamente apreciado por los altos funcionarios de entonces: mientras unos le atribuyen efectos decisivos, otros lo consideran un pretexto para decisiones ya tomadas. En cualquier caso, el ministro del Interior es evaluado "regular", mientras el secretario general de la Presidencia recibe la calificación de "malo".

5. Más tarde, durante la Parada Militar, Lagos preguntó a Figueroa sobre el probable cambio de gabinete, pero éste negó tener información y se mostró molesto por el hecho de que el embajador Molina le hubiese advertido sobre el regreso de Insulza.

6. Poco después, Figueroa le planteará a Correa la opción de irse como embajador en Italia, cargo que Mariano Fernández dejaría vacante para asumir la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Correa desestimó el ofrecimiento.

26

Acuartelamiento en Morandé

Puede tratarse de un privilegio para los militares o de una manera de que el general (R) Contreras entre a una prisión. En esa ambigüedad se ve atrapado el ministro Ricardo Lagos a comienzos de 1995. Es una peculiar crisis de gabinete.

Carlos Figueroa se traslada al Ministerio del Interior, en septiembre de 1994, con la misión de iniciar una nueva etapa. Por acuerdo con el Presidente Eduardo Frei, en su mano se concentrará ahora toda la interlocución política, que hasta entonces ha llevado el ministro secretario general de la Presidencia, Genaro Arriagada, e incluso buena parte de la vocería, que debería corresponder al nuevo secretario general de Gobierno, José Joaquín Brünner.

Sus prerrogativas son amplias. Es una especie de *premier*.

Y parece lógico que asuma en esas condiciones, no sólo por el caos del gabinete anterior, sino también porque Figueroa ha debido dejar el cargo que más le gustaba, Relaciones Exteriores.

Como canciller había vivido entusiasmado. En sus primeras semanas había logrado el retiro, rodeado de honores, de 15 embajadores que ocupaban altos puestos en el Ministerio y que por su edad tenían estancada la movilidad del personal. Con tales jubilaciones, 143 funcionarios habían cambiado de lugares. Además, Figueroa había revisado con el Presidente el nombramiento de cada uno de los embajadores, y hasta se podía preciar de haberlo persuadido en los únicos dos casos donde Frei tuvo persistentes reparos.

En la diplomacia de los 90, la estelaridad de los cancilleres ha corrido en paralelo con la de los presidentes. La política del diálogo directo y los foros multilaterales les han dado un protagonismo único; y con mayor razón en el Chile de 1994, que, después del trabajo de la Cancillería en el período de Aylwin, se preparaba para vivir uno de los mejores años de su historia diplomática. En Estados Unidos, el Presidente Bill Clinton alentaba su ingreso como cuarto socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), una propuesta apoyada por el Presidente mexicano Ernesto Zedillo y por el primer ministro canadiense Jean Chrétien. El mayor foro económico del Pacífico, la APEC, ya había decidido que el último país en ingresar, antes de un congelamiento de varios años, sería Chile. Las conversaciones para un acuerdo con la Comunidad Europea marchaban con celeridad, y los países del Mercosur parecían desear que el gobierno de Santiago apresurara su integración.

Figueroa había perdido la batalla por el control del Nafta a manos del titular de Hacienda, Eduardo Aninat, pero había logrado que, ante los altibajos de la política norteamericana, el gobierno diera prioridad al Mercosur y la Comunidad Europea, que sí manejaba la Cancillería. El único episodio oscuro que se preveía era el evento de que los expertos contratados para dirimir

la disputa de Laguna del Desierto terminaran por entregar el territorio a Argentina, como ocurrió a fines de año.

De modo que parecía natural que para el último trimestre del 94 Figueroa fuese un verdadero jefe del gabinete.

Y es justamente Figueroa el único de los hombres de Frei que han conocido desde sus orígenes la principal preocupación militar de estos meses: una cárcel especial para los uniformados que puedan ser condenados por la justicia. Oyó de esa aspiración ya en 1993, cuando conversó con el general Augusto Pinochet como enviado informal del equipo freísta, y supo que formaba parte del "pliego de peticiones" que el Ejército planteó al gobierno de Aylwin.

A Figueroa le extrañó entonces que Pinochet pareciera desconocer la inminencia de una condena contra el general (R) Manuel Contreras y se preocupara, en cambio, de otros casos.

En verdad, por entonces era una política del Ejército rechazar la idea de una cárcel para Contreras. Sólo en la intimidad de sus conversaciones el mayor general Jorge Ballerino había reconocido ante el ministro Enrique Correa que con el penal pensaban en Contreras, pero le había advertido que un sector del Ejército simplemente no concebía que el general (R) fuese a prisión.

Por esos días, el mismo Ballerino le presentó al subsecretario Jorge Burgos lo que les parecía la mejor alternativa de prisión especial: el Club Guayacán, un terreno en el Cajón del Maipo que había albergado a la Escuela Superior Femenina del Ejército y que ahora funcionaba como centro recreativo para suboficiales. Si fuese necesario, la institución estaría dispuesta a donar el terreno a Gendarmería. Y los hombres de Gendarmería alcanzaron a entusiasmarse: para la cárcel sólo haría falta un sector, mientras que el resto podría conservarse como un espléndido club para sus oficiales.

Pero cuando Burgos lo fue a ver, la opción quedó descartada: hundido entre los cerros, Guayacán no ofrecía la más mínima condición de seguridad.

A fines del 93, el director de Gendarmería, el socialista Claudio Martínez, llevó al subsecretario a visitar la cárcel de Quillota, un recinto abandonado que podía habilitarse con un poco de imaginación y bastante dinero. Pero a Burgos le pareció que, estando en el centro de la ciudad, ese penal tampoco ofrecería condiciones de seguridad.

La tercera alternativa fue la de un terreno en Colina, que pertenecía a Bienes Nacionales y que sí cumplía con todos los requisitos. Pero en Colina se habían construido ya dos grandes cárceles, y el alcalde Manuel Rojas se quejó de que un tercero la convertiría en una comuna penitenciaria. Sus fuerzas vivas llegaron a ponerse en campaña contra semejante iniciativa. Para entonces ya había asumido en Justicia la ministra Soledad Alvear, que consideró razonable la protesta del alcalde; sin embargo, carente de alternativas, debió mantenerla como primera opción hasta entrado el 95, cuando por fin Colina fue desechada.

La ministra ha mantenido una silenciosa pero intensa preocupación por el caso durante todo el 94. Semana tras semana estudia las alternativas: llega a tener un diseño para cada una de las posibilidades de sentencia.

Y cuando Claudio Martínez propone un terreno que Gendarmería posee a unos 40 kilómetros al norte de Santiago, cerca de Tiltil, en la localidad de Punta Peuco, que funciona como Centro de Educación y Trabajo, la ministra ordena analizarlo a fondo. Pero, dado que se trata de construir un recinto nuevo, lo que podría ocupar plazos superiores a la dictación de la sentencia, también ordena que un sector del penal de Puente Alto sea habilitado como espacio segregado y de alta seguridad. No es la mejor de las opciones, porque habrá que destinar un altísimo contingente de gendarmes, pero servirá para afrontar la emergencia.

Cuando Burgos, acompañado por Martínez y el jefe de gabinete del subsecretario de Justicia, José Antonio Gómez, visita el terreno de Punta Peuco, lo primero que nota es la decena de hombres que detienen las faenas en unas pequeñas huertas de choclos:

—Son reos rematados —explica Martínez.

—Pero —se asusta Burgos, mirando alrededor —... estamos solos...

—No te preocupes —dice Martínez—. Son de buena conducta.

La sentencia dictada por el ministro especial Adolfo Bañados en el caso Letelier sólo puede ser discutida ante la Corte Suprema. Dado que se trata de un juez integrante de ese tribunal, nombrado en virtud de una de las leyes Cumplido que permite requerirlo cuando están afectadas las relaciones externas del país, la Corte de Apelaciones desaparece como instancia intermedia. La causa ha estado por morir en varias ocasiones, pero los incansables abogados Fabiola Letelier y Jaime Castillo Velasco han logrado reactivarla una y otra vez. Cuando Bañados dictó su sentencia, faltaban días para la prescripción. Ya era un proceso-símbolo.

Por eso, las condenas de siete años de cárcel para Contreras y seis para el brigadier Pedro Espinoza han sido altamente riesgosas para los militares desde el momento mismo en que Bañados las anunció, en noviembre de 1993, aunque el auditor general Fernando Torres Silva ha expresado ante el alto mando su confianza en que la Corte Suprema fallará a favor de los acusados.

Y no ha sido sino hasta 1994, con el nuevo gobierno, que el Ejército ha comenzado a agitarse ante el próximo dictamen final de la Suprema. Mientras los recursos de Contreras y Espinoza van cayendo a lo largo del año, la inquietud empieza a desbordar al Ministerio de Defensa.

El nuevo jefe del Comité Asesor, el brigadier general Víctor Lizárraga, pide ayuda al retirado general Ballerino para dar señales directas al gobierno. Ballerino ha conservado su amistad con el ex ministro Enrique Correa después de las caídas de ambos; una vez por mes se reúnen a almorzar o a tomar té. Y para uno de esos encuentros invita Ballerino a Lizárraga.

—Bueno, Enrique —dice abruptamente el jefe del Comité Asesor—, y cómo estamos para que nos ayudes a que el gobierno se ponga más flexible con el asunto del general Contreras...

—No —dice Correa, sobresaltado—, eso no es posible. El caso de Contreras es intransable para nosotros.

—Pero esto va a crear muchos problemas —dice Lizárraga—. Sería bueno que todos ayudásemos. Para que el Presidente Lagos tenga un Ejército en paz en el 2000...

—Cómo se te ocurre —se exalta Correa—, qué tiene que ver Contreras, un señor que hizo matar a tanta gente.

—Eso está por verse —dice Lizárraga.

Ballerino nota el embarazo de Correa y se siente forzado a intervenir.

—Oye, viejo —le dice a Lizárraga—, en todo caso, en nada ayudan cosas que el Ejército debiera hacer y no hace. Ahí está el caso de Lepe, que sigue de secretario general del Ejército. Mira lo que ha pasado con el caso Soria...[1]

En el gobierno también se aceleran los latidos. El ministro Genaro Arriagada, que disminuye su presencia pública mientras se sobrepone al cambio de gabinete de septiembre, es uno de los primeros en marcar el difícil camino que espera al gobierno.

—Si no metes preso al Mamo —le dice al Presidente durante una conversación privada—, el gobierno está muerto. Tienes que hacerlo, aunque sea difícil: para eso están los ministros del Interior y de Defensa.

El titular de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, es quien recibe la creciente presión de los militares ante un eventual fallo adverso —que se logre la reducción de la pena, que haya condena remitida, que la pena sea simbólica e incluso, en el peor de los casos: que el Presidente aplique indulto— y sus esfuerzos por reducir el debate a un problema judicial se ven debilitados día por día. La cárcel especial gusta y disgusta, sucesivamente, a los militares: aunque ellos mismos la han pedido, es notorio que una poderosa corriente interna se opone porque equivale a un preparativo para confirmar la sentencia contra los jefes de la DINA. No les falta razón.

En octubre la ministra Soledad Alvear oficia al director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, René Morales, para que diseñe una cárcel de alta seguridad, destinada a un

reducido número de presos, sin especificar su finalidad. Cuando Morales le informa al ministro Ricardo Lagos, anticipa que puede tratarse de un penal para albergar a Contreras.

En diciembre el comité político de ministros toma la decisión de usar la vía administrativa, la más corta y expedita, para construir la nueva cárcel. Se pedirá a Obras Públicas que utilice su facultad exclusiva de dictar un decreto de emergencia para iniciar por "ejecución directa" (sin licitación pública) el penal cuyos planos y maqueta ya han sido aprobados. Los rumores llegan a Lagos, que comenta con los presidentes del PS y el PPD, Camilo Escalona y Jorge Schaulsohn, los inconvenientes de imagen que puede suscitar un tratamiento de privilegio para los militares.

El 29 de ese mes, el subsecretario de Justicia, Eduardo Jara, lleva al Ministerio de Obras Públicas el oficio del director de Gendarmería que pide el decreto de emergencia. Lagos responde, casi académicamente, que hay alternativas para lo que se le pide: que construya el Servicio de Vivienda y Urbanismo; que construyan otros organismos menores; o que se pida a alguna constructora que haga el penal por su cuenta y luego lo venda a Justicia.

El viernes 30, durante el cóctel de fin de año que ofrece en Cerro Castillo a los dirigentes de la coalición de gobierno, el Presidente menciona a Patricio Hales, secretario general del PPD y arquitecto, la decisión de construir la cárcel especial.

—Presidente —reacciona Hales—, aunque le pongan jacuzzi, la cuestión es que lo metamos preso. Eso es lo que va a marcar el término de la transición.

El domingo 1° de enero de 1995, Lagos acompaña al Presidente Frei a Brasil, a la asunción del mando del Presidente Fernando Henrique Cardoso. Nada se habla de la cárcel en esos días.

Al regresar a Santiago, el martes 3, Lagos llama a la ministra Alvear y le dice que el proyecto de la cárcel es más complicado de lo que parece; el gobierno debería conversarlo con los partidos de la Concertación.

En la noche del miércoles 4, el ministro de Obras Públicas informa a algunos dirigentes del PS y el PPD que se le ha pedido firmar un decreto exclusivo con el cual está en desacuerdo por dos razones: no se le ha informado de los motivos y supone dar garantías excesivas a los militares.

El jueves 5, Figueroa recibe en su despacho a los presidentes de la Concertación, Alejandro Foxley, Camilo Escalona, Erich Schnake (que subroga a Schaulsohn) y Sergio Carrasco (que subroga a Anselmo Sule). Junto a Pérez Yoma y Arriagada les informa de la decisión de construir la cárcel y del procedimiento que se usará. Schnake plantea la única duda:

—¿Qué opina Lagos?

—Eso queremos saber —dice Figueroa.

—Si se le va a pedir que dicte el decreto —replica Schnake—, parece indispensable saber qué opina. Se quiera o no, Lagos no es un ministro más.

—Creo que tienes razón —dice Soledad Alvear, tras un instante de silencio—. Hay que conversar con él.

—Se le informará en la tarde —interviene Figueroa.

—Bueno, no es tan importante —tercia Camilo Escalona—. Que firme, nomás: el asunto es que Contreras vaya preso.

La aprobación es unánime. La Concertación está de acuerdo.

En la tarde de ese jueves, Figueroa explica a Lagos la decisión del comité político, el acuerdo de los partidos y la vía escogida. El decreto de emergencia debe ser firmado cuanto antes, porque los plazos están venciendo.

—Fíjate que tengo un problema —dice Lagos, esforzándose por parecer tranquilo—. Me piden un decreto de emergencia para construir una cosa que quizá nunca se ocupe. Porque, como tú sabes, el señor Contreras tiene la facultad de cumplir su pena en un recinto militar. Y mientras la tenga, aunque le hagas una cárcel cinco estrellas no se va a ir para allá. ¿El comité político ha tomado en cuenta este problema?[2]

—Por supuesto —dice Figueroa—. Contreras va a cumplir su pena donde digamos. Ese es un problema de otros ministros, no tuyo.

—Ah, pero es que yo no estoy dispuesto a firmar un decreto de emergencia para dar privilegios a ese señor, y que más encima se burle yéndose a un regimiento...

La conversación sube de tono velozmente. Los temperamentos explosivos de Figueroa y Lagos no son fáciles de dominar, aunque conserven las formas. Figueroa insiste en que se trata de un acuerdo que todas las partes han suscrito. Lagos subraya que ha ofrecido alternativas y que le parece extraño que las desestimen: ¿por qué insisten tanto en que firme un decreto que es de su facultad exclusiva?

—¿Te das cuenta de lo que nos estamos jugando? —pregunta Figueroa, irritado—. Edmundo dice que si no se hace esto, no responde por lo que pueda ocurrir. ¿O vas a ir tú a sacar a Contreras de su fundo en el sur?

—Perdóname: si fuese el ministro de Defensa, sabría perfectamente lo que tengo que hacer.

—Pero no eres. Tampoco eres el Presidente. Este es un acuerdo político aprobado por el Presidente, y lo que te corresponde es cumplirlo.

—Lo que me corresponde como ministro de Obras Públicas es evaluar bajo mi responsabilidad lo que es un decreto de emergencia. Tú debiste haberme convocado a la reunión del comité político. No soy un mono, estamos juntos en el gabinete; si crees que soy un mono, estás equivocado, y le diré al Presidente que se busque un mono para ministro. Yo no soy mono de nadie.

—Ricardo, entenderás lo que significa lo que me dices.

—Entiendo perfectamente: tengo que cruzar a hablar con el Presidente.

—Y sabes dónde termina eso.

—Por cierto que lo sé. Pero se me debió haber citado e informado.

De regreso en su despacho, Lagos intenta comunicarse con Frei, que asiste a una ceremonia en San Bernardo. Tras dejarle un mensaje con el edecán, a eso de las 18 redacta su renuncia, una carta con tono áspero que plantea en pocas líneas una radical objeción a los procedimientos.

Esa tarde hierve el teléfono de Obras Públicas: Lagos informa a todos los dirigentes del PS y el PPD que ha rechazado firmar el decreto y está solicitando audiencia con el Presidente.

La crisis es total. Una alarma de catástrofe se extiende por las jefaturas del oficialismo.

A las 21, Frei llama a Lagos:

—Presidente —dice el ministro—, quiero ir a verlo ahora mismo.

—Vengo llegando, Ricardo —dice Frei—, y voy saliendo. Ahora no puedo...

—Es algo muy serio, muy urgente y a mi juicio muy grave.

—Sí, algo me ha dicho Carlos. Veámonos a las 8.30. En mi casa.

Lagos llega a la casa de calle Baztán con la convicción de que se trata de un encuentro privado. Lo sorprende encontrar en el living a Genaro Arriagada. Unos instantes después, llega José Miguel Insulza, y luego, Carlos Figueroa. Cuando Frei ingresa al salón, a las 8.40, el aire se puede cortar con navaja.

Figueroa expone la situación con aire de imparcialidad. Insulza agrega que, habiendo estado en la reunión donde se tomó la decisión clave, la respalda. Arriagada confirma todo.

El Presidente mira entonces a Lagos, que saca el sobre con su renuncia y se la entrega. Frei hace un gesto de rechazo, pero el ministro insiste. Frei toma el sobre y, sin abrirlo, lo deja sobre una mesa, disponiéndose a escuchar. Pero Lagos vuelve sobre la carta:

—Excúseme, Presidente, pero quiero que primero lea lo que dice.

Frei despliega la hoja y lee, en medio de un silencio expectante. Luego Lagos explica que no se le ha informado de la decisión política, que se lo ha puesto ante un hecho consumado y que cuando ha ofrecido alternativas, se las han rechazado. Además de los procedimientos, le parece que la negociación con los militares ha sido inadecuada, que se está sentando un precedente nefasto, que por una razón moral...

La palabra "moral" incendia el recargado ambiente.

—¡Quién eres tú para dar lecciones de moral! —brama Arriagada—. ¡No te lo acepto! ¡Yo tengo tanta o más moralidad que tú!

—Ricardo se cree no sé qué cosa —dice Figueroa, no menos irritado—. ¿Se va a hacer responsable de que Contreras no vaya a la cárcel? En realidad, ¿quiere que vaya a la cárcel?

—Por cierto que eso es lo importante —dice Lagos—, pero este no es el modo...

Mientras los vozarrones se prolongan, Insulza guarda un extraño silencio. Hasta que pide la palabra:

—Yo he respaldado la decisión del gobierno —dice—, y los jefes políticos también. Pero después de esta discusión, es claro que podemos tener un cuadro político distinto. De lo que se ha dicho puedo colegir el contenido de esa carta. Y no estoy seguro, Presidente, de que la renuncia del ministro Lagos vaya a mantener la unanimidad que se consiguió ayer. Si el resultado es una crisis ministerial, no puedo responder de lo que vaya a pasar con el PS.

Un pesado silencio inunda el salón. La pesadilla de una Concertación quebrada parece flotar entre los ministros: ¿un desbande a nueve meses de iniciarse el gobierno de seis años? El Presidente rompe:

—Muy bien. Les voy a pedir a los ministros Figueroa y Lagos que se pongan de acuerdo. Me tengo que ir a Valparaíso, vuelvo a las 5 de la tarde, y espero que el problema esté resuelto.

Toma el sobre, lo guarda en un bolsillo y se despide. Al salir, aún desconcertados, los ministros musitan comentarios. Te llamo, dice Figueroa a Lagos. OK.

Pero no habrá llamado alguno. Cuando llegan a sus oficinas, Figueroa y Lagos se hallan asediados por la prensa: los periodistas ya conocen la crisis y quieren detalles. Figueroa escapa a duras penas del asedio. La situación peor es la de Lagos: los reporteros han copado el edificio y su gabinete hasta debe negociar para que al menos abandonen el sexto piso, donde el ministro ha de encerrarse a partir de este momento.

El primero en llegar a visitarlo es el ministro de Mideplan, Luis Maira, que ya conoce los detalles del problema.

—Lo que estás haciendo es innecesario, Ricardo —le dice—. Tienes que firmar, lo que importa es que Contreras vaya preso. Si no es así, no vamos a solidarizar contigo. En esto sí que no.

Cuando Maira ya se retira llegan Erich Schnake y Patricio Hales. Los argumentos de Lagos les parecen poderosos: la izquierda, aun moderada, no puede aparecer propiciando una "jaula de oro" para un personaje como Contreras; pero menos puede aceptar tal papel sin haber sido siquiera consultada en uno de sus principales dirigentes. ¿Por qué el equipo político, en el que no está presente el único PPD, José Joaquín Brunner (que ha tomado sus vacaciones), insiste en que sea Lagos quien autorice con su firma esta decisión inconsulta? ¿Quién puede asegurar que tras esto no hay una jugada política destinada a cobrar responsabilidades en el futuro, como, por ejemplo, en una campaña presidencial?[3]

Con esa arenga, Schnake y Hales salen del edificio de Morandé y cruzan la calle para llegar a las oficinas de Figueroa: exactos veinte metros los separan de los dos recintos, pero saben que como emisarios se mueven ahora entre abismos políticos.

En la oficina de Interior oyen las enardecidas posiciones de Arriagada y del canciller Insulza. Hasta cuándo le aguantamos a este huevón, dice Arriagada. Que renuncie, que se vaya. Insulza, menos enfático, parece haber aceptado que no hay otra salida y que el titular de Obras Públicas debe entender que se ha puesto por fuera de los intereses del oficialismo.

—Pero esto sería un desastre —dice Schnake, que agrega, como si se tratara de un asunto distante—: mirándolo desde fuera, lo que no sé es si lo será más para el gobierno o para Lagos. Para la opinión pública progresista, una crisis de este tipo significaría que Lagos es el único que defiende los principios en una Concertación entreguista...

La discusión avanza entre exclamaciones furiosas. De entre todos, quien se muestra más cauteloso es el ministro del Interior. Y cuando lo llama el Presidente para conocer el estado del debate, Figueroa sintetiza:

—Genaro piensa que hay que aceptar la renuncia de Lagos, Presidente. ¿José Miguel? Me parece que está más cerca de la opinión de Genaro que de la mía. Bueno, y Schnake nos está planteando que esa salida motivaría la solidaridad del PPD...

Claro, de sus ministros: Alvaro García y Adriana Delpiano. De Brunner, el tercero, sólo Figueroa sabe que se mantiene en estrecha comunicación con La Moneda y que quizá no apoyaría a Lagos. Entre los socialistas, Insulza y Maira sostienen posiciones críticas, pero Jorge Arrate, titular de Trabajo, parece más proclive a apoyar la actitud del ministro de Obras Públicas.

Por única y última vez, tanto el gobierno como Lagos se enfrentan a una incierta correlación de fuerzas. Nadie puede apostar quién saldrá más dañado si la crisis sigue adelante. Pero para todos es claro que la Concertación se quebraría irremediablemente. Y es igualmente nítido que el Presidente no desea tal cosa. Tampoco Schnake y Hales, los mensajeros que calculan que, con cinco años de gobierno por delante, su máxima figura electoral quedaría en un extraño páramo.

Pero cuando regresan a Obras Públicas, Schnake y Hales no llevan ninguna propuesta concreta. Sólo una sensación:

—Las cuerdas sólo pueden estirarse hasta cierto punto, Ricardo —abrevia Schnake—. Vamos a solidarizar contigo porque no tenemos alternativa, pero no porque te hallemos la razón en forma total. Lo que importa es que Contreras esté preso.

—Por cierto que quiero lo mismo —dice Lagos—. Pero no de esta manera.

—¿Y qué querís? Nos quedamos en punto muerto, o damos alguna facilidad.

Lagos guarda silencio.

—Que lo hagan ellos —dice, al fin.

—Ya. Pero tampoco lo denuncias después. Te callas.

—...Bueno.

Cuando regresan a La Moneda, Schnake y Hales reciben una andanada de imprecaciones por esta solución:

—¡Qué se ha creído este huevón! —clama Arriagada— ¡Que nosotros quedemos como unos hijos de puta y él se lava las manos!

Pero para entonces se ha integrado al debate la ministra Alvear. Confusamente, entre ella y Schnake comienza a emerger la solución: un proyecto de ley que los involucre a todos, al gobierno y al Parlamento, a los ministros y a los partidos, al oficialismo y a la oposición. Es la idea que transportan los emisarios de regreso a donde Lagos.

—Estamos arreglados —anuncia Schnake.

—Ah, lo van a hacer ellos —dice Lagos.

—No, lo vamos a hacer todos. Un proyecto de ley. Se mojan todos. Pero tienes que firmar tú también.

—No, es que eso es otra cosa.

—Mira, huevón, yo me considero un estupendo abogado, que ha hecho grandes arreglos. Pero cuando hay un cliente tan testarudo, me rindo: no tengo más que hacer.

—Ricardo —tercia Hales— esta es la mejor solución, la más democrática. El PPD la va a apoyar sin vacilaciones. Tienes que ser razonable.

Lagos medita.

—En ese caso —concluye—, hagamos que esa ley garantice que Contreras no va a poder usar los privilegios del Código de Justicia Militar. Y que Gendarmería construya su cárcel, como lo ha pedido, pero con facultades jurídicas para hacerlo.

La noticia de la conformidad de Lagos causa un revuelo de alivio en La Moneda. La ministra inicia con su asesor la redacción del proyecto en un computador portátil. Cuando lo concluye, Schnake parte por cuarta vez al Ministerio de enfrente. Pasadas las 18 horas, y cuando el último borrador está afinado, Figueroa llama finalmente a Lagos. Habrá una declaración pública del gobierno anunciando la última decisión.

—Bien —dice Lagos—, pero los periodistas siguen aquí. No podré eludirlos cuando salga. Y si me preguntan por la renuncia, tengo que decir la verdad.

—Ah, no —se inquieta Figueroa—. No puedes decir que renunciaste.

—No, señor —se enoja Lagos—: no voy a mentir. Presenté mi renuncia, el Presidente se la llevó, a ti te consta que la tiene.

—No pretenderás que el Presidente te la rechace...

—No sé lo que hará. Pero se la entregué por carta, y las cartas se contestan.

—Ricardo, esto es muy grave.

Quince minutos más tarde, Figueroa vuelve a llamar a Lagos, que de nuevo se ha sobreexcitado:

—Mira, el Presidente no te va a rechazar la renuncia. Lo que quiere es que la retires.

—No tengo inconveniente —dice Lagos—. Pero lo voy a informar de esa manera. No puedo poner en juego mi credibilidad.

El proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados con tres artículos: el primero modifica el Código de Justicia Militar para que la privación de libertad de militares se cumpla en recintos comunes; el segundo modifica el Código de Procedimiento Penal para que el director de Gendarmería determine dónde se cumplen las sentencias; y el tercero lo faculta para construir penales.

Antes de pasar al debate general, el gobierno debe retirar el artículo segundo ante el riesgo de inconstitucionalidad.

El jueves 12 la Cámara aprueba el proyecto sólo con los votos de la Concertación, cuyos esporádicos reparos morales caen ante el resonante discurso del diputado socialista Juan Pablo Letelier, hijo del canciller asesinado:

—¡Yo no quiero que Manuel Contreras vaya a una cárcel para que lo maten o le den una estocada por la espalda, porque yo quiero a Manuel Contreras preso y bien preso...!

Cuando el texto pasa a la sala del Senado, el miércoles 18, la derecha lo rechaza por las innovaciones al Código de Justicia Militar.

Esa misma noche, el presidente de Renovación Nacional, Andrés Allamand, ofrece la fórmula para salir de la trampa: su partido está dispuesto a eliminar la norma que permite que los uniformados que tengan causas pendientes puedan cumplir prisión en unidades militares aunque estén condenados por otros casos. Mediante este privilegio, basta con conservar viva alguna demanda para que, sentenciado y todo, un oficial siga en recintos militares.

Paralelamente, el ministro Figueroa, que encabeza la delegación del gobierno junto a Soledad Alvear y Genaro Arriagada, se comunica con Edmundo Pérez Yoma:

—Llámate al general Pinochet y dile que ponga orden entre su gente del Senado. Los designados han votado en contra, y resulta que yo me estoy jugando las pelotas por sacar el proyecto.

Al día siguiente la disposición de los designados es ya otra. La propuesta de RN, acogida por el gobierno, se debate hasta la madrugada[4].

Sólo los senadores de la DC se oponen: repitiendo al revés la rebeldía de Lagos, sospechan que se trata de una concesión a los militares. El texto final se vota con 32 parlamentarios, sin ningún rechazo pero con la ausencia de cinco senadores DC[5].

La nueva ley queda promulgada en el tiempo récord de 20 días.

Notas

1. La investigación del asesinato del ciudadano español Carmelo Soria en 1976, atribuido a la Brigada Mulchén de la DINA, a la que perteneció el oficial Jaime Lepe, fue cerrada a fines de 1993 por el ministro en visita Marcos Libedinsky, que aplicó la ley de amnistía sin agotar las diligencias. La Corte Suprema, sin embargo,

revocó esta decisión y ordenó reabrir el caso en abril de 1994. Más tarde la justicia española abrió también un proceso en contra de los presuntos autores del crimen, uno de los más brutales del período. Una descripción puede hallarse en: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: *Informe final*. Santiago, 1991. Ver además Capítulo 35.

2. Lagos repetirá este argumento —"usted puede tener un muelle y no tener un puerto"— ante la prensa unos días después. *Lagos se explica con metáfora "portuaria"*. Diario *La Epoca*, 11 de enero de 1995.

3. Cavallo, Ascanio: *Lo impresentable*. Diario *La Epoca*, 15 de enero de 1995.

4. El debate en detalle: Biblioteca del Congreso Nacional: *Historia de la ley. Ley N° 19.368*. El texto final: *Diario Oficial*, 26 de enero de 1995.

5. Nicolás Díaz, Ricardo Hormazábal, Manuel Antonio Matta, José Ruiz de Giorgio y Mariano Ruiz-Esquide. Un sexto, Jorge Lavandero, está pareado con el senador de derecha Antonio Horvath.

27

El trimestre que vivimos en peligro

Entre abril y junio de 1995 se juega el encarcelamiento del general (R) Contreras y el brigadier Espinoza por el asesinato de Orlando Letelier. Todas las fuerzas políticas y militares se mueven en ese terreno minado: es el momento más peligroso de la administración Frei.

El brigadier general Eugenio Videla Valdebenito es compadre del general (R) Manuel Contreras. Pero este dato puede ser equívoco. En 1972, el entonces coronel Contreras había decidido que el entonces capitán Videla fuese su ayudante en la dirección de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes; al año siguiente, Videla tuvo una hija y el coronel le anunció que sería su padrino. Como producto de ese honor, Videla es compadre de Contreras; pero no es su amigo, como no lo es un subalterno de un superior.

En los tempestuosos días finales del 73, Contreras fue convocado a Santiago por el general Augusto Pinochet para hacerse cargo de dos cosas simultáneamente: la creación y dirección de la DINA y la dirección de la Academia de Guerra. El coronel quiso conservar a su ayudante: el capitán se trasladó desde San Antonio a Santiago y pasó a servir en la Academia de Guerra.

Por un golpe del azar —debía ingresar al año siguiente al curso de Estado Mayor—, Videla entró a la Academia y no a la DINA. Ese golpe lo salvó de la tragedia en que se convertiría la DINA en los años siguientes.

¿Pero se puede hablar de tragedia en el caso de un organismo que fue responsable de centenares de secuestros, desapariciones, muertes y actos de violencia? En un sentido amplio, sí: tras su exposición pública como el más despiadado servicio de seguridad de la historia de Chile, muchos de sus hombres fueron identificados, acusados, execrados, y sus carreras militares se hundieron bajo el pesado fardo de las violencias de los 70.

En los 80 no había oficial que quisiera reconocer que hubiese pasado por la DINA; en los 90 huían de esa filiación como de una peste. Militarmente hablando, el centro de la desgracia consiste en que muchos de esos oficiales llegaron a la DINA, especialmente en sus primeros meses, como producto de una orden; algunos hasta pudieron considerarlo un privilegio y habrá habido quienes se sintieran afortunados en los casi cuatro años en que la DINA llegó a ser un imperio en la sombra[1]. A la vuelta del tiempo esa gloria tomó el cariz de la desgracia.

La DINA devino un estigma, pero sus funcionarios casi no recibieron castigos judiciales. Por eso, el enjuiciamiento de Contreras es un poderoso símbolo, por mucho que en los crispados días de comienzos de 1995 el gobierno se apresure a negarlo y el Ministerio de Defensa sostenga a rajatabla que el proceso afecta a los individuos y no a las instituciones.

Y Videla, que se salvó jabonado, parece creer que estos ásperos alcances del proceso no pueden ser soslayados, aunque ya hay muchos en el propio Ejército que aceptan con el silencio

las versiones oficiales. Además, es seguro que ha oído lo que Pinochet ha estado repitiendo ante numerosos generales en los últimos meses: a esta gente la vamos a apoyar.

Un apoyo ambiguo, silencioso, por presencia. Una forma de decir: no están solos; pero en voz baja.

En enero, Pinochet logra acordar con el ministro Edmundo Pérez Yoma que algunos generales en servicio activo puedan asistir a la audiencia pública en que la Cuarta Sala de la Corte Suprema escuchará los alegatos de las partes, paso previo para confirmar o modificar las sentencias dictadas por el ministro Adolfo Bañados.

No pueden ser muchos, pero tampoco se ocultarán; irán de civil, pero tomarán ubicaciones notorias. ¿Cuántos? En la contraparte, la Concertación, ya se sabe que asistirán los cuatro presidentes de partidos. Por tanto, cuatro generales: el auditor Fernando Torres Silva; Jorge Lagos, director de Operaciones; Sergio Moreno, director de Institutos Militares; y Videla, recién asumido en la poderosa Segunda División, que tiene bajo su mando a todas las unidades operativas instaladas desde La Serena hasta San Fernando.

Los alegatos son transmitidos en directo por dos canales de televisión y cargan de tensión las mañanas del 25 y el 26 de enero de 1995. Al culminar la última, Videla se deja abordar por los periodistas:

—Los grandes responsables —dice, agriamente— de lo que ocurrió el año 73 no somos nosotros. Algunos se andan paseando por ahí...

La Cuarta Sala ha quedado con una conformación que parece *a priori* favorable a la ratificación de la condena. En julio del año anterior, los abogados querellantes, Fabiola Letelier y Juan Bustos, habían recusado a dos de sus miembros por su eventual predisposición: el ministro Germán Valenzuela, que ya había participado en fases previas del proceso, y el abogado integrante Germán Vidal, antiguo miembro de una comisión legislativa del régimen militar.

En lugar de ellos se incorporaron el ministro Eleodoro Ortiz, hasta ese instante el único juez de la Suprema designado por el Presidente Eduardo Frei, y el abogado integrante Manuel Daniel, militante veterano de la Democracia Cristiana y miembro de la Corte de Apelaciones durante el gobierno de Aylwin.

Un tercer magistrado, el ministro Marcos Libedinsky, había llegado al tribunal mayor nombrado por Aylwin y tenía el mérito de haber sido uno de los primeros jueces que concedieran, junto a Adolfo Bañados y José Cánovas, un recurso de *habeas corpus* en los años del reinado impune de la DINA[2].

Los otros dos miembros de la Cuarta Sala resultan menos previsibles.

El presidente, Servando Jordán, fue nombrado en los años de Pinochet, casi junto con Hernán Cereceda, que más tarde sería su rival. Los abogados de derechos humanos lo recuerdan por haber cerrado el sumario de un caso de varios centenares de desaparecidos, pero en el gobierno circula también la versión de que, aspirando a presidir la Corte Suprema al año siguiente, Jordán puede ser más receptivo al clima público.

El quinto juez es Hernán Alvarez, el último designado por el gobierno militar, que tiene un hijo en el Ejército.

En virtud de ese cuadro, parece posible, en el peor de los casos, un veredicto de 3-2 en favor de mantener la sentencia, y uno de 4-1 tampoco resultaría extraño. Sin embargo, el gobierno cree que la unanimidad sería la situación óptima: un fallo cuya contundencia sea tan perentoria, que no pueda discutirse desde ningún ángulo jurídico.

Tras los alegatos, el receso de febrero aplaca el ambiente emocional que ya satura al caso.

Unicamente en el Ministerio de Justicia persiste la tensión: luego de que la Cuarta Sala emita su veredicto sólo quedará la notificación de la sentencia, un estrechísimo espacio de días antes de que Gendarmería deba hacerse cargo de los convictos.

La ministra Soledad Alvear acompaña al director de Gendarmería, Claudio Martínez, para verificar *in situ* la habilitación de un sector especial en la cárcel de Puente Alto. Simultáneamente supervigila las primeras faenas en el terreno de Punta Peuco, donde a partir de marzo se trabajará día y noche, con turnos reforzados.

Otras prevenciones salen de La Moneda. El abogado Luis Toro, del Ministerio del Interior, recibe la misión de seguir la evolución del proceso, mientras la Dirección de Seguridad debe preparar informes especiales sobre la posibilidad de conatos de violencia.

La fase crítica, el trimestre peligroso, comienza en abril, cuando la Cuarta Sala comienza a prepararse para pronunciar la última palabra. En los primeros días del mes instruye a los juzgados del crimen de Santiago para que remitan todos los expedientes sobre detenidos desaparecidos en que aparezca envuelta la DINA.

Luego envía el proceso por la muerte de Letelier a Gendarmería para que elabore el informe sicosocial de los acusados, que permitiría declararlos aptos para disfrutar de libertad vigilada.

La ministra Alvear ordena a Claudio Martínez que un equipo de peritos de Gendarmería sea separado de toda otra tarea y dedicado exclusivamente al informe, un proceso que por lo general toma unos 70 días. Ahora demorará una semana.

El lunes 17, una asistente social y un abogado llegan al fundo Viejo Roble, en Huempeleo, cerca de Fresia, y sostienen una larga entrevista con Contreras para establecer su situación laboral, económica y familiar.

No es un panorama luminoso: separado de su esposa, María Teresa Valdebenito, y acompañado en los últimos años por la que fuera su secretaria en la DINA, Nélida Gutiérrez, Contreras recibe las ocasionales visitas de sus tres hijas, Alejandra, María Teresa y Marianela, y de su hijo Manuel, cuya inestabilidad sicológica lo revela como la principal víctima de estos años de fuego.

Tras varias aventuras empresariales fallidas, el general (R) se ha quedado con su jubilación y con el magro producto del Viejo Roble, un fundo de bajo rendimiento. El propio gobierno ha debido facilitarle condiciones para renegociar un crédito de la Corfo[3].

Al día siguiente, los peritos se trasladan a un fundo en las cercanías de San Juan de la Costa, donde pasa unos días el brigadier Pedro Espinoza. Con sus 62 años, Espinoza vive una extraña situación como el segundo oficial activo más antiguo del Ejército, siguiendo a Pinochet.

En esa situación ha permanecido durante gran parte del proceso por el asesinato de Letelier, y ella motivó incluso alguno de los roces más ásperos entre el general Pinochet y el gobierno de Aylwin[4]. Sus dos hijos, Pedro y Rodrigo, son oficiales de Infantería y confían en la cerrada negativa de su padre a admitir vinculación alguna con el asesinato cometido en Washington, así como su afirmación de que jamás fue el "segundo hombre" de la DINA: su máximo cargo interno fue la Dirección de Operaciones.

El jueves 20, los generales se reúnen bajo la presidencia del vicecomandante Guillermo Garín, que los ha citado para una exposición sobre las posibilidades de desenlace del caso Letelier.

La conclusión de los analistas es que parece seguro que las condenas del juez Bañados serán ratificadas, a pesar de que —como enfatiza la explicación— la inculpación de Contreras se realizó sobre la base de testimonios obtenidos en el extranjero y en algunos casos, como el de Michael Townley, bajo la modalidad de la delación compensada.

Hay más: de acuerdo a los informes de inteligencia, los peritos enviados por Gendarmería tienen inclinaciones de izquierda —socialistas y comunistas—, por lo que también cabe presumir que no recomendarán el beneficio de la libertad vigilada.

La reunión es estrictamente informativa, porque el vicecomandante sabe que una discusión abierta podría incendiar los ánimos y debilitar el control del mando. Sólo se permite que, al final, los generales formulen preguntas; y algunos lo hacen después de largas introducciones opinativas, para culminar en interrogantes que más parecen desafíos.

Pinochet no asiste. El vicecomandante Garín estima que el comandante en jefe no debe exponerse en esta fase; debe salir de la primera línea de fuego hasta donde sea posible.

El clima interno es tan explosivo, que la cúpula militar teme, por primera vez seriamente, enfrentarse a estallidos espontáneos.

Al mismo tiempo, la ausencia de Pinochet sirve para subrayar lo que ha estado diciendo en estos días al ministro de Defensa: que el control de la situación tiene un límite, que se pueden producir reventones, que incluso él puede verse sobrepasado.

—Ah, no, general —le ha respondido Pérez Yoma—, ese es problema suyo.

—¿Y qué pasa si el hombre se mete en un cuartel?

—Usted y yo lo vamos a sacar, pues general.

—No, ministro, las cosas no son tan sencillas. La gente ha estado muy nerviosa...

El sábado 22, Contreras y Espinoza cumplen el último trámite del informe sicosocial en la Escuela de Gendarmería, en Santiago: un test y una entrevista con sicólogos.

Los peritos trabajan todo el fin de semana. En la noche del domingo queda listo el informe, que llega a la Corte Suprema al mediodía del lunes 24.

En cinco carillas, Gendarmería recomienda a los jueces no conceder la libertad vigilada, puesto que ni el general (R) ni el brigadier muestran señales de arrepentimiento, lo que inhibe toda voluntad de "rehabilitación".

La noticia impacta en todos los cuarteles. Ese mismo día sesiona la Junta de Comandantes de Unidades Tácticas, donde se informa que las condiciones para el fallo definitivo se han cumplido. Ahora cabe esperar su anuncio en cualquier momento.

También allí las preguntas son enervadas y están cargadas de emocionalidad. Pero Garín se muestra parco y tajante: la institución es obediente y jerarquizada. El mando decidirá.

Ese día el gobierno recibe informaciones alarmadas sobre movimientos militares. Según esas versiones, destacamentos del Regimiento Buin se han desplazado por la noche a los cerros de Chena para recuperar piezas de artillería utilizadas en ejercicios. También se ha visto a personal del Fuerte Arteaga dirigiéndose a los arsenales de Batuco. Se estaría distribuyendo material de guerra en algunas unidades, y alguien habría oído que el brigadier general Luis Cortés Villa detuvo la partida de unos tanques pertenecientes a unidades del norte, que estaban en reparaciones en Santiago, con el argumento de que "los vamos a necesitar".

En realidad, algunos de esos movimientos se producen, pero son parte de la rutina del Ejército. No hay, como se rumorea entre la Concertación, ninguna orden de alistamiento.

Aunque la situación lo aconsejase, Pinochet y Garín están convencidos de que una medida de ese tipo perjudicaría al ministro de Defensa. Cualquier movimiento inusual pondría a Pérez Yoma en dificultades con el gobierno y con la Concertación, estrechando su margen de maniobra.

Lo que atiza ese clima paranoide es la versión de que el fallo se conocerá el viernes 28 de abril. Para apagar la mecha, el ministro Servando Jordán anuncia ese mismo martes que ha pedido seis días de permiso administrativo. Al día siguiente hará lo mismo el ministro encargado de redactar el escrito final, que para ensombrecer las perspectivas del Ejército ha resultado ser Eleodoro Ortiz.

Todo parece confluir misteriosamente. A muchos kilómetros de distancia, sin ninguna conexión con los hechos, en la noche de Buenos Aires, el general Martín Balza, jefe del Ejército argentino, reconoce en el archivisto programa del periodista Bernardo Neustadt que en la lucha contra la subversión las Fuerzas Armadas cometieron graves excesos.

Dos días más tarde, el general Pinochet responderá ácidamente que Balza puede decir tal cosa "porque no estuvo bajo el ruido de las balas"[5].

A fines de abril ya hay muros en Punta Peuco. Por primera vez, la ministra Alvear puede sentir algún alivio: si el fallo demora un poco más, unas cuantas semanas, y la notificación del "cúmplase" no es inmediata, la cárcel podrá estar lista.

En los primeros días de mayo, el ministro Pérez Yoma inicia reuniones con dirigentes de la Concertación para pedir que moderen las declaraciones públicas y que el fallo no sea agitado como una inculpación institucional.

A mediados de ese mes, la Cuarta Sala de la Corte Suprema alcanza la unanimidad en la decisión.

Las últimas resistencias han sido quebradas, aunque el magistrado Alvarez se apresura a anunciar que revisará el texto a fondo. Bien, pensará la ministra: que vaya letra por letra.

En la última semana de mayo el fallo es inminente. Quien lo confirma, otra vez, es Servando Jordán, que precisa que saldrá antes de terminar el mes.

El martes 23 se reúnen nuevamente los generales de Ejército. Ahora Pinochet abre el encuentro, pero luego traspasa la palabra a Garín y se retira. En esta ocasión se trata de reiterar, sin decirlo muy abiertamente, que la doctrina institucional es estricta y que las reacciones o declaraciones no están autorizadas, ni siquiera para el momento en que la sentencia se haga pública. La voz del Ejército será la del comandante en jefe, que está sosteniendo reuniones frecuentes con el ministro de Defensa.

¿Qué se dice en esas conversaciones?

Las versiones difieren radicalmente, excepto en un punto: la insistencia del general Pinochet en que Contreras no debe ir a prisión. Cualquier solución que signifique que el general (R) no entre a una cárcel es buena para la institución, aunque esa fórmula incluya una modalidad de cumplimiento de la sentencia.

La aspiración se aproxima a la seguridad que ha mostrado Contreras desde que el juez Bañados lo declarase reo: "No iré a ninguna cárcel".

La cúpula militar está hasta ese momento convencida de que Contreras resistirá la orden por la fuerza: la imagen de un enfrentamiento, con el general (R) convertido en un mártir, forma parte de las pesadillas de estos días. En ese caso las posibilidades de controlar las reacciones en el Ejército serían mínimas.

Al acercarse el fin de semana, el viernes 26, Pinochet informa al ministro de Defensa que enviará un emisario a dialogar con el general (R) en su fundo. La solución que se busque tendrá que ser aceptada por él; de otro modo, todo será inútil.

El elegido es el brigadier general Videla, que aterriza en Puerto Montt y parte a Huempeleo con una escolta de fuerzas especiales. En realidad, Videla es una de las pocas opciones; de entre los generales activos, muy pocos conocen a Contreras y existe el riesgo de que el general (R) rechace o desconfíe de otro, cuando la intención es que sienta que lo están tratando de ayudar.

—Mi general —le dice Videla a Contreras—, por instrucciones del ministro y de mi general Pinochet vengo a proponerle que se vaya a Isla de Pascua o a Chaitén, lo que usted prefiera.

Además de Puerto Williams, esas son las dos únicas localidades del país donde no hay prisiones y donde los condenados no son enviados a otras jurisdicciones. Además, están en esos lugares bajo custodia de Carabineros, pero por lo general llevan regímenes de vida normal.

Pero Contreras rechaza la oferta: no está dispuesto a huir como culpable; tampoco está dispuesto a ir a ninguna cárcel.

Y el emisario no insiste, porque está de acuerdo con su antiguo jefe. Tal como lo ha sostenido ante sus compañeros, la cosa es más simple: el general (R) no debe ir preso. Quien debe impedirlo es el Ejército.

Por eso ha sido uno de los pocos generales que se ha opuesto en voz alta, ante quien lo quisiera oír, al penal de Punta Peuco: en la medida que la cárcel especial es aceptada por el Ejército, se está aceptando también la posibilidad de que Contreras sea encarcelado.

No es lo único. Como Contreras, Videla cree que la negociación de la cárcel ha sido inducida por unos pocos generales que han persuadido a Pinochet con las artes melifluas de la política. Y para que no quepa duda, ahí están las declaraciones que ha hecho el general (R) Jorge Ballerino hace sólo unos días, cuando le preguntaron qué ocurriría si se desconocía el fallo:

—Estaríamos volviendo justamente a lo que combatió el Ejército el año 73, que fue que no se acataban los fallos de la justicia.

Pero los dos hombres solos en el living del Viejo Roble se saben al borde de la derrota: el vicecomandante Garín piensa en estas cosas como su amigo Ballerino.

Lo que no saben es que el análisis de Garín coincide con el de Pinochet: el desacato de una orden judicial en un caso tan sonoro no podría terminar ahí; conduciría, lisa y llanamente, al golpe de Estado. Y el comandante en jefe no está dispuesto:

—Se está cumpliendo la transición que hicimos nosotros —ha dicho—. No vamos a echar todo por la borda.

48 horas más tarde, el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, se presenta en una sala atiborrada de periodistas y lee la sentencia definitiva: la condena de siete años para Contreras y seis para Espinoza se confirma.

Puesto que un auto acordado de la Corte ha establecido que en el caso de las sentencias dictadas a partir de un ministro especial no caben recursos ulteriores, ni siquiera los de casación, se entiende que la última palabra está dicha. El trámite final corresponde al ministro Bañados, que debe notificar el "cúmplase" a los afectados, momento a partir del cual quedan bajo tuición de Gendarmería y comienzan a cumplir su pena.

Ese mediodía llegan a Huempeleo los ex alcaldes de Osorno Alejandro Kauak y Ramón King, próceres derechistas de la región, que desean solidarizar con su viejo amigo.

En la noche Contreras recibe al periodista Pablo Honorato, del canal de la UC, y, en una transmisión en directo, impugna el fallo, acusa a los jueces, reitera el alegato de su inocencia y, ante la pregunta de si acatará lo que diga Bañados, afirma: "Yo aprecio y resuelvo". Su última frase tiene el tono de un desafío:

—No voy a ir a ninguna cárcel mientras no haya una justicia real.

Al día siguiente recibe a una miríada de periodistas en una cabaña situada junto al camino que conduce a la casa principal. El gesto retador recortado sobre un fondo de cortinas floreadas da la vuelta al mundo[6].

La apariencia de tranquilidad que el gobierno ha logrado mantener hasta aquí comienza a quebrantarse inmediatamente después del fallo. Mientras el ministro Pérez Yoma trata de sostener la tesis de que se debe dejar al Ejército la obligación de cumplir la sentencia, porque a fin de cuentas tendrá que acatar, otros ministros estiman que el Ejecutivo debe dar señales más claras ante los desafíos de Contreras.

Cuando el ministro Carlos Figueroa declara que "las resoluciones de los tribunales tienen que ser cumplidas, aun con la fuerza"[7], Pérez Yoma lo enfrenta en una dura polémica ante al Presidente.

El titular de Defensa tiene sus razones para estar más inquieto en esas horas: poco antes, el general Pinochet lo ha llamado para decirle que sería inconveniente que lo acompañara a celebrar el Día de la Infantería en Arica, como estaba previsto.

El 1º de junio, los 27 generales presentes en Santiago son convocados al edificio de calle Zenteno. Los ánimos están un poco caldeados y el análisis del texto de la sentencia pasa por momentos emocionales que cuesta controlar. Al concluir, Pinochet cita a su despacho a un pequeño grupo de generales —varios de los "duros" están ahí— y llama al ministro de Defensa.

Quiere que el ministro se reúna esta misma tarde con los generales para escuchar sus opiniones y responder a sus inquietudes. ¿Mañana? No, tiene que ser esta misma tarde. En Lo Curro.

Cuando Pérez Yoma y Burgos llegan al Club de Oficiales, Pinochet los espera con el auditor Torres Silva y su asesor especial, Sergio Rillón, para ver las alternativas jurídicas que puedan estar pendientes. Durante el diálogo, Rillón plantea que, al eliminar una de tres instancias (la Corte de Apelaciones), la ley que creó los ministros especiales adolece de ilegitimidad.

Burgos se sobresalta. Tras la idea de ilegitimidad puede ocultarse la doctrina tomista que valida los actos de rebeldía, la desobediencia y el desacato.

—Le recuerdo —dice— que el actual estado de derecho está construido sobre la Constitución de 1980, elaborada por el régimen militar.

—Pero la ley es posterior —retruca Rillón.

—Sí, pero fue revisada por un Congreso elegido conforme a la Constitución del 80, y por un Tribunal Constitucional del que no me dirá que lo ha nombrado este gobierno. Entonces, no me diga ahora, cuando pasó por todos los cedazos constitucionales, que esta ley adolece de ilegitimidad. Eso es inaceptable.

La discusión no conduce muy lejos. Los asesores militares han pensado que el Presidente Frei podría indultar a los dos condenados, pero el ministro de Defensa aclara que la oportunidad política hace inviable una solución de ese tipo.

La reunión concluye cuando se avisa que los generales esperan en un salón del segundo piso. Pinochet, acompañado en el estrado por Garín, comienza a dar la palabra a los generales, que hablan por orden de antigüedad, tal como están ubicados en las sillas.

Pero pronto ministro y subsecretario se extrañan de que —aparte de Torres Silva, que vuelve sobre el indulto— mayores generales y brigadieres generales hablen del caso en términos tan genéricos y sin preguntas muy específicas: el daño al Ejército, la obra del gobierno de las Fuerzas Armadas, la lucha contra el terrorismo, la dignidad del rango militar...

Pérez Yoma responde siempre con tono apaciguador y cada vez que puede vuelve sobre una misma idea: el gobierno está dispuesto a dar garantías para cautelar la dignidad militar, pero los fallos se deben acatar.

—Bien —dice Pinochet, luego de que interviene el brigadier general Javier Salazar—, ya está bueno de preguntas. El ministro tiene otras cosas que hacer.

Mientras hace el ademán de pararse, divisa una mano alzada:

—¡Mi general!

—Diga, Videla.

—Yo estaba inscrito. Quiero hacer una pregunta.

—Ya, hable —autoriza Pinochet.

—Ministro —dice Videla, con un tono cargado de emoción—, yo lo quiero situar en el sur de Chile. En la comuna de Fresia. En el fundo Viejo Roble. Ahí, en una casa pequeña, sin grandes comodidades, hay un general de la República que está enfermo, que es un hombre pobre, que vive en la soledad y que debiera despertar más bien conmiseración, pero que en lugar de eso, es ahora un perseguido. Un general que cumplió con su deber, y que hoy sólo cuenta con el respeto de sus pares.

En el salón se extiende un silencio de hielo. La imagen que emplea Videla es poderosa para el auditorio. El subsecretario Burgos toma detalladas notas.

—Como jefe de la Segunda División —sigue—, con ocho mil hombres a mi cargo, yo tengo el deber frente a esos hombres de no permanecer impávido en relación a los hechos que pueden llevar a la cárcel al general Contreras. Si acaso no tuviera una actitud de preocupación, si el Ejército permaneciera impávido, se estaría produciendo un grave daño a la institución, difícil de restañar en muchos años. No es posible que el general vaya a la cárcel. El Ejército, a lo menos parte de éste, no perdonaría a sus generales que presenciaran impasibles cómo Contreras va a la cárcel. En la Segunda División, con mi Estado Mayor, hemos venido haciendo ejercicios acerca de los escenarios posibles; entiendo que el Ejército globalmente también los ha hecho; y es posible que algunos coincidan.

Videla detalla esas alternativas: un enfrentamiento en el fundo de Huempeleo, un sitio ante su eventual resistencia, la huida del general, el suicidio, la entrada a la cárcel, la internación en un hospital. Pero nada de ello le parece posible.

En silencio, el ministro se asombra de que las opciones son similares a las que él mismo ha expuesto unos días antes ante el comité político de La Moneda; Videla sólo ha omitido el ingreso de Contreras a un cuartel militar, pero el mismo Pérez Yoma ha dado por improbable tal evento.

—Pero la Segunda División —agrega Videla— también ha establecido cursos de acción para solucionar esta grave situación. Uno de ellos es el indulto presidencial, con el que se ha beneficiado a los asesinos de mi coronel Roger Vergara, de mi general Carol Urzúa y de los escoltas de mi general Pinochet. Y, por último, por qué no dejarlo en Fresia, en su fundo, como relegado,

si quieren. Yo fui ayudante del general Contreras, lo conozco y lo aprecio, sé que está enfermo. Mi pregunta, señor ministro, es por qué quieren traer a mi general Contreras a toda costa, por qué no lo dejan tranquilo donde está.

Un silencio espeso se extiende en el salón.

—Lo felicito por su sentido de la lealtad —dice al fin Pérez Yoma—. Pero en estas cosas hay que actuar con la cabeza y no con el corazón.

Videla vuelve a alzar la mano. ¿Piensa responder que los militares son "puro corazón", que la lealtad tiene domicilio en el corazón y no en la cabeza? Tal vez; pero ahora Pinochet da un golpe en la mesa y declara terminada la reunión.

Mientras el auto baja por la ladera del Club, Pérez Yoma y Burgos divisan un tumulto de periodistas en la puerta de acceso.

—Pasemos rápido —propone Burgos.

—No —dice el ministro, calculando la distancia—. Voy a hablar.

Los reporteros se arremolinan en torno suyo cuando baja del auto.

—El Ejército acata el fallo —declara, y agrega luengas certezas sobre la normalidad de la situación.

Los apuntes de Burgos sobre el encuentro de Lo Curro le sirven al ministro para convencer a los reticentes dirigentes de la Concertación, y del propio gobierno, sobre el grado de tensión en el Ejército.

Al mismo tiempo, sus declaraciones fijan el marco para los generales que se reúnen nuevamente al día siguiente: la sentencia se cumple. Algunas intervenciones exaltadas son acalladas por Garín con cierta brusquedad.

—¿Y qué quiere, señor? —emplaza—. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Usted quiere ver al Ejército metido en una locura?

La reunión muestra a los generales la completa ausencia de opciones: no pueden contrariar a la justicia. A la salida, Videla no se contiene y despacha ante la prensa lo que parece una conclusión:

—El Ejército tiene un mandato constitucional, y lo vamos a cumplir —dice—. Pero para eso, el Ejército tiene que existir.

La segunda parte quiere ser un mensaje frente a lo que algunos generales entienden como un "principio de destrucción" de la institución. Pero nadie está dispuesto a oír semejantes sutilezas.

Tres días más tarde, en Iquique, Pinochet afirma que cree en lo que Contreras sostiene y protesta contra la falta de una tercera instancia. Sin embargo, el final es el mismo: "Se va a cumplir la ley, nomás".

En los días siguientes insistirá una y otra vez ante Pérez Yoma con la idea del indulto presidencial, con la aparente esperanza de que esa decisión evite que Contreras ingrese a una cárcel. Pero con toda probabilidad entiende que no hay condiciones para ello.

Sin embargo, las negativas del ministro empiezan a debilitarse lentamente ante la persistente versión de que el general (R) está gravemente enfermo, que no se ha cuidado en estos años y que la operación al intestino grueso en la que se le extirpó un quiste maligno lo dejó con secuelas más graves que la ya traumática evacuación mediante bolsas extracorpóreas. ¿Qué pasa si se les muere en el traslado? ¿O en la cárcel?

En contrapartida, Pérez Yoma sabe que las apariciones de Contreras en televisión han sido más perjudiciales que favorables para su causa. En la Academia de Guerra, el vivero de los futuros generales, los alumnos han visto las transmisiones en grupos y muchos se han declarado molestos por el exhibicionismo del ex jefe de la DINA. El propio general Pinochet está molesto con sus alusiones a una "condena al Ejército".

Por fin, Pérez Yoma accede a lo que Pinochet propone como alternativa para dejar tiempo a un indulto: el traslado, antes de que lo notifiquen, a un hospital militar.

Cuando la Corte Suprema rechaza los recursos de casación de Espinoza y acepta descontar de la pena de Contreras 14 meses y 96 días que estuvo detenido en etapas anteriores, la operación de traslado del general (R) está en plena planificación.

El último acuerdo, que se trate de un recinto no controlado por el Ejército, se ha alcanzado luego de que el almirante Jorge Martínez Busch le ha ofrecido a Pinochet que disponga de su base de Talcahuano.

Pérez Yoma piensa que esta solución es óptima: además de impedir el acceso de los periodistas, como con tanta insistencia pide Pinochet, la tuición de la Armada garantiza que la ley será cumplida sin alteraciones. El almirante Juan Mackay, jefe del Estado Mayor, da al ministro las seguridades de que la Armada dispondrá de todos sus medios para completar con éxito la operación.

Pero para que lo tenga, se requiere extremar el secreto: nadie más en el gobierno puede conocerla. Entre el enojo probable de otros ministros y el riesgo de que se inicie una discusión y el acuerdo con Pinochet fracase, Pérez Yoma prefiere lo primero. Desde ahora, será un corredor solitario.

Tampoco se sabe nada en Huempeleo. Rodeado de su pareja, sus hijas y sus amigos de Osorno, Contreras siente que ya no puede fiarse de nadie fuera de ese apretado círculo.

En las puertas del fundo, la prensa ha improvisado un verdadero campamento. Los móviles de radio y televisión han dinamizado los comercios de Fresia en los casi tres meses de vigilia. Los periodistas cambian tanto, que a veces ya ni se reconocen entre sí. Eso hace posible que tres oficiales de inteligencia de Carabineros se infiltren en el grupo.

Uno de ellos, el capitán Helmut Schullbach, entra al Viejo Roble en la mañana del sábado 10 de junio e informa a Contreras que un contingente de Investigaciones ha partido desde Santiago con la misión de arrestarlo. Serían unos 90 hombres.

Para entonces, Contreras ya tiene una cadena de amigos en la ruta sur dispuesta a informar de movimientos inusuales.

Al mediodía recibe una especie de confirmación desde Temuco: seis minibuses con sujetos de civil se han detenido a almorzar en la ciudad. Poco más tarde hay otra señal desde Victoria: unos afuerinos han comprado casi un centenar de botas de agua.

Pasadas las 22, el capitán de Carabineros regresa al fundo: la supuesta caravana de la policía civil está preparándose para apresarlo cerca de la medianoche. El clima turbulento del invierno, la gruesa lluvia y la ventisca fría, son propicios para una operación confusa.

Cuando un apagón extingue las luces de la casa, Contreras decide evacuar.

Sus tres hijas y Nélida Gutiérrez deben irse con el oficial Carlos Möller —casado con Marianela Contreras— a la comisaría de Tegualda. El general (R), acompañado de tres guardaespaldas y preparado para un combate largo ("yo solo llevaba más de 500 tiros", les dirá a sus amigos más tarde), se atrinchera en una cabaña facilitada por un vecino, en las cercanías del Viejo Roble.

En la casa del fundo sólo quedan su hijo Manuel, armado con una metralleta, y un par de escoltas. Cuando le parezca oír ruidos en el páramo sombrío, el joven disparará ráfagas frenéticas e inicuas: nadie anda en los alrededores.

Cerca de las 4 de la madrugada, Contreras sale de su refugio y parte a Tegualda a buscar a sus hijas y su pareja.

Dos vehículos ruedan por los caminos secundarios en la tenebrosa noche huilliche antes de alcanzar la Ruta 5 Sur a la altura de Puerto Varas y entrar al Regimiento Sangra.

El oficial a cargo llama al vicecomandante en jefe:

—Atiéndalo como corresponde a su rango —dice Garín, consciente de que acaba de configurarse uno de los peores peligros.

En Huempeleo reina el silencio. La supuesta caravana de Investigaciones no aparece jamás; nadie se acerca en la oscuridad de la madrugada al Viejo Roble. Al día siguiente, el director de Investigaciones, Nelson Mery, asegurará al Ministerio del Interior que no ha enviado a ningún hombre a la zona. Lo mismo responde al director de Inteligencia del Ejército, el brigadier general

Eugenio Covarrubias, que lo llama para protestar, y al propio general (R) Contreras, que también quiere increparlo.

Mucho más tarde, el gobierno se convencerá de que se trató de una maniobra de inteligencia de Carabineros, aunque sus propósitos parecen incomprensibles. ¿Alguien quiso probar algo?

Al amanecer, los teléfonos de todas las autoridades resuenan en Santiago: Contreras ha realizado el movimiento más temido y ahora está bajo custodia militar en una fortificación del Ejército. Quien informa al gobierno es... Carabineros, y el ministro y sus subsecretarios parten a primera hora a constituirse en sus oficinas para afrontar la crisis.

Garín no se demora en admitir que Contreras está como huésped en el Regimiento Sangra y que él ha autorizado su ingreso. No hay nada ilegal en que esté allí: ha sido condenado pero no notificado; no es un prófugo.

Pero, además de los temores de que en un regimiento no se le pueda notificar jamás, los funcionarios de Defensa estiman que la situación es impresentable y que el gobierno quedará en un completo ridículo si tolera que Contreras permanezca en una unidad militar.

Cuando Pérez Yoma lo llama, la explicación de Garín es tranquilizadora:

—Edmundo, está durmiendo en una casa de oficiales. Se pasó la noche en vela, está agotado y enfermo. Dejémoslo que descanse primero.

—Muy bien, como tú digas. Pero entiéndeme: esta huevada no resiste mucho. En la tarde debe estar afuera, porque si no, vamos a tener problemas todos.

—Veremos qué se puede hacer.

—No, Guillermo: en la tarde.

La tensión crece mientras transcurre la mañana. El ministro teme que la operación de fondo, la que nadie más conoce, pueda arruinarse por este imprevisto. A ratos duda: ¿será imprevisto? En los sucesivos llamados a Garín va aumentando la presión. Al final hasta se fija un límite: las 16 horas.

Pero Garín no puede tomar tal compromiso. La reacción de Contreras es imprevisible, no es posible saber de antemano si querrá salir o no. Sacarlo por la fuerza es la peor de todas las opciones. ¿Y la aceptarían los hombres del Sangra, muchos de los cuales conocen al general retirado?

Cuando Contreras despierta esa tarde, el brigadier general Sergio Candia, comandante de la Cuarta División, lo visita para confirmarle la hospitalidad del Regimiento. No obstante, la unidad está dispuesta para acompañarlo a donde quiera ir. Los hombres han rastreado la zona de Huempeleo y puede asegurarle que está limpia: salvo los periodistas de siempre, el personal de Carabineros y la guardia militar a su servicio, no hay nadie en el sector. Pero si mi general quiere ir a alguna otra parte...

No. Quiere volver al Viejo Roble. ¿A dónde más podría ir?

Al borde de las 18 —dos horas después del límite puesto por el gobierno—, un jeep lleva a Contreras de regreso a su fundo.

En el gobierno se generaliza el alivio. Pero el subsecretario Burgos, a quien se encarga la redacción de la declaración oficial, está convencido de que el gobierno no puede aparecer simplemente complacido, e incorpora una frase para decir que Contreras entró al Sangra movido por un enfrentamiento "que sólo existió en su imaginación". Los generales se indignarán por esa referencia que sugiere una acción paranoica.

Esa noche, en casa de Figueroa, se reúnen los ministros y los dirigentes de la Concertación. Todos parecen de acuerdo en que es conveniente destacar la conducta institucional que ha mostrado el Ejército. Sólo Jorge Schaulsohn se desmarca opinando que todo pudo ser una maniobra de Garín.

Pero en el mando militar las silenciosas conclusiones son muy diferentes. El episodio ha demostrado que Contreras no está realmente dispuesto a un enfrentamiento: la hipótesis de que se hará matar resistiendo la detención queda a partir de ahora completamente debilitada.

Tampoco parece deseoso de atrincherarse en un cuartel; si aceptó salir del Sangra, será porque en verdad no quiere precipitar una situación más grave.

El momento sicológico parece apropiado para iniciar la operación sustantiva.

El lunes 12, los diarios amanecen poblados de declaraciones de dirigentes que muestran su satisfacción por la resolución de la crisis. El senador designado Santiago Sinclair esparce un secreto revuelo por la Concertación cuando confidencia a algunos de sus colegas que el Ejército no quiere que Contreras vaya a la cárcel de Punta Peuco.

Pero esa tarde, silenciosamente aterriza en Osorno el brigadier general Víctor Lizárraga, jefe del Comité Asesor, encargado por Garín para coordinar el dispositivo que sacará a Contreras del fundo de Huempeleo. Como Videla, Lizárraga, también del arma de Ingenieros, es uno de los escasos generales que conocen a Contreras desde que eran oficiales jóvenes. El ex jefe de la DINA lo llama con el apodo familiar de *Vitoco* y se precia de que haya sido alumno suyo.

Pero ahora la primera misión de Lizárraga es altamente sensitiva: convencer al general (R) de que su salud pone en peligro su vida. En el clima de tensión que está viviendo los riesgos son tan altos, que lo razonable es que se ponga bajo tratamiento clínico en un centro de las Fuerzas Armadas. El Hospital de Talcahuano está listo para recibirlo, mi general. Pero hay que partir cuanto antes.

Esa noche los amigos civiles, los ex alcaldes Kauak y King, el empresario de transportes Guido Gimpel y el agricultor Eduardo Hechleitner, se integran con entusiasmo a la operación militar, que se inicia a las 2.20 del martes 13 de junio, cuando tres jeeps militares ingresan a Viejo Roble.

Una hora después, dos de esos jeeps escoltan al auto en que Nélida Gutiérrez y las hijas del general (R) se dirigen al Regimiento Sangra. El tercero sale junto a autos y camionetas civiles rumbo a Osorno, donde cada vehículo toma una dirección distinta. En una de las camionetas civiles, Contreras entra al Regimiento Arauco.

Mientras en el aeropuerto de la ciudad se moviliza un avión Citation con un pasajero bajo y robusto, un helicóptero despega desde el Regimiento Arauco. El Citation aterriza un par de horas más tarde en el aeropuerto de Cerrillos, en Santiago, en tanto que el helicóptero entra en la base naval de Talcahuano. Allí desciende Contreras, que se dirige hacia el pensionado del Hospital Naval.

A esa hora estalla en Santiago la noticia de que el general (R) ha salido del Viejo Roble con rumbo desconocido. La prensa desconoce ahora su paradero y cuando interroga al ministro del Interior, que asiste a un seminario, éste se declara sorprendido:

—Tenemos informaciones contradictorias —dice, y agrega que espera comunicarse con el ministro de Defensa.

Horas después, el Ejército explicará que Contreras debió ser llevado al Hospital Naval de Talcahuano porque sufrió una crisis de salud mientras viajaba hacia Santiago.

En el intertanto, la Concertación y la oposición se agitan en un precipitado debate sobre la necesidad de dar la "solución final" a los casos de derechos humanos. En el Congreso, el senador DC Adolfo Zaldívar pronuncia un discurso apasionado proponiendo que la ley de amnistía sea aplicada por los jueces "conforme a su esencia", que consistiría en extinguir los procesos sin identificar responsables.

Una especie de crisis nerviosa parece extenderse por todo el sistema político.

Pero esa misma tarde Pérez Yoma admite, en una reunión ministerial en casa del Presidente, que conocía la operación de antemano, que la dejó en manos del vicecomandante Garín sin enterarse de los detalles y que es la mejor solución para el gobierno.

—¡Y nosotros haciendo el ridículo! —se exalta Figueroa.

—¡No tengo por qué informarte de todo! —replica Pérez Yoma—. ¡Sé lo que hago, y lo asumo!

—Se te olvida que soy el ministro del Interior. ¡No soy un huevón que va pasando!

—¡Me da lo mismo lo que seas!

—Carlos tiene razón, Edmundo —tercia Genaro Arriagada—. Carlos siempre ha informado de todo, y...

—¡Eso es mentira! ¡No te metas tú en esto!

—¡Mira, huevón, porque está el Presidente no te respondo como te mereces! —se agita Arriagada.

El altercado se prolonga sin solución. El ministro de Defensa defiende el éxito de su decisión y los demás ministros lo acusan de actuar sin la lealtad de equipo necesaria en un momento altamente sensible.

El resultado es menos notorio en ese momento que en el largo plazo: la confianza mutua del gabinete queda quebrantada para siempre.

Contreras ingresa al Hospital de Talcahuano al borde de un shock. Sus numerosas dolencias se han agudizado con la tensión de las últimas horas, y uno de los médicos que lo recibe se sorprende de que haya podido resistir el alza desproporcionada de glicemia con que se interna.

Pero la credibilidad de Pérez Yoma ha quedado tan deteriorada, que cuando informa sobre esto en el comité político recibe miradas escépticas. Y la desconfianza se agudiza cuando advierte que el general Pinochet le ha dicho que el Ejército objeta Punta Peuco por sus débiles condiciones de seguridad y no acepta que su ex jefe de Inteligencia quede bajo la custodia de Gendarmería[8].

Por las mismas razones que tenemos nosotros, le ha dicho el general, ningún jefe de organismo de seguridad está preso en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Europa Oriental tras el colapso soviético. ¿Y además quieren que lo vigilen los gendarmes? No, señor: ese hombre sabe demasiado sobre la defensa de la nación: una dosis de Pentotal sódico bastaría para sacarle secretos muy peligrosos. Nadie se puede acercar a él. La cabeza de Contreras, ministro, es nuestra. No se la vamos a entregar a Gendarmería.

Pero entonces interviene la ministra Soledad Alvear, que habla con el Presidente. El gobierno hará el ridículo si los condenados no entran a Punta Peuco: la cárcel se ha estado construyendo en tiempo récord, los militares conocieron sus planos y aprobaron sus sistemas de seguridad, todo este alegato nuevo es un pretexto para no cumplir. El gobierno no lo puede aceptar. Persuadido, el Presidente toma públicamente el compromiso de que el Ejecutivo "no negociará el lugar de detención de Contreras".

En cuanto a la tuición de Gendarmería, dice la ministra, la ley es perentoria y excluyente: a nadie más corresponde la responsabilidad de los penales.

El viernes 16, Pérez Yoma y Figueroa se reúnen con los dirigentes de la Concertación para explicarles el difícil momento que atraviesan y pedirles prudencia y apoyo. Pero los jefes políticos están inquietos: desearían señales más claras del gobierno. Tal vez si el Presidente cita a Pinochet...

Pérez Yoma extrema sus esfuerzos explicando que no se trata de eso, que el Ejército va a acatar el fallo, que hay que dejarle el espacio para que lo haga. Y para confirmarlo, dice que ya tiene el compromiso de que el brigadier Espinoza será entregado a la justicia el lunes 19. Los dirigentes salen de La Moneda escépticos, pero dispuestos a cumplir la petición.

Esa tarde, el ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, asiste al consejo general del PPD. Lagos cree hace ya tiempo, desde el episodio de la construcción de la cárcel especial, que el ministro de Defensa está promoviendo demasiadas concesiones en favor de los militares. Alguna vez ha oído que Pérez Yoma hubiese aceptado de buena gana que Contreras y Espinoza recibiesen condenas más bajas y no tuviesen que entrar a un presidio. Ha presenciado, como todos, el oscuro incidente del traslado a Talcahuano y ahora conoce los intentos para que Gendarmería no tenga la tuición.

Por eso, en el consejo del PPD se muestra crítico de la conducta del gobierno y expone lo que le parece una sucesión de debilidades que perjudican a toda la Concertación. Pero no puede

dejar de notar la reticencia de los líderes del PPD: ¿desconfían de su postura? Lagos se siente solo. Pero eso no lo detiene para ensayar, ante los periodistas, un sarcasmo sobre los dos militares condenados:

—Si con motivo de una orden de detención sufren todas estas tensiones que los obligan a hospitalizarse, ¿qué sería en una guerra de veras?

En el Ejército hay estallidos de ira. "Nos acusa de cobardes", se quejan los generales ante Garín y Pinochet. "¿No vamos a hacer nada, mi general?". El brigadier general Hernán Núñez, saliéndose de la línea pero sabiendo que interpreta a muchos camaradas, responde por la prensa que todas las afirmaciones que afectan a miembros del Ejército "son despreciables, groseras y ofensivas para la institución"[9].

El único que no parece nervioso ante los rumores de que los condenados no acatarán el fallo es, notablemente, el ministro Adolfo Bañados. Cada vez que se le ha preguntado por los desafíos de Contreras, ha respondido con judicial circunspección:

—Déjenlo. Se tiene que acostumbrar.

Para nadie es fácil aceptar la idea de ir preso; se requiere un proceso de resignación que no es simple, explica Bañados. Cada nuevo día y cada nuevo hecho significa un paso para quebrar la resistencia.

Como parte de esa estrategia, Bañados se propone notificar primero el "cúmplase" al brigadier Pedro Espinoza. Después de eso, Contreras será más fácil.

El brigadier Espinoza no está propiamente enfermo, pero sí bajo un fuerte estrés. En el Comando de Telecomunicaciones, donde permanece, los oficiales reportan un cambiante estado de ánimo: a veces el brigadier se indigna y declara que quiere partir rápido a Punta Peuco, para ir acortando la sentencia; horas después afirma que no acepta cumplir ninguna pena. A ratos culpabiliza a Contreras de todo lo que le ocurre; en otros protesta contra el Ejército que no se muestra firme.

Pero lo que inquieta al vicecomandante Garín no es esto, sino el hecho de que los dos hijos del brigadier son capitanes y suelen visitarlo junto con otros compañeros de promoción.

A diferencia de Contreras, Espinoza está en servicio activo, y ello supone que antes de entregarlo a la justicia debe ser dado de baja, un paso que, sin la ferocidad de una degradación, puede resultar humillante y traumático. El sábado 17, el subsecretario Burgos comienza a llamar al vicecomandante para que el trámite se cumpla cuanto antes. Como lo nota dubitativo, le advierte que el ministro esperará sólo 48 horas más.

La demora tiene una explicación interna. El general Pinochet no quiere crear en las filas la impresión de que acepta esta obligación con facilidad; pero la propia conducta errática del brigadier parece empujar la decisión.

El domingo 18, Rodrigo Eitel, un joven dirigente de RN, sale del Comando de Telecomunicaciones y lee un comunicado en el que el brigadier Espinoza afirma que no irá a Punta Peuco y que cumplirá la sentencia en la unidad donde permanece.

Al día siguiente el ministro Pérez Yoma llama al vicecomandante Garín, exigiendo que se curse la baja del brigadier. Pero Garín todavía se muestra dudoso: no puede garantizar que el procedimiento se cumpla en el día. Sí, es la idea, Edmundo, pero no sé si se pueda hacer así de rápido...

Para entonces, Burgos ha completado un minucioso estudio de la situación jurídica del brigadier. Y ha descubierto que la activación de un oficial retirado se realiza por decreto supremo. Otro decreto puede desactivarlo. Cuando el documento está redactado, en la tarde, Burgos se comunica con Garín:

—No hay más tiempo, Guillermo.

—Pero...

—Nada. Ya está desactivado. Se cursó el decreto.

—Puede quedar la escoba.

—Lo lamento. En eso no puedo hacer nada.

A las 19, Investigaciones entrega la notificación del "cúmplase" al brigadier general Carlos Krumm, que como jefe de la Guarnición de Santiago es aún el superior jerárquico de Espinoza.

En Telecomunicaciones, Espinoza recibe con indignación la noticia de que su baja ha sido cursada. Cree que lo ha hecho el Ejército, y se siente abandonado. Cuando los periodistas lo requieren desde las puertas del Comando, se acerca y se cuadra:

—En este momento —dice— se demuele lo que fue la historia militar tradicional de nuestro Ejército.

A la 1.30, ya sin uniforme, sale en un auto rumbo a Punta Peuco.

En el Hospital Naval de Talcahuano cunde la pesadumbre. Quien tiene razón es Bañados: Contreras se está acostumbrando.

Notas

1. Detalles del trabajo de la DINA y la relación de Contreras con sus hombres pueden hallarse en: Salazar, Manuel: *Contreras. Historia de un intocable*. Editorial Grijalbo. Santiago. 1995.

2. En el caso de Carlos Contreras Maluje, en 1977.

3. Otros detalles sobre las actividades de Contreras: *El último round*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.259, 27 de mayo de 1995.

4. Ver Capítulo 13.

5. A diferencia de otras ocasiones en que el general Pinochet se refirió a otros países, el gobierno chileno no tomó esta vez ninguna iniciativa de amonestación. Pese a que el canciller Guido di Tella declaró que Argentina "no comenta las palabras de Pinochet y espera que éste haga lo mismo". La Moneda guardó un silencio atribuido a la necesidad de no añadir nuevas tensiones a las de ese momento.

6. *Texto completo de la sentencia*. Separata del diario *La Epoca*, 31 de mayo de 1995. Reacciones y declaraciones de Contreras: *Suprema: A la cárcel Contreras y Espinoza*. Especial del diario *La Tercera*. 31 de mayo de 1995.

7. *El gobierno hará cumplir fallo condenatorio*. Diario *La Epoca*. 1º de junio de 1995.

8. El general hizo públicas algunas de estas aprensiones en una entrevista: Rojas, Raúl: *Pinochet: "Proceso fue injusto"*. Diario *La Tercera*. 15 de junio de 1995.

9. Como coronel y director de Organizaciones Civiles, Núñez fue también uno de los oficiales que reaccionaron con mayor virulencia ante el emplazamiento de Lagos a Pinochet por televisión, antes del plebiscito de 1988. Dávila, Lucy: *Los otros protagonistas*. Revista *Hoy*, Nº 936, 26 de junio al 2 de julio de 1995.

28

El picnic de la Segunda División

El ex ministro Francisco Javier Cuadra se enfrenta al establishment político con su denuncia sobre drogas en el Parlamento. En paralelo, los oficiales de Santiago se reúnen ante la cárcel de Punta Peuco: es el tercer movimiento por el caso de los cheques. Sólo que ahora parece otra cosa.

A mediados de 1994, Francisco Javier Cuadra divisa a la diputada Evelyn Matthei en una tienda de discos. Aún no se cumplen dos años desde el traumático episodio del espionaje telefónico y la diputada conserva vivas las imágenes de aquellos días; por eso es poco gentil cuando el ex ministro la saluda; no puede olvidar que Cuadra estuvo junto al senador Sebastián Piñera, que lo acompañó en su casa la noche del escándalo y que fue especialmente duro con ella en días posteriores.

¿Incita esta hostilidad al orgulloso espíritu inquisitivo de Cuadra? Tal vez. Por algo el ex ministro le comenta a su amigo Mario Lübbert, compañero de colegio y ahora publicista, que el potencial de la diputada mejoraría si agregara, a su bien dotado bagaje económico, una cultura política más sólida. Transmitido por Lübbert, que la ha asesorado en sus dos exitosas campañas electorales, ese comentario sí toca a Evelyn Matthei. Cuando decide llamarlo, ya percibe que Cuadra puede ayudarla. Y así es: en el primer encuentro a solas, acuerdan que el ex ministro le propondrá un plan de lectura guiada de los clásicos de la filosofía política.

Para diciembre del 94 ya han completado varias sesiones quincenales en torno a los griegos. En una de ellas, Evelyn Matthei divisa en el escritorio de Cuadra un cuaderno con apuntes de letra minúscula, ordenados por tintas de distintos colores. "Es una entrevista para *Qué Pasa*", explica Cuadra. "Una especie de balance del 94 y agenda para el 95".

Pero la entrevista no aparece antes del fin del año. El director de la revista, Cristián Bofill, opta por otros temas y le propone a Cuadra centrarse en uno de los aspectos de su análisis prospectivo: droga y clase dirigente. A Evelyn Matthei le entusiasma la idea; según ha oído, en los círculos políticos se consume cocaína; se le dijo eso, por ejemplo, en los agrios días del 92, de quienes pasaron de amigos a enconados enemigos políticos. Qué buen ejemplo.

Cuadra le cuenta que un par de meses antes (el 17 de octubre de 1994) ha cenado en casa de Lenin Guardia, socialista y asesor del subsecretario del Interior en temas de seguridad, con el senador Ricardo Núñez y el jefe de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Cruz, y Núñez ha confirmado versiones que ya conocía sobre parlamentarios[1].

La entrevista aparece en la edición que comienza a circular el viernes 13 de enero de 1995, con un título bombástico: "*Algunos parlamentarios consumen drogas*"[2]. Esa misma mañana, Cuadra se comunica con el diputado de RN Alberto Cardemil, que se halla en Curicó, y le

informa en términos genéricos del contenido de sus palabras. Luego, al mediodía, parte a Concepción, donde debe dictar una conferencia junto al diputado socialista José Antonio Viera-Gallo.

Al almuerzo, Cuadra se entera de que el ministro del Interior lo ha estado tratando de ubicar. A la misma hora en Santiago, a la salida de un almuerzo de mujeres parlamentarias en La Moneda, Evelyn Matthei declara que las afirmaciones de Cuadra son importantes.

El ex ministro recién logra comunicarse con Carlos Figueroa cuando ha regresado a su casa de Santiago, en la noche. Y lo que éste le dice es que el ambiente político está conmocionado por sus afirmaciones, algo que Cuadra ya ha deducido por la lista de llamados que lo espera. Uno de ellos es del senador Núñez. El ex ministro se anticipa a suponer la preocupación del senador y le pide a su amigo Lenin Guardia que lo visite para darle seguridades de que no entregará nombre alguno.

Guardia cumple el encargo al día siguiente. Pero cuando lo hace, Núñez está en su casa con el subsecretario de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, un hombre que no aprecia al mensajero ni a su jefe dentro del gobierno, Belisario Velasco. Esa noche, Schilling declara en Concepción, a donde asiste a un recital de Luciano Pavarotti, que Cuadra podría ser requerido por ley de seguridad del Estado[3].

Es la primera señal de la sombra que se cierne sobre él.

El lunes 16 el mundo político parece atrapado en una enorme confusión. Mientras Cuadra distribuye minutas explicando que sólo se trató de un análisis político, entre los parlamentarios se expande la idea de que el ex ministro ha puesto una carga explosiva en la imagen del Legislativo.

En el gobierno, todavía ofuscado porque el Tribunal Constitucional le rechazó la facultad de romper el secreto bancario en su nueva ley de drogas, hay quienes piensan que los dichos de Cuadra contribuyen a su campaña antidelictiva.

La confusión es aún mayor en Renovación Nacional; y parece generalizarse cuando un grupo de sus dirigentes se retira de la reunión de la comisión política para concurrir a un *test* de orina organizado por el diario *La Tercera*[4].

El martes 17 sesionan las cámaras del Congreso para decidir qué hacer. En la tarde, Ricardo Núñez, que está de presidente subrogante del Senado, llama a Cuadra desde la testera y le informa que probablemente se le emplazará para que dé los nombres. ¿Qué hará en ese caso?

—No los daré —dice Cuadra—. Tú lo sabes mejor que nadie.

Al anochecer, el presidente de RN, Andrés Allamand, hace esfuerzos por evitar que su bancada de diputados se pliegue a la acusación que quiere formular la Cámara: después de todo, Cuadra ha sido su asesor directo, milita en RN por su iniciativa ("Si tenemos a lo peor del pinochetismo, ¿por qué no tener a lo mejor?", ha argumentado Allamand ante quienes opinaban que era una mala imagen para el partido) y lo conoce desde los años lejanos del Partido Nacional.

Pero la contención no es fácil: el ambiente de la Cámara está cargado de emocionalidad y muchos diputados creen que si Cuadra no recibe un castigo ejemplar, las acusaciones contra los congresistas se multiplicarán.

Entonces Alberto Espina propone a Allamand regresar a Santiago y hablar con Cuadra para conocer su disposición. Los acompañan el diputado Alberto Cardemil y el abogado Ricardo Rivadeneira. Pero la reunión no arroja resultado alguno: Cuadra sostiene a rajatabla su negativa a dar nombres, y con mayor razón desde que en los últimos días él y su familia han recibido amenazas de muerte y hasta ha debido pedir protección policial al ministro del Interior.

Mientras Espina se exalta y alterna los gritos con la persuasión amistosa, Allamand se repliega a observar. ¿Está midiendo lo que ocurre? ¿Ha comenzado a sospechar que los blancos pueden ser los mismos que están en ese living? Hasta entonces, en RN ha predominado la hipótesis de que todo podría ser una "cortina de humo" para cubrir el impacto público del juicio contra el general (R) Manuel Contreras; no hay en el partido quien desconozca que Cuadra sigue

siendo un favorito del general Pinochet y que para él realizó todas sus operaciones distractivas —legendarias o no— cuando era ministro. Nadie conoce aún su nueva relación con Evelyn Matthei. Y nadie ha dado importancia al hecho de que el mismo día, en su segunda defensa de Cuadra ("Esto no es una canallada. Canallada es lo que me hicieron a mí hace dos años"), la diputada ha establecido por primera vez un nexo entre los sucesos del 92 y los de ahora. De ser así...

—No —dice Allamand, incorporándose bruscamente—, este huevón no va a decir nada. Vámonos.

Esa noche la bancada de RN se suma al emplazamiento que vota la Cámara: 72 horas para que Cuadra entregue nombres. El presidente, Vicente Sota, llama al ex ministro para notificarlo. Cuadra reitera que no lo hará.

—Eso nos deja en la situación de requerirlo por ley de seguridad del Estado —dice Sota.

—Lo sé, presidente —dice Cuadra—. Y usted sabrá que si lo hacen voy a ir preso.

—No, Francisco Javier —dice Sota—, no exagere. Los que pasamos por la cárcel bajo la dictadura de la que usted fue ministro no le deseamos eso ni a usted ni a nadie.

El viernes 20 presentan los requerimientos el Senado, la Cámara y los parlamentarios de RN. Ese día Cuadra renuncia al partido.

Un día antes, el diputado Pablo Longueira ve caer en el vacío su propuesta de que la Comisión de Régimen Interno de la Cámara investigue las denuncias de Cuadra. Aunque la UDI ha sido una consistente adversaria de Cuadra y Jovino Novoa ha tratado de que el partido no se involucre en lo que ya se perfila como una lucha interna de sus aliados, Longueira tiene razones nuevas: la convicción de Evelyn Matthei.

Y Longueira retoma sus esfuerzos en cuanto el Congreso inicia su nuevo año, en marzo de 1995. Ese verano ha sido un hervidero de rumores acerca de los parlamentarios consumidores. Los nombres incluyen a varios de los líderes más energéticos del PPD, el PS y la DC, pero sobre todo a los miembros de La Patrulla Juvenil de RN.

La propuesta de Longueira es sustituida por dos acuerdos: tratar el problema en una sesión especial y formalizar una renuncia al fuero parlamentario en la investigación sobre drogas; pero este último es rechazado tras un insólito empate a 31 votos. Indignada por lo que ya le parece una verdadera conspiración, Evelyn Matthei termina de comprometerse en el caso:

—A mí no me cabe la menor duda —dice a los periodistas— de que hay diputados que consumen drogas[5].

El envolvimiento de la diputada confirma a los dirigentes de RN que los principales objetivos de las acusaciones son ellos. Cuando llega la sesión especial, el 22 de marzo, la expectación está concentrada en los jóvenes jefes de la derecha. Mientras la televisión transmite en directo la sesión, la versión de que Andrés Allamand hará una denuncia espectacular concentra la atención en el presidente de RN. El nuevo presidente de la Cámara, el socialista Jaime Estévez, enterado de que Allamand piensa denunciar a Lenin Guardia como informante de Cuadra, trata de persuadirlo de que no lo mencione hasta estar seguro. Pero Allamand no cede.

También lo llama el propio Guardia, que no logra sino dejar un mensaje con el diputado José Antonio Galilea. Esa llamada es decisiva: que Guardia conozca su discurso con antelación le parece a Allamand una confirmación del oscuro papel del militante socialista. Y durante su alocución, que recibe tres ovaciones de sus colegas y de las tribunas, lanza el nombre de Guardia y hasta lo sindica como un hombre vinculado a la CNI[6].

El efecto es devastador. Esa tarde la Cámara oficia a Interior para que confirme si Guardia es colaborador suyo y el subsecretario Velasco debe reconocerlo unos días después como informante. El senador Núñez declara que Guardia debe ser investigado como parte de "una suerte de red para conocer la vida íntima y personal" de los políticos, en una inequívoca alusión a su cercanía con Velasco y con el director de Seguridad, Isidro Solís. Poco después, Guardia será acusado ante el tribunal supremo del PS.

El proceso contra Cuadra queda en manos del ministro de la Corte de Apelaciones Rafael Huerta, bajo el rótulo de difamación, injurias y calumnias según la letra b) del artículo 62 de la ley de seguridad del Estado. Esta disposición permite sancionar a quien ofenda a una dignidad del Estado, independientemente de que lo que diga sea verdad. La *exceptio veritatis* propia de los delitos de opinión no existe, por lo que constituye la norma más atentatoria contra la libertad de expresión de cuantas subsisten en la legislación de la transición.

Sin embargo, ello no impide que el ministro Huerta insista, desde sus primeros interrogatorios, en que Cuadra pruebe sus dichos entregando nombres. Cuadra resiste porfiadamente, pero hacia abril el abogado que lo defiende en forma oficial, Alberto Ríos, y el que lo asesora en privado, Pablo Rodríguez, divisan el peligro de que Huerta lo encargue reo y le proponen entregar antecedentes para ampararse en la *exceptio veritatis*.

Ambos abogados asesoran también a Evelyn Matthei, que ha recibido algunos datos y puede proporcionarlos a Cuadra.

Hay algo más importante: el bárbaro daño inferido por Allamand a Lenin Guardia ha facilitado los contactos del tándem Cuadra-Matthei con el subsecretario Velasco. La diputada lleva los encuentros, y a comienzos de mayo tiene una gran noticia para su amigo: si Cuadra proporciona algunos datos al ministro en visita, el gobierno facilitaría la obtención de otros.

Una condición es necesaria: que el ministro Huerta dicte una orden amplia a Investigaciones, específicamente dirigida a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, que es la que da más confianza al subsecretario y al director de la policía civil, Nelson Mery.

El 11 de mayo, Cuadra plantea su propuesta al juez, que la acepta. El ex ministro cita entonces a un grupo de testigos que habrían oído de terceros versiones sobre el consumo de cocaína por cuatro parlamentarios de RN: los diputados Andrés Allamand, Alberto Espina y René Manuel García y el senador Ignacio Pérez Walker.

Todos los testigos tienen su origen en Evelyn Matthei y dependen de relatos ajenos.

Un hermano de la diputada, Víctor Matthei, dice haber oído a uno de los dueños de la discoteca Gente, Luis Undurraga, que Allamand, Espina y el diputado del PPD Jorge Schaulsohn son consumidores; sin embargo, Undurraga lo niega.

Luis Contreras, ex jefe territorial del comando de Evelyn Matthei en San Antonio, se respalda en versiones de Carlos Gary y su pareja, Lorena Díaz, para envolver a Espina y Pérez Walker; Gary, que fue expulsado del comando de Pérez Walker acusado de robo, se niega a hablar, y Lorena Díaz denuncia a otros dos diputados de RN, pero no a los mencionados por Cuadra.

Francisco Eguiguren, hijo de uno de los jefes de la campaña fallida de Evelyn Matthei en el 92, Gonzalo Eguiguren, cita al concejal de RN Felipe Palacios; pero éste lo desmiente ante el juez.

Otros testigos —Patricia Stern, ex miembro del comando de Allamand; Jaime Barros, ex socio de Allamand; Noel Echeñique, ex esposa del anterior; y Felipe del Villar, concejal de Vitacura— niegan haber visto consumir drogas al presidente de RN[7].

Mientras se desploma su estructura de testigos y subtestigos[8], Cuadra oye que en la orden expedida por el ministro Huerta falta un elemento: la autorización para interceptar teléfonos. La presencia de parlamentarios habría inhibido la entrega de esa facultad, sin la cual la policía civil se siente desarmada.

A comienzos de junio Allamand recibe la confirmación de que ha sido acusado por Cuadra y que varios testigos han desfilado ya frente a Huerta. El lunes 5 se reúne con el ministro Figueroa y le reprocha en duros términos que no lo haya alertado.

—Es que no le di importancia, Andrés —dice Figueroa—. Pero no desconfíes de nosotros: sabís que te voy a proteger siempre.

El miércoles 14 de junio, Huerta encarga reo a Cuadra. Cuando lo informa, le da un beneficio momentáneo: lo dejará libre por ahora, dado que el jueves es el feriado de Corpus Christi y luego

viene el fin de semana. Sólo debe evitar mostrarse en lugares públicos. El domingo, Cuadra se reúne en casa de Guardia con los detectives que deberán detenerlo al día siguiente, para acordar cómo procederán cuando lleguen a su domicilio de calle La Serena.

El lunes 19 el ex ministro ingresa a la cárcel de Capuchinos. Horas más tarde, a mucha distancia, entra también a prisión el brigadier Pedro Espinoza.

Cuadra no pide la libertad bajo fianza: quiere que su caso sea un juicio público a la clase política. Pero tres semanas después, cuando sus recursos de amparo han caído, la solicita y la obtiene el 7 de julio.

(Apretado desenlace. Cuadra y Evelyn Matthei quedan convencidos de que, a través de Figueroa, el gobierno ha sellado una alianza con Allamand que luego se traduciría en la negociación sobre reformas constitucionales.

En diciembre de 1995, Evelyn Matthei recibe información sobre una red de tráfico de cocaína en el Congreso, sostenida por funcionarios. Sintiéndose sobreexpuesta, entrega los datos a Longueira, que presenta la denuncia al Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso. Seis meses más tarde el juez Roberto Contreras encarga reos a tres guardias, una ex secretaria, un auxiliar y un grupo de contactos externos que utilizaban autos de parlamentarios para ingresar la droga al edificio del Congreso. El juez intenta lograr el desafuero del diputado de RN Valentín Solís, a quien sospecha vinculado con uno de los guardias, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza la petición.

Cuadra y Evelyn Matthei se verán envueltos todavía en un nuevo escándalo a propósito de este proceso, cuando se revele que facilitaron medios a un ex preso, Danilo Gómez, al que Cuadra conoció en la cárcel, para una operación que culminó en un video falsificado tratando de envolver al diputado DC Juan Carlos Latorre en el consumo de cocaína.

En diciembre de 1995, el ministro Huerta condena a Cuadra a 540 días de presidio remitido. En enero de 1996, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones absuelve a Cuadra de los cargos. El Senado y la Cámara presentan recursos de queja. Y a pesar de que las respuestas de los ministros Carlos Cerda, Juan Guzmán y Gloria Olivares son verdaderos modelos de defensa de la libertad de crítica[9], la Corte Suprema confirma la sentencia inicial[10].

En RN queda la convicción de que su dirigencia fue objeto de una operación calculada para demolerla. Varios de los líderes principales creen que el origen último pudo una ser una maniobra militar, aunque carecen de elementos para demostrarlo.

Sólo el senador Pérez Walker obtiene un indicio casi un año después, cuando una amiga suya recibe una invitación a tomar té. En la velada se prodigan exquisiteces inusuales; hacia el anochecer temprano de agosto, el brigadier general Eugenio Covarrubias, jefe de la DINE, la aborda en una extensa conversación en la cual se muestra informado de que conoce a Pérez Walker y le pregunta si es cierto que el senador consume drogas.

Alertado, Pérez Walker se reúne con los senadores y ex generales Bruno Siebert y Santiago Sinclair y les dice que está siendo espiado por la DINE. Sinclair le propone que hable con Pinochet y, ante la rotunda negativa del senador, lo comunica por teléfono con el propio brigadier general Covarrubias:

—Cómo se le ocurre que lo vamos a estar espiando, senador —explica el jefe de la DINE—. Si nosotros somos de derecha...

Ese año Covarrubias pasará a retiro.)

Una semana después de que Cuadra sale de Capuchinos, el viernes 14 de julio de 1995, el abogado del Consejo de Defensa del Estado Eduardo Urrejola constata que el juez Jorge Colvin, titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, ha cerrado el sumario en el caso de la quiebra de Valmoval y la posterior venta de PSP al Ejército por parte del hijo

del comandante en jefe, Augusto Pinochet Hiriart. Urrejola está a cargo de seguir el proceso según la mecánica usual del Consejo: cuando se trata de causas importantes —por cuantía, gravedad o repercusión— se hace cargo un consejero titular.

Ese día, el presidente del Consejo, Luis Bates, debe partir a Londres para proseguir las investigaciones del caso Codelco, y pide a quien lo subroga, Davor Harasic, que ponga el tema en tabla para la sesión del martes 18.

Los doce consejeros inician el análisis del caso en la tarde. Deben decidir si a partir de ese momento el Consejo se margina del proceso, lo que significa que el juez puede emitir su veredicto sin contrapartes, o si, por el contrario, piden la encargatoria de reo de los implicados. Algunos han notado que el juez Colvin siguió una tramitación parsimoniosa cuando recibió el expediente de manos del juez Alejandro Solís, en julio de 1993, y la aceleró inesperadamente en el último tiempo, cuando el proceso a Contreras ha ocupado por completo a la prensa.

A nueve de los miembros del Consejo les parece que los antecedentes son demasiado expresivos y que permiten procesar por figuras de fraude a los vendedores reales y aparentes: Augusto Pinochet Hiriart, Eduardo LeRoy y Luis Valdivieso, y los encargados militares de la operación, los generales (R) Guillermo Letelier y Fernando Hormazábal y el brigadier (R) Luis Arangua. Sólo tres consejeros votan en contra, argumentando razones de estrategia jurídica, como es usual en esas sesiones.

El gobierno se entera de la decisión al día siguiente. Por acuerdo del mismo Consejo y por razones de deferencia, el presidente subrogante Davor Harasic informa al ministro Carlos Figueroa.

Pero Harasic teme que el Ejecutivo intente presionar para cambiar la opinión de los consejeros, por lo que instruye al abogado Urrejola que apure el escrito, que queda presentado a primera hora de la tarde ante el juez Colvin. Ese momento debe desatar una mecánica implacable: aunque todos estiman que Colvin no accederá a la petición de procesamiento, el Consejo no podrá quedarse ahora de brazos cruzados y deberá recurrir a la Corte de Apelaciones.

Si las investigaciones son profundizadas, la justicia llegará hasta la situación de SP, la empresa hija de PSP, cuyos libros han sido alterados para borrar la participación de Pinochet Hiriart. El hombre que aceptó hacerse cargo del problema, Eduardo LeRoy, resulta apenas visible para los acreedores que siguen buscando sus pagos[11].

Algunos de esos acreedores le han oído decir que está pagando lo que puede con sus propios bienes. Incluso el perito tributario que le fue recomendado por el Comité Asesor del Ejército, Juan Quiroz, lo ha demandado por sus honorarios. Peor todavía, LeRoy es buscado por Investigaciones y su esposa ha llegado a protestar ante el propio general Pinochet, visitándolo en su casa. No se sabe exactamente lo que hizo el general, pero las visitas de los policías cesaron por un tiempo después de eso.

Como se espera, el viernes 21 el juez Colvin rechaza la petición del Consejo de Defensa del Estado y se encamina a sobreseer el proceso. El presidente de la UDI, Jovino Novoa, califica de "absolutamente inoportuna" la acción del Consejo y el vicepresidente de RN, Alberto Espina, la estima "lamentable", recordando que la Cámara de Diputados no pudo establecer el verdadero papel de Pinochet Hiriart. Aunque es una curiosa manera de elevar la ineptitud a la condición de argumento de autoridad, el Consejo queda notificado: su apelación será todavía más criticada.

Pero los militares no se fían de las meras declaraciones.

El viernes 21, el brigadier general Eugenio Videla imparte a un coronel la instrucción de que la mayor cantidad posible de personal de la Segunda División —y en especial de las unidades de Santiago y alrededores— debe concurrir al día siguiente a las afueras de la cárcel de Punta Peuco, donde ya está recluido el brigadier (R) Espinoza y se espera la llegada del general (R) Contreras.

Videla no parece tener una gran opinión militar de su coronel, pero como organizador de estas operaciones, el hombre es un balazo. Ya le ha ayudado antes a armar una manifestación

de esposas de oficiales frente al edificio de las Fuerzas Armadas en otro momento en que el comandante en jefe atravesaba por momentos difíciles.

Ahora se trata exactamente de lo mismo: enviar una señal contundente para detener el caso de los cheques, convenientemente camuflada bajo la causa —que muchos suboficiales y oficiales comparten de corazón— de protestar por el encarcelamiento de los jefes de la DINA.

El brigadier general no actúa por iniciativa propia, desde luego. De hecho, hasta le proponen que no vaya, que no se exponga a ser visto. Pero si se van a reunir en Punta Peuco mayores, capitanes, tenientes coroneles, muchos comandantes de unidades de su Segunda División, no parece justo que el jefe se ausente.

Además, hasta puede ser peligroso. Los hombres irán de civil, pero muchos portarán sus armas de servicio. Se trata de mostrar la fuerza, no de usarla: la graduación es la clave. Si las arengas suben de tono, algunos se pueden entusiasmar e intentar algo contra la cárcel. ¿Qué podrían hacer unos cuantos gendarmes contra esos hombres inflamados?

La presencia del mando, aun disimulada, permitirá mantener el control. Y esas aprensiones se revelan justificadas en la tarde del sábado 22, cuando los militares dispersos por el campo ven salir a un gendarme con un perro que les ladra. Qué se ha creído ese huevón, ¿lo metemos para adentro, mi general? Calma, señores, nada de tonterías.

Alrededor de mil oficiales, suboficiales, clases y familiares comienzan a congregarse cerca de las puertas de la cárcel a partir del mediodía, en más de 300 vehículos. Muchos llevan almuerzos livianos y bebidas caseras. Es un auténtico picnic sabatino.

Pequeños mítines con consignas en contra de la prisión se alternan con las visitas que, en grupos de seis, realizan unos 30 militares al brigadier (R) Espinoza hasta poco después de las 16 horas. En ese momento, un oficial improvisa un asta en la que despliega una bandera chilena y, bajo la autorización de Videla, invita a cantar el *Himno Nacional*. Al emocionado coro siguen otros: *Los viejos estandartes*, el himno del Ejército, la antigua melodía alemana *Yo tenía un camarada*, la canción *Libre*.

Los asistentes murmuran sobre las ausencias. No han venido los Institutos Militares, los seis grandes Comandos tampoco se divisan, no está la muy importante Academia de Guerra. No es una manifestación con toda la contundencia que se desearía, pero de eso el mundo civil no tendrá ni idea.

Cuando la prensa, misteriosamente avisada, cumple su tarea de registro, una invisible cadena de órdenes disuelve el encuentro. Hay sólo un tropiezo: un periodista identifica entre los presentes al brigadier general Videla.

Claro que en el Ministerio de Defensa ya saben de qué se trata. La noche anterior, un alto oficial ha llamado al subsecretario Jorge Burgos y le ha informado de las instrucciones impartidas desde la Segunda División. Burgos ha avisado al ministro Edmundo Pérez Yoma y ambos han podido monitorear la situación desde la misma mañana del sábado.

El domingo, los ministros del comité político se reúnen en la casa de Pérez Yoma. Y es el anfitrión quien encabeza los reclamos contra la decisión del Consejo de Defensa del Estado, que, dice, ha venido a poner la guinda en la torta de tensiones que el gobierno vive con el Ejército. Pérez Yoma ha debido suspender su viaje a la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se realiza en Williamsburg, un momento importante para la política hemisférica.

El lunes, Figueroa convoca a Davor Harasic a una reunión con el Presidente en La Moneda. Pero no es el ministro quien da los argumentos, sino el propio Frei: el Consejo no debe apelar de la resolución del juez Colvin porque la situación del país es muy tensa. El abogado defiende sus argumentos jurídicos, pero admite que sólo el Jefe del Estado puede calibrar los peligros para la nación. Y éste los describe con una expresión temible:

—Lo que está en juego es el estado de derecho.

Harasic se compromete a transmitir la inquietud del gobernante a cada uno de los consejeros. En eso pasa el resto del día y parte de la mañana del martes. Hasta que, ya cerca del mediodía, llama nuevamente a Figueroa y ofrece un compromiso: él mismo votará en contra de la apelación

si el Consejo puede hacer público que se trató de una decisión del Presidente. El ministro queda de consultar.

Después del almuerzo, Figueroa devuelve el llamado: el Presidente no sólo acepta que se mencione su petición, sino que desea que ello se haga en forma expresa. Poco después sesiona el Consejo: 10 votos se inclinan a acoger la petición de Frei. Sólo los consejeros Eduardo Urrejola y Gonzalo Vial sufragan en contra.

Ese día Pérez Yoma recibe en la torre del Diego Portales al general Pinochet, donde le informa de la solicitud del Presidente al Consejo de Defensa del Estado. El general parece pasar por alto la alusión y plantea otros tres temas: la preocupación de los oficiales por los procesos de derechos humanos que continúan abiertos, la aspiración de que Contreras finalmente no entre a la cárcel y el temor de que el reajuste de remuneraciones acordado para iniciarse en 1996 sea frenado en el Ejecutivo.

Un comunicado posterior del Ministerio afirma luego que el general fue citado y que ordenará una investigación para aplicar las sanciones que corresponda por el picnic de Pinta Peuco. Al día siguiente el auditor Torres Silva anticipa que no cabe sanción alguna. Así será.

El jueves 27, Pinochet habla ante 1.400 oficiales de la Guarnición de Santiago en el auditorio de la Escuela Militar. Tras un extenso análisis del origen y la tarea del gobierno militar, subraya la necesidad de mantener la cohesión en torno a tres valores: la solidaridad, la camaradería y el espíritu de cuerpo.

Esa misma mañana el Presidente viaja a Lima. Antes de embarcarse entrega lo que parece una conclusión:

—La casa está ordenada.

Con eso se cierra la tercera crisis militar de la transición, que ha seguido el mismo molde de las anteriores: originándose en el caso de los cheques, ha obtenido resultados que ni el más pretencioso de los estrategas podría haber imaginado.

Notas

1. En el proceso posterior, este punto será objeto de una radical discrepancia entre los testigos. Cruz declarará que no recuerda nada. Cuadra asegurará que Núñez mencionó nombres. Y Núñez confirmará la cena, pero negará haber citado nombre alguno. Sin embargo, el juez no contrastará nunca estas versiones.

2. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.240, 14 de enero de 1995.

3. Con la importancia que tendrán a la luz de los hechos posteriores, estas declaraciones son impropias, puesto que al Ejecutivo no le compete requerir por una supuesta ofensa contra otro poder del Estado. El gobierno tomará un par de días en corregir la afirmación de Schilling y sentar una línea de prescindencia jurídica en el caso.

4. Diario *La Tercera*, 17 de junio de 1995.

5. Longueira vuelve a secundarla unos días más tarde, en una entrevista: Correa, Raquel: *"Mi convicción: Diputados usan drogas"*. Diario *El Mercurio*, Cuerpo D, 19 de marzo de 1995. Esas opiniones suscitarán durísimas réplicas del diputado de RN Arturo Longton. A su turno, Evelyn Matthei será emplazada por sus colegas, y ella mencionará al ex diputado del PS Vladislav Kuzmicic, quien supuestamente habría querido confesar su adicción. Kuzmicic la desmentirá tajantemente, en medio del aplauso de los parlamentarios.

6. Guardia había sido mencionado por primera vez en febrero como eventual informante de Cuadra en un reportaje: Giner, Claudia: *Radiografía de un operador político*. Revista *Cosas*, Nº 480, 14 de febrero de 1995.

7. Causa 5.675-95.

8. Algunos penalistas opinan que este planteamiento constituye una argucia judicial —una "pirámide de absoluciones"— para conseguir que las negaciones finales no sean de responsabilidad del declarante y no incurra éste, por tanto, en injuria ni calumnia. Dada la inexistencia de la *exceptio veritatis*, en todo caso, este plan habría fracasado incluso en el caso de obtener ratificaciones por parte de los testigos de segundo grado.

9. Estos textos serán importantes en la acusación contra el Estado de Chile, patrocinada por Human Rights Watch, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violentar la libertad de expresión en el caso Cuadra, un proceso que sigue en curso.

10. Fallo pronunciado por los ministros de la Segunda Sala Penal: Roberto Dávila, Adolfo Bañados y Luis Correa Bulo y los abogados integrantes Mario Verdugo y Vivian Bullemore.

11. Ver capítulos 7, 8 y 19.

29

Triste, solitario y final

Poner al general (R) Contreras en la cárcel es algo más difícil de lo que la ley sugiere. Por eso, el 20 de octubre de 1995 es una fecha que ni los funcionarios de Frei ni los mandos militares olvidarán por mucho tiempo. Esa tarde, un helicóptero...

Aunque sólo participa en los últimos cuatro meses de un proceso que en 1995 cumple 18 años, el abogado Julio Tapia Falk se reserva la actuación más destacada, con mucho, de entre quienes han defendido al general (R) Manuel Contreras en el caso Letelier.

En realidad, Tapia Falk debió ser un adversario de Contreras, si se tiene en cuenta que era el asesor más cercano de Gustavo Leigh, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, cuando el general Pinochet lo destituyó de la Junta, en 1978, entre otras cosas por inculpar al gobierno en el caso Letelier. Y aun antes, en los sombríos años de la "guerra sucia", Tapia Falk, a la sazón auditor de la FACh, pudo conocer en detalle los violentos roces que la DINA sostenía con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea[1].

Pero las circunstancias han sido caprichosas. En 1975, fue él mismo quien invitó a Contreras y al coronel Horacio Otayza, jefe del SIFA, a un almuerzo de avenimiento. Entonces se hizo amigo de Contreras y el propio general Leigh le sugirió que mantuviera ese vínculo, el único que la FACh tendría con el jefe del poderoso aparato de seguridad. Cuando vino la crisis de 1978, Contreras tuvo la deferencia de anticiparle la inminente defenestración de su jefe y hasta le advirtió que se cuidaran del general Fernando Matthei, que en efecto terminó ocupando el lugar de Leigh.

En 1991, cuando el ministro Adolfo Bañados se hizo cargo del caso Letelier, Contreras visitó a Tapia Falk en su casa y le pidió que fuese su defensor. Pero el abogado viajaba cuatro días después a Europa. Esa negativa resintió la vieja amistad: Contreras mostró su disgusto y Tapia Falk retuvo un incómodo sentimiento de culpa.

Pero en junio de 1995 la situación ha cambiado. Contreras está solo, enfermo y condenado, su permanencia en el Hospital Naval de Talcahuano es precaria y sus orgullosos desplantes lo tienen metido en la trampa de resistir su encarcelamiento mediante alguna situación de hecho.

Cuando el director del Hospital, el capitán de navío Claudio García, anuncia el 27 de junio que Contreras deberá ser operado, nadie cree en la abrupta mala salud del paciente. El ministro Bañados, también exasperado por la dilación, ordena que se le notifique al día siguiente el "cúmplase" y dos hombres de Gendarmería se constituyen en el Hospital para vigilar al que ya es un preso.

Aunque Contreras quiere rechazar esta vigilancia, quien insiste en que los gendarmes sean aceptados es Tapia Falk: con ellos, argumenta, ya se está cumpliendo la pena. Tapia tiene más

razón de la que cree. En las horas previas, la ministra Soledad Alvear ha obtenido del director del Hospital y de su superior, el contralmirante Jorge Balaresque, comandante de la Segunda Zona Naval, la garantía de que se facilitará el ingreso de los gendarmes. Tapia Falk le ha evitado a su amigo un potencial conflicto con los marinos.

El 2 de julio se publica en *El Mercurio* un artículo del profesor José Luis Cea que contiene una curiosa sugerencia: el número 7 del artículo 19 de la Constitución dice que nadie puede ser detenido "sino en su casa o en lugares públicos destinados a ese objeto". De esa redacción Cea infiere que es posible que un reo cumpla la pena... en su casa.

"Quien puede más, puede lo menos", piensa Tapia Falk. Aunque no haya precedentes de semejante interpretación, se puede dar la lucha en los tribunales intentando que la pena se cumpla en el Hospital Naval; si eso fracasa, todavía se puede tratar de que sea en la casa. Esa tarde llama a Contreras para decirle que lo visitará al día siguiente.

A pesar de la escasa fe pública, en verdad Contreras ha llegado al Hospital Naval al borde de un colapso. La hernia paracolostómica que soporta desde su operación de cáncer en 1985 ha sufrido un agudo deterioro y requiere cirugía. Su hipertensión y su diabetes mellitus están descontroladas y hasta es posible que se haya reanudado la metástasis cancerígena en el hígado o en los huesos.

Dado ese cuadro, dice Tapia Falk, lo que hay que garantizar es que el general (R) no salga del Hospital. Como Contreras carece de defensor en Concepción, la Tercera División de Ejército encarga a la abogada Inés Baherle que interponga el recurso de protección. Pero en el pleito se hace parte, entre otros, el Consejo de Defensa del Estado, lo que inhabilita a la funcionaria fiscal para proseguir.

Entonces Contreras le vuelve a pedir a su antiguo amigo que asuma la defensa.

—Puede ser un problema para ti —dice Tapia Falk—. Hay gente que no me quiere. El auditor Torres Silva...

—Me importa un comino. El que decide soy yo.

El abogado pone entonces dos condiciones: que la conducción del proceso quede enteramente en sus manos y que no haya pago por sus servicios[2]. Al aceptarlas, el general (R) entra definitivamente en un carril jurídico. Toda posibilidad de resistir la sentencia desaparece en ese instante.

En el gobierno, la dilación incrementa el nerviosismo ya latente. Pese a que la ministra Soledad Alvear ha obtenido del Presidente Frei el respaldo para asegurar que Contreras será recluido en la cárcel de Punta Peuco, el ministro Edmundo Pérez Yoma insiste en el gabinete que los militares no aceptarán que el general (R) quede en manos de Gendarmería. Si persiste la intransigencia en eso, dice, tal vez Contreras no vaya nunca preso. Además, el Ejército tiene en esto la solidaridad de las Fuerzas Armadas.

Hacia fines de junio, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, informa al ministro Carlos Figueroa que el almirante Jorge Martínez Busch le ha planteado una sugerencia: establecer un sistema de vigilancia compartida dentro de la cárcel especial, donde pueda participar personal militar; también han hablado con él el vicecomandante en jefe del Ejército, Guillermo Garín, y otros altos oficiales en retiro y en servicio. El diputado José Antonio Viera-Gallo recibe ideas similares de sus colegas de RN Luis Valentín Ferrada y Alberto Cardemil, ambos cercanos a los militares.

Pero la ministra de Justicia no cede. Gendarmería no puede renunciar a la facultad que le da la ley; de hacerlo, el estado de derecho se vería quebrantado.

En el interminable debate se cruza, a comienzos de julio, una propuesta de la oposición que aspira a vincular el encarcelamiento de Contreras con el fin de los casos de derechos humanos. Los presidentes de RN y la UDI, Andrés Allamand y Jovino Novoa, en una rara operación unida, presentan el 3 un *Acuerdo nacional por la paz y el futuro*, que propone tres cosas: establecer una interpretación "correcta" de la amnistía, esto es, que se aplique en cuanto se establezca el

delito; generar un mecanismo para que se entregue información sobre los detenidos desaparecidos; y agilizar los procesos pendientes.

La iniciativa es fuerte y Allamand y Novoa se preocupan de potenciarla en una sucesión de contactos con el cardenal Carlos Oviedo. Además, reciben un inesperado aliento del ministro Pérez Yoma, que la considera "interesante".

Esa afirmación expande la polémica por el gobierno. El miércoles 12 de julio, el equipo político se reúne con el Presidente Frei en Cerro Castillo. El debate enfrenta a Figueroa con Pérez Yoma. El primero cree que el gobierno no debe comprometerse en ninguna fórmula política para tratar estos temas, y darles un tratamiento estrictamente jurídico; el fracaso de la "ley Aylwin" ya demostró los límites del problema[3]. El segundo estima que el Ejecutivo debe tomar la iniciativa para dejar atrás los conflictos.

La posición de Figueroa tiene el apoyo de la ministra Soledad Alvear y del ministro José Joaquín Brunner. El Presidente se inclina por ella y Brunner puede anunciar que el gobierno no impulsará leyes especiales.

Diez días más tarde los oficiales de la Segunda División se reúnen en las afueras de Punta Peuco. El motivo son los cheques pagados al hijo del general Pinochet, pero la tensión da nuevo espacio a Pérez Yoma para reponer sus puntos de vista.

Cinco días después, el mismo Brunner debe admitir que el Ejecutivo estudia una "propuesta global" sobre derechos humanos.

En agosto la propuesta toma forma: junto al proyecto para resolver los casos pendientes se propondrán la modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y tres reformas constitucionales, para cambiar la composición del Tribunal Constitucional y del Consejo de Seguridad Nacional y eliminar a los senadores designados y vitalicios.

El debate del paquete reedita la discusión de Cerro Castillo, ahora en la casa del Presidente. Pero esta vez interviene el canciller José Miguel Insulza:

—El problema —dice— es que si no se define una posición clara frente a la ley de amnistía, estos casos van a seguir enredando siempre al gobierno.

—¡Eso! —se exalta Pérez Yoma— ¡Eso es exactamente el punto! Estoy totalmente de acuerdo con José Miguel, creo que ese es el asunto central. Y lo que yo quiero saber ahora —y marca con una pausa el sorpresivo giro que dará a sus palabras—, ahora y de una vez por todas, cuál es la posición de Brunner, porque siempre está poniendo obstáculos y problemas en estas cosas. El problema del gabinete, seamos claros, es Brunner.

La reunión deviene un infierno. Los ministros intercambian, más que argumentos, imputaciones y gritos. Aunque las tensiones han aparecido encabezadas por Figueroa y Pérez Yoma, amigos de antiguo, el titular de Defensa acaba de identificar cuál es su verdadero adversario.

Pese a la fractura del gabinete, la propuesta queda lista a mediados de agosto. El jueves 17, Figueroa invita a cenar a su casa a Allamand y Novoa. Junto con el ministro Genaro Arriagada detalla la propuesta, que a los jefes opositores no les parece demasiado viable en los términos en que está redactada. Sin embargo, dicen, se podría aprobar en el Congreso la idea de legislar, para mejorarla mediante indicaciones.

Pero en la mañana del viernes 18, Novoa llama a Figueroa:

—Carlos —dice—, vengo saliendo de la reunión de directiva de la UDI. Lo siento, me fue mal. Se ha rechazado el proyecto.

Ese día Allamand visita al Presidente; al salir declara: "Ayudaré a Frei". Novoa, en la sede de la UDI, afirma que la propuesta del gobierno "es una burla".

La oposición está de nuevo quebrada.

Hacia fines de julio, el abogado Tapia Falk se halla envuelto en una dura batalla judicial en la Corte de Apelaciones de Concepción, cuyo centro son los diagósticos contradictorios de dos equipos médicos: el Hospital Naval, que asegura que Contreras debe ser operado de la hernia paracolostómica y pasar su convalecencia en ese recinto; y el Servicio Médico Legal, cuyos especialistas aseguran que el tratamiento puede ser ambulatorio.

El tribunal se inclina por este último y rechaza el recurso de protección. Pero Tapia Falk tiene lista la apelación a la Corte Suprema, que vuelve a paralizar el traslado. Mientras la Corte debate en Santiago, el 18 de agosto el Hospital Naval decide operar a Contreras. Los profesionales del Instituto Médico Legal reciben de la ministra Alvear una instrucción concluyente: deben requerir de Contreras un documento firmado que autorice la operación y deben estar presentes como testigos en ella.

Para entonces, el Ejército ha comenzado a plantear, por la vía del auditor Torres Silva y ante su interlocutor preferente, el subsecretario Jorge Burgos, que el gobierno debe esperar a que los tribunales vean los recursos.

Además, la presión por la vigilancia del general (R) se ha intensificado y en Defensa circula la versión de que ese punto es ahora *casus belli*. No es una idea tan exacta: los militares han dicho que un jefe de inteligencia en manos ajenas rompe su doctrina, y han sugerido que tal cosa causaría un grave perjuicio interno; pero nunca han afirmado que no podrían aceptarlo; en algún momento, Pinochet le ha dicho a Pérez Yoma que un detalle como éste podría suscitar uno de esos "reventones" que tanto han temido.

Septiembre, como es usual, pone en crisis todos los esfuerzos para rebajar la tensión.

El primer golpe lo recibe RN, cuando el senador Francisco Prat declara que la directiva está "equivocada" al propiciar reformas constitucionales. El 4, una comisión de expertos integrada por Carlos Reymond, Ricardo Rivadeneira, Francisco Bulnes y Miguel Luis Amunátegui presenta ante la comisión política un informe favorable a las reformas. Pero Sergio Onofre Jarpa anuncia una segunda línea de resistencia: "No me han convencido".

48 horas después parece claro que el Ejército no piensa mantenerse pasivo ante la propuesta legislativa del gobierno y que está transmitiendo con énfasis su opinión a los senadores de RN que le son más afines. Ese día, en el almuerzo anual de homenaje a Pinochet del Rotary Club, el brigadier general Jorge Lagos, director de Operaciones, habla abiertamente contra la reforma a la ley orgánica de las FF.AA.

En las horas siguientes —las que rodean al 11 de septiembre—, Pinochet despacha una seguidilla de declaraciones que exasperan al mundo político. El clima es incendiario. En la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn plantea que el comandante en jefe puede haber incurrido en desacato al criticar una resolución judicial; como consecuencia, gana un empujón y unos manotazos del diputado de la UDI Iván Moreira.

Pero el día 11 le parece propicio al brigadier Pedro Espinoza, todavía morador único de la cárcel de Punta Peuco, para pedir el indulto al Presidente Frei. Su solicitud será rechazada nueve meses más tarde.

El 15, Pérez Yoma es recibido con aplausos en la Parada preparatoria. No es casual: por segundo año, el ministro se ha preocupado de repartir entradas a grupos especialmente preparados del PDC.

Sin embargo, el 19, cuando se realiza la Parada oficial, el Presidente sufre una potente rechifla de las tribunas. La indignación del gobierno no puede volcarse hacia el titular de Defensa, porque sería injusto; pero la fractura interna se está agrandando.

Y la multiplica el hecho de que Pérez Yoma plantee, como solución al problema de la custodia, que la cárcel especial salga de la jurisdicción de Gendarmería y pase al Ministerio de Defensa, como ocurre en otros países que tienen penales militares. La idea enoja a la ministra Alvear, que ya antes ha sospechado que Pérez Yoma convenció a Figueroa para tomar un compromiso favorable a las demandas militares. Por eso se apresura a advertir sobre la probable ruptura de la Concertación si la propuesta es aceptada.

Pero el efecto secundario no es menos importante: dado lo extremo de las opciones, al Ministerio de Justicia comienza a parecerle que el principio de la custodia mixta es el menos malo y que puede ser encuadrado dentro de la política de segregación carcelaria[4]. El acuerdo se alcanzará unos días después y la ministra delegará en su asesor José Antonio Gómez[5] la misión de coordinar los aspectos jurídicos con el abogado militar Hernán Novoa.

El 20, Pérez Yoma se reúne en su despacho con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y soporta duras recriminaciones de sus miembros, incluido el socialista Juan Pablo

Letelier, que hasta entonces ha sido uno de los más prudentes. Por primera vez se habla del fracaso de la política militar ensayada por el ministro.

Una semana más tarde, sintiéndose aislado en el gabinete aunque con el respaldo del Presidente, Pérez Yoma dice a los corresponsales extranjeros que, en efecto, su política ha fracasado.

Pero ese es sólo el primer paso de una operación de fuerza donde espera jugarse el todo por el todo. El segundo es citar al vicecomandante Garín y explicarle que su situación en el gobierno es muy compleja y que, si no recibe ayuda de los militares, tal vez no pueda continuar. Luego lo repite ante los jefes de la Armada y la FACh, Jorge Martínez Busch y Fernando Rojas Vender.

La noticia causa revuelo entre los militares. Ningún ministro nuevo podría mostrarse tan comprensivo con las Fuerzas Armadas como lo ha hecho Pérez Yoma, y menos en una situación crítica como la que se vive. El ministro debe ser defendido, al menos por ahora.

Esa noche, durante una cena ofrecida al Rey de Malasia Yang di Pertuan Agong, Pérez Yoma recibe el mensaje final: el acuerdo sobre la custodia mixta de Punta Peuco ha despejado los últimos reparos del Ejército.

Sin embargo, ese acuerdo significa también que Pérez Yoma pierde una parte de las decisiones dentro del gobierno: el Presidente ha decidido asignar "responsabilidades divididas" a él y a la ministra Alvear, que ahora está al mando de la operación de ingreso de Contreras al penal.

A fines de septiembre, Tapia Falk presenta el séptimo de la docena de recursos que interpondrá en su bravía defensa de Contreras; es el que activa la hipótesis de la condena cumplida en su casa, lo que significa que las alternativas se están agotando. El abogado sabe que exaspera a medio mundo; algunos de sus colegas hasta han cometido la imprudencia ética —puesto que es deber del abogado hacer todo lo posible por salvar a su cliente— de declarar que se quiere burlar del estado de derecho.

Pero ahora su pertinacia para luchar por la permanencia de Contreras en el Hospital Naval está debilitada por dentro.

El general (R) le ha dicho que se siente desesperado en su pequeña habitación de Talcahuano, con esos espacios que se repletan con un par de visitas y con esos gendarmes que le respiran en la cara. Además, la Armada ha insinuado ciertos problemas de costos y algunos marinos se muestran exasperados por la continua presencia de extraños —periodistas, militares, gendarmes, funcionarios civiles— en la base y sus alrededores.

El 1° de octubre, Pinochet parte en viaje a Malasia y Gran Bretaña, para supervigilar los proyectos militares que el Ejército tiene en ambos países. Aunque alguna prensa y muchos políticos especulan que el general quiere evitarse el espectáculo de Contreras entrando a la cárcel, es más bien al revés: cada año Pinochet escoge los fines de septiembre o comienzos de octubre, cuando el fin del "mes del Ejército" devuelve a las unidades a sus rutinas, para sus viajes largos. Esta vez desea estar al mando para cuando llegue el momento más crítico. Le han asegurado que ello demorará unas tres semanas.

El 4, la Tercera Sala (o Constitucional, según la reforma puesta en práctica ese año) de la Corte Suprema recibe tres informes médicos acerca del plazo en que Contreras estará en condiciones de ser trasladado: el primero, del Hospital Naval, dice que a partir del 15 de octubre; el segundo, del Instituto Médico Legal, propone el 10 de octubre; y el tercero, enviado voluntariamente por el médico tratante, Félix de Amesti, habla de unos 30 días. Al día siguiente los jueces dejan en acuerdo el fallo del recurso de Tapia Falk: sólo cabe esperar la redacción. Pero ya se sabe que será adverso a Contreras.

Esa semana, el subsecretario Burgos inicia una serie de reuniones con el jefe del Comité Asesor, el brigadier general Víctor Lizárraga, para acordar el procedimiento de traslado y las modalidades de la custodia mixta. Lizárraga ha recibido dos instrucciones de Garín: que el traslado sea efectuado por personal del Ejército, y que se evite por todos los medios las fotografías de la llegada de Contreras a la cárcel. No debe existir imagen alguna de un general entrando a prisión.

En cuanto a la custodia mixta, dos puertas prolongan las discusiones. En un caso se trata de fijar a partir de qué puerta interior se instala el personal militar: la que da acceso a las edificaciones, la que conduce a los pabellones destinados a militares o la que se abre a las habitaciones que ocuparán Contreras y Espinoza.

En el otro, Lizárraga se esfuerza por convencer a Burgos de que el general (R) necesitará una puerta especial para recibir visitas, con el fin de evitar el potencial asedio de la prensa. En cierto momento, Lizárraga llega a cambiar la puerta especial por un túnel y hasta ofrece que las faenas sean realizadas por el Cuerpo Militar del Trabajo para reducir el costo.

—Mira, Vitoco, dejémonos de huevadas —le dice Burgos, sin contener la risa—: yo puedo proponer el túnel, pero el ministro me va a decir que yo me quede adentro.

El subsecretario recibe instrucciones de acceder a las peticiones sobre el traslado, pero tiene que resolver un punto pendiente con Justicia: dado que Gendarmería está a cargo del preso, debe participar de esa operación. Aunque sea con un gendarme. ¿Uno solo? Bueno, uno. Sí, de alta graduación, cómo no.

El hombre de Gendarmería será el coronel Edmundo Letelier, jefe del Departamento de Seguridad, que ha seguido la situación hasta bordes temibles: una semana antes, el 29 de septiembre, Letelier ha recibido un llamado anónimo en el que se le ha dicho falsamente que su hija, internada en una clínica, ha sido secuestrada.

Al iniciarse octubre, Allamand tiene claro que vive un estado de rebelión en RN. La mayoría de sus senadores se opone a negociar reformas constitucionales con el gobierno y le consta que algunos de ellos reciben constante presión militar. Sólo lo alienta una reunión con uno de los asesores más cercanos de Pinochet, Sergio Rillón, cuyas opiniones no le han parecido completamente refractarias a las reformas.

En verdad, Allamand está embarcado en un proyecto que a los alcances institucionales suma ciertos cálculos personales. Por su plan sobrevuela una obsesión que ya cumple siete años: salir del esquema pinochetismo-antipinochetismo que a su juicio enclaustra a la política desde el plebiscito de 1988, cerrar la transición y aprovechar el impulso que el régimen militar le dio a la derecha. Lo respalda el mandato recibido al asumir por segunda vez la presidencia de RN, en 1994, para estudiar perfeccionamientos futuros a la institucionalidad.

Al proponerse como el hombre que "ayuda" al Presidente, sin embargo, apunta a algo más ambicioso: el protagonismo del verdadero fin de la transición. Si lo hace bien, puede dar a los militares la solución que necesitan para conservar su ente histórico, y al gobierno la legitimidad final de una democracia sin restricciones. En ese caso, será el héroe.

Y cuando lo sea, podrá ganar con tranquilidad un sillón en el Senado, el liderazgo indiscutido de la oposición y la candidatura presidencial de 1999. Es un disparo de alcance largo.

El 2 plantea un "compromiso de clausura" que implique que el gobierno no promoverá más reformas que las que se tramiten en esta ocasión. Pretende con ello desactivar el argumento más recurrido por sus críticos: que las reformas iniciarán el desmantelamiento de la Constitución. Tal vez no percibe que lo que esos críticos llaman "desmantelamiento" es justamente el cambio que esas reformas propician.

Una semana más tarde, en la reunión de la comisión política, ampliada con parlamentarios y notables, nota la fragilidad de su empeño. El partido está confundido, no parece capaz de adoptar una línea reformista. Y Jarpa se ha puesto en abierta resistencia:

—Usted, Andrés —le dice—, será el presidente, pero no puede pretender imponer esta decisión a través de una simple reunión de comisión política.

—Muy bien, don Sergio —replica Allamand, embalado—. ¿Qué le parece mejor? ¿El Consejo General?

El Consejo General está convocado para noviembre, en Temuco. Pero Allamand no está dispuesto a perder.

En cuanto la comisión política declara que el proyecto del gobierno es "inconveniente", prepara su estrategia: el Consejo General decidirá sobre una propuesta de la comisión política. No opinará sobre la base de arengas, sino sobre un texto ya preparado.

Quién iba a decir, quién podía imaginar, que el brigadier (R) Espinoza se iba a sumar a los muchos problemas con la cárcel de Punta Peuco. Pero así es: el 4 de octubre, Espinoza se declara en huelga de hambre en protesta contra la vigilancia mixta. Algunos dicen que se trata de una estrategia para poner distancia de Contreras; otros, que teme que sus libertades de movimiento y expresión sean restringidas; y unos terceros, que está fuera de control.

Un hecho es seguro: Espinoza no quiere seguir compartiendo el destino de su ex jefe en la DINA. Ahora, muchos años después, lo culpa de su infortunio; y le irrita que el Ejército muestre por el general (R) la preocupación que no tuvo por él. Uno fue traicionado para que el otro conservara la dignidad.

El 10 de octubre, la Tercera Sala de la Corte Suprema hace pública su decisión: Contreras puede ser trasladado a partir del 23 de octubre, o antes si los médicos del Hospital Naval lo autorizan.

En tanto en Santiago el abogado Tapia Falk moviliza nuevos recursos, en Talcahuano el alcaide segundo de Gendarmería Mario Reyes entrega a Contreras el oficio reservado 411, que lo notifica del lugar de reclusión. Al día siguiente el vicecomandante Garín entrega al Ministerio de Defensa la nómina de los 60 hombres del cuadro permanente que cumplirán los turnos de la custodia especial ("reforzamiento de la seguridad", para el Ministerio de Justicia) en Punta Peuco.

El martes 17, el director del Hospital Naval firma el alta de Contreras, según una decisión de la que el general y doctor Manuel Vittis, director de Sanidad del Ejército, ha mantenido informado al alto mando.

Mientras el alta recorre los conductos administrativos, el coronel Letelier se reúne con el capitán de navío Oscar Manzano, comandante de la base naval de Talcahuano, y con el brigadier general Raúl Carvajal, comandante de la Tercera División, para repasar el procedimiento de salida. En Santiago los preparativos circulan por escasas manos: el vicecomandante Garín, el almirante Martínez Busch, el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Juan Mackay, y los ministros Pérez Yoma y Alvear.

Ese mismo día, el brigadier general Lizárraga y el auditor Torres Silva visitan a Contreras y le describen la operación. El general (R) ya se ha resignado. Sólo una cosa le molesta: tiene miedo a los vuelos, y en especial a los helicópteros. Pero si el largo viaje garantiza la preservación de su dignidad de general...

Para entonces, Contreras no desea más que dejar el Hospital. Se le ha sugerido que estará en Punta Peuco unos meses, quizá seis, y luego quedará libre. Pero eso no lo ratifican Lizárraga ni Torres Silva; ambos han recibido de Garín la terminante orden de no tomar ningún compromiso; el estilo del ex jefe de la DINA torna extremadamente peligrosa cualquier palabra de más.

El 18, el trabajo duro recae sobre el brigadier general Carvajal, un hombre afable y riguroso, que no sólo debe visitar a Contreras, sino también planificar con el contralmirante Balaresque los últimos movimientos en la zona[6]. Varios dispositivos de distracción se montarán en paralelo en Talcahuano y Concepción.

Además, Carvajal debe recibir al brigadier general Guillermo Sánchez, jefe del Comando de Apoyo Administrativo, que ha viajado desde Santiago para acompañar a Contreras. La presencia de Sánchez está cargada de silenciosos símbolos militares. El Comando de Apoyo Administrativo es el que, por definición, presta ayuda "moral y espiritual" a los hombres de armas —por contraste con el Comando de Apoyo Logístico, que facilita el respaldo material—; pero además, es el que a través de su Departamento I está a cargo del servicio de prisioneros de guerra. Así se ha de considerar el general (R): una víctima de la larga guerra librada en Chile.

El 18, en el vuelo de British Airways, Pinochet regresa desde Londres y antes de que salga del aeropuerto recibe un informe de situación del vicecomandante Garín y el auditor Torres Silva. Todo marcha según lo previsto. En la madrugada del 19 entra a Punta Peuco el bus que lleva desde el Fuerte Arteaga a los 23 primeros soldados que se harán cargo del anillo interior.

Trece horas más tarde comienza en Talcahuano la operación de traslado, cuando los generales Carvajal y Sánchez intercambian los documentos por los cuales el segundo asume la responsabilidad del preso. A eso de las 17 horas del viernes 20, un helicóptero Super Puma despega del aeropuerto de Carriel Sur, aterriza en las instalaciones traseras de la base naval de Talcahuano y se eleva limpiamente, con Sánchez, Contreras, Letelier y una escolta de comandos, por sobre las marítimas llanuras de la Octava Región.

A esa hora los ministros Figueroa y Alvear asisten a un debate sobre la propuesta de reformas en la sede de la Corporación Tiempo 2000, que preside el circunspecto Edgardo Boeninger, asesor frecuente y dilecto de la ministra. Cuando un llamado telefónico alerta al ministro del Interior sobre la salida de Contreras de Talcahuano, la ministra Alvear se esfuerza por permanecer impasible. Hasta que otro llamado, ahora de su asesor Gómez, le confirma el curso de la operación, instante en el que abandona el debate y se instala en su despacho a recibir los informes de Gómez, que a su turno los recoge de Letelier. En Defensa, el monitoreo establecido por Pérez Yoma sirve de verificación a esos reportes.

Anochece en Santiago cuando el Super Puma concluye su fatigoso vuelo, ya en el límite de su autonomía, dentro del Fuerte Arteaga. El general Sánchez ofrece a Contreras un descanso antes de la cena.

A las 22.50 el Presidente Frei toma el vuelo que lo llevará al acto del cincuentenario de la ONU. Ya sabe que el ex jefe de la DINA está por entrar a Punta Peuco.

Contreras cena apaciblemente y comparte la sobremesa con un par de generales. Cerca de la 1.20 de la madrugada, aborda el auto que lo llevará hasta la cárcel. En el ingreso lo recibe el asesor Gómez, que con el coronel Letelier supervisa el chequeo médico de rigor. Los soldados del anillo interior se cuadran al paso del general (R). Cerca de la última puerta espera el brigadier (R) Espinoza. Tiene un propósito: saludarlo por primera, única y última vez. No volverá a dirigirle la palabra.

A las 2.10 la ministra Alvear confirma a una prensa trasnochadora el encarcelamiento del general (R). Poco después suena el teléfono en casa del subsecretario Burgos:

—Tengo información de buena fuente —le dice un diputado oficialista— de que el helicóptero de Contreras se desvió de la ruta y se fue a otra parte.

Pero no hay tal. A pesar del clima de sospechas y acechanzas[7], a pesar de los pronósticos y los temores, a pesar de las amenazas y las tensiones, el líder de la DINA está preso, solitario y amargo.

Notas

1. Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; y Sepúlveda, Oscar: *La historia oculta del régimen militar*. Editorial Grijalbo, Santiago, 1997.

2. La cuestión del costo de los abogados del general (R) venía siendo un permanente conflicto, incluso con el Ejército, desde los años 80. Al subrayar su voluntad de trabajar gratis, Tapia Falk establece una fuerte distancia con el penalista Sergio Miranda Carrington, defensor anterior de Contreras y al que se atribuye en el ambiente de tribunales la exigencia de una suma muy elevada en dólares.

3. Ver Capítulo 21.

4. Dos enfoques diferentes, con información semejante, acerca de este proceso pueden hallarse en: Dávila, Lucy: *La operación de Pérez*. Revista *Hoy*, N° 950, 2 al 8 de octubre de 1995. Y: *Luz verde a Punta Peuco*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.278, 7 de octubre de 1995.

5. Gómez era jefe de gabinete del subsecretario Eduardo Jara hasta poco antes de esa fecha. Sin embargo, el subsecretario lo exoneró de su cargo, tras lo cual la ministra lo contrató como su asesor directo. Más tarde el mismo Gómez reemplazaría a Jara como subsecretario de Justicia.

6. Lira, Sonia: *Listo operativo para trasladar a Contreras a penal de Punta Peuco*. Diario *La Epoca*, 19 de octubre de 1995.

7. La desconfianza de que Contreras pudiese no haber ingresado durará entre dirigentes de izquierda hasta tres días después, cuando una visita del cardenal Oviedo sirva de "certificación" de que los presos están en Punta Peuco.

30

Gato por tigre

El presidente del Banco Central, Roberto Zahler, parece un tipo curioso. Pero cuando se enfrenta a las autoridades económicas y a sus propios colegas del Banco resulta un completo excéntrico: alguien que no entiende la transición en el campo financiero.

En los primeros meses de 1996, cuando Contreras cumple su primer medio año de prisión, el proyecto de una ley especial sobre derechos humanos se desploma junto con el rechazo de la oposición a las reformas constitucionales. La derrota afecta al gobierno, pero daña de un modo más profundo al presidente de Renovación Nacional, Andrés Allamand, cuyo liderazgo queda decisivamente cuestionado.

A fines del 95, Allamand había conseguido dos gruesos triunfos: que el Consejo General de RN, realizado en Temuco, aprobase el proyecto de reformar el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional y eliminar a los senadores designados; y que el gobierno aceptara modificar y presentar de nuevo su propuesta. Para el paquete llamado "Frei 2" obtuvo que la ley sobre derechos humanos fuese estudiada codo a codo, en extenuantes sesiones veraniegas, por el ministro Carlos Figueroa y el senador Miguel Otero.

Pero esos éxitos no lograron despejar nunca el problema principal: la bancada de senadores, dominada por las figuras antirreformistas, no cedió ni por un momento a los argumentos, a las presiones ni a las amenazas que el presidente de RN ensayó para hacer cumplir los acuerdos de Temuco.

Un último esfuerzo del diputado Luis Valentín Ferrada, que pese a su cercanía con el sector conservador intenta tender un puente en el interior del partido dividido, resulta también fallido, y el 11 de abril de 1996 el Senado finalmente rechaza todas las propuestas.

Ese día el gobierno da por cerrada la frenética discusión abierta desde los días del encarcelamiento de Contreras[1] y se propone concentrarse en lo que ha sido su obsesión desde el inicio: el crecimiento económico, la modernización, la expansión de las oportunidades.

Las condiciones parecen óptimas. Según el informe anual del Banco Mundial, Chile ha terminado 1995 con el séptimo crecimiento del mundo; la APEC lo ha integrado como el último de sus miembros y muy pronto el canciller José Miguel Insulza podrá darse el lujo de suscribir, en una misma semana, la asociación con el Mercosur y la ampliación de los acuerdos con la Unión Europea.

Sólo un sector de la economía permanece rezagado en una discusión ya antigua: la deuda subordinada de los bancos, que el gobierno ha vinculado a cualquier proyecto para expandir los negocios financieros. Sin solución a esa deuda, ha dicho, no hay modernización de la banca.

Adalid de ese criterio fue, hasta el fin de su gestión, el ministro de Hacienda de Aylwin, Alejandro Foxley[2], que sostuvo duros enfrentamientos con los banqueros en torno a este tema. El mismo Foxley despachó, en sus últimos días como ministro, el proyecto de una nueva ley que fijaría a los bancos deudores nuevas condiciones para pagar, y el nuevo titular, Eduardo Aninat, conservó la decisión de no avanzar en la modernización bancaria mientras no se resolviera el trato de la deuda.

Originada en el peor cataclismo de la historia financiera chilena, el de enero de 1983, la deuda subordinada planteaba un difícil problema que ya se intuía en la naturaleza mixta de la solución ideada por el entonces ministro Rolf Lüders para salvar al sistema[3]: repartir la pérdida entre los dueños de los bancos, los pequeños ahorrantes y el Estado, que aportaría una tercera porción, la mayor, a través del Banco Central.

Así, después de más de una década, la deuda subordinada representaba la esperanza del Estado de recuperar lo más posible de cuanto puso para salvar a los bancos. Pero ahora algunos de esos bancos tenían otros dueños; y en el caso de los dos mayores, esos dueños aparecían encabezados por quienes en 1983 fueron designados interventores: Adolfo Rojas en el Banco de Chile y Julio Barriga en el Banco de Santiago.

En 1985 y 1989, dos leyes[4] ordenaron los mecanismos para que los bancos deudores pagaran al Banco Central en cuotas desprendidas de sus excedentes anuales, sin que por ello dejaran de distribuir utilidades entre sus nuevos dueños (los accionistas de la serie B). Los brillantes negocios del sistema financiero en la segunda mitad de los 80 permitieron que las instituciones con compromisos menores fuesen resolviendo a pasos veloces su obligación con el Banco Central.

Cuando Foxley ocupó la oficina 32 del piso 12 del Ministerio de Hacienda, once bancos mantenían deuda subordinada, por un total de un billón 700 mil millones de pesos, poco más de 4.000 millones de dólares. Tanto por su monto como por su capacidad de generar excedentes para pagar, cuatro de ellos no tendrían problemas: Osorno, Crédito e Inversiones, Sud Americano y del Desarrollo; dos más, de A. Edwards y del Pacífico, debían mantener altas rentabilidades para salir de su pasivo; y cinco afrontaban situaciones francamente comprometidas: de Chile, de Santiago, Concepción, BHIF e Internacional.

Los tres últimos acumulaban el 80% del total de la deuda; el Banco de Chile tenía, por sí solo, el 36%. Pero al mismo tiempo, los bancos de Chile y de Santiago representaban más del 55% de los activos de toda la industria. Eran piezas estratégicas en todo sentido.

El día que terminó el gobierno de Aylwin, tres de los bancos habían logrado pagar su deuda al contado: Crédito e Inversiones, del Desarrollo y O'Higgins. El caso del primero había dado rebordes heroicos al orgullo de la vieja tradición banquera, el aristocrático desplante del hombre que siempre cumple sus compromisos: Jorge Yarur, su presidente y propietario, murió el mismo día que celebraba el pago de la última cuota de la deuda, en octubre de 1991.

Un mes después de asumir el gobierno de Frei, aprovechando una disposición de la ley dictada en 1989, los bancos de Chile y de Santiago decidieron capitalizar sus excedentes. El efecto automático de esas acciones sobre el Banco Central fue, en teoría, doble: disminuir sus derechos porcentuales sobre el total de los excedentes y, en consecuencia, aplazar más el pago de la deuda subordinada.

El Banco Central reaccionó pidiendo al gobierno un proyecto de ley para restringir las capitalizaciones automáticas, un texto que, por tramitarse en el marco del proyecto de deuda subordinada —la "ley madre", entonces en plena discusión— sería conocido como "ley hija".

El gobierno logró la aprobación fulminante de la "ley hija" en enero de 1995 y la promulgó mientras la oposición presentaba un requerimiento al Tribunal Constitucional. El truco del Ejecutivo no dio resultado; el Tribunal decretó la suspensión de la ley y finalmente la declaró inconstitucional. Con ello quedó abierta la posibilidad de que hubiese una segunda capitalización en las juntas de accionistas de abril de 1995.

Intentando prevenirlas, los consejeros del Banco Central hablaron con Guillermo Luksic, que había entrado con fuerza al Banco de Santiago y preparaba la fusión con su banco original, el O'Higgins, y le plantearon que el instituto emisor sufriría perjuicio con una nueva capitalización. Luksic aceptó no hacerla.

Pero la misma gestión fracasó con el presidente del Banco de Chile, Adolfo Rojas, que defendió los derechos adquiridos de los accionistas de la serie B.

Fue en esa negativa que el presidente del Banco Central, Roberto Zahler, creyó ver que las intenciones del Banco de Chile no pasaban por cumplir íntegra y rápidamente con la deuda subordinada, aunque podía pagarla[5]. ¿Acaso sabían sus administradores algo más sobre los planes del gobierno para los bancos en el futuro?

Zahler, a quien Carlos Massad había introducido en la pasión por la política monetaria, era conocido por un temperamento difícil, una rara versatilidad humanista y una capacidad por la cual muchos lo veían como el más brillante experto en macroeconomía de la Concertación. En los años de Aylwin, Zahler fue designado vicepresidente del Central y, dada la nutrida agenda social del presidente Andrés Bianchi, era sabido que desde ese cargo administraba el férreo ajuste aplicado en esos años. Por eso nadie se extrañó de que en 1991 asumiera la cabeza del instituto[6]. A fines del 92, cuando todos se felicitaban de las cifras y comenzaba a circular la comparación con los "tigres" asiáticos, Zahler lanzó un insólito desafío a la complacencia ambiental:

—Los tigres no se hacen de la noche a la mañana, mucho menos si tienen una larga historia de ser gatos, con cultura, costumbres y perspectivas de gatos.

Abrigado con un rápido prestigio en el mundo de los banqueros centrales, Zahler fue, con el consejero Juan Eduardo Herrera y el ministro Foxley, el más duro oponente a dar a los bancos otra solución que no fuera el máximo pago de sus deudas al Central.

A fines de marzo de 1995, Zahler fue invitado a un desayuno en casa del ministro Figueroa, con la totalidad del equipo político, además del ministro Aninat, el subsecretario Manuel Marfán y los senadores Carlos Ominami, Sergio Bitar y Andrés Zaldívar, negociadores en el Congreso de la nueva ley sobre deuda subordinada. Para su sorpresa, fue el centro del diálogo. No hubo ese día otro tema que la relación del Banco Central con el Banco de Chile.

Y cuando Zahler planteó que el Banco Central recurriría a los tribunales para cobrar perjuicios, la totalidad de los asistentes expresó su preocupación por las consecuencias de una lucha con el sector privado. Tras la "devaluación no convencida" decretada por el Presidente mexicano Ernesto Zedillo y su ministro Pedro Serra, se vivían los días del "tequilazo", con una fuerte caída de las bolsas y las monedas latinoamericanas[7], y el equipo de Aninat hasta había llegado a temer que se reprodujera la catastrófica crisis de la deuda de los 80, también gatillada por México.

La posibilidad de un *crack* de escala regional hacía inconveniente abrir una lucha con el principal banco privado, sostuvo Aninat, aunque, naturalmente, el Banco Central, como ente autónomo... Zahler no compartió esa alarma: la mejor señal para el exterior, argumentó, sería mostrar que el Fisco defendía sus recursos.

El Banco de Chile realizó su segunda capitalización en abril del 95 y los abogados del Banco Central Alvaro Ortúzar, Arturo Vergara y Felipe Bulnes iniciaron una dura batalla en las cortes. Finalmente, tanto la de Apelaciones como la Suprema declararon que el Banco de Chile había realizado un "ejercicio abusivo" de sus derechos, perjudicando al Central. El camino para demandar indemnizaciones quedaba abierto.

Pero para entonces el gobierno estaba en otra cosa. En julio logró la aprobación final de la nueva ley de deuda subordinada y podía prepararse para que, concluidas las negociaciones, se abriera curso a la nueva ley de bancos y a la definitiva modernización del sistema financiero.

Para el ministro Aninat lo importante era ese diseño estratégico: obtenida la ley, era preciso conseguir que los bancos deudores suscribieran nuevos contratos. Hecho eso, se podía dar por

disuelto el odioso fardo heredado de los 80, liberar al Banco Central de su promiscua imbricación con los privados y finalizar la parálisis que injustamente afectaba a los bancos sanos o nuevos, que nunca tuvieron deuda subordinada.

Además, la ley le parecía una espléndida fórmula. Por ella, los bancos continuaban entregando cuotas al Central, pero ahora éste convertía la obligación subordinada en acciones de pago, que podría vender en el mercado. Según estimaciones concordantes, el Central podría recuperar unos 223,5 millones de dólares más que con la ley anterior, y con plazos más precisos[8].

Claro que, por estar envueltos contratos anteriores, la nueva ley tenía que dejar a los bancos la opción de mantenerse dentro de la de 1989. Esto, creía Aninat, era un peligro, porque si uno o más bancos no entraban en la nueva ley, se mantendría vigente una porción del vicio anterior. Peor si era alguno de los grandes.

Zahler no concordaba con el ministro. En su razonamiento, ningún banco querría quedarse fuera de la nueva ley; sería como mantenerse infectado en una cápsula sanitaria y poco prestigiosa. Si ese riesgo no existía, lo lógico era endurecer el proceso de negociación para obtener las mejores condiciones.

Pero el problema de Zahler era aún un poco mayor: tampoco le gustaba la nueva ley; la consideraba insuficiente y estaba convencido de que los bancos podían ser empujados a pagar todavía más si el Estado, con todos sus molestosos recursos, se lo proponía.

Sin embargo, había perdido esa batalla a manos de Aninat. Y perdió una segunda en el último trimestre del 95, cuando debía llenarse en el Consejo del Banco Central la vacante del general (R) Enrique Seguel, que completaba su período.

Dado que ese cupo correspondía a la derecha, según los acuerdos no escritos negociados por Enrique Correa y Edgardo Boeninger antes del fin del régimen militar, Zahler pensó que sería óptimo mantener a Seguel, un hombre al que ya conocían y con el cual se entendían bien todos los consejeros, por otros diez años. Así lo planteó al ministro Genaro Arriagada, que se interesó por la idea.

Pero Aninat tenía otros planes, que pasaban por plantar a la oposición de derecha con todos los candidatos que había estado promoviendo por los diarios y nominar a una persona independiente que pudiese estar más cerca de los criterios de gobierno en caso de necesidad.

La elegida fue la economista María Elena Ovalle y la operación se convirtió en un infierno en el Senado, donde la oposición se contuvo a duras penas —y a veces no lo logró— para no ofender a una dama. Pero finalmente Aninat tuvo éxito y Ovalle fue ratificada en una estrechísima votación en el Senado de 20 a favor, 18 en contra y una abstención[9].

Y María Elena Ovalle es, al iniciarse el 96, el foco del primer conflicto abierto entre Zahler y Aninat. Cuando la nueva consejera del Central declara, en una sesión ordinaria, que se abstendrá de votar en los debates que afecten a los bancos de Chile y de Santiago porque ella y su marido tienen acciones en esas entidades[10], Zahler se dirige al Ministerio de Hacienda:

—Mira, Eduardo: tú, tu subsecretario Marfán y el superintendente de Bancos, José Florencio Guzmán, han estado diciéndonos que el gobierno quiere votaciones unánimes en las negociaciones sobre deuda subordinada, porque este es un problema de Estado. Y ahora resulta que la señora Ovalle no quiere votar. No puedo ofrecerte ninguna unanimidad de esa manera.

—¿Y le han propuesto una solución?

—El fiscal del Banco le dijo que vendiera las acciones, pero ha dicho que no, porque perdería dinero.

—Ah, bueno —dice Aninat—, esa ya es una cuestión personal. Y tú comprendes que no me puedo meter en cosas personales...

Airado, Zahler acude a Genaro Arriagada, que promete estudiar un proyecto para eliminar la incompatibilidad. Pero pronto ese camino queda desechado por inviable: supone modificar una ley orgánica, sólo para un caso que ya ha causado conflicto en el Senado.

Los otros tres consejeros, el socialista Jorge Marshall, el DC Pablo Piñera y el derechista Alfonso Serrano, comparten la molestia del presidente. En algún caso, el argumento de María Elena Ovalle resulta especialmente escoriante porque entre sus parientes cercanos también hay accionistas de esos bancos. Marshall y Piñera llegan a plantear el problema a Aninat, sin mejores resultados.

Pero es un hecho que ni ellos dos ni Serrano le asignan el mismo dramatismo que Zahler. Y es que para entonces, el presidente del Central ha comenzado a sentirse aislado dentro del Consejo. Sus opiniones sobre la negociación con el Banco de Chile empiezan a ser escuchadas con el escepticismo con que se enfrenta a un obseso o a un fanático.

Zahler sospecha que los consejeros sienten un temor reverencial por la derecha económica presente en esos bancos y no se atreven a enfrentarla; los consejeros sospechan que Zahler le teme a la responsabilidad política de resolver un problema con aristas poco populares y no quiere asumirla sin un respaldo blindado.

El clima interno del Banco Central se enturbia con inusitada celeridad en 1996. A eso contribuye el estilo áspero de negociación del Banco de Chile. Cuando la Suprema confirma el fallo favorable al Central en su reclamo por las capitalizaciones, en abril, el presidente Adolfo Rojas y su gerente general, Segismundo Schulin-Zeuthen, se apersonan en las oficinas de Zahler, que los recibe con su propio gerente general, Camilo Carrasco. Los hombres del Chile vienen a decir que su banco exige que el Central desista de cualquier juicio. De otro modo, simplemente no entrarán en la nueva ley.

Zahler no cede: lo mejor es que vayan proponiendo una indemnización, porque el Consejo ya está preparado para iniciar una demanda.

Apenas unos días más tarde Pablo Piñera dice a la prensa que en el Consejo no hay un acuerdo formal para ir a juicio. Esa declaración, que en el hecho desactiva las amenazas de Zahler a Adolfo Rojas, rompe los últimos vínculos entre los consejeros y el presidente.

Pero lo peor ocurre poco después, cuando el gerente general y el fiscal Víctor Vial reciben a un abogado del Banco de Chile que, en medio de las tiranteces de la discusión, los conjura con una ofensa:

—Les vamos a traer de regalo un balde de vaselina.

En el Banco Central, versallesco, decimonónico, jerarquizado, cuyos marmóreos pasillos parecen soplados por el viento de la historia económica, donde el prudente silencio sólo es roto por los ecos del pasado, esta clase de humillación parece inaceptable. Es lo que le dicen a Zahler, solemnemente, los no menos solemnes gerente general y fiscal. Y el presidente, claro, concuerda, aunque más lo tentaría reír a carcajadas.

Hacia marzo de 1996 la tensión en el Consejo es apenas soportable. Calculando que se encuentran ante un carácter complejo y explosivo, Marshall y Piñera han promovido un acuerdo para que Zahler disponga de todo el poder de negociación ante los bancos. Zahler ha aceptado, pero poco después ha delegado parte de esas facultades, y especialmente frente al Banco de Chile... en Marshall y Piñera.

La desconfianza crece cuando ambos proponen designar a un tercero, ajeno al Consejo, para negociar con los cinco bancos pendientes —de Chile, de Santiago, BHIF, Internacional y Concepción— el cambio de contrato conforme a la nueva ley.

Zahler propone a Jorge Navarrete, ex director de TVN, pero Marshall lo rechaza tanto por su filiación DC como por su distancia respecto del problema bancario. La contrapropuesta, que Zahler acepta, alimenta sin embargo sus calladas aprensiones: José Cox, un experto que, aunque cuenta con la confianza de Aninat y ya ha sido contratado antes por el director de Presupuesto José Pablo Arellano, es demasiado cercano a Sebastián Piñera.

A fines de abril, sintiéndose aislado dentro del Banco, Zahler pide audiencia al Presidente Frei. Quiere decirle que la insistencia con que el subsecretario Marfán y el superintendente Guzmán le han dicho al Consejo del Banco Central que el interés del gobierno es que se facilite

el ingreso de todos los bancos en la nueva ley resulta incompatible con su apreciación de que se debe negociar con dureza ante las instituciones rebeldes.

Pero Frei no lo recibe. En la segunda semana de mayo, Zahler visita al ministro Arriagada y le anuncia que a contar de entonces se declarará enfermo y que estará renunciado al Banco mientras no haya solución.

Arriagada inicia una serie de enervantes reuniones intentando que Zahler desista. El ministro prepara minutas y ofrece alternativas. Por ejemplo, que el presidente del Central tome vacaciones por seis meses, mientras se completan las negociaciones; por ejemplo, que se vote dentro del Consejo sin importar que no haya unanimidad.

Ninguna satisface a Zahler, hasta que Arriagada plantea un gran acuerdo global por el cual se confieren al presidente del Central todos los poderes para negociar, se garantiza el apoyo en bloque del gobierno y se desvincula la pelea judicial con los bancos del problema global de la nueva ley de deuda. Pero Zahler quiere oír ese compromiso del Presidente, y Arriagada gestiona una audiencia.

Para entonces, el conflicto interno ya es desgarrador en el Banco Central.

El deterioro de las relaciones personales ha llegado hasta el punto de que, estando sus oficinas a metros de distancia dentro del segundo piso de la sede de Agustinas, el presidente y los consejeros sólo se comunican por *mail* electrónico.

Cuando Pablo Piñera propone por ese correo una reunión informal para debatir las negociaciones con los bancos, Zahler responde que no concurrirá a ningún acuerdo acerca del Banco de Chile. Y una vez que Alfonso Serrano pregunta en qué otro punto el presidente adoptará la misma actitud, Zahler replica: "También sobre el Banco de Santiago". A veces agrega un sarcasmo: "Desde mi lecho de enfermo...".

Unas horas después de que escribe esa frase, el 10 de mayo de 1996, Zahler parte a la reunión con el Presidente, que ese mismo día es abuelo por primera vez. Regresa de ver a su hija Verónica en la Clínica Alemana cuando atiende a Arriagada y Zahler. De la reunión, más bien apacible, Zahler entiende que Frei respalda su posición, que no debe ceder ante la presión y que la negociación con el Banco de Chile no debe quedar supeditada al ingreso de esa institución a la nueva ley.

Esa noche, Zahler redacta un memorando con lo que cree que son las conclusiones de la cita. Al día siguiente va a cenar a la casa de Arriagada con el ministro Aninat. Pero no es un encuentro cordial: el titular de Hacienda está indignado por la reunión a sus espaldas.

La comida avanza difícilmente, entre gritos, hasta que Zahler le muestra su memorando, que incluye un presunto acuerdo para que Aninat concurra al Consejo del Banco Central, le dé su respaldo y suscriba la estrategia aceptada por el presidente del instituto emisor.

Cuando termina de leer el documento, Aninat declara que no puede continuar en esa cena y prefiere retirarse. Arriagada, anfitrión a fin de cuentas, trata de detener la ruptura reprobando la versión de Zahler:

—No puedes poner palabras en boca del Presidente.

—Pero fue lo que dijo, Genaro. Tú estabas ahí...

—No, lo que has hecho es inaceptable. El Presidente no interfiere, de la manera en que lo has descrito, en un organismo autónomo.

Aninat acepta proseguir el debate, pero la relación ya está quebrada. Esa noche, Arriagada redacta un documento de siete puntos, titulado *El ejercicio pleno de las atribuciones del presidente del Banco Central en el marco de una clara definición gubernativa*, que define cada paso del gran acuerdo para evitar la renuncia de Zahler y completar la negociación con la banca.

El 16 de mayo, Aninat concurre a la sesión del Consejo del Banco Central, tal como ha exigido Zahler, que a su turno retorna de su inexplicada enfermedad.

Aninat no llega de buena gana. Sin apenas saludar a Zahler, toma su puesto y lee un documento. Zahler escucha con alarma que en el párrafo 2.1 el ministro afirma que "una negociación que mantenga la situación actual también sería evaluada negativamente".

Esa es la señal final: el ministro se mantiene fiel a su propósito de conseguir que los bancos entren en la nueva ley; no sirve a la voluntad de Zahler de someterlos a una presión mayor por el pago de indemnizaciones.

Zahler denuncia la ruptura del acuerdo ante Arriagada. Y la respuesta le sugiere una nueva derrota:

—¿Qué quieres que haga? —rezonga Arriagada—. Eduardo se manda solo...

Según la nueva ley de deuda subordinada, los bancos tienen plazo para acogerse a un nuevo contrato hasta el 23 de julio. Los consejeros Marshall, Piñera y Serrano advierten que si no se alcanza con el Banco de Chile una transacción por las capitalizaciones automáticas, la fecha límite de la nueva ley se precipitará. Son dos temas técnicamente diferentes, pero su vinculación política les parece evidente.

Por ello, en la tercera semana de mayo contratan a un comité de expertos, integrado por el ex ministro Sergio de la Cuadra, José Cox y el economista de Cieplan Joaquín Vial, para que evalúe los daños sufridos por el Banco Central. El 28, Zahler informa al Consejo que a su turno ha designado a su jefa de gabinete, Paola Assael, para hacer un estudio semejante.

En los primeros días de junio, el Banco de Chile hace llegar un borrador en el que propone un pago de 13 millones de dólares, a cambio de los cuales el Central se compromete a no iniciar juicio alguno. Marshall, que intuye que las diferencias con el presidente del Banco se expresarán ahora en torno a las cifras y los informes técnicos, le propone establecer un comité único. Pero Zahler está decidido a trabajar solo con su asesora.

La discusión tampoco puede proseguir, porque Zahler viaja por unos días a Europa. Durante su ausencia, y como presidente subrogante, Marshall pide al equipo técnico que prepare estimaciones de perjuicios. Cuando regresa, el 17 de junio, Zahler cancela esa orden: tal petición, arguye, sólo puede ser formulada por el Consejo.

En el intertanto ocurren otras cosas: el 14 de junio, el Banco de Chile envía al Central una carta en la que vincula expresamente el problema de la indemnización con su ingreso a la nueva ley y reitera su oferta de 13 millones de dólares.

El miércoles 19, en un clima receloso, Zahler, con el apoyo del fiscal Vial, declara que la carta del Banco de Chile es ilegal y que debe enviársele otra exigiendo la desvinculación de los dos asuntos en discusión. Pero los consejeros no están dispuestos a declarar una guerra ahora que se aproxima un acuerdo. Marshall y Piñera han estado dialogando con el representante del Banco de Chile, Arturo Tagle, y saben que la disposición ha cambiado. La propuesta del presidente es rechazada.

Dos días después, el viernes 21, el Banco de Chile retira su carta anterior y entrega una nueva, donde además mejora la oferta de pago a 14,1 millones de dólares. Según una de las cláusulas que propone, dicho pago irá a cuenta del monto total de la deuda subordinada, es decir, no será una reparación de perjuicios.

¿Cuál es la explicación? Que en su opinión tales perjuicios son sólo presuntos. El Banco Central sufriría daño si al final el Banco de Chile no paga su deuda. Pero si lo hace, tal perjuicio no habrá existido. Así, el Banco de Chile entregaría los 14,1 millones de dólares a cuenta de sus últimas cuotas de la deuda.

Para entonces ya se sabe que De la Cuadra, Cox y Vial han calculado que el daño al Central pudo ser de entre 11 millones y 21 millones de dólares. En cambio, Paola Assael ha llegado a una cifra superior a los 70 millones de dólares[11].

Y con esos dos puntos de conflicto —la confusión de si se trata de indemnización o prepago y la fuerte diferencia en los cálculos— se llega a las dos sesiones de Consejo del lunes 24 de junio. En la primera, en la mañana, Marshall y Piñera informan que el Banco de Chile se ha acogido a la nueva ley de deuda y ha aceptado el contrato por el que se obliga a cancelar su compromiso en 40 años[12].

LA TRANSICIÓN ECONÓMICA (2)				
	1992	1993	1994	1995
IPC (variación %)	12,7	12,2	8,9	8,2
Desempleo (%)	6,6	6,5	7,8	7,3
Sueldos (base 100=1990)	109,63	113,19	118,57	123,77
Inversión (% PIB)	23,9	26,5	26,3	27,2
Ahorro (% PIB)	25,2	24,7	26,3	28,8
Crecimiento (%)	11,0	6,3	4,2	8,5
Superávit/Déficit*	346,4	356,5	361,9	667,6
Exportaciones**	10.007	9.199	11.604	16.137
Importaciones**	10.129	11.125	11.825	15.914
Reservas**	9.998	9.758	13.466	14.805

* Miles de millones de pesos.
** Millones de dólares de Estados Unidos.
Fuentes: Banco Central, INE, Dirección de Presupuestos y Fondo Monetario Internacional.

En la segunda, en la tarde, a la que asiste el subsecretario Marfán, Zahler parte diciendo que recibió la propuesta de transacción del Banco de Chile en la tarde del viernes y no ha tenido tiempo de estudiarla. El fiscal Vial lee una minuta en la que subraya que una transacción debería ajustarse a un criterio estricto de defensa de los intereses del Banco Central. Agrega que el abogado Alfredo Etcheberry tiene redactada la demanda si el Consejo decide presentarla.

Piñera pide entonces la palabra y lee otro documento: el comité de expertos recomienda aceptar la oferta del Chile, sobre la base de que se trata de un excelente trato para el Central.

La discusión se prolonga por dos penosas horas. Pasadas las 18, Zahler propone que se den un plazo de menos de 24 horas para que los expertos revisen los parámetros con que trabajaron. El gerente general Carrasco apoya esa propuesta. Pero el consejero Alfonso Serrano la rechaza de plano, con el argumento de que Zahler se ha cerrado a toda posibilidad de acuerdo en las semanas previas y ya no corresponde seguir postergando la decisión. Marshall y Piñera lo respaldan. Los tres votan en favor de la transacción por 14,1 millones de dólares, Zahler vota en contra y María Elena Ovalle se abstiene.

El miércoles 26 Zahler asiste a una nueva sesión de Consejo sólo para protestar por el acuerdo sellado, reclamar por la prisa que han mostrado los consejeros y dejar constancia de la gravedad que le asigna. Luego se retira, sin dejar espacio a debate.

El jueves 27, el Consejo en pleno, incluido Zahler, asiste a almorzar con el ministro de Hacienda. Nada se dice de la crítica situación interna. A las 16, el Consejo sesiona y Zahler reitera sus objeciones sobre el informe de De la Cuadra, Cox y Vial en el caso del Banco de Chile. Los dos primeros están contratados ahora para ver la negociación con el Banco Concepción y Zahler expresa su reparo; luego rechaza firmar una carta para el Banco de Santiago. La reunión concluye a las 18.

Poco después, el Presidente Frei recibe una carta de Zahler: tras describir el proceso de desacuerdos, presenta su renuncia indeclinable y anuncia que la hará pública al otro día, después del cierre bancario.

En la tarde del viernes, la noticia sacude a la dirigencia del país y alcanza a resonar en el exterior como una señal de crisis.

Quien detiene esos efectos es Aninat, que gasta esa tarde y el fin de semana dando garantías a medio mundo. El sábado invita a los consejeros del Central a su casa; allí se acuerda que Marshall, en calidad de presidente subrogante, encabezará el intenso período de negociaciones que viene.

Queda sólo un problema: el Presidente se niega a despachar la carta de Zahler a la Contraloría por los términos que contiene. Arriagada se esfuerza pidiéndole que la retire; pero Zahler sólo acepta enviar una nueva.

En las semanas siguientes, Marshall se hará cargo de la agotadora ronda de gestiones destinada a lograr que la totalidad de los bancos deudores entre a la nueva ley de deuda subordinada. Mucho antes del fin de 1996 habrá cumplido, para que se extienda en el gobierno una sensación de triunfo apenas atenuada por los amargos contornos de la salida de Zahler.

Notas

1. Hacia julio de 1995, las propuestas para cerrar los casos de derechos humanos llegaron a 25, según un documento preparado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. La versión textual en: Dávila, Lucy: *El largo camino a Punta Peuco*. Revista *Hoy*, N° 938, 10 al 16 de julio de 1995.

2. Ver Capítulo 6.

3. Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel; y Sepúlveda, Oscar: *La historia oculta del régimen militar*. Editorial Grijalbo. Santiago, 1997.

4. La ley N° 18.401 fijó la obligación para los bancos de recomprar la cartera vencida que el Banco Central les había comprado en 1983, en un plazo que por lo general vencía en 1993. Cinco años más tarde, cuando era evidente que dicho plazo no se cumpliría, y ante el temor de que esa situación indujera a una nueva estatización de la banca por parte de la Concertación, el régimen militar dictó la ley N° 18.818, el 1° de agosto de 1989, que dio a los bancos la opción de sustituir la recompra de cartera por la llamada obligación subordinada, una deuda con plazo indeterminado que podría ser cubierta con las ganancias.

5. En 1995 la deuda del Banco de Chile llegaba a 1.657 millones de dólares, lo que significaba tres veces su capital y reservas, una relación que según los estudios del Central hacía perfectamente viable el pago. En contraste, por ejemplo, a la misma fecha la deuda del Banco Concepción equivalía a ocho veces su capital y reservas. Banco Central de Chile: *Aplicación de la ley 19.396 sobre obligación subordinada*. Santiago, 1996.

6. Goyeneche, Cristina: *El hombre del ajuste*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.222, 10 de septiembre de 1994.

7. El "tequilazo" se originó en una desmedida expansión económica activada por el saliente Presidente Carlos Salinas de Gortari con el aparente fin de asegurar la elección de su sucesor del PRI, Ernesto Zedillo. Una vez que asumió, Zedillo ordenó devaluar; el ministro de Hacienda procedió, pero desapareció por 24 horas, sembrando la desconfianza de los agentes económicos, que precipitaron una caída aún más fuerte del peso mexicano.

8. Esta estimación era sobre la base de que la deuda pendiente de cuatro de los bancos principales —excluido el Santiago, en proceso de fusión con el O'Higgins— llegaba, en 1995, a 2.778 millones de dólares. Con la ley de 1989 la recuperación sería de unos 1.462 millones de dólares, mientras que con la nueva podría llegar a 1.685,5 millones de dólares. Gemines Consultores: *Informe*. Agosto de 1996.

9. Esta mayoría mínima se explica porque a los votos de la Concertación se sumaron los del independiente de derecha Antonio Horvath y Francisco Javier Errázuriz, el líder de la UCCP. Morales, Berta: *Senado aprobó nominación de María Elena Ovalle al Central*. Diario *La Epoca*, 22 de noviembre de 1995.

10. El inciso primero del artículo 13 de la ley orgánica del Banco Central prevé la incompatibilidad de intereses.

11. Con posterioridad a la publicación de este capítulo en *Hoy*, Paola Assael ofreció, a través de *Qué Pasa*, una apuesta a los consultores De la Cuadra, Cox y Vial para contrastar sus respectivos cálculos, reiterando que los suyos eran los únicos válidos. No hubo respuesta a ese emplazamiento.

12. Philippi, Claudia: *La verdad de la renuncia*. Revista *Hoy*, N° 989, 8 al 14 de julio de 1996. También: Etcheberry, Blanca: *La caída de Zahler*. Diario *La Epoca*, Suplemento Temas, 7 de julio de 1996.

31

El fin del Círculo de Hierro

En septiembre de 1996, el gabinete de los amigos del Presidente no resiste más. Anulado por las confrontaciones internas, el hombre clave de ese esquema, Genaro Arriagada, debe salir, junto con otros ministros que una vez más son tomados de sorpresa.

La crisis del Banco Central rebota primero, como una caprichosa carambola, en el equipo de ministros. Y el responsable de ese extraño efecto no es, como parece, el ministro de Hacienda Eduardo Aninat, sino el de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.

Aunque la ley no fija plazos para la sustitución de un consejero del Banco Central y el presidente subrogante, Jorge Marshall, está cerrando sin tropiezos las negociaciones con los bancos deudores, el Presidente Eduardo Frei se convence de que un rápido reemplazo de Roberto Zahler conviene a la estabilidad de la economía y evita la percepción de un gobierno dubitativo. Por lo demás, la oposición ha montado una verdadera campaña en la prensa promoviendo nombres de economistas de derecha.

Aninat propone al director de Presupuesto, José Pablo Arellano. Pero a Pérez Yoma le parece que esta alternativa no resuelve el segundo de los problemas planteados por la dimisión de Zahler: la vacancia en la presidencia del Consejo del Banco Central, para la cual ninguno de los consejeros en funciones satisface plenamente al gobierno.

Dado ese cuadro, dice el ministro de Defensa, lo apropiado es nombrar a un hombre de respeto, que asuma como simple consejero y sea promovido en breve plazo a la presidencia del Consejo.

Cuando menciona a su candidato, sabe que toca los afectos del Presidente: Carlos Massad ocupó ese puesto cuando gobernaba su padre y ha cultivado con él una amistad de muchos años.

Pero Massad es ministro de Salud, está en una de las carteras más sensibles del gobierno y ha desarrollado un plan para transformar los endémicos problemas de la salud pública. Es cierto que su plan enfrenta la resistencia de todos los gremios del sector, pero no hay entre los economistas de gobierno quien no crea que Massad avanza en la dirección de un cambio sustantivo y probablemente correcto.

Por tanto, sustituirlo no es nada fácil. Pero el Presidente puede aprovechar la ocasión para introducir una de esas novedades que a menudo lo seducen. Por ejemplo, un funcionario joven, bordeando los 30 años, de carisma desconocido pero de eficiencia probada, que pueda traer aire fresco a los viejos criterios políticos.

Más tarde la prensa, con el amistoso soplo de algunos de los interesados, creará la categoría de los "*top ten*" para agrupar a un heterogéneo y hasta artificioso contingente de funcionarios cuya única semejanza es la edad. Sólo que algunos de los "Frei *boys*" cometerán el pecado de

la política prepúber: creérselo. Y hasta montarán operaciones y conspiraciones para hacerse de cuotas de poder en La Moneda.

De momento, en agosto de 1996, el elegido es Alex Figueroa, que pasa de la Intendencia de Santiago a la cartera de Salud a los 34 años. Médico él mismo, a Figueroa le será dada la misión de avanzar en la modernización del área, la que sin embargo no figura entre las prioridades máximas del gobierno ni se incluye entre sus "proyectos estrella": esa ambigüedad tendrá que marcar su gestión desde el primer día.

Y Massad se va del gabinete con rumbo directo al Banco Central.

El nombramiento del consejero nuevo debe contar con la aprobación, por mayoría simple, del Senado. Y aquí empiezan los problemas. En el equipo político hay conciencia de que las relaciones del ministro Aninat con la oposición han quedado fuertemente dañadas desde el año anterior, con el nombramiento de María Elena Ovalle en el cupo que la derecha consideraba propio. Aunque la competencia técnica de Massad no es discutida, la oposición aspira ahora a instalar a un hombre de sus filas y a recibir una satisfacción por la humillación infligida en 1995.

Cuando el comité político de La Moneda analiza las posibilidades, concluye que Aninat no puede emprender una negociación a solas. Para ayudarlo estará el ministro secretario general de la Presidencia, Genaro Arriagada. Y Pérez Yoma, reforzando su fuerte compromiso con la operación, promete gestionar algunos votos de los senadores designados; con cuatro de ellos se asegurará el éxito completo.

En cuanto la propuesta presidencial es anunciada, el 6 de agosto, la oposición advierte que la rechazará, alega que el compromiso de equilibrio en el Banco Central está siendo quebrantado y protesta por el deterioro de la autonomía que implica el hecho de que el nuevo consejero venga del gabinete ministerial.

El 13 de agosto, el oficio del Presidente llega al Senado y el gobierno se prepara para que sea puesto en tabla en los días siguientes. Pero ahora, según el acuerdo pactado con la oposición en 1994, la presidencia del Senado pertenece a Sergio Diez, senador de RN. Y lo que Diez decide es que, tratándose de un nombramiento, la calificación de urgencia por parte del gobierno no procede. La votación queda pospuesta para el 27 de agosto, después de la semana de receso que los parlamentarios se dan para visitar sus regiones.

El día previo a la votación, Aninat y Massad sostienen prolongadas reuniones con senadores de todas las bancadas. Es un esfuerzo de persuasión sobre seguro. Con la oposición no da resultado: lo que RN y la UDI reclaman es que el Ejecutivo debería haber emprendido el diálogo antes de proponer el nombre, no después. Así se lo habían planteado, el 8 de julio anterior —días después de la renuncia de Zahler—, los senadores de RN Sebastián Piñera y Miguel Otero al Presidente Frei[1].

Y es por eso que Piñera y Otero encabezan la rebelión de la oposición, con la compañía del senador de la UDI Hernán Larraín. Pero Aninat puede respirar tranquilo: Andrés Zaldívar, por la DC, y Carlos Ominami, por el PS, garantizan el alineamiento de la Concertación; también se han hecho gestiones sobre el senador de RN Julio Lagos, el independiente Antonio Horvath y Francisco Javier Errázuriz; más la de Pérez Yoma...

El martes 27 aparecen las sorpresas. El senador designado Ricardo Martin permanece internado en la Clínica Las Condes y envía un mensaje para que se le paree con alguien que vaya a votar en contra de Massad. Pero Hernán Larraín veta la petición: a nadie le consta que Martin vaya a votar a favor, por lo que un pareo no es aceptable.

En cambio, sí hay pareos del senador del PPD Sergio Bitar con el designado Santiago Sinclair y del PS Jaime Gazmuri con el RN Francisco Prat.

Al fin, quedan en la sala 41 senadores habilitados para votar. La mayoría del oficialismo parece fácil: sus 19 votos, más el de Errázuriz, más a lo menos tres designados. Total, 23. Como mínimo, 25, con algo de suerte. Massad puede esperar, acompañado de Arriagada, en la sala del cuarto piso reservada a los ministros.

Pero la votación es secreta. Y en la primera ronda el resultado sorprende a todos: empate de 20 a 20, con una abstención. El presidente Díez ordena que la nueva votación se haga de inmediato.

Y en siete minutos el ministro Aninat presencia la catástrofe: Massad queda rechazado por 21 votos contra 20.

Alertado por citófono, Arriagada recibe la misión de darle la penosa noticia al candidato caído. Mientras Aninat vuela a los ascensores, los senadores designados William Thayer y Vicente Huerta, además de Errázuriz, se precipitan hacia el cuarto piso para dar su palabra de que cumplieron con el voto prometido. Anonadado, Andrés Zaldívar despacha agrias declaraciones contra la "conspiración" de la derecha y denuncia el incumplimiento de algunos senadores: los designados, se entiende.

Pero si saca bien las cuentas y acepta las seguridades de los dos designados y Errázuriz, entonces la conclusión es muy otra. Dos senadores de la Concertación han derribado a Massad: uno de ellos vaciló por una vez: eso explica la abstención de la primera ronda. Concretamente, dos senadores de la DC, que han querido cobrar cuentas pasadas: uno, por la gestión de Massad en Salud: otro, de tiempos más remotos.

Esa misma tarde, en los febriles conciliábulos de la derrota, se abre paso en el Senado la idea de enviar una carta al Presidente Frei con un compromiso firmado para votar por Massad, con el fin de que lo repostule. Pasado el mediodía del miércoles 28 de agosto, Zaldívar ya tiene en su poder la carta con 25 firmas: toda la Concertación, más Errázuriz y los designados Thayer, Huerta y Carlos Letelier. Martin adhiere también desde la clínica, ahora por escrito.

A las 18.59 llega al fax del Senado un oficio del Presidente proponiendo de nuevo a Massad. La oposición se encabrita con la maniobra. Diez acusa agriamente al ministro Aninat, por su estilo avasallador, y al propio Massad, por su *lobby* telefónico. Otero, que preside la Comisión de Constitución, plantea que una repostulación en estos términos es inconstitucional.

Aquel fin de semana, la prensa se puebla de análisis, entrevistas y reportajes que imputan al ministro Arriagada el traspié de Massad. Como encargado del manejo de los proyectos en el Congreso, es el centro de las críticas, el blanco móvil del fracaso.

El lunes 2 de septiembre, Arriagada recibe la inusitada visita conjunta de Aninat y Pérez Yoma.

—Pelado —dice Pérez Yoma—, esto es injusto. Te están culpando sin causa...

—Ya —responde Arriagada, amargo—. ¿Y qué van hacer, huevones? ¿Van a sacar un desmentido?

—No se trata de eso —dice Aninat—. Es que te están atacando sin razón.

—¿Y? No hay nada que hacer. Tengo que asumirlo, nomás.

—Hay que dar vuelta la cosa —dice Pérez Yoma, enérgico—. Vamos a poner a Massad en el Central y terminar con estas cabronadas.

Arriagada no cree que nada de eso mejore su desmedrada situación. Lleva más de dos años lidiando con sospechas y acusaciones, y el bochorno del Banco Central le ha hecho perder, ya no las ilusiones, sino también los afectos. Poco después habla con el Presidente:

—Ya no te sirvo, Eduardo —le dice—. Estoy fundido, me molió la picadora de carne. Fracasaron las reformas constitucionales, las modernizaciones se han vuelto a trancar, he sido basureado por la prensa, y ahora, esto, lo de Massad. Creo que tengo que salir.

—¿Y cómo quieres hacerlo? —inquiere Frei.

—Mira, cualquier manera de salir es mala. Si me voy solo, es pésimo. Si me voy con más ministros, es pésimo. Decídelo tú, no sé qué decir.

El Presidente asiente. Quiere decir: ya veremos.

Las negociaciones tras la repostulación de Massad se prolongan por 14 días. En el intertanto, Piñera ofrece al gobierno un acuerdo para nombrar a Massad, pero sólo por el período que restaba a Zahler, es decir, hasta fin de año. Aninat rechaza la idea sin siquiera detenerse a pensarla.

Pero los hombres de La Moneda se juegan ahora el todo por el todo. Un segundo tropiezo conduciría, sin alternativa, a una crisis completa del gabinete.

Por cierto, aires de crisis circulan ya por el gobierno: aunque sólo un par de ministros conoce la determinación de Arriagada, hay otros nombres flotando. Por ejemplo, el del ministro de Transportes, Narciso Irureta, que ha planteado al Presidente su deseo de dejar el cargo; desde entonces hay en el palacio quienes dicen que esa cartera está sin titular.

Otros consejeros, aprovechando el viento, se muestran críticos con la conducción de Mideplan, donde el socialista Luis Maira no ha podido salir de la trampa de un ministerio al que se le endilga la lucha contra la pobreza, pero que carece de autonomía, facultades y herramientas para emprenderla.

Por si no bastara, está pendiente la aprobación, también por el Senado, de la asociación con el Mercosur, que inunda con la ira y el pavor los caminos de las zonas agrícolas. Los productores creen que la competencia argentina y brasileña tendrá efectos cataclísmicos y se sienten abandonados por un modelo económico que ha transado las antiguas y arraigadas nociones de seguridad alimentaria por la prepotencia cortoplacista del intercambio exterior.

Manejando ese explosivo campo está el ministro Emiliano Ortega, hermano del esposo de Carmen Frei: en breve, concuñado del Presidente. Pero ese vínculo no impide que el Presidente, que concede alta prioridad al Mercosur, escuche con atención a los críticos del ministro de Agricultura, que le explican cómo ha cambiado desde el ruralismo cepaliano hacia la identificación con un mundo agrario al que el progreso condena al ocaso, y cómo se ha hecho estandarte de las demandas corporativas en vez de atender al mundo que al gobierno le interesa, el de los medianos y pequeños productores[2]. Peor aún, Hacienda le ha dado un suplemento presupuestario de 350 millones de dólares para atemperar los efectos inmediatos de la integración con el Cono Sur, pero las protestas de los agricultores no han cesado.

El martes 10 de septiembre de 1996 se votan en el Senado las dos aprobaciones pedidas por el Presidente: la del Mercosur y la de Massad. El dramatismo de las opciones es confirmado por la masiva concurrencia de ministros al Congreso: Figueroa, Arriagada, Brunner, Aninat, Insulza, García, Ortega, más el negociador del Mercosur, Carlos Mladinic.

—Siete ministros —dice Frei una semana después, cuando el gabinete en pleno es convocado a una sesión cuyo centro secreto es la evaluación de lo que ha ocurrido—. Siete ministros, y yo dándome vueltas durante horas por Valparaíso. Es como mucho.

El Mercosur ha sido aprobado con sólo tres votos de oposición y Massad podrá ir al Banco Central gracias a una feble mayoría de 23 a 20 (otra vez dos votos menos que los comprometidos), pero el esfuerzo empeñado le parece excesivo al Presidente.

Y la crítica genérica del gobernante esparce la duda sobre la estabilidad de los ministros.

El único seguro, al menos en apariencia, es Pérez Yoma, que debe avanzar en este septiembre el diseño de sucesión del general Pinochet para cuando tenga que pasar a retiro, a comienzos del año subsiguiente.

En el primer lugar del proceso de este año figura el vicecomandante Guillermo Garín, al que el gobierno le aplicará la ley Canessa para que pueda permanecer al menos hasta el siguiente septiembre. Un hecho parece sintomático: Garín es el primer vicecomandante que no ha sido ascendido a teniente general; sigue siendo un mayor general de tres estrellas. Si subiera a cuatro estrellas, en el paso siguiente debería obtener la quinta; pero ésa pertenece al rango de capitán general, que se ha reservado en exclusividad para Pinochet y un remoto antecesor: nada menos que Bernardo O'Higgins. Esa pequeña omisión induce a muchos a imaginar que Garín será el comandante en jefe de la sucesión.

Este año, y también en el prematuro septiembre, se prepara el retiro de los mayores generales Richard Quaas, Ramón Castro Ivanovic y Jaime Concha, con lo que el tercer lugar será ocupado por Hernán Ramírez Rurange; pero éste cumplirá sus 38 años de servicio al terminar 1997, por lo que los lugares de privilegio serán para los mayores generales Rafael Villarroel, Patricio Acevedo y los recién ascendidos Guillermo Sánchez, Ricardo Izurieta y Sergio Moreno.

GABINETE: TERCER TIEMPO			
MINISTERIOS	MINISTROS	MINISTERIOS	MINISTROS
Interior	Carlos Figueroa	Relaciones Exteriores	José Miguel Insulza
Defensa	Edmundo Pérez Yoma	Economía	Alvaro García
Hacienda	Eduardo Aninat	Educación	Juan Pablo Arellano
Justicia	Soledad Alvear	Obras Públicas	Ricardo Lagos
Agricultura	Carlos Mladinic	Bienes Nacionales	Adriana Delpiano
Trabajo	Jorge Arrate	Salud	Alex Figueroa
Minería	Benjamín Teplizky	Vivienda	Edmundo Hermosilla
Transportes	Claudio Hohmann	Secretaría Gral. Gbno.	José Joaquín Brunner
Planificación	Roberto Pizarro	Secretaría Gral. Presid.	Juan Villarzú
Corfo	Felipe Sandoval	Energía	Alejandro Jadresic
Sernam	Josefina Bilbao		

También salen este año —y Pérez Yoma lo ofrece como un triunfo significativo— los brigadieres generales Eugenio Videla y Eugenio Covarrubias, las dos cabezas de las principales operaciones de inteligencia de 1995. El ex director de Operaciones y el ex jefe de la DINE han encabezado por muchos meses la nómina de las figuras militares más urticantes para el oficialismo.

Con la remoción de siete generales no se produce el terremoto que algunos vaticinaban, pero la nueva cúpula queda preparada para el trauma mayor de la salida de Pinochet.

Por cierto: ningún ministro que esté envuelto en semejante proceso corre riesgo alguno.

En cuanto a los demás...

En la segunda semana de septiembre, a las soterradas críticas contra los ministros Irureta, Ortega y Maira se suma una nueva: la que afecta al titular de Educación, Sergio Molina. Para algunos de los asesores directos del Presidente, encabezados por Pablo Halpern, ni la condición de prócer de la DC ni la respetabilidad pública de Molina son suficientes en la conducción de Educación.

El gobierno ha definido la reforma educacional como su "proyecto estrella", pero está consciente de que sus primeros frutos comenzarán a divisarse, con alguna suerte, cuando se esté retirando.

Por tanto, es preciso darle ahora el relieve que merece, conferirle brillo, difundirlo, incrustarlo en cada rincón del país. Para ejercer el ministerio se necesita ahora un buen gestor, pero sobre todo un buen comunicador, un verdadero publicista.

En cambio, dicen los asesores, Molina permanece en su despacho, se muestra prudente, no proyecta liderazgo. Lleva una difícil negociación salarial con los profesores; más allá de sus resultados, a la opinión pública sólo le llegan noticias de ese tira y afloja interminable; nada sobre la profunda transformación que se está ejecutando.

Lo que los asesores no saben es que Molina ha hecho cálculos parecidos. Está consciente de su baja figuración pública y hasta considera que es un punto flaco en su gestión. Pero tiene presente el peligro de que una alta exposición termine por politizar la reforma, contaminándola con el indeseado ropaje de un asunto partidista en vez del vestuario histórico de una modernización mayor.

En esas cavilaciones ha estado el ministro por largo rato. Ahora hay quienes opinan que su tiempo ha terminado.

Un poco peor, al menos desde el punto de vista anímico, es la situación de Arriagada. Aunque no se siente responsable del episodio Massad, lo que éste le ha demostrado es que los afectos, pieza central en un cuadro donde los principales ministros son amigos del Presidente,

están quebrantados sin remisión. Desde que su diseño de un gobierno con los jefes de los partidos se desplomara al sexto mes de Frei, en 1994, Arriagada se ha sentido transitando una sobrevida artificial.

En 1995, cuando el encarcelamiento del general (R) Contreras enfrentó a los otros dos miembros del llamado "Círculo de Hierro", Figueroa y Pérez Yoma, el Presidente le encargó expresamente mediar en el conflicto. Tras la famosa sesión en que el ministro del Interior y el de Defensa se trenzaron a gritos en presencia de Frei, Arriagada invitó a los dos, además de Brunner e Insulza, a una cena en su casa. Muchos recuerdan su solemne discurso de sobremesa:

—Cuando los dos ministros más destacados se pelean, se divide todo el gabinete, porque todos se meten debajo de las sábanas. Yo de sábanas entiendo —dijo, y esperó que cesaran las risas para dar el tono definitivo—. En consecuencia, el Presidente tiene tres opciones: sacar a uno de los dos, lo que no es nada bueno, porque si sale Edmundo se dirá que ganó la izquierda, y si es Carlos, que ganaron los militares. La otra, menos mala, es que se vayan los dos. Y la tercera, que es la razonable, es que se entiendan, trabajen juntos y saquemos entre todos al gobierno adelante.

Aquella velada fue apacible y los involucrados parecieron estar de acuerdo en que una mínima armonía era necesaria. Unos días más tarde, el Presidente confirmó, en frente del equipo político, la misión de componedor —"articulador", se decía entonces— que le confiaba a Arriagada, una tarea que se extendería, por misión, por voluntad y por iniciativa propia, a otras zonas de conflicto del gabinete.

Pero ahora, en 1996, Arriagada ya sabe que Figueroa y Pérez Yoma aceptaron esa mediación sólo de palabra; nunca le reconocieron autoridad alguna para interponerse en sus temperamentos explosivos e impetuosos, ni menos capacidad para atenuarlos. Por el contrario, la lucha siguió feroz, amistosa y casi alegremente y en estos meses de incertidumbre Pérez Yoma parece aferrarse al proceso de renovación de la cúpula militar, mientras Figueroa se atrinchera en las elecciones que vienen.

Hay, quizás, un solo agravante: la extensión de la desconfianza. Pérez Yoma cree que Figueroa intenta disputarle la interlocución con los militares. Figueroa piensa que Pérez Yoma se ha tentado con el cargo de ministro del Interior. Ambos encuentran confirmaciones para esas sospechas en cada movimiento del otro.

Por ejemplo, Pérez Yoma ha estado opinando acerca de las condiciones en que se debe preparar la generación de un tercer gobierno de la Concertación; hasta ha pronunciado la suprema herejía para la DC: la idea de un partido federado entre los socios de la Concertación, donde se disuelvan las identidades históricas.

Arriagada no comparte la oportunidad de ese planteamiento, pero sí la preocupación por la unidad del oficialismo. Y como le parece que las elecciones que vienen pondrán en tensión al conglomerado, no halla inapropiado pronunciarse desde ya por un mecanismo más amplio que aquel que él mismo manejó para protocolizar el triunfo de Eduardo Frei sobre Ricardo Lagos en 1993: unas primarias con cientos de miles de electores. No ignora que con ello se mete en el centro de la coyuntura: la DC está presidida por Alejandro Foxley, cuyas aspiraciones como precandidato presidencial, sólidas hasta entonces, se han ido concentrando peligrosamente en el resultado de las elecciones municipales que tendrán lugar en un mes más, a fines de octubre.

Las afirmaciones de Arriagada se publican el domingo 22[3], y desde esa mañana los teléfonos de Frei no paran de sonar. El lunes, el presidente de la DC, Alejandro Foxley, y el secretario nacional, Francisco Frei, llegan a La Moneda para representarle al Presidente su molestia por la intervención "inconveniente y extemporánea"[4] de Arriagada en una decisión que es de los partidos. Luego reiteran su irritación ante la prensa.

Al día siguiente Arriagada, que en público declara su decisión de no polemizar con la cúpula DC, le dice en privado al Presidente que la radical desautorización de su propio partido confirma que no puede continuar en el gabinete. Frei guarda un silencio reflexivo.

La certeza de que su permanencia en el gabinete ya no se mide en semanas, sino en horas, amarga a Arriagada. El sentimiento de inmolación es difícil de sobrellevar en un gobierno que ha carecido de épica, que no ha tenido el heroísmo de comienzos de los 90 y que no ha sido tocado por la fortuna de la estabilidad de los equipos.

Pero si esas circunstancias ensombrecen esos días, no logran empañar un optimismo sustancial que Arriagada, como otros altos funcionarios de esta administración, conservan intacto: cuando la polvareda de los conflictos militares se disipe, cuando la hojarasca de las rencillas políticas sea barrida por los años, la historia reservará un papel trascendente al gobierno de Frei por sus transformaciones reales. Toda tecnocracia tiende a pensar lo mismo y sueña con que los gobiernos sean medidos por sus puentes, sus represas y sus leyes sectoriales, mucho más que por sus conflictos, que a fin de cuentas serán siempre expresión de dimensiones más mezquinas. Sólo que la historia no siempre es tan generosa.

Pero, si lo piensa dos veces, Arriagada no duda. Y tiene sus razones.

Durante todo el año anterior, en 1995, cuando todo el mundo político "giraba a 20 mil por hora" en torno al encarcelamiento del general (R) Contreras y parecía que la figura pública que no intervenía en ello hubiese dejado de existir, el gobierno de Frei pudo trabajar, por debajo, *sotto voce*, con escasa interferencia política, en los problemas de modernización que las "tesis de julio" habían querido definir sin gran éxito.

Fue durante ese proceso que se tramitó y aprobó la ley que reforma el sistema portuario, tanto para modernizarlo con el ingreso de capitales privados como para dinamizarlo con criterios de competitividad que no estaban entre sus prioridades.

Del mismo modo, tuvo lugar la mayor parte de las negociaciones —duras, interminables, llenas de amenazas— para la incorporación del gas natural al consumo del país, y cuando el Presidente definió esa decisión como un problema no meramente energético, sino también eléctrico, sentó un principio que debería durar por décadas, impidiendo la concentración de la industria en una sola mano e introduciendo en ella un equilibrio entre las normas y regulaciones y las nuevas oportunidades de mercado.

También logra el gobierno concordar los criterios, primero, y las fórmulas específicas, después, de la ley que permitirá incorporar participación privada a las empresas sanitarias, una disyuntiva que, además de mantener dividida a la Concertación, proyectaba el reflejo de un gobierno paralogizado y vacilante.

Además, en menos de dos años se ha puesto en marcha una reforma estructural de la educación básica y secundaria, un proceso cuyos resultados más profundos serán notorios sólo una década más tarde, pero que ya moviliza a todo el sector detrás de objetivos y motivaciones distintas de las meramente salariales.

Por fin, la nueva ley de bancos ha modernizado el sistema financiero, abriéndole las nuevas oportunidades de negocios que estuvo buscando desde mediados de los 80, y se ha puesto fin al irritante fantasma de la deuda subordinada.

Y están, claro, las cifras espectaculares de construcción de viviendas, las nuevas concesiones de carreteras, los proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo, los puertos, las ciudades, la minería de gran escala... ah, cuántas cosas.

Un trago amargo no puede arruinar tanto trabajo, se dice Arriagada. Y se lo repite una y otra vez.

A las 10 de la mañana del viernes 27 de septiembre de 1996, el Presidente y el ministro de Educación presiden una ceremonia en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, en Lo Barnechea, en la que se entregan las becas a los primeros profesores que viajarán a seguir programas de especialización fuera de Chile, la vanguardia de la reforma.

Cuando el acto concluye, el ministro Sergio Molina acompaña al Presidente Frei en su regreso al centro de Santiago. Aprovecha ese trayecto para informarle del estado de sus negociaciones con el Colegio de Profesores, que viene amenazando con una huelga general desde hace días. Para Molina es importante este diálogo porque ya ha citado a los dirigentes del magisterio, encabezados por el comunista Jorge Pavez, a una reunión en su oficina el sábado 28, y hoy mismo, al mediodía, tiene prevista una reunión con el director de Presupuesto, José Pablo Arellano, para discutir el reajuste que se dará a los maestros.

Al revés de lo que se ha planteado en el comité político, Molina quiere negociar sobre una oferta definitiva; no está dispuesto a llegar a un acuerdo que más tarde sea revisado en La Moneda porque, según ha podido apreciar, el gobierno tiene ya debilitada su credibilidad en el gremio educacional y le parece que necesita fortalecerla. Ahora quiere confirmar que el Presidente estará en Santiago durante la tarde, por si se produce alguna discrepancia radical con Arellano.

No hay tal. Al mediodía, Molina llega a algo cercano a un acuerdo con Arellano. Como ex director de Presupuesto de dos gobiernos[5], Molina conoce los márgenes de flexibilidad que nunca se mencionan en estas cosas. Por lo demás, su relación con el ministro Aninat ha sido tan fluida, que ni siquiera ha podido tensarse por los desacuerdos tácticos que naturalmente enfrentan al jefe del proyecto prioritario con el guardián de las finanzas públicas.

A esa hora, en Mideplan, el ministro Maira entrega a la prensa un documento que resume la tarea de su cartera en la lucha contra la pobreza. Después de varios informes que han podido disgustar a algunos altos funcionarios de La Moneda, como las encuestas Casen donde se afirma que la distribución del ingreso ha tenido una evolución regresiva, aumentando la brecha entre ricos y pobres, el de ahora tiene un sesgo positivo, que muestra la diversidad de acciones del Ejecutivo para reducir esos abismos.

Pasado el almuerzo, el ministro Molina aborda un helicóptero que lo lleva hasta Quillota, donde una empresa donará computadores para las escuelas locales. El vuelo se justifica porque a las 17 debe proseguir su debate con Arellano sobre el reajuste magisterial.

En esos momentos comienza el Presidente a citar a los ministros para informarles del cambio de gabinete que se anunciará al final de la tarde. Allí se entera Arriagada, con sorpresa, de que dejará el gobierno en el marco de una renovación general que abarcará a cinco ministerios. Mala cosa, le parece: pero tan mala como cualquiera otra. A su puesto llegará otro amigo del Presidente: el economista Juan Villarzú, que ha cumplido una espectacular tarea de recuperación en Codelco.

A las 17, Maira llega a La Moneda para la intempestiva citación que ha recibido del Presidente. Frei le pide en pocos minutos que lo deje en libertad de acción y le ofrece una nueva destinación en las embajadas de México o Italia, ambas próximas a la vacancia. El detalle es que ni el socialista Carlos Portales, en Ciudad de México, ni el DC Jorge Jiménez, en Roma, tampoco saben nada de lo que el Presidente está pensando sobre sus cargos. Sin conocer esto, Maira, que se siente agraviado, rechaza ambas ofertas[6].

En la hora siguiente Molina recibe la invitación para presentarse en el palacio poco antes de las 18. Pese a que los rumores invaden el ambiente y la prensa se muestra ávida, al ministro le cuesta creer lo que invariablemente ocurre: que Frei le pide la renuncia en un parco y embarazoso encuentro.

Molina se retira dolido: con otras formas hubiese evitado actuar como el ministro de plenas facultades que creía ser. (La negociación con los profesores será retomada el lunes, pero con una oferta inferior a la que Molina había negociado. Dos semanas más tarde, el debutante ministro Arellano soportará una huelga nacional de maestros.)

De los ministros que salen ese día, sólo Irureta, otro cuadro venerable de la DC histórica, tiene la oportunidad de influir en su sucesión: en lugar de que sea instalado allí Carlos Mladinic, logra que el Presidente acepte ascender al subsecretario Claudio Hohmann. No es un trueque que a Frei le disguste: Mladinic pasará, más significativamente, de su éxito con el Mercosur a ocupar la sensitiva cartera de Agricultura. Y Maira será sustituido, sin que se derrame sangre socialista, por el embajador en Ecuador, Roberto Pizarro.

El cambio destruye por dentro al "Círculo de Hierro". Aunque no la reconocieran como tal, la mediación de Arriagada ponía ciertos frenos a la confrontación entre Figueroa y Pérez Yoma. Su salida la deja al desnudo.

Deteriora también el mecanismo de toma de decisiones. El comité político, que Arriagada hacía funcionar contra viento y marea los lunes y jueves, empieza a disolverse sin remisión. Pronto Pérez Yoma dejará de asistir, creyendo que la alianza entre Figueroa y Brunner no le deja espacio para maniobrar allí.

Pese a que no lo saben, Pérez Yoma y Brunner comparten el análisis, aunque no la valoración, de lo que ocurre: el fin de la influencia de los amigos del Presidente es, para el ministro de Defensa, el fin de la inocencia; para el secretario general de Gobierno, es una oportunidad para la institucionalización del Ejecutivo.

Quien más se alegra con la caída de Arriagada es la directiva de la DC, que lo veía como un ministro perturbador en sus relaciones con el gobierno. Ahora el partido encabezado por Foxley se siente en mejor posición para la prueba de las municipales, que ha querido presentar como un apronte para las carreras futuras.

Pero el 27 de octubre el equipo de Foxley sufre un traspié definitivo, cuando las municipales arrojan un retroceso de casi tres puntos en la votación de la DC. Esa derrota gatillará una ácida competencia interna para sustituir a Foxley, que verá esfumarse sus aspiraciones como potencial candidato a la Presidencia.



Fuente: Ministerio del Interior.

Notas

1. Dávila, Lucy: *Un boomerang en el Senado*. Revista *Hoy*, N° 997, 2 al 8 de septiembre de 1996.
2. *Cambios ministeriales buscan mejorar gestión*. Diario *El Mercurio*, 29 de septiembre de 1996.
3. Alcayaga, Rosa: *Primarias con dos millones de votos*. Diario *La Epoca*, Suplemento Temas, 22 de septiembre de 1996.
4. La expresión es de Francisco Frei y su reiteración sugiere una cuidadosa elección. Ver, por ejemplo: Mora, Tatiana: *Mesa de la DC critica iniciativas de ministros sobre el "mecanismo"*. Diario *La Epoca*, 24 de septiembre de 1996.
5. De Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva.
6. Más tarde aceptará la Embajada de Chile en México, de donde Carlos Portales saldrá para dirigirse a la representación ante la OEA en Washington.

32

Que se va el canasto

El FPMR parece venir a entender a fines de 96 que los tiempos no acompañan su estrategia. Por eso, los pocos comandantes que permanecen activos planean la fuga carcelaria más espectacular, justo cuando se libra una guerra contra los jefes de la seguridad durante el gobierno de Aylwin.

La vida no siempre es generosa con las vocaciones heroicas. A Raúl Escobar Poblete, por ejemplo, le mezquinó durante años las oportunidades gloriosas; en la segunda mitad de los 80, en plena dictadura, apenas le reservó un debut como delincuente común en un asalto que fracasó y terminó con la muerte de su hermano mayor.

En la cárcel, leyendo por enésima vez *El príncipe*, conoció a Pedro Arancibia y, por él, a Mauricio Arenas Bejas, que, al menos en los estándares patibularios, era un héroe de verdad: uno de los protagonistas del mitológico atentado contra el general Augusto Pinochet. Del contacto con Arancibia y Arenas obtuvo lo que le pareció una aproximación real a la épica: el ingreso al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, bajo el nombre de *Emilio*.

Para su fortuna o desgracia, el Frente de los 90, sin Pinochet en el gobierno, ya no era lo de antes. Por eso el ascenso le resultó rápido dentro de una estructura que otrora hubiese requerido años de instrucción. Ahora bastaban la audacia, la rapidez, la decisión. Arenas, que logró huir fortuitamente de la cárcel en la fuga masiva de enero de 1990[1], fue quien le informó de su traslado a un grupo operativo especial, dependiente del comandante *Ramiro*, Mauricio Hernández Norambuena, uno de los pocos oficiales formados en Chile al que los dirigentes del FPMR procedentes de Centroamérica le reconocían competencia y rango político y militar. La primera misión de Escobar bajo su nueva unidad sería eliminar al coronel (R) de Carabineros Luis Fontaine, en compañía de un cuadro juvenil que estaría a sus órdenes, *El Negro* Ricardo Palma Salamanca.

La implacable eficacia de esa tarea determinó su ascenso a comandante, lo que implicaba ingresar en el circuito decisivo de las nuevas operaciones. Debía proponer, idear, liderar. Pero, ¿qué podía hacer un oficial sin formación de tal, sin otra luz que la de una inteligencia espontánea y autodidacta, sin más escuela que el instinto, sin más horizonte que el barrio? Eso: retornar al barrio.

En la Villa Santa Elena, su morada de toda la vida, todos conocían al sargento Víctor Valenzuela, que no ocultaba su orgullo de ser escolta de "mi general", aunque todos entendían también que tras la contenida jactancia se ocultaba el oficio más bien modesto del adelantado que ordenaba el tránsito para que la caravana de Mercedes blindados pudiera saltarse los semáforos. Escobar sabía de esas historias, las comentaba con sus amigos de siempre, conocía al sargento y hasta había compartido con él partidos de fútbol en las canchas polvorientas de la Villa.

Al amanecer del 26 de octubre de 1990 lo asesinó por la espalda.

El sargento iba saliendo de su casa cuando recibió los disparos a quemarropa, sin tiempo para defenderse o huir. ¿Alcanzaría a ver el sargento Valenzuela el feroz rostro de su verdugo, la cara del vecino, el muchacho de unas cuadras más allá? ¿Alcanzaría a oír la voz, el tono, el grito del compañero del club de la Villa?

Como quiera que fuese, ese acto confirmó el rango del nuevo comandante. Para el siguiente paso, el asesinato de Jaime Guzmán, Escobar reclutó a su antigua novia del barrio, Marcela Mardones, que entonces estudiaba en el Campus Oriente de la Universidad Católica, y apoyó el secuestro del taxi que serviría para la operación a sólo siete paraderos de su Villa. Y en el siguiente, el secuestro de Cristián Edwards, instaló su casa de seguridad en la misma Villa, acudió al lugar de reclusión en la contigua Villa Macul y participó en la decisión de liberar al ejecutivo de *El Mercurio* en las cercanías de ambos vecindarios.

Es el pequeño mundo que el comandante *Emilio* domina.

Casi siete años más tarde, a fines de 1996, puede utilizarlo de nuevo, por fin con aires estelares. El Parque Brasil, la calle Friburgo, otra casa de seguridad[2]. Y esta vez es un héroe completo, el hombre que libera a su jefe más respetado, el comandante *Ramiro*, y a su subalterno más leal, *El Negro*, todo a un mismo tiempo y bajo su personal dirección.

El comandante *Ramiro* es quien presiona a la cúpula del Frente para que lo ayude a salir de la cárcel. Sus insistentes mensajes se acumulan durante el 95 y el 96 en los custodiados refugios de los máximos jefes insurgentes, que en verdad son los únicos tres que quedan libres y que no han cedido a la reinserción política: Sergio Apablaza, *Salvador*, Juan Gutiérrez Fischmann, *Chele*, y Rodrigo Rodríguez, *Rambo* o *Rodolfo*.

En 1991, *Ramiro* había inclinado la orientación del Frente antes de que concluyera una consulta interna, con el sintético expediente de asesinar a Jaime Guzmán, cumplido por sus dos pistoleros más audaces, *Emilio* y *El Negro*. Pero la inútil violencia de esas acciones y la sucesión de derrotas, arrestos y muertes que ellas significaron condujeron a un repliegue que los comandantes ordenaron bajo un proceso de discusión interna, el famoso PDI de los años siguientes.

Para recuperarse de las heridas, los jefes del FPMR eligieron la Octava Región, que sería el centro de un asentamiento territorial destinado a reagrupar fuerzas y planificar el futuro. Entre los lugares preferidos estaría Curanilahue, la abigarrada ciudad minera situada entre la costa carbonífera y la cordillera de Nahuelbuta, casi en el centro de los 200 kilómetros cuadrados elegidos entre las provincias de Concepción y Arauco —desde la ciudad de Concepción hasta Lumaco— para la instalación de los cuadros frentistas en una red de microempresas artesanales.

En Curanilahue vivía y trabajaba Agdalín Valenzuela, *Claudio* para el Frente, F1 para la Dirección de Seguridad del gobierno. Con la confianza de los principales comandantes, pero con la convicción personal de que su lucha ya era inútil, Valenzuela ofreció al gobierno entregar a *Salvador* y a *Ramiro*, con dos condiciones: que se respetaran sus vidas y que no se detuviera al segundo en importancia, *Chele*, que como encargado de las finanzas había trabado con él una relación más estrecha.

Una noche alcanzó a pasar *Ramiro* en la casa de Agdalín Valenzuela en Curanilahue antes de sentir, el 5 de agosto de 1993, el cañón de una pistola en la sien derecha y ver a su compañero en el suelo, en lo que le pareció un desesperado forcejeo. *Ramiro* fue condenado a dos cadenas perpetuas y una ristra de años adicionales. A Valenzuela, que portaba un arma, lo "pasaron liviano" al tribunal, lo que en la jerga *tira* significa que se omitieron elementos inculpatorios en el parte. Debido a eso, el ministro en visita que llevaba los casos de Guzmán y Edwards, Alfredo Pfeiffer, lo dejó en libertad.

Dos años más tarde, en la madrugada del 11 de octubre de 1995, Agdalín Valenzuela fue asesinado en un camino rural cercano a su ciudad sureña, junto a su jeep, de dos balazos en la cabeza y dos en el tórax. Se ha dicho con profusión que fue esa sospechosa liberación de la cárcel lo que determinó que el Frente lo identificara como informante del gobierno. Pero la demora de

dos años sugiere que esa conclusión vino mucho después, y no es irrelevante que en el intertanto, a partir de noviembre de 1994, el recién exonerado subcomisario Jorge Barraza iniciara sus denuncias contra la jefatura de Investigaciones y la extinguida Oficina de Seguridad por manejar a informantes e infiltrados en el Frente[3].

Para entonces, la tesis de la Guerra Patriótica Nacional, iniciada en 1988 por el comandante *José Miguel*, Raúl Pellegrin Friedmann, ya había sido desechada en la discusión interna del Frente. El propio padre de *José Miguel*, Raúl Pellegrin Arias, aportaría la metáfora de los girasoles —que "se nutren de la vida y buscan el sol"— para favorecer un giro hacia la inserción en entidades de base, sindicales y poblacionales, que fue ratificado en 1996 por el Primer Encuentro por la Reorganización del Rodriguismo.

Sin embargo, ese viraje estratégico tendría pocas posibilidades de éxito si los combatientes históricos permanecían en la cárcel. No sólo por el riesgo de fraccionamiento envuelto en la situación de un comandante carismático y ejecutivo como *Ramiro*, sino también por algo más grave: ¿quién volvería a creer en unos jefes que abandonaban a los suyos?

En octubre de 1992, un grupo de frentistas había ensayado una fuga a balazos desde la Penitenciaría, pero el intento derivó en un baño de sangre[4]. Tres militantes lograron huir: Manuel Venegas, Francisco Díaz Trujillo y Luis Moreno. Otros tres murieron en los alrededores: Mauricio Gómez Lira (*Pum-Pum*), José Miguel Martínez Alvarado (*Palito*, miembro del grupo del secuestro de Edwards) y Pedro Ortiz. El hermano de este último, Patricio Ortiz, fue recapturado herido, lo mismo que Pablo Muñoz Hoffman, que aumentó a once las cicatrices de balas de su carrera rodriguista[5].

A fines de ese año, Maritza Jara, también miembro del equipo del secuestro, logró huir pacíficamente, con un carnet de identidad falso, de la cárcel femenina de San Miguel. Pero con ella cesaron las evasiones.

Con la proliferación de presos subversivos, Gendarmería se vio ante el peligro de que se desatara la mecánica de la "cárcel combatiente", el principio inventado por Sendero Luminoso, y seguido por la ETA y el IRA, según el cual los presos de importancia pueden continuar dirigiendo operaciones desde la prisión, aprovechando su derecho a visitas.

La decisión del gobierno consistió en seguir el modelo inglés, con el que Londres había logrado controlar las cárceles donde tenía a los militantes del IRA: quebrar la convivencia mediante celdas solitarias, bloquear las visitas a través de locutorios y restricciones reglamentarias, espiar conversaciones privadas con cámaras de video y micrófonos, realizar allanamientos continuos, minar la autoestima política.

Sobre esa base se construyó, dentro de la Penitenciaría, la Cárcel de Alta Seguridad, un grupo de módulos en el que ninguna celda estaría en contacto con el suelo —adiós túneles—, los patios segregarían por peligrosidad —adiós bandas— y las visitas serían prolijamente controladas.

La CAS debutó en febrero de 1994, pero a poco andar debió relajar los controles con que había sido diseñada: por influencias parlamentarias, humanitarias, corporativas y hasta judiciales: lo que se llama presión social. Sólo esas condiciones pueden explicar que, por ejemplo, el comandante *Ramiro* compartiera su celda con un fiel subordinado, *El Negro*.

Aun así, parecía una fortaleza inexpugnable. Tanto, que a comienzos de 1996 la Dirección de Seguridad comenzó a recibir persistentes informaciones de que el FPMR podría planear una fuga con la modalidad más bárbara, llamada *la mexicana*: una balacera anárquica, combinada con toma de rehenes y atentados externos, con costos no calculables.

Hacia el segundo trimestre esa versión evolucionó hacia una más viable: un coche bomba podría derribar una de las murallas de la CAS y crear el forado para una rebelión caótica. En respuesta a esos rumores Gendarmería reforzó las guardias perimetrales y prohibió estacionar en las calles adyacentes. En paralelo, se previó una posibilidad externa: el secuestro de figuras políticas para desafiar al gobierno con un canje por prisioneros, según los modelos de las Brigadas Rojas y el Ejército Rojo de Liberación.

Pero los planes del FPMR seguían otra dirección. En esos mismos días, por mayo del 96, *Ramiro* desechó las alternativas tradicionales y propuso la opción, perfectamente descabellada, de un rescate por aire; su único fundamento razonable era lo que había ocurrido el año anterior, con el encarcelamiento del general (R) Contreras, donde el gobierno había mostrado no tener un perfecto control de las operaciones aéreas. Y cuando su tenacidad consiguió que *Salvador* y *Chele* la consideraran más que una humorada insólita, ya había llegado julio.

Aquellos eran buenos días para un golpe de suerte. Por primera vez la seguridad del oficialismo se hallaba debilitada, ya no sólo por el relajo de las prisiones y los inevitables escrúpulos de mantener presos políticos en democracia, sino por factores estructurales, como la sospecha de que en sus años de mayor eficacia, del 91 al 93, la represión del gobierno había transgredido la ley.

Gatillo y percutor de esas acusaciones había sido el subcomisario Jorge Barraza, el ex jefe de la BIOC que después de su exoneración por el director de Investigaciones, Nelson Mery, había comenzado a hacerlas públicas a través de un grupo elegido de periodistas.

En abril de 1996, con sus antecedentes sobre la identidad de *Chele*, Barraza consiguió que el ministro Pfeiffer reabriera el sumario de los casos Guzmán y Edwards, con una orientación que inequívocamente apuntaba a establecer que los directivos de la Oficina entre 1991 y 1992 habían trabado relaciones hasta tal punto turbias con la subversión, que incluso pudieron proteger a algunos de sus líderes para dominar a otros.

El ministro Pfeiffer, el tercer magistrado que tenía el caso[6], se dio a la tarea con singular esmero durante casi tres meses. A fines de junio parecía claro que dictaría imputaciones contra Mery y los directivos de la Oficina Jorge Burgos y Marcelo Schilling. Pero esa posibilidad resultó intolerable al ex Presidente Patricio Aylwin, que divisó, con razón, un intento de enjuiciamiento moral a la gestión de su gobierno en seguridad pública. Cuando la indignación de Aylwin llegó a oídos de La Moneda, el propio Presidente Frei comisionó al ministro del Interior Carlos Figueroa para explicarle que la prescindencia del gobierno se debía a razones de estrategia judicial e imagen pública.

Pero, terminada la reunión, Figueroa cambió esa prescindencia por una intransigente defensa de los funcionarios involucrados. El abogado del Ministerio del Interior Luis Toro recibió las instrucciones pertinentes, que pasaban por sobre la opinión del subsecretario Belisario Velasco, principal adversario interno de la Oficina en los días críticos del 91. El ministro Pfeiffer, que ya había sido objeto de un extraño atentado a fines de abril, vio desfilar en la prensa un repertorio de insinuaciones: un hermano nazi, ciertos juicios antisemitas, la simpatía del pinochetismo, un derechismo a ultranza. Nada muy claro, todo muy destructivo.

El 27 de junio de 1996, Pfeiffer renunció a seguir conociendo el proceso, con base en un artículo del Código de Procedimiento Penal que invita a los jueces a inhibirse cuando han desarrollado "enemistad, odio o resentimiento" hacia los inculpados. Aunque Pfeiffer fue luego amonestado por la Corte Suprema[7], su inusual dimisión dejó al gobierno con la desventaja de un ambiente judicial y político adverso.

El signo más claro fue la decisión de la madre de Jaime Guzmán de cambiar al abogado y ex ministro Miguel Alex Schweitzer por el ex militante comunista Luis Hermosilla, un salto que descolocó a la clase política: ¿un ex comunista persiguiendo responsabilidades por el crimen del fundador de la UDI, perpetrado justamente por un grupo emergido del PC? ¿Cuál podía ser el significado de semejante operación?

Paradoja sobre paradoja, el ex subcomisario Barraza, definido como uno de los mejores policías antisubversivos pero también como un ex agente de la CNI durante el régimen militar, tomó como abogada a la militante socialista Pamela Pereira, figura emblemática de la lucha de los familiares de detenidos desaparecidos. La estrategia de Barraza, de revelaciones sucesivas y concéntricas, conservando siempre el misterio sobre cuál sería la última capa de la verdad, estaba teniendo una eficacia devastadora[8].

El debate hizo emerger las ocultas rivalidades de la seguridad durante el gobierno de Aylwin. Como amigo de Isidro Solís, ex director de Gendarmería y luego de Seguridad, y aliado del subsecretario Velasco, Hermosilla apuntó su estrategia en contra del grupo paralelo constituido por la Oficina. Por razones más políticas que administrativas, esa definición marginó a los responsables democratacristianos —Mario Fernández y Jorge Burgos— y se concentró en el socialista Marcelo Schilling, que como jefe operativo del sistema había sido el encargado de montar los mecanismos de desarticulación del FPMR, y en el director de Investigaciones, Nelson Mery.

En ambos personeros se interesó la ministra que sustituyó a Pfeiffer, Raquel Camposano, a partir de julio del 96. Y fue Isidro Solís quien le permitió iniciar una nueva línea de indagaciones, ya no centrada en la presunta protección de la Oficina a los jefes rodriguistas, sino en delitos conexos relacionados con operaciones encubiertas y la mantención de informantes pagados.

La tesis que el ex subcomisario Barraza no logró demostrar —que *Chele* fue protegido por la Oficina para evitar la implicancia de Cuba, puesto que estuvo casado con la hija de Raúl Castro, Vilma Castro Espín— derivó en una indagatoria sobre una transferencia de fusiles de guerra desde el FPMR hacia el Destacamento Mirista Pueblo en Armas, una operación movilizada en 1992 por el informante Humberto López Candia, y dirigida por el funcionario de la Oficina Oscar Carpenter, con el presunto fin de abortar un atentado contra el alcalde UDI de Las Condes Joaquín Lavín y que luego fue presentada por el gobierno como un golpe contra la subversión.

¿Qué movía a Barraza, Hermosilla, Solís, Pereira? ¿Qué querían ocultar Schilling, Burgos, Mery, Carpenter? Las versiones son demasiado contrastantes como para creer ciegamente en alguna de ellas. El hecho cierto es que el gobierno sufrió una fractura cuyo clímax público llegó cuando, en octubre del 96, el abogado del Ministerio del Interior Luis Toro pidió a la jueza que interrogara... al subsecretario Velasco.

Si esa maniobra extremó la tensión interna hasta un grado intolerable, también permitió limitarla en adelante. Velasco declaró en favor de Schilling y Burgos y la ministra Camposano se halló en un páramo donde sólo podría formular imputaciones por presuntos delitos conexos.

Pero eso no la inhibe. El 18 de diciembre, la ministra dicta órdenes de procesamiento contra Schilling, Carpenter y el subcomisario de Investigaciones Jorge Zambrano, por el caso del traslado de armas; contra Méry, por no haber entregado a la justicia un video filmado por la BIOC en torno a los frentistas veraneando en Colliguay; y contra Barraza y los policías Juan Ponce, Roberto Araneda y Jaime González, por facilitar la salida ilegal del país de un menor[9].

Cinco días más tarde, y tras haber asistido a un áspero debate jurídico en el Consejo de Defensa del Estado, que se ha hecho parte del caso, el abogado Davor Harasic alega fervorosamente para que la Corte de Apelaciones rechace los recursos de protección de Schilling, Mery y otros y confirme el procesamiento.

Pero al día siguiente de la Navidad, el 26, dos de los tres jueces de la Corte votan por acoger el recurso de los imputados[10]. 24 horas más tarde, el Consejo de Defensa del Estado, ahora presidido por la abogada Clara Szczaranski, también ex comunista, decide no apelar al fallo por una estrecha mayoría de 7 a 5.

Tras esa determinación, que ve influida por una fuerte presión del Ministerio del Interior, Harasic renuncia a su empleo de dos décadas.

Mala suerte: va a dejar su carta final a La Moneda el lunes 30 de diciembre, el único día en que todos están demasiado ocupados para atenderlo[11].

La *Operación Vuelo a la Libertad* comienza en septiembre de 1996, cuando un contacto con el IRA confirma que las hermanas irlandesas Christine y Frances Shannon, militantes del Sinn Fein, brazo político del IRA, estarán disponibles para viajar a Chile bajo cobertura turística.

En noviembre, *Emilio* parte desde Concepción a Santiago con un frentista más joven entrenado en tiro en el sur. En la capital lo espera un antiguo militante comunista que ha vivido por

años en Argentina y que, con la identidad falsa de *Luis Carlos Distéfano*, debe realizar los trámites públicos. A mediados de ese mes, simulando ser un operador turístico, *Distéfano* arrienda por primera vez un helicóptero en la empresa Lassa, para llevar a supuestos clientes extranjeros. Los vuelos son a lo menos cuatro en los días siguientes, y sólo una persona se repite en ellos: un hombre de 39 años, hijo de militantes comunistas desaparecidos, que emigró de Chile tras terminar la secundaria y se hizo piloto en el extranjero. Su tarea, ahora, es estudiar las máquinas, las rutas y sus rutinas.

A principios de diciembre, *Distéfano* logra que Lassa le arriende un helicóptero UH Bell Long Ranger, que puede transportar a seis o siete personas con amplia autonomía de vuelo, y lleva a sus turistas de paseo por el Cajón del Maipo. De regreso, como humorada, piden al piloto sobrevolar la represa de Rapel.

Abajo ven pasar al helicóptero los otros frentistas de apoyo. *Distéfano*, ahora con el nombre de *Roberto Diselli*, ha arrendado la Villa Meme, una casa a orillas del lago, y una parcela en El Manzano, cerca del poblado de Las Cabras, a pocos kilómetros de Rapel. En la villa del lago toman sol una de las irlandesas y una argentina, Marcela Alejandra Acevedo, aportada al equipo por el mismo *Distéfano*.

Además, el supuesto argentino compra, en dólares contantes y a través de avisos económicos, dos autos: un Subaru Legacy de tipo *station* y un Lada también con formato de furgón, ambos usados. El vendedor del Lada, a la vista de tanto billete fresco, fotocopia su pasaporte: será la única huella gráfica de su paso por Chile. Las otras señales las dejan las irlandesas, que alojan, por separado, en el apart hotel Los Españoles y en el hotel Irazú, ambos en los barrios más apacibles de Providencia[12].

El 14 de diciembre el equipo dirigido por *Emilio* se reúne en Rapel para celebrar con un asado el 13° aniversario del FPMR. Esa tarde, tocado por la emoción de la efeméride y por las copas del ocaso, *Emilio* les informa que son parte de una unidad de combate bautizada Mauricio Arenas Bejas[13] y que su misión es rescatar a los hermanos atrapados en la CAS.

Informado de cada detalle de los preparativos, en el interior de la cárcel el comandante *Ramiro* modifica sus rudimentarias sesiones de filosofía política por unas tardes de videos de acción. Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Jean Claude van Damme, incluso el pesado Sylvester Stallone transitan por el video de la celda, ante el asombro y la exaltación de los otros presos, siempre mejor dispuestos para una balacera que para una reflexión.

Para entonces *Ramiro* ya ha seleccionado a los cuatro que entrarán en la operación: él mismo, *El Negro* y los sobrevivientes de la fuga del 92, Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro. Un quinto, el único remanente de los presos por el secuestro de Edwards, Rafael Escorza, queda marginado[14].

Por esos días la Dirección de Seguridad nota que el ambiente de las cárceles se ha enrarecido. Sus informes registran demasiados intentos de introducir elementos extraños al penal, hallazgos de planos, allanamientos que han dado con piezas de armas de fuego, croquis, mensajes cifrados, encargos encubiertos. Cuando sus análisis llegan al Ministerio del Interior, Gendarmería ha tomado sus propias medidas: dado que en diciembre se conmemoran fechas relevantes para la subversión, la posibilidad de fugas o motines es más alta. Las guardias deben ser reforzadas[15].

El viernes 27 de diciembre, día D, la operación se pone en marcha desde las 7.30, cuando *Distéfano* sale en el Legacy con el piloto, las dos irlandesas y *Emilio*, desde Rapel a Santiago. Los pasajeros bajan en el centro, para ir al hall del Hotel Tupahue, y *Distéfano* entrega el auto a un frentista que debe llevarlo hasta un costado del Parque Brasil, en La Granja, a las espaldas de la familiar Villa Santa Elena.

Distéfano llama entonces a la empresa de transporte turístico que ha contratado, recoge de nuevo a sus compañeros en el hotel y se dirigen al aeródromo de Tobalaba. Pero allí, el gerente e hijo del dueño de Lassa, Juan Griffin, les tiene una sorpresa desagradable: el UH Bell Long

Ranger ha sido arrendado a otros turistas que lo requirieron de urgencia. Pero podría ser uno francés, un Alouette, muy bueno.

—¡No! —grita *Distéfano*, descontrolado, antes de darse cuenta de que debe dominar la situación—. Lo mejor, quiero lo mejor para mis clientes. Decime, ¿cuándo me podés tener el otro? ¿El lunes, puede ser?

Sí, dice Griffin, cómo no, con una garantía por adelantado, tal vez unos mil dólares... *Distéfano* los deja, con una ancha sonrisa comprensiva. Las irlandesas deben cambiar sus pasajes aéreos y los argentinos postergan el arriendo de un taxi para viajar a Mendoza. En la cárcel, *Ramiro* y los demás desesperan. Hasta el domingo no tendrán informaciones sobre la suspensión de la operación.

El lunes, *Distéfano*, las irlandesas, el piloto y *Emilio* repiten la rutina del día D. Sólo cambian el lugar de recogida: el restaurante Lomitón de Tobalaba con Providencia.

A las 12.50 despega el helicóptero desde Tobalaba y enfila en diagonal hacia el sur para tomar su rumbo a las Termas de Chillán. Veinte minutos más tarde, una de las irlandesas declara que se siente mal y *Distéfano* persuade al piloto para aterrizar cerca de Las Cabras. El carabinero Daniel Sagredo, que realiza este trabajo en sus horas libres, accede y se queda contemplando cómo la mujer vomita sin contención cuando *Emilio* le pone la pistola en la sien.

Con perfecta coordinación, el otro militante venido desde el sur aparece en el Lada portando los fusiles M-16, las granadas de mano, los implementos de blindaje y lo más valioso de todo: un canasto confeccionado con 27 fajas de keblar, una tela antibala obtenida de chalecos robados. El canasto colgará de una cuerda trenzada de montañismo, y llevará una angarilla a modo de escudo.[16]

Tras esposar y amarrar al piloto, *Distéfano* lo lleva hasta la casa de Rapel, donde quedará encerrado hasta la noche. Luego parte a Santiago para abordar el taxi que esa tarde lo lleva a Mendoza por el paso Los Libertadores. En paralelo, las hermanas Shannon viajan hacia el aeropuerto de Pudahuel y abordan aviones distintos: uno a Sao Paulo y otro a Buenos Aires.

Tres hombres abordan el helicóptero: *Emilio*, el piloto frentista y el militante sureño. Luego de equiparlo con vidrios antibala y placas metálicas, se elevan con lentitud por el cielo de la Sexta Región. Pero no es fácil orientarse en el aire: por 40 minutos vagan, perdidos, hasta que el piloto toma el rumbo. Cuando entran a Santiago pierden otro rato al sur de Santa Rosa, ensayando descensos y suspensiones sobre los terrenos de La Platina, el fundo que la Universidad de Chile tiene en ese sector.

A las 15.35 aparece el helicóptero sobre la Penitenciaría. *Emilio* y su ayudante inician el fuego sobre el edificio administrativo y las torres de vigilancia; desde el aire las desesperadas carreras de los gendarmes parecen un juego de niños. El aparato sobrepasa varios edificios antes de llegar al patio del módulo H, llamado El Bronx, donde un balde amarillo señala que allí esperan, agazapados, *Ramiro* y los otros.

Mientras la máquina queda suspendida sobre el patio, *Emilio* arroja el canasto y su ayudante sostiene el fuego sobre las casetas de vigilancia. Los gendarmes no disparan; sólo alcanzan a buscar refugio. Es una ley de la cárcel, incluso para sus custodios, que la vida está primero[17].

El Negro y Muñoz Hoffman saltan sobre el canasto. Ortiz y *Ramiro* los siguen, pero el comandante, que se demora unos segundos, sólo puede colgarse de los bordes, y debe soportar el golpe contra uno de los muros de la cárcel que el canasto sufre cuando el helicóptero se eleva. Apenas aferrado, seguro de que caerá, *Ramiro* aguanta los cuatro minutos que demora el vuelo hasta el Parque Brasil. Los demás no alcanzan siquiera a sentir el vértigo de la altura: el canasto gira sobre su eje de suspensión como un frenético tiovivo.

Cuando aterrizan sobre la cancha de tierra del Parque, los siete corren hacia la calle donde los espera el Legacy. Unas cuadras más allá, dentro de la Villa Santa Elena, lo abandonan y se separan. El piloto y el ayudante se alejan por las callejuelas; *Ramiro* y los cuatro fugados abordan una camioneta que los lleva hasta la casa de seguridad, administrada por una veterana militante comunista.

Aquella tarde, en el camino a Casablanca, a donde ha ido a buscar unos muebles, el director de Gendarmería, Claudio Martínez, piensa en dos posibilidades cuando ve a los helicópteros policiales que rondan sobre la ruta 68: un gran asalto o una gran fuga. No le cuesta averiguar que se trata de lo segundo y hasta adivina el tono de las primeras llamadas que recibirá: frenética, la del ministro Figueroa; parsimoniosa, la del subsecretario Velasco.

En La Moneda se suceden las reuniones de emergencia, y hay propuestas para cerrar carreteras, aeropuertos, fronteras. Pero nada de eso es posible en una víspera de Año Nuevo. Al otro día presentan sus renuncias los ministros Figueroa y Soledad Alvear, y los directores de Seguridad, Mario Papi, y de Gendarmería, Claudio Martínez. El Presidente Frei sólo acepta la de este último, pese a los amargos lamentos del Partido Socialista.

Dado que en la fuga se han ido los responsables de los principales delitos del Frente en los años recientes, la sensación de desastre se extiende en el gobierno. Hacia el fin de semana, el ministro Pérez Yoma maniobra para convocar a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la que las Fuerzas Armadas darán su respaldo al Presidente.

Mientras la polémica se aplaca lentamente, los cuatro fugados salen de Chile con documentos falsificados. Ortiz, con el aparente deseo de separarse del Frente y reanudar una nueva vida, se muestra ante la prensa en Suiza y solicita asilo político. Los otros tres permanecen en Cuba, bajo la no reconocida protección del gobierno de Fidel Castro. La evidencia de ese amparo la proporciona *Ramiro*, que no resiste el deseo de llamar a su madre. Cuando los investigadores preguntan por los números telefónicos de La Habana desde donde se hacen las llamadas, el gobierno cubano responde que están fuera de servicio.

Casi un año más tarde, en diciembre de 1997, *Salvador* reaparece con un anuncio que rompe un silencio de meses: la transformación definitiva del FPMR de grupo armado en movimiento político-social.

Notas

1. Ver capítulos 10 y 11. El presente texto tiene continuidad con los capítulos referidos.

2. La policía detectará estas concordancias, como se puede ver en: *Mapa en mano, analistas policiales estudian el triángulo de "Emilio"*. Diario *Las Ultimas Noticias*, 10 de enero de 1997.

3. *El expediente confidencial*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.233, 26 de noviembre de 1994.

4. Años más tarde, el informante de la Oficina Humberto López Candia planteó graves dudas sobre el origen de esta fuga, sugiriendo que fue manipulada por el organismo de gobierno. También hubo graves acusaciones sobre la conducta de Gendarmería en el caso de las muertes de Gómez Lira y Martínez Alvarado, así como de las heridas sufridas por Muñoz Hoffman y Ortiz durante su arresto. Un resumen de estas sospechas en: Gonçalves, Udo João: *La otra fuga*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.382, 4 de octubre de 1997.

5. Pablo Muñoz Hoffman fue herido durante un asalto fallido a un camión de Prosegur en el Campus Oriente de la Universidad Católica, el 22 de enero de 1992. Su hermano Alexis y Fabián López Luque lograron huir, ingresaron a la casa de la familia Rivera Calderón, resistieron durante medio día con rehenes en su poder y murieron a manos de la policía, tras una jornada que fue transmitida en directo por la TV y conmocionó al país. Pablo Muñoz Hoffman fue también identificado como el autor de los disparos contra los ex generales de la FACh Gustavo Leigh y Enrique Ruiz, el 21 de marzo de 1990, aunque posteriormente los testigos presenciales se desdijeron de sus afirmaciones.

6. Los dos anteriores fueron Guillermo Navas y Marcos Libedinsky, que debieron dejarlo tras ser ascendidos a ministros de la Corte Suprema durante 1993.

7. La decisión fue polémica. Estuvieron por una sanción mayor los ministros Osvaldo Faúndez y Germán Valenzuela; por la amonestación, Lionel Béraud, Marcos Libedinsky, Oscar Carrasco, Mario Garrido y Luis Correa; y por la exención, Servando Jordán, Marcos Aburto, Efrén Araya, Hernán Alvarez, Roberto Dávila, Enrique Zurita y Arnaldo Toro.

8. Para un análisis sobre la gradualidad de las informaciones de Barraza: Robino, Carolina: *La trama invisible*. Revista *Hoy*, Nº 987, 24 al 30 de junio de 1996.

9. Se trata del hijo de la sicóloga francesa Emmanuelle Verhoeven, casada con chileno, que trabajó en Gendarmería y recibió la ayuda policial y sicológica de Barraza en sus problemas matrimoniales. El mismo subcomisario la mencionó ante la ministra Camposano como una pieza importante dentro del FPMR, aunque sus nexos reales nunca fueron comprobados.

10. Carlos Cerda y Humberto Espejo. El voto disidente es de Cornelio Villarroel.

11. A comienzos de enero, la Corte Suprema confirma el fallo de la Corte de Apelaciones y libera definitivamente a Schilling y Mery de los cargos formulados por la jueza Camposano. Schilling y otros funcionarios de la Oficina continuarán mencionados en un proceso que lleva la justicia militar por presunta infracción a la ley de control de armas. La jueza Camposano no será propuesta por el gobierno para la Corte Suprema en varias ocasiones sucesivas.

12. Afani, Paula: *¡Estas son las irlandesas de la fuga!* Diario *La Tercera*, 12 de junio de 1997.

13. Arenas Bejas había muerto de cáncer, en condición cercana a la de indigente, en un hospital de la provincia de Buenos Aires, el 12 de octubre de 1991.

14. Escorza, arrendatario de la casa donde el FPMR mantuvo a Edwards, dirá más tarde que su exclusión fue voluntaria y debida a que su mujer, Cristina San Juan, también condenada, permanecía internada en el hospital de la Penitenciaría, bajo el asedio de una enfermedad terminal. Afani, Paula: *"Yo decidí no fugarme de la CAS"*. Diario *La Tercera*, 18 de marzo de 1997. Sin embargo, es claro que por razones técnicas la fuga fue planificada sólo para cuatro, peso máximo que podía resistir el helicóptero. El principal cronista de los hechos no dice nada claro sobre este aspecto, aunque su estilo barroco suele aportar más especulación que información: Palma Salamanca, Ricardo: *El gran rescate. Desflorando al viento*. Lom Ediciones, Santiago, 1997.

15. *Cárceles estaban advertidas*. Diario *La Segunda*, 2 de enero de 1997.

16. Lipari, Daniela: *Operación Rescate*. Revista *Hoy*, Nº 1.015, 6 al 12 de enero de 1997.

17. Sólo tres balas impactaron en el fuselaje del helicóptero y una en el canasto. Aunque el director de Gendarmería afirmará que los guardias dispararon desde cinco puntos y el informe oficial consignará el empleo de 188 tiros, está claro que esa munición fue gastada después de que el helicóptero dejó el penal. Así lo constató un periodista que fue testigo accidental de los hechos. *Fernando Martínez, testigo: "Los disparos que escuché fueron siempre al aire y posteriores al desaparecimiento del helicóptero"*. Diario *La Segunda*, 2 de enero de 1997. Sobre el punto de vista de Gendarmería: *Informe de Gendarmería a Ministra Alvear la madrugada siguiente a la evasión*. Diario *La Segunda*, 15 de enero de 1997.

33

La carambola de Bombal

No era concebible que la UDI propiciara la destitución del presidente de la Corte Suprema. Pero cuando se fue sobre Servando Jordán logró dos efectos: la renovación de la Corte y un cambio político que le reportó ganancias netas en las elecciones de 1997.

En la madrugada del lunes 7 de abril de 1997, una cincuentena de agentes de Investigaciones se despliega en silencio por la ciudad. Llevan órdenes de allanamiento para una docena de domicilios en las comunas de Las Condes, Providencia y Conchalí y de detención inmediata para 12 personas. Un grupo especial llega hasta una casa señorial del sector de Pedro de Valdivia Norte y notifica al hombre que es el centro de esta inusitada movilización.

—No he hecho nada malo en Chile —alcanza a decir el arrestado.

Pero los policías no creen lo mismo. Esa mañana son intervenidas 34 cuentas bancarias y el Consejo de Defensa del Estado presenta escritos para bloquear bienes, depósitos y vehículos de todos los detenidos. La pesada ley 19.366, que hace posible la severidad y la agilidad de estas medidas, se cierne sobre ellos: es el nuevo cuerpo que sanciona el tráfico de estupefacientes[1].

Y el protagonista estelar es Mario Silva Leiva, el archiconocido *Cabro Carrera*, con prontuario delictivo desde la infancia, expulsado por la Junta Militar en diciembre de 1973 junto a un grupo de sospechosos de narcotráfico y retornado al país en los tumultuosos días de 1988, que mueve una fortuna estimada en 100 millones de dólares y que figura en todos los grandes archivos policiales del mundo[2].

Su detención revela por primera vez la existencia de la *Operación Ana Frank*, que toma su nombre del último punto de la red investigada: Holanda, el país donde penó y murió la niña judía. La operación ha sido llevada desde 1995 por Investigaciones, el Consejo de Defensa del Estado y la jueza del Quinto Juzgado del Crimen de Valparaíso, Beatriz Pedrals, que el 13 de diciembre de 1996 abrió proceso contra Luis Rodolfo Torres Romero, *El Olfo*, hijastro del *Cabro Carrera*[3].

La estrategia ha sido presidida por un sigilo juramentado entre policías y abogados, a sabiendas de que si la banda la detecta, moverá todos sus recursos para anular las evidencias. Y ha estado a punto de fracasar varias veces, aunque el momento crítico se ha producido en enero del 97, cuando la policía italiana, quebrando la coordinación lograda con los investigadores europeos, reveló la detención de la ex modelo Vanessa Díaz con más de un kilo de cocaína. Vanessa Díaz es hijastra de Rita Romero, pieza clave en la organización del *Cabro Carrera*, y ese episodio fue suficiente para que los líderes del grupo emigrasen de inmediato a Buenos Aires.

Pero la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, logró que los periodistas diesen poca lumbre al caso y, sintiéndose más seguros, Silva Leiva y sus hombres han regresado a Santiago. Lo que ignoran es que por los mismos días, en Amberes, la policía

belga ha detectado un cargamento a bordo del mercante *Kristinstar* y mantiene presos a seis operadores del Cabro Carrera.

Para entonces, la *Operación Ana Frank* ha conseguido establecer lo esencial: la banda de Silva Leiva opera como *broker*, comprando droga en Bolivia, transportándola por camiones hasta el puerto brasileño de Victoria y despachándola luego hacia el puerto de Amberes, desde donde viaja por tierra hacia Rotterdam, centro de la distribución minorista para Europa. El dinero retorna a Chile mediante una delicada telaraña de transferencias menores.

Hay algo más: la Drug Enforcement Agency de Estados Unidos atribuye la peligrosidad de Silva Leiva a su talento para penetrar, en cualquier lugar del mundo, dos instituciones decisivas: la justicia y la policía.

Por eso las intercepciones telefónicas, las filmaciones, las grabaciones, las fotografías y los seguimientos que realiza el Departamento Quinto de Investigaciones, el grupo de asuntos internos de mayor confianza del director Nelson Mery, son mantenidos en hermético secreto durante meses. Y por eso Clara Szczaranski reacciona con sorpresa cuando, 20 días después de las detenciones, durante un almuerzo protocolar en el Hotel Carrera, el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, le comenta sobre la existencia de ciertas anomalías en un proceso por falsificación de pasaporte contra Rita Romero, que ha sido sobreseída sin explicación de ese delito y vuelta a procesar poco después.

En realidad, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado está inquieta desde mucho antes. Y ha pasado a la alarma desde la semana anterior, cuando la jueza Pedrals le contó que el 11 de abril, Jordán le pidió que lo mantuviese informado sobre el proceso. Jordán tiene sus propias razones, porque el 9 la abogada Szczaranski ha declarado a la prensa que aún faltaría conocer la implicancia de funcionarios policiales y judiciales.

Todo lo que sigue es muy rápido.

El 12 de abril, el Consejo de Defensa del Estado amplía la querella en contra de dos actuarios por sus relaciones con un procurador al servicio de Silva Leiva. El 23, Jordán, que dice haberse enterado por la prensa, llama a la jueza Pedrals y le solicita tales antecedentes; en los días siguientes, el presidente de la Suprema interroga a los actuarios; el 5 de mayo, el Consejo amplía su denuncia, ahora contra Marcial García Pica, el fiscal de la Corte de Apelaciones jubilado recién en enero; el mismo día, el abogado secretario de Jordán, Jaime Gutiérrez, pide a la jueza esa nueva pieza; el 6, la abogada Szczaranski se entera por un periodista de *La Nación* que el nombre de García Pica ha sido obtenido desde la propia Corte Suprema; el 9 visita a Jordán para informarle, pero el presidente le dice que ya conoce los casos.

Esta veloz espiral de sucesos culmina entre el 10 y el 13 de mayo, cuando Jordán declara que en su opinión ni los actuarios ni el ex fiscal están envueltos con el narcotráfico.

Las intervenciones irritan al Consejo de Defensa del Estado, que divisa una abierta perturbación en la causa más grande iniciada en el país contra la droga. ¿En qué quedan esas conversaciones interceptadas donde Silva Leiva llama "padrino" a García Pica y le pide favores judiciales? Y además, ¿qué hace el presidente de la Corte averiguando sobre el caso de Rita Romero? ¿De dónde sale tanto interés, qué lo motiva?

El viernes 30 de mayo, los diputados Carlos Bombal y Pablo Longueira se encuentran solos en la sede de la UDI, en calle Suecia. Bombal está impresionado por las actuaciones públicas de Jordán; le parece que confirman tres cosas: el abandono de la justicia hacia los sectores populares; su laxitud en la lucha contra la droga; y las versiones que le han dado acerca del estilo del presidente de la Corte Suprema. Apenas unos días atrás, un empresario le reveló que durante una cena, el propio Presidente Frei había expresado su molestia con la conducción de la Corte Suprema.

Longueira comparte esas preocupaciones. No es abogado, sino ingeniero civil, pero ha sentido lo mismo en las poblaciones de la zona sur que recorre a menudo. Hace unos meses visitó al presidente subrogante de la Corte Suprema, Marcos Aburto, para contarle de acusaciones que

circulaban contra el titular Jordán y para explicarle, más genéricamente, su inquietud por el deteriorado prestigio de la administración de justicia.

El ingeniero sabe que en su partido vibran cuerdas idénticas. ¿Por estrategia, por cálculo político? Las cosas son más complejas. Gracias a la inserción que ha logrado en sectores populares, la UDI ha obtenido una percepción más intensa del drama que allí significa la penetración de la droga; ha notado la abstracción —no siempre interesada, pero sí ideologizada— con que lo afrontan otros sectores políticos; y si lo une con las dos zonas de impacto directo de la droga —la delincuencia y la salud—, se puede apropiar de tres campos estratégicos que han sido abandonados por la Concertación o, más exactamente, por el gobierno. Tres banderas perfectas.

—Pero ustedes los abogados —dice Longueira, enfático como siempre— son todos iguales. Llevas meses hablándome de la justicia y todavía no haces nada. ¡Ahora hay que decidirse!

Mientras anochece, la proverbial cautela de Bombal cede al ímpetu de Longueira: mejor dicho, uno y otro se potencian. En medio de la fuerte polémica por el caso Silva Leiva, Jordán ha tomado sus vacaciones y un espeso manto de dudas comienza a extenderse sobre el Poder Judicial. Hasta el diputado Teodoro Ribera, de Renovación Nacional, ha formulado ácidas críticas contra el presidente de la Corte.

El sábado, los dos diputados ofrecen una conferencia de prensa —la UDI tiene esa costumbre: conoce la escasez de noticias y las altas circulaciones de los diarios del domingo— en la que conminan al presidente de la Corte a no reasumir su cargo hasta que se aclare el caso Silva Leiva.

La conmoción que se suscita el domingo les confirma que están en el rumbo deseado. El lunes visitan al presidente subrogante, Aburto, y le entregan sus apreciaciones sobre la gravedad de lo que ocurre.

Aburto los escucha y revela que, tras su disputada elección en el máximo cargo del Poder Judicial, en enero de 1996, donde apenas obtuvo la mayoría que la tradición debía asegurarle, Jordán, afectado, se quejó de que sus males se debían a la amistad con algunos abogados que se dedicaban a excarcelar narcotraficantes.

En la semana que sigue, Jordán suspende brevemente sus vacaciones, vuelve a la capital y el martes 10 declara a una muchedumbre de periodistas que de Bombal, de quien "antes no sabía que existía", tiene "algunos antecedentes" que "en un supuesto, también los podría hacer valer". Cuando le preguntan por los antecedentes, agrega que puede ser "que es un hombre muy cariñoso, que es un hombre excepcional, o que es otra cosa".

La primera llamada que recibe Bombal tras la difusión de esas frases proviene de Longueira:

—¡Bingo! —exclama—. Ahora hay que seguir adelante.

Pero, camino al Congreso en Valparaíso, Bombal se interroga sobre el sentido de las crípticas amenazas de Jordán. ¿"Cariñoso"? Entonces recuerda que, habiendo trabajado por años en el Banco O'Higgins con la esposa del magistrado, Diana Jadrievic, alguna vez pasó a felicitarla por el nuevo cargo de su marido. Piensa: es una apelación combinada con una amenaza; lo peor.

Tras reunirse con los parlamentarios de su partido, toma la decisión final: emplazar a Jordán públicamente para que en 24 horas entregue sus antecedentes, públicos o privados. Y lo que Jordán responde, esa misma tarde, es que sólo se ha referido a un reportaje de la revista *Cosas* en el que se le pregunta por el caso de un detenido-desaparecido[4].

Entonces Bombal y Longueira anuncian el paso siguiente: una acusación constitucional contra el presidente de la Corte. La UDI, algunos de cuyos dirigentes han dudado hasta entonces de la prudencia de los diputados, se pone en fila tras ellos y su presidente, Jovino Novoa, los insta a proseguir cuando recibe los primeros mensajes acerca de que Bombal y Longueira pueden estar atacando a gente "nuestra".

Algunas de esas insinuaciones provienen del Ejército: del mayor general Víctor Lizárraga y del auditor general Fernando Torres Silva, que consideran que la destitución de Jordán es un paso muy peligroso. Después de todo, Jordán también fue nombrado por el entonces ministro Hugo Rosende y, aunque no disputó con Hernán Cereceda en su cercanía al régimen militar, tampoco se puede decir que haya sido un adversario.

Quien percibe con mayor nitidez la difícil posición en que comienza a entrar la Corte Suprema es la ministra de Justicia Soledad Alvear. El 10, tras reunirse con los ministros Carlos Figueroa y José Joaquín Brunner, le propone al Presidente un paso audaz, casi un salto: pedir un Pleno a la Corte, al que asistirá ella misma para exponer la posición del gobierno sobre "algunos problemas de la justicia".

Seis días más tarde se sienta junto a todos los ministros del tribunal máximo y lee un discurso en el que insta a terminar con prácticas viciosas de los tribunales, como los "alegatos de pasillo", las reuniones entre jueces y abogados, las influencias de familiares y los ejercicios poco transparentes de algunos abogados integrantes.

No se refiere a la acusación contra Jordán. Pero sabe que flota como un espectro en el salón. Tampoco ignora que, apenas en el verano, Bombal ha tenido su primera polémica pública con Jordán cuando lanzó un ataque contra la práctica de los "alegatos de pasillo", que el presidente de la Corte replicó desde Linares, donde era agasajado por otro diputado, esta vez de Renovación Nacional: Luis Valentín Ferrada.

Los vínculos de Jordán con RN no terminan ahí. Todo el mundo tribunalicio conoce su amistad con el ex senador Hugo Ortiz de Filippi y hasta se le atribuye un discreto papel en la iniciativa de éste para destituir al ministro Cereceda, su proverbial adversario en la Corte.

Pero lo que la ministra busca ahora no es ponerse de uno u otro lado entre los partidos de la oposición, sino llevar las aguas tumultuosas del momento hacia el molino de su reforma judicial. En la Suprema se radica la mayor resistencia a los cambios y el dominio de los hombres instalados por el ministro Rosende, que pueden permanecer sin límite de edad, es todavía ominoso.

Cuando la Corte responde a los planteamientos de gobierno anunciando algunas medidas administrativas de poca monta, la ministra, que las declara "insuficientes", sabe que el tribunal mayor se acaba de poner a merced de una negociación política, porque el consenso sobre sus defectos es ya demasiado extenso.

Ha echado a andar, acaso sin quererlo, el engranaje por el cual será transformada a fondo.

Y son las reflexiones de la ministra Alvear —prudentes, formuladas como si lo hiciera para sí— las que disuaden a Bombal y Longueira de que su embestida contra Jordán no debe convertirse en una bomba de fragmentación contra toda la Corte.

Para sus indagaciones, los diputados se han repartido tareas: Bombal queda a cargo de los casos de Rita Romero y los actuarios y el ex fiscal; Longueira investiga la excarcelación, en 1991, del traficante colombiano Luis Correa Ramírez, cabecilla de la mayor internación de cocaína conocida en el país.

Correa Ramírez, empleado de José González Rodríguez Gacha, una eminencia del Cartel de Medellín, obtuvo su libertad mediante una laboriosa estrategia de recursos de queja y luego se fugó de Chile[5]. Pero en su liberación no intervino sólo Jordán, sino también, en diversas etapas, los ministros Osvaldo Faúndez, Enrique Zurita y Marcos Aburto. Por tanto, la acusación tendría que abarcar a cuatro de los ministros más antiguos, con lo que se convertiría en un golpe mayúsculo contra la Corte. Bombal y Longueira, que se convencen de que la excarcelación fue operada por Jordán pero no pueden excluir a los otros, deciden incorporar el caso a su escrito, aunque sin convertirlo en capítulo de la acusación.

(El Partido Socialista, en cambio, tomará este episodio como el más significativo, y presentará su propia acusación contra los cuatro ministros, sin la menor posibilidad de éxito. Sin embargo, Bombal votará a favor con el único fin de mostrar su consecuencia. También en este caso la ministra Alvear intentará disuadir a los acusadores, sólo que sin éxito.)

Bombal descubre otra veta en su trabajo. Una hermana del ministro Luis Correa Bulo ha sido sobreseída del cargo de narcotráfico por el Pleno de la Corte Suprema. Pero aquí los problemas son mayores: de un lado, el ministro Correa Bulo es considerado cercano al gobierno y su amistad con altos funcionarios de la administración Aylwin podría generar complicaciones incalculables; del otro, la acusación tendría que abarcar al Pleno del tribunal superior. ¡Toda la Corte Suprema puesta en jaque por la UDI! Ni hablar: Correa Bulo no llegará a ser mencionado en el escrito.

Hacia el fin de junio, Bombal y Longueira llegan a otra conclusión tras reunirse con dirigentes de todos los partidos: no podrán acusar a Jordán de participar en una red de protección al narcotráfico y a Silva Leiva, como hubiesen deseado, porque para ello tendrían que utilizar versiones que no podrían comprobar en un juicio, ni aun político. Por eso el escrito, firmado por 10 diputados de la UDI[6], se limita a tres capítulos: la intervención de Jordán en el proceso contra Silva Leiva; sus actuaciones en el proceso contra Rita Romero; y las amenazas contra el diputado Bombal, todas las cuales configurarían la causal de "notable abandono de deberes".

El 2 de julio, por sorteo, la Cámara de Diputados elige a la comisión que debe informar sobre la acusación: Ignacio Balbontín, Ramón Elizalde e Ignacio Walker (DC), Carlos Valcarce (RN) y nada menos que el ex presidente de Renovación Nacional, Andrés Allamand.

Allamand está trotando en Viña cuando su chofer le avisa del sorteo en la Cámara, y el dirigente de RN presiente que hay en esto una imprevisible jugarreta del azar. En la tarde será elegido, además, presidente de la comisión.

Bombal y Longueira viajan en sus autos cuando se enteran de la elección de Allamand, y el segundo no puede contener su euforia ante la extrañeza del segundo, que no sabe muy bien cuál es el alcance del hecho. La lógica de Longueira es implacable: si Allamand apoya la acusación, dará legitimidad a Bombal y se pondrá en segunda fila respecto de él; si la rechaza, se lo podrá acusar de ceder a mezquinos cálculos políticos y de mostrar debilidad en la lucha contra la droga. Longueira tiene incluso un pronóstico: como quiera que sea, Allamand se equivocará.

La cercanía de las elecciones hace que cualquier decisión sea muy difícil. Las campañas están por comenzar y por segunda vez Bombal y Allamand se enfrentarán dentro de un mismo pacto, ahora por el escaño senatorial de Santiago Oriente.

En verdad, muchos meses antes, cuando la disputa con el Poder Judicial ni se divisaba, la UDI había planteado a RN que una competencia entre dos dirigentes de ese calibre sería fratricida. En 1993, los dos habían conseguido duplicar a la Concertación en el distrito de Las Condes, pero sólo por un margen estrecho y con Allamand en segundo lugar. La campaña había sido dramática y nadie quería repetirla, ni menos con el agravante de que duplicar en el extenso territorio de la circunscripción senatorial sería imposible.

Por eso la UDI había propuesto que ambos candidatos salieran de Santiago. Bombal podría emigrar a la Décima Región, donde la UDI carecía de candidato, y Allamand moverse hacia la Cuarta; incluso Evelyn Matthei, que aspiraba a esa región con el cupo de la UDI, se había mostrado dispuesta a partir hacia la Segunda. En Santiago operarían con omisiones: RN apoyaría al jefe de la UDI, Jovino Novoa, en el Poniente, y la UDI devolvería la mano a quien RN quisiera —eventualmente, Angel Fantuzzi— en el Oriente.

Pero Allamand se había visto atrapado por dos circunstancias: la aspiración del diputado Eugenio Munizaga, uno de sus más fieles aliados, de pasar a la senaturía por La Serena, y la presión —subrayada una y otra vez por su lugarteniente y nuevo presidente de RN, Alberto Espina— de que si quería ser el siguiente candidato presidencial debía luchar en Santiago.

Al tomar la opción de permanecer en la capital, Allamand entendía que se hacía cargo de los riesgos más altos, casi absolutos, casi definitivos. Era un juego de todo o nada. Dado ese cuadro, Bombal, que ya lo había vencido a una escala menor, tendría ahora la misión adicional de detener la pretensión presidencial de Allamand en Santiago Oriente.

En esa sorda e incipiente refriega están cuando el destino los alcanza en la acusación contra Jordán. Allamand sabe que su posición es la peor: como centro de la imputación sobre consumo de drogas entre parlamentarios lanzada por Francisco Javier Cuadra, todos sus movimientos serán objeto de sospechas. Si acusa a Jordán, le imputarán un esfuerzo por blanquear su imagen; si no lo hace, dirán que devuelve el favor que la Corte le hizo al encarcelar a Cuadra.

Esa es su motivación principal para modificar los procedimientos usuales de una comisión informante. Todas las garantías de un debido proceso serán adoptadas, habrá publicidad para sesiones y documentos, se dará información a la prensa y se reglamentarán en detalle las reuniones.

Pero Bombal y Longueira, que asisten a las sesiones aunque no pueden formar parte de la comisión, sospechan desde el comienzo que el propósito no es la transparencia, sino la derrota de la acusación. Así creen confirmarlo cuando el diputado Teodoro Ribera plantea con insistencia la necesidad de apegarse a las normas de un proceso como cualquier otro. Y les parece ver nuevas señales en los enervados días que siguen: Allamand habla con los periodistas, maneja las actas, distribuye la información. Y sobre todo, esa insistencia en los procedimientos...

El clima se enrarece a toda velocidad. Apenas al terminar la tercera sesión, Longueira acusa a Allamand de manipular el sentido de la acusación: la quiere plantear, dice, como si a Jordán se le imputara participar en una red de protección al narcotráfico y no como los diputados de la UDI lo han hecho, denunciando su intervención indebida en procesos en estado de sumario. Allamand rechaza con vehemencia los cargos y la discusión sube de tono durante largos minutos. Longueira no está dispuesto a detenerse: más tarde exige que el altercado figure en el acta, de la que había sido excluido.

Las cosas empeoran cuando Bombal descubre, dentro de una larga lista de procesos recientes vistos en la Suprema, un procedimiento administrativo iniciado en su contra por un abogado que solicitó a la Corte Suprema que investigase el caso mencionado en la revista *Cosas*. El Pleno de la Corte ha rechazado la petición en un santiamén, pero es un síntoma de los métodos que se intenta usar en su contra.

Como respuesta a la "máquina" que divisa, y en especial al manejo de Allamand, Bombal lanza una campaña de rayados en los muros de Santiago Oriente: "Bombal, duro con la droga".

Esa decisión confirma a Allamand lo que ha venido sospechando: que la UDI quiere obtener provecho electoral de la acusación.

Allamand ha iniciado su gestión como presidente de la comisión con estas aprensiones. No tiene buena opinión de Jordán, pero desconfía del hecho de que la UDI haya buscado modificar sobre la marcha el fondo de su acusación original —participar en una red de protección— y le parece que, paso a paso, las imputaciones se van debilitando hacia la crítica de procedimientos judiciales que, siendo inadecuados, constituyen ya una costumbre por la que no cabría derribar a un solo magistrado. Cree, por fin, que el esfuerzo de destituir a Jordán se funda en argumentos que no están en la acusación, sino en las versiones que circulan sobre él, como se hizo con Cereceda; y no puede eludir el hecho de que en aquel caso él mismo promovió sanciones contra los senadores de su partido que actuaron de ese modo.

La convicción de que Jordán ha tenido comportamientos "necios" no lo persuade para llegar a acusarlo. Las opiniones de la comisión se dividen: tampoco Walker ni Valcarce apoyan la iniciativa de la UDI. Sí lo hacen los otros dos DC, Balbontín y Elizalde.

La sesión convocada para debatir el informe y votar la acusación es la más tensa del año. Jordán designa como su defensor al diputado Ferrada y Bombal se pone al frente de los acusadores.

Sólo que Bombal ha recibido, de un miembro de RN, una información previa: en la sesión se mencionará que, cuando era alcalde de Santiago, el diputado de la UDI firmó la venta de un local comercial a una hermana del *Cabro Carrera*. El argumento servirá para demostrar que en cargos de importancia se puede tomar decisiones discutibles sin por ello estar asociado a la mafia. Bombal ha podido investigar el origen de ese dato y descubrir que fue sacado del Archivo

Judicial, de entre cientos de otras transferencias. ¿Quién pudo conocer un caso tan remoto y minúsculo, sino los propios interesados? Entonces llama al diputado Ferrada para advertirle de la maniobra; sin embargo, no lo encuentra.

Por eso decide denunciarla en la parte final de su discurso. Ferrada, que lo sucede en el uso de la palabra, niega que fuese a usar una cosa semejante y enfila su defensa hacia la gravedad que entraña la destitución del jefe del Poder Judicial sin fundamentos suficientes. En un lenguaje cargado de metáforas, reflexiona sobre la culpa y la inocencia y hasta se excede cuando recuerda el "juicio más injusto de la historia", el de Cristo.

Los argumentos vuelan en las horas siguientes, mientras los jefes de bancada hacen febriles cálculos sobre las probabilidades de voto. La UDI, que ha tenido la esperanza de inclinar en su favor a los diputados de RN Maximiano Errázuriz y María Angélica Cristi, nota con desaliento que el primero no asiste a la sesión y la segunda se retira.

Dos intervenciones relumbran en la extensa sesión. Una, la del diputado del PPD Jorge Schaulsohn, que desacredita la objetividad tácitamente concedida a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski. Y la de Allamand, entre las últimas, donde explica su opinión en virtud de la dicotomía entre una acusación formal y otra encubierta. Hacia el final se hace cargo de las complicaciones personales de su decisión: las encuestas, que insinúan que "es tanto más fácil, más popular y más rentable acusar a Jordán"; las denuncias de Bombal sobre una "máquina" para proteger al presidente de la Corte, "máquina (que) está aquí, esta máquina somos nosotros"; y la sospecha final:

—Aquí están mi padre, mi mujer y mi hija mayor. ¡No gasten pólvora en gallinazos! —desafía—. Si quieren imputarle a alguien el cargo de estar devolviendo algunos favores, se los digo con toda franqueza: háganlo conmigo. No tengo nada que esconder.

La votación se precipita justo a la medianoche del viernes 25 de julio, después de interminables postergaciones con que el presidente de la Cámara, Gutenberg Martínez, intenta esclarecer cómo se contarán los votos de abstención. El resultado asombra a todos: 52 a favor, 52 en contra. Hay una sola abstención: la del presidente del PS, Camilo Escalona, que se separa de la mayoría de su partido porque sospecha que la UDI ha podido tener un propósito de venganza contra Jordán por el encarcelamiento del general (R) Manuel Contreras.

Pero esa duda salva a Jordán. La acusación es rechazada. En las votaciones queda registrado el desgarro de la Concertación. Mientras todo RN se alinea con Allamand y toda la UDI con Bombal, en el PS y el PPD hay votos a favor y en contra. La más dividida es la DC, algunos de cuyos mejores abogados pasan a las filas del rechazo, mientras sus figuras más combativas permanecen del lado de la destitución[7]. Las influencias se superponen: el ex Presidente Aylwin y el presidente del partido, Enrique Krauss, se oponen a la acusación y arrastran a un grupo de diputados; otro grupo, liderado por Andrés Palma, Gabriel Ascencio y Tomás Jocelyn-Holt, se declara contrario a la línea promovida por la dirigencia superior y moviliza votos por la acusación[8]. (La situación se repetirá dentro de pocos meses ahora frente al senador Augusto Pinochet.)

En la UDI se esparce un sentimiento de frustración. La caída de Jordán hubiese sido un enorme triunfo político.

Sin embargo, otra vez es Longueira quien los convence de que, pese a todo, no hay derrota, sino una probable victoria mayor. En su rápida apreciación, Allamand acaba de destruir su postulación senatorial; con ella ha arrastrado además a buena parte de RN; y, por si no bastara, también se han sepultado las laboriosas aspiraciones de Escalona por la senaturía de Santiago Oriente, donde ahora mejoran inesperadamente las expectativas para Jovino Novoa.

En el intertanto, la ministra Alvear ha avanzado a toda velocidad en su objetivo de aprovechar el crispado debate del Congreso para reformar la Corte Suprema. Ha contribuido a ello, en forma imprevista, la voluntad del nuevo presidente del Senado, Sergio Romero, que está adquiriendo un fuerte perfil dentro de Renovación Nacional, con la previsible intención de instalarse como potencial candidato alternativo a Allamand.

En virtud de esa ayuda, la ministra consigue lo que hasta hace unos meses parecía inimaginable: una reforma para forzar el retiro de los magistrados de la Suprema a los 75 años, ampliar el número de miembros, eliminar a los abogados integrantes y abrir plazas para juristas procedentes de fuera de la carrera judicial[9].

Como la reforma tendrá vigencia desde fines de año, al despuntar 1998 habrá una Corte Suprema considerablemente renovada, con ya muy escasos vestigios de la era de Rosende, y unos métodos de funcionamiento despejados de las turbulencias actuales. Seis ministros deberán irse por edad y otros cinco llegarán desde fuera: 11 rostros nuevos sobre un total de 21.

La ministra no puede saberlo todavía, pero antes del fin del año un nuevo estímulo se añadirá a los jueces de mayor edad para dejar la Corte: la designación de dos senadores que le corresponden, y que desatará una insospechada competencia interna para ganar los votos de los pares por anticipado, con el objeto de retirarse antes de las fechas límites.

Las elecciones parlamentarias se realizan el 11 de diciembre.

Allamand es derrotado ampliamente por Bombal en casi todas las comunas de Santiago Oriente. Novoa vence a Fantuzzi en el Poniente y la candidatura de Escalona sufre el traspié más brutal: menos de un 16%. El daño para RN no se limita a su ex presidente: el partido pierde 8 de sus 10 candidatos a senadores, casi todos a manos de la UDI, y su bancada de diputados se reduce de 31 a 23.

También caen la DC, el gobierno y la participación electoral. Los únicos triunfadores claros son dos hombres que no han corrido la carrera, dos candidatos que se guardan para el 99: el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que queda sin competencia tras el doble golpe de Bombal, y el ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, cuyos partidos superan a la DC.

Antes de finalizar el año Allamand oye decenas de condolencias callejeras por su derrota: muchas, muchísimas, vienen de gente anónima que dice ser de la Concertación. "Me quieren los que no me votan", piensa. Poco después toma la decisión de emigrar a Estados Unidos. Por algún tiempo: el que sea necesario.

ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE 1997

PARLAMENTARIAS				
PARTIDO	%	DIPUTADOS	SENADORES	
			ELECCIÓN 93	TOTAL
PDC	22,98	39	10	14
PPD	12,55	16		2
PS	11,10	11	1	4
PR	3,13	4		0
RN	16,78	24	2	7
UDI	14,43	21	7	9
UCC	2,14	1		1
Ind. Der.	4,66			1
PC	6,86			
P. del Sur	0,36	1		
AHV	2,91			
Indep.	0,70	3		

Notas

1. *Diario Oficial*, 30 de enero de 1995.

2. Sobre el pasado y las andanzas internacionales de Silva Leiva, ver: Salazar, Manuel: *Traficantes & Lavadores*. Editorial Grijalbo, Santiago, 1996.

3. Quinto Juzgado del Crimen de Valparaíso: Causa Rol Nº 75.954, Tomo 1-A.

4. González, Mónica: *Carlos Bombal: "Jamás fui nexo de la DINA"*. Revista *Cosas*, Nº 531, 31 de enero de 1997. El caso es el de Alejandro Avalos Davison, detenido por la DINA en la Universidad Católica cuando Bombal era jefe de gabinete del rector. En la entrevista Bombal aclara que la DINA cumplió su cometido pese a que él mismo advirtió a la unidad académica de Avalos, y que posteriormente declaró en los tribunales la verdad de lo ocurrido.

5. En agosto de 1989 fueron capturados en Arica 500 kilos de cocaína pura y detenida la banda encabezada por Correa Ramírez e integrada por los colombianos Luis Cuesta Pérez y Sayl Sánchez Quebrada, el boliviano Hans Kollros Eterovic y el chileno Angel Vargas Parga. Correa Ramírez comenzó a pedir su libertad desde octubre de 1990 y la obtuvo el 22 de abril de 1991. Vargas Parga fue indultado más tarde por el Presidente Frei. Para el detalle de la maniobra judicial del colombiano, ver: Cámara de Diputados: Legislatura 335ª, Ordinaria, Sesión 26ª, especial, viernes 25 de julio de 1997. En particular, el informe de la comisión y los anexos que contienen: la defensa escrita de Jordán; la exposición de Guillermo Piedrabuena, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado; y la declaración de Jorge Correa Selamé, el relator de la Corte que informó la queja que dejó en libertad al traficante.

6. Francisco Bartolucci, Carlos Bombal, Juan Antonio Coloma, Sergio Correa, Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Juan Masferrer, Jaime Orpis, Víctor Pérez y Jorge Ulloa. El texto completo, en una separata del diario *La Segunda*, 27 de junio de 1997.

7. Cámara de Diputados: Legislatura 335ª, Ordinaria, Sesión 26ª, especial, viernes 25 de julio de 1997.

8. Otros detalles sobre el cruce de votos en: *Los salvavidas de Jordán*, Revista *Qué Pasa*, Nº 1.373, 2 de agosto de 1997.

9. Sobre esta negociación: Dagnino, Francisco: *Un voto de trasnoche*, Revista *Hoy*, Nº 1.045, 4 al 10 de agosto de 1997.

34

El ministro que caía de a poco

El ministro de Defensa fue perdiendo la influencia y la fe en el gobierno durante casi dos años. Enemistado con sus colegas de La Moneda, se encerró en su propia cartera para dedicarse a una tarea central: el retiro del general Pinochet.

Fueron el azar y un cierto retraso, mucho más que la convicción, los que convirtieron a Edmundo Pérez Yoma en uno de los más tempranos lugartenientes políticos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Simplemente se demoró tanto en decir que la aventura presidencial le parecía prematura, que cuando fue a hacerlo el candidato ya estaba decidido y no quedaba más que apoyarlo. Eso ocurrió en 1989, cuando su amigo Genaro Arriagada, verdadero gestor de la idea allá por comienzos de la década, dio cuerpo a una nueva coalición dentro de la DC para iniciar la saga que culminaría en 1993.

Para ese año ya se los consideraba a ambos como los hombres fuertes de la candidatura. Pérez Yoma se hizo cargo de la campaña y Arriagada del programa, y ese reparto de funciones quedó implícito durante mucho tiempo más: uno para las tareas ejecutivas difíciles, otro para el diseño estratégico.

Lo que nunca quedó claro fue cuál sería el número dos del gobierno; pero ambos imaginaron que esa posición no se ejercería desde el Ministerio del Interior porque, pese a su alta visibilidad, no es allí donde se realizan las políticas de Estado, las decisiones estratégicas, los planes de largo plazo. Eso creían; y les parecía que Interior estaba condenado a las operaciones con los partidos, el manejo de la policía y los líos con los intendentes. Ni uno ni otro pensaban en la política como una urdimbre de pequeños filamentos[1].

Así, el problema del número dos no se resolvería con un cargo, sino en la práctica. Esa tensión nunca expresada entre los dos amigos que se aliaron en los 80 para ganar algún espacio en los grupos del PDC atravesó todo el gobierno que contribuyeron a formar en los 90.

Por eso Arriagada no hubiese imaginado un comité político como el que diseñó para coordinar al gobierno sin la presencia de Pérez Yoma. Y éste tampoco hubiese concebido estar fuera del circuito de La Moneda.

Aunque fue un crítico de su gestión en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Pérez Yoma conservó la fuerza de su voz mientras Arriagada estuvo allí. A la inversa, desde la crisis con Carabineros, en 1994, Pérez Yoma mantuvo al Ministerio de Defensa lejos de la injerencia del equipo político y reservó el manejo de los problemas militares para sí, en contacto exclusivo con el Presidente Frei.

Si esa celosa administración del secreto le permitió resolver dilemas de alta complejidad, como el encarcelamiento de Contreras, también alentó la desconfianza de los demás ministros.

las sospechas del equipo político y un criticismo trepidante hacia la política de Defensa entre la Concertación[2]. Pero ninguno de estos costos resultaba determinante mientras contara con la aprobación del Presidente y tuviera pendiente la tarea más importante: el relevo del general Pinochet de la Comandancia en Jefe del Ejército.

Tal vez por eso en septiembre de 1996, Pérez Yoma no alcanza a percibir el deterioro de su situación en el gabinete. En el vacío sin bordes, ¿cómo se puede saber si uno va cayendo? Tampoco lo notan otros; las apariencias son muy sólidas. En ese mes sale Arriagada, entra a La Moneda Juan Villarzú y concluye formalmente el "Círculo de Hierro"; pero no porque los amigos personales del Presidente se alejen —de hecho, Villarzú también lo es—, sino porque las relaciones de solidaridad se han quebrado irremediablemente.

Para entonces, el ministro del Interior, Carlos Figueroa, piensa que su amigo Pérez Yoma ha cambiado de objetivo y pretende sustituirlo en el cargo. Apoyan esa hipótesis muchos de los funcionarios de confianza de La Moneda y un ambiente de fronda se ha ido formando contra el equipo entero de Defensa.

Pero quien más recela de Pérez Yoma es el ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner, que cree ver en su estilo amenazas más profundas. Por ejemplo, la inclinación hacia un "modelo coreano", una *entente cordiale* entre altos funcionarios del Estado, jefes militares y grandes grupos empresariales, embarcados todos en una democracia de cúpulas, con jalones autoritarios, que no confía en las libertades públicas sino como una mascarada y que no cree en el mercado sino en la selección deliberada, por parte de la alianza fáctica, de sectores estratégicos para hacer frente a la competitividad del mundo.

Brunner comenta sus pesadillas con el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, y hasta se las detalla: a los militares les puede seducir un modelo en el que compartan la tutela política y económica, y ciertos empresarios estarán siempre disponibles para construir, como en Seúl, las *chaebols* que dominen una economía repartida en reuniones palaciegas.

Para el ministro del PPD, la encarnación de ese peligro es el sistema de relaciones personales del "Círculo de Hierro". Le parece que el único modo de contenerlo es que el gobierno funcione en forma institucional, no con reuniones de amigos. Y en su opinión el gran des-institucionalizador es el ministro Pérez Yoma.

Coincide con Brunner su segundo, Pablo Halpern, director de la Secretaría de Comunicación y Cultura, aunque por razones ligeramente distintas: desde que se ha asignado como misión cuidar la imagen del Presidente, Halpern se siente obligado a recelar de todo aquello que pueda poner en duda su autoridad o su eminencia. El estilo informal, áspero, demasiado directo, de Pérez Yoma es disfuncional a ese propósito; a veces parece que fuese él la autoridad y su trato coloquial con el Presidente no lo protege de impresiones derogatorias.

No obstante ser también amigo del titular de Defensa, Villarzú comparte la visión "institucionalista" de Brunner cuando llega a La Moneda. Como le disgusta el estilo del comité político, que se ha convertido en un equipo ejecutivo, lo deja languidecer mientras estudia un nuevo modelo de funcionamiento.

Una vez que revive los comités interministeriales da con la solución: un comité político ejecutivo, integrado por los tres ministros de La Moneda, llevará en adelante la agenda diaria; y un comité político interministerial, en el que se agregarán Pérez Yoma, Aninat y el canciller José Miguel Insulza, hará el análisis estratégico cada quince días. Para eludir los problemas de hegemonía que han mantenido en vilo al gabinete, convence al Presidente de que él mismo lo dirija.

Cuando recibe la minuta de Villarzú con el nuevo diseño, Pérez Yoma percibe que el Presidente, poco afecto a esta clase de reuniones, no le conferirá importancia. "No va a funcionar", profetiza.

Y no se equivoca.

Jorge Rosenblut, militante del PPD, ha sido nombrado subsecretario general de la Presidencia durante la gestión de Arriagada para hacerse cargo del *management* del ministerio, su flanco más débil. Arriagada ha quedado descontento por los "excesos" de iniciativa de su subsecretario y en especial por sus contactos con la empresa privada. A la llegada de Villarzú, el propio Rosenblut plantea que, teniendo el nuevo ministro una amplia experiencia gerencial, tal vez resulte incompatible su permanencia.

Pero Villarzú decide probar. Entonces comienzan a multiplicarse en algunos medios los reportajes sobre los "*top ten*" y los "Frei *boys*", que exaltan la presencia, en cargos claves del gobierno, de ejecutivos entre 30 y 45 años, con alta competencia técnica, liberales, posmodernos, cosmopolitas, sin prejuicios con el empresariado, sin atavismos con las ideologías, pragmáticos, rápidos, voraces. Se trataría de un grupo "transversal", a cuya cabeza se identifica a Rosenblut.

Quien reacciona con mayor virulencia contra este nuevo grupo, y contra la operación publicitaria que lo sustenta, es justamente Pérez Yoma, que propone en el comité político la salida inmediata de Rosenblut. También apunta contra Halpern, pero la seca reacción de Brunner lo contiene de momento.

Unos días después, al terminar octubre de 1996, el presidente y el vicepresidente del Comité Representativo de Entidades Judías, Elimat Jason y León Dobry, visitan al ministro Brunner y le expresan su inquietud por la versión de que el ministro de Defensa y el subsecretario de Obras Públicas, Guillermo Pickering, se han referido en diversas reuniones a una "troika judía" integrada por Rosenblut, Halpern y el gerente general de Corfo, Eduardo Bitrán.

El caso adquiere ribetes de escándalo en 48 horas, cuando el presidente del PPD, Jorge Schaulsohn, denuncia el empleo de "expresiones racistas" y el periodista Fernando Paulsen, en el programa de TVN *Medianoche*, revela los nombres de los altos funcionarios.

Lo que sigue es una polémica agria y sin salida. Aunque la prensa entrega detalles de fechas y lugares[3], Pérez Yoma y Pickering niegan tenazmente tales comentarios. Pérez Yoma exige que Brunner formule un desmentido a nombre del gobierno, pero el ministro vocero lo rechaza. Y cuando Rosenblut, que ha mantenido vigente la preocupación de la comunidad judía, formula declaraciones sobre el ministro de Defensa, su superior, Villarzú, le quita todo respaldo. Rosenblut deja el gobierno el 14 de noviembre.

Pero el efecto de fondo es otro. Pérez Yoma llega, sólo por descarte, a la convicción de que Brunner es responsable de la difusión de estas versiones. Cuando lo acusa, durante una reunión a gritos, Brunner dice que se limitó a recibir a los dirigentes judíos, confirmar que hubo expresiones de ese tipo y quitarles toda connotación de antisemitismo. A Pérez Yoma esto le parece casi peor y por ello declara su completa desconfianza en el comité político. A partir de entonces asiste sólo esporádicamente y, cuando lo hace, rehúsa aportar información. No está dispuesto, dice, a que luego se filtre todo hacia alguna prensa.

Los enfrentamientos se vuelven ciegos y mecánicos: Figueroa, Villarzú y Brunner de un lado, Pérez Yoma e Insulza del otro. ¿El tema? Cualquiera. Todos. Lota, los indígenas, los profesores, la salud, las sanitarias.

A comienzos de 1997, con el equipo político liquidado, el gobierno intenta prepararse para su penúltimo año, que además será electoral. Propósito general, según lo plantea Villarzú, es despejar la agenda oficial de elementos accesorios, dar un nuevo énfasis a las políticas sociales y fijar las metas del año.

En lo político, Villarzú, apoyado por Figueroa y Brunner, propone un nuevo proyecto de reforma constitucional para eliminar a los senadores designados y, ante la certeza de que Pinochet ocupará su escaño vitalicio, conferir ese derecho también al ex Presidente Aylwin.

Los ministros de La Moneda concuerdan en que es altamente probable que la reforma sea rechazada. Pero les parece que en un año en que el gobierno se verá enfrentado a la obligación de designar senadores, al menos debe dejar constancia de su rechazo a la institución. En los documentos estratégicos que prepara Brunner queda consignado un objetivo adicional: enredar a la oposición, mantenerla ocupada durante algunos meses y revivir las querellas entre la UDI y RN.

Como el Presidente ha previsto iniciar 1997 con una sesión de gabinete en Temuco, el diseño pasa a denominarse *Plan Temuco*. Quien redacta la minuta de 12 carillas que el Presidente leerá en la sesión es Brunner.

Quien se opone, Pérez Yoma. Con el respaldo de Insulza, el ministro de Defensa sostiene que despachar una reforma que fracasará es un esfuerzo inútil. Por lo demás, el gobierno tendrá que descalificar a una institución para la cual terminará nombrando representantes: ¿por qué hacerle la tarea más difícil a esa gente?

Pero la tesis de La Moneda se impone y el *Plan Temuco* da inicio al último tercio del gobierno.

(El proyecto de reforma fracasará sonoramente, como ha previsto Pérez Yoma, el 17 de junio, cuando el Senado rechace la sola idea de legislar. Sin embargo, como ha previsto Brunner, embarca a RN en un debate de cuatro meses que no sólo tensa sus relaciones con la UDI, sino también con sus propios grupos internos antirreformistas. Para fortuna adicional del gobierno, a los roces que el proyecto suscita entre los aliados del pacto de derecha se suma, desde mayo hasta julio, el amargo enfrentamiento por la acusación contra el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán.)

El 1° de abril de 1997, Pérez Yoma dicta en Madrid una conferencia ante el Centro de Estudio Superior de la Defensa de España. Es una exposición de corte académico sobre la política de Defensa de Chile, pero algunas de sus expresiones suscitan "alarma e indignación" en Argentina. Los calificativos corresponden al influyente comentarista Mariano Grondona, que suma dos cosas: el anuncio de Estados Unidos de que abrirá la venta de aviones F-16 a la Fuerza Aérea de Chile y la insinuación (no dicha) de Pérez Yoma de que Argentina es un vecino poco confiable.

Cuando regresa a Chile, Pérez Yoma se encuentra en medio de una turbulencia diplomática. Sus averiguaciones sugieren que algún papel ha tenido el embajador de Buenos Aires en Santiago, Eduardo Iglesias, un hombre muy activo en la política local. Fuentes directas le dicen al ministro que el embajador ha estado en el centro de documentación de *El Mercurio* revisando entrevistas y discursos suyos.

Cuando habla con su par argentino, es el propio ministro Jorge Domínguez quien le ofrece la solución: que viaje a Buenos Aires para explicar personalmente sus palabras y sus puntos de vista ante la prensa.

Y he aquí que, cuando está por viajar a la capital argentina, el ex diputado Eugenio Ortega le informa que acaba de ver al embajador Iglesias almorzando con Pablo Halpern en el restaurante Jockey Club. Indignado, el ministro le cuenta al Presidente. Frei lo escucha sin comentarios.

Dado el silencio del Presidente, y convencido de que una operación mayor en su contra está en desarrollo, Pérez Yoma espera hasta el penúltimo día de su permanencia en Buenos Aires para formular a los periodistas chilenos que lo acompañan una declaración explosiva:

—En La Moneda hay intrigantes.

A su retorno lo espera una pequeña tormenta política. Medio Santiago ha entendido que apunta contra Halpern; otros tantos piensan que también contra Brunner. Frei tiene otra preocupación cuando lo recibe:

—El problema —dice— es quién es el jefe de La Moneda, Edmundo. Con estas cosas me afectas a mí...

—Tienes razón, Eduardo, lo siento —retrocede Pérez Yoma—. Lo siento de verdad. Tal vez no debí decirlo, pero tú sabes que es cierto. Aquí hay un grupo de intrigantes.

De pronto Pérez Yoma empieza a darse cuenta de que su soledad ante el palacio es mayor de la que hubiera esperado. Sus argumentos caen en el silencio, como si hubiese que dar por sentado que se trata de exageraciones, ofuscamientos, malos momentos.

Poco después es Brunner quien visita a Frei. Ha oído por terceros la versión del ministro de Defensa según la cual su subalterno Halpern lo ha envuelto en un problema con una potencia extranjera.

—Presidente, usted sabe que las relaciones con Edmundo no han estado bien —dice—, y yo estoy dispuesto a dar las peleas que sea necesario mientras usted no me desautorice. A lo que no estoy dispuesto es a quedar como una especie de traidor a la patria...

El episodio es clave. Igual como le ocurriera a su amigo Arriagada en 1996, Pérez Yoma pierde, antes de mediar el año, los últimos afectos por el gobierno. Ya no sólo está aislado del equipo político, sino que ha perdido la voz y el Presidente parece indiferente al dramatismo de su situación.

Pero el ministro no es un hueso blando. Así como su estilo áspero y su temperamento fuerte pueden suscitar la resistencia epidérmica, instantánea, de un intelectual como Brunner, tiene en contrapartida una inusitada facilidad para consolidar lealtades. Ahora, por ejemplo, sus subsecretarios y asesores cierran filas a su lado y declaran, cada uno a su manera, la guerra contra los "intrigantes" de La Moneda. El edificio Diego Portales se convierte en un bastión contra las amenazas de palacio.

Quizás esos leales sobrestiman la posición de su jefe. Algunos piensan que lo justo sería que el Presidente levantara su espada flamígera, expulsara de La Moneda a los invasores e instalara, de una vez, a Pérez Yoma en el Ministerio del Interior. Hasta esos murallones fortificados no han subido las voces que circulan en la dirigencia política: una solución de ese tipo a la ostensible crisis que vive el gabinete sería el comienzo del fin de la Concertación. A varios de los jefes partidarios del oficialismo no les seducen las maneras de Pérez Yoma.

Sin embargo, lo más importante es que el ministro no está pensando en atrincherarse hasta vencer o morir, sino en terminar las tareas pendientes de su gestión. Para después, lo que ha imaginado es continuar su carrera política en el Parlamento y hasta ha sondeado la posibilidad de postular al Senado por la Primera Región, donde su partido ha perdido toda representación en las últimas elecciones. A esa circunscripción le corresponden comicios en el 2001: tendrá tiempo para descansar, dedicarse un poco a sus negocios e iniciar con antelación la campaña.

De momento, el episodio de los "intrigantes" lo hace tomar la decisión de no participar —ni siquiera opinar abiertamente— de ninguna otra esfera del gobierno que no sea la de Defensa. Evitará pasar por La Moneda, salvo para ver al Presidente, conservará su alianza con el canciller Insulza y se enfrascará en el cambio de los altos mandos de todas las Fuerzas Armadas y de Orden, la primera renovación completa de la transición, cuya vanguardia la lleva la FACh, con dos comandantes en jefe designados en democracia, y Carabineros, con uno.

Por añadidura, están los grandes planes de modernización de las instituciones. Están las compras de aviones para la FACh y las nuevas naves para la Armada, que han provocado una sorda polémica ante la insistencia del almirante Martínez Busch para adquirir dos submarinos de última generación. Y están los 13 proyectos estructurales que el Ejército ha desarrollado en paralelo con su *Plan Alcázar*, que deberían generar una fuerza militar renovada para el siglo siguiente[4].

En julio propina un golpe de efecto a sus críticos, mediante una sorpresiva reunión bilateral con Argentina en Zapallar, en la que él y el canciller Insulza se encierran con sus pares de ese país, los ministros Domínguez y Guido di Tella. El encuentro concluye con el anuncio, impactante para la historia militar de ambos países, de que se desarrollarán ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas respectivas.

En agosto concluye y presenta el *Libro de la Defensa*, un trabajo de varios años que no sólo recibe el elogio de los especialistas y de los políticos, sino que sitúa a Chile como el primer país

de América Latina en desarrollar una exposición completa, coherente y abierta de su política de Defensa.

Después de esos éxitos le plantea al Presidente, durante una reunión en su casa y en un clima relajado, su deseo de renunciar al Ministerio una vez que se haya consumado el cambio de los mandos institucionales y el retiro del general Pinochet.

—Después de eso me voy a quedar sin pega en el Ministerio, y creo que sería bueno tener una cara nueva para los nuevos comandantes en jefe —explica—. Pero me gustaría seguir ayudando desde otra posición.

—¿Y ya has pensado en qué cosa?

—Hay una que me gusta mucho, si a ti te parece posible: la Embajada en Argentina.

—Por supuesto —dice Frei—, cómo no.

La elección es impecable. El embajador Eduardo Rodríguez Guarachi ha pedido su relevo hace meses.

Los homenajes del mes del Ejército toman el aire de despedidas para Pinochet a partir de agosto. A fines de ese mes, cuando cumple 24 años como comandante en jefe, destacamentos de todas las Fuerzas Armadas desfilan en su honor en los patios de la Escuela Militar. Acto central de esa "Parada chica" que reúne a cerca de 2.000 hombres es el regalo, por parte de los otros comandantes en jefe, de un bastón de mando que representa la unidad de las Fuerzas Armadas y el reconocimiento a su liderazgo[5].

A lo largo de todo septiembre se suceden los actos honoríficos y, si se registran menos incidentes violentos que en otros años, tal vez se deba precisamente a la expectación que suscita en el país el espectáculo del general empezando a despedirse del mando.

Pero simultáneamente la campaña electoral para las parlamentarias de diciembre ha comenzado a adquirir intensidad. Aunque el gobierno, o, con más precisión, el Presidente y el equipo político creen que podrán sentirse satisfechos si el oficialismo obtiene un 50% después de casi cuatro años de gestión y ocho de Concertación, sus propios partidos elevan la meta: entre un 53% y un 55% sería lo apropiado. Esa peligrosa cifra comienza a fijarse en la opinión pública sin que La Moneda pueda hacer nada por reducirla.

Cuando concluye el mes del Ejército, Pinochet prepara, como es usual, su viaje largo del año; será el último en su cargo. Y para ello se ha reservado una visita a China, con una escala en Londres. Antes de partir concede una entrevista, también más o menos tradicional, a la revista *Cosas*[6], donde anuncia que tras dejar el mando se irá al Senado como parlamentario vitalicio.

Es la primera vez que lo dice en público y, aunque muchos lo calculaban, la idea de ver al general en el Congreso desespera y enfurece a la Concertación. Hay quienes añaden imaginación al agravio, insinuando que, con los votos de la derecha y los designados, Pinochet hasta podría pretender la presidencia del Senado.

Mientras la polvareda se eleva y se arremolina en Santiago, el general vuela rumbo a la capital británica.

El martes 30 de septiembre se graba en Megavisión el programa *Alto riesgo*, que conduce Fernando Villegas. Los candidatos se han mostrado agresivos, vehementes o enervados en ediciones anteriores, pero las previsiones para hoy son más pacíficas, no sólo porque se trata de aspirantes al Senado, sino por los rasgos de los invitados: la vehemencia de la ex ministra Mónica Madariaga suele ser muy controlada y el ex diputado socialista José Antonio Viera-Gallo es con mucho una de las figuras más moderadas de su partido.

Pero he aquí que el debate se encrespa sorpresivamente, comienzan a volar las acusaciones sobre corrupción y Viera-Gallo deja caer una amarga reflexión sobre la impunidad, porque:

—...el que metió las manos, que fue el general Pinochet, está como comandante en jefe del Ejército y puede llegar a ser presidente del Senado...

Al concluir la grabación, Mónica Madariaga llama al vicecomandante Guillermo Garín y le informa de lo que ha ocurrido. Garín, que sabe que el ministro Pérez Yoma pasa unos días en

Buenos Aires, ubica al subsecretario de Guerra, Mario Fernández. Lo que viene son unos angustiosos esfuerzos por frenar la emisión del programa, prevista para la noche, o cortar al menos las alusiones ofensivas. Pero eso no se puede hacer: el invitado es responsable de sus palabras.

Esa noche Viera-Gallo llega a la casa de Frei, que celebra 30 años de matrimonio, con una intuición:

—Parece que dejé la embarrada.

Secretamente abriga la esperanza de que todo se entienda en el clima de campaña y debate electoral.

El miércoles 1º de octubre, Fernández recibe un oficio firmado por Garín que representa la molestia del Ejército y anuncia un tratamiento del caso por vía administrativa, "por instrucciones del comandante en jefe". El subsecretario entiende que eso significa despachar el oficio al ministro subrogante, Carlos Figueroa, y al propio Viera-Gallo.

El diputado recibe el oficio y, paralelamente, una carta en que Garín le expresa la molestia del mando militar. Viera-Gallo, que interpreta estos documentos como un camino privado de solución, contesta sosteniendo que habló en el contexto de un debate y que, en todo caso, estas alusiones no se habrían producido si Pinochet no hubiese hecho previas declaraciones políticas.

Al día siguiente se reúnen los generales para oír una exposición sobre lo ocurrido. Allí se menciona la posibilidad de una querella por injurias según la ley de seguridad del Estado, que podría conducir a desaforar a Viera-Gallo como diputado e inhabilitarlo como candidato a senador. El análisis jurídico sugiere que, de adoptar este camino, el Ejército obtendría ambas cosas.

Esa tarde el subsecretario de Guerra llama a los políticos a no involucrar a las Fuerzas Armadas en la contienda electoral —lo que parece una amonestación a Viera-Gallo— y en la mañana del viernes el ministro Figueroa da por superado el incidente.

No lo hace porque sí: de las comunicaciones con Garín ha creído entender que no se prolongará. Pero para entonces la Auditoría General del Ejército ha hecho llegar a Pinochet su propio análisis. Tres elementos son sustanciales en esa visión: el diputado no se ha retractado y hasta se podría entender que confirma todo; tampoco ha dado señales de aceptar una rectificación pública; y el clima electoral suscita el peligro de que otros candidatos quieran seguir la misma ruta.

El sábado 4 se recibe en el edificio de las Fuerzas Armadas un fax del general Pinochet. Es el texto de una querella por injurias, con la instrucción de autentificarlo ante notario y presentarlo ante la justicia. Pero esta tarde el vicecomandante Garín parte en un viaje institucional a Francia que le ha sido encomendado por Pinochet. Garín decide no cancelarlo y deja la situación en manos del jefe del Estado Mayor y comandante en jefe subrogante, el mayor general Rafael Villarroel, que regresa de vacaciones en Buenos Aires.

Los dos oficiales se encuentran en el aeropuerto con el ministro Pérez Yoma, que recibe de ambos la primera noticia de las instrucciones de Pinochet. El domingo, cuando ya el subsecretario le ha aclarado la potencial gravedad de la situación, Pérez Yoma ubica a Viera-Gallo en Concepción.

—Te llamo sólo para que me digas si puedo ayudarte.

—Bueno —dice Viera-Gallo—, creo que esto hay que arreglarlo.

Pérez Yoma lo invita a cenar en la noche del lunes.

El lunes 6, Viera-Gallo ha llegado a la conclusión de que está metido en una trampa. De ser desaforado, carecerá de una defensa eficaz; de ser inhabilitado, perderá su elección. No todo es cálculo, porque su proverbial moderación política convive mal con los agrios sentimientos que le suscita Pinochet. Pero en el fin de semana ha visto otros factores: puesto que su electorado no es la izquierda dura, la virulencia de esta polémica sólo puede alienarle votos; además, ha sentido entre sus partidarios la sombra paralizante del miedo: "Cuídese, don José Antonio...".

Ese mismo día, Pérez Yoma consume horas escuchando los análisis de sus asesores abogados. El aporte de Luis Arévalo, que suele asistir al Ministerio del Interior, lo convence de que.

aun en el evento de que finalmente la querella pueda ser derrotada, sus efectos iniciales serán devastadores para Viera-Gallo.

Así, ministro y diputado no demoran en llegar a acuerdo en la cena. Pérez Yoma preparará un encuentro ante la prensa con el mayor general Villarroel y Viera-Gallo leerá una declaración que incluya una explicación de sus intenciones. No excusas, en ningún caso excusas.

Ya cerca de medianoche, Pérez Yoma llama a Villarroel y lo invita a su casa para plantearle la solución. A Villarroel le parece bien, pero no puede tomar una decisión sin consultar a Pinochet. Dado que hay doce horas de diferencia con China, tratará de hallar al general ahora mismo; de otro modo, deberá esperar hasta las 8 de la mañana. Y esto último es lo que ocurre.

—¿Y a usted qué le parece, Villarroel?

—Creo que es una solución razonable, mi general. Parece que hay buena disposición.

—Bueno, manéjelo usted. ¡Pero tiene que quedar claro que este señor retira lo que dijo!

—A su orden, mi general.

Un par de horas después Pérez Yoma recibe en el piso 22 del Diego Portales a Villarroel. En su despacho está Viera-Gallo. El ministro los deja solos y el diputado aclara que ha preparado un texto para leer ante la prensa. No hablará de excusas, pero explicará que no tuvo intención de ofender. Después de unas pequeñas modificaciones cierran el acuerdo. Pérez Yoma regresa y les lee la introducción que hará. El general no dirá nada.

Los tres se presentan sonrientes ante un tumulto de periodistas. Tras oír a Pérez Yoma, los fotógrafos claman:

—¡Que se den la mano, ministro!

Pérez Yoma se desconcierta. Villarroel sonríe y vacila. Viera-Gallo, también sorprendido, reacciona y extiende el brazo. El general demora unos segundos y la mano del diputado lo alcanza cuando recién estira la suya. Las fotos congelan un instante que sacudirá a la Concertación: el diputado inclinándose ante un general que casi no se mueve[7].

Luego Viera-Gallo lee su texto. Pero a Villarroel, que ahora sí que está alerta y piensa en la advertencia del comandante en jefe, le parece que el tono del diputado no enfatiza la retractación.

Entonces, cuando concluye, rompe el libreto y hace una declaración:

—En nombre del comandante en jefe y del Ejército acepto estas excusas que se han dado y la reparación al honor del general Pinochet y de la institución.

La palabra "excusas" incendia a la izquierda. Ese día y los siguientes se multiplican los clamores por la "humillación" a que ha sido sometido el diputado socialista. El presidente del PS, Camilo Escalona, describe una escena que "al país le va a pesar" y culpa a Pérez Yoma.

Pérez Yoma, que ve cómo la mediación política que ha logrado se licua entre las críticas, exige que el gobierno replique al jefe del PS. Pero otra vez el vocero Brunner se resiste. Ante el peligro de un estallido terminal, Figueroa redacta una nota que acusa a Escalona de "exceder los límites de la crítica política" y la entrega al Presidente.

La declaración pasa a la prensa sin firma ni origen. Pérez Yoma contiene con dificultad sus deseos de mandar todo al diablo. Le falta poco, muy poco, para lo más importante.

En el período crítico que precede a la nueva conformación del cuerpo de generales, Villarroel acaba de anotar un enorme punto en su récord: ha defendido los intereses del comandante en jefe, ha favorecido la posición del ministro, ha relevado una actitud de entendimiento.

Podría ser un jaque complejo en una fecha como ésta. Así lo creen algunos, incluyendo, probablemente, al mismo Villarroel[8].

(Ah: Viera-Gallo saldrá elegido senador por la Octava Región ese fin de año.)

Notas

1. Ver, especialmente, capítulos 23, 25 y 31.

2. Una significativa expresión de estos reparos hacia el esquema de unas Fuerzas Armadas con apariencia prescindente y activa intervención política fue publicada en medio de la crisis suscitada por el caso Contreras: Favri, Lucio: *Estado de derecho, FFAA. y democracia*. Diario *La Epoca*, 24 de septiembre de 1995.

3. Hasta precisiones horarias en: Matus, Alejandra: *La ceremonia del adiós*. Suplemento Reportajes, diario *La Tercera*, 17 de noviembre de 1996. Otros datos, en un texto opinante y comprometido: Politzer, Patricia: *El fantasma del antisemitismo se coló en La Moneda*. Suplemento Reportajes, diario *La Tercera*, 10 de noviembre de 1996.

4. Una reseña completa de los proyectos en: *Chile sin Pinochet. La transición de los soldados*. Revista *Hoy*, N° 1.040, 1° al 7 de septiembre de 1997.

5. *"Bastón de mando" entregaron FFAA. al general Pinochet*. Diario *El Mercurio*, 24 de agosto de 1997.

6. Comandari, Mónica: *General Augusto Pinochet: "Seré senador vitalicio y me iré a vivir a Valparaíso"*. Revista *Cosas*, N° 584, 26 de septiembre de 1997.

7. Un análisis completo de estos efectos: Dávila, Lucy: *La caja de Pandora*. Revista *Hoy*, N° 1.055, 13 al 19 de octubre de 1997.

8. Un ejemplo de la exposición de esta hipótesis: *La nueva carta de la sucesión*. Revista *Qué Pasa*, N° 1.384, 18 de octubre de 1997.

35

El último estandarte

Contra las nubes de un otoño inminente desciende en la Escuela Militar, el 10 de marzo de 1998, el gallardete de Pinochet. El general llora la mañana en que deja, después de 24 años y medio, la Comandancia en Jefe del Ejército. Para llegar a este momento...

A mediados de 1996, visitando unidades en la Región Militar Austral, el ministro Edmundo Pérez Yoma deja caer una oblicua pregunta ante el general Augusto Pinochet:

—Bueno, general, y si a usted, ni Dios lo quiera, le llegara a pasar algo, ¿quién de sus generales podría hacerse cargo del Ejército?

—Mire, hay tres que están en perfectas condiciones: Garín, Izurieta y Cheyre.

Esa indicación es suficiente para el ministro. No vuelven a hablar del tema hasta el proceso de ascensos de octubre de ese año. De nuevo es un diálogo de implícitos:

—Me gustaría —dice Pérez Yoma— que me mandara a Izurieta al Estado Mayor de la Defensa.

—Pero no es ni mayor general todavía —se extraña Pinochet—. Recién va a ascender, va a ser el más nuevo el próximo año.

—No importa, quiero trabajar con él. Quiero verlo de cerca. Usted sabe por qué.

Como el único alto cargo militar bajo el mando directo del ministro, el Estado Mayor de la Defensa Nacional no ha tenido mucha importancia en el pasado. Con Pérez Yoma eso ha venido a cambiar: de la rotación bianual con que ocupan ese puesto las ramas de las Fuerzas Armadas ya ha salido un comandante en jefe, el de la FACh, Fernando Rojas Vender.

En el análisis de los posibles sucesores de Pinochet, Pérez Yoma comienza por descartar al vicecomandante Garín. Aunque le está agradecido por su intervención en el caso Contreras y lo considera un oficial sobresaliente, le parece que su cercanía con Pinochet, sus funciones políticas en el régimen militar (en la Casa Militar, junto a Jorge Ballerino) la proximidad que en ellas tuvo con dirigentes de la UDI, impedirían proyectar con fuerza la idea de un cambio sustantivo en el Ejército. Garín es un caballero, pero la política no siempre es caballerosa.

En cambio, Izurieta ofrece las facetas apropiadas. No tuvo más paso por el gobierno militar que un año en la Subsecretaría de Guerra (en 1989: el del traspaso), ha recibido notables destinaciones y en los dos años anteriores ha sido el jefe de la Misión Militar en Washington, donde el embajador John Biehl se ha formado la mejor opinión.

Allí lo ha conocido también Pérez Yoma —Izurieta lo acompañó en sus visitas oficiales— y ahora al ministro le parece que reúne todos los requisitos políticos y formales: con sus 28 años menos que Pinochet, representa un verdadero salto generacional; como hijo de un recordado general de división de los 60, Pelayo Izurieta, y sobrino de Oscar Izurieta, comandante en jefe

bajo los gobiernos de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, encarna la tradición militar; y como descendiente de una familia de fortuna —la de su madre, Victoria Caffarena, ex campeona de natación— pertenece a la elite social. Por si no bastara, es también de Caballería, el arma a la que Pinochet ha privilegiado al seleccionar de ella a algunos de sus más cercanos asesores: Sinclair, Ballerino, Garín.

Pero en 1996 Izurieta ocupa la 13ª antigüedad del Ejército. El ministro hace sus cálculos: si salen cuatro mayores generales y un brigadier general este año, pasará a la 8ª en 1997. Otro más cumplirá su período máximo a fin de ese año. Al descontarse a Pinochet y Garín, Izurieta aparecerá, para 1998, dentro de los cinco primeros lugares de donde el Presidente debe elegir según la Constitución.

Pensando en esa operación se ejecutan los cambios del alto mando en 1996. Una sola huella pública deja el ministro. Cuando el vicecomandante Garín cumple sus 38 años de servicio, en septiembre, aplica por primera vez la ley Canessa, pero por un período casi absurdo: 14 meses. Hasta noviembre del 97.

Durante 1997 las especulaciones apuntan a Garín como el sucesor más obvio. El vicecomandante no es del todo ajeno a esas versiones: como el aplicado y cortés oficial que es, no rechaza el asedio de la prensa. En el tope de su visibilidad, el Departamento Comunicacional del Ejército despacha fotos y notas sobre las actividades del vicecomandante; por ejemplo, cuando saluda al Papa Juan Pablo II en el Vaticano.

Al ministro Pérez Yoma le vienen de perillas tales rumores. Con la atención centrada en Garín, nadie presionará al elegido encubierto.

Al mediar el año las conversaciones del ministro con Pinochet acerca de los decisivos cambios del alto mando de esta primavera se hacen más frecuentes. Las referencias explícitas a la sucesión son, al revés de lo que se especula, muy escasas; a lo largo de estos años, Pérez Yoma se ha preocupado cada vez de subrayar que la decisión final es una facultad presidencial; y como el general jamás ha interpuesto objeción alguna, el ministro entiende que acepta sin reparos ese criterio.

En agosto, Pinochet plantea el plan de ascensos al generalato que, según cree, resultará de las calificaciones superiores.

Entre los últimos lugares figura el brigadier Jaime Lepe, que fuese escolta de su esposa en los años 70, jefe de la Agrupación de Seguridad de Pinochet en los 80 y desde 1991 secretario general del Ejército: un servidor permanente, una especie de sacerdote militar, que ni siquiera se ha casado para cumplir su tarea.

Pero Lepe ha sido mencionado como uno de los participantes en el secuestro del ciudadano español Carmelo Soria, bárbaramente asesinado por la DINA en 1976, y el gobierno de Madrid ha puesto tal decisión en perseguir el crimen, que hasta debió abortarse un intento de enviarlo a la misión militar en ese país.

—General, esto es un problema —dice el ministro—. Ya se lo rechacé el año pasado, usted sabe el lío que se puede armar.

—Pero es injusto, ministro. Este hombre no está acusado de nada, en ningún tribunal. Y es un oficial de una lealtad fuera de serie, de una capacidad de sacrificio... cómo le dijera: si fuera por él, dormiría en la puerta de afuera. Un comandante no puede abandonar a gente así, daría un mal ejemplo. ¿Y qué tiene que ascienda de brigadier a brigadier general?

—¿Cómo dice, general? ¿Que no está acusado de nada?

—No, pues. Pregunte, averigüe.

El subsecretario Mario Fernández queda a cargo. En agosto la Corte Suprema remite un documento que certifica que Lepe no fue inculpado en el caso Soria y que por tanto tampoco fue objeto de la amnistía que aplicó el ministro Marcos Libedinsky[1].

A fines de ese mes, Pérez Yoma despacha un oficio pidiendo al comandante en jefe los antecedentes completos de los siete mayores generales del Ejército. El propósito es preparar el

memorando que entregará al Presidente como base para la decisión formal del nombramiento de nuevo comandante en jefe.

En octubre la nómina del alto mando queda afinada. Ahora se agrega la elección del momento para darla a conocer. Diciembre parece óptimo: cuando concluye la prórroga del servicio de Garín; para entonces ya se sabrá qué generales pasan a retiro y las nuevas destinaciones estarán en preparación.

Mejor aún, el general Pinochet podría retirarse ese mismo mes, en la segunda quincena, después de las elecciones, y trasladarse de inmediato al Senado. Esta posibilidad ha quedado más clara desde que el subsecretario Fernández, que también es profesor de Derecho Público, ha demostrado que Pinochet es senador en forma automática en cuanto cesen sus causales de incompatibilidad —ser comandante en jefe— y cumpla el trámite formal del juramento.

Pero el general tiene una objeción a esa fecha: no alcanzaría a visitar todas las unidades del país para despedirse, como desea.

Quien proporciona la solución es el presidente del Senado, Sergio Romero, un hombre del ala "dura" de RN que se ha preocupado de estar en ese cargo para el momento adecuado[7]. Previendo los riesgos de manifestaciones ingratas en el Senado, aunque sin referirse a ello, Romero ha gestionado un acuerdo de comités que le confiere la facultad exclusiva de decidir si la Cámara Alta tendrá sesiones en la última semana de enero y en la primera de marzo.

Por ello, dice, el martes 27 de enero sería óptimo: habrá pocos senadores, algunos ya habrán iniciado el receso de verano y otros tantos estarán culminando su mandato. En marzo —con un mes de enfriamiento de por medio— asumirá una cámara nueva.

El general puede entregar el mando y unas horas después jurar como senador, con lo que evitará también un hiato en su fuero especial, un vacío que los grupos de derechos humanos querrían aprovechar para perseguirlo judicialmente.

La idea convence a todos los involucrados: el 27 de enero queda aprobado.

Al declinar septiembre se produce el incidente del diputado José Antonio Viera-Gallo. En la primera semana de octubre, por obra de esa circunstancia azarosa, el jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Rafael Villarroel, emerge con una imprevista figuración pública.

Villarroel resulta familiar para varios prohombres de la DC. Conoció al ahora ministro Carlos Figueroa en los años de Aylwin, cuando éste llegó como embajador a Buenos Aires y el oficial estaba a cargo de la agregaduría militar.

Más importante que eso resultó el hecho de que, con su tercera estrella de mayor general, Villarroel estuviese a cargo de la Guarnición de Santiago para las elecciones de 1996. En esa ocasión, Figueroa sufrió el infausto tropiezo de votar sin su cédula de identidad y con su licencia de conducir, y luego de negarlo ante la prensa fue denunciado por las imágenes de la televisión. Villarroel, que acompañó a Figueroa durante gran parte de esa larga jornada, fue el oído apropiado para el amargo desconsuelo del ministro y más tarde defendió su inocencia en los círculos militares que a la mofa pretendían agregar algo más serio.

Además, en 1991 había asumido como comandante de la Cuarta División, en una época en que no había otro general en las regiones IX y X, y desde tal puesto había trabado alguna relación con el presidente del Senado, Gabriel Valdés. Ese vínculo cordial había funcionado, dentro de los círculos militares, como una especie de imputación en la primera mitad de la década, pero ahora podría convertirse en lo contrario.

Sin embargo, el cabildeo más importante en favor de Villarroel Carmona (en un comienzo sin que él lo sepa) es también la relación que mantiene mejor guardada: su primo materno Juan Carlos Latorre Carmona, diputado y hombre influyente en la cúpula DC.

Mientras las fechas decisivas se acercan, Latorre se convierte en un activo promotor del mayor general, a quien considera como una buena carta de sucesión. Su ronda incluye —y no una vez, sino varias— al propio Presidente Frei, hasta el punto de que Villarroel llega a creer que en efecto es el favorito del Jefe del Estado.

En contrapartida, a Pérez Yoma comienzan a inquietarlo estos secretos movimientos en favor de uno u otro general: se imagina que Pinochet, sometido a la influencia de múltiples consejeros, podría cambiar de opinión. Y añade a ello el hecho objetivo de que, una vez anunciado el nuevo alto mando, quedarán casi cinco meses de exposición al *lobby* político y militar. Cuando plantea este análisis ante el Presidente, éste lo autoriza a acelerar el proceso.

El primer paso consiste en informar privadamente al propio Izurieta; se trata de conocer su reacción, aunque ya se acumulan los indicios de que será positiva. El segundo es preguntarle qué conducta considera más apropiada para los difíciles meses que seguirán. Izurieta, prudente, dice que lo mejor será continuar en su puesto.

El 28 de octubre, el ministro despacha un oficio para que el comandante en jefe le haga llegar de urgencia la propuesta definitiva de retiros.

Al día siguiente la lleva ante el Presidente, alentado por el hecho de que Pinochet ha mantenido el plan original. Con ello se prepara la última fase del triunfo del gobierno, el cambio militar más espectacular de las últimas tres décadas: Izurieta renovará al Ejército y hasta tendrá el pleno respaldo de Pinochet. ¿Se puede pedir más?

Sólo hay un defecto:

—Está esto de Lepe —dice el ministro de Defensa al Presidente—, que va a venir en la nómina y puede ser conflictivo. A este gallo lo han mencionado en el caso Soria, estuvo en la DINA, adentro no lo quieren mucho. Pero Pinochet lo pide. Puede quedar la escoba, o puede pasar de largo.

—¿Y hay algo formal en su contra?

—Nada —dice Pérez Yoma, preparado para esa pregunta con el documento de la Corte.

El jueves 30 de octubre se inicia en el Club Militar de Lo Curro la reunión del alto mando en la que los generales deben votar para seleccionar a los brigadieres y coroneles que ascenderán. En el certamen, el general Pinochet anuncia que, habiendo presentado la nómina pertinente al Poder Ejecutivo, el Presidente decidirá quién es el nuevo comandante en jefe. La nominación, dice, se hará pública el 2 de diciembre.

Tras la sesión, el comandante en jefe debe llevar la nómina de los nuevos ascensos al ministro Pérez Yoma. Los generales permanecen en Lo Curro para la última reunión de camaradería del alto mando vigente, la ya famosa "última cena", que este año será un almuerzo.

Pero en el edificio Diego Portales, el ministro Pérez Yoma tiene una novedad para el comandante en jefe. Debido al complicado cuadro que se está armando en el gobierno, con la interferencia de parlamentarios y ministros a propósito de la sucesión, resulta indispensable adelantar el anuncio, so riesgo de que pueda fracasar.

El Presidente, que visita Punta Arenas, ya ha sido informado y está de acuerdo. Los argumentos del ministro son tan persuasivos, que Pinochet cede con facilidad.

Al regresar a Lo Curro dice que habrá que hacer una nueva sesión en la tarde. Garín transmite a los generales la orden de concurrir al anfiteatro después del almuerzo.

Las "últimas cenas" están siempre cargadas de algún grado de tensión —las carreras de todos penden de un hilo—, pero en esta ocasión el aire se podría cortar en trozos. Nadie menciona el tema, nadie insinúa nada; con dificultad se oye alguna risa en el comedor.

Pinochet se instala en la testera del anfiteatro, flanqueado por Garín. Un centenar de ojos se fija en los dos sobres que lleva en la mano.

—Señores —dice—, el Presidente de la República ha dispuesto que dé a conocer el nombre del nuevo comandante en jefe.

En las hieráticas filas cunde una inquietud sorda, apenas perceptible, mientras Pinochet saca el oficio del ministro de Defensa e inicia su pausada lectura.

—...el Presidente de la República ha dispuesto el nombramiento como comandante en jefe del Ejército del mayor general Ricardo Izurieta Caffarena. Felicito al general Izurieta. Eso es todo, señores.

Apenas se incorpora, todos los generales se paran de sus asientos. Una vez que Garín anuncia el fin de la reunión, Pinochet deja el salón con paso firme; lo sigue el vicecomandante.

Los generales quedan de pie, mudos e inconmovibles. En la primera fila, donde se ubican los cinco mayores generales que preceden a Izurieta, la inmovilidad es tal, que sería difícil adivinar los desconcertados sentimientos que los invaden. En la segunda fila, Izurieta ha de sentir los segundos como oleadas interminables.

Afuera, el vicecomandante Garín se acerca a Pinochet.

—Mi general —dice—, quizá sea bueno dar una explicación.

—Ya —dice Pinochet—. Déla usted.

Cuando Garín regresa al salón hay todavía generales de pie; pero otros han comenzado a salir. Con un gesto terminante les ordena volver y sube a la testera.

—Bueno —dice, quebrando el silencio de piedra—, ustedes han oído que el Ejército de Chile tiene un nuevo comandante en jefe. ¡Es el mejor general del Ejército, señores! El comandante en jefe es el mejor de entre los generales, por lo que debemos brindarle un caluroso aplauso. ¡Saludemos al nuevo comandante en jefe!

Recién entonces comienza la ronda de abrazos y parabienes. El orden es estricto. Primero los mayores generales: Izurieta sabe que allí están los sentimientos más encontrados y, aunque no se siente obligado a dar disculpas, prodiga palabras de gratitud y comprensión. Con los generales que siguen, sus subalternos, empiezan los gestos efusivos.

Poco después, en su despacho de calle Zenteno, Pinochet recibe uno a uno a los generales. Al primero, Garín, le explica las complejidades que ha tenido el proceso. Garín habría estado disponible para una segunda aplicación de la ley Canessa que lo dejara en su puesto hasta el 11 de marzo, pero el gobierno no ha considerado tal posibilidad. En esas condiciones, prefiere dejar el Ejército a comienzos de diciembre.

Con el segundo, Ramírez, no hay mucho que hablar: simplemente cumple su máximo de años.

El tercero, Villarroel, es un caso más delicado; Pinochet no ignora que se ha forjado más expectativas y que lo han alentado hombres del oficialismo. Por eso es especialmente prudente:

—¿Y qué quiere hacer ahora, Villarroel?

—Lo que usted diga, mi general.

—Bueno —dice Pinochet, dejando unos segundos de cavilación—, acompáñeme entonces. Nos vamos juntos.

—A su orden, mi general.

Las horas que siguen son opacas para el gobierno. Pérez Yoma espera que los cuatro mayores generales sobrepasados por Izurieta renuncien cuanto antes. Sus cálculos no son tan errados: esa noche los teléfonos de los afectados vibran de timbrazos. Cada uno de ellos —Villarroel, Patricio Acevedo, Luis Cortés Villa y Guillermo Sánchez— quiere saber qué harán los otros; las miradas están especialmente atentas en el más antiguo, Villarroel, que por añadidura es también del arma de Caballería.

Al día siguiente circulan entre la cúpula militar inquietas versiones: algunos parlamentarios de derecha estudiarían presentar un reclamo al Tribunal Constitucional con el argumento de que el Presidente se habría excedido en sus atribuciones al elegir al que actualmente es 7° en la línea de mando[3].

El viernes 31 se celebra en Rancagua el 27° aniversario de la Brigada de Aviación del Ejército. Cuando la prensa se abalanza sobre Garín para conocer su reacción, el vicecomandante subraya la normalidad del proceso. Pero la señal más fuerte la emite Villarroel, que declara secamente:

—En el Ejército no puede haber molestias. No somos ningún sindicato.

Esa noche Izurieta ubica por teléfono a Villarroel. Quiere agradecerle sus palabras y proponerle una reunión. Izurieta nota que el mayor general, que todavía es su superior, está tenso y

hace valer su autoridad sugiriendo que sea él quien lo visite. Además, demora el encuentro: el fin de semana, dice, saldrá a descansar fuera de Santiago.

El domingo en la noche se reúnen Villarroel, Acevedo, Cortés Villa y Sánchez. Paradójicamente, los más vehementes son Sánchez y Acevedo, pero no porque hubiesen alentado expectativas, sino por el procedimiento que, sin pasarlos a retiro, ha terminado con sus carreras de un plumazo. Ya que han sido sobrepasados por esta maniobra del ministro de Defensa, preferirían irse de inmediato del Ejército. En cambio, Cortés Villa, que ha vivido con fama de "duro" y que aparte de Villarroel ha sido el único que podría haber abrigado alguna esperanza debido a su amistad con el ministro Figueroa, adopta un tranquilo realismo:

—Esto ya se terminó —dice—. Lo único que se puede hacer es esperar a ver qué dice el comandante en jefe.

Villarroel coincide con Cortés Villa. En lo personal, Pinochet le ha pedido que lo acompañe hasta el final y pronto hablará con Izurieta para conocer cuál es su disposición. Mientras, lo prudente es esperar.

Y lo que Izurieta quiere es lo que ya le ha dicho al ministro Pérez Yoma: permanecer en su puesto y no tomar decisión alguna hasta que el cambio se concrete. Para ese propósito lo ayudaría que los cuatro mayores generales también se quedasen hasta el momento final.

A pesar de sus contradictorios sentimientos, Villarroel toma la decisión final: si Izurieta lo necesita, se mantendrá en su lugar.

Acevedo, Cortés Villa y Sánchez entienden que no tienen más opción que la de seguir adelante; un gesto de otro tipo podría manchar la asunción del nuevo comandante en jefe. Esa semana Villarroel e Izurieta se dejan ver cenando con sus esposas en el restaurante Camino Real.

El ministro Pérez Yoma se demora en percibir la ola que comienza a levantarse desde la Concertación a partir de la misma tarde del 30 de octubre. Cuando, a las 17.30 de ese día, se presenta ante la prensa con Pinochet e Izurieta y elogia al primero como "un ejemplo de responsabilidad para quienes eligen el servicio público", sabe que recibirá críticas del oficialismo. Pero intuye que nada de eso hará contrapeso al doble triunfo de haber nombrado a Izurieta y adelantado el anuncio hasta descolocar a todos.

Repara en el hecho de que, pese a la notoriedad mundial de la operación, ningún ministro lo llama ese día para felicitarlo; pero tampoco lo magnifica: ha de ser otra expresión de sus deterioradas relaciones con el equipo político de La Moneda.

Sin embargo, lo más delicado ocurre luego de que, como es tradicional, el Departamento Comunicacional del Ejército da a conocer la nómina de retiros y ascensos, que incluye a Lepe. Aunque aún no ha sido cursada por el Presidente, se ha hecho un hábito que el Ejército la dé a conocer desde que se entiende acordada.

La reacción de Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria que se ha pasado años buscando a los asesinos de su padre, no se deja esperar. Tampoco la de los senadores socialistas, que protestan por este ascenso indebido.

El viernes, el subsecretario Fernández declara que no existen cargos formales contra el oficial y que, por tanto, tampoco puede deducirse impedimento jurídico para que ascienda. El ministro Pérez Yoma lo apoya en diversas declaraciones durante el fin de semana.

El domingo 2 de noviembre se reúnen el Presidente y el ministro en la residencia veraniega de Cerro Castillo. Frei tiene fuertes aprensiones. En la Concertación hay un malestar muy notorio, y ya no se trata únicamente de los socialistas, sino también de la DC. Será mejor esperar unas horas para dar curso a los decretos del nuevo alto mando.

El lunes 3, al término de su reunión matinal, los presidentes de los partidos de la Concertación emiten una declaración expresando su rechazo al ascenso de Lepe. En indirecta réplica a las versiones del Ministerio de Defensa, recuerdan que Lepe está citado en juicios que se llevan en España y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ese mismo día el subsecretario Fernández reitera que Lepe nunca ha sido procesado en Chile y explica que ni siquiera se le ha aplicado la ley de amnistía[4].

Sin embargo, en paralelo, Pérez Yoma almuerza con los senadores socialistas Carlos Ominami y Jaime Gazmuri; de esa conversación sale con pesadas dudas sobre la conveniencia de insistir en ese ascenso y con la sensación de que se está enredando innecesariamente en la cuestión jurídica.

Al anochecer, revisa en su casa las declaraciones, los recortes, los noticiarios. Lentamente consolida una convicción.

—Esto hay que matarlo mañana mismo —le dice, al fin, a su esposa—. Nos va a enredar, lo va a manchar todo.

A primera hora del martes, Pérez Yoma llama al gabinete del Presidente y pregunta a qué hora llegará a La Moneda. A las 10, le dicen, pero ya a las 10.05 tiene una audiencia prevista.

El ministro decide entonces esperarlo en el estacionamiento subterráneo de La Moneda:

—Mira, he estado pensando y creo que lo de Lepe hay que matarlo ahora, hoy mismo. Hay que decir que no, y listo.

—Pero cómo vamos a decir que no ahora —reclama el Presidente—. Vamos a quedar pésimo...

—No, no lo creo. Si no lo hacemos vamos a tener problemas.

—Bueno —dice el Presidente, con aire de duda—, juntémonos con Carlos para verlo.

—Eduardo, perdóname, pero preferiría no ver este asunto con Figueroa.

—Muy bien. Juntémonos a las 17.

Cerca del mediodía, Pérez Yoma vuelve a llamar al Presidente:

—Supongo que querías que nos reuniéramos con Figueroa para tener una segunda opinión. Me parece que el hombre apropiado sería Insulza, que conoce el caso Soria y ha manejado las repercusiones externas.

El Presidente concuerda y a las 17 recibe a los dos ministros:

—¿Y qué piensas tú, José Miguel? —pregunta.

—Que es un asunto polémico. Pero si hay que bancárselo, se puede.

—¿Pero está metido, realmente?

—Hay testimonios que dicen que sí.

—No, pero la cosa es al revés —interviene Pérez Yoma—. Para nosotros esto es complicado y puede agarrar mucho vuelo. Si lo vetamos, no pasa nada.

—¿Cómo? —se sorprende Insulza—. ¿No te crea problemas?

—No, no va a pasar nada.

—Ah, entonces hay que vetarlo, Presidente —concluye el canciller.

Esa tarde Pérez Yoma prepara el comunicado que explicará la situación. A los tres criterios definidos para los ascensos —que no haya objeciones profesionales, ni judiciales ni actos de desacato o menoscabo a la autoridad— agrega un cuarto: que no haya tampoco situaciones públicas que afecten la imagen del oficial.

Antes de leerlo a la prensa llama a Pinochet:

—Me fue pésimo con Lepe, general. Usted ya ha visto la que se ha armado. El Presidente no va a cursar su ascenso.

—Pero por Dios —dice Pinochet—, un oficial tan bueno, tan leal...

En la noche el ministro cena con sus subsecretarios en la casa de Luciano Fouillioux. Fernández expresa con vehemencia su indignación por lo ocurrido. La intervención de los políticos en el veto a un oficial creará una incalculable inestabilidad entre los militares, dice; como precedente, le parece nefasto. Los "intrigantes" de La Moneda se han dado un gusto...

—¡Pero qué dices, *Peta*! —interrumpe el ministro, que por primera vez se enoja con su subsecretario—. ¡Qué pretendes! ¿Que renunciemos por Lepe?

Esa misma tarde, Pinochet ordena preparar un comunicado que expresará la preocupación del Ejército por la aplicación de un criterio subjetivo en el veto a Lepe. Al día siguiente piensa partir a Concepción, donde la Tercera División lo espera para un acto de despedida.

Pero la Dirección de Inteligencia ha preparado un informe que asegura que existe malestar entre la oficialidad por el caso Lepe.

Los asesores recomiendan que el general cancele su viaje y haga algún gesto para que la institución note que ha planteado su molestia al gobierno.

En la mañana del miércoles 5, Pinochet visita a Pérez Yoma durante 20 minutos. Luego se da a conocer el comunicado del Ejército.

Aunque el general se ha mostrado tan afable como siempre y el ministro siente que el veto a Lepe no ha deteriorado en nada sus relaciones, ese día decide dar un indicio, tanto a los militares como a sus detractores en el oficialismo, para que se entienda que la tarea más importante está cumplida y no vale la pena continuar las polémicas.

Escoge, como camino, dos entrevistas, una al diario *La Epoca* y otra a la revista *Cosas*: en ambas dice haber "cumplido un ciclo" y anuncia que se prepara para asumir otro cargo[5].

Las declaraciones desatan las iras de La Moneda. El Presidente Frei ha viajado a la Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita y a los ministros políticos les parece que esta renuncia anticipada es un desafío.

Quien hace pública esa irritación es el ministro Brunner, que subraya que las palabras de Pérez Yoma crean "confusión" y que los ministros sólo se van de dos modos: cuando presentan su renuncia formal o cuando se las pide el Presidente.

El lunes 10, de regreso en palacio, el Presidente declara que Pérez Yoma se irá cuando él lo resuelva y que ya le ha hecho saber que aún hay "tareas pendientes". Tres días después se reúnen.

—La situación es insostenible —admite el ministro—. Los de La Moneda creen que les quiero quitar los puestos. Brunner me deja como chaleco de mono justo cuando estamos terminando lo más importante. Con esta clase de deslealtades es imposible trabajar, Eduardo.

—Pero no te puedes ir ahora.

—No, no te preocupes, voy a cumplir lo que te prometí. Pero creo que lo mejor es anunciar desde ya que me voy a Argentina, para parar las especulaciones. Si no, va a parecer que estoy desautorizado.

Desde el despacho del Presidente llaman al canciller Insulza para que solicite de inmediato el *agrément* para Pérez Yoma ante Buenos Aires. La Casa Rosada bate un récord con su respuesta: al día siguiente está la aprobación en Santiago.

El anuncio produce el efecto deseado: cancela la polémica. Ahora puede Pérez Yoma concentrarse en los cambios que suscitan en las Fuerzas Armadas los próximos nombramientos de senadores institucionales.

Pinochet le ha dicho, en los días previos, que tiene un compromiso con el ex vicecomandante Julio Canessa, uno de sus hombres más cercanos. En 1989, cuando debía nominar a un senador, optó por el entonces vicecomandante Santiago Sinclair, pero le prometió a Canessa que el siguiente sería él. Ahora quiere cumplir.

Y tras confirmar esa decisión, el general ha viajado al balneario de Salinas, en el sur ecuatoriano, para clausurar la XXII Conferencia de Ejércitos de América, un momento especialmente triunfal desde que los jefes militares del continente le declaran su admiración y su respeto como el soldado más viejo del planeta.

Al regreso preside el retiro de Garín y nombra a Villarroel como vicecomandante en jefe; a pesar de la anormalidad de que el que seguía a Garín, el mayor general Ramírez Rurange, sigue

activo hasta fin de año, se trata de una muestra de gratitud hacia el hombre que lo acompañará hasta tres días antes de su retiro. A fin de cuentas, los decretos que desactivan a Villarroel y los otros tres mayores generales ya están redactados con fecha 23 de enero.

Un mes antes, en octubre, el almirante Martínez Busch ha dejado la Comandancia en Jefe de la Armada para entrar al Senado y el ministro ha propuesto al Presidente elegir, entre tres nombres posibles —Jorge Arancibia, Sergio Jarpa y Ariel Rosas—, al primero, que representa la mayor distancia de estilo ante el integrismo católico de Martínez Busch y que es el único que también ha pasado por el Estado Mayor de la Defensa.

Poco después el gobierno ha descartado la renuncia del general Rojas Vender para pasar al Senado. Desde que en marzo anterior el comandante en jefe de la FACh estuviese a punto de hacer fracasar la proposición presidencial para llenar dos vacantes en el Tribunal Constitucional, La Moneda no le tiene la misma confianza. Además, Pérez Yoma hubiese querido como su sucesor al general Raúl Tapia, pero Rojas Vender lo ha propuesto para el retiro poco antes. Lo apropiado es que sea el anterior comandante en jefe, Ramón Vega, quien se convierta en senador por la FACh.

En Carabineros las opciones son más estrechas. El gobierno no quiere mantener a Vicente Huerta, pero menos podría nombrar a Rodolfo Stange, que por lo demás se ha inscrito como candidato por la Décima Región en la lista de la UDI. Lo único que cabe es que se retire el actual general director, Fernando Cordero, y asuma el sillón senatorial. Lo sustituye en el cargo su segundo, el general Manuel Ugarte.

El resto de las nominaciones queda en manos del ministro Figueroa. La situación más turbulenta se desata en la Corte Suprema, donde a los ministros renunciados para partir al Senado —Marcos Aburto y Enrique Zurita— se agrega un tercero, Germán Valenzuela, y se inicia una sorda disputa por los votos de los magistrados superiores.

Pero Figueroa maniobra diestramente en esas aguas revueltas y consigue dos cosas: que Aburto y Zurita triunfen, y que la Corte designe, para el cupo que corresponde a un ex contralor, al ex canciller Enrique Silva Cimma, derrotando el intento por mantener a la senadora Olga Feliú.

Después de las elecciones concluye el proceso. Para los dos nombramientos del Presidente han estado en carpeta, durante el año, Edgardo Boeninger, como única opción en la categoría de ex ministro, y los rectores de las universidades de Concepción, Augusto Parra, y de Valparaíso, Agustín Squella. Parra será el favorecido.

Las elecciones del 11 de diciembre sacuden a la Concertación. El 50% considerado escaso, la alta abstención juvenil, el triunfo de la UDI sobre RN dentro del pacto de derecha, el fracaso senatorial del PS, la baja porcentual de la DC, la repetición del esquema en que el Senado tiene mayoría opositora: todos esos datos crispan y enturbian las relaciones en las filas oficialistas. Un ambiente de incontinencia analítica y verbal se propaga por los partidos, que culpan, abierta o veladamente, al gobierno y a su estilo de conducción. La tolerancia del Ejecutivo hacia la derecha y los militares, creen algunos, es la culpable de estos resultados.

Y muchos comparten una sensación más penosa: dado que la derecha ha fortalecido su poder, que los enclaves autoritarios permanecen inmodificados y que el mismísimo general Pinochet llegará a ocupar un sillón senatorial que otros líderes acaban de perder, las elecciones marcan el fracaso de la transición.

Es un instante amargo.

Quien no parece darse cuenta de la extrema sensibilidad del instante es el general Pinochet, que sigue rodeándose de homenajes en sus giras de despedida por las unidades militares. Hacia fines del año visita la Región Militar Austral, a donde, por única vez, no lo ha podido acompañar ninguno de los oficiales del Departamento Comunicacional, que viven atentos a controlar las "salidas de madre" del comandante en jefe. Los agotadores detalles del cambio de mando tienen a todos los oficiales envueltos en un frenesí de trabajo; además, muchos han debido adelantar sus vacaciones para estar presentes en el momento crítico de fines de enero.

El 27 de diciembre declara a los periodistas de la región que tiene "antecedentes" sobre senadores como Sergio Bitar y José Antonio Viera-Gallo y que los puede hacer valer "si me dicen algo". Para muchos, esta es la gota decisiva.

Esa misma noche Pérez Yoma llama a Pinochet.

—Pero por Dios, general, cómo se le ocurre hablar ahora. Ya va a llegar al Senado, donde puede decir lo que se le antoje. ¡Ahora dejó la escoba! El Presidente me ha dado instrucciones de citarlo para mañana...

—No me diga nada. Parece que la embarré.

Al día siguiente el diálogo se repite cuando el comandante en jefe llega al piso 22 del Diego Portales.

—Mire qué tontería, general: se va a ir en unos días y por primera vez tengo que retarlo.

—Sí, sí, ya sé. Lucía también me retó.

Pero la privada desazón del general no sirve para contener a la Concertación, que halla el motivo para iniciar una ofensiva que pueda impedir la asunción de Pinochet en el Senado, o cuando menos desacreditarla severamente. Y tampoco sirve la serenidad aparente de Pérez Yoma: al día siguiente Pinochet lo condecora con la Gran Cruz de la Victoria, en una ceremonia que irrita a democratacristianos y socialistas y que agudiza en la Concertación la percepción de que el gobierno carece de voluntad para poner al general en su lugar.

El viernes 2 de enero se configura el camino para expresar esa radical discrepancia: una acusación constitucional, promovida por los diputados DC Mario Acuña, Gabriel Ascencio, Tomás Jocelyn-Holt, Zarko Luksic y Andrés Palma[6].

El lunes, los jefes de bancada de la Concertación se reúnen para discutir un proyecto de acuerdo que repudie la llegada de Pinochet al Congreso. Toda esa semana el comité político de La Moneda se moviliza entre los parlamentarios para evitar decisiones agresivas con el comandante en jefe.

Pero las elecciones han dejado al gobierno sin fuerza ante sus partidos, y ni siquiera la propuesta de un plebiscito para zanjar disputas constitucionales —una idea más bien distractiva— logra detener la convicción de los diputados DC.

El lunes 12 la acusación llega al Consejo Ampliado de la DC, que debe analizarla y pronunciarse. Contra todo lo previsto, ni los esfuerzos del presidente Enrique Krauss y de los dirigentes Rafael Moreno y Adolfo Zaldívar, ni los de los ministros Figueroa y Villarzú, consiguen imponerse en esa instancia. Cuando parece inminente que la acusación va a ser votada favorablemente por el Consejo, dirigentes y ministros logran obtener apenas una votación empatada que hace posible concordar una postergación del estudio del libelo.

Durante esos tensos días, el mayor general Villarroel le ha estado proponiendo al ministro Pérez Yoma manejar el problema con La Moneda, para asegurar un resultado favorable. Pero el titular de Defensa ha rechazado toda intervención de los ministros políticos.

Sin desalentarse, Villarroel pide una reunión al ministro Figueroa y le expone sus puntos de vista. Unos días más tarde, aprovecha un almuerzo en el palacio para conversar con el senador Sergio Bitar.

En la mañana del martes 13, el mayor general Villarroel llega a las oficinas de Pérez Yoma. Trae un oficio del comandante en jefe: ha decidido postergar la entrega del mando hasta marzo. El ministro se indigna y exige explicaciones.

—Es que en la DC falló todo —dice Villarroel—. El gobierno no pudo parar la acusación...

—General, ¿usted entiende algo de política? ¿No sabe que cuando una iniciativa se posterga es porque ya está medio muerta? ¿O habría preferido que le echaran para adelante ahora mismo?

—No, pero mi general cree que esto no es ninguna solución.

—¿Su general? ¿Y por qué no me lo dice él mismo a mí?

—No, es que no puede hablar, porque está recién operado de las encías...

—No puede hablar, ¿ah? Pero con usted sí que puede. No, general, esto es inaceptable. Voy a hablar con el Presidente.

Aquella tarde, el Presidente recibe una carta de Pinochet. Ha optado por diferir su retiro, explica, dado el clima que han creado en torno a su persona algunos grupos políticos, que no garantiza que vaya a recibir el trato que corresponde a su investidura.

Dado que no menciona ninguna fecha alternativa a la del 27 de enero, la alarma se extiende por La Moneda. El ministro Figueroa se comunica con los presidentes de los partidos de la Concertación para informarles de la situación crítica que acaba de plantearse.

En las mismas horas, Pérez Yoma recibe un segundo oficio de Pinochet: ahora le pide que modifique los decretos de retiro de los cuatro mayores generales para que también pasen a retiro en marzo.

Pero recibe además otra información: el mayor general Villarroel ha pedido al gabinete del ministro que se le entreguen los decretos.

Entreviendo en ese acto un intento por revertir las decisiones ya tomadas sobre el mando —ese es el temor que invade a todo el gobierno—, ordena a un ayudante que lleve personalmente los decretos a la Contraloría. Luego llama al contralor Arturo Aylwin para asegurarse de que serán tramitados con rapidez.

El ministro se siente por primera vez al borde de un golpe de fuerza.

Por eso el miércoles 14 visita a Pinochet en su casa. El general todavía habla con dificultad, pero Pérez Yoma no está dispuesto a detenerse en menudencias.

—Está cometiendo un error, general —dice, enfático—. De esto no va a sacar nada. ¡Nada!

—Pero es que me siento desprotegido. Si el partido del Presidente me ataca, ¿quién me va a proteger? Aquí hay muchos que están al aguaite, ministro. Gente que no quiere la unidad del país...

—Oiga, si su protección es el Senado, cuántas veces se lo tengo que decir.

—No, yo no me siento seguro con esto.

—Bueno, general, creo que es una brutalidad que postergue la fecha.

—No, no voy a cambiar de opinión.

—Ah, entonces se queda solo. Yo me voy, general.

Sin embargo, la salida de Pérez Yoma ya significa poco para Pinochet. Ha visto su posición debilitada, su aislamiento de La Moneda, el deterioro de sus vínculos con el Presidente, la renuncia demasiado anticipada, la resistencia que le ofrecen los partidos oficialistas. Para peor, ese mismo día se realiza en la Cámara de Diputados la sesión para "enjuiciar" al gobierno militar, una ronda de intervenciones cargada de adjetivos que fuerza a la derecha a retirarse en masa del hemiciclo.

El jueves 15, Pérez Yoma se reúne largamente con el Presidente. Además del mal momento que vive con los militares, ahora se ha enterado de que el ministro Figueroa ha sostenido algunas conversaciones con el mayor general Villarroel, quebrando el principio, sostenido por cuatro años, de que sólo el ministro de Defensa es interlocutor de los militares. Con esto, hasta puede haber alentado a Villarroel para parar los decretos.

—Realmente me tengo que ir, Eduardo —concluye—. Tiene que haber un solo gallo que resuelva esto. Si Figueroa quiere, pónlo a él en Defensa. No hagamos más huevadas.

Cuando explica su intervención, Figueroa da razones poderosas: Pérez Yoma anunció su renuncia dos meses antes y ahora se está frente a una crisis. ¿Qué pretende? ¿Que nadie se haga cargo?

En todo caso, el gobierno no puede aparecer cediendo en un momento tan delicado. Los decretos, ya cursados, se enviarán de regreso a la Comandancia en Jefe. Así lo anunciará Figueroa.

Esa misma tarde, Pinochet llega a La Moneda para reunirse a solas con Frei. Su objetivo es simple: explicarle al Presidente por qué no es conveniente desarmar a su grupo de colaboradores en estos días finales y cómo puede todo ello perjudicar al nuevo comandante en jefe. Hasta trae una solución estudiada por sus abogados: atenerse al inciso primero de los decretos, que vincula la salida de los mayores generales al retiro de Pinochet, y olvidarse de la fecha textual.

Frei acepta sin inconvenientes. La idea de que Izurieta pueda ser puesto en un problema de manejo interno del Ejército es el peor de los fantasmas del Ejecutivo en estas horas.

El viernes 16 jura el nuevo ministro de Defensa, Raúl Troncoso. Cuatro días después, Troncoso se reúne por primera vez a solas con Pinochet. Tiene un gran objetivo en mente: desactivar la explosiva incertidumbre que se ha creado con la falta de precisión sobre la fecha definitiva del retiro del general. No puede pasar febrero en esas condiciones: la situación podría devenir inmanejable en marzo.

Esa tarde, la del martes 20, un comunicado oficial informa que Pinochet abandonará el mando del Ejército el 10 de marzo.

Para entonces, la oposición ha intentado retomar la iniciativa proponiendo la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, para que éste se pronuncie acerca de si Pinochet ha incurrido en "notable abandono de deberes", única causal por la cual se le puede acusar constitucionalmente. Si el Consejo responde que no, la oposición podría pedir que en seguida se pronunciase sobre las atribuciones de la Cámara de Diputados.

Una idea semejante es planteada simultáneamente por la senadora designada Olga Feliú, que comienza a perfilarse como la defensora jurídica del general.

Pero esa jugada es altamente peligrosa para las atribuciones del Congreso, y por eso es el senador Romero quien se apura para desecharla por "innecesaria". El riesgo institucional no es la única razón.

Se trata, también, de que Romero se ha reservado un papel central para los días que se avecinan.

Febrero transcurre entre declaraciones de lado y lado, nuevas iniciativas para intentar enjuiciar a Pinochet e impedir su asunción en el Senado y un ambiente de expectación internacional por lo que ocurrirá en Valparaíso en marzo.

Para eso se prepara Romero. Y en cuanto se inicia el mes, comienza su operación. Se trata de un complejo ejercicio de equilibrismo para lograr una entrada amortiguada del general al Congreso. Cuando, hace algún tiempo, se encontró con éste, lo sondeó con prudencia:

—¿Y, general? ¿Vamos al Senado?

—¿Qué le parece a usted?

—Que sí. Pero no tiene para qué ir mucho...

Durante el verano, Romero ha descartado producir un juramento privado de Pinochet, como lo ha propuesto el auditor general Fernando Torres Silva. Aunque el reglamento diese al presidente de la corporación la facultad para tomar juramento en su propia oficina, el senador de RN estima que semejante intento menoscabaría tanto la dignidad del general como la del Senado.

En cambio, le parece que Pinochet no debe exponerse a agravios previos. Para eso es conveniente que llegue a primera hora, antes que los demás senadores.

Así se lo sugiere directamente el martes 4 de marzo, durante la reunión que sostienen junto al senador (ahora elegido en la lista de la UDI) Sergio Fernández.

En verdad, los dos han ido a proponerle a Pinochet que se incorpore a un comité de senadores designados con otros generales en retiro, puesto que los que fueron nominados por la Concertación ya han anunciado que no aceptarán integrar una instancia donde participe Pinochet.

El general escucha y acepta todas las propuestas.

El paso más audaz de Romero se produce al día siguiente. El primer ministro de Italia, Romano Prodi, visita Chile por unas pocas horas y la Embajada de su país organiza una cena con un grupo de líderes políticos. Allí encuentra a Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar.

Sin detenerse en las formalidades de una recepción diplomática, Romero se las arregla para apartarlos hacia conversaciones reservadas. Y a ambos les propone lo mismo: usando las facultades especiales que obtuvo a fines del año anterior, podría convocar a una sesión previa a la asunción del general, por ejemplo, el 10 de marzo, donde los senadores puedan debatir con toda la acidez que deseen sobre la condición de senador vitalicio de Pinochet. A cambio, los senadores de la Concertación podrían comprometerse a no producir incidentes durante la jornada de juramento.

Zaldívar responde que daría su aprobación. Lagos pide unas horas y al día siguiente confirma la suya. A partir de entonces Romero hablará de la "sesión de desahogo".

El viernes 6 se retiran finalmente los cuatro mayores generales que anteceden a Izurieta. Para la ceremonia, el mayor general Villarroel ha preparado un golpe de efecto: un diploma que declara al general Pinochet comandante en jefe "benemérito" del Ejército y que ha sido firmado por la totalidad de los generales, incluido Izurieta. Es un regalo original, pero también un mensaje para que los políticos que lo atacan entiendan que los militares no dejarán solo a su líder de un cuarto de siglo.

Tres días más tarde, el lunes 9 de marzo, Romero tiene las primeras sospechas sobre la fragilidad del acuerdo que cree haber alcanzado con Zaldívar y Lagos. Esa noche se realiza la cena de despedida para los senadores que cesan en sus funciones y Romero, atento a los más mínimos indicios, nota que los socialistas Ricardo Núñez y Carlos Ominami sólo llegan para saludar y se retiran.

Ahora Romero presiente que su acuerdo no funcionará como lo ha imaginado. Tendrá problemas en la sesión decisiva. Ha de estar listo para eso.

El martes 10 se levanta al alba para preparar la pesada jornada que se avecina. El día anterior ha oído una noticia que lo alarma: la esposa del general, Lucía Hiriart, piensa asistir a la ceremonia de juramento en el Senado. Calcula: si ya será difícil mantener el orden en el hemiciclo, la presencia de la señora puede desatar una batahola en las tribunas.

Con la decisión de que ello debe ser evitado, ordena al edecán del Senado que se preocupe de dos cosas antes de partir a la transferencia del mando militar.

La primera es que un helicóptero de la Armada lo espere en los patios traseros de la Escuela Militar, para llevarlo en cuanto termine la ceremonia a Valparaíso, donde debe presidir la "sesión de desahogo".

La segunda: que lo sienten junto a la señora Lucía Hiriart.

El edecán cumple y esa mañana Romero aprovecha la primera oportunidad para acercarse a la señora:

—Me han dicho que quiere ir al Congreso mañana —susurra—. Yo le quiero pedir que no lo haga.

El senador nota la mezcla de sorpresa y molestia en el semblante de Lucía Hiriart.

—No tiene que ver con usted, sino con el general. El ya va a estar suficientemente nervioso con la ceremonia abajo. Imagínese, preocupado también de lo que pasa arriba, pendiente de que usted esté bien...

Poco más tarde aprovechará un acercamiento del general para repetir el comentario ante los dos. Otra vez Pinochet parece hallarle razón.

Una sorda convulsión agita a Santiago en la mañana del 10 de marzo de 1998. Las manifestaciones se suceden en el centro y, aunque muchas universidades han suspendido sus actividades, grupos de estudiantes protestan en diversos puntos.

El epicentro de todo está en la Escuela Militar, cercada en varias cuadras a la redonda por un férreo dispositivo de seguridad. Hasta esas puertas llega, a las 10, el general Pinochet, con el uniforme azul de gala.

—¡Guarnición, buenos días! —dice, e inicia una pausada marcha por entre los batallones que se van cerrando tras su paso. Es la "calle de la historia" imaginada por el comité de generales que ha planeado la entrega, a cuya cabeza ha estado el mayor general Cortés Villa.

El himno del Ejército, *Los viejos estandartes*, añade una épica crepuscular con las fantasmales imágenes de su coro:

Ahí van los infantes de bronce
fuego, artilleros de hierro
y al viento sus sables y lanzas,
a la carga... los jinetes de plata...

El general sube a la tribuna y espera allí al ministro Troncoso y al Presidente Frei. El Himno Nacional semeja un estallido cuando los dos millares de soldados formados en el Patio de Honor comienzan a entonarlo.

Afuera, en las calles donde se agolpan los partidarios del general, el Himno sigue de largo hasta las derogadas estrofas que agradecen a los "valientes soldados". En la tribuna oficial hay murmullos y sonrisas: una amplia mayoría de sus lugares está ocupada por simpatizantes del general.

Los antiguos funcionarios, los generales retirados, los ministros de otras décadas, como extraídos de una fotografía revenida, se saludan como si los años no hubiesen limado la familiaridad de otros tiempos. Muchos, muchísimos de ellos han desaparecido por completo de las páginas de la prensa. Unos pocos, los menos, continúan en la vida pública, como parlamentarios o empresarios. Pero ahora, por un par de horas, para el último momento, todos vuelven a ser lo que antes.

El subsecretario Mario Fernández inicia el proceso de traspaso leyendo el decreto supremo 127, que acepta el "retiro absoluto" del general Pinochet, y luego el 128, que nombra nuevo comandante en jefe al mayor general Ricardo Izurieta. Por el mismo acto Izurieta asciende a teniente general —cuatro estrellas— y recibe el Collar de la Gran Cruz, la máxima condecoración militar que confiere el Presidente de la República.

Cuando Fernández concluye, la banda inicia la *Parada de Guardia*, una marcha que ahora adquiere un extraño aire melancólico. Pinochet ve dirigirse a los dos soldados hacia los mástiles y no puede contener las lágrimas mientras sostiene la mano junto a la visera.

Contra un cielo nuboso que anuncia el otoño inminente comienza a elevarse el gallardete rojo, con escudo y cuatro estrellas, del nuevo comandante en jefe.

A un costado desciende, lenta e implacablemente, como si fuese a apagarse en las manos enguantadas de los soldados que lo esperan, el estandarte de las cinco estrellas.

Notas

1. Lepe no fue formalmente acusado pese a que los testimonios de los ex agentes Michael Townley y José Ríos San Martín lo mencionaron como miembro de la Brigada Mulchén de la DINA. Ríos San Martín agregó que, disfrazado de carabinero, Lepe actuó directamente en el secuestro de Soria. Aunque en el Ejército se insistió en que Lepe sólo estuvo en la DINA durante poco más de un mes, es un hecho que se integró justamente en 1976. Ver: Dávila, Lucy: *Juegos de guerra*. Revista *Hoy*, Nº 1.059, del 10 al 16 de noviembre de 1997. También: *El ascenso y descenso de Lepe*. Revista *Qué Pasa*, Nº 1.387, 8 de noviembre de 1997. Para una síntesis de la aplicación de la amnistía: *Unsettled business: Human Rights in Chile at the start of the Frei Presidency*. Human Rights Watch/Americas, Washington, mayo de 1994. Ver también Nota 1, Capítulo 26.

2. En 1994, el oficialismo y la oposición empataron en la elección de la mesa del Senado. Como resultado, el período fue dividido: dos años para la Concertación y dos para RN, partido que a su turno lo subdividiría en un año para Sergio Diez y uno para Romero. Valdés, que quiso dar continuidad a su mandato anterior, escogió la primera mitad; Romero se reservó el último cuarto, calculando que sería el más relevante en decisiones políticas.

3. Los presuntos promotores de esta iniciativa no fueron identificados. Versiones dadas a esta investigación afirman que en realidad se trató de una especulación procedente de las propias esferas militares.

4. Las afirmaciones de Fernández sugieren que en las primeras horas tras los nombramientos hubo en el Ministerio de Defensa una disposición a rechazar las presiones, aunque viniesen de partidos de gobierno. Ver: Henríquez, Jessica: *Fernández: Nuevo alto mando del Ejército no experimentará cambios*. Diario *La Epoca*, 1º de noviembre de 1997.

5. *Ministro Pérez Yoma manifestó su intención de abandonar el gabinete*. Diario *La Epoca*, 7 de noviembre de 1997. González, Mónica: *"Cumplí un ciclo..."*. Revista *Cosas*, Nº 551, 7 de noviembre de 1997.

6. La acusación que finalmente se presentó a la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 1998 fue suscrita por diputados de la DC, el PPD y el PS: Mario Acuña, Sergio Aguiló, Isabel Allende, Gabriel Ascencio, Sergio Elgueta, Guido Girardi, Tomás Jocelyn-Holt, Zarko Luksic, Andrés Palma, Jaime Naranjo y Fanny Pollarolo.

Indice onomástico

Ascanio Cavallo (1957)

Periodista de la Universidad de Chile (1978), inició su trabajo profesional en **Hoy**, donde llegó a ser editor político. En 1978 fue nombrado editor general del diario **La Época** y en 1993 asumió la dirección de ese diario. Entre los años 1995 y 1998 dirige la revista **Hoy**. A su destacada labor como periodista y escritor se suman los premios S.I.P. (1988), **Embotelladora Andina** (1993) y de la **Academia Chilena de la Lengua** (1998). Es crítico de cine, profesor universitario y columnista político. Ha publicado otros libros, entre los cuales se cuentan **Los Hombres de la Transición** (1992), **Memorias del Cardenal Raúl Silva Henríquez** (1991-1994), **Cien Claves del Cine** (1995, con Antonio Martínez) y **La Historia Oculta del Régimen Militar** (1997, con Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda).



Ascanio Cavallo

La "tranquilidad y estabilidad" por encima de todo,
elementos centrales de la política de Estado,
nos dejaron ausentes de los acontecimientos e historias
reales del proceso político de la Transición.
El gran aporte de esta obra consiste
en mostrar a sus lectores que,
a pesar de vivir en un país donde la opinión pública percibe
una democracia como sistema, tras ella existe
una intrincada y desconocida historia política.
Ascanio Cavallo, con la objetividad y rigurosidad
que lo caracterizan, nos revela los hechos
para comprender e interpretar
las distancias entre lo real y lo oficial.

